



UNSAM

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

Universidad Nacional de San Martín
Instituto de Altos Estudios Sociales
Doctorado en Antropología Social

**ESFUERZO DE LO POSIBLE:
Política, desarrollo y deseo en el extremo norte del Uruguay**

Alex Martins Moraes

Tesis de Doctorado presentada a la Carrera de Antropología Social, Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, como parte de los requisitos necesarios para la obtención del título de Doctor en Antropología Social.

Directora: Silvina Merenson

**Buenos Aires
Febrero 2019**

Martins Moraes, Alex.

Esfuerzo de lo posible: política, desarrollo y deseo en el extremo norte del Uruguay / Alex Martins Moraes; director Silvina Merenson. San Martín: Universidad Nacional de San Martín, 2019. - 343 p. il.

Tesis de Doctorado, UNSAM, IDAES, Antropología Social, 2019.

1. Movimientos-Populares. 2. Política. 3. Desarrollo. – Tesis.
I. Merenson, Silvina (Directora). II. Universidad Nacional de San Martín, Instituto de Altos Estudios Sociales. III. Doctorado.

RESUMEN

Nombre del autor: Alex Martins Moraes

Directora de Tesis: Silvina Merenson

De vez en cuando en la ciudad de Bella Unión, ubicada en el extremo norte del Uruguay, la política existe en el registro de lo posible. Esto sucede cuando las personas se organizan para enunciar lo que es – léase: lo dado, lo estructurado – con la mirada puesta en lo que puede llegar a ser. Convertir la política en un “esfuerzo de lo posible” implica prescribir que una situación es susceptible de devenir otra de acuerdo con criterios que no están previstos en las reglas de juego existentes. En 2015, los militantes del movimiento popular bellaunionense, y más específicamente de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), denominaban “lucha” a ese procedimiento y lo oponían a “gestión”. Hacer “gestión” era buscar soluciones a los malestares vigentes respetando los protocolos de la burocracia (o sea, someter lo que puede ser a lo que es). Luchar significaba otra cosa: era sustraerse a la “gestión” y animarse a poner en práctica una cierta cantidad de posibles que, de otro modo, jamás podrían ser reconocidos y ni siquiera enunciados. Para los militantes de la UTAA, “lucha” los reconectaba con la “fuerza” histórica de su sindicato, permitiéndoles ensayar otras formas de vivir el propio presente. En consonancia con tales coordenadas intelectivas, esta tesis se propone pensar la política como una producción dialéctica de posibles. Dicho objetivo se realiza de dos maneras. Por un lado, recurriendo a fuentes primarias y secundarias, se identifican distintas secuencias históricas en las que el movimiento popular bellaunionense pudo engendrar en su seno el “esfuerzo de lo posible”. Por otro lado, se analiza cómo la producción contemporánea de posibles se choca con la “gestión”, desafiándola e incluso desbordándola. Este segundo análisis está basado en un estudio etnográfico de las (des)articulaciones entre el movimiento popular bellaunionense y una contundente política de expansión de la agroindustria azucarera impulsada por los gobiernos del Frente Amplio desde el año 2006. El estudio en cuestión permite evidenciar cómo las políticas públicas patrocinadas por el progresismo uruguayo en la última década encontraron resonancia en la UTAA, al tiempo que tendieron a ser desbordadas por su “política de lucha”. Tales desbordes estuvieron arraigados en ciertos enunciados sobre el devenir posible de la organización del trabajo, la producción y el acceso a la riqueza que tensionaban desde adentro la estrategia progresista de intervención en la economía local. Estas dinámicas desbordantes – o excesivas – son teorizadas como “agenciamientos colectivos de deseo” de naturaleza relativamente frágil y temporalidad secuencial. Al proyectarse más allá de los objetos y las formas de realización personal y colectiva instaurados por el desarrollo económico, dichos “agenciamientos” reinscriben la política en el terreno de la autonomía, redefiniendo las esperanzas y el horizonte de acción de sus respectivos integrantes.

Palabras-clave: POSIBLES, DESEO, DESARROLLO, MOVIMIENTO POPULAR, URUGUAY

Buenos Aires

Febrero 2019

ABSTRACT

Nombre del autor: Alex Martins Moraes
Directora de Tesis: Silvina Merenson

In the Uruguayan northernmost city of Bella Union, politics upsprings as a new realm of the possible, from time to time. Casual as it might seem, this happens when people set up to enunciate their reality, to come up with a definition of ‘what it is’ – being ‘it’ the given, the structured, the tangible – while their eyes are set on what it *could be* or become *if*. Transforming politics into an ‘effort of the possible’ implies admitting that a given situation could have derived into a different one, had the ruling criteria been other than those that currently make up the existing rules of the game we are all acquainted with. In 2015, the activists of the Bella Union people’s movement, and more specifically, those of the Artigas Sugarcane workers’ Union or UTAA referred to this procedure as ‘lucha’ – the Spanish word for ‘struggle’ or ‘fight’ – as in an opposite situation to what they referred to as ‘gestión’, which could be translated as ‘administration’. ‘Gestión’ implied trying to find solutions to the current uneasy situations within the boundaries of the existing bureaucratic protocols (that is: subduing what *it might be* to what *it actually is*). On the other hand, ‘lucha’ meant a different thing: it implied retracting from ‘gestion’ and retrieving the possible, or, in other words, daring put into practice a number of ‘possibles’ that, otherwise, could have gone unnoticed, or even have never been enunciated. For the union militants, ‘lucha’ reconnected them to the ancient ‘force of the UTAA’, enabling them to try and rehearse diverse ways of living the present itself. Accordingly, this doctoral thesis invites thinking politics as a dialectical production of possibles. In order to do so, two different tracks are followed. Firstly, by resorting to primary and secondary sources, it was possible to identify a number of historical situations in which the Bella Union people’s movement was able to generate, in its very core, ‘the effort of the possible’. Secondly, it was analyzed how the contemporary production of possibles confronts ‘gestión’, by defying or even exceeding it. This second analysis is based upon an ethnographic study of how Bella Union people’s movement articulated with a strong governmental policy aimed at stimulating sugarcane agroindustrial expansion, carried out by the Frente Amplio government since 2006. Such study allowed bringing to light the ways in which progressive public policies carried out by this political party both echoed in UTAA and, at the same time, seemed likely to be overwhelmed by the union’s struggle-oriented policy. Such overwhelming was deeply rooted in certain statements about the possible transformation of the labor organization, production and access to wealth, all of which tension from inside the party’s progressive strategy – and agenda – of intervention in the local economy. Such dynamics are theorized as a ‘collective *agencement* of desire’, of a relatively fragile nature and a sequential temporality. Since they are meant to reach beyond the objects and the personal and collective forms of fulfillment that come along economic development, such *agencements* tend to put politics back into the field of autonomy, redefining the hopes and the horizon of action of their members.

Key words: POSSIBLES, DESIRE, DEVELOPMENT, PEOPLE’S MOVEMENT, URUGUAY.

Buenos Aires
Febrero 2019

*A la memoria de Érico França, con quien aprendí
que lucha es diferente de gestión.*

AGRADECIMIENTOS

Esta tesis es fruto de un trabajo multifacético de cooperación que incluye a diversas personas en diferentes países e instituciones.

Agradezco al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por la beca de doctorado otorgada en el año 2013, cuyos recursos financieros me permitieron no sólo desarrollar el trabajo de campo con gran tranquilidad, sino también dedicarme intensamente a los estudios que subsidiaron el marco teórico de mis reflexiones.

Mi experiencia como estudiante del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad de San Martín (UNSAM) habilitó encuentros y aprendizajes que incidieron muy positivamente en la construcción de la tesis. En el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) también encontré buenas interlocuciones y recibí toda la atención institucional necesaria para cumplir mis atribuciones de becario doctoral.

Agradezco a Silvina Merenson, mi directora de tesis, por haberme acompañado de cerca y muy generosamente a lo largo de todo mi itinerario investigativo. Silvina me ha proporcionado una amplia autonomía para desarrollar la perspectiva teórica que informa este trabajo, al tiempo que sus sugerencias agudas y su lectura atenta de mis textos enriquecieron sobremanera la construcción del presente argumento.

Daniel Etcheverry, co-director de la beca otorgada por el CONICET, ha sido un interlocutor fundamental durante el proceso de maduración y consolidación de mi enfoque. Conversando con Daniel me fui dando cuenta de qué quería decir y cómo podría hacerlo. Por intermedio de él también conocí a Teresa Amor, quien estableció la primera versión en español de los borradores de la tesis, permitiéndome agilizar el proceso de escritura.

Agradezco a todos los docentes que me dieron clases en el Doctorado en Antropología Social del IDAES y a mis compañerxs de cursada por los diálogos y lecturas que hemos compartido. Me gustaría mencionar especialmente a lxs estudiantes que realizaron conmigo los talleres de tesis – Daniel Daza, Johana Kunin, Laura Frasco, Debora Swistun, Anne Gustavsson, Valeria Mutuberría – y a los docentes – Luis Ferreira y Máximo Badaró – que nos acompañaron en esas fructíferas jornadas de lecturas, diálogos y colaboración. Quiero felicitar el trabajo de los funcionarios administrativos del IDAES, que más allá de sus atribuciones institucionales siempre han sido extremadamente atentos y solícitos en lo concerniente a la facilitación de las rutinas burocráticas inherentes a la vida universitaria.

Es importante mencionar la relevancia de las críticas y sugerencias aportadas por Javier Taks y Verónica Gago durante la defensa de mi proyecto de tesis, en el año 2015. Soy muy grato a Pieter de Vries, de la Universidad de Wageningen (Holanda), por haber leído y comentado las primeras sistematizaciones del marco teórico de esta tesis en el contexto de una materia de lecturas guiadas realizada en 2017.

Muchas gracias a mis compañerxs del colectivo Máquina Crítica - Grupo de Estudios en Antropología Crítica (GEAC), Juliana Mesomo y Tomás Guzmán. Nuestros constantes diálogos, así como las actividades de formación y escritura colectiva que hemos emprendido juntxs, han resultado decisivos para la definición de mi postura política e intelectual. Los ecos del GEAC y de sus interlocutores en otros espacios de producción teórica e investigación social – Eduardo Restrepo, Red de Antropologías del Sur, Colectivo Juguetes Perdidos, Michael Neocosmos, agrupación estudiantil Revocables, Carolina Castañeda – se harán notar a lo largo de toda la tesis.

Esta tesis no hubiera sido posible sin la afectuosa recepción que recibí por parte de mis interlocutorxs y compañerxs en la ciudad de Bella Unión, el lugar donde realicé buena parte de mi trabajo de campo y tuve la valiosa oportunidad de aprender a pensar la política en su dimensión autonómica, esperanzadora y deseante. Muchas gracias a Érico França, que me brindó su amistad, compartió conmigo su pensamiento digno y vivaz y nunca dejó de sorprenderme con su tremenda capacidad de movilización y compromiso político. El movimiento popular bellaunionense ya no puede contar con su fuerza, pero podrá inspirarse indefinidamente en los posibles que Érico supo enunciar y que permanecerán siempre disponibles a quienes deseen actualizarlos. Esta tesis es parte del esfuerzo por retener estos posibles y volverlos comunicables.

Gracias a lxs dirigentes de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), que me recibieron en sus espacios de vida y militancia, a lxs colonos de Pay Paso, Colonia Raúl Sendic Antonaccio y Campo Placeres, a Mariana y Oscar, amigos de la Chacra 15 de Enero, a lxs docentes del Servicio de Extensión de la Universidad de la República en Bella Unión, a lxs funcionarios del Instituto Nacional de Colonización y a mis interlocutores en el parlamento uruguayo. Un agradecimiento muy especial a mis queridos Colacho y Charito, que me brindaron una acogedora bienvenida a Bella Unión y un apoyo inestimable para la realización de mi trabajo de campo.

A Juliana Mesomo agradezco su afecto y su disposición a la aventura que nos ha permitido recorrer juntos un itinerario vital alegre y prometedor. Gracias también a mis padres, Alexandre y Elaine, que me han permitido caminar tranquilo por el mundo, alentándome en todos mis proyectos y apuestas personales.

No podría dejar de mencionar a Fernando Zaleski, quien puso en mis manos por primera vez los textos de Marx, a los cuales he regresado decididamente en los últimos años. Con él sigo aprendiendo que la intransigencia puede ser una virtud.

Bettina, Darío, Diana, Santiago, Sara, Paulo, Maria Eugênia, Bruna, Bruno y Giulia son gente con la que he compartido la felicidad, la euforia y las complejidades de la fraternidad en los últimos años. Jorge y Fabián son camaradas que aparecieron hace poco, pero que ya integran esas co-inspiraciones que garantizan que seguirá habiendo futuro y alegría. Quiero recordar cariñosamente a los compañeros que circulan por los bares O Porto y El Comandante – especialmente a Antonio Salazar Fagundes – con quienes he aprendido a convocar las fuerzas de la ebriedad para la revolución.

Mencionar la influencia positiva e inspiradora de Heloisa Helena Vaz, que aún en las aulas de clase de primaria favoreció mis primeras “experiencias políticas del pasado”. En esa misma época, Georg Hennig me presentó las potencialidades inherentes a la práctica investigativa, incentivándome a emprender prospecciones metódicas – y, por supuesto, muy lúdicas – de mi propio mundo.

*Si no creyera en la balanza,
en la razón del equilibrio,
si no creyera en el delirio,
si no creyera en la esperanza*

Silvio Rodríguez, La Maza

*E nela serei pra sempre
O nome de cada pedra
E as luzes perdidas na neblina
Quem viver verá que estou ali.*

Vitor Ramil, Satolep

LISTA DE IMÁGENES QUE CUMPLEN INDIVIDUALMENTE FUNCIÓN ILUSTRATIVA

Ilustración 1: Lugares remarcables para esta investigación	46
Ilustración 2: Detalle de un collage en la “casa de UTAA”	53
Ilustración 3: El viejo, omnipresente.....	55
Ilustración 4: En la mesita del rincón	55
Ilustración 5: Cartel de apoyo la huelga de hambre de 1992.	70
Ilustración 6: “Tus manos y tu mente para el país productivo”	160
Ilustración 7: Mural.	172
Ilustración 8: Rastros de la lucha en la cámara de Google.....	256
Ilustración 9: Un “Che Guevara” se dirige a la asamblea	260
Ilustración 10: En “terapia”	280
Ilustración 11: Una asamblea difícil.....	300

LISTA DE SIGLAS

AFE: Administración de Ferrocarriles del Estado

ALUR: Alcoholes del Uruguay Sociedad Anónima

ANCAP: Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland

APAARBU: Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados rurales de Bella Unión

APCANU: Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo

CAASA: Compañía Azucarera Artigas Sociedad Anónima

CAINSA: Compañía Agrícola e Industrial del Norte

CALNU: Cooperativa Agraria Limitada del Norte Uruguayo

CND: Corporación Nacional para el Desarrollo

CRSA: Colonia Raúl Sendic Antonaccio

CSA: Complejo Sucroalcoholero

CSU: Central Sindical Uruguaya

EUIIIS: Estrategia Uruguay Tercer Siglo

FA: Frente Amplio

FENETA: Federación Nacional de Empleados y Trabajadores Azucareros

INC: Instituto Nacional de Colonización

LARSA: La Azucarera Rioplatense Sociedad Anónima

MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

MIDES: Ministerio de Desarrollo Social

MLN-T: Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros

MPP: Movimiento de Participación Popular

MST: Movimiento de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra

OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República

PSA: Proyecto Sucroalcoholero

PIT-CNT: Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores

PT: Partido de los Trabajadores (Brasil)

SOCA: Sindicato de Obreros CALNU Artigas

SUNCA: Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos

SES: Servicio Ecuménico Solidario

SUTRA: Sindicato Único de Trabajadores Rurales de Artigas

UDELAR: Universidad de la República

UTAA: Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas

ÍNDICE

Introducción.....	15
1. (Des)encuentro con el desarrollo en Bella Unión	17
2. En campo: mapeando desencuentros.....	20
3. Pensar en el registro de lo posible.....	24
4. Antropologías del desarrollo: entre la agencia y la máquina anti- política.....	33
5. Itinerario de la tesis.....	40
Mapa	46
Capítulo 1	
Rastros y fantasmas.....	47
1.1 Rastros	47
1.2 El espíritu del viejo y la casa de UTAA	50
1.3 La batalla de Green Frozen	55
1.4 El regreso de lo que no fue.....	59
Capítulo 2	
Pensar políticamente las políticas pasadas	74
2.1 La gente pensó, la gente piensa.	74
2.2 Lo que la caña une, la política separa.....	86
2.3 Modo UTAA (1961-1962).....	90
2.4 Modo agrario (1964-1972)	97
Capítulo 3	
Políticas después del terror.....	107
3.1 Durar luchando	107
3.2 Modo de reorganización (1985-1997)	111
3.3 Modo popular (2004-2006)	118
3.4 Una política ante un investimento de poder	130
Secuencia fotográfica 1	138

Capítulo 4

Equipamiento colectivo de deseo	142
4.1 Aprendiendo a desarrollarse	142
4.2 Equipar el deseo colectivo	151
4.3 El mercado, ese gran Otro	157

Capítulo 5

El deseo acomplejado	173
5.1 Verticalizar el complejo	173
5.2 Reorientar la acción de los “débiles”	182
5.3 Desarrollar las fuerzas deseantes (luego, productivas)	190
5.4 Estabilizar el complejo, hipotecar el futuro	198
5.5 Acomplejar el deseo	203

Capítulo 6

Vivir el complejo. Delirarlo	209
6.1 El peligroso deseo del otro	209
6.2 ¿Castigar el “ausentismo” o liberarlo?	216
6.3 El complejo delirado. Experiencia de lo indecible	221
6.4 Devenires del deseo: entre el olvido y la política	231
Secuencia fotográfica 2	240

Capítulo 7

Política de “lucha”	246
7.1 Separación	246
7.2 Lucha y gestión. Estado y gobierno.	252
7.3 Comisión de Tierras	263
7.4 “Una especie de terapia”	269

Capítulo 8

Proyecto menor	272
8.1 Cambio de rumbo	272

8.1.2 <i>Terapia: desandando el CSA. Qué no hacer.</i>	275
8.1.2 <i>Terapia: desandando el CSA. Qué hacer (y cómo).</i>	280
8.2 Proyectos menores	283
8.3 Redimir una promesa.....	292
Secuencia fotográfica 3.....	308
Palabras finales.....	314
Referencias bibliográficas	331

Introducción

Durante la última década, en distintos países del Cono Sur, hemos sido invitados por nuestros gobernantes a adherir a las grandes promesas asociadas al desarrollo económico y la redistribución de la riqueza. La adhesión a estas promesas, y el usufructo de sus materializaciones más palpables, sedimentaron amplios consensos sociales en torno al proyecto político de los llamados gobiernos progresistas suramericanos¹. Independientemente de la intensidad de las reformas sociales llevadas a cabo por cada uno de estos gobiernos, diversas voces señalaron que su relativo éxito político dependió, en primer lugar, de la explotación de los recursos naturales en función de la creciente demanda originada en los países capitalistas más desarrollados². El flujo de dinero proporcionado por la exportación de bienes primarios habría respaldado una mayor participación del Estado en la redistribución de los excedentes generados por la actividad económica, de modo que esta última pudo dinamizarse en sintonía con intensas inversiones en la mejora de los servicios públicos, en obras de infraestructura y en programas sociales orientados al incremento del consumo en el mercado interno. El crecimiento del gasto público – y especialmente del gasto público social – en simbiosis con la reproducción ampliada del capital en los sectores más estratégicos de la economía configuró un patrón de acumulación extractivista cuyo desarrollo fue revelando, paulatinamente, las contradicciones del ciclo progresista y su conflictividad social específica, centrada en la defensa del ambiente y el territorio.

Si bien la noción de extractivismo permite identificar los prolongamientos contemporáneos de un patrón de acumulación con larga trayectoria en el continente, su dimensión problemática reside en que – como ya señalaron Gago y Mezzadra (2015)³ – tiende a sobrevalorar lo que pasa en los sitios específicos de las actividades extractivas, dejando de lado algo que constituyó un aspecto central de las apuestas políticas de los distintos progresismos sudamericanos, a saber: la movilización de las personas en pos del desarrollo, su inclusión como parte de las nuevas estrategias de acumulación capitalista y

¹ Siguiendo una caracterización propuesta por Mariano Féliz (2011), podríamos dividir esquemáticamente las distintas expresiones del “progresismo” suramericano en dos “medias lunas”: por un lado, se conformó una medialuna de reforma radical que incluye a Venezuela (desde 1998), Ecuador (desde 2006) y Bolivia (desde 2006). Por otra parte, se constituyó un segundo anillo de reformas posneoliberales que incluyó a Brasil (desde 2003 hasta 2016), Uruguay (desde 2004), Paraguay (desde 2008 hasta 2012) y Argentina (desde 2003 hasta 2015).

² Ver, por ejemplo, Eduardo Gudynas (2013, 2012, 2009), Raúl Zibechi (2016) y Maristella Svampa (2013).

³ Al respecto, ver, también Gago y Roig (2018).

la síntesis entre sus deseos de una vida mejor y las soluciones políticas formuladas desde las esferas gubernamentales. El desarrollismo ha combinado actividades extractivas de materias primas con políticas de Estado que postulaban la inclusión social y productiva de las personas⁴, de modo que sus condiciones de posibilidad se han jugado en dos frentes: el del investimento capitalista del territorio y el de la funcionalización de los deseos colectivos en el marco de estrategias acumulación o de extracción de valor solidarias con diferentes tipos de capital. Este segundo frente quedó emblemático por la creación o la ampliación de los programas estatales de transferencias monetarias no contributivas y la distribución de líneas de crédito populares que favorecieron la adquisición de mercancías de distinto orden (de comida a inmuebles). Los procesos de endeudamiento favorecidos por la monetización de las llamadas economías populares han ampliado todavía más la capacidad de consumo de las masas, al tiempo que pusieron sus ingresos al servicio de la valorización del capital financiero.

La investigación que subsidia esta tesis invita a mirar desde un ángulo específico la inclusión de las aspiraciones de las personas en el horizonte estratégico del desarrollo económico y la valorización del capital. Se trata de una perspectiva que permite analizar dicho proceso a partir de sus tensiones constitutivas y sus potencialidades eventualmente disruptivas y creadoras. En la ciudad de Bella Unión, ubicada en el extremo norte del Uruguay, la relación entre una contundente política de desarrollo agroindustrial impulsada por el gobierno del Frente Amplio y los deseos de quienes fueron convocados a respaldarla y usufructuarla ha sido inestable desde un principio. Es más: estuvo siempre a punto de fisionarse o desbordarse desde adentro. Lo interesante de estas fisiones y desbordes es que no radicaban exclusivamente en la frustración, sino también en el despliegue de un deseo colectivo que llegó a volverse irreductible a la estrategia gubernamental que, en algún momento, se propuso capturarlo, contemplarlo, administrarlo y funcionalizarlo. El caso de Bella Unión invita a indagar en cómo son trazados nuevos posibles – es decir, cursos de acción singulares – en un campo social en el que determinados aparatos institucionales se proponen – y a veces logran – movilizar los deseos colectivos de acuerdo con objetivos estratégicos muy definidos y tendencialmente unívocos.

⁴ Para un debate sobre el sistema de gubernamentalidad que, en Sudamérica, conjuga neoextractivismo e inclusión de las “organizaciones sociales” en la gestión de las políticas sociales del Estado, ver Zibechi (2010).

1. (Des)encuentro con el desarrollo en Bella Unión

Bella Unión es una ciudad uruguaya cuya economía ha estado directamente asociada a la producción azucarera desde mediados del siglo XX. Su movimiento popular es muy activo y está nucleado, fundamentalmente, por las bases sociales de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), el sindicato local de los cortadores de caña de azúcar. Dicho movimiento popular ha importunado al gobierno del Frente Amplio desde el inicio de su largo período al frente del Poder Ejecutivo uruguayo, iniciado en marzo de 2005. No es difícil encontrar notas periodísticas en la prensa nacional que atestiguan esta situación. Por ejemplo, en una fecha tan temprana como febrero de 2006 – segundo año del primer gobierno frenteamplista – el entonces ministro de agricultura, ganadería y pesca, José Mujica, ya se refería a la acción política de la UTAA como un “palo en la rueda contra los que estamos gobernando” (La República 3-2-2006). Es que en enero de ese mismo año, justamente cuando el gobierno nacional había empezado a invertir raudales de dinero en el fortalecimiento y la ampliación de la industria azucarera de Bella Unión, los cortadores de caña decidieron ocupar tierras fiscales. El escándalo mediático y político fue estruendoso.

Esgrimiendo la histórica consigna “tierra para el que la trabaja”, los ocupantes de tierras manifestaban su voluntad de convertirse en pequeños productores rurales y participar en la administración de los esfuerzos desarrollistas emprendidos por el gobierno en el extremo norte del país. De 2007 en adelante, el gobierno aceptó repartir tierras entre algunos cortadores de caña con el propósito de convertirlos en proveedores de materia prima del ingenio azucarero local, bajo control de la flamante empresa estatal Alcoholes del Uruguay Sociedad Anónima (ALUR). Sin embargo, las autoridades uruguayas jamás cedieron espacio para la inclusión de los trabajadores rurales en la administración directa de su política de desarrollo: así empezaba a consolidarse el denominado Complejo Sucroalcoholero de Bella Unión (CSA)⁵, una intervención vertical en la economía bellaunionense que el gobierno frenteamplista encaró como la piedra fundamental del nuevo Uruguay Productivo.

Menos comprometidos con la política económica del gobierno que con las apuestas colectivas formuladas en el marco de su organización sindical, los trabajadores de la caña de azúcar identificaron en ALUR un espacio donde canalizar nuevas y viejas exigencias de justicia y bienestar social. Si escribimos las palabras “UTAA” y “ALUR” en Google,

⁵ La sigla CSA no es de uso oficial y se emplea en esta tesis con fines estilísticos, para dar más fluidez a la lectura del texto.

encontraremos abundantes registros de una conflictividad incesante, marcada por sucesivas ocupaciones de tierras, piquetes y solicitudes de recursos económicos destinados a ensanchar al máximo las potencialidades del desarrollo agroindustrial patrocinado por el gobierno progresista. En las primeras etapas de mi investigación, mientras revisaba los rastros cibernéticos del choque y las negociaciones entre ALUR y UTAA, tenía la sensación de que, en Bella Unión, el desarrollo había desencadenado una fuerza deseante que estaba siempre a punto de desbordarlo en tanto política de gobierno. Las grandes promesas del desarrollo económico parecían prolongarse en la irreverencia distorsiva de una política relativamente autónoma; una política que, de algún modo, lograba reunir fuerzas y palabras para trazar su propio horizonte de posibles allí donde todo parecía – o debería – estar rigurosamente planificado y acordado.

Durante la elaboración de mi proyecto de investigación empecé a mapear algunas controversias entre los cuadros políticos del gobierno frenteamplista y los sindicalistas de la UTAA. En ellas era interesante observar cómo los funcionarios del Estado uruguayo manifestaban su asombro ante los arrebatos reivindicativos de un movimiento sindical demasiado exigente, cuyas inoportunas demandas colectivas parecían literalmente tender al infinito⁶. En junio de 2013, en las páginas de un importante semanario montevideano, podía leerse el desahogo personal de un cuadro político progresista que ya no aguantaba más los incesantes litigios verificados en Bella Unión. Entrevistado por Búsqueda, Raúl Fernando Sendic, el entonces presidente de la Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP) – la principal accionista de ALUR – lamentaba la postura exageradamente conflictiva de los trabajadores bellaunionenses. Según él, “muchos de los trabajadores no terminan de ubicar bien la relación que tienen con una empresa que es del Estado. Como es del Estado se creen que pueden tirar permanentemente de la piola y que eso puede ser infinito” (Búsqueda 13-6-2013).

En otra oportunidad, el presidente de ANCAP también manifestaría su incomodidad personal respecto de “una especie de *mito permanente*”⁷ que existiría “alrededor de Bella Unión”. En palabras de Sendic, a causa de ese “mito” “cada vez que

⁶ Cabe mencionar que la postura conflictiva y combativa de la UTAA era relativamente excéntrica en el contexto del movimiento sindical uruguayo y no armonizaba con la actitud más complaciente adoptada por el PIT-CNT – la única central sindical del país – respecto de las principales políticas sociales y económicas del gobierno frenteamplista.

⁷ Las bastardillas son siempre más, salvo que se indique lo contrario.

hay una situación de conflicto en Bella Unión, todos los uruguayos nos enteramos”. Al escuchar estas declaraciones, su entrevistador hizo la siguiente observación:

su familia tiene bastante que ver con ese mito [...] Su padre, Raúl Sendic, fue de hecho líder del sindicato de los cañeros, la UTAA, de la lucha por los derechos laborales de ese tipo de trabajadores. A partir de allí incluso vino su relación con el MLN-Tupamaros. En fin, estamos hablando de principios de los años 1960⁸.

En la primera mitad de los años sesenta, Raúl Sendic Antonaccio, padre de Raúl Fernando Sendic, impulsó la fundación de la UTAA y la organización de la lucha armada del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T). Tanto la UTAA como el MLN-T se convertirían en emblemas de la radicalización política uruguaya en la antesala de la brutal dictadura cívico-militar instalada en 1973. El “mito” evocado por Raúl Sendic hijo en la entrevista que acabo de mencionar es el mito de la Bella Unión tupamara, donde algo trascendente puede pasar en cualquier momento. Es como si en esa ciudad siempre estuviera pasando algo, aún cuando supuestamente no debiera pasar nada.

En su denso trabajo sobre el devenir histórico de la política popular en los cañaverales de Bella Unión, Silvina Merenson (2016) observa que los cortadores de caña del norte del Uruguay aparecen ante los ojos de varios ex o actuales militantes políticos y sociales uruguayos como “tipos especiales”, protagonistas de un sindicalismo “totalmente revolucionario” que encuentra sus raíces en la agitación política impulsada por Raúl Sendic en el interior del país a inicios de los años sesenta. Los militantes políticos que Merenson conoció en Montevideo, al igual que muchos exponentes intelectuales de la izquierda capitalina, solían asociar el carácter *sui generis* de los “cañeros” o “peludos”⁹ de Bella Unión a sus condiciones de vida extremadamente difíciles y a una rebeldía prístina, enraizada en la insumisión inmemorial de sus presuntos ancestros – es decir, los indios libres, los negros fugados, los gauchos y la criollada desposeída – al poder oligárquico y la expansión del capitalismo¹⁰.

Merenson trazó correlaciones y tensiones entre ciertas narrativas ampliamente difundidas sobre los trabajadores de la caña de azúcar y la forma en que estos últimos se

⁸ Esta entrevista fue concedida por Raúl Fernando Sendic a la radio Espectador el 14 de junio de 2013.

⁹ “Peludo” es como se auto-denominan y son denominados los cortadores de caña de Bella Unión. El vocablo hace una analogía entre el animal conocido como tatú-peludo y el aspecto de los cortadores durante el proceso de trabajo: encorvados sobre las plantas de caña, con el cuerpo teñido de pies a cabeza por el hollín y el carbón del cañaveral quemado.

¹⁰ En la geografía de la imaginación uruguaya, Bella Unión, así como otras ciudades fronterizas con Brasil, es ubicada en una posición ambigua respecto de lo que definiría la pertenencia al colectivo nacional. La cercanía con el territorio extranjero, la lejanía en relación a Montevideo y el mismo color de la piel de la población local dan cabida a relatos que enfatizan, alternadamente, la radical autoctonía de Bella Unión – enraizada en la protohistoria de la nación – y su extranjería potencial, señalada por la condición fronteriza. Al respecto, ver Merenson (2007, 2010).

enunciaron a sí mismos y a sus perspectivas políticas en diversas luchas desencadenadas a lo largo de más de cuarenta años (específicamente, entre 1961 y 2006). Su investigación arroja luz sobre sucesivas irrupciones políticas que movilizaron a los “peludos” y que expresaron sus intentos de obrar sobre realidades sociales específicas mediante ejercicios muy concretos de organización colectiva. El reconocimiento de la singularidad de la acción política de los cortadores de caña implicó, para la autora, una desnaturalización de su capacidad combativa y la recuperación, mediante técnicas etnográficas e historiográficas, de los esfuerzos concretos de estos sujetos por volver enunciable y factible la transformación de sus propias vidas. Merenson evidenció que la subjetivación política es un proceso laborioso que habilita la emergencia de distintas posibilidades y esperanzas en cada período histórico. Siendo así, el término “peludo”, de la misma forma que otras categorías que han marcado la organización de la política popular en Bella Unión – “trabajadores”, “obreros”, “campesinos”, “excluidos” –, podría tomarse como el índice de unas composiciones colectivas novedosas, susceptibles de inaugurar cursos de acción singulares en coyunturas históricamente específicas.

Los cortadores de caña en sí mismos no constituyen un sujeto histórico, pero sí una posición social derivada de la división del trabajo bajo ciertas relaciones de producción. Sin embargo, nuevos sujetos pueden constituirse *en medio* de los cortadores de caña, tramados por enunciaciones variadas que son capaces de presentar una posición social determinada, inmanente al orden económico, en el registro de su mutabilidad intencional, o sea, en referencia al *posible político* que dicha condición social entrañaría. Desde esta perspectiva, podría decirse que quienes ocuparon tierras del Estado en el año 2006 se sustrajeron, en nombre de un horizonte de posibilidades propio, al rol que se les asignaba en el plan de desarrollo económico trazado por el gobierno frenteamplista para Bella Unión. Esa medida de lucha, sus antecedentes históricos y sus múltiples consecuencias sociales representan en esta tesis una invitación a formular coordenadas metodológicas y conceptuales susceptibles de habilitar un estudio sistemático de aquellos esfuerzos colectivos mediante los cuales nuevas problemáticas llegan a subvertir las realidades diagramadas por el poder, suplementándolas con otros campos de posibles.

2. En campo: mapeando desencuentros

En setiembre de 2013 hice mi primera visita a Bella Unión. A fines de junio de 2015, luego de cuatro estadías relativamente breves en la ciudad¹¹, me mudé al extremo

¹¹ Las tres primeras estadías duraron una semana y la última, quince días.

norte uruguayo junto a mi compañera Juliana para desarrollar un trabajo de campo que duró seis meses. La idea inicial era que mientras realizara mis actividades de investigación, Juliana aprovecharía la tranquilidad del interior del país para dedicarse a las lecturas obligatorias de su examen de ingreso al doctorado. Pero nuestros planes fueron, por decirlo de algún modo, suplementados por las turbulencias políticas que se vivían en Bella Unión en aquella época. 2015 fue un año intenso en la ciudad, marcado por ocupaciones de fábricas y de tierras, huelgas de hambre y piquetes. No estuvimos ajenos a toda esa agitación política y, en dado momento, fuimos llamados a participar más activamente en su proceso. A lo largo de la tesis, estas circunstancias serán pensadas en sus consecuencias teórico-políticas y metodológicas. Ahora, lo importante es relatar en qué contexto investigativo, y a partir de qué situaciones de encuentro y afinidad, pude mapear las condiciones de posibilidad de la intervención desarrollista en Bella Unión y los ejes de conflictividad de las desafiaban.

Antes de instalarme en Bella Unión, solía hospedarme en casa de Esteban, un dirigente histórico de la UTAA y ex militante tupamaro. Conocí a Esteban y a su esposa Lucero – también ella una ex militante del MLN-T – por intermedio de mi directora de tesis, Silvina Merenson, que cultivaba con ambos una estrecha amistad desde la época de su investigación doctoral. Esta pareja me recibió afectuosamente en su casa cuando me volví un visitante habitual del Bella Unión. Ser huésped de Esteban y Lucero significó una especie de salvoconducto para tejer los primeros contactos con la militancia de la UTAA. Más tarde, cuando mi compañera y yo finalmente alquilamos nuestra propia casa en el barrio Los Olivos, el sindicato atravesó una dramática renovación de cuadros y se me hizo necesario comenzar desde cero los diálogos con la organización. Por suerte, no fue difícil reivindicar contactos en común que pudieran confirmar a mis nuevos interlocutores los propósitos de la investigación que pretendía realizar.

En ningún momento los dirigentes de la UTAA manifestaron explícitamente su recelo hacia mí. Sin embargo, en las primeras semanas de trabajo de campo, Emilio – una figura bastante destacada del sindicato que más tarde me brindaría su amistad – daba a entender que yo estaba bajo vigilancia. Él conocía mis itinerarios por la ciudad y se aseguraba de demostrármelo. Observaba, por ejemplo, que me había visto caminando por el centro en horarios muy precisos o andando en bicicleta tarde por la noche. Yo trataba de reaccionar con normalidad a sus observaciones, relatando brevemente los motivos de esos paseos que tanto lo inquietaban. Por el mes de agosto, dejé de oír comentarios inusitados sobre mi rutina y el diálogo con los dirigentes sindicales se volvió cada vez más fluido. A

partir de entonces, me fue dada la posibilidad participar en reuniones de la Comisión Directiva, asambleas, confraternizaciones y medidas de lucha convocadas por el sindicato en distintos frentes sociales. Asimismo, Sandro – el entonces secretario general de la UTAA – y Emilio me recibieron en su círculo más cercano de amistades y se dispusieron a debatir conmigo las intuiciones que iba formulando a lo largo del proceso de investigación.

Sandro había militado en el combativo Sindicato Único de la Construcción (SUNCA) mientras vivía en el sur del Uruguay. Tras mudarse a Bella Unión, alrededor de 2010, decidió unirse las filas de la UTAA motivado por los relatos que había escuchado sobre el pasado revolucionario del sindicato. A su vez, Emilio desarrollaba una apasionada militancia comunitaria junto a sus vecinos en los asentamientos populares de Bella Unión. En su adolescencia él había sido muy cercano a algunos sectores de izquierda del Frente Amplio, pero cuando lo conocí se esforzaba por elaborar su propia crítica respecto de un gobierno nacional que lo frustraba y al que consideraba necesario oponer “autonomía” y “lucha”. Ambos dirigentes sindicales fueron influencias políticas e intelectuales decisivas para mí. Sus categorías de pensamiento no sólo reverberan como “conceptos nativos” a lo largo de esta tesis, sino que también subsidian, en alguna medida, la enunciación misma de las apuestas teórico-metodológicas que actualmente me movilizan.

Mi constante presencia en las reuniones y demás actividades del sindicato permitió acercarme rápidamente a un cierto número de militantes que habían sido beneficiados por las políticas agrarias impulsadas en el marco del CSA desde 2007. Con la ayuda de estas personas pude recorrer diferentes emprendimiento cañeros y conocer a decenas de pequeños productores rurales que recibían financiamiento de ALUR para realizar la fase agrícola de la cadena productiva del azúcar y el bioetanol. El diálogo con los pequeños productores provenientes de las bases de la UTAA me permitió comprender las dinámicas institucionales que aseguraban la conversión de ex asalariados rurales en productores cañeros dependientes de los préstamos y la asesoría técnica ofrecidos por la industria estatal sucroalcoholera. Sus relatos también me proporcionaron elementos para analizar cómo la lucha agraria de mediados de los años 2000 implicó una reconfiguración de la estrategia de desarrollo local del gobierno frenteamplista, volviéndola compatible con una tímida democratización del acceso a la tierra y con la “inclusión productiva” de quienes pretendían beneficiarse de él. La recuperación de los propósitos rectores de la estrategia gubernamental de reactivación de la industria azucarera fue beneficiada tanto por la lectura de documentos oficiales como por entrevistas realizadas a cuadros frenteamplistas, funcionarios de ALUR y del Instituto Nacional de Colonización (INC). Las entrevistas

fueron complementadas con la observación directa de diversas situaciones de negociación y conflicto que involucraron a los funcionarios del Estado uruguayo, los productores de caña y la dirigencia sindical. Estas ocasiones representaron una oportunidad privilegiada para identificar en qué términos se planteaban, problematizaban y justificaban, desde diferentes posiciones institucionales y compromisos colectivos, las posibilidades, límites y objetivos asociados a la reactivación de la agroindustria azucarera.

La interlocución con los asalariados rurales devenidos productores de caña en los territorios del CSA me dio una idea clara del desencuentro existente entre las expectativas de una vida mejor nutridas por los “beneficiarios” del desarrollo y los mecanismos institucionales destinados a contemplar dichas expectativas en sinergia con los propósitos productivos de la industria. A su vez, la circulación constante entre los emprendimientos productivos subordinados a ALUR y los espacios de articulación política estimulados por la UTAA significó la oportunidad de acompañar cómo las frustraciones generadas por una modalidad muy específica de acceso a la tierra se iban convirtiendo, en el ambiente sindical, en una especie de criterio para repensar la lucha agraria más allá de los condicionamientos impuestos por la estrategia económica del gobierno.

Durante todo el trabajo de campo, ya sea junto a los pequeños productores cañeros provenientes de las bases de la UTAA, ya sea en los lugares de la política sindical, empleé ampliamente las entrevistas no directivas, escribí notas de campo *in loco*, a la vista de mis interlocutores, y grabé intervenciones realizadas en asambleas y reuniones políticas siempre que se me autorizó hacerlo. Por supuesto que nunca me propuse grabar encuentros reservados y negociaciones que involucraban a actores que desconocían las razones de mi presencia en Bella Unión. El/la lector/a podrá observar que esa intensa actividad de registro escrito y sonoro permitió la reconstrucción de debates importantes a lo largo de la tesis. Dicha reconstrucción pretendió respetar la singularidad de los enunciados personales y acompañar su eventual confluencia en la laboriosa sedimentación de prescripciones políticas compartidas.¹²

¹² La individualización de los enunciados y la recuperación de sus contenidos conceptuales específicos resulta importante en una investigación que pretende seguir de cerca la conformación de procesos novedosos de subjetivación. Parto de la premisa según la cual lo que dicen las personas no siempre puede explicarse en referencia a las regularidades culturales del grupo social al que pertenecen y tampoco puede diluirse en la composición *a posteriori* de alguna tipología interpretativa. No obstante, mi interés por la palabra – y mi decisión de considerar atentamente la singularidad potencial de su enunciación – no exige la replicación en el papel de todas las particularidades e idiosincrasias de la oralidad, salvo cuando éstas invistan un valor conceptual deliberado o sean indisociables de la configuración del sentido de un enunciado.

3. Pensar en el registro de lo posible

Mi trabajo de campo se dio en medio – y fue parte – de un proceso conflictivo en el cual las promesas y realizaciones del desarrollo industrial se conectaron, de algún modo, con la apertura de una secuencia política marcada por la afirmación de posibilidades que trascendían decididamente las coordenadas de intervención y transformación económico-social proyectadas por el progresismo uruguayo para Bella Unión. Esta dinámica me permitió identificar dos modalidades cualitativamente distintas de movilización de los deseos, las esperanzas y las capacidades prefigurativas de las personas. La primera de ellas, impulsada por los dirigentes de la UTAA, consistía en la canalización de las aspiraciones colectivas con arreglo a horizontes políticos relativamente autónomos. La llamaré, simplemente, “una política” o “una lucha”. La segunda modalidad, afianzada en la estructura institucional del CSA, se definía por la administración funcional de esas mismas aspiraciones de acuerdo con la efectivización de ciertos resultados y la realización de formas específicas – y tendencialmente fijas – de realización personal o colectiva. La llamaré “desarrollo” o “gestión”. Es fundamental subrayar que estas dos formas de movilizar la capacidad deseante de las personas sólo se volvieron nítidas y conceptualmente discernibles para mí en la medida en que mis interlocutores las postularon en tesis y actualizaron en la práctica mientras conviví con ellos en Bella Unión. O sea: sin el discernimiento divisivo planteando por “una política”, no hubiera sido posible pensarla en tanto singularidad y tampoco concebir la “gestión” como aquello que le es ajeno y distinto.

En sintonía con mis interlocutores en el movimiento sindical de Bella Unión, entiendo la política como la afirmación de una posibilidad y el esfuerzo colectivo – no siempre bien sucedido – de realizarla. En 2015, los dirigentes de la UTAA asociaban su política a la palabra “lucha”. Esta última, a su vez, era el acto y el efecto de un distanciamiento intencional respecto de la “gestión”. Hacer política – “luchar” – era disponer de una amplia autonomía para fabular colectivamente posibilidades nuevas. Por otra parte, “gestión” – la no-lucha, por decirlo así – era esforzarse por derivar lo factible de las reglas de juego existentes, circunscribiéndose al campo de posibilidades dispuesto por estas últimas. Mis interlocutores en el movimiento sindical decían que las políticas de desarrollo del gobierno uruguayo en Bella Unión “llamaban a la gestión”. Ellos querían hacer algo distinto: “invitaban a la lucha”. Y, al hacerlo, se reconectaban con su historia: “con la fuerza de lo que es UTAA”.

La decisión de pensar en el registro de lo posible, abierto por las prescripciones políticas formuladas por mis interlocutores, ha despertado mi sensibilidad y mi atención respecto de la obra de un conjunto de investigadores que parecen haber asumido posiciones análogas a las mías en sus respectivos campos de interés empírico. Cada uno a su modo, estos investigadores intentan sintonizar el análisis social con la enunciación colectiva de posibles. Cabe mencionar que, pese a ser relativamente periférica en el campo de las ciencias sociales, la preocupación teórico-epistemológica con los posibles se manifiesta intensamente en otros dominios del pensamiento, especialmente en la filosofía. Allí, los nombres de Alain Badiou y Gilles Deleuze constituyen dos grandes marcos contrapuestos – pero componibles, hasta cierto punto – del debate contemporáneo sobre la inmanencia, el devenir y el acontecimiento. Casi todos los autores que evocaré a continuación son deudores de los *insights* de ambos filósofos, así como también lo es, en buena medida, mi argumento a lo largo de esta tesis.

El pensamiento del antropólogo Sylvain Lazarus responde positivamente a la invención de la política que conocí en la UTAA durante el año 2015. Lazarus (1996) sugiere que no estamos obligados a pensar la intelectualidad de las personas como el reflejo o la expresión de “algo” ya establecido por otra intelectualidad (científica, sociológica, burocrática, estadística, etc.). Si dejamos a un costado el registro durkheimiano de pensamiento, podemos tomar la intelección de las personas como la ramificación de un real que irrumpe en el pensamiento y se transforma bajo su influjo. En este orden de ideas, la función del pensamiento no es fijar o representar objetos siempre ya discernidos, sino emprender un movimiento instituyente que pone al mundo tal cual es en tensión con sus posibilidades inmanentes. De ahí que Lazarus señale que el pensamiento es relación de lo real no objetal. Partiendo de esa premisa, el autor propone que empecemos la investigación social directamente en el campo abierto por la subjetivación política de una coyuntura, y que permanezcamos allí hasta el final. Este campo es denominado “situación” por el autor. Un posible es aquello que *sitúa* una coyuntura, revelando en ella un punto de subjetivación. La coyuntura, por otro lado, sería algo así como el estado de la situación: un orden de cosas dado que los posibles van a desafiar.

Podemos, entonces, optar entre pensar a partir del estado de la situación o a partir de la situación de la coyuntura. El primer camino llevaría a la ciencia social descriptiva, al pensamiento de lo que es y de lo que está dado. A su vez, el segundo camino nos conduciría a seguir de cerca la intelección prescriptiva de las personas. Lazarus explica que el primer camino

propone aprehender el ahora teniendo en cuenta lo existente (*l'étant*) y el otro sostiene que, en su espacio propio de intelectualidad, lo que da acceso a “lo que hay ahora” se elucida abordando el ahora como conjunción de posibles. Lo posible es, entonces, lo que caracteriza la situación, lo que asienta su intelectualidad. Para las personas, el conocimiento de una situación se aprehende por la identificación de sus posibles. Lo posible no es del orden del porvenir, él es del orden de lo que existe (*de ce qu'il y a*) (Lazarus, 2001: 395).

Cuando se desarrolla en el registro de lo posible, la política se convierte en “la subjetividad de un antagonismo, potencialmente portadora de nuevas normas de organización”, tal como afirma Alain Bertho (2006: 4). Considerar el pensamiento político de lo posible exige inscribirse en su registro, lo que implica estar dispuesto a construir terrenos, pero nunca objetos. La forma de investigación más adecuada para el mapeo de los posibles sería, en palabras de Bertho, “una investigación-acción o una investigación participativa, dado que sin compartir la acción sobre la situación, el enunciado de la subjetividad de esta situación permanecerá inaccesible para nosotros” (ibid.: 9).

Lazarus sostiene que la política es un pensamiento y, por lo tanto, se inscribe en el orden de lo posible, enunciando lo que es a partir de lo que puede ser, y no a la inversa. Para ser fieles a la lógica intelectual de una política deberíamos atenernos a su proceso, pensarlo desde adentro, sin atribuirle objetos que le sean exteriores, bajo riesgo de obnubilar completamente su potencia inventiva.¹³ Habría que pensar la política como el acto y el efecto de construir un dominio de acción que se amplía paulatinamente en la medida que una coyuntura dada se va subjetivando, o sea, se va volviendo pensable en el registro de uno o más “posibles” – léase: de una o más mutaciones intencionadas que se sintetizan en prescripciones. La formulación básica de la política elaborada por mis interlocutores de la UTAA (“lucha es diferente de gestión”) era, de por sí, una política. Lo era porque subjetivaba la “gestión” – i.e. la acción administrada según ciertos protocolos y bajo supervisión burocrática – al postular un dominio de la acción que se distinguía de ella, llamado “lucha”. “Lucha”, vale aclararlo, no configura un objeto de estudio con contornos claros, sino el terreno práctico-subjetivo donde se desplegaban aquellas posibilidades que no se pretendían condicionadas *a priori* por nada, salvo por el ejercicio de las capacidades colectivas destinadas a realizarlas.

Las reflexiones Hirozaku Miyazaki (2004) sobre el “método de la esperanza” también convergen con la política que encontré en Bella Unión. Su trabajo de campo en

¹³ El pensamiento de Lazarus, cuyas herramientas conceptuales me resultaron importantes para inscribir el análisis antropológico en el campo de lo posible, será discutido con más detenimiento a lo largo de la tesis y contrastado con algunas expresiones de lo que se denomina “antropología política” o “antropología de la política”. Aquí, lo importante esbozar sus premisas teóricas fundamentales.

Fiyi, en la comunidad de Suvavou, le ha permitido teorizar la esperanza como una forma prospectiva de conocimiento mediante la cual las personas conciben la apertura de su propio devenir colectivo.¹⁴ A fines del siglo XIX, los habitantes de Suvavou estudiados por Miyazaki fueron desplazados por el gobierno colonial de sus tierras de origen, ubicadas en lo que actualmente es la zona céntrica de Suva, la capital fiyiana. Desde entonces, ellos han reclamado sin mucho éxito al gobierno una compensación financiera por las tierras perdidas. Aunque sus exigencias no han sido contempladas con creces, los miembros de Suvavou nunca dejaron de plantear a las autoridades políticas de Fiyi – ya sean coloniales o poscoloniales – la necesidad de obtener algún tipo de reconocimiento oficial sobre su propio pasado y los derechos territoriales que se desprenderían de él. Esta incesante lucha por reconocimiento introdujo en el presente de los pobladores de Suvavou una discusión permanente sobre qué puede ser su comunidad, cuál es su trayectoria, quiénes son sus miembros y cómo debería establecerse una nueva forma de vida colectiva cuyo advenimiento posible es anticipado por la esperanza.

En los trabajos de Miyazaki, la esperanza no es sólo una categoría del pensamiento de sus interlocutores, sino también un método de conocimiento susceptible de moldear la construcción misma del argumento antropológico. En palabras del autor,

La esperanza no es un estado emocional de sentimiento positivo sobre el futuro o un sentido religioso de la expectativa. *No se trata de un tema de análisis [...] Siguiendo a [Ernst] Bloch, [Walter] Benjamin y [Richard] Rorty, abordo la esperanza como un método. En el trabajo de esos filósofos, la esperanza sirve como un método de reorientación temporal radical del conocimiento (Miyazaki, 2004:5).*

Bajo el signo de la esperanza, el relato del investigador se orienta hacia el por venir, incorporando un fuerte énfasis en las modalidades de la acción humana que se destinan a convertir el presente en un momento en que es posible relanzar, en nuevos terrenos, las esperanzas incumplidas o truncadas del pasado. Al igual que la política de mis interlocutores bellaunionenses, la esperanza de Miyazaki – y de las personas con las cuales él entabló interlocución en Fiyi – se expresa en actos políticos que prescriben la eficacia de un devenir colectivo singular allí donde el curso de la historia parecería haberse dirimido en una distribución estable de los territorios, los recursos económicos, las aptitudes productivas y las funciones sociales.

Abordar los “actos de esperanza” convoca directamente el pensamiento de Ernst Bloch. El marxismo esperanzado de Bloch, así como el de Walter Benjamin, confluye con la esperanza de Miyazaki y con la política que conocí junto a los dirigentes de la UTAA en

¹⁴ Miyazaki extendió sus reflexiones sobre la esperanza a otros contextos empíricos (2006, 2013) y también la puso en diálogo con el trabajo de autores que desarrollan perspectivas análogas a la suya (2017).

2015. Bloch (2004 [1938-1947]) conceptualiza la esperanza como un “afecto de espera” que proporciona a los sujetos una experiencia de la realidad en tanto que proceso abierto. Es en la esperanza que las personas viven la inapelable apertura de la realidad material que las constituye. Tal vivencia es potenciada por todo tipo de imagen “utópica” capaz de sugerir, en el tiempo presente, una tendencia de lo que puede venir a ser. La esperanza tensiona la inadecuación de las objetivaciones vigentes movida por alguna referencia a la posibilidad de explorar, en los objetos dados, nuevas condiciones de existencia que aún no están presentes en ellos. Siendo así, el objeto de la esperanza no es la realidad objetiva y sus hechos – que no son otra cosa que la reificación de un proceso –, sino más bien un posible que se supone latente en el mundo tal cual es. Bloch argumenta que el impulso de la esperanza es “extensivo”, ya que en él “el objeto del instinto no se encuentra a la disposición individual del momento, ni se halla tampoco presto en el mundo a mano, de manera que puede dudarse todavía de su resultado o de que acaezca” (Bloch, 2004:104).

Bloch llega a definir la experiencia concreta de la esperanza como un “sueño diurno” que encuentra sus condiciones de realización en la acción de alguien que intuye en imágenes la mutabilidad del mundo. Mientras el sueño nocturno se cierra a la realidad material objetiva, encontrando en ese cierre su condición de permanencia y posibilidad, el sueño diurno, por otro lado, se media en lo real, disputando allí sus contenidos utópicos. El seguimiento empírico y la enunciación argumentativa del sueño diurno exige una orientación del pensamiento hacia adelante; exige, por decirlo así, un acto de esperanza que se recusa a devolver lo posible a lo ya existente; que retiene, obstinadamente, los esfuerzos individuales y colectivos que se propusieron mediar el ingreso de lo nuevo a un mundo dado.

Como observa Miyazaki, si la esperanza se convierte en un método, debemos estar dispuestos a tener esperanza y a realizarla en la construcción de nuestros enunciados (cf. Miyazaki, 2004:5). En el campo de la investigación empírica esto quizás signifique embarcar en los “sueños diurnos” de aquellos con quienes establecemos interlocución, sin incurrir en la tentación de banalizar sus esfuerzos de lo posible, ya sea presentándolos como la continuidad de hábitos del pasado o como ejemplos de dinámicas colectivas que nuestras disciplinas creen haber mapeado exhaustivamente. Si los sueños diurnos son la forma en que las personas experimentan una vía para la transformación de su mundo, entonces reconocer su contenido singular y sus eventuales consecuencias – por más modestas que sean – pasa por abandonar resueltamente la sustitución de los objetos de una praxis transformadora por los objetos de conocimiento que se prescriben desde el saber

disciplinario.¹⁵ Volviendo a Lazarus, si el pensamiento es relación de lo real no objetal y su proceso puede prescribir en el mundo nuevos modos de existencia posibles, entonces una investigación que asuma tales premisas debe estar preparada para acoger lo nuevo en su campo de observación y análisis.

La constitución de nuevas objetividades políticas en tensión con las objetivaciones operadas por diversos regímenes de poder y representación es uno de los focos de interés de los trabajos sociológicos de Pieter de Vries. Sus estudios podrían leerse como un intento de indagar en las inconsistencias, tensiones y prefiguraciones utópicas subyacentes a la sedimentación y el ordenamiento de la vida social humana (cf., por ejemplo, de Vries 2007, 2010, 2015). En una investigación reciente, de Vries (2016) analizó la (des)articulación entre los movimientos comunitarios de Recife (Brasil) y las políticas gubernamentales de desarrollo urbano participativo promovidas por la administración del Partido de los Trabajadores (PT). El autor argumenta que tales políticas no deberían leerse exactamente como el despliegue de un aparato de gobierno destinado al control de las poblaciones, sino más bien como un intento de sintetizar el deseo de pertenencia de las personas con la voluntad de poder de las agencias gubernamentales. Sin embargo, de Vries se apresura en señalar que esta síntesis es “imposible, dada la naturaleza inconsistente de la situación urbana” (de Vries, 2016: 792). El autor argumenta que la ciudad de Recife “está enraizada en inconsistencias que se expresan en aquello que los planificadores y formuladores de políticas públicas denominan la ciudad informal, compuesta por una multiplicidad de asentamientos también llamados favelas” (ibid.:802).

La favela es una dimensión del espacio urbano que participa en forma ambivalente en la situación de gobernabilidad proporcionada por los mecanismos institucionales de distribución de los recursos públicos municipales. En Recife, el sector gobernable de la favela es conocido como “comunidad” y está circunscripto por una red de servicios y sistemas de participación popular que deben garantizar el usufructo del espacio y los recursos urbanos por parte de la población local. No obstante, en el territorio de la comunidad pueden existir “multiplicidades” favelizadas que (aún) no cuentan para los

¹⁵ La posibilidad de construir un dominio investigativo sin recurrir directamente a definiciones de objeto aportadas por el conocimiento disciplinario no es una apuesta exactamente novedosa. En el contexto de la antropología estadounidense, esta elección metodológica ha sido reivindicada, ya en los años 1980, por Michael Fischer (1984). En su tesis doctoral, Fischer (1980) pensó la enunciación de la “religión” en Irán desde su conflictiva polifonía y en relación con los acontecimientos revolucionarios de 1979. Sin embargo, el desafío planteado en esta tesis es identificar en el uso de las palabras no sólo su contenido definicional – qué es un objeto x para un grupo y –, sino también, y fundamentalmente, su contenido prescriptivo – qué puede llegar a ser x bajo ciertas condiciones intelectivas que lo inscriben en el dominio esperanzado de lo posible y la política.

esquemas clasificatorios del Estado y que permanecen a la espera de ser seleccionadas, colonizadas e incluidas en ellos mediante ciertos procedimientos de naturaleza burocrática. Además de esos dos dominios – la comunidad y la favela –, también existirían sujetos cuya incorporación a la situación de gobierno es descartada *a priori* por el Estado. Este es el caso de las poblaciones “marginales” que se desplazan constantemente de favela en favela y tienen dificultades para comprobar su lugar de residencia y conservar documentos de identificación.

La variación de la escala de consistencia urbana es una función de las estrategias oficiales de administración del territorio que indica la imposibilidad definitiva de “suturar la brecha entre inclusión y pertenencia” (de Vries, 2016: 804). Para de Vries, el gobierno de poblaciones supone siempre un múltiple inexistente (“inelegible”) que, aun cuando es enrolado en las cuentas del poder, nunca puede aparecer efectivamente en ellas. En los términos de Badiou, estaríamos hablando de un múltiple cuyo grado de aparición es mínimo. Sin embargo, incluso allí donde no debería haber nada, algo puede eventualmente ocurrir, lo que equivale a decir que un ente puede existir por sí mismo, o sea, autonomizarse (cf. Badiou, 2008: 403). En Recife esto habría pasado en los años 1980, cuando los habitantes de la ciudad inconsistente emprendieron su propio recorrido hacia la pertenencia al mundo urbano mediante ocupaciones multitudinarias de terrenos abandonados. Si bien tales movilizaciones – sostenidas por un complejo agenciamiento que incluyó a diversos movimientos sociales – han sido paulatinamente recuperadas por diferentes estrategias de gubernamentalidad, lo cierto es que su verdad sigue vigente en los días de hoy. De Vries explica que la verdad de la ciudad “es que su historia es la historia de los pobres” (de Vries, 2016: 806). La irrupción de los “pobres” en la política tendría siempre el poder de desestabilizar y vaciar todas las representaciones vigentes respecto de lo que ellos merecen o están autorizados a hacer y desear. De las formulaciones elaboradas por este autor tomo una intuición fundamental que considero estratégica para pensar el (des)encuentro con el desarrollo en el norte uruguayo, a saber: la movilización de las esperanzas colectivas sobre el diagrama de un dispositivo de gobierno de poblaciones no es el único campo donde se juega la capacidad de subjetivación política de las personas. La emergencia de nuevas capacidades políticas no deriva únicamente de un proceso de interpelación institucional, sino también de lo que se sustrae a dicho proceso, revelando la inconsistencia de sus categorías operatorias.

Desde en un marco teórico-político semejante al desarrollado hasta aquí, Michael Neocosmos (2007) se propone mapear aquellos modos alternativos de pensamiento y

producción de posibles que parecen sustraerse a las formas de participación política refrendadas por la figura del “ciudadano”. Para Neocosmos, la política no se limita a la “sociedad civil”, lo que implica decir que la política no siempre está en relación con los mecanismos estatales destinados al diagnóstico y la contención de las carencias populares. De acuerdo con Neocosmos, “en una perspectiva emancipatoria la ciudadanía no dice respecto de sujetos que piden derechos al Estado, sino de *personas pensantes* que se vuelven agentes a través de su involucramiento con la política en condición de militantes/activistas” (Neocosmos, 2007: 11). Lejos de ser apriorística, esta constatación se basa en el estudio de diferentes “modos históricos de la política” en el continente africano, especialmente en Sudáfrica. Dichos modos de la política incluyen las luchas por la liberación nacional de mediados del siglo XX, los movimientos anti *apartheid* de los años 1980 y algunos movimientos comunitarios más recientes, protagonizados por los vecinos de barrios populares ubicados en Durban y otras ciudades sudafricanas.

Las luchas anti *apartheid*, que reciben una atención muy especial en la obra del autor, habrían proporcionado la aparición de una forma política inédita en Sudáfrica. Sus estructuras organizativas serían irreducibles a una mera réplica del Estado colonial con signo invertido y escala reducida, como ocurrió con algunos movimientos de liberación nacional. “Aquella resistencia – escribe Neocosmos en referencia a las luchas populares de los ‘80 –, al igual que la cultura que emanó de ellas, obtuvo su inspiración directamente de la lucha de las personas [...] por el control político de su entorno socioeconómico” (ibid., 2007: 32). Las condiciones políticas de la resistencia en cuestión – ausencia de partido, organizaciones territoriales, rendición de cuentas por parte los dirigentes, etc. – son descritas en detalle por el autor en diferentes trabajos (cf. Neocosmos, 1998, 2007). Aquí, me interesa retener algunas preocupaciones básicas que rigen su actividad investigativa.

El autor se propone explorar analíticamente el llamado “dominio de la libertad”, o la sustracción de la acción política de las personas a los espacios de subjetivación promovidos desde el Estado (Neocosmos, 2016). Para Neocosmos, la política estatal tiende a ser básicamente “expresiva”, lo que quiere decir que sus protocolos pretenden reflejar y administrar intereses particulares atribuidos a – y enunciados por – segmentos pre-determinados de una población humana. La expresividad de la política estatal puede desestabilizarse por el exceso de una política que deviene “popular” en el exacto momento en que deja de pautarse casi exclusivamente por la realización de intereses o necesidades ya previstos en el ordenamiento social vigente. El “dominio de la libertad” es entonces construido por una política popular. En términos metodológicos, la primera condición para

lograr reconocer este dominio potencial de la acción colectiva es no someter los enunciados y las prácticas de las personas a un campo problemático que trasciende el horizonte prospectivo abierto por su propio accionar político. Siguiendo al autor, habría muchas formas de perder de vista el dominio de la libertad. Lo hacemos, por ejemplo, cuando definimos la política de las personas en referencia a los efectos que ha logrado alcanzar frente a las instituciones del Estado. En este caso, son las transformaciones en el campo de “lo político” las que definen la naturaleza de una política, y no los enunciados y las formas organizativas que esta última comporta para poder desplegarse. Otra forma de perder el dominio de la libertad consistiría en explicar el sentido de lo que ocurrió en un determinado momento a partir de aquello que vino a ocurrir inmediatamente o mucho después. Aquí, el presente es desingularizado en referencia a un conjunto de consecuencias que retroactivamente determinarían su sentido histórico.

Abordar la política como una “práctica-pensamiento” (Neocosmos, 2016: 334) específica evita que se la limite a la lógica de las tácticas y las estrategias, al tiempo que autoriza la prospección directa de sus posibles. Cuando una política existe – o sea, cuando el exceso subjetivo existe –, convendría involucrarse con su pensamiento, amplificarlo, debatirlo, sosteniendo, siempre, su singularidad (Neocosmos, 2009). Tal involucramiento con la singularidad de una política puede informar tanto el estudio de lo que ya ocurrió como el estudio de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Siendo así, el pasado y el presente se tornan igualables en lo que se refiere a los posibles que han comportado y pueden estudiarse exclusivamente desde las categorías enunciadas por quienes, en cada momento histórico, han subjetivado sus propias condiciones de existencia según criterios orientados a cambiarlas. En sintonía con los planteos de Lazarus, de Vries y Neocosmos, en esta tesis la identificación de una política y de sus respectivas vocaciones está informada por el campo transformacional al que sus categorías se han abierto, y no exclusivamente por su mediación en un espacio público hegemonizado por el lenguaje del Estado y los mecanismos de gobierno que le son solidarios.

Bajo estas condiciones epistemológicas, se vuelve inteligible la disociación entre políticas de Estado y políticas populares, sin que ello implique reificarlas a partir de una taxonomía preestablecida. Ambas se diferencian en la medida en que, mediante ciertos esfuerzos organizativos, las personas deciden separarlas, asociando su devenir colectivo a un conjunto de posibles no inmediatamente compatibles con la disposición vigente de los lugares de poder y con las categorías que legitiman tal disposición. Teniendo en cuenta que dichos esfuerzos de separación son realmente posibles, he podido caracterizar no sólo la

singularidad de la política que conocí en 2015 durante mi trabajo de campo, sino también la de esfuerzos análogos emprendidos en el pasado y en los cuales mis interlocutores pretendían cifrar un criterio para el ejercicio de su propia “autonomía” en el tiempo presente.

Los abordajes que acabo de revisar expresan un intenso énfasis analítico en el vaciamiento inmanente de los regímenes de poder y representación. Este énfasis será retomado a lo largo de la tesis en distintos escenarios donde lo posible surge como un esfuerzo práctico-intelectivo que se relaciona con lo dado desde una apuesta por su transformación. Considerando que un esfuerzo de esa naturaleza es siempre inmanente a la coyuntura que ese mismo esfuerzo subjetiva y vuelve inteligible, mi argumento también se abocará sobre aquello que, frente a lo posible, emerge como su condición de imposibilidad – es decir, como aquello que una política tensiona para inaugurar su propio campo de devenir. La condición de imposibilidad de lo posible se materializa en los mecanismos institucionales que tienden a reducir su valor operatorio a un grado mínimo, negándole una existencia eficaz. En Bella Unión, estos mecanismos estaban directamente asociados con el afianzamiento de una política estatal de desarrollo que ha respondido selectivamente a las reiteradas exigencias de bienestar social esgrimidas por el movimiento popular de los cortadores de caña.

4. Antropologías del desarrollo: entre la agencia y la máquina anti-política

En diálogo con diferentes paradigmas teóricos, las antropologías del desarrollo proporcionaron descripciones y definiciones analíticamente muy útiles a la hora de abordar las dinámicas institucionales que moldearían su objeto de estudio. Aunque en esta tesis el desarrollo será pensando, principalmente, desde sus desbordes, no puedo ignorar un conjunto de abordajes que favorece el relato de aquellos procesos institucionales que transcurren justamente cuando “el desarrollo” se objetifica al máximo, es decir, cuando su *modus operandi* no parece inducir otra tendencia que no sea la reproducción de las estructuras dadas, por más maleables que sean. De modo general, y pese a sus diferencias de enfoque, podríamos decir que las antropologías del desarrollo toman a su objeto como la instauración más o menos vertical y mediada de un orden de cosas específico, orientado a la consecución institucionalizada de una cierta cantidad de cambios sociales que se consideran pertinentes para determinado contexto. A continuación revisaré brevemente algunas perspectivas contemporáneas en antropología del desarrollo cuyas herramientas

analíticas ayudan a definir cómo, en ciertos lugares y momentos, puede llegar plantearse y efectivizarse un ordenamiento productivo y funcional del *socius*.

Una parte significativa de los enfoques contemporáneos en antropología del desarrollo parece distribuirse entre dos grandes tendencias teórico-políticas y metodológicas: una de ellas está críticamente comprometida con el perfeccionamiento de las dinámicas sociales que constituyen su objeto de estudio, mientras que la otra tiende a cuestionarlas con más vehemencia, llegando inclusive a especular sobre el posible advenimiento de una era “pos-desarrollo”¹⁶. Desde el inicio de los años noventa, diversos antropólogos europeos se esforzaron en inventariar los presupuestos epistemológicos y las elecciones metodológicas de un tipo de antropología del desarrollo que reivindicaba el trabajo de campo y la observación participante como sus fuentes principales de referencia empírica. A partir de entonces, la búsqueda de articulaciones locales entre “lógicas sociales” heterogéneas y el énfasis en los “actores” y sus prácticas cotidianas se convirtieron en los emblemas de una antropología que pretendía distanciarse de las famosas críticas que Arturo Escobar (2007) y James Ferguson (1994) habían tejido al discurso del desarrollo y sus expresiones institucionalizadas.

Thomas Bierschenk (2008) reseñó las preocupaciones teóricas y las categorías analíticas de la antropología del desarrollo de “estilo europeo”, intentando contrastarlas con los abordajes que denominó “neodependentistas”¹⁷. Estos últimos, de origen estadounidense, encontrarían sus referencias fundamentales en los trabajos de Ferguson y Escobar. Su propuesta sería presentar el discurso del desarrollo como la expresión de un proceso de poder burocratizante en el marco del cual las voliciones y necesidades cultivadas por las poblaciones del Tercer Mundo terminarían irremediabilmente ignoradas. Según Bierschenk la antropología del desarrollo europea, a diferencia de sus congéneres estadounidenses, estaría más preocupada con las prácticas sociales y la experiencia cotidiana de los actores e instituciones involucrados con las políticas de desarrollo. Desde el punto de vista profesional, sus actuales formuladores – Olivier de Sardan (1995),

¹⁶ Aquí no se trata de hacer una revisión bibliográfica de los estudios antropológicos sobre “desarrollo”. Semejante tarea fue realizada en forma exhaustiva por David Mosse (2013) y sigue muy actual en sus líneas generales. Como veremos, mi propósito es aislar las dos principales orientaciones que balizan el campo de la antropología del desarrollo. La revisión bibliográfica de Mosse expone las zonas de transición e intersección entre ambas que, en este apartado, serán problematizadas únicamente desde sus expresiones fundacionales.

¹⁷ Bierschenk se refiere con cierta ironía a las obras de James Ferguson y Arturo Escobar como “neodependentistas”. Este término no sugiere cualquier adhesión de ambos autores a las teorías de la dependencia de los años 1960 y 1970, sino su presunta inclinación a construir dicotomías absolutas entre los intereses de los agentes del desarrollo internacional y los de las poblaciones afectadas localmente por los proyectos de intervención.

Norman Long (1994), David Lewis y David Mosse (2006), entre otros – postulan un compromiso crítico con la práctica, circulando permanentemente entre el campo de las intervenciones desarrollistas y el mundo de la reflexión académica.

Siguiendo un modelo semejante al de Bierschenk, Alberto Arce y Norman Long (2000) oponen los “académicos del discurso” al programa intelectual emprendido por las “investigaciones orientadas a los actores”. Mientras que los primeros preconizarían el entendimiento de “cómo la ciencia y los modelos de desarrollo occidentales inscriben, disciplinan y transforman formas de conocimiento enraizadas en otras tradiciones culturales”, las segundas enfatizan “las configuraciones diversas y discontinuas de conocimiento que encontramos en arenas de desarrollo específicas” (Arce y Long, 2000: 24). Para los abordajes orientados a los actores, el desarrollo sería una situación de confluencia de expectativas e intereses heterogéneos que origina un espacio de “realidades contestadas” “en el cual las luchas en torno a valores, recursos e imágenes constituyen el campo de batalla entre diferentes actores y sus mundos de vida (*life-worlds*)” (ibid.).

Arce y Long (2000) proponen algunas categorías heurísticas que consideran útiles para describir los procesos transformacionales y las situaciones de encuentro, mediación, traducción y negociación que caracterizarían las “realidades contestadas” del desarrollo. La noción de “contra-desarrollo”, por ejemplo, hace referencia al hecho de que la agencia de los actores locales puede generar encajes y desencajes entre los factores políticos y sociales existentes, imprimiendo desvíos inesperados a los proyectos de desarrollo. Formulada originalmente por Benno Galjart (1981), este concepto busca explicar las acciones estratégicas que contrarían tendencias dominantes y que expresan la capacidad de las personas de mezclar y moldear los elementos que emergen en el influjo de la diseminación de las técnicas de modernidad. Otra noción, la de “superficie de contacto”, proviene de la obra de Marilyn Strathern (1991) y se refiere a la variedad de interacciones que pueden establecerse entre los componentes en juego en una determinada situación, originando eventualmente configuraciones inesperadas. Finalmente, la idea de *counterpoint values* – que me siento tentado a traducir libremente como “valores contrapuntuales” –, acuñada por Wim Wertheim (1965), sirve para identificar ciertas tendencias que, en el futuro, podrían venir a desestabilizar las estructuras y jerarquías establecidas, inaugurando nuevas formas de relación entre las personas. En conjunto, las ideas de “contra desarrollo”, “superficies de contacto” y “valores contrapuntuales” ayudarían a los investigadores a priorizar las prácticas de los actores y a evitar tanto las presentaciones funcionalistas de los conflictos

sociales, como las perspectivas que sobrevaloran la homogeneidad de los grupos y el poder de las jerarquías.

A su vez, Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995, 2001) propone una antropología del desarrollo basada en la imbricación (*enchevêtrement*) de las lógicas sociales. A diferencia de los abordajes “discursivistas” – inclinados, según el autor, a reducir “la configuración desarrollista a una narrativa hegemónica occidental” (de Sardan, 2001:735) –, su enfoque prioriza las expresiones concretas de los saberes populares y los discursos de desarrollo. Enfatizar la imbricación de lógicas sociales implicaría analizar tanto la pragmática de las instituciones como la de los individuos, prestando atención a la manera en que estos últimos se apropian de las estrategias de dominación externas, imprimiéndoles procesos de “torsión” e “informalización” (de Sardan, 2001:741). En convergencia con de Sardan, David Lewis y David Mosse (2006) evalúan que la operatividad concreta del aparato desarrollista está condicionada por su interacción “con una serie de otros órdenes, fuerzas y químicas” (Mitchell, 2002: 51 *apud* Lewis y Mosse: 2006). Siendo así, Mosse (2004) considera fundamental analizar cómo los miembros del *staff* desarrollista y sus beneficiarios articulan de forma heterogénea sus propósitos y sus demandas en torno a las ideas ofrecidas por una política de desarrollo, agenciándolas y traduciéndolas de acuerdo a dos líneas de acción diferenciadas: una de ellas de tipo normativo y, otra, marcada por la intervención de intereses que no responden necesariamente a los propósitos de los discursos oficiales.

Las orientaciones conceptuales y metodológicas aportadas por las antropologías del desarrollo de “estilo europeo” – u “orientadas a los actores” – permiten identificar en la intervención desarrollista desencadenada en Bella Unión una confluencia potencialmente conflictiva de intereses heterogéneos en la cual se juegan apuestas distintas pero mediables. En esta tesis, dichas coordenadas teóricas servirán para pensar las dinámicas de selección y sutura que hacen converger expectativas diversas en una misma coyuntura de (des)encuentro con el desarrollo. Sin embargo, el análisis de cómo las personas interactúan y establecen mediaciones y consensos transitorios a partir de lógicas sociales plurívocas y superpuestas no debe conducir a una cosificación de las modalidades de interacción que me propongo abordar. Aquí, las dinámicas de mediación son siempre atributos del orden social en el cual suceden, y no categorías universales del análisis socio-antropológico. Siendo así, la pregunta sobre cómo las personas convergen y se entremezclan, produciendo superficies de contacto muy específicas, no es más importante que una problemática orientada a la ruptura del lazo social, la separación y la sustracción a las formas de

interacción preexistentes. En suma, la constatación de que en determinado contexto las relaciones sociales están condicionadas por márgenes más o menos amplios de agencia no excluye la necesidad de indagar en los límites de dichas relaciones y, por tanto, sobre los contornos del orden social que ellas sedimentan. Si consideramos actores y relaciones sin preguntarnos sobre el orden que los singulariza, corremos el riesgo de caer en el empirismo acrítico. Escobar y Ferguson intentan evitar ese riesgo presentando las consecuencias sociales derivadas de la movilización institucional de la categoría “desarrollo” en términos de “efectos de poder” contingentes e historizables. *Grosso modo*, ambos autores pretendieron contribuir a la disolución del aura de neutralidad política que envuelve el “desarrollo”, de manera que fuera posible rastrear sus consecuencias como régimen discursivo anclado en instituciones sociales concretas cuya operatoria beneficiaría, en cada lugar y momento, estrategias específicas de ejercicio del poder.

A lo largo de *La invención del Tercer Mundo*, Escobar (2007) se esfuerza en demostrar que la oposición entre desarrollo y subdesarrollo está anclada en un relato occidental que organiza y jerarquiza la diversidad del mundo, definiendo un conjunto de alteridades problemáticas que, desde fines de los años 1940, se volverían objeto privilegiado de intervención y reforma. Su propuesta emerge en un ambiente crítico¹⁸ en el cual se sostiene que los criterios operacionales y las justificaciones políticas que informaron sucesivos paradigmas desarrollistas desde los años cincuenta hasta el presente son indisociables de la *episteme* moderna. Las formas de conocer promovidas desde el frente modernizador ostentarían una fe inquebrantable en las soluciones técnicas aportadas por la ciencia y una tendencia positivista que desvincula hechos y valores a la hora de establecer soluciones racionales adecuadas. Asimismo, operarían una escisión en la economía, promoviéndola como parámetro de regulación social en desmedro de otras esferas de la vida colectiva¹⁹. Inscrita en la *episteme* moderna, la pretensión desarrollista se convirtió, gracias al respaldo de instituciones poderosas y bien capitalizadas, en un eficaz

¹⁸ Diversas perspectivas asociadas al análisis posestructuralista y deconstructivista del desarrollo fueron condensadas en el *Diccionario del desarrollo* editado por Wolfgang Sachs (1996 [1992]). Más recientemente, Guilherme Radomsky (2011) realizó un balance de la crítica posestructuralista del desarrollo, mapeando sus prolongamientos recientes y su dimensión propositiva en términos políticos.

¹⁹ Estas constataciones no son exactamente una novedad en el campo de los estudios del desarrollo. Robertson (1984) ya había realizado descripciones bastante precisas y generalizables respecto de las motivaciones intrínsecas a las prácticas de planificación económica, ordenamiento poblacional y control científico de los procesos sociales y naturales. En la misma época en que Escobar y Ferguson escribían sus obras más conocidas, otros autores, como Scott (1998), Cowen y Shenton (1996) y Rist (1996), también realizaban densas investigaciones sobre las genealogías del desarrollo. La contribución de los llamados posestructuralistas fue haber indicado cómo esas lógicas de control social y ejercicio del poder se extendieron a las periferias del sistema-mundo, fijando representaciones específicas sobre ellas y definiendo sus relaciones con los proyectos políticos hegemónicos a escala nacional e internacional.

instrumento de normalización, capaz de producir el Tercer Mundo (América Latina, Asia y África) como objeto de poder en términos económicos, culturales y sociales.

En tanto régimen de representación, el desarrollo abarca prácticas institucionales y discursivas orientadas a la instalación de lugares de poder a partir de los cuales algunos sujetos estarían en condiciones de enunciar legítimamente el presente y el futuro de la sociedad, bien como los procedimientos necesarios para transitar de uno a otro. La consolidación de esta jerarquía se amparó en modos de conocer y reestructurar la realidad que encontraban sus parámetros y objetivos en los sistemas productivos, en las formas de intercambio y en los estilos de vida característicos del así llamado Primer Mundo. Este cuadro conduce a Escobar a entender que

El desarrollo supone una teleología en la medida en que propone que los “nativos” serán reformados tarde o temprano. Sin embargo, al mismo tiempo, reproduce sin cesar la separación entre los reformadores y los reformados, manteniendo viva la premisa del Tercer Mundo como diferente e inferior, y de sus pobladores como poseedores de una humanidad limitada en relación con el europeo culto (Escobar, 2007: 100).

La perspectiva de Escobar coincide en varios aspectos con la de Ferguson, para quien, “al igual que ‘civilización’ en el siglo XIX, ‘desarrollo’ es el término que describe no sólo un valor, sino también un marco interpretativo y problemático a través del cual conocemos las regiones empobrecidas del mundo” (Ferguson, 1994:13). En *The Anti-Politics Machine*, Ferguson analiza un proyecto de desarrollo rural de los años 1980 destinado a volver más eficiente la producción campesina de ganado en Thaba-Tseka, una remota región de Lesotho. Según el autor, la industria del desarrollo, amparada por poderosas agencias financiadoras, produjo consecuencias locales que no se resumían únicamente a la expansión del capitalismo o a la subordinación de los modos de vida de las poblaciones rurales. Para comprender con claridad sus consecuencias, Ferguson propone dejar de lado la pregunta sobre si los proyectos de desarrollo cumplen o no sus objetivos declarados para, en vez de eso, analizar qué hacen las intervenciones desarrollistas concretas. O sea: qué funciones desempeñan en un lugar determinado.

El proyecto de desarrollo analizado por Ferguson ambicionaba la modernización de la cría de ganado en la región de Thaba-Tseka a través del ofrecimiento de apoyo técnico a los pequeños productores locales y de la construcción de una infraestructura que permitiera la exportación de productos o su comercialización en el mercado interno. Estas metas partían del presupuesto de que Lesotho era el país menos desarrollado del mundo y de que su matriz económica reproducía patrones ancestrales de organización del trabajo y manejo de la tierra. Ferguson contradice estas premisas situando Lesotho en su contexto regional y

demostrando que la principal fuente de renta de los beneficiarios del “proyecto Thaba-Tseka” era el trabajo asalariado en las minas del vecino territorio sudafricano, y no la actividad pecuaria, que jugaba un papel subsidiario en la economía de la zona. La compra y la cría de animales eran costeadas con el dinero proveniente del trabajo asalariado en Sudáfrica y el ganado representaba una especie de reserva económica que podría complementar la renta de las familias de clase trabajadora cuando las circunstancias así lo exigieran, permitiéndoles enfrentar la eventual escasez de puestos de trabajo, la jubilación y el desempleo. De acuerdo con el autor, el desconocimiento de estas prácticas económicas por parte de las agencias financiadoras hizo que las obras proporcionadas por el proyecto de desarrollo no surtieran el efecto inicialmente esperado. La construcción de rutas, por ejemplo, no dinamizó la exportación o la venta interna de ganado, sino que por el contrario facilitó e incrementó su importación y subsecuente retención como parte del patrimonio de las familias de trabajadores.

Ferguson propone que las medidas desarrollistas multiplican “efectos secundarios” (*side effects*) que exceden la capacidad de previsión de las agencias planificadoras – en este caso, el Banco Mundial y sus socios locales. Tales efectos se reflejarían tanto en la despolitización de los grandes debates públicos como en la estatización y la gubernamentalización de la vida social, ambas tendencias evidenciadas por el incremento de las estructuras logísticas y administrativas de un Estado oligárquico y burocratizado. Por lo tanto, para Ferguson, el desarrollo asume el aspecto de una verdadera “máquina antipolítica”, haciendo que decisiones esencialmente políticas suenen como soluciones técnicas para problemas técnicos. Esta dinámica funcionaría en beneficio de la reproducción de las estructuras institucionales de la misma industria del desarrollo, en sinergia con el mantenimiento de las relaciones desiguales de poder observadas en los respectivos sitios de intervención.

Aun cuando mi análisis del (des)encuentro con el desarrollo en Bella Unión sea ampliamente compatible con los enfoques de Escobar y Ferguson – e inclusive presuponga sus *insights*–, evitaré incurrir en una narrativa del poder que se exima de señalar las inconsistencias inherentes a su operatoria. Sin dudas, el desarrollo posee una dimensión antipolítica en tanto multiplica un sinnúmero de “efectos secundarios” que pueden llegar a tener poca o ninguna relación con las aspiraciones de sus beneficiarios. Sin embargo, tal como veremos en esta tesis, la puesta en marcha de un cambio socio-económico planificado y pretendidamente vertical también se despliega más allá de sus consecuencias estructurales inmediatas o de sus instrumentalizaciones secundarias. Además de reproducir

un conjunto visible de efectos de poder cuya coherencia puede ser deducida mediante la investigación social, el desarrollo también estimula una producción deseante que no se dirige necesariamente en la frustración de sus beneficiarios. Esto quiere decir que en el seno de una intervención desarrollista pueden avivarse nuevas imágenes del devenir colectivo que son irreductibles a los regímenes de representación y gobierno que esa misma intervención se proponía afianzar. Siendo así, mi análisis crítico de la reactivación de la industria azucarera de Bella Unión no pasa exactamente por confrontar sus lógicas estructurantes con el señalamiento normativo de sus deficiencias políticas. El carácter mutable y, más aún, la superación posible de las modalidades de desarrollo productivo experimentadas en el norte uruguayo serán buscados en el pensamiento político de quienes pretendieron desafiarlas desde sus propios esfuerzos de organización colectiva.

5. Itinerario de la tesis

La tesis está dividida en tres partes. Cada una es sucedida por una secuencia fotográfica en la cual mi discurso se prolonga por otros medios, cargándose literalmente de nuevas imágenes que el/la lector/a está invitado/a explorar independientemente del orden original, aunque lo más recomendable es “leerlas” en conjunto, asociándolas entre sí. Todas las fotografías fueron tomadas en Bella Unión entre los años de 2013 y 2015, mientras desarrollaba mis actividades de trabajo de campo. Las imágenes que componen cada secuencia no están asociadas con títulos o leyendas explicativas, dado que su uso no pretende ilustrar hechos específicos o corroborar directamente algún aspecto de mi argumento, sino más bien generar un ambiente estético compatible con el texto que las precede. Siendo así, estas fotografías no cumplen individualmente una función ilustrativa. Su poder evocativo sólo emerge de una puesta en escena conjunta, potencialmente abierta a muchas lecturas, siempre condicionadas, claro está, por la materialidad misma de la imagen, lábil e impositiva a la vez. La proliferación de escenas desgarradas de toda contextualización discursiva pretende inducir una relación especulativa con lo concreto-enigmático de la imagen. Como veremos, este tipo de relación se encuentra en la base misma de ciertas experiencias políticas cuyo análisis desempeña un rol central en esta tesis. Al inicio los capítulos también se encontrarán fotografías liberadas de cualquier contextualización, pero en estos casos ellas constituyen algo así como epígrafes imagéticas que el texto subsiguiente tiende a cargar de sentido. Sólo las fotos que cumplen fines ilustrativos específicos, reforzando o dramatizando el contenido del análisis, vienen acompañadas de leyendas. En algunos capítulos el/la lector/a encontrará cuadros donde

elaboro reflexiones de orden más hipotético o especulativo. No se trata, por lo tanto, de un discurso analítico, pero sí de intuiciones que podrían reforzar el sentido de mi argumento, aun cuando éste no las valide directamente y prescindiera de ellas para desarrollarse. Antes de introducir el contenido de cada capítulo, una última observación: los nombres de todos mis interlocutores son ficticios. Algunas de las personas que conocí en Bella Unión también colaboraron con la investigación que Silvina Merenson realizó en la ciudad a mediados de los años 2000. En estos casos, utilicé los mismos nombres ficticios empleados en sus trabajos, lo que no deja de tener un valor teórico interesante. La preservación de los nombres permite seguir la participación de un mismo individuo en múltiples procesos de subjetivación política que lo enfrentan, en diferentes momentos, a nuevos mundos de posibles.

Los tres primeros capítulos refuerzan el carácter singular de diversos “modos de la política” que emergieron en Bella Unión desde la década de los ‘60 hasta el año 2006, cuando la UTAA y otras organizaciones populares decidieron ocupar tierras del Estado durante el primer gobierno del Frente Amplio. La secuencia que va del capítulo 4 hasta el capítulo 6 discute, por un lado, la interrupción del ciclo de luchas que culminó con la ocupación de tierras de 2006 y, por otro lado, la incorporación de los protagonistas de esas luchas en un nuevo diagrama institucional que se propuso conectar las demandas agrarias de los cortadores de caña con los objetivos estratégicos del nuevo complejo agroindustrial instalado por el gobierno progresista en Bella Unión. Los dos capítulos finales abordan lo que denomino “una crítica inmanente” al complejo agroindustrial de Bella Unión. Me refiero al relanzamiento del trabajo de la política como un proceso que afirma, desde el interior del diagrama desarrollista patrocinado por el Estado, aquellas posibilidades que este mismo diagrama necesitaba negar en razón de su propia lógica de funcionamiento. Política, gestión y, nuevamente, política: esta es la dialéctica general que la disposición de los capítulos pretende enfatizar.

Puntualmente, el capítulo 1 (*Rastros y fantasmas*) introduce situaciones, relatos y figuras narrativas que nos permiten entender la política autonómica como un esfuerzo disruptivo en el presente que se vale del recuerdo fragmentario de procesos análogos ocurridos en otros tiempos. Estos recuerdos identifican en el pasado ciertas formas de proceder, o “cambios de actitud”, cuya actualización se concibe como lícita y deseable en el presente. Dicha conceptualización permite discutir cómo una “experiencia política del pasado” podría confluir no sólo en la generación de nuevos posibles, sino también en la

proyección de una matriz de lectura susceptible de informar el análisis de viejas prácticas de lucha popular.

El capítulo 2 (*Pensar políticamente las políticas pasadas*) reflexiona sobre la posibilidad de pensar políticas pretéritas a la luz de las hipótesis de quienes las recuerdan en el seno de nuevas luchas colectivas. Este procedimiento no se realiza bajo la forma de un ejercicio historiográfico, sino más bien a través de la recolección de algunas palabras, escenas y fragmentos derivados de fuentes primarias y secundarias que resplandecieron ante mis ojos en la medida en que portaban lo que mis interlocutores escrutaban en el pasado, a saber: el indicio de alguna ruptura radical del cotidiano. El capítulo presenta algunas secuencias políticas engendradas por el movimiento popular bellaunionense entre 1961, año de fundación de la UTAA, y 1972, cuando el sindicato fue clausurado por los militares, pocos meses antes del golpe de Estado de 1973. Cada una de estas secuencias estuvo caracterizada por un conjunto específico de prescripciones – o sea, de posibles disruptivos – que, una vez cristalizado en palabras y nombres muy específicos, se donaron a la fabulación política de las futuras generaciones.

El capítulo 3 (*Políticas después del terror*) se propone recuperar el devenir de las políticas autonómicas en un momento histórico marcado por la crisis de las agroindustrias de Bella Unión y la estigmatización del léxico combativo de las décadas precedentes. Mi relato evidencia que, entre 1985 y 2006, la fidelidad de algunos cortadores de caña a las apuestas colectivas de otrora se manifestó en un reiterado esfuerzo político por conformar procesos activos de subjetivación en medio de la fuerte heteronomía impuesta por la liberalización de los mercados y la generalización de la pobreza. Dichos esfuerzos se desplegaron en dos secuencias políticas consecutivas. La primera condujo a la reorganización de la UTAA como un sindicato de “quienes de las arreglan como pueden”. A su vez, la segunda secuencia intervino directamente en los planes de desarrollo del primer gobierno frenteamplista, oponiéndoles una agenda política *sui generis* que apuntaba a la democratización del acceso a la tierra. El choque entre esta última secuencia política y la estrategia de desarrollo planteada por el gobierno es tomado como una oportunidad para abordar empíricamente la dialéctica entre la presentación autonómica de una política y su interpelación desde lo que denomino “equipamiento colectivo de deseo”.

El capítulo 4 (*Equipamiento colectivo de deseo*) demuestra que hacia el año 2007 las ganas de “vivir mejor” nutridas en el seno del movimiento popular bellaunionense pasaron a ser gobernadas en consonancia con los objetivos del desarrollo agroindustrial postulado por el gobierno frenteamplista. Se configuraron, entonces, intrincados

mecanismos de “equipamiento colectivo de deseo” destinados a promocionar el acceso a la tierra entre los trabajadores rurales en reciprocidad con las necesidades de la agroindustria. Los criterios ideológicos subyacentes al equipamiento colectivo de deseo son contextualizados en el marco de ciertas transiciones políticas que, desde inicios de los años 2000, han llevado a los sectores mayoritarios del Frente Amplio a concebir el desarrollo de la sociedad en simbiosis con la promoción de criterios de eficiencia y productividad deducidos del buen funcionamiento de los mercados.

El capítulo 5 (*El deseo acomplexado*) analiza el sistema de crédito que permitió la conversión de algunos trabajadores rurales provenientes de la UTAA en sujetos aptos para el desarrollo del complejo agroindustrial nucleado por la empresa ALUR. Dicho sistema de crédito contempló parcialmente las demandas de bienestar nutridas en el contexto del sindicato a la vez que determinó ampliamente las actividades productivas a las cuales su militancia debería adherir, afianzando así una política agraria indisociable del endeudamiento y el monocultivo cañero. Estas formas de acceso a la tierra han generado en sus beneficiarios una sensación de angustia y de frustración derivada de la percepción de un desfase entre las apuestas colectivas que los movilizaron antaño y las respuestas institucionales que pretendían dirimirlas en la estructura productiva del CSA. Angustia y frustración son tomadas como índices de una inconsistencia inmanente al equipamiento colectivo de deseo que pueden transmutarse en la enunciación de nuevos campos de posibles.

El capítulo 6 (*Vivir el complejo. Delirarlo.*) evidencia de qué formas el deseo de los sujetos pudo sustraerse a la frustración impuesta por los objetos de satisfacción promocionados en el complejo agroindustrial. Al analizar cómo los miembros de un establecimiento productivo subordinado al CSA problematizaban su propia inadecuación a los imperativos de la industria, mi objetivo es demostrar que en la misma articulación entre cuerpos, territorios y recursos financieros reivindicada en pro del éxito de una estrategia de desarrollo productivo también se van produciendo vislumbres y experimentaciones fugaces de otras modalidades de acceso a la tierra y organización del trabajo. El acto de extrañarse de los compromisos productivos que deberían mediar la satisfacción personal de los productores agrícolas subordinados a ALUR es conceptualizado como una “disfunción delirante del deseo” que, de no ser “olvidada”, puede informar el relanzamiento de una política autonómica.

El capítulo 7 (*Política de “lucha”*) analiza cómo las categorías de la política enunciadas por los nuevos dirigentes de la UTAA hacia mediados de 2015 se han vuelto

solidarias con el “delirio” que algunos pequeños productores han experimentado en los territorios del CSA. La comisión directiva de la UTAA definió su política en contraste con la “gestión”, prescribiendo a sus bases sociales la posibilidad de plantear la realización de ciertas necesidades colectivas en tensión con las disposiciones administrativas de la “burocracia” gubernamental. En el frente de lucha agraria, esta prescripción se propuso hacer justicia a los delirios traídos de las colonias agrícolas subordinadas a ALUR, incluyéndolos en la agenda política de una “reforma agraria” que se sustraía irremediabilmente a la estructura productiva del CSA. La inscripción de la “reforma agraria” en el campo de la “lucha” es analizada como la efectuación dialéctica de la potencia política inherente al devenir desreglado – esto es, delirante – del deseo social.

El capítulo 8 (*Proyecto menor*) relata cómo las prescripciones de “lucha” determinaron la inauguración de un proceso muy específico de reivindicación agraria. Dicho proceso se desplegó en dos etapas cuyo análisis me permite discutir las condiciones de posibilidad para la realización de la autonomía política planteada por los dirigentes de la UTAA en 2015. La primera etapa consistió en inventar colectivamente los criterios rectores de una “reforma agraria real y generosa”, ajena a las subordinaciones del CSA y sometida a la capacidad de planificación de sus propios beneficiarios. A su vez, la segunda etapa implicó dar visibilidad pública a la agenda política formulada en el sindicato mediante diversas estrategias de movilización que incluyeron una ocupación de tierras fiscales. Ambas situaciones describen el trazado de una autonomía que, si bien debió buscar en el Estado los recursos necesarios para su despliegue, también pudo trascender en los hechos la lógica operativa del CSA. Este capítulo trae códigos de rápida respuesta (códigos QR) que dan acceso a algunos videos que produje junto a mis interlocutores. Los códigos pueden leerse con diversos dispositivos digitales, pero el contenido al que remiten no es esencial para la comprensión del relato etnográfico.

Las palabras finales sintetizan los tres momentos clave de la dialéctica que esta tesis se propone recuperar y recorrer, a saber: la emergencia autonómica de la política, el equipamiento circunstancial del deseo colectivo y, finalmente, la reinención de la autonomía en tensión con el entramado institucional que pretendía condicionarla. Describo aquí cómo este último esfuerzo colectivo, identificado en la política impulsada por la Comisión de Tierras de la UTAA en 2015, expiró en medio de contingencias diversas, haciendo que “lucha” se diluyera en su opuesto, es decir: “gestión”. Esta situación me lleva a tejer algunas reflexiones sobre el carácter fugaz de las políticas basadas en

prescripciones, ponderando sobre la relevancia crítica de asegurar, teórico-metodológicamente, el registro y la enunciación de su existencia.

Mapa

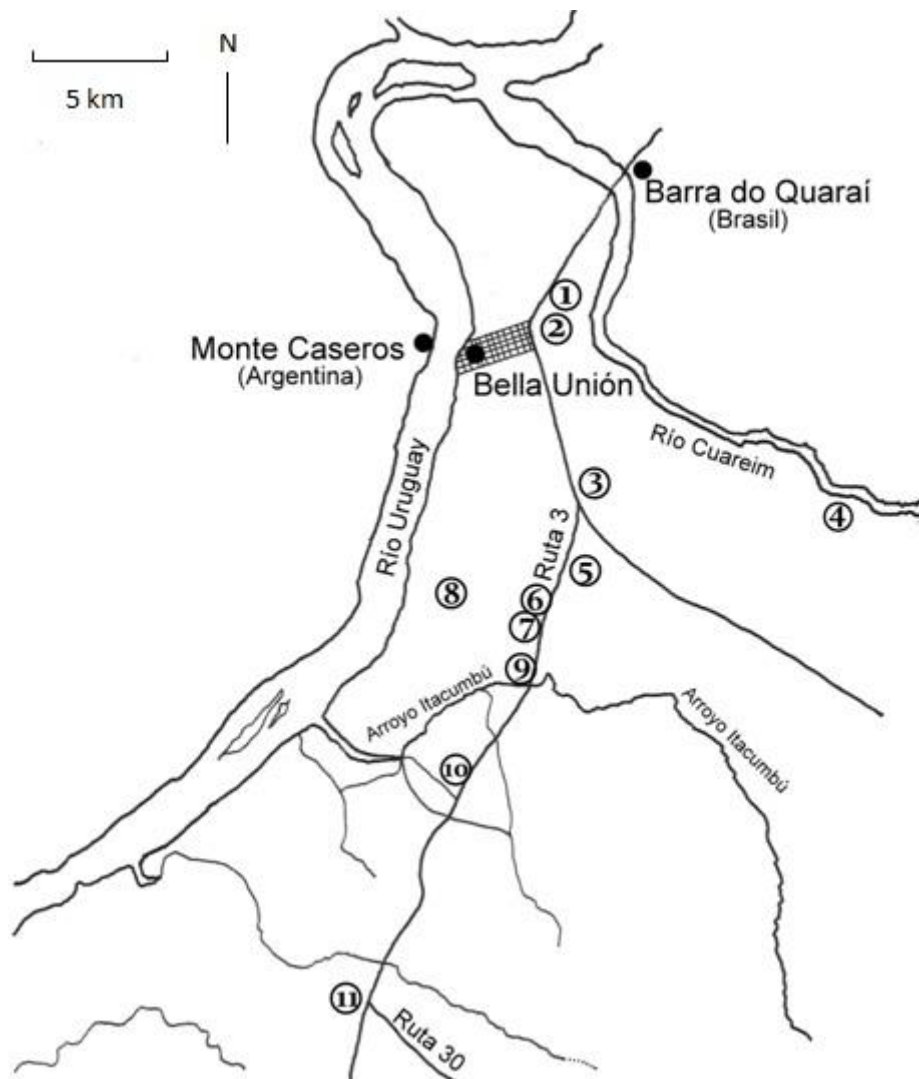


Ilustración 1: Lugares remarcables para esta investigación

- 1- Local de UTAA
- 2 - Asentamiento popular, barrio Tres Fronteras
- 3 - Green Frozen
- 4 - Pay Paso
- 5 - Campo Placeres
- 6 - Ocupación de tierras de 2015
- 7 - Ocupación de tierras de 2006 (Chacra 15 de Enero)
- 8 - Ingenio de ALUR
- 9 - Campamento del Arroyo Itacumbú, 1961
- 10 - CAINSA
- 11 - Colonia Raúl Sendic Antonaccio

Capítulo 1

Rastros y fantasmas

Hay cosas que dejan su rastro, un fantasma detrás de ellas. Una marca en la naturaleza.

Lagarto

No hay más que presentes dispares cuyo resplandor se mide por la potencia que tienen de desplegar un pasado que sea a medida de ellos.

Alain Badiou, Condiciones



1.1 Rastros

Mientras paseábamos por el cañaveral, en agosto de 2015, Lagarto decidió contarme una historia extraña que comenzaba más o menos así: “mi hermano y yo ya habíamos cenado y estábamos tomando café cerca de la estufa, allá en los alojamientos de Pay Paso. Nos acompañaba mi sobrino, que estaba de visita en aquellos días. Recién habíamos cerrado un acuerdo con un criador de vacas de la zona, para engordar su ganado en nuestros campos. Manteníamos los animales en un corral muy frágil y nos daba miedo que se escaparan durante la noche y terminaran carneados en la barranca del río”. El miedo de perder las vacas mantenía a Lagarto y sus compañeros en estado de alerta constante, siempre atentos a los ruidos que venían del exterior del alojamiento. Un poco antes de dormir, oyeron algo sospechoso. Era como si algunos animales, quizás una tropa de

ganado, estuviesen desplazándose cerca de la casa. Lagarto buscó la linterna, abrió la puerta que daba al patio y dirigió el haz de luz hacia la oscuridad. El sobrino se rio de su expresión de desconcierto cuando, de vuelta al alojamiento, Lagarto contó, un poco nervioso, que los animales continuaban donde deberían estar y todo seguía absolutamente normal. Todo, menos aquel ruido insondable que volvió a repetirse durante toda la noche. Algunas semanas después, Lagarto compartió esta historia con un peón de estancia conocido suyo. Después de escucharlo, el peón emitió su veredicto: “la naturaleza es así”. Y agregó: “algunas cosas que pasan siguen grabadas en la naturaleza. Aquello que ustedes escucharon era el rastro de una tropa de bueyes que pasó por allí hace mucho tiempo”. Estas explicaciones permitieron que Lagarto entendiera con más claridad y serenidad otro acontecimiento inusual, presenciado el último verano, cuando estaba pasando algunos días en la estancia donde trabajaba un amigo.

Cierta noche de luna llena y temperatura agradable, él y su anfitrión decidieron agarrar un bote y salir a pescar. A medianoche, ambos se deslizaban tranquilamente por el Cuareim en dirección al norte. Navegaban junto a la orilla brasileña y observaban el matorral de las barrancas, inmerso en una luz pálida. De repente, comenzaron a oír, muy a lo lejos, el galopar de un caballo que parecía dirigirse rumbo al margen del río. El galope, sofocado por el pasto denso, se iba haciendo cada vez más nítido y cercano. Sospecharon que estaban siendo vigilados de cerca por el capataz de alguna hacienda brasilera. Por las dudas, decidieron mantener la ruta del barco y aparentar tranquilidad. El galope fue interrumpido súbitamente por un estruendo de agua. Ahora, el animal se movía dentro del río. Su respiración jadeante era audible. Sin embargo, iluminada por la luz de la luna, la superficie del Cuareim fluía absurdamente uniforme. Una breve ráfaga de metralla rasgó el silencio nocturno. Le siguieron otras dos ráfagas, más prolongadas. El caballo, siempre invisible, continuaba atravesando el río, alejándose de los dos pescadores. La ametralladora volvió a sonar con insistencia. Lagarto no se inmutó, pero su amigo ya empezaba a desesperarse. Comenzaron a bajar el Cuareim de vuelta a la estancia. Esta vez, Lagarto no estaba tan asustado como meses atrás, en Pay Paso. De todas formas, era necesario respetar los temores del amigo: no es fácil, al final, asimilar la idea de que estas “son cosas de la naturaleza”. “Hubo muchas guerras y escaramuzas en esta frontera – reflexionaba Lagarto –, la Guerra del Paraguay, la Guerra Grande, andá a saber... hay cosas que dejan su rastro, un fantasma detrás de ellas. Una marca en la naturaleza”.

Lagarto es uno de los 35 miembros de la Cooperativa Helios Sarthou, que actualmente administra 1.300 hectáreas en la región de Pay Paso, distante unos 30

kilómetros de la ciudad de Bella Unión. Eximio narrador, de sonrisa fácil y porte robusto, este hombre de cuarenta y pocos años de edad recibió tierras del Estado después de un largo proceso de reivindicación agraria impulsado por la UTAA. Sus historias, que cautivaron audiencias en diversas noches de lucha y confraternización, me armaron con un repertorio de imágenes sugerentes que yo no demoraría en actualizar. En noviembre de 2015, en una ocupación de tierras al costado de la Ruta Nacional Número 3, mi diversión nocturna consistía en contar historias de terror a los hijos de los militantes de la UTAA. En esas oportunidades, articulaba las imágenes transmitidas por Lagarto con otras temáticas y artilugios que pudiesen generar aún más espanto en mis víctimas. En lugar de tropas de ganado que dejaban su rastro inexplicable y perenne en el paisaje, prefería evocar un siniestro camión que transitaba por la ruta en noches de luna llena, transportando los cadáveres de un trágico accidente automovilístico ocurrido décadas atrás. Después sugería que el camión en cuestión era el mismo que ahora yacía abandonado cerca de la banquina, cubierto de óxido e invadido por la oscuridad. En ese momento, los gritos agonizantes de algún compañero que se acercaba a hurtadillas al vehículo eran suficientes para provocar la estrepitosa desbandada de mis oyentes.

Pero más allá de sus usos lúdicos, las historias de Lagarto también expresan un movimiento de composición narrativa que metaforiza muy bien las dinámicas de fabulación política sobre las cuales me explayaré en este capítulo. El estudio desarrollado en las próximas páginas se propone analizar cómo algunos rastros del pasado estimulan la autonomía del pensamiento y la acción política en el tiempo presente. Para responder a este objetivo, voy a revisar un conjunto de situaciones en las cuales un pensamiento contemporáneo de la política comienza a realizar su propio proceso intelectual mediante “actos de recordar” capaces de reconocer y acoger en la conciencia a los índices de un pasado extemporáneo y potencialmente activo. En las historias de Lagarto, cuando las “marcas en la naturaleza” irrumpen frente a sus espectadores, éstos se vuelven conscientes de un pasado misterioso, renuente a ser absorbido y pacificado en la sucesión cronológica de los hechos. Un pasado que no sabe que ya quedó atrás. De forma análoga, este capítulo se propone retener, a través de una alianza sinérgica entre la descripción etnográfica y la teoría social, el asombro suscitado por el recuerdo político, es decir, por la acogida en el pensamiento de un pasado alucinante y alucinado, capaz de confrontar a los vivos con intensidades históricas insospechadas.

1.2 El espíritu del viejo y la casa de UTAA

Sandro estaba nervioso aquella noche de setiembre de 2015. Su rostro delataba el cansancio de un día exhaustivo de trabajo y militancia sindical. Desde muy temprano, había estado recorriendo las chacras cañeras para intentar resolver conflictos laborales que irrumpían continuamente en llamadas de celular. Presentarse personalmente en las chacras se había tornado imperativo para él y otros dirigentes de la organización desde que, por divergencias políticas internas, muchos de los delegados sindicales dejaron de asistir a las reuniones semanales de la UTAA, debilitando así la mediación entre el sindicato y sus representados. En plena vorágine de la militancia, Sandro y sus compañeros aún necesitaban encontrar tiempo para cortar caña. A veces, se levantaban con la luna todavía en el cielo, se subían a sus motos y se iban a tratar de “sacar alguna lucha”²⁰ antes de que el celular comenzara a sonar. Pero el nerviosismo de Sandro no era sólo el síntoma de una rutina intensa de movilización laboral y sindical. Tampoco se debía a las fatigas, fiebres y dolores musculares que comenzaban a acometerle violentamente en las últimas semanas. Había otra molestia pendiente. Una molestia innecesaria que debía ser cuestionada y combatida. El cansancio corporal es la regla del fin de la zafra. Cualquier cortador lo sabe y no hay mucho que se pueda hacer al respecto, salvo recurrir al apaciguamiento químico de los analgésicos y, eventualmente, al relajamiento proporcionado por el alcohol. Sin embargo, existen problemas de otra naturaleza que hieren la dignidad de las personas y proyectan una amenaza de penuria colectiva sobre quienes dependen de un salario para subsistir. La peor de las afecciones es la que excluye el cuerpo de las batallas del día a día y lo circunscribe al limbo de la impotencia. Algo así le estaba sucediendo a “la gente de Green”, y eso a Sandro también le dolía.

Desde mediados de 2015, la UTAA se venía solidarizando con la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Green Frozen, dedicada al procesamiento de legumbres y verduras congeladas. A fines de 2014, esas personas habían dejado de recibir sus salarios bajo alegatos de que “no había plata en la caja”. En abril de 2015, los trabajadores decidieron llevar adelante una ocupación permanente de la planta industrial, con el propósito de presionar al gobierno nacional y al propietario de la empresa a que negociaran una salida para el *impasse*, de preferencia a través de la reactivación de la fábrica. A partir de entonces, las únicas respuestas concretas que recibieron del poder

²⁰ Una “lucha” equivale a cinco “surcos”, o líneas, de alrededor de cien metros de caña de azúcar. Si la caña es “buena” un surco puede llegar a rendir más de media tonelada de materia prima. En 2015, el precio que recibía un cortador por cada tonelada de caña cortada era de 263 pesos uruguayos.

público fueron dos intimaciones al desalojo y reiteradas propuestas, por parte del gobierno, para la recalificación profesional mediante cursos gratuitos de capacitación. La más reciente intimación al desalojo había sido entregada en la mañana del 21 de setiembre. Por la noche, nos reunimos en el sindicato para discutir qué hacer al respecto. En aquella ocasión nos acompañaban diversos empleados de la empresa. No era difícil identificarlos: hablaban poco y su expresión delataba el desánimo y la perplejidad. El periplo al cual se lanzaron en abril de 2014 había resultado en más frustraciones que esperanzas. Una larga sucesión de reuniones fracasadas y promesas dudosas parecía confrontarlos con la imagen angustiante de su propia impotencia. Comenzaban a pensar en desocupar la fábrica. Habían asimilado una lección de economía política que, desde mediados de los años '90, resuena periódicamente en Bella Unión: los trabajadores agroindustriales deben ser lo suficientemente flexibles como para acompañar las oscilaciones y reconversiones de la economía local. Ese es su destino.

Green Frozen fue fruto de un proceso de diversificación productiva que, a fines de los '70, buscaba preparar a Bella Unión para la apertura de los mercados regionales y una consecuente reducción de las ventajas competitivas de la caña de azúcar uruguaya. Si algunas décadas atrás los cortadores de caña debieron hacerse cargo de las “externalidades” de la reconversión productiva, en 2015 ese papel les competía a los trabajadores de la industria hortícola en bancarrota. Fueron necesarios diez arduos meses de negociaciones frustradas para que “la gente de Green” finalmente asimilara la necesidad de flexibilizarse y disputar un nuevo lugar al sol en el limitado mercado de trabajo de Bella Unión. Pero persistía entre ellos una profunda incomodidad y la vaga sensación de que las cosas no tenían que ser precisamente así. El imperativo de la flexibilización laboral tendía a transmutar las tímidas esperanzas de la “gente de Green” en melancolía y resignación, mientras que Sandro prefería procesarlas en el registro de la “lucha”. Emilio, otro dirigente de la UTAA, estaba de acuerdo con él. Cuando uno de los funcionarios de Green Frozen sintetizó su frustración entre suspiros, afirmando que “Green ya fue”, Emilio decidió que era el momento de empezar cambiar los términos del diálogo: “también decían que CALNU ya fue, pero quienes deciden son los trabajadores. Están tirando para el lado de ellos, por eso dicen que ya fue”.

A inicios del año 2000, la zafra azucarera duraba apenas tres meses y la extensión del área cultivada con caña de azúcar no excedía de 3.000 hectáreas – en 2015 eran cerca de 8.500. En aquella época, el cierre definitivo del antiguo ingenio local, de propiedad de la Cooperativa Agrícola Limitada del Norte Uruguayo (CALNU), era prácticamente una

cuestión de tiempo y pocos se atrevían a apostar a la recuperación de la economía cañera de Bella Unión. Sin embargo, una década y media después las chimeneas del ingenio seguían escupiendo humo y la caña sobrevivía como una alternativa económica viable. ¿Por qué? Sandro evaluaba que “el humo ese que está ahí”, expuesto a los ojos de cualquiera que transite por la Ruta 3, era la marca indeleble “de la lucha de los trabajadores”. Para él, luchar era una actitud necesaria, y de ninguna forma banal.

Pero la “lucha” exigía una rara disposición subjetiva que no estaba presente todo el tiempo en las personas: había que construirla arduamente por medio del diagnóstico y la politización de los malestares existentes entre los trabajadores. Si la fábrica desactivada de Green Frozen representaba un lugar propicio para la pedagogía institucional de la frustración, entonces la sede de la UTAA se constituía como un espacio destinado al desarrollo de nuevas habilidades y sensibilidades. Para Sandro, el sindicato era el lugar donde se podía cultivar otras disposiciones y pensamientos cuando acechaba la desesperanza: “acá viene gente que no sabe muy bien qué hacer y al rato sale con alguna idea, porque algo del espíritu del viejo queda acá”.

La sede de la UTAA se ubica, actualmente, al sur de Las Piedras, adyacente al barrio Mevir. Ambos barrios son habitados por familias de clase trabajadora que, durante los meses de la zafra, envían a sus hijos y maridos al corte de la caña de azúcar. Buena parte de las residencias de esa zona fue erigida a lo largo de la primera década de los años 2000, en el marco del Movimiento para la Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, que patrocina un sistema de autoconstrucción asistida de viviendas populares. Entre las casas bajas de Mevir y Las Piedras, se yergue un galpón grisáceo con techo de zinc y puertas de aluminio que algunos denominan “la casa de UTAA”. Este local también fue construido por los propios trabajadores rurales, después que la antigua sede del sindicato sufrió un incendio devastador en 2009. En plena zafra el sindicato suele abrir todos los días. Allí se reúnen semanalmente decenas de delegados enviados por las cuadrillas de cortadores de caña. Durante la semana, el local también es visitado por diversos trabajadores rurales en busca de ayuda para conseguir trabajo o asesoramiento en lo concerniente a derechos laborales. Una parte importante de la vida sindical transcurre en la “casa de UTAA”. Todos los procesos significativos de toma de decisiones, así como la elección de nuevos dirigentes, suceden en sus dependencias. Aparte de esto, los afiliados al sindicato y los vecinos del barrio pueden disponer del espacio de la sede para realizar pequeñas celebraciones familiares. El día 21 de setiembre, aniversario del sindicato, se organizan grandes confraternizaciones en el emblemático pabellón de Las Piedras. La cantidad de

comensales presentes en este tradicional festejo funciona como una especie de termómetro de la legitimidad política de los dirigentes de la organización. Cuanto más invitados llegan, más legitimados se sentirán los líderes del sindicato para poblar la casa de Sendic.

Quien traspasa las puertas metálicas del local, después de franquear el umbral de cemento donde las personas se reúnen los días de calor, se encuentra con un ambiente amplio y penumbroso, amoblado con largos bancos de madera, mesas y sillas de plástico. Si el visitante mira a su alrededor, notará que las paredes laterales ostentan cuadros oscuros con fotografías en blanco y negro y paneles de cartón forrados de plástico transparente. Colgadas del techo, al fondo del galpón, sobre el entrepiso, se destacan las banderas de UTAA y del Uruguay. Debajo de las banderas hay un pasadizo que conduce a la sala de directorio, ubicada a la derecha, y al patio trasero, donde se encuentra un pequeño alojamiento que suele albergar a compañeros con dificultades para encontrar un lugar donde vivir. Si decide aproximarse a las paredes del salón principal, el visitante podrá observar con más atención los materiales allí expuestos. La superficie de los paneles de cartón de la pared lateral derecha está recubierta por un collage de frases e imágenes en la cual el semblante de Raúl Sendic Antonaccio es omnipresente. Recortes rectangulares de papel con breves narrativas, citas y poemas conviven, en el espacio del collage, con las fotos de Sendic, el más célebre líder del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T) y uno de los fundadores de UTAA. “Raúl se desvincula del Partido Socialista”, se lee en el collage. Otras informaciones se le van yuxtaponiendo:

en una asamblea el 21 de setiembre de 1961, queda fundado el sindicato de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas... se instala el Campamento de los Cañeros en Bella Unión, y posteriormente, en Itacumbú, con Raúl junto a ellos y con ellos... en 1963 Raúl pasa a la clandestinidad... fundan el Movimiento de Liberación Nacional... es detenido en un frío agosto de 1970...TIERRA Y LIBERTAD... “el hombre es el único ser que vive sostenido por la esperanza y que aún puede ser aniquilado por la falta de ella”... “la vida quita y quita/ lo que antes daba y daba/ mucho, mucho se extravía/ pero al fin, como al principio/ queda el plan y la fantasía”.

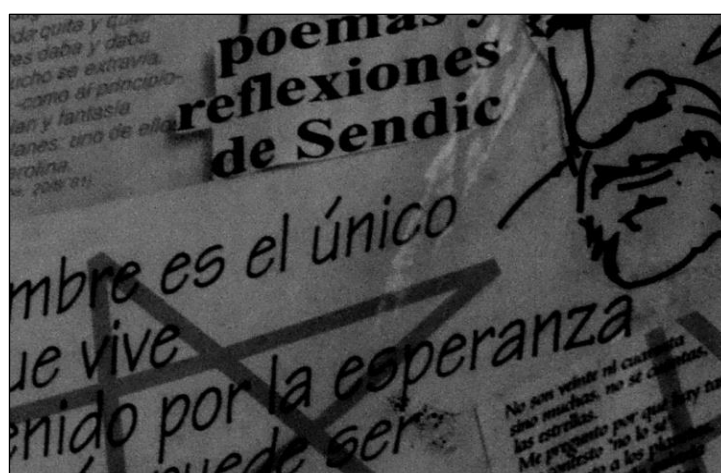


Ilustración 2: Detalle de un collage en la “casa de UTAA”

Cruzando el salón de piso cerámico, contorneando mesas y sillas, el visitante se encuentra con la pared lateral izquierda. Apoyados en ella hay dos cuadros con vidrio, de fondo oscuro y armazón de madera. Cada cuadro presenta viejas fotografías que parecen haber sido reimpresas no hace mucho tiempo. Algunas de ellas, parcialmente despegadas del fondo negro, se proyectan sobre las otras, que aún permanecen en la posición original. Las fotos muestran a gente de todas las edades participando en diversas actividades que se remontan a los primeros años de existencia del sindicato. Se puede deducir la época en que fueron tomadas porque, sobre el vidrio polvoriento de los cuadros, aún se mantienen algunas diminutas etiquetas de papel, también ellas parcialmente despegadas, donde figuran fechas y nombres de lugares. Si, en vez de enfocar sobre las personas fotografiadas, el visitante concentra su mirada en la superficie de vidrio, podrá vislumbrar el reflejo de un retrato de Sendic, fijado en la pared opuesta. Una ilusión óptica permite que su semblante se yuxtaponga al de los militantes sindicales de finales de los años sesenta. Con sutiles movimientos de cabeza, es posible hacer que este semblante recorra, como un fantasma, cada una de las fotos en exposición. Entre 1965 y 1968, fecha de la mayoría de las imágenes allí expuestas, Sendic estaba en la clandestinidad, pero los militantes de la UTAA no dejaban de invocarlo intensamente en sus consignas y refranes: “por la tierra y con Sendic”; “Raúl Sendic, líder campesino”. En su investigación sobre la trayectoria del movimiento sindical de los cortadores de caña de Bella Unión, Merenson (2016) relata que, quienes participaron en las largas marchas organizadas por la UTAA a la ciudad de Montevideo en los años sesenta, estaban convencidos de que Sendic los acompañaba, aunque no pudiesen verlo: sin estar “junto a ellos”, Sendic proseguía, aún así, “junto con ellos”. Era una presencia fantasmal.

Caminando a lo largo de la pared del salón principal hacia los fondos de la “casa de UTAA”, el visitante se cruzará con otras imágenes del viejo líder tupamaro hasta llegar al corredor que desemboca en el patio trasero. Si, por casualidad, antes de salir del recinto, mira de reojo a través de la puerta entreabierta de la sala de directorio, probablemente se sentirá interpelado por el retrato de un sujeto barbudo y pensativo, detrás de termos y mates que descansan en una mesita en el rincón.

Algo del espíritu del viejo definitivamente permanece allí. Pero así como los rastros de las historias de Lagarto, ese “algo” no significa nada *a priori*, aunque resulte ineludible. Sendic llega hasta el presente a remolque de los relatos de los más viejos y de los recuerdos acumulados en las paredes del sindicato. Sendic también interpela a sucesivas generaciones de dirigentes sindicales en la voz de la militancia de izquierda de otras partes

del país, que insiste en asociar su nombre y su “plan” a todo aquello que la UTAA se propone hacer y reivindicar. Es necesario, una y otra vez, lidiar con el “espíritu del viejo”. Sin embargo, a diferencia de aquellos otros muertos evocados por Marx, su espíritu no oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, sino que parece invitarlos a pensar diferente, a dejarse influenciar por “alguna idea” digna de redimirlo.



Ilustración 4: En la mesita del rincón.



Ilustración 3: El viejo, omnipresente.

Sandro y sus compañeros pensaban que la angustia de la “gente de Green” no era una invitación a la resignación, sino un punto de partida para “cranear algo” e intentar un cambio de actitud. Los retratos de Sendic alentaban esta posibilidad, como si fuesen el rastro de una vieja batalla que, en plena oscuridad, envuelve repentinamente a todos, incluyéndolos en un escenario hasta entonces impensado. En aquella noche de setiembre, con la “orden de desalojo” puesta sobre la mesa de reuniones, los dirigentes de UTAA defendieron que la ocupación de Green Frozen fuera fortalecida, que los funcionarios acamparan en la fábrica, rehabilitaran sus exigencias más radicales y se prepararan para el enfrentamiento con la policía. El tono combativo y desafiante de la directiva del sindicato, así como su garantía de ofrecer apoyo logístico a la ocupación de la empresa, entusiasmaron a los trabajadores de Green Frozen y los empujaron a la acción.

1.3 La batalla de Green Frozen

En la mañana del día siguiente, 22 de setiembre, los funcionarios de Green Frozen comenzaron a concentrarse en las instalaciones de la planta industrial. Habían decidido oponer resistencia a una eventual medida de desalojo y exigían que sus puestos de trabajo fueran asegurados. La movilización se extendió a lo largo del día y recibió apoyo de la Comisión de Desarrollo Productivo de Bella Unión, creada recientemente con la participación de varias instituciones para elaborar proyectos que pudieran beneficiar la economía local. La UTAA fue llamada a participar en la Comisión, pero raras veces envió representantes a sus reuniones. Mis compañeros en la directiva del sindicato veían aquel

espacio con una cierta desconfianza y dudaban de su capacidad para hacer justicia a las expectativas y necesidades de los trabajadores rurales. La Comisión de Desarrollo Productivo era el lugar de las “gestiones” y, por su propia composición, que incluía a la Intendencia Municipal, la Junta de Representantes y las entidades patronales de la ciudad, difícilmente se transformaría en el ambiente más propicio para hablar en términos de “lucha”. De cualquier forma, la noche anterior, luego de la conversación con “la gente de Green”, el sindicato se hizo presente en la Comisión de Desarrollo Productivo, que estaba reunida en la sede de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (APCANU). En esa oportunidad, la idea era lograr el respaldo de las autoridades ejecutivas municipales y de los patrones para evitar el aislamiento político “de la movida de Green”. Durante la reunión en APCANU, sin embargo, un productor rural ya había dado muestras de vacilación al afirmar que “todos los planteos que hagamos, y no tomen en cuenta las condiciones a las que estamos expuestos, son una expresión de deseo. No son la realidad. La realidad es que Green está cerrando”. Los dirigentes de la UTAA sabían que el apoyo de la Comisión probablemente sería efímero e inconstante, pero no valía la pena descartarlo de antemano.

Alrededor de las tres de la tarde había tensión en las instalaciones de la fábrica. Delante de los grandes portones de hierro cerrados con candado, Sandro y Beti, tesorera del sindicato, observaban aprehensivos la movilización de los policías en la calle. Un coche estacionó cerca de la entrada. Después de descender del automóvil y traspasar los portones de la planta, el abogado de los trabajadores de Green Frozen caminó solemnemente hasta el centro del patio en compañía de los empleados, que lo observaban expectantes. Allí, compartió la tranquilizadora noticia de que “la orden de desalojo” no sería cumplida ese día. La ocupación pudo proseguir sin mayores sobresaltos hasta el 28 de setiembre, cuando el Poder Judicial dispuso, mediante intimación, que los trabajadores se retiraran de la fábrica en 24 horas. Esta nueva amenaza exigía, en la opinión de los dirigentes de UTAA, una “actitud enérgica”, destinada a llamar la atención de todo el país sobre las arbitrariedades cometidas por el propietario de la empresa con el supuesto beneplácito del gobierno nacional.

En el último día del plazo de desocupación impuesto por la justicia, un militante trajo a la sede de la UTAA varios metros de cadena de acero y algunos candados. Muy pronto se pondría a prueba una estrategia de lucha que tuvo su última aparición contundente en Bella Unión 25 años atrás, cuando la patronal APCANU rompió

unilateralmente el convenio laboral firmado con los cortadores de caña²¹. En 1992, la ruptura del convenio fue enfrentada por los trabajadores mediante la articulación de dos medidas de lucha. Por un lado, con el objetivo de disuadir a la patronal, ellos organizaron una huelga salarial que se sostuvo por 18 días. Por otro lado, procuraron sensibilizar a la población local y nacional recurriendo a una huelga de hambre iniciada el 29 de setiembre, delante de la Catedral de Montevideo. Sandro supo de esa historia a través del diálogo con los viejos militantes de la organización, pero la huelga de hambre no era una estrategia totalmente desconocida para él. Cuando militaba junto a los trabajadores de la construcción civil en el sur del país, antes de mudarse a Bella Unión, el actual secretario general de UTAA ya había conocido gente que arriesgó el pellejo en largos ayunos reivindicatorios. Ahora, él mismo estaba dispuesto a hacer lo mismo: era necesario “meterles una huelga de hambre”. Cuando algunas funcionarias de Green Frozen se dispusieron a sumarse a la huelga, sus colegas intentaron disuadirlas en vano. Isabel, trabajadora del sector agrícola de la empresa, era la más entusiasmada entre los huelguistas. Para ella estaban en juego “nuestros puestos de trabajo”. Ante sus recelosos compañeros, Isabel argumentaba que “me parece justo y correcto lo que estamos haciendo, siento que debo y voy a hacer huelga de hambre. Algo tiene que pasar acá, si no, no nos hacen caso”.

Las cadenas depositadas en la sede del sindicato fueron llevadas para la planta industrial en la madrugada del 29 de setiembre, coincidentemente en la misma fecha de la huelga de hambre de 1992. A las seis de la mañana, un toldo negro fue extendido delante del portón de entrada de la industria, y, debajo de él, se instaló un largo banco de madera. La doctora González, médica, amiga del sindicato y ex-militante del MLN, acompañaba de cerca los preparativos. En seguida, los huelguistas se fueron sentando, uno al lado del otro, sobre el banco delante del portón. Los demás ocupantes de la fábrica les ayudaban a envolver la cadena de acero alrededor de la cintura. La mañana transcurrió sin imprevistos. Durante la tarde, una funcionaria del Poder Judicial fue recibida en el patio de la empresa, donde el abogado de los trabajadores le explicó que, “en realidad”, allí no estaba sucediendo una ocupación, pero sí una protección del patrimonio de Green Frozen. Si se cerraba, argumentó el abogado, la fábrica acabaría expuesta al deterioro y la depredación, privando a los trabajadores de aquellos bienes cuya subasta pública podría, en algún momento, asegurar el pago de los salarios e indemnizaciones debidos por el propietario.

²¹ APCANU rompió el convenio laboral arguyendo que sería imposible mantener los niveles salariales anteriores en razón de la pérdida de competitividad del azúcar uruguayo respecto del azúcar importado desde Brasil. El recorte salarial impuesto en 1992 (alrededor del 40%) jamás ha sido contrarrestado, aún después de la recuperación de la industria azucarera uruguayana, a mediados de los años 2000 (cf. Moraes, 2012: 84).

Después de escuchar el argumento, la funcionaria creyó prudente postergar el desalojo hasta que el responsable de la empresa asegurara condiciones adecuadas de protección y mantenimiento del patrimonio embargado. Argumentos jurídicos aparte, lo cierto es que la ocupación de Green Frozen ayudó a alertar al poder público nacional sobre la gravedad del *impasse* colocado en Bella Unión. Al poco tiempo, las audiencias de todo el país comenzaban a familiarizarse con un problema de desempleo que parecía relativizar la imagen de recuperación y prosperidad económica utilizada hasta entonces para publicitar el éxito de las políticas de desarrollo implementadas en la ciudad desde mediados de los años 2000.

Como la desocupación de la fábrica quedó suspendida por tiempo indeterminado, se optó por levantar la huelga de hambre decretada apenas diez horas antes del arribo del Poder Judicial. Esta sería la última acción contundente adoptada por la “gente de Green” en la batalla en defensa de sus puestos de trabajo. Con el ablandamiento de las amenazas jurídicas más inmediatas, la ocupación de la fábrica fue debilitándose. Los dirigentes de la UTAA recibieron con pesar las noticias de la paulatina desmovilización de sus compañeros del sector hortícola. Sin embargo, las rutinas sindicales impuestas por la zafra y el compromiso con otras luchas que proliferaban en la ciudad les impidieron mantener la intensa movilización invertida en Green Frozen durante el mes de setiembre. Además de eso, los miembros de la dirección del sindicato compartían la evaluación de que una parte de los dirigentes de “Green” aún estaba demasiado convencida de las potencialidades de la “gestión”. Una nítida señal de esta tendencia sería su constante disposición a negociar las condiciones propuestas tanto por el Estado como por el propietario de la fábrica, sometiéndose a los “tiempos de la burocracia” y tornándose, así, más vulnerables al riesgo de ser “ganados por cansancio”. “Da lástima la situación, pero no podés obligar a la gente a luchar”, se desahogaba uno de los dirigentes de UTAA una semana después del término de la huelga de hambre.

En el mes de noviembre, ya no quedaban trabajadores en las dependencias de Green Frozen y un equipo de seguridad privada se encargaba de la protección de los bienes de la fábrica. Toneladas de alimentos se pudrieron en las cámaras frigoríficas cuando la energía eléctrica del establecimiento fue cortada, a finales del 2015. En 2016, el gobierno prorrogó el seguro de paro de los 150 empleados de la industria, al tiempo que algunos de ellos comenzaron a organizar una cooperativa social con la intención de dedicarse al cultivo comercial de hortalizas. Hasta el inicio de 2017, este proyecto productivo continuaba pendiente.

1.4 El regreso de lo que no fue

La huelga de hambre de setiembre de 1992 sucedió a una huelga salarial de 18 días en los cañaverales de Bella Unión. Ninguna de las dos medidas fue capaz de disuadir a los productores de caña de azúcar de la decisión de reducir salarios. Para ellos, primaba la necesidad de garantizar la competitividad de su producto en un mercado regional expuesto a la presión comercial del nuevo Mercado Común del Sur, oficializado en 1991 en la ciudad de Asunción. “Los tipos se plantaron y se perdió esa huelga, se perdió de forma total”, rememoraba Esteban, que estuvo intensamente involucrado con aquella movilización huelguista. “Después, vos no te imaginás lo que era llegar a las chacras... no te daban pelota”. Frustrados con el fracaso de la medida de lucha respaldada por la UTAA, muchos trabajadores se tornaron renuentes a los esfuerzos organizativos del sindicato. Mientras tanto, la duración de las zafras cañeras disminuía drásticamente, generalizando el desempleo rural y anunciando el agotamiento de aquella que había sido la agroindustria más importante de Bella Unión desde mediados del siglo XX. La derrota sindical de 1992 impuso un período de retracción de la agitación política en las “chacras” y, por consiguiente, una debilitación del vínculo de la UTAA con sus bases sociales.

Si consideramos el relato de Esteban, podríamos interpretar la huelga de hambre de los ‘90 como un desdoblamiento desesperado e ineficaz de la huelga salarial. En este caso, cabría preguntar por qué, entonces, ella aparecía a los ojos de algunos de los actuales dirigentes del sindicato como una estrategia de intervención política notable y digna de ser replicada. La mera contextualización histórica de los hechos ocurridos en 1992 no es suficiente para explicar su relevancia en el presente. Por el contrario, tal vez la aparición de la huelga de hambre como táctica sindical viable en 2015 constituya un dato decisivo que redefine el aspecto del propio pasado y ofrece, simultáneamente, indicios para comprender el carácter original de los procesos políticos que comenzaban a emerger en aquel momento. Esta es una hipótesis benjaminiana y será necesario recurrir a la obra de Walter Benjamin para desarrollarla. Pero antes revisemos muy brevemente cómo algunos estudios han teorizado la incidencia del pasado en los procesos de reproducción y/o transformación social experimentados en el tiempo presente²². La adopción de una perspectiva benjaminiana se dará en diálogo con los enfoques que evocaré a continuación.

²² Entre muchos otros, David Berliner (2005), Elsa Peralta (2007), Ana Ramos (2011), Javier Lifschitz y Patricia Arenas (2012) realizaron revisiones detalladas de los estudios de memoria en las ciencias sociales en general y particularmente en las antropologías. En lo concerniente al campo de los estudios de memoria en la región latinoamericana, son altamente recomendables las revisiones realizadas por Elizabeth Jelin (2005), Ludmila Catela (2008) y, más recientemente, Claudia Feld (2016) y Victoria Daona (2016).

Traer el pasado al presente y volverlo deliberadamente enunciable en la contemporaneidad no se reduce a un fenómeno psicológico individualizado, sino que también implica una práctica social que tiene efectos sobre la consistencia y el devenir de las colectividades humanas. La evocación y la movilización de experiencias pretéritas en el presente de la acción social han sido teorizadas como “memorias” en diferentes campos del pensamiento. De modo general, los científicos sociales y los historiadores se propusieron evidenciar cómo las memorias van moldeando el presente de cada sociedad, ya sea mediante la reproducción y la justificación de sus tendencias organizativas predominantes o a través de la producción de relatos críticos frente a las configuraciones de poder existentes. Maurice Halbwachs (1990 [1950]) dedujo de la “memoria colectiva” una función instrumental que consistiría en promover imágenes compartidas del pasado con vistas a la sedimentación de un relato sobre la afiliación común de los miembros de determinado grupo humano. En este sentido, la producción de memorias refrendaría – y estaría condicionada por – las identidades definidas en el presente histórico, operando como un factor de cohesión social. En la senda de Halbwachs, otros autores también reconocieron en la memoria una función legitimadora del orden social, pero su énfasis recayó sobre los aspectos conflictivos inherentes a la selección y la institucionalización de la memoria colectiva (Namer, 1987) y sobre los procedimientos más o menos ritualizados mediante los cuales se transfiere a los miembros de una sociedad ciertos conocimientos e imágenes del pasado que vuelven posible la memoria común (Connerton, 2006 [1989]). Respondiendo a una problemática distinta a la de estos investigadores, Benedict Anderson (2008) reflexionó sobre el rol de la memoria en la construcción de afinidades comunitarias que responderían, en cada momento, a los intereses de grupos específicos de poder. De forma análoga, Eric Hobsbawm (1984 [1983]) llamó la atención sobre la manipulación de la memoria, e incluso sobre su invención deliberada en consonancia con ciertas estrategias de dominación como las emprendidas por los gobiernos coloniales.

La preocupación por la memoria como un factor ligado a la estabilización del orden social fue matizada en los estudios de la memoria popular (Popular Memory Group, 1982) y las “memorias subterráneas” (Pollak, 1989), que identificaron en las experiencias pasadas de las personas una fuente de coordenadas susceptibles de contribuir a la redefinición de lo que puede decirse y pensarse en el presente, desafiando, así, la fijación del significado y la estabilidad de las narrativas del poder (ver también Commaroff y Commaroff, 1992). Estos marcos analíticos presentan la inscripción del pasado en el presente como el resultado de un proceso creativo que moviliza los sistemas de

representación existentes, redefiniendo potencialmente la visión de un grupo sobre su propio devenir temporal. Elizabeth Jelin sintetiza con claridad esa posición cuando observa que el “sentido del pasado” se ubica “directamente [...] en un presente, y en función de un futuro deseado” (Jelin, 2002: 12). De acuerdo con la autora “el presente contiene y construye la experiencia pasada y las expectativas futuras” (ibid.). En ese proceso, el “trabajo de la memoria” operaría la donación de sentido al pasado, convirtiéndolo en un modelo para comprender situaciones nuevas. A su vez, Elsa Peralta argumenta sobre una “constante dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro” (Peralta, 2007: 16) en cuyo proceso el primero de los tres términos sería mediado por el segundo para convertirse en memoria, habilitando, de este modo, la enunciación del tercer término – es decir, el futuro. Aquí, el uso de la noción de “dialéctica” parece enfatizar una incidencia activa del pasado sobre sus (re)definiciones en el presente, acercándonos a la perspectiva que delinearé a continuación. Comprendida en su dialecticidad, la memoria no sería solamente una función del orden social o un constructo plasmado e instrumentalizado por las estrategias políticas del presente, sino también el resultado de la “articulación” de un pasado *existente* (Huyssen, 1995:3 *apud* Peralta, 2007: 16) en los cuadros reflexivos de la actualidad.

En este orden de ideas, algunos estudios antropológicos recientes inspirados por el pensamiento de Walter Benjamin (Ramos, 2008, 2016; Kohn, 2002)²³ subrayan la relativa autonomía de las imágenes y constructos del pasado frente a los intentos de interpretarlos en el presente. Tal autonomía convierte el acto de recordar en un esfuerzo de creación retrospectiva de sentido cuyos referentes son, en palabras de Ana Ramos, “*index* históricos” de *maleabilidad limitada*. Los índices “no siempre se articulan en narrativas o tramas, o no siempre adquieren sentidos políticos y vivenciales para las personas” (Ramos, 2011: 144), razón por la cual deberíamos pensarlos como “claves potenciales de interpretación” (ibid.). Pensar la producción de las memorias en referencia a ciertos índices históricos es

circunscribir[las] [...] como un tipo de plegamiento en el que las experiencias adquieren sentido de la síntesis dialéctica entre significados heredados del pasado y otros emergentes del presente. Síntesis que se produce cuando desde un ahora de cognoscibilidad particular [se] *iluminan*, en ciertas imágenes del pasado, los *index históricos* para orientar las interpretaciones del presente (Ramos, 2016: 61). Énfasis en el original.

Siguiendo a Eduardo Kohn (2002), podemos decir que si las memorias son fruto de la irrupción dialéctica de las huellas del pasado en el espacio intelectual del presente, entonces no conviene entenderlas “únicamente como la ‘inscripción del presente en el

²³ A su vez, estos estudios se inspiran en las relecturas de Benjamin realizadas por autores como Richard Wolin (1994) y John McCole (1993).

pasado', o sea, como un intento relativamente autoconsciente de construir narrativas que sólo son significativas en los términos de las agendas y aspiraciones actuales" (Kohn, 2002: 562). Las interacciones localizadas entre el presente y el pasado son algo más que "epifenómenos" de las luchas contemporáneas y no se limitan a actualizar principios estructurantes de la acción social: ellas están basadas en "poderosas imágenes no discursivas" que pueden ser "convincientes sin ser totalmente entendidas" (ibid.: 563), donándose a sucesivos actos de bricolaje, interpretación y fabulación que jamás anulan su conexión básica con algo que, por haber "ocurrido realmente", no se agota en el proceso de su representación. Según Kohn, "lo que realmente ocurrió es una fuente constante de inspiración potencial, alojada [...] en imágenes poderosas, a menudo enigmáticas, que a veces permanecen inactivas" (ibid.). Esta inactividad espera por tornarse nuevamente significativa cuando, por alguna razón, se vuelva necesario tensionar el presente con la potencia de aquello que no le pertenece de antemano y que, mediante el recuerdo, podrá desplegar sus virtualidades inauditas²⁴.

El recuerdo, o sea, el acto de acoger determinados índices históricos en el pensamiento, permite nuevas comprensiones y revalorizaciones del pasado, al tiempo que retorna una imagen específica del propio sujeto que recuerda: quien recuerda y lo recordado se leen uno en el otro; pasan uno a través de otro, se compenetran. "Por eso – escribe Benjamin – los auténticos recuerdos no deberán exponerse en forma de relatos, sino señalando con exactitud el lugar en que el investigador se apoderó de ellos" (Benjamin, 2013: 99): el objeto de recuerdo revela su sentido posible allí donde una intelección presente lo ilumina con sus inquietudes y voluntades propias. Este procedimiento transforma a los objetos de recuerdo, "arrancados de todos sus contextos anteriores", en "objetos de valor en los aposentos sobrios de nuestra comprensión tardía", y en fuentes para la composición de "una imagen de quien recuerda" (ibid.). Confrontadas con algo antiguo que aparece en la superficie de lo vivido, en plena acción, las personas

²⁴ En un libro paradigmático para los estudios de memoria en América Latina, Jelin (2002) sostiene que las memorias son procesos subjetivos que se organizan en torno a experiencias vividas, marcas simbólicas y materiales. Asimismo, las memorias serían objetos de disputa que involucran a distintos "emprendedores de memoria" – asociaciones de la sociedad civil, movimientos populares, partidos políticos, etc. – con sus respectivos dramas, sufrimientos, apuestas colectivas y estilos de enunciación (cf. Jelin, 2002: 48 y ss.). Mi análisis comporta las premisas asentadas por Jelin, aunque su énfasis recaiga sobre unas modalidades poco institucionalizadas, más asistemáticas, sorpresivas, azarosas e individualizadas de afectarse por los rastros materiales de lo que ya no tiene lugar en el presente. Me interesa analizar cómo el contacto con ciertos índices históricos puede activar o realzar una dimensión acontecimental y singular del pasado, a la vez que re-condiciona las posibilidades de la acción política en el presente. Lo que denominaré "acto político de recordar", "recuerdo político", "experiencia política del pasado" o simplemente "recuerdo" es un protocolo de pensamiento que, en términos muy triviales, "recuerda para que vuelva a ocurrir".

tienen la oportunidad de captar la “constelación crítica” que coloca cierto fragmento de pasado cara a cara – y en correspondencia – con el presente. La captación en el presente de una imagen de las luchas pasadas se convierte, entonces, en el punto de partida para volver a indagar sobre la naturaleza de esas mismas luchas, ahora en función– y a partir – de su conexión real con procesos colectivos actuales.

Para los sujetos de recuerdo que se involucran en un curso de acción actual, lo que está en juego es la posibilidad de postular paralelismos temporales sincrónicos cuyo carácter doblemente revelador reside en que, al revalorizar el pasado *a pesar* de las sucesiones cronológicas dadas, ellos también presagian la irreverente singularidad de la praxis presente en la que ocurren. Las constelaciones críticas postulan, por tanto, un instante del pasado del que nos tornamos, súbitamente, el presente *inmediato*. Los rastros de un acontecimiento pretérito que se dirigen a nuestro presente no son portadores de alguna verdad oculta y definitiva, sino duraciones de pulso vital variable que, después de recorrer caminos probablemente inextricables (los caminos de la “tradición”, diría Benjamin), nos alcanzan de golpe y nos proporcionan, quien sabe, experiencias únicas, “originarias en cualquier presente” (Benjamin, 1989 [1972]: 92). Los rastros del pasado evidencian que algo simplemente sucedió: un gesto antiguo cuya originalidad radical puede percibirse a la luz de otra experiencia auténtica, verdaderamente *política* (Ibid.:102), capaz de “hacer saltar una época determinada del curso de la historia [...], una determinada vida de la época o una determinada obra de la obra general” (Benjamin, 2001 [1940]: 51). Sin ser independiente de cierto proceso de producción – y tal vez exactamente por eso –, lo que “salta” de su contexto guarda una autonomía potencial frente a su posterior captura y determinación en el *continuum* de la historia. Dicha autonomía es *verificada*, una y otra vez, por el acto político de recordar.

Si la huelga de hambre de 1992 me interesa en tanto índice histórico, no es porque posee algún nexo causal *a priori* con los procesos políticos que tuve la oportunidad de acompañar desde 2015, sino más bien porque su vínculo con ellos es dialéctico y, por tanto, significativo para la construcción presente de *una política*. Benjamin señala que “ningún hecho es histórico por ser causa. Llegará a serlo sólo después, póstumamente”, cuando cierta época entre en contacto con una época anterior, contándola entre las determinaciones de su propio devenir (cf. Benjamin, 2001: 51). La constelación que correlaciona 1992 y 2015 es dialéctica porque, a través de ella, la experiencia del tiempo presente asume, para un colectivo humano específico, el carácter de una experiencia de tensión, interrupción, discontinuidad y creación. Con todo, su carácter dialéctico no se

restringe sólo a las vivencias actuales de quienes recuerdan; él también se extiende al pasado, rehaciendo sus contornos y lanzándole algo así como la luz de una hipótesis alternativa a la cual, en su vasta virtualidad, él se dona generoso y oscuro a la vez. La inscripción dialéctica de una nueva tensión en el tiempo presente indica el surgimiento de una experiencia política del pasado. Atestiguar el gesto político que vuelve el tiempo presente permeable a las ráfagas del pasado que cruzan su superficie significa una chance de releer las situaciones pretéritas como si ellas siempre hubieran sido, por lo menos en alguna medida, extemporáneas e indomables al contexto que les reservó la historia. Aprovechar esa chance es adoptar una hipótesis desafiante que mis compañeros de la UTAA formulaban respecto de sí mismos y de aquellos que, en otros tiempos, también militaron bajo la bandera de su organización. Tal hipótesis sugiere que, tanto ayer como hoy, a pesar de lo que haya ocurrido o de lo que vaya a ocurrir, las personas hicieron y hacen un tremendo esfuerzo político para engendrar posibilidades justamente allí donde no parecería haber nada más que posiciones preestablecidas, destinos sellados y hechos consumados.

“Hay un montón de historia detrás de mí...” – reflexionaba Emilio lacónicamente desde la habitual silla donde recibía el atardecer con el mate entre las manos. Y si en el presente ese “montón de historia” aún poseía alguna fuerza movilizadora para él era porque “soñás con el espíritu de lucha, con esas historias que escuchabas de gente que salía a pelear”. Sentada en un banquito a su lado, Beti, hermana de Emilio, ponderaba que “luchar” no era una disposición permanente para ella. Algo melancólica, confesaba que durante buena parte del tiempo su tendencia era pensar “que de futuro, así, no hay casi nada” más allá de los “intereses personales”, es decir, del trabajo y del cuidado de sus tres hijos. Sea como fuere, ella seguía participando en el sindicato y sabía que hacerlo era vivir una “experiencia importante”, no sólo porque eventualmente le proporcionaba oportunidades de empleo, sino también porque le permitía habitar un espacio en el cual se tornaba posible cuestionar y cambiar, con diferentes grados de intensidad, las restricciones y arbitrariedades impuestas por el mundo del trabajo. Beti nos contaba que de vez en cuando en su casa, tarde de la noche, prendía la computadora y buscaba informaciones en You Tube. Quería “saber realmente qué fue todo eso, la tierra, Sendic”: palabras sueltas que reverberaban por ahí en documentales, entrevistas o filmaciones de marchas y manifestaciones un poco más recientes. “También me encanta conversar con Esteban – añadía Beti –, conversar con la gente más vieja”, personas que otrora llegaron a encarnar

esas palabras extrañas y cuya presencia física en Bella Unión parecería indicar que, alguna vez, “todo eso” tuvo algún sentido.

¿El rastro de una fisión?

Cierto día, después de una asamblea de los vecinos del asentamiento 33 Orientales, al lado de la residencia de Emilio, un viejo cortador de caña se me acercó trayendo en las manos un libro voluminoso de tapas negras. Con lágrimas en los ojos, dijo que el fascículo era herencia de su padre, compañero de Sendic, y que en él “estaba todo dicho, lo que pensaba Sendic, la historia de UTAA, todo”. “Te presto el libro para que lo estudies”, dijo, “pero después me lo tenés que devolver, vivo en aquella casa”. Señaló un rancho de madera del otro lado de la calle. Recibí el volumen con cierta perplejidad, me comprometí a leerlo y enseguida lo guardé en la mochila bajo miradas curiosas. En casa, por la noche, puse el libro sobre la mesa de la sala y lo examiné con cuidado. Se trataba de una vasta colección del suplemento *El Periódico Oriental*, publicado durante los años ochenta por el diario *El País* con fines educativos. *El Periódico Oriental* simulaba reportajes sobre algunos hechos considerados sobresalientes para la historia nacional y mundial entre los años 1492 y 1962. “Colón llega a las Indias”, “En la URSS acusan a Stalin”, “Nombran canciller a Hitler”, “Gandhi quiere sal libre y autonomía”, “Enterraron a Rivera”. El período contemplado por este suplemento educativo se interrumpe exactamente en 1962, en la antesala de la lucha armada, cuando UTAA realizó su primera marcha a Montevideo y los términos y condiciones de la conflictividad social uruguaya comenzaron a transformarse vertiginosamente. Este y otros eventos, transcurridos a partir de la década de los ‘60, quedaron excluidos de la ventana temporal abierta por *El Periódico Oriental*, probablemente porque sus consecuencias aún eran muy sensibles en el Uruguay de los años 1980 y suscitaban – como todavía lo hacen – intensas batallas interpretativas. Días más tarde, mientras tomábamos mate en su casa, Emilio preguntó sobre el contenido del libro y mi respuesta lo decepcionó. “Está medio loco el viejo”, murmuró contrariado. El libro, de hecho, no hacía ninguna mención explícita a la historia del sindicato y eso a Emilio le resultaba algo frustrante. De todos modos, la pausa brusca de la cobertura periodística ficcional en 1962 parecía reforzar su intuición de que, justamente allí, había ocurrido importante; algo quizás muy difícil de asimilarse en la monotonía inofensiva y domesticadora de las cronologías pedagógicas.

Tanto por medio de los relatos de la “gente más vieja” como a través de los fragmentos de experiencia retenidos en el ciberespacio, Emilio y Beti buscaban dejarse impregnar por el sueño raro de otra época. En ese sueño, las cosas eran muy diferentes de lo que suelen ser hoy en día y las personas actuaban como no lo hacían la mayor parte del tiempo. “Si vos mirás, todo empieza acá en el norte. La revolución de Uruguay empezó acá, de la mano de UTAA”. “El tema – proseguía Emilio – es que nosotros, a veces, no nos damos cuenta de lo que tenemos acá *porque lo vivimos*”. Reparemos en el carácter aparentemente paradójico de esta reflexión: “no nos damos cuenta [de que la revolución empezó acá] porque lo vivimos”. Emilio ayuda a aclarar la paradoja: “podés tener una visión diferente de una misma cosa que está pasando porque la estás mirando desde otro ángulo”. Aunque la gente viva una facticidad compartida, el punto de arranque para hacer

algo distinto no reside en esta vivencia contemplativa de lo evidente, pero sí en la “mirada”, o sea, en el “ángulo” a partir del cual una cosa es abordada. Soñar con el viejo “espíritu de lucha”, con “esas historias” contadas por compañeros y parientes, significaba algo más que visualizarlos como hechos dados, que marcaron la vida de algunos. Se trataba, más bien, de experimentar una visión que también mira el presente directamente a los ojos y *se corresponde* con él, instando a quienes lo habitan a una elección existencial. Si, por acaso, uno fuera capaz de “decir sí, los derechos son míos, yo quiero cambiar de vida, cambiar la vida de mis hijos, no solamente la mía” y reconocer que “UTAA es movilización”, “hasta nuestra conducta cambia y viejas consignas empiezan a vivir”.

Emilio evaluaba que “el ser humano, cuando tiene que pasar bien, él pasa bien, pero si tiene que estar en una situación extrema, sobrevive también, con menos que nada”. La capacidad de acción individual y colectiva no sería tanto una consecuencia inmediata de las circunstancias dadas, sino el efecto de la adopción de un “ángulo” de visión que niega el presente y revela la inadecuación de los vivos ante la realidad que experimentan. El recuerdo de viejas luchas y consignas, cuyos índices poblaban las paredes del sindicato y se dejaban oír en la voz de los viejos, era el medio donde se podía operar una des-identificación respecto del presente gracias a un desvío de perspectiva – o cambio de ángulo – que correlacionaba a los actuales militantes del sindicato con la decisión de “cambiar de vida” profesada por tantos otros en tiempos pasados. Cuando Emilio hablaba de “cambiar de vida”, notemos que su deseo, informado por la imagen ensoñada de luchas antiguas, abarcaba también una generación futura, representada en la figura de los hijos. Él ensoñaba el pasado y ensoñaba el futuro, así como, antes de él, otros también ensoñaron a sus antecesores y predecesores. Sin embargo, entre ensoñar el pasado y ensoñar el futuro se imponía un momento de decisión; un momento sin el cual el primer fenómeno (ensoñar el pasado) no podría conducir al segundo (ensoñar el futuro), permaneciendo clausurado en el terreno de la nostalgia. Se trataba del momento en que es preciso decir *sí* a los sueños de los viejos e imitar su actitud. Citarlos en uno mismo, no como prueba de reverencia dogmática, sino como una especie de profanación. Sandro sabía que “hoy podemos luchar [...] sin miedo a un calabozo, sin miedo a una reja [...] [porque] *tenemos compañeros que la han luchado*”. Sin embargo, algunos de estos compañeros suscitaban “grandes decepciones” porque “están alineados con todo el sistema político a pesar de los años [de cárcel] que se comieron”. Imitarlos, entonces, implicaba recuperar sus gestos del devenir biográfico en el cual parecían encerrados y volverlos otra vez disponibles para la práctica de nuevos experimentos políticos. Cuando recuerdo y profanación conflúan para exorcizar

la alianza entre tiempo y frustración, tenía lugar un acto intempestivo – un *sí* – que abría el presente a la intervención creadora de la política. Gracias a la presencia constante de los índices históricos, ese acto podría volverse indefinidamente disponible para quienes, a través de él y en cualquier tiempo, desearan disipar la sensación insidiosa de que “de futuro, así, no hay casi nada”.

En la imitación de 1992 en 2015 había algo de *apuesta* y algo de *hipótesis*. Apuesta por una capacidad de acción que interrumpe el curso normal de la vida e invita a las personas a “cranear” alternativas inauditas ante el orden de cosas vigente. Hipótesis según la cual si “hay un montón de historia detrás mío” es porque otros compañeros ya ejercieron tal capacidad de acción en tiempos pasados. En caso contrario, no habría materia para ensoñar. La huelga de hambre de 2015 performó en un escenario inusitado – concretamente, el patio de Green Frozen – un gesto político que, en definitiva, se remontaba al “espíritu de lucha” de “gente que salió a pelear”. Tal gesto aventuraba la actualización última de un “espíritu” que, no obstante, permanecía ampliamente enigmático e insondable. De cualquier forma, conocer los pormenores de las antiguas apuestas realizadas por el sindicato no era realmente indispensable cuando de lo que se trataba era de reanudar el combate. Pocas palabras e imágenes bastaban – “lucha”, “tierra”, “Sendic”, la mirada confiada del “viejo” en un retrato colgado de la pared – para, como dice Badiou, “fijar” un “incidente”, “preservar en la lengua el rastro de su separación”: el índice de que algo excepcional simplemente sucedió y nos fue entregado por los conductos asistemáticos de la tradición, como estímulo a la experimentación colectiva y al ensueño, a la imitación y al recomienzo (Badiou, 2012: 332). “Lo que resta – agregaría Michael Taussig – y lo que es activo y poderoso, es la palabra misma, enigmáticamente incompleta” (Taussig, 1995: 153).

Mis compañeros gravitaban un enigma nominado que parecía susurrarles cierta posibilidad disyuntiva disponible desde siempre; posibilidad cuya actualización requería, sin embargo, la determinación de nuevos objetos; la construcción y el sostenimiento de un enfoque o, como prefería Emilio, de un ángulo específico de visión: “hay que convencer [a los demás compañeros] y darles todas las explicaciones del porqué, hasta el día que los convenza y ellos digan ‘bueno, él tiene razón, vamos a luchar por esto’”. El trabajo de reflexión, encuentro, persuasión y composición – sin el cual ensoñar el pasado no puede desembocar en la subversión de la normal particularidad de nuestras propias vidas – será narrado y estudiado en los dos últimos capítulos de la tesis. Allí tendré la oportunidad de analizar las condiciones intelectuales que, poco a poco, y en diversos lugares, fueron

organizando – así como sucedió en Green Frozen – el desarrollo de una apuesta colectiva novedosa y creadora. Ahora, de lo que se trata es de clarificar la hipótesis que relampagueaba en los recuerdos evocados hasta aquí.

Me refiero a la hipótesis cultivada por algunos dirigentes de UTAA según la cual las luchas del pasado eran esfuerzos para “cambiar de vida”; esfuerzos que resonaban en el presente como una especie de promesa a la cual hacía falta adherir. Se trataba de empujes incompletos que quedaron parcialmente truncados, sin solución de continuidad: no se realizaron en *su* presente, salvo como promesa o posibilidad. Precisamente por eso, esperaban algo así como un acto de redención. En las famosas “tesis” de 1940, Benjamin atribuyó al “materialismo histórico” la tarea de “fijar una imagen del pasado como se introduce en el momento de peligro”, cuando la tradición corre el riesgo de ser absorbida por el conformismo y el “sujeto histórico” se aferra a ella con todos los recursos disponibles en su contexto – inclusive, pero no sólo, el lenguaje – para evitar la entrega de sí mismo (y de la tradición) a la condición de “instrumento” de la “clase dominante” (Benjamin, 2001: 45). A diferencia del “historicismo”, el “materialismo histórico” puede cumplir su cometido únicamente cuando el presente se siente “visado” por una “imagen del pasado” (ibid.), descontextualizándola radicalmente y revelando, en ese movimiento atrevido, que ella siempre estuvo y estará disponible, desencadenada y fuera de lugar, independientemente de todos los intentos ulteriores de captura, encadenamiento, localización y dotación de sentido.

La imagen, a partir de ahora y desde siempre, habrá sido el rastro de una singularidad mimetizable que viene en nuestra ayuda cuando el peligro acecha: tal es el efecto de verdad que una experiencia política del pasado ofrece y que el “materialismo histórico” se propone retener. Frente a semejante efecto de verdad, cualquier contextualización historicista suena infinitamente abusiva. De hecho, como observa Taussig, “cuando se habla de contextualizar, invariablemente se hace referencia a la historia y las relaciones sociales del *Otro* que deben configurar ese talismán denominado contexto y que por una parte aclara la verdad y el sentido, y por otra los aprisiona” (Taussig, 1995: 65). El “Otro” es la heteronomía que va atrayendo todo lo que acontece hacia un torrente de sentido aprisionador, que da legibilidad a lo ocurrido a costa de restarle singularidad. Las vicisitudes del tiempo, sus determinaciones y condicionantes – que no son otra cosa que el “sentido de la realidad” formateado por los poderes dominantes de una época – capturan lo ocurrido en su cadena causal y tienden a dirimir en ella su destino, sus sentidos y sus consecuencias en forma inapelable y duradera. Cuando, por

alguna razón, los hechos pierden contexto a través de un acto político de recordar, vale la pena retener e imitar ese gesto, extendiendo sus efectos indisciplinantes al dominio de las prácticas disciplinarias de lectura y contextualización. De esta manera, se vuelve posible fisionar los esquemas ya definidos de legibilidad para, en fin, reconocer “la insustituible singularidad de lo conocido”, es decir, aquello que en él preserva aún la tenue capacidad de negar la arbitrariedad de “su” contexto (Oyarzún, 2009: 9), bajo condición de que se lo entregue a la amnistía del recuerdo antes que a la inquisición del historicismo.

Hay, entonces, “un montón de historia” que no fue dirimida en el presente – ni de ayer, ni de hoy. Lo sabemos porque se trata de un tipo de historia muy distinto al pasado victorioso que Pierre Bourdieu supo definir con precisión: un pasado “que se vuelve presente en las prácticas [que han sido] estructuradas de acuerdo con sus principios” (Bourdieu, 2012: 177). No hay prácticas estructuradas en las cuales sobrevivan los “principios” inmanentes a ese “montón de historia” sobre cuya postergación el ordenamiento social prospera, multiplicando sus formas legítimas de realización personal y colectiva. De ahí su fuerza interpelante y su carácter enigmático. Es necesario “cambiar de ángulo” – desestructurarse – para poder revivir una historia en la cual se descubre el índice de lo que habría sido un “cambio de actitud”, es decir, una sustracción a lo que se hace la mayor parte del tiempo, cuando “de futuro, así, no hay casi nada”. “La gente, en definitiva, salió a pelear” y de ese gesto brotaron palabras y nombres – “Sendic”, “tierra”, “revolución” – que suenan instigadores a los oídos de quien los recuerda, al tiempo que figuran anacrónicos o anodinos desde el punto de vista de las prácticas que no se han estructurado de acuerdo con sus principios. Pero si tanta historia quedó atrás a la espera de ser redimida, es porque también hubo muchas derrotas. Es conveniente reconocerlas: “se perdió de forma total [en 1992]”, me decía Esteban. No existe comprensión histórica capaz de suavizar *a posteriori* la marca de la derrota. Hacerlo sería, de hecho, una infidelidad a las ambiciones de la “pelea”. La derrota obtuvo efectivamente los posibles contenidos en la “pelea”, les negó actualidad, los inscribió en un pasado que no es el que conceptualiza Bourdieu.



Ilustración 5: un cartel de apoyo la huelga de hambre de 1992.

En 1992, se formó una Comisión de Apoyo que, poco antes del inicio de la huelga de hambre, imprimió carteles para respaldar y visibilizar la medida de lucha impulsada por la UTAA y sus aliados en el campo sindical. Estos carteles traían estampada la imagen de un cortador de caña de pies descalzos y sombrero de paja, sosteniendo el facón en una de las manos y levantando la otra como quien dice “presente”. Lucero, esposa de Esteban, guardaba algunos ejemplares de estos carteles en su casa. Sobre la esquina superior derecha de uno de ellos, alguien escribió el siguiente mensaje y lo firmó en nombre de la “Comisión de Apoyo” el 14 de setiembre de 1992: “el valor todo lo puede, hay que tenerse confianza y lo que el valor no pueda lo ha de poder la esperanza...”²⁵. El mensaje de la Comisión de Apoyo constituye, ahora, una insospechada clave de lectura para lo ocurrido en 1992: una vez agotado el “valor”, es decir, la osadía y la firmeza para llevar a cabo un plan, aún subsiste la “esperanza” en tanto promesa de potencia o sueño de apertura. La esperanza no es sólo un consuelo que sustituye lo que falta, “sino que lo promete dándonos [...] una prenda de presencia. Como prenda de presencia habría que entender, pues, a la

²⁵ Se trata de la penúltima estrofa de *Tanta vida en cuatro versos*, una canción de Washington Benavides y Eduardo Larbanois que se hizo célebre, a mediados de los setenta, en la interpretación de Alfredo Zitarrosa.

imagen: una tal podría ser también – y quizás especialmente – el nombre [...]” (Oyarzún, 2009: 22). Finalizada la lucha, aún persisten sus palabras y sus nombres: en ellos mis compañeros de la UTAA cifraban una capacidad de acción que, efectivamente, *les correspondía*.

He viajado a Bella Unión desde 2013, pero fue a partir de 2015, cuando me instalé en la ciudad durante varios meses y tuve la oportunidad de involucrarme en las “movidas” de UTAA, que dos tendencias comenzaron a quedar cada vez más claras para mí. En primer lugar, se me hizo evidente que, en el día a día de la lucha sindical, viejas palabras y nombres irrumpían, una y otra vez, como una fuente enigmática de posibilidades no consumadas. Mis compañeros estaban menos preocupados en reseñar hechos históricos concretos que en imaginar “qué querían los viejos” y cuáles eran sus “ideales”, aferrándose, para ello, a índices históricos muy fragmentarios. Independientemente de conseguir o no acceder a las informaciones capaces de suplir su avidez imaginativa, para ellos lo imprescindible era mantener viva la suposición de que en algún momento hubo actitudes e ideas atípicas, disruptivas. En segundo lugar, saltaba a los ojos la enorme disposición de los militantes de UTAA para cuestionar la supuesta inexorabilidad de su propia coyuntura. Esta disposición era estimulada, como vimos a lo largo del capítulo, por el contacto con palabras, nombres e imágenes engendradas en el transcurso de antiguas luchas sindicales.

Había palabras que saturaban las paredes de la sede del sindicato y que eran eventualmente transpuestas al discurso de sus dirigentes cuando estos pretendían enunciar un posible indeterminado: una capacidad colectiva que ya ocurrió, está ausente hoy y puede, quien sabe, volver a ocurrir algún día, dadas las condiciones necesarias. En junio de 2015, la lista de Sandro y Emilio recién había ganado las elecciones sindicales. En la primera oportunidad que tuve de conversar con ellos, recuerdo haber preguntado sobre sus proyectos futuros. Fue entonces que Emilio señaló un retrato de Sendic en la pared y me dijo que sus fotos estaban allí para “hacernos acordar de cuál es la lucha de UTAA”. En seguida, me habló de “autonomía” y explicó que ejercerla significaba defender no sólo los intereses de quien es representado por el sindicato, sino “también los intereses de todo el pueblo”. Sin duda, los nuevos dirigentes de UTAA estaban preocupados por garantizar mejores condiciones de trabajo para los asalariados rurales que los habían votado. No obstante, conectarse con la “lucha de UTAA” también implicaba ser capaz de concebir y defender otros intereses colectivos que no necesariamente se dirimían en los términos fijados para la negociación entre patrones, empleados y el ingenio azucarero. “Autonomía”

era algo que habría singularizado las luchas pasadas al mismo tiempo que constituía un procedimiento elemental para volver a “sentir la fuerza de lo que es UTAA”.

Podemos decir que “autonomía” designaba, simultáneamente, un *posible* y un *pasado*. Prospectivamente, esta palabra señalaba la existencia de una capacidad – o fuerza – disruptiva susceptible de ser nuevamente retomada en cualquier momento. Retrospectivamente, el pasado se presentaba como el lugar de ocurrencia de una autonomía cuyo rastro inequívoco serían ciertas palabras y nombres – “tierra”, “revolución”, “Sendic”, incluso “UTAA” – que parecían rebalsar el alcance de las reivindicaciones sindicales más cotidianas. En la persistencia luminiscente de esas palabras y nombres se tornaba lícito, para mis compañeros, cifrar la existencia pasada de un lugar de enunciación autónomo cuyo reconocimiento los enfrentaba a la posibilidad de una autonomía venidera. Tierra, Sendic, revolución: rastros que, una vez retenidos y preservados en la consciencia, parecían señalar a sus depositarios el camino de la tenacidad; el camino de la “fuerza de lo que es UTAA”.

Aquellas palabras y caras desparramadas en la pared del sindicato eran índices de un vector de cambio sobre cuya posibilidad de actualización los integrantes de UTAA especulaban con insistencia. Concebir la evidencia fragmentaria de lo ocurrido como el índice de una “fuerza” *sui generis*, susceptible de ser nuevamente habitada o sentida, podría definirse como un *pensamiento político de las políticas pasadas*. Se trata de un tipo de pensamiento que capta las huellas de gestas colectivas pretéritas como si fueran registros de intensidades singulares, portadoras de un nombre y nada más – despojadas, por tanto, de sus afiliaciones al contexto histórico supuestamente definitorio en el que tuvieron lugar. De vez en cuando, el pasado (o, más precisamente, lo [que ha] pasado) también puede – ¿por qué no? – existir en estas condiciones: liberado de todo contexto y de toda Historia. Errante, extemporáneo, perturbador. Aquí, el recuerdo político se despega de la exégesis historiográfica y reivindica su autonomía de registro, a la vez que también autonomiza aquellos rastros de pasado casualmente retenidos en las tramas de su peculiar proceso intelectual. Liberadas de la Historia, las viejas consignas son un devenir en el cual, parafraseando a Deleuze, uno puede instalarse, rejuveneciéndolo y al mismo tiempo rejuveneciéndose en él (Deleuze, 1990: s.p.). Fue Althusser quien señaló que la política sólo encuentra sus condiciones allí donde las constituye y las reproduce (cf. Sibertin-Blanc, 2011). En este caso, si una política que se pretende autónoma se vuelve hacia el pasado para encontrar en él sus condiciones, entonces dicho encuentro se dará en el futuro perfecto – o sea, en el registro de lo que “habrá sido” –, prescribiendo a lo que ya ocurrió las

mismas condiciones de posibilidad arrogadas por el acto de autonomización que lo reivindica/recuerda. En síntesis, las luchas pasadas *habrán sido* autonomías siempre y cuando así lo declare una nueva autonomía en el curso de su proceso de emergencia e instalación en el presente.

Pensar políticamente las políticas pasadas es el gesto que me propongo imitar en los próximos capítulos. Tal movimiento consiste en buscar palabras en la superficie del tiempo presente para luego sumergirse en la discontinuidad (interrupción) que ellas cristalizan y retienen. El período inaugurado por una discontinuidad singular será llamado “modo” o “secuencia” de la política. Como tendré la oportunidad de argumentar más detenidamente, estos modos son en número reducido, razón por la cual podríamos afirmar que, en cierto sentido, la política no es un dominio constante de la vida colectiva. Por lo general, retomando a Taussig, habitamos la historia y los contextos del Otro; es decir que no siempre puede existir una política singular o auto-nómica: por eso la necesidad de ser largamente fieles a sus rastros fugaces, eternamente fuera de lugar, eternamente demandantes de un cambio de actitud. Imitar el gesto de mis compañeros es absolutamente necesario en un relato que pretende abordar, de diversas formas y en las más variadas situaciones, cómo los sujetos construyen condiciones políticas para tornarse algo diferente de lo que “son” en un determinado momento y lugar. Sólo si concebimos claramente la posibilidad real y las condiciones subjetivas de la autonomía, podremos, en la segunda parte de la tesis, apreciar su “no-relación” con aquellos mecanismos estatales destinados a la captura, representación, síntesis y funcionalización de las potencias colectivas que suelen denominarse “políticas de desarrollo”.

Capítulo 2

Pensar políticamente las políticas pasadas

En el fondo, cada nombre de la historia soy yo.
Friedrich Nietzsche, Carta a Burkhardt

Toda política cumple una separación.
Sylvain Lazarus, Antropología del nombre



2.1 La gente pensó, la gente piensa.

Pensar el pasado políticamente en el seno de una política en curso, como hacían mis interlocutores en la UTAA, tiene consecuencias diferentes de aquellas producidas por un gesto análogo emprendido fuera del agenciamiento político sindical. Como vimos en el capítulo anterior, para los dirigentes de UTAA el gesto de suponer la existencia de una autonomía pasada conducía a la problematización de las condiciones necesarias para la actualización de una nueva autonomía. En este caso, el reconocimiento de una vieja

autonomía confrontaba a los sujetos, en el presente, con la posibilidad de otra autonomía: la suya propia. Para mí, por otra parte, la suposición de una autonomía pasada no deviene inmediatamente política, sino que se despliega en un procedimiento de identificación de sus condiciones subjetivas de posibilidad. En palabras de Judith Hayem, un estudio antropológico no equivale a un proceso político porque “en el primero está en juego un entendimiento de las subjetividades políticas, mientras que en el segundo es fundamental contribuir para el nacimiento, expansión e, idealmente, para el éxito [de esas mismas subjetividades]” (Hayem, 2012: 519).

En la medida en que, al momento de escribir este texto, no me propuse contribuir en forma deliberada para la expansión de los criterios de transformación del campo social pregonados por la política de la UTAA en el año 2015, me alejé del agenciamiento político sindical. Y dado que me interesa indagar en los contenidos de ciertos procesos de subjetivación política, tanto en el presente, como en el pasado, estoy moviéndome en el terreno de una antropología²⁶. Se trata, sin embargo, de una antropología política (y no *de la* política) porque sus protocolos de investigación suponen la política como momento de autonomía – y no apenas como un campo o dimensión de la vida social. Podríamos plantearlo de la siguiente manera: una política se piensa a sí misma, da legibilidad y extrae consecuencias a la autonomía que le subyace. Ella prescinde, por ende, de las ciencias sociales para ser definida en sus sentidos últimos. Asumiendo esta tesis, una antropología política se propone pensar lo que se piensa en el pensamiento de una política, o sea, acompañar el movimiento de sus categorías e identificar sus prescripciones inmanentes, absteniéndose de someterlas al régimen explicativo de una disciplina académica. Cuando deviene “política”, una antropología declina de la necesidad de “antropologizar” lo que las personas dicen y hacen en referencia, por ejemplo, a la identidad, la etnicidad, la cultura, la época o cualquier otro sistema de reglas implícitas que pudiera constituir un *background* objetivo para la explicación de las mutaciones subjetivas (cf. Neocosmos, 2012a; Hayem, 2012). La hipótesis inicial de una antropología política es la misma que sostiene cualquier

²⁶ Cuando afirmo que el texto de esta tesis se despliega fuera de un agenciamiento político, no estoy negando que su contenido pueda, eventualmente, recibir usos políticos. Sugiero apenas que en el terreno de una antropología el análisis de las políticas pretéritas no se inserta, inmediatamente, en el proceso de actualización de un modo contemporáneo de la política. Durante el trabajo de campo en Bella Unión, desarrollé junto a mis compañeros en la UTAA algunos ejercicios de recuerdo que respondían directamente a los propósitos de la política sindical (Capítulo 8). En este caso, la investigación estuvo integrada a una política porque sus objetivos y problemáticas derivaban de los acuerdos establecidos en el marco de un compromiso militante con las luchas del sindicato. A su vez, esta tesis procura contemplar otra agenda reflexiva, orientada al desarrollo de las hipótesis y premisas de una antropología política. Aquí, mi apuesta fundamental consiste en poner en práctica – y sostener teóricamente – la posibilidad de un análisis sistemático del momento autónomo de los procesos políticos presentes y pretéritos.

autonomía política, a saber: lo que uno puede llegar a hacer o pensar no es, necesariamente, fruto de las reglas o de las estructuras, aunque ocurra en medio de ellas. Aquí estamos probablemente muy lejos del canon de la antropología política “clásica”, pero eso no nos acerca necesariamente a ciertas expresiones contemporáneas de la “antropología de la política”. Una rápida digresión puede ayudar a mensurar distancias y aclarar perspectivas teórico-metodológicas.

Los primeros análisis estructural-funcionalistas pensaron la política – o mejor, lo político – como un subsistema interior a la totalidad social – análogo al parentesco y la religión – que cumplía funciones de cohesión y ordenamiento, manifestándose como Estado especializado en algunas sociedades y operando mediante la oposición complementaria de segmentos en otras (Pritchard y Fortes, 2010 [1940]). Luego, esta dicotomía – sistemas estatales y no estatales – sería matizada por otras corrientes teóricas que pasarían a pensar la organización política de las sociedades, especialmente las “tribales”, como un proceso susceptible de oscilaciones entre polos jerárquicos y polos igualitarios (Leach, 1996 [1954]). De todos modos, la oscilación política no dejaría de abordarse como un aspecto constante y relativamente reglado del sistema social, marcado por etapas ritualizadas mediante las cuales la sociedad va gestionando, periódicamente, sus tensiones y contradicciones (Gluckman, 1978 [1965]; Turner, 1974 [1969]). Más lejanos del horizonte funcionalista, algunos enfoques marxistas identificaron en lo político la manifestación transversal del proceso hegemónico de una sociedad, evidenciado por la movilización de distintas modalidades – rituales, ideológicas, organizacionales – de afianzamiento de la dominación, la explotación material y la distribución desigual de roles y atributos sociales (Meillasoux, 1977; Godelier, 1977).

Marcio Goldman (2006) señala que los itinerarios de la antropología política clásica tendieron a serpentear entre el sustantivismo²⁷ – conceptualizando la política como un subsistema que, en las sociedades tradicionales, jugaría un rol semejante al del Estado – y el formalismo – presentando la política como un elemento permanente de todas las expresiones de la vida social, netamente asociado a la coacción y el poder. En diálogo con Moacir Palmeira, el autor prefiere “evitar concebir la política como un dominio o proceso

²⁷ Goldman aplica la oposición formalismo/sustancialismo – central en debates clásicos de la antropología económica – para distribuir las tendencias predominantes en el estudio antropológico de la política. Cito sus palabras: “Así, si [en antropología económica] la economía podía definirse como un subsistema del sistema social o un tipo específico de relación social, también era posible defender la hipótesis de que lo económico constituiría [...] un aspecto de cualquier sistema o relación social. De forma análoga [...] en la antropología política lo político puede concebirse como una esfera de relaciones o como un aspecto de cualquier relación social” (Goldman, 2006: 119).

específico, definible desde afuera” para, alternativamente, investigar aquellos fenómenos que, “desde el punto de vista del nativo”, serían considerados política (Goldman, 2006: 40). Según él, esto permitiría una ampliación del campo de análisis, tornándolo permeable a lo “que normalmente se excluye de la política: los faccionalismos, las segmentariedades, las redes sociales [...] y también el parentesco, la religión, el arte, la etnicidad, etc.” (ibid.: 42). En este punto de su argumento, Goldman se apresura en aclarar que “no se trata de desvendar supuestas relaciones entre subsistemas relativamente autónomos; tampoco [de] revelar que detrás de todo eso estarían ocultas relaciones de poder”. Concretamente, su objetivo es “elaborar teorías etnográficas capaces de devolver la política a la cotidianidad” (ibid.). La “teoría etnográfica” que sostiene el “punto de vista del nativo” sobre la política dependería de la recuperación de una “diversidad de opiniones” que, a su vez, autorizarían la reconstrucción de “hechos invisibles”, es decir, de “objetos sociales” (como la política) cuya definición, en el texto antropológico, los volvería inteligibles. Aquí, la política sigue siendo un “hecho”, un “objeto” y a veces “un campo” integrado a la normalidad de la vida cotidiana.

Recupero sucintamente los argumentos de este autor por dos razones. En primer lugar porque estoy de acuerdo con él en lo concerniente a la necesidad de buscar alternativas al sustancialismo y al formalismo, evitando tanto la calcificación *a priori* de la política en un conjunto de atributos o atribuciones socialmente localizados, como su inscripción en todas las relaciones sociales en tanto sinónimo de poder. En segundo lugar, porque su libro sobre la política en la ciudad de Ilhéus (Estado de Bahía, Brasil), del cual tomé las citas anteriores, es una de las actualizaciones más recientes y visibles de un tipo de abordaje antropológico de la política que ha hecho escuela en Brasil y en otras partes del Cono Sur. Como el mismo Goldman lo menciona, su antropología de la política es tributaria de los enfoques de Moacir Palmeira y de otros antropólogos que gravitan el Núcleo de Antropología da Política, compartiendo sensibilidades teórico-metodológicas convergentes. Dichas sensibilidades parecen orientarse por ciertas premisas básicas que el argumento de Goldman permite entrever y que podrían sintetizarse así: la política no es un dato *a priori*, sino una categoría etnográfica resultante de lo que dicen y hacen quienes la enuncian (Peirano, 1998; Kuschnir, 2007); la política tiene sus “tiempos” y sus espacios concretos y se compone con otras “dimensiones” de lo social (Peirano, 2017: 22; Borges, 2004); desde el punto de vista nativo – y en analogía con la noción antropológica de ritual – la política es la “actividad” propia de determinados tiempos, como las elecciones, cuando

las posiciones sociales se trastocan y nuevas composiciones colectivas y ejes de conflictividad se tornan visibles (Palmeira, 2002).

Desubstancializada y desformalizada, la política es devuelta a lo cotidiano: se repite cíclicamente, tiene sus tiempos y espacios, ambos moldeados por el orden social y representados por quienes lo viven desde sus respectivos horizontes de agencia. La política ya está ahí, de modo que a la teoría etnográfica le corresponde recuperarla, recomponerla. A través de una multitud de gestos y palabras, el etnógrafo puede hacer hablar los sentidos que las personas atribuyen a su sociedad, es decir, a la distribución de los espacios, los tiempos y las funciones en los que se afianza el orden (político) que les tocó vivir. Aquí, la política pertenece al dominio de lo existente: es una experiencia representable de lo que existe y de lo que se repite. La política habla en el texto antropológico mediante la reseña de las acciones normadas y estructurantes que definen un mundo local, configurando legalidades que se deducen de la acción de sus componentes y que se remarcan con categorías descriptivas, vagamente inspiradas en teorías sobre el ritual, el parentesco y, más recientemente, el rizoma. Así, empieza a tomar forma el “hecho invisible” política: esquema de muchos esquemas, mapa de muchos mapas, que nos retorna una visión más sistemática del estado actual – o la morfología – de un mundo específico, poblado de composiciones y disgregaciones entre segmentos múltiples y más o menos proliferantes (Goldman, 2006: 141 y ss.). Ninguna premisa antecedería el acto de dibujar estas imágenes, salvo – me parece – la de que la política *ya tiene* una – o muchas – lógica(s) cuyos criterios pueden deducirse retroactivamente de su misma actividad, de su mismo proceso.

En tanto objeto invisible deducido de la regularidad empírica, la “política” es compuesta analíticamente a partir de las palabras y actos de quienes la construyen distraídamente, mientras hacen lo que siempre hicieron: van a votar, visitan a los vecinos, se pelean con los parientes, arman sus facciones. Esta es una forma de abordar el campo político cuya riqueza e importancia hay que reconocer, puesto que vuelve visibles las espacializaciones, localizaciones y estrategizaciones que conforman, tensionan o sedimentan el tejido relacional de un mundo social dado. Pero también hace falta señalar que las sensibilidades de ese enfoque etnográfico no armonizan directamente con aquellas que informan la pretensión teórica de pensar lo extra-ordinario y lo intempestivo de la política. No se trata de énfasis distintos sobre un mismo “objeto”, sino de una homonimia que involucra a la palabra política y la bifurca en dos registros paralelos e irreductibles de lectura de la realidad social: uno parte de lo socialmente dado y, mediante el

reconocimiento de sus regularidades, ya sean morfológicas o discursivas, pretende encaminarse hacia una síntesis teórico-conceptual de cómo funciona la política en ciertos grupos. Aquí, la política es un concepto que permite esquematizar formas regulares – i.e. recurrentes y sistemáticas – de composición colectiva generalmente asociadas a las rutinas electorales, sindicales, a la organización de demandas frente al Estado y a los fenómenos faccionalistas en cualquier institución. A su vez, el otro registro pretende encontrar la política en el dominio de aquellas prescripciones – o actos de palabra y pensamiento – que revelan atributos nuevos en los emplazamientos dados, reconociéndoles un cambio de actitud posible y una forma alterna de subjetivación. Aquí la política no posee referentes privilegiados y emerge de los enunciados que propenden a la autonomía en cualquier dominio de la existencia colectiva. Los trabajos de Lazarus son la expresión fundacional de una antropología que aborda la política en tanto pensamiento singular, proponiendo un análisis de los enunciados que

se desarrolla menos en relación con la situación en la cual [ellos] se produce[n] que en el cuadro de las prescripciones que propone[n]. Tales prescripciones, a su vez, no son tomadas como prescripciones *de* la situación, [es decir] como una intelección de lo concreto, sino como un campo propio: el campo del pensamiento de las personas, que configura lo real a través de la prescripción de los posibles (Lazarus, 2001a: 399). Énfasis en el original.

Recorriendo caminos investigativos diferentes a los míos, Lazarus se encontró ante la necesidad de practicar una antropología política que denominó “antropología del nombre”. El punto de partida y la condición de posibilidad de la antropología del nombre es el reconocimiento de la potencial autonomía subjetiva de las personas, sintetizado en el enunciado “la gente piensa”. De apariencia simple y consensual, este enunciado conduce a un protocolo de lectura poco usual de los procesos políticos presentes y pasados. En palabras del autor, tal protocolo implicaría

elucidar lo subjetivo desde el interior de lo subjetivo, o, como digo yo, elucidar lo subjetivo “en interioridad”, y no mediante la convocación de referentes objetivistas o positivistas. La política, en un sentido renovado, valdrá aquí como ejemplificación de un planteamiento en subjetividad. En efecto, mi tesis fundamental sobre la política es que es del orden del pensamiento. Se trata de una tesis sobre el carácter irreductible de la política, irreductible a cualquier otro espacio que el suyo propio, y de una tesis sobre la necesidad de reflexionar en ella a partir de su singularidad (Lazarus, 1996: 9).

El protocolo de lectura propuesto por Lazarus responde positivamente a mi intención de estudiar la política como momento de autonomía, razón por la cual me valdré ampliamente de sus orientaciones en todos los capítulos de esta tesis donde esté en juego el análisis de lo que las personas han pensado y enunciado con miras a la transformación de sus propias vidas. Dada la importancia representada por el aporte teórico-metodológico de

la “antropología del nombre” a la hora de emprender mi propio esfuerzo analítico, me parece necesario revisar detenidamente algunos de sus conceptos clave. La presente recuperación conceptual también se justifica en la medida en que el trabajo de Lazarus está prácticamente ausente del debate antropológico regional. Tal situación vuelve desaconsejable dar por sentada la familiaridad del/de la lector/a con su repertorio conceptual.

Convendría, entonces, comenzar por la noción de “nombre”, que define la antropología planteada por Lazarus. El nombre es lo innombrable del pensamiento, su punto irrepresentable: el índice de una singularidad real que se hace constar a través de ciertas categorías. Afirmar la existencia del nombre equivale a reconocer la presencia de una singularidad real que por definición es innombrable en sí misma. De acuerdo con el autor, la antropología del nombre “se propone una investigación de lo subjetivo [y] sostiene un procedimiento de innominación de los nombres” (1996:135). Todo el desafío de esta antropología reside en cuidar del nombre, resguardarlo del afán definicional, evitar re-marcarlo más allá de las categorías que subjetivan singularmente su singularidad: “el nombre es innombrable porque es el de una singularidad irreductible a cualquier cosa que a sí misma, mientras que toda nominación abre a una generalización, a una tipología o a una polisemia [...] que niega la singularidad” (ibid.:13). Badiou – con quien Lazarus ha cultivado afinidades e influencias teóricas recíprocas – puede ayudar a elucidar lo que se pretende evocar con la noción de nombre. El filósofo concibe el nombre innombrable de la política como “un vacío” alrededor del cual proliferan enunciados. El vacío es la inconsistencia de un mundo: el punto en que determinado orden de cosas “falla” debido al comportamiento anormal, sustractivo, de alguno de sus componentes. Cuando ocurre la falla, sabemos que algo sucedió, pero no sabemos qué sucedió en sí mismo – ni mucho menos por qué – y eso realmente no es lo fundamental. Lo importante es estar atentos a las consecuencias desencadenadas por la presentación azarosa de lo sustractivo en tanto forzamiento del ordenamiento social. A partir de ese momento de presentación/sustracción, es posible que una política se despliegue como proceso de subjetivación o como “proceso de pensamiento bajo condiciones que son acontecimentales, y en una materia que tiene la forma de una situación” (Badiou, 2012 [1992]:221). Una política acusará, moldeará y sustentará un acontecimiento que se sustrae a la cadena de sentido, extrayéndole consecuencias y haciéndolas reverberar en un mundo determinado.

Retornemos a Lazarus: “la proposición es, pues, que el nombre existe; o sea, entendámonos bien: la singularidad existe pero no se la puede nombrar, solamente

comprenderla por lo que serán sus lugares” (1996:13). Nombre “es el nombre de aquello cuyos lugares del nombre son los procesos múltiples; el nombre de una singularidad y de lo que no tiene lugar más que una vez” (ibid.: 108). El desafío es no agotar la singularidad sometiéndola a planos de realidad o “hechos invisibles” definidos por otra intelectualidad. La antropología del nombre se propone entonces gravitar las categorías del pensamiento de las personas sin hacerlas depender de construcciones categoriales de segundo orden, pertenecientes a otros procesos intelectivos. Lo subjetivo se elucida desde el interior de lo subjetivo²⁸. En este caso, el desafío es pensar “lo que se piensa en el pensamiento: es el pensamiento lo que es preciso identificar, y las categorías que le son propias” (ibid.:93). Se trata de un programa reflexivo que pretende pensar el pensamiento de las personas fuera del sustrato de los grupos. En efecto, quienes piensan – es decir, “las personas” – serán tomadas como “indistintos determinados” – no sabemos qué son – que subjetivan la propia situación y la ponen en juego, lo que implica ponerse en juego a sí mismas y, eventualmente, tomar decisiones al respecto, compartirlas y someterlas a prueba. La posibilidad de pensar el pensamiento de las personas sin afiliarlo *a priori* a una (pre)supuesta pertenencia grupal es sostenida por Lazarus del siguiente modo:

[...] [la cuestión] no es quién piensa, ni una problemática del sujeto, ni una problemática de las clases [...] la gente es un *indistinto determinado* [*indistinct certain*] que la evolución de la investigación antropológica consigue aislar. El indistinto determinado no designa ni a un grupo, ni a una estructura, ni a un modelo. Se puede decir que es un *ser-ahí* indistinto con respecto a la historia y a la sociedad. En el cara a cara entre la gente y su pensamiento, no se trata de reconducir la confrontación entre factores objetivos concernientes a la gente (profesión, salario, formación, lugar de residencia, etc.) y las representaciones, sino de interrogar en el pensamiento de la gente, la relación de la gente con su pensamiento (ibid.:53). Énfasis en el original.

“La antropología del nombre – escribe Lazarus – quiere pasar, a propósito del pensamiento, *de la idea hoy aceptada de que el pensamiento es relativo, a la idea de que es singular* [...]” (ibid.:46). El autor afirma enseguida que la singularidad de un pensamiento está constituida por el hecho de que éste no es reductible a ninguna otra cosa más que a sí mismo. ¿Qué es el “sí mismo” del pensamiento? Es su nombre o su “relación

²⁸ Por poner un ejemplo trivial: no convendría hacer depender un enunciado cualquiera de la “cultura” en la cual supuestamente ocurre. Podríamos sustituir cultura por cualquier objeto invisible cuya movilización bajo la forma de concepto tienda a tipologizar un pensamiento, convirtiéndolo en el “caso” de algo, es decir, en la expresión de una objetividad supuesta que trasciende al pensamiento mismo. Aun cuando las ciencias sociales pretendan deducir sus objetos de segundo orden de la regularidad empírica, hay, en primer lugar, la suposición de que dichos objetos existen. La multiplicidad debe marchar hacia ellos, decantando en conceptos. Detrás de las acciones y enunciados más explícitos, debe haber un esquema que los condicione y explique. Por tanto, todo lo que las personas dicen y hacen autorizaría la construcción de algún modelo que luego basculará sobre la explicación de las conductas. En la antropología del nombre, por otro lado, el único “hay” previo al pensamiento – un “hay” que no está por constituir – es lo real, pero este real es inenunciable y sólo puede accederse desde sus problematizaciones singulares, manifiestas en categorías de pensamiento.

de lo real”, respondería Lazarus. En otras palabras, su relación con lo no conocido que bascula sobre él y lo tensiona. La intelectualidad de las personas no es, entonces, derivación, representación o reflejo de “algo” establecido *a priori* o *a posteriori* por otra intelectualidad, sino ramificación de una realidad que irrumpe en el pensamiento y se transforma en su influjo.

Para Lazarus la política es del orden del pensamiento y, siendo tal, ocurre bajo dos modalidades: en interioridad y en exterioridad. La primera tiene lugar cuando una singularidad subjetiva – una intuición, una experiencia de lo abierto y lo desconocido – postula sus propios criterios de existencia, sustrayéndose a las legalidades y objetividades pre-establecidas. En este caso, “no es el pensamiento sobre el Estado el que nutre un pensamiento político, pero sí algunas categorías propias y singulares, ‘inventadas’ para la secuencia política en cuestión” (Lazarus, 2001b: 98), incluso cuando el propio Estado está en juego. Atento a la diferenciación lazariana entre “exterioridad” e “interioridad”, Neocosmos concluye que no se puede rotular ciertos discursos y prácticas como “políticos” apenas “porque ellos se relacionan explícitamente con objetos identificables de la política estatal (estados, naciones, sindicatos, movimientos, ciudadanos, elecciones, ONGs, etc.)” (2012b:469). Es necesario, ante todo, especificar de qué política estamos hablando. Una política en interioridad nunca está dada *a priori*, no habita un “reino” permanente de lo social. Por el contrario, ella acostumbra a ser infrecuente. Mis interlocutores en la UTAA lo sabían muy bien: una cosa era el día a día de la negociación con los patrones y las instituciones del Estado y otra, sustancialmente distinta, era la “autonomía”, capaz de reconectarlos con “la fuerza de lo que es UTAA” y desconectarlos, transitoriamente, del compromiso intelectual con los sentidos y las convenciones que afianzan la realidad actual. A su vez, la política en exterioridad – que suele ser presentada como “la” política por excelencia – tiene lugar en el espacio subjetivo del Estado y se piensa a partir de las estratificaciones sedimentadas por este último. En ella, las personas son llamadas a opinar sobre – o a representar las – objetividades existentes a partir de segmentaciones pre-establecidas (por ejemplo: “los trabajadores”) y de acuerdo con mediaciones más o menos protocolares (consultas públicas, consejos de salarios, elecciones).

Lazarus está especialmente interesado en las políticas “en interioridad”, y es exactamente por eso que su teoría adquiere relevancia en la construcción de mi análisis. Para él, esta modalidad de la política, rara y secuencial, se identifica mediante categorías y lugares. Cuando una política en interioridad está en curso, existe relación entre ella y su pensamiento. El pensamiento piensa la política, prescribe su existencia, es fiel a ella, pero

no se le yuxtapone completamente. Cuando un curso de acción política deja de tener lugar, o sea, cuando pierde historicidad, lo que queda es su pensamiento (el enunciado de su línea de devenir, de su campo de posibles): en él podemos cifrar las cristalizaciones prescriptivas que caracterizaron un modo histórico de política. Por cristalizaciones prescriptivas debemos entender la marca, dejada en el pensamiento, de las separaciones operadas en un modo – o secuencia – de la política. Decimos que una política perimió – o expiró – cuando dejó de tener lugar(es). El fin de un modo histórico de la política está definido por la cesación de sus lugares. Cuando esto ocurre, la política perimida pasa a existir en intelectualidad, dándonos la oportunidad de reexaminar el contenido categorial de sus “protocolos y procesos de subjetivación” (Lazarus, 1996: 29). La singularidad modal de una política es accesible, en suma, a través de las categorías que fueron subjetivadas y problematizadas por personas específicas durante cierto tiempo y en determinados lugares para prescribir un posible en el corazón de la vida en común. ¿Qué significa prescribir posibles? Para Peter Hallward (2005), una prescripción convierte lo cotidiano en su opuesto, tornando relaciones sociales que en principio eran inconsecuenciales, ambivalentes o multipolares en relaciones consecuenciales, es decir, bipolares y divisorias. Al hacerlo, la prescripción anticipa su poder subsecuente, es decir, presenta un *posible* que los sujetos políticos deberán sostener. En el proceso de enunciar una prescripción, el sujeto político define sus propias fronteras:

El sujeto político prescriptivo existe en su interfaz militante y emergente con el mundo, y no tanto en algún emplazamiento psicológico (ni mucho menos cultural o biológico). En otras palabras, la autonomía prescriptiva presume necesariamente algún tipo de salto cualitativo en la constitución del sujeto, un salto que habilita su libertad relativa respecto de las determinaciones causales o presubjetivas (Hallward, 2005: 781).

El trabajo prescriptivo es un trabajo de separación inherente a la política: “no siendo la política ni una moral ni una religión, lo prescriptivo no estará ni del lado del orden dado, ni del lado de la ley, ni del lado de la regla” (Lazarus, 1996:42). La prescripción no es otra cosa que “un trabajo de separación” posible y, por consiguiente, “practicable, racional”. Lo posible es, al mismo tiempo, “el trabajo de la separación [...], la decisión de cumplir ese trabajo y su efectividad” (ibid.). Sinteticemos: si hubo una política es porque hubo algunas separaciones que se cristalizaron en prescripciones y quedaron retenidas en ciertos enunciados. En los estudios que serán presentados tanto en este capítulo como en el siguiente tendré la oportunidad de identificar diversas prescripciones formuladas en el seno de las luchas populares en Bella Unión. Entonces quedará claro que las prescripciones enuncian lo que se tornará problemático en el campo de una política,

señalando las nuevas cualidades, relaciones y potencialidades a ser exploradas por las personas a partir de un universo categorial históricamente dado.

No está demás reiterarlo: una política opera siempre algún tipo de separación para lograr desplegarse²⁹. Sus lugares “no son una declaración de localización, sino de deslocalización” (Lazarus, 2016:117). Michael Neocosmos plantea el tema en forma cristalina: estamos pensando una política cuando encontramos un lugar donde las personas organizan la subversión de su localización: “podríamos argumentar que es sólo desde la subversión subjetiva del lugar, desde una posición fuera del lugar, que tanto el lugar como su cuestionamiento pueden entenderse, de modo de convertir lo nuevo en objeto de pensamiento” (Neocosmos, 2012a:531). Bruno Bosteels ofrece especificaciones útiles al respecto cuando, en sintonía con Lazarus, identifica en la política un procedimiento inmanente de subjetivación que produce “verdades colectivas inéditas”, capaces de desgarrar los lazos sociales existentes y prescribir los fundamentos de una nueva justicia (Bosteels, 2016:178). En diálogo con Michel de Certeau, podríamos ahora sugerir que una política tiene lugar cuando algo se desacomoda en lo cotidiano y aparece un espacio “creado por la distancia que separa lo representado de sus representaciones, a los miembros de una sociedad y las modalidades de su asociación” (de Certeau, 1996:36).

Las coordenadas teórico-metodológicas revisadas hasta aquí nos permitirán abordar las políticas pasadas a partir de la indagación de sus momentos de autonomía. En los próximos apartados me concentraré en la recuperación de dos modos de la política ocurridos antes del golpe de Estado de 1973, que dio inicio a más de diez años de dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985). En el capítulo 3, veremos cómo un grupo de trabajadores rurales bellaunionenses inventó sus propios medios organizativos para volver a pensar la política aun cuando ésta parecía haber sido completamente condicionada por el marco legal y las asperezas del ajuste neoliberal de los años noventa. El análisis modal de las políticas pasadas nos permitirá ingresar a algunos de los talleres subjetivos donde las generaciones anteriores transmutaron sus posibles en palabras y, al hacerlo, los tornaron indefinidamente disponibles a la apreciación de las generaciones venideras.

En este capítulo voy a detenerme en un conjunto de fuentes que, si bien podría considerarse acotado desde el punto de vista historiográfico, resulta suficiente para poner a prueba el análisis modal de la política. Cuento, básicamente, con las memorias de un ex cortador de caña que participó en la fundación de la UTAA; la transcripción de algunos

²⁹ Como veremos en el capítulo 3, el esfuerzo de anulación de una política por parte de ciertas instituciones del Estado consistirá, invariablemente, en negar las separaciones que ella prescribe.

trechos del boletín Tierra y Libertad publicado por el sindicato a inicios de los '70; una entrevista concedida por los dirigentes del sindicato al periódico Cuestión en 1971 y todas las ediciones del semanario Marcha que registraron, de algún modo, el despliegue de la política popular en los cañaverales del norte uruguayo entre 1962 y 1972³⁰. Tuve la suerte de poder consultar una colección completa de ese periódico en el repositorio virtual Anáforas, mantenido por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. El contenido de dichos documentos fue complementado con fuentes historiográficas que me permitieron reconstruir más densamente las situaciones de sociabilidad en cuyo marco emergieron aquellas prescripciones que serán identificadas en los próximos acápite.

Vale aclarar que en el presente capítulo, y en el siguiente, no está en juego la composición de un relato historiográfico, sino más bien la búsqueda de enunciados prescriptivos y el análisis de las operaciones intelectuales que los caracterizan. Una prospección de esta naturaleza puede darse sobre cualquier fuente primaria o secundaria confiable, desde que en ella esté registrada alguna prescripción. Lazarus (1996), por ejemplo, identifica las prescripciones de lo que él denomina “modo revolucionario de la política” en los escritos Saint-Just entre 1792 y 1794. Allí, desde su perspectiva teórica, la palabra “revolución” constituyó una categoría de la política en interioridad³¹. Alain Badiou (2008) radicaliza todavía más este procedimiento: él detecta en el texto de un simple panfleto pegado a las apuradas en los muros de París, durante la masacre de la Comuna, el índice de un hecho político de cortísima duración – apenas perceptible – que habría representado el último intento de los insurrectos de 1871 por asegurar la existencia autónoma de su movimiento antes de la completa aniquilación militar³². En este caso, no

³⁰ En lo que respecta al semanario Marcha, utilicé principalmente aquellas notas periodísticas que se proponían recuperar el habla de los militantes de UTAA a través de entrevistas, o que ofrecían transcripciones de documentos – comunicados, cartas – emitidos por el sindicato.

³¹ Lazarus se expresa en los siguientes términos respecto de su definición del “modo revolucionario de la política”: “En Francia existió un modo singular de la política en interioridad desde el verano de 1792 hasta el verano de 1794 [...] del que Saint-Just es el gran teórico. Propongo llamar a este modo de la política en interioridad *modo revolucionario de la política*; ‘revolucionario’, pues la revolución es en él la categoría central y general del pensamiento de la política. “Revolución” no es una categoría histórica de la situación y no hay que entenderla como una tentativa de objetivación y de historización. La revolución es la categoría de conciencia de la situación, y es, al mismo tiempo, la categoría y la materia de la política” (Lazarus, 1996: 157-158). Énfasis en el original.

³² En su análisis, Badiou reflexiona que “Allí [en el manifiesto pegado en los muros de la ciudad de París] se exige la disolución conjunta de la Asamblea (legal) de Versalles y de la Comuna, el retiro del ejército de París, un gobierno provisorio confiado a los delegados de las grandes ciudades, una amnistía recíproca. ¿Cómo calificar ese triste “Manifiesto”? Por su incongruencia misma, no podría deducirse de la normalidad del devenir. Expresa todavía, aunque más no fuere en jirones, o por irrisión, la certeza de sí de la Comuna [...] Es legítimo considerar este papel, que el viento de las casernas llevará a las mazmorras, como un sitio.

importa que sólo un puñado de personas – el desangrado Comité Central de la Comuna – hubiera sostenido determinada prescripción. Lo relevante era constatar que semejante esfuerzo político existió y dejó un rastro material, indefinidamente disponible a quien desee revisarlo.

En lo concerniente a este capítulo, la idea es referenciarse en los “recuerdos políticos” que los integrantes de la UTAA experimentaban en 2015. Por esta razón, importan aquellas prescripciones que incluyan palabras muy específicas: concretamente, los índices históricos que inquietaban a mis interlocutores (“UTAA”, “Sendic”, “tierra”, “revolución”). Dado que por ahora lo fundamental es sondear prescripciones políticas, se vuelve secundaria la verificación de su incidencia en el reordenamiento de las relaciones sociales concretas³³. De todos modos, esta última tarea será realizada siempre que las fuentes historiográficas de que dispongo me autoricen hacerlo. Cabe observar que lo más importante en el estudio de los modos históricos de la política no es saber hasta qué punto las prescripciones se efectivizaron o no, sino registrar su apareamiento – es decir, situarlo espaciotemporalmente – y determinar su contenido categorial. Antes de comenzar nuestro itinerario, conviene conocer un conjunto de transformaciones económicas que favorecieron la confluencia, en Bella Unión, de aquellas personas responsables del desencadenamiento de la primera secuencia de agitación política popular observada en el norte uruguayo desde los primeros años del siglo XX.

2.2 Lo que la caña une, la política separa

En su minucioso estudio sobre el desarrollo histórico de la agricultura en Bella Unión, María Inés Moraes (1990) indica que la introducción del cultivo de la caña de azúcar en el norte uruguayo se remonta al año 1941 y es el resultado de las pioneras inversiones emprendidas por la Compañía Azucarera Artigas Sociedad Anónima (CAASA)³⁴. En 1942 esta empresa comenzó a construir el primer ingenio azucarero del Uruguay. Buena parte de las piezas utilizadas en el montaje de la fábrica provenía de viejos ingenios de la provincia argentina de Tucumán y otro tanto fue fabricado en los propios talleres de la CAASA. En 1944, este ingenio que ya nació obsoleto procesó el resultado de

No obstante, en el salvaje crepúsculo de la insurrección obrera, su valor de existencia es muy débil” (Badiou, 2008: 412).

³³ Tendremos la oportunidad de acompañar detenidamente el despliegue estratégico del trabajo prescriptivo de la política en los capítulos finales, donde analizaré las condiciones subjetivas de posibilidad y los impactos sociales de una secuencia autonómica bastante reciente.

³⁴ En 1937, el ingeniero Alfredo Mones Quintela había introducido cultivos experimentales de caña de azúcar en Bella Unión. Más tarde, Mones se tornaría funcionario de la CAASA y, posteriormente, lideraría el grupo de productores cañeros que adquirió el ingenio de dicha compañía luego de su cierre.

su primera cosecha, realizada en plantación propia. En el año 1945 fue creada La Azucarera Rioplatense S.A. (LARSA), que después sería comprada por la Compañía Agrícola Industrial del Norte (CAINSA), cuyo ingenio adquirido en los Estados Unidos entraría en funcionamiento en 1951. Entre 1941 y 1961, CAASA y LARSA-CAINSA expandieron el cultivo de la caña de azúcar hasta alcanzar las 3.000 hectáreas, redefiniendo la matriz productiva de Bella Unión.

Hasta el inicio de la década de 1950 preponderó en la zona el cultivo de las oleaginosas (linaza y girasol) y del trigo. Tal panorama se revirtió en los años subsiguientes por dos razones principales: el agotamiento de la capacidad de absorción de estas materias primas en la industria nacional y el fin de las medidas proteccionistas que resguardaban la producción de trigo. La consolidación del cultivo de la caña de azúcar fue beneficiada por fuertes subsidios y préstamos estatales, algunos de ellos amparados por la Ley de Especies Sacarígenas de 1950, que consistía en un dispositivo jurídico formulado por el neobatllismo³⁵ en el marco de su política de industrialización y sustitución de importaciones. En 1959, el Partido Nacional ganó por primera vez las elecciones presidenciales uruguayas, interrumpiendo abruptamente el proyecto económico que se venía desarrollando hasta entonces. La suspensión de las políticas proteccionistas de incentivo a la producción nacional de azúcar condujo al cierre de la CAASA, cuyo ingenio, construido con material de descarte, no garantizaba niveles de productividad compatibles con la viabilidad económica del emprendimiento industrial. Después que CAASA cerró sus puertas, los pequeños y medianos productores cañeros que le proveían de materia prima decidieron formar una cooperativa para comprar el viejo ingenio y, de esta forma, asumir las fases agrícola e industrial de la producción de azúcar. En la misma época, la compañía LARSA-CAINSA venía teniendo dificultades para financiar la modernización de su fábrica. Dicha situación terminó favoreciendo la compra de la empresa por los capitalistas estadounidenses de American Factory, que poseían una capacidad de inversión superior a la de sus homólogos nacionales. A partir de 1962, LARSA-CAINSA se transformó en la

³⁵ "Batllismo" fue un modelo de administración de la economía y la conflictividad social uruguay impulsado por José Batlle y Ordóñez en los períodos en que ocupó la presidencia de la República (1903-1907 y 1911-1915). En rasgos generales, dicho modelo propuso la ampliación y la consolidación del Estado de bienestar mediante legislaciones sociales y laborales de perfil progresista que reconocieron la autonomía del movimiento sindical y valoraron su actividad política. Entre 1947 y 1951, el presidente Luís Batlle Berres, sobrino de Batlle y Ordóñez, actualizó las premisas del batllismo, articulándolas con medidas macroeconómicas proteccionistas y sustitutivas de importaciones. La corriente política liderada por Luís Batlle, al igual que su período de mandato presidencial, quedaron conocidos como neobatllismo. Al respecto, ver Panizza (1980), D'Elía (1986), Arias y Rodríguez (2014).

Compañía Agrícola Franquía (CAFSA), inaugurando así la participación de capitales norteamericanos en la agroindustria azucarera uruguaya.

Desde fines de los años cincuenta, la agroindustria cañera de Bella Unión fue impulsada por tres actores económicos fundamentales, a saber: los capitalistas propietarios de los dos ingenios azucareros, los productores de caña cooperativizados o independientes y los asalariados agrícolas e industriales, cuyo número se venía incrementando sensiblemente desde que el cultivo de la caña se convirtiera en la principal actividad económica de la zona. La confluencia de estos tres actores en la estructuración de las relaciones locales de producción dio origen a dos ejes de conflictividad social que se tornarían perennes a lo largo de todo el desarrollo de la industria azucarera. Por un lado, los productores rurales estaban enfrentados con los propietarios de los ingenios como consecuencia de la disputa sobre el precio de la materia prima. Por otro lado, los trabajadores rurales e industriales enfrentaban a sus respectivos patrones – que eventualmente eran los mismos – en la disputa por el precio de los salarios.

En 1961, los productores de caña crearon la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (APCANU) con la intención de defender sus intereses de clase y promover lo que Moraes denominó “modelo cañero de desarrollo local”³⁶. El éxito de esta apuesta económica dependía, lógicamente, de los trabajadores rurales que afluían a Bella Unión desde los años cuarenta. Desde un principio, la acelerada expansión del cultivo de caña se asentó en la imposición de una elevada tasa de explotación de la fuerza de trabajo, sin la cual la viabilidad económica de la producción de azúcar en territorio uruguayo sería impensable. En la medida en que los cañaverales se expandían, la relativa escasez de mano de obra disponible en la zona fue contrarrestándose por el reclutamiento de trabajadores provenientes de Brasil y de Argentina. Estas personas, que ingresaban al Uruguay a través de la triple frontera, constituían la mayoría de los asalariados rurales empleados durante la época de la zafra. A partir de 1959, la entrada de trabajadores oriundos de Brasil y Argentina fue legalizada por un decreto del Poder Ejecutivo sin que esto significara una redefinición de las condiciones contractuales impuestas por sus

³⁶ La exitosa Exposición Agrícola Regional de 1957 significó, para los productores locales, una fuente de legitimación social que les permitió reivindicar para sí el rol de rectores de un modelo de desarrollo basado en la agricultura intensiva, orientada al abastecimiento de industrias instaladas el propio territorio. En una declaración ofrecida al diario *Guión*, a inicios de 1957, un agricultor bellaunionense reverenciaba “esa nueva generación de muchachos que a la par que cultivan la tierra, cultivan la inteligencia”, asegurando, así, “una producción notable [...] implantando la técnica del riego en sus formas más diversas” (*apud* Moraes, 1990:226).

patrones. De la misma forma que en años anteriores, la legislación laboral vigente en Uruguay siguió siendo ampliamente ignorada en los cañaverales del norte del país.

Los primeros conflictos laborales en las plantaciones de caña de azúcar se remontan al año 1954, cuando un grupo de cortadores de la compañía LARSA-CAINSA resolvió suspender sus actividades y exigir aumentos salariales. Esta demanda fue inicialmente acatada por la empresa, pero enseguida de volver al trabajo, los huelguistas terminaron siendo demitidos y los salarios rebajados al nivel anterior. Dos años después, en 1957, la misma empresa se tornó el escenario de un nuevo conflicto laboral, ahora ocasionado por el atraso en el pago de los salarios. En esa oportunidad, operarios, fleteros y administradores de la plantación entraron en huelga ante la demora de la empresa para atender a sus reivindicaciones colectivas. Los huelguistas informaron al Ministerio de Industria y a la Oficina Nacional del Trabajo sobre los motivos del conflicto y solicitaron una mediación gubernamental para dirimirlo. El escribano público enviado a la plantación de LARSA-CAINSA, entonces ocupada por sus trabajadores, tomó nota de la plataforma de huelga: “pago de jornales atrasados y respeto a la totalidad de las leyes sociales vigentes, incluyendo pago de licencias y aportes jubilatorios” (Moraes, 1990:234). En agosto de 1957, estos trabajadores recibieron el apoyo de la Federación Nacional de Empleados y Trabajadores Azucareros (FENETA), creada en pleno conflicto para movilizar a los funcionarios de otros emprendimientos azucareros del país a favor de la lucha desencadenada en LARSA-CAINSA. Quince días después de iniciado el conflicto, los trabajadores decidieron declarar una huelga de hambre. Ante esta situación, la empresa solicitó la mediación de un delegado del Ministerio de Industria para tratar de superar el *impasse*. Después de veintiún días de huelga, fue posible firmar un acuerdo entre trabajadores y patrones en el cual quedaba establecido que la empresa pagase la totalidad de los salarios atrasados hasta el final de la zafra en curso.

En su estudio sobre el desarrollo histórico de la agricultura en Bella Unión, Moraes detecta una inflexión entre las primeras huelgas de trabajadores de la industria azucarera (1954,1957) y la huelga declarada el 4 de enero de 1962 por la recién fundada UTAA:

la huelga que empezaba ese día sería muy diferente a la de 1957; el aparato estatal demoraría su definición hasta lo intolerable, las empresas azucareras demostrarían su resolución de no ceder ante la lucha sindical, el ejército y la policía reprimirían el campamento de los huelguistas y, finalmente, el conflicto cañero ganaría las primeras planas en la prensa montevideana (Moraes, 1990: 236).

La fundación de UTAA, el 21 de setiembre de 1961, marcó una doble separación – o ruptura – política en el entramado de relaciones sociales engendrado por la agroindustria

azucarera: por un lado, los intereses patronales fueron cuestionados en forma amplia y radical; por otro lado, FENETA fue acusada de “amarillismo” y su legitimidad sindical terminó poniéndose en jaque definitivamente. A partir de 1961, ante la inoperancia de FENETA, la UTAA comenzó a denunciar por cuenta propia el no cumplimiento de una serie de derechos laborales en los establecimientos azucareros de Bella Unión. Respondiendo a estas denuncias, un inspector de trabajo intimó a las empresas locales a regularizar inmediatamente la situación de sus empleados. Esto implicaba la remuneración de días de descanso y licencia, la indemnización de demisiones y la abolición de los vales – o bonos – como forma de pago de las jornadas de trabajo. Con el propósito de obtener más plazo para contemplar las disposiciones del inspector, las empresas decidieron abrir una ronda de negociaciones con FENETA en la cual se firmó un acuerdo favorable a los intereses patronales. La insidiosa maniobra de los empresarios y la injerencia arbitraria de una organización sindical poco expresiva llevarían a la UTAA a explorar nuevas formas de lucha para hacer cumplir sus exigencias. La historia económica muestra que a partir de 1961 un grupo de asalariados rurales reivindicó y realizó un cambio significativo de conducta en relación a sus patrones y al movimiento sindical existente hasta aquel momento en Bella Unión. En el próximo apartado, el desafío será identificar las condiciones subjetivas que, entre 1961 y 1962, determinaron el contenido político de dicho proceso organizativo.

2.3 Modo UTAA (1961-1962)

A inicios de los años sesenta, el nuevo sindicato de los cortadores de caña de azúcar de Bella Unión inauguró una secuencia política que vino a redefinir los términos y las consecuencias de la conflictividad social experimentada hasta entonces en el extremo norte uruguayo. Los lugares de esta secuencia fueron los “fogones” y las primeras asambleas de la UTAA, en 1961; el campamento en los márgenes del arroyo Itacumbú y la ocupación de la azucarera CAINSA, en 1962. Entre 1961 y 1962, la palabra “UTAA” se transformó en categoría de una política. Como tendré oportunidad de discutir más adelante, “UTAA” no designaba sólo una estructura institucional de tipo sindical, sino también un proceso subjetivo singular a través del cual la supuesta fraternidad entre patrones y empleados se volvió problematizable con referencia al “derecho”. Fue también en el modo UTAA que Raúl Sendic Antonaccio “apareció” en Bella Unión, aunque su nombre propio sólo se transformaría en categoría de la política en la secuencia 1964-1971, de la que me ocuparé en el siguiente apartado.

Quien trabajó en los cañaverales de Bella Unión desde finales de los años ‘50 menciona los “fogones” como un lugar de apacible sociabilidad masculina donde nuevas amistades eran cultivadas alrededor del fuego mientras el mate y la caña blanca circulaban de mano en mano. Por la noche, después del trabajo, los cortadores de caña y sus capataces se reunían en los fogones para compartir las noticias que oían en la radio y las anécdotas que traían de la rutina laboral. Las historias de aparecidos eran frecuentes, así como los relatos sobre animales peligrosos que acechaban las plantaciones y ponían en riesgo la vida de los cortadores menos cautelosos. Hugo Gómez Echagüe cortaba caña en la CAASA hacia el año 1961. En su libro autobiográfico, titulado *Memorias de un “Peludo”*, recuerda la noche en que se enteró de una nueva amenaza que rondaba los cañaverales de la región. Estaba reunido con sus compañeros en un fogón cuando

el capataz pidió permiso y se sentó junto a “los peludos”, traía un mensaje del patrón Don Hugo Emilio de la Peña, el cual consistía en avisarnos que en la zona andaba un alborotador [...] su advertencia fue clara: “el que fale con u comunista se va embora”, el patrón no quería reuniones ni charlas con ese señor (Gómez Echagüe, 2007: 58 *apud* Merenson, 2016: 98).

A pesar de las prohibiciones, el “comunista”, al cual Hugo se refiere como “Don Raúl”, supo manejar estrictamente los códigos de respeto y jerarquía que regían la participación en los fogones y, cierta noche, logró finalmente acercarse a los trabajadores: “Don Raúl llegó al fogón, saludó, se presentó y antes de tomar asiento o de aceptar un mate, dijo que venía de hablar con [el capataz] Don Omar de Cuadro [...] que le avisó que él iba a hablar con su gente y que Don Omar dijo que no podía prohibirle” (Gómez Echagüe, 2007:64 *apud* Merenson, 2016:98). En ese primer encuentro con Raúl Sendic, Hugo menciona que tuvo la oportunidad de “conocer otra realidad de la vida, sobre derechos y explotaciones” (ibid.). Analizando las memorias de Hugo, Merenson (2016) señala que aun reconociendo en Sendic “un maestro de lujo”, el autor no deja de reivindicar la relación fluida y respetuosa con su capataz y un grato recuerdo de sus patrones: “el Ingeniero Agrónomo Don Alfredo Mones Quintela – gran hombre y mejor persona – y Don Lirio Moraes, pioneros que con mucho sacrificio lograron llevar a cabo sus sueños de un ingenio de última tecnología” (Gómez Echagüe, 2007:110 *apud* Merenson, 2016:94). En el relato de Hugo, la evocación de cierta armonía respetuosa entre capataces, patrones y trabajadores se conjuga con el reconocimiento de algunas asimetrías o vicisitudes (“explotaciones”) sin que ambos registros entren en contradicción o se vuelvan objeto de cuestionamientos más sistemáticos. Para Hugo, el cortador de caña, o “peludo”, era asimilable a la noción más genérica del “hombre de campo” uruguayo, que

hace alusión a los “peones”, “alambradores”, “esquiladores” y “destajistas” en general: “seres humildes y sacrificados” (Gómez Echagüe, 2007:54 *apud* Merenson, 2016:94), “gauchos anónimos que también ayudaron a hacer la patria” (Gómez Echagüe, 2007:52 *apud* Merenson, 2016:94).

A partir de 1961, en el proceso de apertura de una nueva secuencia política, “peludo” sustentará la subjetivación de un antagonismo que no aparece en el relato de Hugo. Articulada con la sigla “UTAA”, la categoría “peludo” pasará a denotar un colectivo humano potencial, caracterizado ciertamente por la experiencia compartida de trabajo en los cañaverales y, más que eso, definido en su alcance por la fidelidad a un campo singular de indagación política. En este campo, la problematicidad del vínculo fraternal y respetuoso entre los trabajadores y sus superiores jerárquicos será (d)enunciada en referencia al “derecho”. En 2013, Ruben Santana Perez “Cepillo” publicó una autobiografía que curiosamente también lleva por título *Memorias de un Peludo*. Su contenido nos da una idea de cómo la categoría “peludo” comenzó a afianzar, entre quienes adhirieron a la militancia sindical en 1961, la conciencia de una nueva capacidad colectiva. Proveniente de Colonia Palma, Cepillo se mudó con su familia a las inmediaciones de CAINSA en 1958, a los quince años de edad. Desde temprano comenzó a cortar caña en las plantaciones de la CAASA. En 1960, escribe, “se hizo un paro pidiendo mejoras salariales, pero venían los milicos y sacaban a los compañeros que querían organizar”. A pesar de fracasadas, estas primeras tentativas de movilización significaron para el autor del libro la oportunidad de ir “entendiendo que tienes pequeños derechos, que son una vida mejor, y ya no teníamos miedo de hablar con los demás, intercambiar ideas” (Santana Perez, 2013:53).

“Entre bailes, guisos, fútbol y trabajar de sol a sol”, Cepillo cultivó el convencimiento y las afinidades militantes que lo llevarían a respaldar la fundación de la UTAA, realizada el 21 de setiembre de 1961 en un bosque de eucaliptus cerca de la localidad de Calpica. La fundación del sindicato fue seguida por otros tantos encuentros, generalmente nocturnos, iluminados por los fogones, en los cuales los militantes de la nueva organización sindical buscaban recoger, en diálogo estrecho y clandestino con los trabajadores, informaciones que dieran cuenta de las irregularidades jurídicas cometidas por las compañías azucareras. Una vez remitidas al Ministerio de Trabajo, estas informaciones justificarían el envío de una inspección para fiscalizar diversos establecimientos agroindustriales de Bella Unión en el mes de octubre de 1961.

En el mes diciembre, después de confirmadas las denuncias de UTAA, las empresas azucareras fueron intimadas a saldar sus deudas con los trabajadores. Sin embargo, como vimos en el acápite anterior, los empresarios prefirieron sentarse a negociar con FENETA para tratar de dilatar al máximo el plazo de pago de los valores adeudados a sus empleados. En este contexto, comenzó a desencadenarse una serie de acontecimientos que fueron sedimentando un pensamiento de la política propio de lo que podríamos denominar “modo UTAA”. Acompañemos su desarrollo a través del relato de Cepillo: “por fin llegó el día 2 de enero de 1962 [...] para entonces ya todos sabíamos que nos declararíamos en pre conflicto con un gran paro a nivel de todas las plantaciones” (ibid.: 53). Las semanas anteriores habían sido marcadas por una incansable actividad de movilización y persuasión: “[...] no era fácil movilizarse y convencer a todos a participar en un gran paro. Camin[ábamos] en las noches escondidos de los milicos [...] aprovech[ábamos] las horas de descanso, o en los partidos de fútbol o bailes, todo servía” (ibid.:53). De mañana temprano, los huelguistas se dirigieron a su lugar de concentración, en la Cantina de Eduardo Soto, sobre la Ruta Nacional Número 3. La cantidad de trabajadores impresionaba: “es una imagen que todavía tengo en mis retinas, ver aquella marea humana que crecía y crecía, nos juntamos cientos y cientos de compañeros uruguayos, argentinos, paraguayos y brasileños” (ibid.: 54). Alrededor de las ocho horas de la mañana, Raúl Sendic “apareció” a bordo de un viejo ómnibus de la empresa Onda: “la emoción no tenía límite, lo teníamos a Raúl, por primera vez junto a nosotros: tendríamos Asesor Jurídico para mucho tiempo” (ibid.).

La plataforma de la huelga ya estaba definida: aumento de salario, aplicación de la ley de ocho horas, fin del pago en vales y reconocimiento de la UTAA como único interlocutor válido en futuras negociaciones. Una comisión fue nombrada para acompañar a Sendic en el primer diálogo con los responsables de la empresa CAINSA. En esa ocasión, en lugar de ofrecer soluciones a las exigencias del sindicato, los representantes de la compañía recomendaron que los trabajadores volvieran a sus actividades. Con la intención de apaciguar el descontento generalizado, les prometieron la construcción de nuevos espacios de entretenimiento en los terrenos de la fábrica, específicamente una cancha de fútbol y una pista de atletismo: “ellos sabían que era una idea que nos rondaba desde hacía largo tiempo y ellos lo harían con la misma plata que nos robaban a nuestro jornal” (ibid.).

Ante el fracaso de las negociaciones, la huelga fue finalmente declarada. El 3 de enero, se estableció el campamento obrero en los montes del arroyo Itacumbú, cerca del

puente sobre la Ruta 3. Con la mayoría de sus empleados de brazos cruzados, CAINSA pasó a contratar a “muchos jóvenes” para tratar de normalizar las actividades productivas. “Nosotros, escribe Cepillo, los queríamos ganar [a los jóvenes] conversando con ellos”, de modo que “un día de mañana se planificó atajarlos y cuando venía el camión los compañeros tiraron un palo en el puente pero el camionero paró y dio vuelta, nosotros los corríamos de atrás. Se pegaron flor de susto” (ibid.: 62). Pocas horas después, el Ejército llegó al lugar del incidente, ocupó el puente del arroyo Itacumbú y ordenó que el campamento obrero, instalado en terrenos públicos, fuera disuelto. Los “peludos” tenían otro plan: decidieron cruzar el arroyo y acampar en la orilla de enfrente, en tierras privadas. “Don Angel Argencio Rodríguez, un pequeño productor [...] nos dio entrada en su campito” (ibid.: 55). Casi dos meses después, sin que las negociaciones experimentaran avances significativos, una asamblea de trabajadores resolvió levantar el campamento. Sin embargo, los huelguistas no estaban dispuestos a ceder. El 1º de abril, su lucha entraría en una nueva etapa: “pasó el tiempo y a los tres meses [de haber empezado el campamento en el Itacumbú] hicimos una asamblea, pero esta fue distinta” (ibid.). Cepillo prosigue: “se iba a discutir el futuro, y lo primero que nos planteó Raúl fue que la huelga legalmente estaba perdida porque después de los tres meses ya no tenía derecho de ser” (ibid.). En estas circunstancias, la idea era ir hasta la empresa CAINSA y proponer el recomienzo de las negociaciones: “tomamos CAINSA como objetivo, porque era la empresa más importante y la más negra. Para nosotros empezaba una nueva etapa, era el ser o no ser. *Se intentó por todos los medios a nuestro alcance llegar a un arreglo franco y fraterno* (ibid.).

Finalizada la asamblea, cerca de cien peludos se dirigieron al ingenio CAINSA y, luego de un rápido altercado con la policía, lograron franquear la entrada e ingresar a la fábrica: “detrás de Raúl nos sentíamos protegidos”, rememora Cepillo (ibid.). En las horas siguientes, en medio de un fuerte cerco policial, la fábrica sería completamente ocupada por los huelguistas. Algunos cuadros administrativos permanecerían retenidos en el local hasta que la empresa acatase las reivindicaciones del sindicato. La suerte estaba lanzada, un umbral había sido franqueado casi sin garantías – ni siquiera las del derecho *strictu sensu*. En efecto, entre 1961 y 1962, el Estado se abstuvo de imponer el cumplimiento de la legislación laboral en los cañaverales de Bella Unión. De visita en el campamento del Itacumbú, el Ministro del Interior llegó a recomendar a los huelguistas que “pidieran el reintegro a CAINSA” y dejaran de “violentar la zona que era lugar de progreso, bienestar y

prosperidad” (ibid.:63)³⁷. Paradójicamente, durante la ocupación de CAINSA, los peludos buscaban garantizar la realización de sus derechos a través del enfrentamiento no sólo con la empresa, sino también con la policía y el Ejército: actuaban por su cuenta y riesgo, con “fuerza de ley”, pero sin el amparo de las fuerzas del orden³⁸.

Entre enero y abril de 1962 ya empezaban a volverse claras dos prescripciones fundamentales que dinamizaron un pensamiento de la política en el modo UTAA. Atentos al relato de Cepillo, podemos definir las sintéticamente: 1) el peludo tiene derechos; 2) el peludo garantiza sus derechos. Las prescripciones no son consensos, ni órdenes que todos tienen que seguir, sino más bien ideas reguladoras que organizan y estimulan tanto la actividad del pensamiento como la organización de la política. Subrayemos, además, que las prescripciones no son representaciones sobre el mundo. Ellas indican la tentativa de explorar, en un mundo dado, posibilidades antes vedadas a sus componentes. De acuerdo con Merenson, a partir del inicio de la década de los ‘60, los militantes de la UTAA experimentaron una tensión subjetiva entre la reivindicación de derechos laborales y la vigencia de “acuerdos y normas ‘tradicionales’ que hasta entonces primaban en las azucareras” (Merenson, 2016:99). Quienes entre sus interlocutores trabajaron en la azucarera CAASA y participaron en la secuencia de acontecimientos narrada por Cepillo, identificaban “*el origen de la palabra ‘peludo’ con la creación de UTAA* y el inicio de las movilizaciones y las conquistas sindicales a comienzos de la década de 1960” (ibid.). A diferencia de otras personas, que no llegaron a participar activamente en los lugares de la política instaurados por el sindicato – fue el caso de Hugo –, los “peludos de UTAA” postulaban que la relación con los patrones estaba bajo el signo de la “explotación” y, luego, era susceptible de ser (d)enunciada en el registro del derecho. Esto no quería decir que los parámetros “tradicionales” de relacionamiento, pautados por la suposición de una fraternidad entre trabajadores y patrones, hubiesen dejado súbitamente de tener sentido para los militantes del sindicato. Por el contrario, seguían muy vigentes como Merenson demuestra en su libro. En el modo UTAA, lo que se prescribió fue la posibilidad de problematizar ciertos “acuerdos y normas tradicionales”, vaciándolos eventualmente de

³⁷ Esta situación, al igual que todos los eventos sucedidos en Cainsa, también son narrados por Blixen (2000).

³⁸ En el derecho romano y medieval, el sintagma "fuerza de ley" tenía, según Agamben, “el sentido genérico de eficacia, capacidad de obligar” (Agamben, 2014 [2003], p. 81). Fue en ese sentido que los peludos actuaron con fuerza de ley en CAINSA. Para hacerlo, reivindicaron la ley que estaba supuestamente vigente pero que carecía de fuerza. Los trabajadores hicieron algo así como prestarle fuerza a la ley mediante un acto político que, sin embargo, no poseía valor de ley. Esta situación intrincada indica que, en el "modo UTAA", no estaba en juego solamente la reivindicación del "derecho", sino también una experimentación especial en los límites de la propia ley vigente.

significado a través de una nueva praxis política anclada en la reivindicación del “derecho”.

La referencia al derecho permitió que el manto de fraternidad que otrora sobrevolaba la relación entre patrones y empleados fuera inicialmente desestabilizado en por lo menos un punto: aquel relativo a la prerrogativa patronal de no pagar los salarios en fecha. Si los “peludos” tenían derechos – y el salario era uno de ellos –, entonces su transgresión podía denunciarse como “ilegal” y los descontentos derivados de ella aparecían como algo obligatoriamente reparable. En caso de que ningún “arreglo franco y fraterno” (Santana Perez, 2013: 55) fuera capaz de reparar el malestar ocasionado por la “ilegalidad”, entonces la fuerza de (la) ley sí podría hacerlo. La referencia al derecho convirtió el no pago de salarios en un punto de fractura inicial de la fraternidad entre patrones y empleados, abriendo margen al cuestionamiento de esta última en toda su extensión, punto por punto. Casi diez años después de la ocupación de CAINSA, un “peludo” que comenzó a involucrarse con el sindicato en 1961 recordaría que “al principio, cuando él [Sendic] decía esas ideas libertarias que él tenía, [a nosotros] nos parecía imposible, estábamos encerrados y adaptados en aquello” (Marcha, 30-4-1971). Sin embargo, la fractura social impuesta por la reivindicación del derecho ofreció a los “peludos de UTAA” el vislumbre de un cambio de conducta posible y abarcador.

En los lugares de la política instalados por el sindicato entre 1961 y 1962³⁹ se estimulaba una impugnación generalizada de los presupuestos subyacentes al relato de la unión entre trabajadores y patrones. Separarse subjetivamente de la fraternidad con los patrones era una condición necesaria a la conjuración de las capacidades colectivas reivindicadas bajo la sigla UTAA. Si la efectivización de los derechos podía ser realizada por los propios trabajadores, mediante acción directa y, en el límite, violenta, entonces el relato de la fraternidad quedaba herido de muerte. Adhiriendo al sindicato, los “peludos” también accedieron a condiciones subjetivas para actuar “como si”, en última instancia, no dependiesen de sus patrones. Y al adoptar esta actitud, produjeron una realidad en la cual, de hecho, la última instancia terminó materializándose: la ejecución de una “imposible” autonomía política frente a los patrones generó demisiones masivas e hizo cundir el desempleo en las bases del sindicato. A finales de abril de 1962, ya circulaban listas negras

³⁹ Me refiero estrictamente a Itacumbú y CAINSA, sin perjuicio de reconocer que el Modo UTAA pudo haber abarcado más lugares y, por tanto, otras prescripciones que aún esperan reconocimiento, recuerdo y estudio.

en todas las plantaciones de Bella Unión: “UTAA pasó a ser un sindicato de desocupados”, resume Cepillo (Santana Perez, 2013:65).

Para los “peludos de UTAA”, los desafíos ahora eran otros y ya no respondían, necesaria y únicamente, a las disposiciones enunciadas en los márgenes del Itacumbú o en CAINSA. En aquel mismo año, el sindicato marchó por primera vez a Montevideo para denunciar la persecución sindical y exigir – sin éxito – del Poder Legislativo la aprobación de un estatuto del trabajador rural. La presencia de los peludos en la capital recibió amplio apoyo de la izquierda y fue denunciada como una maniobra del “socio-comunismo” por la prensa de derecha (Moraes, 1990:238), que también respaldó la campaña difamatoria promovida por la Central Sindical Uruguaya (CSU, leal a las patronales) en contra de los “peludos”. La CSU trató de invalidar todas las separaciones prescritas por la UTAA, sugiriendo que las denuncias del sindicato no eran auténticas y sus tácticas de movilización carecían de cualquier apoyo y legitimidad en los cañaverales de Bella Unión⁴⁰. Ni siquiera por esto la capacidad de movilización del sindicato quedó comprometida, aunque durante un buen tiempo las patronales sólo reconocieran a la FENETA, respaldada por la CSU, como interlocutor legítimo a la hora de negociar convenios laborales.

2.4 Modo agrario (1964-1972)

Marcado, entre otras cuestiones, por la reivindicación la violencia armada y por su uso en la realización de la política, el “modo agrario” asentó palabras que en el 2015 funcionaban como metáforas de la posibilidad de conducir la acción colectiva por fuera de las instancias de negociación legitimadas por la legislación vigente. Los lugares del modo agrario son las cuatro “Marchas por la Tierra” realizadas por la UTAA entre 1964 y 1971. En ellas fueron enunciadas las siguientes prescripciones: 1) el “peludo” es un “campesino”; 2) la tierra puede ser tomada. “Sendic”, “lucha”, “campesino” y “tierra” constituyeron categorías relevantes de la secuencia. En el modo agrario, el “peludo” fue pensado en su relación potencial – y problemática – con la categoría “campesino” y las categorías “Sendic”, “lucha” y “tierra” subsidiaron dicho esfuerzo de pensamiento. La particularidad del modo agrario consiste en haber colocado a los “peludos de UTAA” delante de otro horizonte de posibilidades, diferente de aquel abierto por las prescripciones de inicios de los años sesenta. En este apartado veremos que, a partir de 1964, con la incorporación de la

⁴⁰ Las posiciones asumidas por la CSU generaron un duro enfrentamiento físico entre sus dirigentes y la militancia de la UTAA. Un disparo realizado desde el interior de la sede la central sindical durante esta contienda redundó en la muerte de una transeúnte. La tragedia fue utilizada por la prensa conservadora para alimentar intensas campañas difamatorias e intentos de criminalización en contra del sindicato de los cortadores de caña.

consigna “Por la tierra y con Sendic”, el trabajador perseguido por las listas negras, o excluido del mercado de trabajo en razón de la incipiente mecanización de las actividades de cosecha, se enunciará como beneficiario y protagonista de un tipo muy especial de “reforma agraria”.

A mediados de 1962, después de finalizada la primera marcha a Montevideo, Raúl Sendic comenzó a discutir con algunos dirigentes de UTAA sobre la posibilidad de exigir al Instituto Nacional de Colonización (INC) la expropiación de los latifundios de Silva y Rosas y Palmas de Miranda. Ambas propiedades, situadas en Bella Unión, totalizaban una extensión de cerca de 30.000 hectáreas improductivas. Según Samuel Blixen, quien buscó reconstruir las confabulaciones de 1962, la solicitud de expropiación de los latifundios debería ser simultánea a su ocupación por los militantes de la UTAA: “la idea era roturar cuanto antes la tierra y plantar [...] de modo que la expropiación se diera por la vía de los hechos” (Blixen, 2000:72). Este plan nunca llegó a concretarse, dada la dificultad de aglutinar en su entorno el apoyo de la izquierda montevideana, cuyas preocupaciones en aquel momento estaban más concentradas en las elecciones presidenciales del mes de noviembre. Sin embargo, la idea de distribuir tierras “por la vía de los hechos”, a través de la acción directa de los propios asalariados rurales, sería mantenida en el horizonte político de la larga secuencia de movilización colectiva que comenzó en 1964.

En marzo de 1963, después de participar en el primer operativo militar del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), destinado a expropiar armas en el club Tiro Suizo, Raúl Sendic pasó a la clandestinidad y comenzó a ser buscado por las fuerzas de seguridad uruguayas. En Bella Unión, las actividades organizativas de la UTAA prosiguieron bajo intenso hostigamiento policial. En esa época, algunos de los dirigentes del sindicato comenzaron a ejercer una doble militancia, actuando simultáneamente en tareas organizativas “legales” y en pequeñas acciones clandestinas, asociadas a la expropiación de armas y a la transmisión de mensajes entre los dirigentes del MLN. En enero de 1964, cortadores de caña y operarios fabriles organizados por el sindicato ocuparon las instalaciones de la CAASA exigiendo el pago del aguinaldo y otras remuneraciones atrasadas. Hubo una dura represión militar y la plataforma reivindicativa del movimiento fue atendida en forma bastante parcial. Algunas semanas antes, centenas de cortadores de caña de un ingenio vecino, situado en la localidad de El Espinillar, habían quedado sin empleo: comenzaba la “zafra seca”, período en el cual la demanda de fuerza de trabajo en los cañaverales del norte uruguayo se reduce dramáticamente. La pauperización impuesta por el fin de la zafra era acentuada por la persecución sindical

generalizada, que impedía de forma permanente el acceso de casi una centena de trabajadores combativos a las fuentes de trabajo disponibles en la zona. En ese contexto, la UTAA deliberó en asamblea sobre la realización de una nueva marcha a Montevideo bajo la consigna “tierra para quien la trabaja”. En sus memorias, Cepillo afirma que “la aspiración principal [de la marcha de 1964] era sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública” (Santana Perez, 2013:72), razón por la cual los interlocutores prioritarios del movimiento serían el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Poder Legislativo. Los desplazamientos a Montevideo también se estaban convirtiendo en una estrategia de subsistencia para las familias obreras que sufrían los impactos económicos de la persecución sindical y el desempleo estacional: durante las marchas, diversas organizaciones sociales solidarias a la lucha de los peludos garantizaban el sustento y el cuidado de sus familias mediante el suministro de alimentos, ropas y medicamentos⁴¹.

El 21 de febrero de 1964, cerca de doscientos trabajadores rurales partieron con sus mujeres e hijos rumbo a Montevideo para exigir del parlamento la entrega inmediata de 30.000 hectáreas improductivas. Pocas semanas después, en las páginas del semanario *Marcha*, Eduardo Galeano relataba algo que le llamó la atención cuando fue a recibir a los “cañeros” recién llegados a la capital del país: “hay una cara, sobre todas las caras, que avanza al frente de la marcha y que está clavada en las paredes de tierra, paja o caña de los ranchos: el nombre y la cara de Raúl Sendic” (*Marcha*, 13-3-1964). En su libro, Cepillo complementa esta descripción: “nuestro estandarte era un gran cuadro con la imagen de Raúl y una consigna que se hizo leyenda, ‘Por la tierra y con Sendic; expropiación de las treinta mil hectáreas de Silva y Rosas’” (Santana Perez, 2013:72). Al mismo tiempo en que interpelaban a los poderes del Estado a través de la demanda de expropiación de tierras, los peludos de UTAA también declaraban fidelidad a la figura de su líder, Raúl Sendic, cuyos métodos de acción política confrontaban directamente los marcos legales establecidos. La reivindicación de Sendic expresaba una capacidad de acción que algunos militantes del sindicato estaban dispuestos no sólo a defender y actualizar, sino también a presentar como posibilidad para el movimiento popular uruguayo de mediados de los años 1960.

En el acto del 1º de mayo de 1964, realizado con la presencia de los peludos en Montevideo, Esteban⁴², que sustituyera a Sendic en algunas tareas organizativas del sindicato, proclamaba que “estamos dispuestos a combatir a la burguesía en el terreno que

⁴¹ Debo estas ponderaciones al diálogo personal con Silvina Merenson.

⁴² Esteban es el mismo dirigente histórico que, en el capítulo anterior, relataba las consecuencias de la huelga de hambre de 1992. Su presencia se hará notar en varios capítulos de esta tesis.

ella elija. Si nos dan palos, devolveremos con palos; si nos dan bala, devolveremos bala” (*apud* Blixen, 2000:97). Esta disposición sería colocada a prueba en un gran enfrentamiento con la policía delante del Palacio Legislativo el 7 de mayo, cuando los peludos presionaban a los legisladores por la discusión de su proyecto de expropiación de tierras. Durante el altercado, que Cepillo define como “batalla”, María Silva, una muchacha de 15 años, integrante de la marcha, resultó herida en la pierna por un disparo efectuado por la policía⁴³. En junio, poco antes del retorno de los militantes de la UTAA a Bella Unión, tres “peludos”, todos ellos dirigentes del sindicato, terminaron presos y condenados a media década de cárcel después de un intercambio de tiros con las fuerzas de seguridad durante un intento de asalto a un banco. Casi medio siglo después, María Silva recordaría la adhesión de la UTAA a la acción directa y la identificación de sus militantes con el MLN como el inicio de una nueva etapa respecto de la cual ella nutría profundas reticencias: el sindicato que empezó a emerger entre mediados y fines de los años sesenta iba dejando de ser “su UTAA”, la que había sido organizada en el año 1961 por el “Sendic sindicalista”, para atravesar, ahora bajo el signo del “Sendic tupamaro”, profundas redefiniciones tácticas y programáticas (Merenson, 2016:117).

A mediados de 1964, nuevos líderes pasaron a integrar la directiva de la UTAA, entre ellos Cepillo y Chela Fontora, la primera mujer que se destacó al frente de la organización. En 1965, durante la segunda Marcha a Montevideo, en una entrevista concedida por los dirigentes del sindicato a los periodistas Julio Castro y Pepe Quijano, se esbozaba una reflexión sobre la dificultad de negociar el corolario político de las luchas agraria y sindical por medio del “parlamento”. Según los “peludos”, “tanto las reivindicaciones laborales como el reclamo por tierras” habrían dejado de ser objeto de interés para los diputados “cuando terminó la agitación provocada por la presencia de los manifestantes [en Montevideo durante la marcha del 64]”. Siendo así, “esta será la última marcha. Si tenemos éxito ya no se necesitará otra; pero si fracasamos, habremos de adoptar otros métodos de lucha” (Marcha, 23-4-1965).

Hacia mediados de los ‘60, la lucha por la tierra comenzó a ser problematizada en relación a la palabra “revolución”, como lo evidencia este pasaje de una carta firmada por

⁴³Agustín Juncal (2015) narra con detalles el conflicto ocurrido en el Palacio Legislativo en 1964. Para los fines de mi análisis, es suficiente señalar que, ya en aquel año, la reivindicación agraria de la UTAA era pensada por algunos de sus protagonistas como un terreno apropiado para la expresión violenta de su capacidad de acción colectiva. Sin desconocer el enorme desequilibrio de fuerzas y las terribles arbitrariedades implicadas en el choque físico entre peludos y policías, mi intención, en este breve estudio sobre el “modo agrario”, es evidenciar cómo los militantes de la UTAA atribuían a la violencia el estatuto de un recurso que estaba enteramente a su disposición y no era, por lo tanto, atributo exclusivo del Estado.

“un integrante de la marcha cañera” y publicada en Montevideo en el mes de abril de 1965: “conquistar la tierra no es sinónimo de revolución; pero es innegable que constituye [...] el primer intento serio de encaminarse a ella”. La carta prosigue así: “por esto decimos que [se] abre una etapa definitiva: o se está con los cañeros militantemente o se está contra ellos aun cuando se les apoya con una declaracioncita que no sirve para nada” (Marcha, 9-4-1965). La comparación se me hace irresistible: “el que no está conmigo, contra mí está; y el que conmigo no recoge, desparrama” (Lucas 11:23). La “lucha” de los peludos, anclada en sucesivas peregrinaciones a Montevideo, parece adquirir, paulatinamente, el aspecto de un proceso de conversión revolucionaria que necesita ser ratificado no sólo por demostraciones retóricas de fe y fidelidad, sino también por la disposición de exponerse efectivamente a las probaciones del combate político violento, instaurado en medio de una creciente represión policial y militar. En la tercera Marcha por la Tierra, en 1968, un cura de la ciudad de Treinta y Tres respondió al llamado de la UTAA y decidió acoger a los peludos en la casa parroquial. Ante las reacciones iracundas de la comunidad católica local, él reveló a la prensa su deseo de conversión, festejado por el sindicato: “si el Obispo me desapueba [...] renunciaré a mi cargo y me uniré a la marcha de los cañeros”, habría declarado el sacerdote (Marcha, 18-4-1968).

En su largo periplo por el interior del país, bajo el asedio inclemente del aparato represivo, expuestos a las privaciones de la vida en los campamentos, los peludos también debieron enfrentar la muerte de una de sus compañeras de lucha: cerca da la ciudad de Treinta y Tres, durante la Tercera Marcha por la Tierra, Lourdes Pintos falleció de tétanos dejando huérfanos a tres hijos. A pesar de las evidentes dificultades y sufrimientos, un manifiesto distribuido por la UTAA en el interior del país esclarecía que la adhesión a la lucha del sindicato no debería ser fruto de la conmoción generada por la pobreza de quienes marchaban, sino del convencimiento de la “verdad” de la que eran portadores:

[...] no venimos a conmover con nuestra pobreza; nosotros, los peludos, tenemos para conmover la fuerza de nuestras ideas y de nuestra lucha [...] sabemos que la lucha es dura porque está contra los ricos, porque les decimos a los hermanos de clase la verdad, les decimos que nuestro futuro es de tierra o muerte (Marcha, 18-4-1968).

Las situaciones y enunciados que sintetice hasta aquí parecerían corroborar conclusiones como las de Dipesh Chakrabarty, para quien “lo político (*political*)” incluye acciones que “desafían [...] la separación entre política (*politics*) y religión” (Chakrabarty, 2002:19). Sin embargo, mirando más de cerca estas sugerencias podemos notar, como observa Neocosmos, que en ellas “el idioma ‘religioso’ es, aún, entendido como una desviación analítica en relación a aquello que sería [más] obviamente ‘político’”

(Neocosmos, 2012:540). Para ser fieles al pensamiento desarrollado en el modo agrario, conviene seguir las ponderaciones de Neocosmos y afirmar que, en este caso, la irrupción política de la “religión” – o sea, su aparición como idioma enunciador de una prescripción política – patrocina, justamente, la sustracción de los sujetos al dominio de lo “obviamente político”, marcado por la necesaria referencia a la institucionalidad estatal y sus protocolos de veridicción. Esta sustracción presagia – a través de la evocación de una “verdad” de clase y de los sacrificios mortales que quien sabe oír la debe estar dispuesto a padecer – la apertura de un nuevo terreno para hablar de la política y practicarla. Al decir de Rancière, todo acontecimiento político “extrae su novedad paradójica del hecho de estar ligado a lo re-dicho, a lo dicho fuera de contexto” (Rancière, 1993: 42), articulando “una experiencia de otro modo dedicada al mutismo por la separación de los lenguajes; frases y disposiciones de frases que transforman en cosa visible y decible aquello que no tenía lugar para ser distinguido [...] promoviendo al espacio común a sujetos inéditos, a legitimidades nuevas” (ibid.: 114).

Compartida entre “hermanos”, la “verdad” de los “peludos” no necesitaba mediación del Estado para volverse eficaz y valer para todos: obtenía en la “lucha” su efecto vinculante. De hecho, para 1968 los interlocutores de la reivindicación agraria desencadenada por la UTAA ya no eran ni “el Parlamento”, ni “los políticos”, según esclareció uno de los dirigentes del sindicato en el momento en que la Tercera Marcha llegaba a la capital del país: “[v]enimos a hablar directamente con los obreros, en las fábricas; a hacer mesas redondas y a discutir en la calle. Queremos crear conciencia por una reforma agraria que no sólo nos dé las 30.000 hectáreas del latifundio Silva y Rosas, sino también tierra para todo el que necesite trabajar” (Marcha, 26-4-1968).

La interlocución con partidos y agrupaciones de izquierda, tanto en Montevideo como en otras ciudades uruguayas, colocó al sindicato ante un nuevo dilema: ¿cómo conjugar la exigencia de una *reforma* agraria con la prédica y el compromiso revolucionarios? La clave para lidiar con esa cuestión fue asociar las palabras “peludo” y “campesino” en una misma constelación política. En los carteles elaborados desde la marcha de 1964, esta segunda categoría denotaba al grupo de personas de las cuales Raúl Sendic era el líder: “Raúl Sendic, líder campesino”. En el Uruguay sesentista, la referencia a las Ligas Campesinas brasileras, lideradas por Francisco Julião, y a los campesinos cubanos (“guajiros”) que adhirieron al Movimiento 26 de Julio poblaban el imaginario de aquellos sectores de la izquierda urbana que, en medio de la efervescencia política continental, coqueteaban con el horizonte de la insurrección popular. En este contexto,

adherir a la categoría “campesino” significó, para los “peludos de la UTAA”, un promisorio puente de diálogo con las expectativas revolucionarias de la izquierda nacional, dando lugar a una articulación estratégica con partidos y agrupaciones políticas capaces de ofrecer todo el tipo de apoyo a sus reivindicaciones agrarias puntuales⁴⁴. Sin embargo, más que un emblema que los volvía legibles en el campo de la izquierda, la categoría desubstancializada “campesino” también parece haber sintetizado el tipo de radicalidad de la que los peludos podrían ser portadores.

Más allá – o más acá – de cualquier connotación económica o sociológica, “campesino” era sinónimo de rebeldía e insubordinación rural en la América Latina de los años sesenta. Bajo el signo de Sendic, el “peludo de la UTAA” podía, también él, ser un “campesino” porque se dejaba arrastrar por la violenta irreverencia del devenir revolucionario: salía a la búsqueda de nuevas superficies para probar su potencia ahora que *una política* había prescripto la suspensión posible de la dominación existente. Gallo, un peludo cuya militancia sindical se remontaba a la ocupación de CAINSA, eligió plantear las cosas en los siguientes términos: “a aquellos que dicen que somos incapaces de hacer nada sin un patrón arriba, estamos deseando probarles que los trabajadores nos bastamos de sobra para mandar en los campos y en las fábricas, no porque queremos imponernos como más fuertes sino porque sin nosotros nada podría hacerse” (Cuestión, 28-4-1971).

“Campesino” era sólo el nombre del devenir radical sustentado por la afirmación política del peludo en tanto sujeto de posibilidades múltiples. No designaba la culminación sociológica del devenir radical del “peludo” porque, si fuera así, el movimiento de experimentación política desarrollado a lo largo de las marchas por la tierra podría ser separado de un agenciamiento colectivo más amplio – construido en cooperación con otras fuerzas de la izquierda uruguaya – para terminar apaciguado en la gestión estatal de demandas sectoriales. Paradójicamente, el peludo era un “asalariado rural” que, aun devenido “campesino” metafórico en las calles convulsionadas de Montevideo, no quería hacerse verdaderamente campesino ni tampoco seguir siendo asalariado. Estaba fuera de lugar o, quizás, su nuevo lugar era el mismo tránsito: medio sin fin predecible, experimentación incipiente. En una esclarecedora entrevista concedida a Guillermo Chifflet en 1971, un “jovencito” al cual sus compañeros llamaban “Brasilerito” comentaba

⁴⁴ Merenson (2008) argumenta que entre las décadas de 1960 y 1970 la movilización de la categoría "campesino" por los "peludos de la UTAA" se inscribe fundamentalmente en el horizonte de la lucha por la Reforma Agraria.

su respuesta al comisario de policía cuando éste le pidió explicar qué era un “asalariado rural”:

-Dije: se llaman asalariados rurales aquellos trabajadores contratados por mes, por año o por día, que *no tienen* tierra, *no tienen* herramientas y sólo pueden vivir de su fuerza de trabajo [...] “Siga”, me dice [el comisario]. Y yo digo así: “¿Qué se cree, que un asalariado agrícola sea un burgués, con tanta palabra?” Y así medio le tomé el pelo y ahí se entregó.

- ¿Te pidieron documentos?

-Sí. Le dije: *no tengo* papel, *ni tengo* cédula, *ni sé si represento algo* aquí en Uruguay. Sé que nací en Artigas (Marcha, 30-4-1971).

En esta definición, el marxismo popular armoniza con el experimentalismo político del modo agrario para dar origen a una imagen mayormente “negativa” y no identitaria del “asalariado rural”. El asalariado es aquel que no tiene tierra, ni herramientas, ni papeles, pero que, de cualquier modo, existe, sea como fuerza de trabajo en el contexto de las relaciones de producción o – y esto es fundamental – como alguien que simplemente nació en Artigas y decidió “seguir con los compañeros” (ibid.), cueste lo que cueste. La dimensión afirmativa y creadora de la condición social reivindicada por el Brasilerito no reside en la presentación de una exigencia política puntual, sino en la decisión de seguir adelante, junto a los demás, consciente de una falta y convencido de la posibilidad de trascenderla.

En la última Marcha por la Tierra, en 1971, un dirigente sindical entrevistado por la prensa del Movimiento 26 de Marzo analizaba que sería “un grave error si [UTAA] se pusiera a luchar por transformar a todos los asalariados agrícolas del país en pequeños campesinos” (Cuestión, 28-4-1971). Para el sindicato no estaba necesariamente en juego la disputa por la propiedad individual de la tierra. Al fin y al cabo, “campesino” metaforizaba la radicalización del “peludo”, pero no describía su posicionamiento de clase y tampoco el destino definitivo de su lucha: “UTAA parte de la base que la reivindicación de la tierra en general pertenece a los campesinos pobres y medios y no a los asalariados agrícolas” (ibid.). En lo concerniente a los “peludos”, si ellos pudieran controlar algunos lotes de tierra del latifundio Silva y Rosas, instalarían allí a la “comunidad Tierra para Todos, Lourdes Pintos (homenaje a la compañera caída en la última marcha)” (ibid.). En esta “comunidad”, sin ser propietarios individuales de la tierra, los “peludos” “podrán trabajar y comer todos los días, desarrollar su conciencia de clase para luchar con efectividad buscando cambiar las estructuras” (ibid.). “La cooperativa por sí sola – especificaba el sindicato en su periódico Tierra y Libertad – no puede llevar adelante la lucha por el cambio de las estructuras”. Por el contrario, ella permanece constreñida “por la falta de créditos, herramientas, asesoramiento técnico” (apud Rossi, 2006:s.p.). En reciprocidad

con esta lectura, la Comunidad Tierra para Todos no era pensada como un mecanismo de campesinización del asalariado rural, sino como un lugar alternativo de trabajo, donde, al abrigo de la presión patronal, los trabajadores cultivarían vínculos de solidaridad entre sí y con la lucha de sus compañeros. Más que un fin en sí mismo, la comunidad agraria imaginada por la UTAA parecería funcionar como un catalizador de la profundización y la ampliación de la lucha popular en el modo agrario.

En 1970, el latifundio Silva y Rosas fue parcialmente expropiado por el Estado uruguayo, pero la UTAA jamás pudo disponer de esas tierras para continuar desarrollando su propia política. En el año 1972, en la antesala del golpe de Estado cívico-militar, la represión policial se había acentuado como nunca en el Uruguay. Según Cepillo, “salvar el sindicato” era ya una tarea imposible (Santana Perez, 2013: 98). El local de la UTAA fue invadido y destruido por la policía. Una policlínica, construida con mucho esfuerzo por el sindicato durante los años precedentes, también sufrió el mismo destino y acabó convertida en la sede de un destacamento militar. Gran parte de los dirigentes y partidarios de la organización fue detenida por el ejército: el modo agrario se encontraba, ahora, totalmente bloqueado.

En la primera mitad de la década de los ‘70 la persecución política se propagó en Bella Unión. Mientras tanto, el nuevo ingenio de la Cooperativa Agraria Limitada Norte Uruguayo (CALNU), financiado con créditos estatales, comenzó a procesar sus primeras zafras, prácticamente duplicando la producción local de azúcar. Con el paso de los años, CALNU se transformaría en la mayor empresa azucarera uruguaya, dominaría más de la mitad del mercado interno e invertiría una parte de su excedente en la creación de otras cooperativas agroindustriales destinadas a la “diversificación” productiva. El gobierno dictatorial daría un fuerte respaldo a la multiplicación de emprendimientos agroindustriales en Bella Unión, oficiando de garante junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que CALNU dispusiera de préstamos millonarios destinados a promover lo que sus propietarios denominaron una “actualización histórica” de la economía regional (cf. Martí, 2016). El apoyo financiero a los productores locales vino acompañado de múltiples obras públicas en las cuales los partidarios del régimen militar no dudaron en cifrar una prueba cabal de la pujanza económica proporcionada por la paz social y la estabilidad de las instituciones.

A partir de mediados de los años ochenta la redemocratización del Uruguay condujo a una disminución de la represión policial y la persecución política. Sin embargo, el respeto a la legalidad— en cuya defensa los militares declararon el estado de excepción —

continuó siendo, ahora con el beneplácito de los sectores mayoritarios de la propia izquierda, el punto de partida para cualquier diálogo serio sobre política. Con la vuelta de las tropas a los cuarteles, serían las fuerzas político-partidarias del *establishment* democrático las encargadas de promover una sutura sistemática – amparada más en la persuasión coercitiva que en la represión asesina – entre la fabulación política, la norma jurídica y las rutinas administrativas del Estado. El tiempo presente, construido sobre la derrota de la experimentación social de las décadas precedentes y la estigmatización de sus categorías de pensamiento, es el tiempo desde – y contra – el cual transcurrieron las secuencias políticas que serán abordadas en el próximo capítulo.

La identificación de los modos de la política estudiados en este capítulo empezó en la misma constelación crítica en la cual algunos índices históricos de su existencia – “Sendic”, “UTAA”, “tierra”, “revolución” – se me dieron a conocer. Como vimos en el capítulo anterior, en el año 2015 había ciertas palabras e imágenes que circulaban entre mis interlocutores como marcas – o incluso como evidencias – de un viejo cambio de actitud que bien podría repetirse en el presente. Fue, por tanto, bajo esta iluminación – ante la cual la antropología del nombre es conceptual y metodológicamente sensible – que examiné los índices históricos de la política que se estaba desarrollando en la UTAA durante mi trabajo de campo. La implicancia fundamental de este procedimiento fue la descontextualización radical a la que condujo. En él, las palabras y los nombres de las políticas pasadas fueron retomados por su singularidad potencial, es decir, por lo que permitieron prescribir, nada más. Esto significa que el campo de lo decible abierto por lo que mis interlocutores vivían como rastros de antiguas autonomías políticas no fue remitido a otro plano de realidad salvo al que se deriva de su propio espacio intelectual, o sea, a los sujetos, objetos, conceptos y diferencias que, en dicho espacio, se prescribieron como posibles y performables. Debo observar que se trató de un procedimiento experimental y no exhaustivo. No pretendí agotar el inventario de los posibles que otrora se asociaron, por ejemplo, a los índices “UTAA”, “tierra” o “Sendic”, sino sólo constatar austeramente que existen buenas razones para creer en su existencia.

Capítulo 3

Políticas después del terror

Sabíamos que eso iba a generar un hecho político dentro de la misma izquierda y del Uruguay. Y lo generó.
Lito

Si la política es rara y secuencial, debemos también reconocer su fragilidad y el hecho de que ella puede existir sólo por un corto período de tiempo.
Judith Hayem, The ‘Voucher Strike’



3.1 Durar luchando

Estar constantemente expuesto al asedio de las fuerzas de seguridad y tener que lidiar con el peligroso estigma de “tupamaro” fue parte de la realidad experimentada por los parientes – especialmente esposas e hijos – de “los peludos de UTAA” durante los primeros años de la dictadura. Este período suele ser recordado por los integrantes de las familias de los trabajadores rurales involucrados en la agitación política de la década precedente como “años de tener miedo”, “épocas de desaparecer”, “de mucha muerte” y de “guerra” (Merenson, 2016). A partir de mediados de los años ‘70, la “guerra” dio lugar a las obras y la ciudad de Bella Unión pasó a ser enaltecida por la dictadura como un “polo de desarrollo” ejemplar. La afluencia de recursos públicos para el norte uruguayo garantizó

la pavimentación de las rutas, la construcción del puente internacional que une Bella Unión y Barra do Quaraí y la diversificación de la agroindustria local. En los años 1976 y 1977, la industria cañera alcanzó altos índices de productividad y obtuvo sus primeras zafas record. En poco más de dos décadas, entre 1963 y 1985 (primer año de la redemocratización), el intenso dinamismo económico regional determinó que la población bellaunionense se triplicara, pasando de 5000 a 15.000 habitantes. Este escenario de prosperidad justificó el slogan “de Bella Unión nadie emigra”, reivindicado por las autoridades públicas y por los empresarios para resaltar el excepcional éxito económico de la zona, que contrastaba con la despoblación y el estancamiento verificados en buena parte del interior uruguayo. En 1979, el sesquicentenario de Bella Unión fue eufóricamente celebrado con actividades culturales, académicas y deportivas. Las familias de los peludos participaron en estas festividades, pero no llegaron a involucrarse con su organización, impulsada básicamente por los ciudadanos más conspicuos de la localidad. “Sobre la paz de las tumbas – señala Merenson – este sesquicentenario parecía retomar algo de la escena primaria de aquel pueblo tranquilo, en el que todos se conocían, y en el que era posible la convivencia de los diferentes actores en base al poder de unos y el silencio y la subordinación de otros” (Merenson, 2016:189).

Durante la dictadura, el Estado uruguayo pretendió volverse coextensivo a la enunciación colectiva de los procesos políticos y económicos en un sentido bastante específico: no había posibilidad de subjetivación sistemática y organizada de la experiencia represiva o de los malestares resultantes de las relaciones de producción por fuera de las categorías legitimadas por el gobierno autoritario. El terror se erigió como un instrumento importante para la captura de la política en el espacio subjetivo del Estado. En un primer momento, gracias al terror, fue posible transformar toda y cualquier disidencia en objeto de administración represiva a través del estigma, la tortura, la prisión, el destierro y la desaparición. La prerrogativa de la represión como instrumento de administración de la disidencia política sería parcialmente impugnada con la redemocratización del país, pero esto no significaría un descentramiento inmediato de los espacios de subjetivación circunscriptos por el terror. De hecho, podemos decir que el esfuerzo que comienza a ser emprendido en el “modo de reorganización” sindical consiste, para utilizar una expresión de León Rozitchner (2015a), en “pensar contra el terror”, si entendemos este último, esencialmente, como el efecto perenne de la negación *a priori* de cualquier política que no se piense, desde el inicio, en relación a su propia viabilidad o plausibilidad en los cuadros institucionales ya existentes.

Fuera de Bella Unión, las discusiones sobre el presente y el futuro de la revolución continuaron por algunos años, ya sea en el exterior o en la cárcel. En la tentativa de corregir los rumbos de la lucha revolucionaria precedente, algunos presos políticos y exiliados pertenecientes a la UTAA y al MLN-T se propusieron desarrollar parámetros de corrección ideológica inspirados en ciertas categorías que moldearon su política durante la década de los '60. "Peludo", por ejemplo, llegó a convertirse en un modelo de conducta esperable de los militantes que estuvieran dispuestos a redimir sus desvíos ideológicos pequeño-burgueses. La "peludización" de la militancia debía operar como una especie de retorno a los orígenes del movimiento revolucionario, asociada a la convivencia con los "peludos", la vida frugal compartida en los cañaverales y la valorización de actitudes pragmáticas y anti-intelectuales⁴⁵. De esta forma, el "peludo-proceso-de-subjetivación" se transformaba, tanto en la prisión como en el exilio, en un modelo de subjetividad. "Peludo" ya no indicaba, por consiguiente, el inicio de una transformación del campo subjetivo (como ocurrió en el modo agrario), pero sí su culminación esperada y necesaria bajo la forma de un estilo de vida susceptible de normatización y vigilancia. Más adelante, veremos que esta tendencia fue parcialmente revertida durante el "modo de reorganización", cuando la categoría "peludo" volvió a ser problematizada, redimensionada y eventualmente omitida en el contexto de un esfuerzo colectivo por producir términos capaces de sustentar la enunciación de nuevas capacidades políticas en tiempos de democracia.

En marzo de 1985, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, primer presidente electo por voto popular después de la dictadura, el Uruguay vivía un intenso proceso de sindicalización. En Bella Unión, las enormes pérdidas salariales impuestas durante las décadas anteriores favorecieron la creación del Sindicato Único de Trabajadores Rurales y Afines (SUTRA), que a partir de entonces – y hasta el año 2000 – firmaría convenios laborales con la patronal APCANU. Sin embargo, muchos militantes que habían participado en la asamblea de fundación del SUTRA decidieron no adherir a esta nueva agremiación porque esperaban el retorno de los "históricos" a Bella Unión, es decir, de aquellos que habían actuado en la UTAA en los años sesenta y ahora, después del exilio o la prisión, preparaban su retorno al norte uruguayo. La UTAA comenzó su proceso de reorganización a mediados de 1985 y, así como el SUTRA, también fue reconocida por el

⁴⁵ Merenson (2016) discute en detalle como "peludo" se convirtió en criterio de "peludización" en los debates de la izquierda revolucionaria uruguayo durante los años del exilio y la prisión. Al respecto, ver también Alonso y Figueredo (2014) y Alonso (2011).

PIT-CNT, inaugurando una situación *sui generis* en la cual dos sindicatos vinculados a la misma central reivindicaban la representación de los cortadores de caña de Bella Unión.

En un documento elaborado por el sindicato en 1989, la “reorganización” de la UTAA era evaluada como consecuencia de la “memoria de los trabajadores”, que “guarda el recuerdo fiel de tantas jornadas de lucha y derechos conquistados” (UTAA, 1989). Esteban, uno de los “históricos” que regresaron a Bella Unión a inicios de junio de 1985, aún recordaba las discusiones que se daban durante las grandes asambleas promovidas por la UTAA en lo que había quedado del edificio de su policlínica: “me acuerdo de un viejo que dijo ‘bueno, pero mucho blá, blá, blá y no hablamos de Sendic’. Porque estaba viva todavía la imagen de Raúl, ¿no? Y bueno, estos compañeros, en realidad mucha gente joven, fueron los que, de alguna manera, dieron el puntapié inicial”. Sin embargo, si por un lado la imagen de Sendic evocaba una trayectoria sindical inspiradora y digna de ser retomada, por otro lado, su relación con la lucha armada no parecía dialogar fácilmente con las nuevas sensibilidades que se estaban cocinando en el Uruguay democrático, marcado por el compromiso de todas las grandes fuerzas político-partidarias con el derecho, el estado de derecho y los derechos humanos.

Después de la muerte de Raúl Sendic, en 1989, siguió un período en el cual los militantes del MLN-T – muchos de los cuales se integrarían al Movimiento de Participación Popular (MPP) y, por lo tanto, al Frente Amplio – buscaron incluir el nombre y la historia de su líder en el relato de las luchas democráticas contra el autoritarismo y la persecución impuestos por la dictadura. Esto no impidió que el heroísmo de la guerrilla continuara siendo enaltecido, pero ya no como conducta política deseable, sino en tanto símbolo de coraje, abnegación y compromiso con los pobres⁴⁶. La compatibilización de la figura de Sendic con la defensa de la legalidad expresa la ya mencionada tendencia a volver toda y cualquier expresión de la política coextensiva a la institucionalidad vigente. La continuidad – e inclusive la legitimación – de dicha tendencia en la post-dictadura plantea algunos desafíos adicionales al estudio de la política-como-autonomía, porque en ese período todo pasa como si, de repente, la realización de las potencias colectivas fuese siempre interna al juego de las convenciones estatales e indisociable de él. A partir de 1985, ya no había palabras “obvias” y diseminadas que evidenciaran con facilidad la dimensión auto-nómica de la política. Y aún cuando tales palabras existían, su uso era sistemáticamente vigilado y desaconsejado. De hecho, los antagonistas de la UTAA en el

⁴⁶ La asimilación de los militantes del MLN a la vida democrática es narrada por diversos autores. Ver, por ejemplo, Labrousse (2009), Martínez (2015), Mazzeo (2005), Rey Tristán (2011), Tagliaferro (2004).

campo sindical nunca dejaron de cuestionar su vínculo con el MLN-T y su línea política de confrontación permanente con los productores cañeros. En palabras de Esteban, “UTAA sufrió [en los 80’] un doble cerco: el de la burguesía local y el de la izquierda. La UTAA era tupamara, guerrillera, bueno, hoy diríamos terrorista, ¿no?”. En este contexto, la tarea de reorganización era complicada, aunque, según Esteban, entre los militantes del sindicato había consenso al respecto de la necesidad de “durar, pero durar luchando”.

3.2 Modo de reorganización (1985-1997)

“Durar luchando” no era un desafío menor, dado que, sin disponer de autorización de los patrones para dialogar con los trabajadores en las plantaciones – apenas el SUTRA tenía esa prerrogativa – la UTAA debía actuar en la “clandestinidad”. Ello no impidió que el sindicato organizara, ya en 1985, su primer gran “lucha” en el “frente sindical” a favor de la realización del pesaje de la caña de azúcar en las propias plantaciones, y no en el ingenio, donde la cantidad de materia prima cortada por los trabajadores era usualmente fraudada, mermando sensiblemente sus rendimientos⁴⁷. Si la adhesión de los asalariados rurales a la UTAA se intensificó después de la conquista de la balanza en las chacras, la actuación del sindicato en el llamado “frente social” consolidaría su legitimidad junto a otros actores sociales de Bella Unión. En un primer momento, la cabecera de puente del “frente social” fue la reactivación de la policlínica Dr. Gotardo Bianchi, cerrada por la dictadura en 1971 y reabierta en abril de 1986, gracias al apoyo financiero de diversas organizaciones no gubernamentales y de cooperación internacional. “Ahí – asevera Esteban – nos empezamos a abrir espacio en la sociedad”. Con todo, el alcance de este “espacio” fue objeto de intensas discusiones que redefinieron, de cierto modo, las propias dimensiones de la política sindical. Esteban prosigue:

me acuerdo de las discusiones que se dieron, duras, de si la policlínica era sólo para los peludos o si era para el conjunto de los... Porque los peludos, es decir... en Bella Unión siempre hubo un treinta por ciento de su población que no era cortador de caña, que no trabajaba en la caña, que se revolvía como podía. Entonces, al final, triunfó la posición de que fuera una policlínica popular, que fuera para todo el mundo.

Las reticencias que pueblan este relato nos dicen mucho al respecto de cuán problemático fue – y continúa siendo – el debate sobre cómo circunscribir y definir a los protagonistas y beneficiarios de la actuación política del sindicato en sus diversos “frentes” de lucha. Si la policlínica debería ser no sólo para los peludos, sino también para el conjunto de los que “se revolvían como podían”, ¿entonces lo mismo podría decirse

⁴⁷ Asimismo, el tiempo gasto entre el corte de la caña y su “pesada” en el ingenio implicaba la pérdida de peso de la materia prima, lo que incidía directamente sobre el ingreso de los destajistas.

respecto al sindicato? ¿La UTAA podría volverse “popular”, así como su policlínica? En 1989, teniendo en cuenta las transformaciones políticas y económicas verificadas en Bella Unión, los dirigentes del sindicato estimaban que “entender la globalidad de la realidad es extremadamente difícil para nosotros”, pero reafirmaban su “empeño soberbio por aprender” (UTAA, 1989). Los resultados de ese aprendizaje fueron matizados por una articulación entre las experiencias de organización y las lealtades colectivas nutridas por las generaciones más jóvenes, cuya socialización había ocurrido fuera del ambiente sindical – en iglesias, comisiones barriales y clubes deportivos – y los recuerdos personificados y actualizados por los “históricos”, que mantenían presentes en su discurso categorías como “clase”, “tierra” y eventualmente, “Sendic”. A finales de los años ‘80, e inicios de los ‘90, después de más de una década de dictadura y en pleno proceso de regionalización de las economías del Cono Sur, “la globalidad de la realidad”, ya sustancialmente modificada en relación a la coyuntura de los años ‘60, sería enunciada, en la confluencia de dos generaciones, como una situación que exigía nuevas composiciones colectivas. A partir de entonces, la UTAA pasó a ser también el sindicato de quien “se revolvió como podía”, y estos, a su vez, se transformarían en cerca del 70% de la fuerza de trabajo bellaunionense en el auge de la crisis de la industria azucarera.

En 1992, en una carta enviada al Servicio Ecuménico Solidario (SES), que colaboraba con algunos proyectos sociales del sindicato, el presidente de la UTAA manifestó su preocupación por “todo este proceso de aceleración de la liberalización de la economía” iniciado a partir de la formación del Mercosur, en 1991. Según él, la “unificación” de los mercados incidía negativamente en la zona de Bella Unión, comprometiendo la competitividad del azúcar uruguayo en relación al azúcar producido en Brasil. En consecuencia, “ya ha disminuido el área de caña plantada y los empresarios ensayan otros cultivos (pero ninguno puede ocupar la mano de obra de forma intensiva como la caña de azúcar)”. En este contexto “la desocupación estacional o permanente está haciendo estragos en las filas de los asalariados agrícolas” (UTAA, 1992). Entre 1991 y 1995, de acuerdo a informaciones producidas por los sindicatos de Bella Unión, el área de cultivo destinada a la caña de azúcar retrocedió de 9.500 a 4.000 hectáreas. En ese mismo período, 194 productores dejaron de plantar caña, y el número de cortadores contratados durante la zafra pasó de 2.000 a 600 personas (SOCA, UTAA, SUTRA, 1995). Si, en 1990, antes de la firma del Tratado de Asunción, los documentos producidos por la UTAA ensayaban tímidamente la vuelta de las reivindicaciones agrarias como una posible solución para la “desocupación estacional”, entonces a partir de la creación del Mercosur,

con la intensificación de este problema, el sindicato pasaría a operar en dos horizontes políticos simultáneos y más o menos independientes. El primero prolongaba y actualizaba la reflexión sobre los sujetos, las razones y las condiciones de acceso a la tierra en un contexto de agotamiento de la industria azucarera. El segundo dialogaba con los intereses económicos de algunos productores de caña y apuntaba a consolidar un movimiento social “inter-clases” (palabras de Esteban) para exigir del gobierno la protección y la diversificación de la producción nacional de azúcar⁴⁸.

El desarrollo del primer horizonte político puede mapearse a través de diferentes proyectos productivos elaborados por el sindicato desde finales de los años ‘80 hasta mediados de los años ‘90. En 1989, la UTAA planteó la posibilidad de crear una “unidad de producción integral” que solucionara problemas inmediatos, asociados a la “zafralidad” y “que sir[viera] como ejemplo de un desarrollo diferente, basado y dominado por los trabajadores agrícolas”. En este documento, el sindicato reafirmó su “clasismo” y lo definió como una apuesta a las capacidades de los trabajadores de “transformar la realidad en función de sus intereses”, garantizando así, su “autosuficiencia alimentaria” y, por consiguiente, su “independencia económico-política y la autonomía cultural” (UTAA, 1989). En 1990, las “Bases para un proyecto de interés económico y social para Bella Unión” fueron presentadas como contrapunto al “modelo de cooperación propagandeado para la zona”, basado en la asociación entre “capitalistas” que “explotan mano de obra asalariada”⁴⁹. Este proyecto, enviado a diversos socios potenciales en el campo de las ONGs, intentaba garantizar insumos para la consolidación de pequeños emprendimientos – una “bloquera”, un “grupo de pesca” y una “unidad de trabajo artesanal” – promovidos por los trabajadores de la zona, algunos de ellos ex presos políticos. El proyecto también proponía la formación de una “granja integral” en una extensión de 11 hectáreas “sin recurrir a mano de obra asalariada” y tampoco a los servicios de “técnicos de alto nivel”, que en este caso serían prescindibles dadas las reducidas dimensiones del emprendimiento (UTAA, 1990).

En 1992, el sindicato formuló un proyecto de investigación que no llegaría a recibir fondos para concretarse. Allí, los “pequeños y medianos productores” aparecían como

⁴⁸ En los ‘90, “diversificar” la producción azucarera significaba asimilar medios técnicos para extraerle a la caña otros productos que fueran potencialmente más competitivos en el mercado regional en vías de conformación.

⁴⁹ A inicios de los ‘90, las principales agroindustrias de Bella Unión se presentaban formalmente como “cooperativas”: Cooperativa Agropecuaria Limitada de Vitivinicultores del Norte (CALVINOR), Cooperativa Agraria Limitada Norte Uruguayo (CALNU); Cooperativa Agraria Limitada de Agua para Riego (CALAGUA).

potenciales aliados en la lucha por “soluciones inmediatas” para el desempleo, ya que se encontraban “al borde del colapso total” como consecuencia de la reducción del área de caña plantada y de su imposibilidad de acceder a créditos para la reconversión productiva. En el mismo año, el SES recibió un nuevo “Proyecto de acciones para el desarrollo de Bella Unión” en el cual la “granja integral” comenzaba a ser pensada como un “subproyecto central” alrededor del cual se organizarían otras actividades productivas mutuamente complementarias. La totalidad de estos proyectos debería generar cerca de 30 puestos de trabajo. En 1994, cuando la desarticulación de la agroindustria azucarera elevó el desempleo a niveles hasta entonces desconocidos, el sindicato reelaboró su proyecto de “granja integral” para volverlo compatible con la explotación de 100 hectáreas y la generación de 50 puestos de trabajo. Poco a poco, el acceso a la tierra fue dejando de ser visto como una alternativa experimental al desempleo estacional para figurar como solución definitiva al desempleo generalizado. A mediados de los años noventa, con financiamiento inicial del SES y de algunos colaboradores suecos⁵⁰, la UTAA empezó a producir hortalizas en el marco de lo que sería su primer experimento de acceso a la tierra en pequeña escala. La mayoría de los involucrados en el emprendimiento – cerca de ocho personas – pertenecía a la dirección del sindicato. En este caso, el acceso a la tierra era concebido como una forma de garantizar que los militantes de la organización pudieran estar en Bella Unión de forma permanente, sin tener que desplazarse a otras zonas del país en busca de trabajo. A finales de los años noventa, la experiencia de la pequeña “chacra del SES” terminó sucumbiendo a la paulatina dispersión de sus miembros, a los conflictos internos y a los bajos precios pagos por las hortalizas en los mercados locales⁵¹.

En 1997, la UTAA – ahora articulada con una asociación de pequeños y medianos productores agrícolas y con el sindicato de operarios del ingenio azucarero local – formuló un ambicioso proyecto de “recolonización agraria”. Dicho proyecto respondía y buscaba dar materialidad a los resultados de una “Encuesta sobre la situación laboral y socio-familiar” de los trabajadores agroindustriales de Bella Unión, basada en la aplicación, por los propios militantes sindicales, de centenas de *surveys* a sus compañeros de trabajo. La encuesta, llevada a cabo en 1995, alcanzó un universo de 810 personas y permitió que los sindicatos no sólo concibiesen la magnitud del desempleo y de las privaciones económicas

⁵⁰ Algunos ex militantes de la UTAA y el MLN-T, entre ellos Cepillo, que conocimos en el capítulo anterior, se exiliaron en Suecia y, desde su nuevo lugar de residencia, organizaron redes de apoyo para colaborar financieramente con los proyectos sociales promovidos durante el modo de reorganización.

⁵¹ El terreno de la “chacra” siguió disponible para el usufructo de la UTAA incluso después de la disolución de la primera experiencia de producción colectiva. Actualmente, se encuentra instalada en la propiedad una familia de trabajadores que se dedica a la producción de hortalizas.

padecidas por la población local, sino también – y fundamentalmente – delineasen algo que podríamos llamar un “campo de devenir” para sus bases sociales. Además de diagnosticar las carencias manifestadas por los trabajadores en lo referente al acceso a los servicios públicos y puestos de trabajo, el relevamiento realizado en 1995 tuvo como propósito indagar sobre las expectativas laborales de los encuestados y su predisposición para involucrarse en ciertas tareas de movilización y organización. Así, por ejemplo, más del 50% de los entrevistados decían estar dispuestos a participar en “grupos de trabajo o estudio” junto a sus “compañeros de trabajo” y el 32% indicaba que los sindicatos deberían intervenir en la formación de tales grupos. En lo concerniente a las expectativas laborales, el 63% de los entrevistados quería “un empleo seguro”, aun cuando casi el 80% declarara no haber tenido nunca “un trabajo permanente”. A la mayoría de las personas (54%) les gustaría trabajar en “tareas agropecuarias” y el restante se dividía entre los que preferían las “actividades de servicios” (28%) o las “tareas artesanales” (14%) (SOCA; UTAA y SUTRA, 1995). Estas y muchas otras informaciones subsidiaron la elaboración de un proyecto productivo en el cual 500 personas (100 pequeños productores; 300 asalariados rurales e industriales y 100 jóvenes desempleados) fueron presentadas como protagonistas potenciales de una iniciativa de “recolonización” basada en la creación de cooperativas agropecuarias. Estos nuevos emprendimientos deberían recibir créditos favorables (“que se amortizarán en 30 años”) para la adquisición de 1000 “hectáreas improductivas”. A diferencia de las propuestas formuladas por la UTAA en años anteriores, el proyecto de recolonización de 1997 suponía la salarización de la fuerza de trabajo (“200 asalariados en época de zafra”) y la participación de diversos organismos del Estado tanto en el proceso de preparación de los “recursos humanos” como en la asignación de créditos y tierras. Sin embargo, los sindicatos que propusieron el proyecto no abdicaban del envío de sus representantes a la “Comisión Coordinadora”, encargada de ejecutar y acompañar las actividades previstas.

Entre 1989 –cuando nociones como “desarrollo” y “autonomía cultural” se estrenan en la política agraria de la UTAA – y 1997 – cuando los trabajadores son presentados como “recursos humanos” en un proyecto de desarrollo sometido al Estado –, el sujeto y las razones de las reivindicaciones agrarias propuestas por el sindicato se redefinieron sustancialmente. La retracción de la industria azucarera dejó a decenas de pequeños productores sin trabajo, acentuó los efectos de la zafralidad y determinó la creación de un enorme excedente de mano de obra que, literalmente, no cabía en la economía local. Ante este panorama, la UTAA entendió que la lucha por la tierra podría contemplar a todos los

que no contaban en los cálculos de la reconversión económica planificada por los gobiernos neoliberales en asociación con el empresariado de Bella Unión. En el modo de reorganización, cuyo lugar de la política fue, sin dudas, el llamado “frente social”, la UTAA terminó transformándose en un sindicato popular, dispuesto a incluir en el campo de su política no sólo a los trabajadores asalariados, sino también a todos aquellos que “se revolvían como podían”. El mismo criterio de selección utilizado para prescribir que la policlínica estaba abierta a cualquiera que la necesitara también sirvió, durante los años 1990, para (re)definir el sujeto de las reivindicaciones agrarias del sindicato: la tierra, en una eventual política de recolonización, sería para quien deseara trabajarla – y no sólo para el asalariado rural que ya la trabajaba.

El esfuerzo reorganizativo desplegado en la década de los noventa permitió la inclusión de “quien se revuelve como puede” en el ámbito de una acción sindical que comenzaba a ser pensada, también, como la capacidad de definir políticas de gobierno más allá del ámbito de la reglamentación de las relaciones laborales. De cualquier manera, es difícil evitar la tentación de leer los proyectos de desarrollo propuestos por la UTAA como “cartas de compromiso”, en las cuales la voluntad de una vida mejor ofrece, de antemano, garantías de su disposición de fluir dentro de los límites institucionales existentes, en diálogo con categorías atractivas al consenso democrático y la atomización de las demandas políticas. Cabría objetar, sin embargo, que no es sólo el uso de ciertos términos, muchas veces fortuito⁵², que define el sentido de una política, sino sus prescripciones fundamentales, o sea, aquellas operaciones enunciativas que señalan un *posible* cuyo sostenimiento compete a la (práctica de la) política. En el modo de reorganización, ese posible era la propia conformación de un sujeto político – quien “se revuelve como puede” – justamente allí donde los cálculos del Estado y del capital concebían apenas “externalidades” lamentables de una necesaria reconversión productiva regional.

A pesar de sedimentar una prescripción bastante singular, el modo de reorganización no logró reunir las condiciones necesarias para equipar y dar proyección a sus posibles. Después del fracaso de una huelga declarada en 1992 contra la ruptura unilateral del convenio colectivo por parte de las patronales (capítulo 1), se hizo muy difícil convencer a los trabajadores de la posibilidad de apoyar un “Movimiento de

⁵² Nociones como "autonomía cultural" y la pretensión de capacitar "recursos humanos" tuvieron una vida corta en el discurso sindical de la UTAA, a la vez que la perspectiva de aglutinar múltiples demandas colectivas – de los "jóvenes", los "productores chicos" y, más tarde, de la "gente que no tiene casa" y las "mujeres" – bajo la bandera de la lucha por "soluciones integrales" siguió siendo un horizonte que sucesivas generaciones de dirigentes sindicales han actualizado hasta los días de hoy.

Recolonización Agraria” con sus propias fuerzas. Aunque los asalariados no fueran el único actor social llamado a componer el sujeto prescrito por la “recolonización agraria” – que también debería incluir a pequeños productores y jóvenes desempleados –, ellos constituían, de todos modos, su parte fundamental. Confrontada con la dificultad de movilizarlos, la UTAA y sus aliados en el “frente social” tuvieron que militar por la recolonización agraria sin descuidar el horizonte de la “diversificación” de la industria cañera, que contaba con el apoyo de una parte significativa de los productores más poderosos de Bella Unión y podría resultar, por ende, en una solución inmediata para las urgencias de los trabajadores. Mientras que la recolonización agraria fue una propuesta cultivada en reciprocidad con las intuiciones políticas surgidas en el “frente social”, la “diversificación”, a su vez, quedó circunscripta al espacio subjetivo del “frente sindical”, donde primaba la defensa de las posicionalidades sociales ya existentes – o de lo que quedaba de ellas –, y no necesariamente la voluntad de explorar nuevos devenires colectivos bajo la égida de las incipientes categorías de la política “popular”.

A mediados de los años noventa, la defensa de una industria cañera nacional y diversificada fue impulsada por la Intersectorial de Bella Unión, que congregó a productores rurales, iglesias, asociaciones de plantadores, sindicatos, algunas cooperativas agroindustriales y políticos de varios partidos. Bajo la bandera de la Intersectorial, los sindicatos de trabajadores de la industria azucarera (SOCA, UTAA y SUTRA) se propusieron luchar contra el proceso de “reconversión” productiva, que avanzaba a pasos acelerados sin que las actividades económicas sustitutivas de la caña de azúcar logran mitigar el desempleo creciente. La participación en la Intersectorial y posteriormente en el llamado Comité de Crisis, que también incluía a representantes de la empresa CALNU, era justificada, en un primer momento, como una forma eficaz de defensa de las fuentes de trabajo existentes en la zona. Sin embargo, en sus comunicados a la población, los sindicatos destacaban que la articulación con las patronales no implicaba “olvidar las diferencias” ni renunciar a una plataforma reivindicativa propia que incluía, entre otras propuestas, la representación de los trabajadores en la dirección de todas las agroindustrias de Bella Unión (UTAA, SOCA y SUTRA, 1994).

A pesar de la preservación de pautas políticas específicas en el “frente sindical” y de la acumulación programática desarrollada en el “frente social”, fue la imagen de una comunidad demandante y carenciada la que terminó siendo seleccionada por ciertas instituciones del Estado – y, posteriormente, por algunas fuerzas político-partidarias – a la hora de ofrecer soluciones concretas para la crisis económica de Bella Unión. En 1996, la

ciudad fue declarada zona epidémica por el Ministerio de Salud, que había diagnosticado un aumento alarmante de los casos de hepatitis A en ciertos barrios populares. Dicha situación llamó rápidamente la atención de las audiencias nacionales sobre las dificultades vividas por la población “pobre” del norte del país, lo que favoreció la activación emergente de políticas públicas de combate al desempleo. A partir de ese momento, los trabajadores rurales perjudicados por la bancarrota de la industria azucarera encontraron en el Estado nuevos espacios de interlocución para enunciar sus problemas colectivos. La interpelación estatal inauguró, así, un diálogo sobre inclusión social, carencia y pobreza que, en un primer momento, postergó el trabajo de composición política informado por las incipientes categorías del modo de reorganización.

3.3 Modo popular (2004-2006)

En el año 2000, los medios de comunicación de todos los matices políticos comenzaron a dar creciente visibilidad a las consecuencias del empobrecimiento colectivo ocasionado por el cierre de miles de puestos de trabajo en Bella Unión. En la misma época, los periódicos identificados con el Frente Amplio tendían a cifrar en la pobreza de los “peludos” un síntoma del escandaloso fracaso de los gobiernos neoliberales; síntoma que la izquierda debería ser capaz de resolver si ganaba las elecciones presidenciales de 2004. En 1998, el Frente Amplio ya había manifestado a la Intersectorial su promesa de proteger y fortalecer la producción cañera uruguaya. Sin embargo, para infortunio de quien defendía esta plataforma política, las elecciones de 1999 las ganó Jorge Batlle, miembro del Partido Colorado y acérrimo defensor de la liberalización de los mercados. En marzo de 2000, al inicio del gobierno de Batlle, la Intersectorial organizó una gran “Marcha por la vida y el trabajo en Bella Unión”, reiterando, así, el aspecto humanitario y aglutinador que adquiriría la defensa de la agroindustria azucarera. No obstante, en ese mismo año los sindicatos de trabajadores rurales decidieron retirarse formalmente de la Intersectorial después de que las patronales se negaran a ofrecer su compromiso público con el mantenimiento de los niveles salariales vigentes y de los puestos de trabajo existentes hasta aquel momento. “Decidimos retirarnos – recuerda Esteban – y seguir la pelea por la industria azucarera solos”. Lito, integrante de la generación que comenzó a militar en la UTAA durante la reorganización, explica que, a partir de entonces, fue posible hablar con más vehemencia de una necesaria “intervención [del Estado], donde estuvieran los trabajadores y los productores representados en la directiva de CALNU”. Los interlocutores más sensibles a las propuestas políticas de esta naturaleza fueron algunos cuadros del Frente Amplio, muy

especialmente “Raulito” Sendic, hijo del histórico dirigente de la UTAA y figura destacada del Movimiento 26 de Marzo⁵³.

Mientras que la perspectiva de una “reactivación” de la industria azucarera era cultivada junto al Frente Amplio con miras a las próximas elecciones nacionales, la “crisis de Bella Unión” se acentuaba bajo el gobierno de Batlle: “el que no quemó las naves cuando se vino, se fue. Y los otros – prosigue Esteban –, quedaron en Las láminas, Farolito: todos cinturones de miseria que fueron apareciendo”. Nira, que vivía en Las Láminas en aquella época, recordaba los primeros años 2000 como tiempos de “muchísima miseria, mucha hambre”. Ella y otros militantes que comenzaron a acercarse a la UTAA en el auge de la crisis económica buscaron ampararse justamente en la denuncia de este tipo de situación – ya bastante visibilizada por la prensa nacional – para solicitar al gobierno mejoras urbanas y asistencia sanitaria en beneficio de los barrios populares. Simultáneamente, los dirigentes del sindicato comenzaron a “buscar proyectos” junto al Ministerio de Trabajo para, en palabras de Lito, “conseguir ocupar una cantidad de trabajadores rurales”. En 2004, tales proyectos se materializaron en la implementación de un programa de “Jornales Solidarios” que ya había sido adoptado, un año antes, por la Intendencia de Montevideo con el objetivo de combatir los efectos de la recesión económica sobre el mercado de trabajo. En su versión montevideana, los “jornales” servían para garantizar a los trabajadores desempleados de los barrios más pobres un ingreso de un poco más de 1.000 pesos (unos 35 dólares) durante cinco meses. En Bella Unión esta iniciativa, organizada por la UTAA y financiada por la Junta Nacional de Empleo, tomó un rumbo muy singular. “Los jornales – me explicaba Esteban – eran para andar barriendo calle, arrancando yuyo, carpiendo, limpiando una cuneta, [pero] Lito propuso salir a trabajar en las chacras de los pequeños productores... y funcionó, ¿viste?”. El ideólogo de esta propuesta, Lito, contaba que “la mano de obra de los trabajadores rurales ayudó a los productores chicos, que no tenían como pagarla [...] UTAA también tenía una chacra, y

⁵³ El Movimiento 26 de Marzo (26M) fue fundado en 1971 con la misión de difundir la línea política del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) en los ámbitos legales – estudiantiles, sindicales – de lucha social. Después de la derrota militar de los tupamaros, hacia fines de los sesenta, el 26M se debilitó, sus líderes fueron perseguidos y presos por la dictadura – instalada en 1973 – y algunos de ellos marcharon al exilio. Durante ese período el movimiento fue oficialmente disuelto, pero algunos de sus militantes siguieron dedicándose a tareas de agitación, formación y elaboración político-teórica. En 1981 el 26M fue refundado en París, bajo el signo del compromiso ideológico con la experiencia del MLN-T y la fidelidad al “socialismo real” del Este europeo. Luego de reorganizarse, el 26M mantuvo estrecha vinculación con el Frente Amplio, del cual ya había formado parte a inicios de los ‘70, y al cual volvió a ingresar definitivamente en 1989. La presencia en el Frente Amplio duró hasta el año 2008, cuando el 26M dejó dicha coalición política debido a divergencias ideológicas con el gobierno de Tabaré Vázquez, primer presidente de izquierda de la historia uruguaya. “Raulito” Sendic permaneció en el Frente Amplio, donde organizó su propio espacio político, denominado lista 711.

ahí concentramos alrededor de cuarenta trabajadores que ganaban el jornal. Estaba la horticultura, se llevaba para la casa [lo producido], se vendía el excedente”.

El anuncio de que la UTAA organizaría la distribución de los “jornales” atrajo a mucha gente a las reuniones del sindicato. “Eran cientos de compañeros. Se iba al sindicato no por conciencia, sino por necesidad”, evaluaba Esteban, que en aquella época criticó duramente el uso de los “jornales” como estrategia para acercar a más personas al sindicato. Años después, él revisaría su punto de vista, reconociendo el valor estratégico de dicha política social para el fortalecimiento de la organización. Nira ofrece un punto de vista que complementa y relativiza las observaciones de Esteban: “como casi toda la gente que llega a la organización, yo llegué por necesidad [...] me invitó el Lito [...] después me empecé a integrar, me gustó y empecé a participar en forma activa”. Las consecuencias del uso dado por la UTAA a los Jornales Solidarios describen las operaciones políticas fundamentales y las problemáticas nodales del modo popular. Examinémoslas más de cerca.

Lito fue uno de los dirigentes más destacados de la “nueva generación de la UTAA”⁵⁴. A partir del 2004, él retomó algunas categorías inventadas en otras secuencias políticas y se propuso trabajarlas, junto a sus compañeros y compañeras, a modo de construir un horizonte programático propio para su organización. “De los viejos militantes” Lito mantuvo la idea de que “era necesario estar en todas las luchas, no sólo las del sindicato”. También estuvo de acuerdo con ellos en la constatación de que “lo que diferencia la UTAA de los otros sindicatos es la lucha por la tierra, no sólo por el salario”. Del modo de reorganización, él mantuvo la intuición de que los “productores chicos” podían ser parte de un campo de alianzas más duraderas con los “peludos”, al final, sus ambiciones convergían con la reivindicación agraria que estaba en el corazón de la singularidad política identificada en la UTAA. Lito también propuso una definición estricta de los “peludos” como “quienes cortan caña todos los días”, y les atribuyó la función de “dirigir el sindicato”. Esta definición “clasista” y masculinista del “peludo” no excluyó la incorporación de mujeres a la dirección sindical, pero llegó a servir para cuestionar la participación de algunos “compañeros” – “gurises de la universidad”, miembros de otros movimientos sociales – en instancias deliberativas en las cuales estuvieran en juego los

⁵⁴ Los interlocutores de Merenson, que desarrolló su trabajo de campo en Bella Unión durante la primera década de los años 2000, denominaban “nueva generación” al conjunto de militantes que empezó a integrar el sindicato después de la redemocratización del Uruguay. La nueva generación convivía con los “peludos viejos”, cuya experiencia sindical se remontaba al período fundacional del sindicato y a las luchas colectivas emprendidas hasta inicios de los años setenta. Ambas generaciones experimentaron diálogos fecundos y tensiones importantes, como la que confrontó a Esteban con Lito en lo concerniente a los jornales solidarios.

“intereses de los trabajadores”. Finalmente, Lito cuestionó cualquier estructura organizativa que privara a sus miembros de “saber por lo que están luchando”. Para él, esta tendencia habría marcado la relación del MLN con los peludos en los años sesenta y continuaría caracterizando, en tiempos más recientes, la relación de los liderazgos “intelectuales” de la izquierda con los referentes políticos “de abajo”. Las concepciones de Lito fueron a veces aceptadas y otras veces rechazadas por sus compañeros de sindicato pero, de cualquier forma, delimitaron decisivamente el campo de posibles que sería explorado por muchos trabajadores, trabajadoras y pequeños productores en el transcurso del modo popular.

Mientras avanzaba la distribución de los Jornales Solidarios, los militantes de la UTAA tuvieron la oportunidad de estrechar sus vínculos con los “productores chicos” y formar, junto a ellos, un incipiente agenciamiento colectivo que volvería a poner en el orden del día la perspectiva de la lucha por la tierra. En ese mismo período, y con intenso apoyo de la UTAA, se organizó la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (APAARBU). Pocos meses antes de la llegada del Frente Amplio a la presidencia de la República, peludos, “productores chicos” y algunos militantes del sindicato de operarios del ingenio local (SOCA) ya comenzaban a discutir la idea de ocupar tierras estatales y reivindicar su distribución entre los sectores sociales más perjudicados por la retracción de la industria azucarera. Esteban recordaba que en 2004, en una reunión de la dirección de la UTAA, defendió la necesidad de “largarnos a ocupar [tierras], porque se había vinculado mucha gente al sindicato por el tema de los jornales”. Aunque la realización de la medida de ocupación no fue inicialmente bien acogida por los demás integrantes de la organización,

se empezó a trabajar en forma más sistemática, no sólo con la directiva, sino también con otros grupos, con la gente de APAARBU, que se había formado a partir de ese vínculo con los pequeños productores [proporcionado por los Jornales Solidarios]. Empezamos a hablar del tema de ocupar alguna tierra porque todos estaban en situación bien comprometida.

La conformación de un frente de organizaciones sindicales y populares interesadas en sostener la perspectiva del acceso a la tierra como solución al problema del desempleo rural coincidió con la campaña electoral de 2004, en la cual el candidato frenteamplista Tabaré Vázquez despuntaba como claro favorito. En este contexto, un documento político discutido internamente por la UTAA sugería que el proyecto del Frente Amplio merecía ser refrendado por los trabajadores, porque era solidario con un “programa mínimo” favorable a sus intereses. Si dicho programa triunfaba en las urnas, sería posible, de acuerdo con el mismo documento, “luchar para profundizarlo”. La disputa por el alcance

del programa político de un eventual gobierno de izquierda se beneficiaría, en conformidad con la política del modo popular, de la activación de amplias composiciones colectivas: “hoy un sindicato rural ya no puede ser la organización de los que tienen trabajo, debe ser la organización y motor de la lucha de los que han quedado desocupados, de los zafreros, de los changadores, de todos los expulsados y marginados por el sistema” (UTAA, 2004).

Aunque el sindicato no fuera encarado como el lugar más apropiado para “hacer política” partidaria, Lito observaba que

en aquellos años veíamos que la izquierda podía... y todos nosotros apostamos que en el 2004 la izquierda tenía que ganar en Uruguay. Esperábamos la reforma agraria, la ley de ocho horas para el trabajador rural, los consejos de salario [...] Confiamos tanto en la izquierda... [...] Nosotros, desde afuera⁵⁵, creíamos que llega el Frente [Amplio] al gobierno y lo cambia todo.

La participación de los sindicalistas de la UTAA a la campaña electoral del Frente Amplio fue motivada por expectativas que no siempre encontraban clara expresión en el programa de gobierno de la izquierda uruguaya. A partir de octubre de 2004, cuando Tabaré Vázquez venció en las elecciones presidenciales, estas expectativas pasarían a dinamizar un largo y conflictivo proceso de interlocución con los funcionarios del nuevo gobierno que estaba a punto de formarse. En el marco de esa interlocución, “los expulsados y marginados por el sistema” se presentarían como proponentes y protagonistas de un conjunto de políticas de Estado de las cuales ellos no deberían ser sólo los beneficiarios, sino también los conductores y protagonistas.

Poco antes del comienzo del primer gobierno de izquierda de la historia uruguaya, UTAA, SOCA y APAARBU formalizaron, en articulación con la Comisión de Programa del Frente Amplio de Artigas, una propuesta de intervención estatal y participación de los trabajadores y productores en la dirección de las empresas agroindustriales de Bella Unión (cf. Díaz, 2009:62). En 2005, cuando Tabaré Vázquez ya ocupaba la presidencia de la República y se mostraba fuertemente comprometido con la reactivación de la industria azucarera bellaunionense, la UTAA y otros sindicatos propusieron que el Instituto Nacional de Colonización (INC) concediera tierras a los asalariados y pequeños productores rurales para que éstos se dedicaran al cultivo de la caña de azúcar (ibid.:63). “En el 2005 – recuerda Lito –, cuando entra el gobierno, nosotros empezamos a negociar

⁵⁵ Probablemente, cuando Lito define su lugar respecto de la política frenteamplista como “desde afuera”, se refiere al hecho de que no integraba las altas cumbres de esa coalición, donde se decidían las líneas prioritarias de acción del futuro gobierno progresista. Sin embargo, estar “afuera” no significaba que la militancia de la UTAA haya dejado de participar activamente en la campaña electoral del Frente Amplio, llegando a integrar, en algunos casos, las listas de candidatos de agrupaciones de izquierda como el 26M, pero en posiciones que muy difícilmente les asegurarían puestos en el parlamento uruguayo.

directamente por tierra [...] y se venía flaqueando, flaqueando, no conseguíamos respuesta”. Mientras la interlocución con la UTAA no alcanzaba resultados concretos, el gobierno del Frente Amplio iba consolidando su propia estrategia de reactivación de la industria azucarera, basada en la concesión de créditos y tierras a productores rurales ya consolidados y en la negociación de una posible estatización del ingenio local, de propiedad de la empresa CALNU, fuertemente endeudada con los bancos públicos⁵⁶. En junio de 2005, el presidente Tabaré Vázquez celebró en Bella Unión el segundo Consejo de Ministros en el interior del país. Su estadía en la ciudad incluyó una visita al barrio Las láminas – emblema de la pobreza rural que el gobierno progresista se proponía erradicar – y un discurso en el Club Náutico, donde anunció que en la primavera de aquel mismo año se daría inicio a una paulatina ampliación del área plantada con caña de azúcar. La reactivación de la industria azucarera sería financiada con créditos del Banco de la República (BROU) respetando una rigurosa selección de los “productores” beneficiados. Durante la visita presidencial a Bella Unión, el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, clasificó las inversiones previstas para la zona como una “oportunidad” otorgada por el gobierno a la población local, y convocó a “productores” y “trabajadores” a aprovecharla con “seriedad en el trabajo” (Presidencia de la República, 2005: s.p.). En esa misma ocasión, el presidente Vázquez y sus ministros recibieron una carta de la UTAA que no parecía vibrar exactamente en el mismo tono de los discursos oficiales proferidos por la nueva jerarquía del Poder Ejecutivo. Para el sindicato, era la propia división entre trabajadores y productores la que debería ser discutida “si queremos cambiar las estructuras que nos han conducido a la desocupación estacional o a la desocupación total” (*apud* Díaz, 2009: 63). En este sentido, la UTAA solicitaba “tierra, crédito, herramientas [y] asesoramiento técnico” para los asalariados rurales y sugería, entre otras medidas, la inclusión de los trabajadores en la administración de las agroindustrias locales y la instalación de un grupo de trabajo integrado por instituciones públicas con la finalidad de diseñar “políticas de desarrollo a largo plazo para las agroindustrias de la zona y la región” (*apud* Díaz, 2009:64).

En la primavera de 2005, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) definió que, quien fuera colono del INC, poseyera maquinarias agrícolas y tuviera

⁵⁶ La segunda parte de la tesis (capítulos 4, 5 y 6) está dedicada al estudio pormenorizado de las premisas y objetivos que orientaron, desde el año 2005, la estrategia de desarrollo económico del Frente Amplio y específicamente el proyecto de reactivación de la industria azucarera de Bella Unión. En este acápite, lo importante es conocer cómo la UTAA y otras organizaciones sindicales elaboraron sus propias prescripciones políticas sobre el Estado en referencia al horizonte de posibles afianzado por el modo popular.

experiencia en el cultivo de caña de azúcar podría obtener financiación pública destinada a la ampliación del área cañera. Además de esto, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) quedaron encargadas de la formulación de un proyecto para producir azúcar y bioetanol en las estructuras industriales disponibles en Bella Unión, cuyo arrendamiento estaba siendo estudiado por el gobierno. Ambas medidas favorecerían, respectivamente, a los productores rurales más capitalizados y a los funcionarios permanentes del ingenio local, pero no dialogaban directamente con las propuestas esgrimidas en el marco del agenciamiento político nucleado por la UTAA.

A pesar de la expansión consistente del cultivo de la caña de azúcar, el período de zafra continuaba relativamente exiguo, prolongando una situación de “necesidad” con referencia a la cual los militantes de UTAA, SOCA y APAARBU justificarían, tanto en diálogo con el movimiento sindical de Montevideo, como en las instancias de interlocución con el gobierno, su intención de ocupar tierras del Estado para producir alimentos y ensayar soluciones concretas y duraderas ante los inconvenientes impuestos por la oferta inconstante de trabajo en Bella Unión. En 2015, Lito aún se acordaba de las palabras que dirigió al presidente del INC cuando las negociaciones con dicho organismo estatal empezaron a sonar poco prometedoras para el sindicato: “yo le dije: ‘en enero [de 2006] vamos a ocupar tierras’”.

La promesa de Lito no demoró en hacerse cumplir: “el 15 de enero – recuerda – decidimos ocupar tierras en el gobierno del Frente Amplio [...] sabíamos que eso iba a generar un hecho político dentro de la misma izquierda y del Uruguay. Y lo generó”. Esteban me explicaba que la “necesidad” subyacente a la decisión de ocupar tierras consistía en imponer “un golpe de tipo político al nuevo gobierno y, además, conseguir un pedazo de tierra para trabajar [...] Pero el efecto político de la ocupación fue fuerte”. En el mismo día en que UTAA, APAARBU y SOCA, apoyados por decenas de trabajadores, ocuparon 32 hectáreas del INC en las proximidades del ingenio azucarero, la policía envió algunos efectivos a las tierras ocupadas para evaluar la situación e identificar a los responsables de la medida. Al día siguiente – cuando ya se tramitaba una denuncia por “usurpación” en el juzgado local y algunos funcionarios sugerían que la postura adoptada por los sindicatos de Bella Unión respondía a órdenes dictadas por la extrema izquierda montevideana –, las organizaciones responsables de la ocupación decidieron expresar públicamente las razones y las circunstancias de su lucha por “tierra para el que la trabaja”.

En respuesta a la acusación de estar siendo manipulados por agrupaciones de izquierda críticas a la administración frenteamplista, los ocupantes afirmaron no tener “ningún tipo de partido por detrás” y declararon que tampoco estaban “contra el gobierno” (UTAA, APAARBU y SOCA, 2006 *apud* Díaz, 2009: 78 y ss.)⁵⁷. En el mismo documento, sugirieron que las autoridades del Poder Ejecutivo hicieran algo para evitar “el desalojo que la policía y la justicia llevan adelante” y reiteraron su compromiso con la “agroindustria sucroalcoholera de la zona de Bella Unión”. La ocupación, a su vez, era justificada como una medida que respondía a los “tiempos necesarios para el trabajo de la tierra”: “sabemos que el INC [...] nos quiere entregar esa tierra, pero no podemos esperar⁵⁸: la naturaleza, los tiempos de producción nos apuran para sembrar en otoño, y el ‘estado de necesidad’ de nuestra gente también nos apura”. Finalmente, la decisión de ocupar tierras “abandonadas” era descrita como una forma de defender la “ley de creación del Instituto Nacional de Colonización (INC), fundado para distribuir tierras entre quienes realmente estén dispuestos a trabajarla y producir”. Las últimas líneas del documento informaban sobre la disposición de “resistir pacíficamente el desalojo” y convocaban a organizaciones políticas de todo el país y del exterior a respaldar la ocupación.

El 17 de enero, alrededor de 200 personas pertenecientes a diversas organizaciones sindicales de Bella Unión y regiones aledañas se concentraron en los lotes de tierra ocupados por UTAA, SOCA y APAARBU para “resistir pacíficamente” a una eventual medida de reintegro de la propiedad. Sin embargo, esta medida no llegó a ser solicitada por el Poder Judicial, que parecía esperar una salida negociada para el conflicto. El 20 de enero, una delegación de ocupantes de tierras viajó a Montevideo para reunirse con el PIT-CNT y con el ministro de ganadería. El encuentro con la central sindical sirvió para que los trabajadores de Bella Unión expusieran su proyecto de asentar a seis familias en las fracciones ocupadas con la finalidad de dar inicio a un experimento productivo diversificado, que incluía el cultivo de la caña de azúcar y la práctica de la agricultura familiar. En la reunión con el ministro de ganadería, la delegación bellaunionense recibió informaciones detalladas sobre el proceso de implementación del “Proyecto Sucro-Alcoholero” (en adelante, PSA) y supo del interés de Mujica por dirimir los conflictos existentes mediante un amplio “compromiso nacional” con la industria azucarera

⁵⁷Todas las citas presentadas en este párrafo corresponden a esta referencia.

⁵⁸ Las fracciones de tierra ocupadas el 15 de enero pertenecían al INC, pero estaban bajo responsabilidad de un “colono” que no pagaba, hacía varios años, el arrendamiento de la propiedad. El trámite legal para recuperar las tierras y volver a distribuir las entre nuevos beneficiarios podría tardar muchos meses, comprometiendo la posibilidad de utilizarlas para plantar caña y otros géneros alimenticios con miras a la zafra de 2007.

uruguaya. Con todo, tal compromiso no incluía las propuestas consideradas “centrales” para la participación de los trabajadores en el nuevo proyecto de desarrollo del gobierno, entre ellas la inclusión de representantes sindicales en la dirección de la nueva compañía azucarera estatal – que ya estaba a punto de ser creada – y la implementación de un proyecto de recolonización agraria basado en la diversificación productiva y en la concesión de “subsidios justos” “para los peludos que quieran cultivar la tierra con sus manos” (SOCA, APAARBU, UTAA, 2006 *apud* La Juventud, 7-2-2006)⁵⁹. La resistencia de los sindicatos a adherir al “compromiso nacional” por la industria azucarera llevó al ministro Mujica a adoptar un tono fuertemente crítico ante las proposiciones políticas cultivadas por los ocupantes de tierras. El 1º de febrero de 2006, Mujica participó en Bella Unión de la ceremonia de “traspaso” del ingenio local a la esfera de la empresa estatal Alcoholes del Uruguay Sociedad Anónima (ALUR), conformada por capitales de ANCAP y la CND. Durante su estadía en la ciudad, de acuerdo a lo que informaba el semanario bellaunionense Paralelo 30,

el Ministro [...] la emprendió duramente contra la decisión de la ocupación, indicando que la lucha de hace 50 años por la tierra debe ser distinta ahora, que hay que dejarse de idealismos y saber leer la realidad, que la tierra no es para cualquiera, agregando que si le dan un pedazo de tierra para cada uno los están mandando a la guerra ya que la realidad ha cambiado (Paralelo 30, 8-2-2006).

Antes de dejar Bella Unión, Mujica aun ofreció una conferencia de prensa en la Junta Local donde profirió comentarios que generarían enorme insatisfacción entre las organizaciones que impulsaban la ocupación: “a mí no me preocupa una ocupación de tierra – aclaró Mujica –, me preocupa que no entiendan los problemas que tenemos. La ocupación es en contra de nosotros, un palo en la rueda a los que estamos gobernando” (La República, 3-2-2006). El tono de sus declaraciones entraba en sinergia con otras acusaciones – promovidas por sectores mayoritarios del Frente Amplio y amplificadas por la prensa oficialista – que buscaban identificar la ocupación de tierras como un “movimiento ultrista” (La República, 26-1-2006) “interesado en radicalizar los procesos [...] [con] una medida para opacar el proyecto sucro-alcoholero del Poder Ejecutivo” (La República, 30-1-2006).

⁵⁹ Díaz (2009) relata los detalles del conflictivo proceso de interlocución que llevó a los sindicatos bellaunionenses a rechazar el “compromiso nacional” presentado por el gobierno, reivindicando en cambio una “Propuesta General para la participación de los trabajadores en el Complejo Sucro-alcoholero, Recolonización agraria y Planificación del desarrollo en Bella Unión”. Según los sindicatos, en la propuesta del gobierno “no se prevén mecanismos de regulación de la expansión del cultivo, ni se afirman mejoras en las condiciones laborales de los cortadores, así como no hay un compromiso de política de tierras para los trabajadores y pequeños productores [...] Además se subraya la insuficiencia de una Comisión consultiva, exigiendo la participación deliberativa [de los trabajadores y pequeños productores] en la dirección del emprendimiento sucro-alcoholero” (Díaz, 2009: 113).

En polémica con la lectura propuesta por Mujica, Esteban prefería definir la medida de lucha adoptada por la UTAA como “un pie en la puerta, y no un palo en la rueda, para que no se cierre totalmente y permita, con lucha y negociación, empezar a cambiar algo”. La imagen del “pie en la puerta” dialoga y de cierta forma complementa la perspectiva manifestada en la prensa por Rocha, otro dirigente de la UTAA. Para él, la ocupación era una forma de “tirarle la oreja al gobierno, para que los trabajadores rurales seamos contemplados [en el Proyecto Azucarero-Alcoholero] [...] y que tengamos una política de tierras en serio” (Paralelo 30,1-2-2006). “Palo en la rueda” por un lado y “pie en la puerta”/ “tirón de orejas”, por otro: del contraste entre estas metáforas, podemos desprender la singularidad y la compleja sutileza de la prescripción política formulada en el modo popular.

Tanto el “pie en la puerta” como el “tirón de orejas” evocan la aplicación de una fuerza intencional que busca contener o corregir la conducta verificada en el “objeto” sobre el cual se aplica⁶⁰. El “palo en la rueda”, a su vez, remite a la idea de interrupción abrupta de un mecanismo plenamente funcional – “rueda” – mediante la interposición de un objeto extraño y disfuncional – “palo”. Del punto de vista de la rueda-gobierno, el palo-ocupación constituía un estorbo completo e innecesario: en la “rueda”, por lo tanto, existiría función y sentido, mientras que el “palo” se definiría por la disfunción y el sinsentido. Por otro lado, las metáforas utilizadas por Esteban y Rocha enfatizaban el juego de fuerzas inherente a la realización de la lucha política: la “puerta” debía permanecer abierta para que hubiera – y para que siguiera habiendo – una política singular entre los trabajadores. El “tirón de orejas” es otra imagen de este mismo proceso: la conducta del gobierno puede ser corregida gracias a la capacidad de los ocupantes de tierras de prescribirle nuevas posibilidades políticas a partir de un espacio subjetivo propio, construido con mucho esfuerzo organizativo. Al decidir hacer política por iniciativa propia, las personas no se relacionaban con la “realidad” desde lo que se les presentaba como dado, sino desde lo que su pensamiento anunciaba como posible. Los militantes de UTAA, SOCA y APAARBU no estaban solicitando un pedazo de tierra para, retomando las palabras de Mujica, “ser mandados a la guerra”. Al contrario, ellos creían en una experiencia exitosa de

⁶⁰ El tirón de orejas evoca explícitamente un reto jerárquico del sindicato al gobierno. Esta aparente inversión de roles, en la cual los gobernados retan a los gobernantes, nos da un vislumbre de cómo la directiva de la UTAA pensaba su capacidad de incidencia en la intervención desarrollista que empezaba a ponerse en marcha en Bella Unión. En un principio, el rol de meros beneficiarios de una política de desarrollo no era exactamente el ambicionado por la organización sindical. Se trataba, más bien, de incidir en los criterios mismos de la intervención política en la economía local. Estos matices quedarán más claros en las páginas subsiguientes.

diversificación de la agricultura donde estuviera conjugada la democratización del acceso a la tierra. Respalda por la acción directa, esta apuesta colectiva constituyó un “hecho político dentro de la izquierda”, colocando a los funcionarios de la administración frenteamplista ante la necesidad de lidiar, a contra gusto, con la irrupción de una política que no era (la) suya en plena etapa de implementación del PSA. Tenemos, entonces, un “hecho político” que ocurre dentro del gobierno al tiempo que se le sustrae de manera desafiante sobre el trasfondo de una auto-nomía. Cabría preguntarse por el soporte subjetivo de esa autonomía. ¿Cómo se definieron, al final, sus condiciones de posibilidad? El comunicado emitido por UTAA, APAARBU y SOCA el 16 de enero de 2006 era claro sobre este punto. Allí, la decisión de ocupar tierras se presentaba como consecuencia de un “estado de necesidad”⁶¹ cuyo decreto autorizaba a los protagonistas del modo popular a alejarse de los tiempos y las prioridades manejados por el gobierno y a diseñar, por cuenta propia, soluciones posibles a sus urgencias colectivas.

El agenciamiento colectivo que dio sustento al modo popular logró asentar y actualizar una prescripción según la cual los trabajadores podrían decidir y gobernar sus “necesidades” independientemente de su relación con el gobierno o de las disposiciones fijadas por la normativa vigente. Esta prescripción encontró desdoblamientos objetivos a través de la ocupación de tierras de 2006, cuando individuos provenientes de diversas organizaciones sindicales, portadores de “necesidades” variadas, decidieron poner a prueba ciertas capacidades organizativas en una relación de tensión/separación frente a los compromisos políticos y restricciones legales que tendían a limitar su autonomía. Se trataba, en efecto, del fin de un “romance” – según las declaraciones de Rocha a la prensa – entre los trabajadores y ANCAP⁶² (El País, 17-1-2006). En el “estado de necesidad”, la acción colectiva adquirió contornos prescriptivos, garantizando la exacerbación de su momento políticamente autónomo en detrimento de la norma jurídica y de los

⁶¹ Curiosamente, la noción de “estado de necesidad”, reivindicada en el Comunicado emitido por los ocupantes de tierras, constituye un punto neurálgico de la teoría del derecho. Mientras algunos autores tienden a identificar el “estado de necesidad” con la anomia que resulta de la suspensión del derecho, otros autores procuran inscribirlo en la norma como si se tratara de una de sus dimensiones “constituyentes”. Para Agamben, las categorías “estado de necesidad” y “estado de excepción” son – al igual que las nociones de “maná” o “sagrado” en antropología – “mitologemas” científicos. Esto no significa, con todo, “que no sea posible y útil analizar la función que cumplen en la larga batalla que el derecho ha emprendido en torno a la anomia. Es posible, de hecho, que lo que está en cuestión en ellas sea nada menos que la definición de lo que Schmitt llama ‘lo político’” (Agamben, 2014: 103). Sin proponerse una ponderación jurídica de las categorías que empleaban – y quizás por eso mismo – los ocupantes de tierra actualizaron el “estado de necesidad” como aquello que muchas doctrinas jurídicas se niegan a aceptar y que la mayoría de los partidos políticos prefiere olvidar: como un acto político irreductible al derecho.

⁶² Como ya mencionado, ANCAP es la empresa estatal responsable de la capitalización de ALUR, que asumió la administración del ingenio de Bella Unión desde febrero de 2006.

compromisos partidarios (pre)supuestos o existentes⁶³. Si los ocupantes de tierras no estaban “contra el gobierno”, tampoco afirmaban estar a su favor. En rigor, no era esta la cuestión. El desafío, para ellos, consistía en sustentar la posibilidad de enquistar algo así como un lugar de auto-gobierno en el seno del PSA.

La inscripción de la política en el “estado de necesidad” garantizó a los protagonistas del modo popular la posibilidad de hablar de “derechos sin Derecho”, para usar una expresión de Alain Badiou (2012). O sea, de convocar la letra de la ley en auxilio de la política sin volver esta última completamente subordinada a las disposiciones de la legislación. Es verdad que muchos movimientos sociales operan de acuerdo a esta misma lógica, pero la particularidad del modo popular fue haberla enunciado de forma potente y audible a escala nacional, gracias no sólo a un agenciamiento colectivo muy bien equipado – del cual participaron diversas organizaciones y partidos políticos, periódicos, radios, portales de Internet, etc. – sino también al clima permisivo de los primeros años de gobierno frenteamplista, en los cuales la relativa retracción de la amenaza represiva del Estado favoreció el ejercicio de la experimentación política y la difusión sistemática de sus resultados. Como ya tuve oportunidad de discutir en el segundo capítulo, una prescripción política no es, nunca, consensual. Por el contrario, ella funda un espacio de problematización en el seno del cual las personas pueden evaluar su conducta – y la de los demás – teniendo en vista un horizonte de posibilidades excepcional e infrecuente: después de instalada, la prescripción política se transforma en el marco de un debate colectivo.

Las prescripciones políticas no son un reflejo coherente de los contextos económicos en los cuales ocurren. El uso de la palabra “necesidad” no debe inducirnos a error sobre este punto. El “estado de necesidad” permitió la subjetivación de una miríada de urgencias – que incluyeron, por ejemplo, la voluntad de conseguir trabajo, de ser parte de una política gubernamental, de arar la tierra en los períodos adecuados para producir alimentos – bajo el imperativo de que ellas podrían ser contempladas, aquí y ahora, por los mismos trabajadores con sus propios medios – y en el futuro, quién sabe, con recursos técnicos y materiales provistos por el gobierno. Estamos confrontados, por lo tanto, con un “estado” donde el reconocimiento y la administración de “necesidades” en el horizonte

⁶³ Es significativo que, al mismo tiempo en que confrontaba las leyes vigentes, el “estado de necesidad” también comportaba la reivindicación del cumplimiento de la “ley de creación del Instituto Nacional de Colonización”: aquí se trata de la apología de un “derecho sin Derecho”, porque su realización es fruto de la decisión política – “inaudible, diría Badiou, para cualquier forma que sea del derecho de estado” (Badiou, 2012: 226) – de ocupar tierras. En el Comunicado del 16 de enero de 2006 se leía lo siguiente: “[...] no tenemos tierra... *Al rescatarla, estamos defendiendo la ley* de creación del Instituto Nacional de Colonización, que fue fundado para distribuir tierras entre quienes realmente están dispuestos a trabajarla y producir”.

inmediato de una política definen los contornos del ejercicio de la libertad individual y colectiva. Sin embargo, como el “estado de necesidad” ocurrió “dentro” del gobierno, la efectividad de sus prescripciones quedó condicionada al poder de otras personas, que no siempre se mostraron propensas a reconocerlas en toda su densidad política.

3.4 Una política ante un investimento de poder

“Cuando, en enero del 2006, se hace la ocupación, ¡yo me agarré una calentura que no te puedo decir! [...] No era el mejor momento para ocupar. [La ocupación implicaba] comenzar a dar señales que no ayudaban [a concretar la estatización de CALNU]”. Con estas palabras, un alto funcionario de ALUR trataba de expresar el intenso disgusto que sintió cuando las “organizaciones sociales” de Bella Unión adoptaron una postura que, desde su punto de vista, podría desestabilizar el consenso social y político formado en torno del PSA, dificultando así, la negociación de condiciones ventajosas para la incorporación del ingenio de CALNU a la órbita estatal. Sin embargo, a pesar de las incertidumbres y “calenturas”, el gobierno logró garantizar condiciones razonables para la estatización de CALNU, cuyo ingenio fue arrendado por el Estado durante diez años a cambio de la amortización de las deudas de la empresa con productores locales y con el Banco de la República. Terminada esta fase de transición, que abrió el camino para la modernización del ingenio local y la ampliación sustancial del cultivo de caña, se hizo necesario absorber de alguna forma el impacto del “hecho político” cristalizado en la ocupación de tierras.

En 2006, según el mismo funcionario citado anteriormente, “entendíamos que este proceso [de reactivación de la industria azucarera] había que abrazarlo con mucho Estado, y obviamente, con mucha organización social”. El desafío, por tanto, era hacer coexistir, en el nuevo orden productivo afianzado por el PSA, dos dinámicas entendidas como diferentes, pero potencialmente componibles. Una de ellas era la intervención estatal pujante, planeada y técnicamente informada. La otra era la “organización social”, de la cual se esperaba una capacidad de impulsar – cito nuevamente al funcionario de ALUR –: “procesos asociativos, colectivos, solidarios, de gestión, de trabajo en conjunto, coordinando con el Estado y aprovechando las políticas públicas”. Con este ánimo, Raúl Sendic hijo, presidente de ALUR y vicepresidente de ANCAP, decidió hacer una propuesta a los ocupantes de tierras. Aún en los primeros meses de 2006, él entró en contacto con un dirigente de la UTAA para argumentar que la ocupación impactaba negativamente sobre la legitimidad del gobierno de izquierda. Defendió, además, la pertinencia de suspender la

medida de lucha e informó que ALUR pretendía entregar tierras a un grupo de trabajadores y pequeños productores seleccionados por UTAA, APAARBU y SOCA. Esta promesa, y la presión política ejercida por el alto funcionario del gobierno, llevaron a varios militantes a abandonar las tierras ocupadas, mientras que otros decidieron continuar reivindicando la plataforma original de la movilización. Lito, que optó por volver a casa con su esposa e hijos, reflexionaba de la siguiente forma sobre la controvertida decisión tomada en febrero de 2006:

Nosotros pedíamos otra clase de intervención, donde estuvieran los trabajadores y los productores representados en la directiva [de ALUR]. Que hubiera un plan de trabajo para Bella Unión. Si vos me preguntás si esa era la izquierda que yo quería, no es. La que nació en el 2005 acá, no es [...] [La propuesta de ALUR] no era una salida que dijeras “bueno”, pero yo entendí, en ese momento, que políticamente al sindicato le servía, porque nosotros conocíamos toda la historia de la UTAA, de la lucha por la tierra, pero nunca habíamos agarrado tierra.

A su vez, Esteban recordaba que quienes resolvieron quedarse en los campos del INC criticaron duramente a los que se fueron, tildándolos de “verdaderos traidores de los trabajadores, porque intentaron desarmar la ocupación”. A pesar de estar divididos en lo relativo a la decisión de abandonar o permanecer en las tierras ocupadas, los militantes estuvieron mayoritariamente de acuerdo en oír la propuesta de ALUR y someterla a votación. Concretamente, la empresa se propuso arrendar un campo de 400 hectáreas, fraccionarlo en 39 lotes y entregarlos a los militantes sindicales en régimen de subarrendamiento. Para volverse productores cañeros en estas tierras, los “beneficiarios” deberían formar “empresas unipersonales” con la finalidad de contratar empleados, recibir los financiamientos ofrecidos por ALUR y venderle materia prima. Esta modalidad de acceso a la tierra, que “Raulito” Sendic denominó – no sin ironía – “reforma agraria alquilada”⁶⁴ fue finalmente aprobada, a mediados del 2006, por una comisión formada por los integrantes de UTAA, SOCA y APAARBU.

Lito recordaba que, “como presidente de UTAA, sabía que no eran las condiciones realmente como tenían que darnos, porque el arrendamiento era dos veces más caro que el [cobrado por el] Instituto [Nacional de Colonización]. Eran once hectáreas para cada uno y en realidad, si vos no tenés 30 hectáreas, no va a solucionar tu problema”. En tanto Nira – que participó de la ocupación desde los primeros momentos, y más tarde se volvió “beneficiaria” de la “reforma agraria alquilada” – también percibió una discontinuidad

⁶⁴ Raúl Sendic hijo utiliza esta expresión en una entrevista incluida en el documental *Yo pregunto a los presentes*, producido por el colectivo argentino Cine Insurgente y dirigida por Alejandra Guzzo. La película aborda la experiencia de los ocupantes de tierras de Bella Unión y la realidad histórica de la tenencia de la tierra en Uruguay hasta el año 2007.

entre la propuesta realizada por ALUR y la expectativa de los sindicatos: “se pedía al Instituto que comprara tierras, pero en ese entonces no se pudo lograr. Entonces ALUR arrienda ese campo y nos hace una propuesta, pero creo que era un poco para desactivar la ocupación. Se eligió entonces a algunos compañeros y fuimos para ahí, pero ahí ya es todo financiado por ALUR”.

Conocida como Campo Placeres y diseñada unilateralmente por ALUR, la primera experiencia de acceso a la tierra integrada por militantes de organizaciones sindicales de Bella Unión se puso en marcha en el 2007. La compañía azucarera financiaba la totalidad de las actividades productivas realizadas en Campo Placeres y, además de eso, cobraba a los “beneficiarios” un arrendamiento relativamente caro, descontando parte de esos valores del precio de las cosechas enviadas al ingenio. En los años siguientes, sería básicamente en estas condiciones que la reivindicación del acceso a la tierra podría gestionarse en el marco del PSA. A su vez, la ocupación de tierras se mantuvo como tal hasta mediados del 2007, cuando el INC transfirió a ALUR los lotes reivindicados por los ocupantes y ésta los cedió formalmente a la Cooperativa 15 de Enero, integrada por militantes de UTAA, SOCA y APAARBU. Después de regularizada su situación jurídica, la ocupación se convertiría en la “chacra escuela” 15 de Enero, pasando a alojar, en el 2008, al Centro de Formación Popular de Bella Unión, mantenido por la UTAA en cooperación con el Grupo de Extensión de la Universidad de la República⁶⁵. La cosecha resultante de las nueve hectáreas de caña plantadas por los ocupantes antes de la regularización de la tenencia de la tierra fue comprada por ALUR en el 2007. Desde entonces, “la 15 de Enero” también comenzó a producir materia prima para la industria, pero sin renunciar al cultivo de otros rubros, generalmente hortalizas destinadas al auto-consumo y la venta en el mercado local.

La coordinación entre el Estado y las “organizaciones sociales” fue posible mediante un investimento de poder que se desplegó, inicialmente, en dos movimientos articulados. Por un lado se estableció un marco de interlocución con los trabajadores que apartaba definitivamente el debate sobre su participación en la dirección del ingenio. Por otro lado, ALUR supo seleccionar, entre las demandas presentadas por los ocupantes de tierras, aquellas cuya promoción podría ser por lo menos compatible a corto plazo con su cronograma de ampliación paulatina del área cañera. En los primeros dos años de funcionamiento del PSA, el gobierno pretendía fomentar la plantación de 10.000 hectáreas de caña, en sintonía con su propósito de desarrollar una agroindustria “diversificada” e

⁶⁵ Las relaciones de cooperación entre la UTAA y los docentes de la Universidad de la República son abordadas en el capítulo 5.

“inteligente”, capaz de producir no sólo azúcar, sino también – y principalmente – bioetanol. Las reivindicaciones agrarias del modo popular han podido encontrar un lugar para sí en esta estrategia económica, pero a condición de originar emprendimientos eficientes, comprometidos con el cultivo de la caña de azúcar y respaldados por la celosa asesoría técnica de ALUR.

Renajit Guha (1992) identifica dos componentes básicos en cualquier relación de poder: dominación y subordinación. Cada uno de ellos, a su vez, se subdivide en dos momentos internos. La dominación conjuga coerción y persuasión, mientras que la subordinación articula colaboración y resistencia. Los dos movimientos que fundaron la “coordinación” operatoria entre Estado y “organizaciones sociales” constituyen un investimento de poder susceptible de ser leído a través de la caracterización de Guha. Como vimos, los ocupantes de tierra estaban dispuestos a gobernar sus necesidades por medio de recursos (suelo, financiamiento, etc.) sobre los cuales ellos no ejercían control absoluto, salvo en el “estado de necesidad”. Este condicionante es el punto de partida para un ejercicio de dominación en el cual los funcionarios del Estado esgrimen como amenaza la inminencia de una derrota absoluta de la reivindicación agraria y, simultáneamente, buscan persuadir a los militantes sindicales de la pertinencia de ponderar las ventajas de una victoria parcial, que retiene el momento reivindicativo de la lucha colectiva (“tierra para el que la trabaja”) y excluye su dimensión prescriptiva (“los trabajadores seleccionan y gobiernan sus propias urgencias”). Una vez que el primer movimiento se desencadena con éxito, el investimento de poder está habilitado a realizarse como subordinación en el nuevo orden productivo del PSA: confiando sus reivindicaciones a la administración de ALUR – y de otros organismos estatales consorciados a ella –, los ocupantes de tierras, convertidos en “beneficiarios”, pasan a colaborar con la política de desarrollo proyectada por el gobierno. A partir de entonces, la tensión entre las reivindicaciones presentadas en el modo popular (“tierra para el que la trabaja”) y su representación administrativa, sintonizada con los objetivos estratégicos del PSA (“reforma agraria alquilada”), se inscribe en el terreno de la resistencia. En los términos de Guha, la resistencia no es exterior a la subordinación sino que la presupone: resistencia es el nombre de un conflicto compatible con una “relación de poder”.

En febrero de 2008, los beneficiarios de Campo Placeres organizaron un corte de ruta para demandar, según informaban en su “Carta abierta” al gobierno, la “urgente rectificación de las condiciones en que hemos venido trabajando hasta ahora”. Tal “rectificación” implicaría, entre otras medidas, la renegociación de las deudas contraídas

con ALUR, la reducción del costo del arrendamiento de la tierra, la posibilidad de vivir con la familia en los campos arrendados y el préstamo de maquinaria a precios bajos. Si fuese capaz de atender estas demandas, el gobierno estaría demostrando, según los manifestantes, “que en el proyecto azucarero-alcoholero hay todavía un proyecto social” (UTAA, APAARBU, Gremial Granjera, 2008). En el terreno de la resistencia ocurre una división del trabajo político-administrativo entre los “beneficiarios” y el gobierno: los primeros se encargan, en tanto productores, de diagnosticar sus problemas y presentarlos como demandas, mientras que el segundo es desafiado a “re-presentar” estas demandas en el diagrama del PSA de una manera convincente para los beneficiarios y eficiente desde el punto de vista económico. En esta coyuntura, podemos afirmar, siguiendo a Merenson, que las personas ya no están buscando un espacio para definir como gobernar, sino para establecer cómo les gustaría ser gobernadas (Merenson, 2010: 179). Dicha constatación, sin embargo, no describe el sentido de *una política* y tampoco su corolario, sino básicamente el resultado transitorio de cierto investimento de poder que sucede a la aparición autónoma y creativa de la prescripción política y reacciona ante ella, sin jamás dirimirla o suturarla completamente.

El abandono de las condiciones de autonomía postuladas en un modo de la política, o la dilución de su eficacia en medio de las coacciones del poder, no significan, como apunta Hayem, “que la secuencia subjetiva descrita por ellas no haya existido [...] y tampoco cancelan la existencia del posible que ellas habían señalado como tal” (Hayem, 2012: 526). Si las personas son conscientes de que pedían “otra clase de intervención”, diferente de la consolidada en 2007, es porque la singularidad de un posible quedó retenida en su pensamiento, incluso después de dejar de ser operativa en el campo de una determinada relación de poder: “lo que tiene lugar – constata Lazarus – no abole los contenidos de las subjetividades que lo han precedido” (Lazarus, 1996: 108). Podríamos agregar, aun, que lo que “tiene lugar” después del investimento de poder nos informa sobre el cierre de la secuencia práctico-subjetiva precedente, pero no resuelve sus contenidos y finalidades. La ocupación de tierras de 2006 se transformó en una medida reivindicativa interesada en transformar a trabajadores rurales asalariados en productores de materia prima para ALUR *solamente después* de un investimento de poder. Antes de él, como vimos, muchas otras cosas eran posibles y, virtualmente, la política popular no tenía fin(es) *a priori*.

El lugar más destacado de la política en el modo popular fue la ocupación de tierras de 2006, resultado y materialización de un “estado de necesidad” que prescribía a los

trabajadores la posibilidad de enunciar y gobernar sus propias urgencias en tensión con la normativa jurídica y los compromisos políticos existentes en aquel momento. Entre las condiciones de la política en el modo popular y el nuevo orden configurado a partir de 2007 – en el cual “beneficiarios” elevan “demandas” para la apreciación del consorcio desarrollista⁶⁶ – media una distancia considerable, acusada por Nira, Lito y tantos otros compañeros suyos⁶⁷. Tal distancia señala algo así como la “exclusión fundadora” del nuevo complejo agroindustrial de Bella Unión. El movimiento articulado de dominación-subordinación de la política en el modo popular introdujo en la relación de poder entre “Estado” y “organizaciones sociales” un conjunto de necesidades administrables, al tiempo que dejó fuera de ella el “hecho político” – i.e. “existencia de los trabajadores en fuerte posición de arbitrio” – a través del cual esas mismas necesidades se tornaron audibles e ineludibles para el gobierno. Esto no ocurrió por mero capricho del consorcio desarrollista capitaneado por la ALUR, sino simplemente porque, en aquellas circunstancias, las cosas no podían darse de otra manera. Un proyecto de desarrollo vertical, “con mucho Estado”, no tiene como soportar las consecuencias imprevisibles inherentes a la experimentación política⁶⁸. Y, en lo que le concierne, un “hecho político” auténtico no se presta al imperativo de ser administrado: él simplemente ocurre y se desvanece, dejando, con todo, algunos “rastros” tras de sí.

⁶⁶ “Consortio desarrollista” es una categoría descriptiva que será empleada en reiteradas ocasiones a lo largo de la tesis. Gustavo Lins Ribeiro (2008) la introduce para referirse a las diversas instituciones, nacionales, transnacionales, públicas y privadas, que impulsan un proyecto de desarrollo y distribuyen entre sí las funciones necesarias para la realización de un plan conjunto que implica diferentes objetivos políticos y económicos. En el caso de Bella Unión, utilizo la noción de “consorcio” para aludir a los diferentes organismos y empresas, todos ellos públicos, que contemplan las distintas necesidades vinculadas a la reactivación de la industria azucarera. Las principales instituciones del consorcio desarrollista organizado en torno al PSA son ANCAP (generación de mercados estables y capitalización), ALUR (fase industrial y comercialización de productos manufacturados), INC (garantía de la superficie agraria del PSA) y, en menor medida, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (financiamiento de proyectos de diversificación productiva y compra de maquinaria) y Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), que detiene un 5% de las acciones de ALUR y cumplió funciones de capitalización en una primera etapa del PSA.

⁶⁷ En su estudio sobre la experiencia de Campo Placeres, Álvaro Moraes (2012) compila diversos relatos de los nuevos “asalariados-productores”. En dichos relatos, es recurrente la afirmación de que la propuesta de acceso a la tierra presentada por ALUR sonaba como un “tomá o dejá”, en el cual estaba en juego abdicar de las exigencias anteriores a favor del modelo de colonización considerado viable por la estatal sucroalcoholera.

⁶⁸ Los neodesarrollistas uruguayos adoptaron una estrategia que Alexander Robertson (1984) denominaría “de comando” para impulsar el desarrollo económico de Bella Unión. Esto quiere decir que la burocracia estatal asumió el control no sólo de la industria, sino también de una buena parte del mercado – ALUR vende etanol a ANCAP, otro organismo estatal – donde circula la producción industrial (vamos a conocer el PSA más de cerca en el próximo capítulo). Había un sistema de producción y circulación demasiado bien planificado como para que el devenir de la economía local pudiera tomar un derrotero distinto al que se imaginaba como plausible en la esfera gubernamental. Lo que estaba en juego en las negociaciones del gobierno con los protagonistas del modo popular era, parafraseando a Robertson, seleccionar, entre las voluntades manifiestas por las personas, aquellas que fueran de alguna manera compatibles con el control eficiente por parte del Estado (cf. Robertson, 1984: 137).

Los rastros del “hecho político” del 2006 son las prescripciones enunciadas en él y la inclusión misma de los trabajadores asalariados como potenciales productores de caña de azúcar en el contexto del PSA – algo que sólo fue posible porque, durante un breve período de tiempo, los protagonistas del modo popular lograron, efectivamente, establecer disposiciones sobre cómo se alcanzaría la expansión del área cañera en Bella Unión. En efecto, cerca del 15% (1.156 hectáreas) de las tierras actualmente cultivadas con caña de azúcar están bajo la responsabilidad de personas provenientes, en su mayoría, de las bases sindicales de la UTAA. Sin embargo, no habría que tomar las modalidades actuales de acceso a tierra practicadas en Bella Unión como la culminación de la política del modo popular, es decir, como una consecuencia privilegiada que dota de sentido todo el curso de acción precedente. Consecuencias y finalidades son cosas distintas y conviene mantenerlas separadas. Preservar una separación tajante entre finalidades y consecuencias resulta esencial cuando hablamos de política al menos por dos razones. En primer lugar, porque garantiza al pensamiento la posibilidad de volver a trabajar continuamente sobre la riqueza expresiva de un hecho político sin someterlo al principio de realidad que negó sus posibles en el contexto de una correlación asimétrica de fuerzas⁶⁹. En segundo lugar, porque nos abre la posibilidad de pensar los agenciamientos colectivos desde su proceso, como un medio sin fin, sin término, sin sentido fundamental que, no obstante, multiplica consecuencias a las cuales nunca está reducido. En lo que respecta a la política – entendida siempre como auto-nomía –, sus finalidades no se encuentran en otro lado, sino en el mismo proceso de su realización, o sea, en el despliegue ampliado – o centrífugo – de sus prescripciones. Si cesa el despliegue de dichas prescripciones, dejó de haber una política.

Como me propuse demostrar en este capítulo, las prescripciones del modo popular no decían que los ocupantes de tierra deberían ser subarrendatarios de ALUR y convertirse en pequeños productores abocados exclusivamente al abastecimiento de un ingenio azucarero. Al ocupar tierras, los militantes sindicales de Bella Unión afirmaron, básicamente, que podían decidir sobre el PSA desde su “estado de necesidad”. Y lo

⁶⁹ Los procesos de desarrollo comandados por instituciones poderosas como lo son ciertas empresas privadas u organismos estatales conllevan siempre una asimetría de poder que permite transmutar la voluntad de las personas en materia prima para la consecución de planes ampliamente predefinidos. Siendo así, siguiendo nuevamente a Robertson (1984), el encuentro entre una institución planificadora del desarrollo económico y la voluntad de las “personas comunes” suele redundar en consecuencias que expresan el monopolio estatal de la imaginación política. Dicho monopolio deriva del control del Estado sobre los recursos que habilitarían la búsqueda de un futuro ideal generalizable para uno o varios sectores de la población (cf. Robertson, 1984: 184). Lins Ribeiro (2008) se acerca las proposiciones de Robertson – y a las mías – cuando define las consecuencias de los proyectos de desarrollo como una “colonización del tiempo” y un “secuestro del futuro” que anticipa y determina el devenir de las poblaciones, convirtiendo, añadiría yo, la subalternidad política en un modo de vida necesario y, si es posible, deseable.

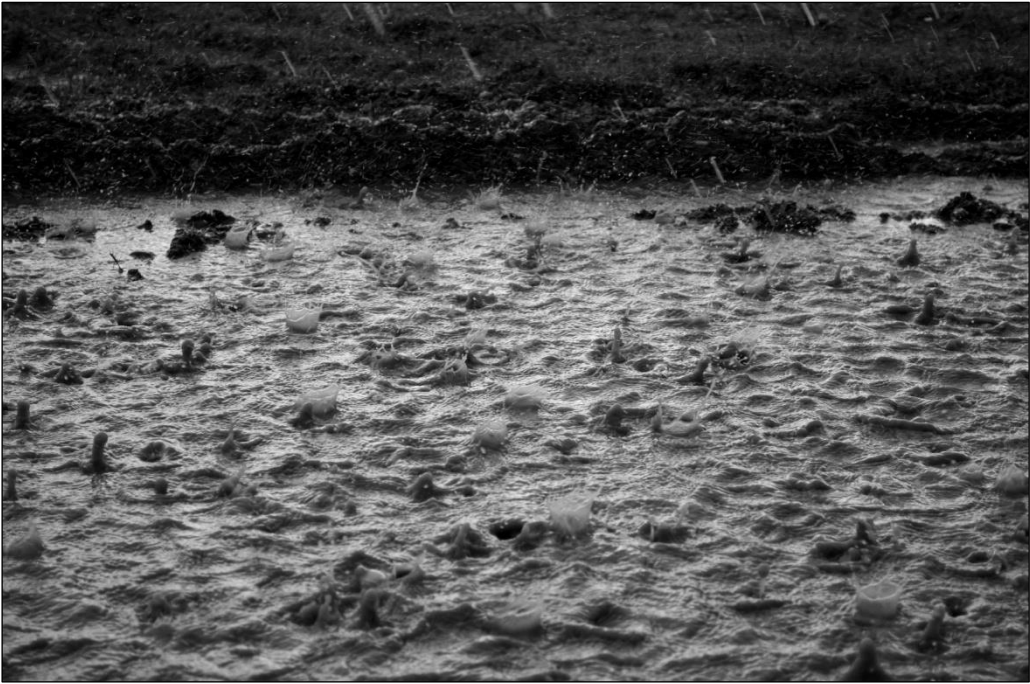
hicieron hasta cierto punto. La *consecuencia* de ello – inversión de poder mediante – fue que algunos asalariados rurales recibieron tierras en las condiciones establecidas unilateralmente por ALUR (Campo Placeres). Sin embargo, no es posible desprender de esa consecuencia una finalidad política, salvo desde el punto de vista del gobierno, para quien no hay otra política además de la suya. De 2006 en adelante, recibir tierras para plantar caña se convertiría en el horizonte fundamental de las reivindicaciones agrarias de la UTAA: desde entonces, “el estado de necesidad” pasó a ser mediado por las imperiosas necesidades del Estado en su faceta neodesarrollista. Habiendo sido consecuencia de un “hecho político” ya desvanecido, el acceso a la tierra por parte de los trabajadores rurales, así como las expectativas y deseos asociados a él, debieron entrar en funcionamiento dentro del PSA, bajo condiciones que ya no eran las pregonadas en el modo popular. Poco a poco, la ejecución de este imperativo fue conformando los intrincados mecanismos de “equipamiento” colectivo que serán estudiados con mayor detalle en la segunda parte de la tesis. Dichos mecanismos definen las condiciones de posibilidad de una política – la desarrollista – cuya pretensión es sintetizar un rango amplísimo de deseos en su propio dominio funcional.

Secuencia fotográfica 1









Capítulo 4

Equipamiento colectivo de deseo

Si [la izquierda] no tiene un relato político, todo eso no tiene sentido.

Senador



4.1 Aprendiendo a desarrollarse

El taxi entró rápidamente en la ruta bien asfaltada que conduce hasta el ingenio Mones Quintela, controlado por ALUR desde 2006. Al fondo, la chimenea lanzaba nubes de vapor blancuzco contra el cielo cegador de una mañana de octubre de 2015. De los dos lados de la ruta algunas porciones solitarias de caña madura aún resistían al avance implacable de la zafra. Desde junio, mil doscientos hombres, la mayoría de ellos uruguayos y algunos brasileros, combatieron, machete en mano, alrededor de 8.500 hectáreas de cañaverales. Cortaron un promedio de dos toneladas diarias de caña y recibieron de sus patrones 263 pesos por cada una de ellas. Los peludos denominan “lucha” un conjunto de cinco líneas – o “surcos” – de caña plantada. De “lucha” en “lucha” la zafra se extingue en el lapso de unos cinco o seis meses. Entre setiembre y octubre, la demanda de fuerza de trabajo cae a la mitad en Bella Unión y la vida va haciéndose cada vez más angustiante – particularmente para quienes no cuentan con un seguro de paro. El fin de la zafra es una época de planes e incertidumbre que antecede al período de la “zafra seca”. A inicios de

noviembre, cuando los cañaverales ya fueron reducidos a un vasto campo de hojas secas y troncos de caña quemada, otras luchas de proporciones variadas comienzan a eclosionar fuera de las plantaciones. Son luchas cotidianas para ir llevando la vida mientras la caña crece a la espera de la próxima zafra. Entre noviembre y mayo abundan los pequeños negocios en los barrios obreros de Bella Unión: un garaje se transforma en taller mecánico o de chapa y pintura, un patio se convierte en fábrica de ladrillos, los vecinos venden pescado y alquilan redes, las mujeres cortan cabello, los niños ofrecen de puerta en puerta pan casero, carne de carpincho o de vaca. Algunos hombres salen de sus casas para buscar trabajo en el sur del país, en bares y obras. Supe de gente que fue aún más lejos y terminó del otro lado de la cordillera de los Andes, pescando en alta mar en las aguas del Pacífico. Otros suelen incursionar Brasil adentro, por los caminos de la cosecha del arroz.

El taxi se acercó al ingenio. Una fila enorme y completamente inmóvil de camiones abarrotados de caña se extendía por centenas de metros en dirección a la chimenea humeante. El abastecimiento de la fábrica estaba interrumpido y yo sabía que eso tenía algo que ver con la inminencia de la próxima “zafra seca”. Transitamos hacia el portón de la fábrica bajo la sombra de las cargas de caña que reposaban, como enormes animales oscuros y afelpados, en el interior de las carrocerías metálicas de los camiones parados a la derecha del camino. El convoy estático terminaba delante de un viejo ómnibus de la compañía CUTCSA de Montevideo, identificado con la bandera de la UTAA. A cincuenta metros del ómnibus, en dirección a las rejas que rodeaban la fábrica, vi gente conocida: tres dirigentes del sindicato y diversos integrantes de la cooperativa Helios Sarthou, que cultiva caña en los campos de Pay Paso. Me acerqué al grupo. Se rumoreaba que ALUR había hecho una denuncia contra la medida de lucha adoptada por los cooperativistas de Pay Paso. La empresa no aceptaría negociar mientras el paso de los camiones estuviera obstruido. Los manifestantes evaluaban si tendrían fuerza suficiente para mantener el bloqueo de la fábrica, que llevaba ya casi un día. Algunos proponían mantener el piquete, pero la mayoría parecía estar inclinada a autorizar el paso de las cargas. Un periodista se acercó al grupo y preguntó sobre los motivos del corte. Javi, cooperativista de Pay Paso, informó que él y sus compañeros exigían de ALUR condiciones financieras para la incorporación de otras 14 personas a la cooperativa Helios Sarthou. Aclaró, además, que estas personas ya integraban formalmente la cooperativa, pero aún no habían “ingresado al campo” para trabajar porque la extensión de las plantaciones de Pay Paso era insuficiente para garantizar su remuneración. Según Javi, sólo la incorporación de nuevos

cooperativistas podría asegurar la realización de las tareas de mantenimiento de los cañaverales, ya que “la mano de obra disponible no da[ba] abasto”.

Para un periodista local, acostumbrado a cubrir diversos conflictos entre ALUR y sus proveedores de materia prima, las explicaciones ofrecidas por Javi eran satisfactorias. Sin embargo, la plataforma política de ese conflicto dista de ser obvia a los ojos de cualquier observador. Alguien podría preguntarse, por ejemplo, por qué sería necesario integrar a nuevos “compañeros” a la cooperativa, dado que la extensión de los cañaverales de Pay Paso no había sido ampliada. Tampoco resulta evidente la relación entre el área de caña plantada y la remuneración de los cooperativistas. Y, finalmente, ¿qué tiene que ver ALUR con la insuficiencia de mano de obra de una cooperativa agrícola? Estas preguntas sólo cobran sentido en el Complejo Sucroalcoholero de Bella Unión (en adelante, CSA). Ellas remiten a un intrincado sistema de compromisos políticos, relaciones de dependencia y subordinación que fueron definiendo en la práctica cuales serían las condiciones de posibilidad de la intervención desarrollista propuesta por el gobierno progresista a los trabajadores de la caña de azúcar. Para comprender un poco mejor las expectativas de quienes promovieron el bloqueo del Ingenio Mones Quintela en octubre de 2015, así como la relación entre esta medida de lucha y la estrategia gubernamental de desarrollo agrícola iniciada en 2006, es preciso conocer los desdoblamientos y las consecuencias del conflicto que vine relatando.

Cerca del mediodía, una jueza se dirigió hasta el lugar del piquete para dialogar con los manifestantes. Antes que nada, insistió en esclarecer que “hoy no aplico el código penal: hoy vengo a negociar”. Informó a los trabajadores que su actitud “vulneraba derechos”, razón por la cual sería prudente resignarla a favor de una postura negociadora. Aseguró que la empresa ALUR estaba dispuesta al diálogo y contó haber sido informada sobre la intención del alcalde de recibir a las “partes” en la Junta Municipal a las ocho de la mañana del día siguiente. También sugirió que los trabajadores buscaran asesoría jurídica para solucionar sus problemas. Según ella, era necesario “mirar hacia adelante en busca de un futuro de paz y sin conflicto, en el cual no se hacen exigencias, sino planteos”. Cuando los trabajadores informaron que aceptarían ir a la reunión en la Junta Municipal, pero sin declinar el estado de “asamblea permanente”, la funcionaria del Poder Judicial argumentó que no era el momento de hacer “amenazas”, sino de dar “señales” de diálogo. Sandro, el secretario general de la UTAA, arguyó entonces que “cuando se afirma que seguirá habiendo movilización no se está amenazando, sino que se está informando sobre cómo se hace la lucha”. Emilio, otro dirigente del sindicato, explicó que “luchar” es una “forma

concreta de salir adelante, de abrir caminos”. “Nosotros – aclaró –, hace 54 años que miramos para adelante”. Haciendo referencia al aspecto juvenil de los militantes, la jueza adoptó una actitud burlona: “ustedes no parece que tengan 54 [años]”. Un dirigente sindical retrucó rápidamente: “pero nuestras mentes sí”. “Bueno – concluyó la jueza un poco molesta –, ustedes son responsables, saben cuál es la mejor forma de hacer las cosas”. Se despidió afirmando estar con la conciencia tranquila por haber priorizado la solución pacífica de un conflicto que, de otro modo, podría “pasar a mayores”. Felicitó la decisión de los trabajadores de liberar la entrada de camiones y deseó que las negociaciones del día siguiente fueran exitosas.

En las elecciones municipales de 2015, Lito, que se había desempeñado como presidente de la UTAA en la época de la ocupación de tierras de 2006 (capítulo 3), fue electo alcalde de Bella Unión. Su condición de ex militante sindical y de cuadro político del Frente Amplio lo convertía en un mediador potencial entre UTAA y los funcionarios del gobierno progresista al frente de ALUR. De hecho, el respeto nutrido por Lito hacia las luchas del sindicato, sumado a su compromiso partidario con las apuestas desarrollistas del gobierno nacional, lo llevaron a activar un rol conciliador en este conflicto en particular. Así pues, la Junta Municipal pudo convertirse en un espacio de confluencia y negociación entre los dos actores institucionales – ALUR y UTAA – que, cada uno a su modo, habían asegurado la proyección del liderazgo político de Lito en Bella Unión⁷⁰.

Llegué a la Junta quince minutos antes de la reunión convocada por el alcalde. Algunos trabajadores esperaban ansiosos en la calle, termo bajo el brazo y mate en mano. Alguien apareció en la puerta del edificio para informar que la reunión estaba a punto de empezar. Subimos los escalones hasta el segundo piso y entramos en un zaguán amplio, iluminado por grandes ventanales que daban a la calle. Decenas de sillas esperaban a los participantes. Tres funcionarios de ALUR, acompañados por el alcalde, conversaban entre ellos sentados alrededor de una mesa. Cuando todos ya estaban acomodados en sus respectivos lugares – gerentes y autoridades a la mesa principal, trabajadores en las sillas aledañas –, uno de los representantes de la empresa dio la bienvenida a los presentes y ofreció una especie de pantallazo del estado del conflicto con los cooperativistas. Relató que la cooperativa Helios Sarthou tenía una propuesta de integración de nuevos miembros

⁷⁰ En el próximo capítulo, expongo algunas situaciones que debilitaron el vínculo entre Lito y la UTAA. Asimismo, en el capítulo anterior, especialmente en el tercer apartado, relaté algunos conflictos suscitados por la ocupación de tierras de 2006 en los que comenzaron a delinearse ciertas posiciones políticas que ponían a Lito en convergencia con los funcionarios del gobierno frenteamplista encargados del proyecto productivo de ALUR.

a las actividades laborales en los campos de Pay Paso y subrayó la imposibilidad de ALUR de tomar una decisión de esta naturaleza:

nosotros sólo entregamos los recursos a la cooperativa y ella divide el dinero del modo como lo entienda. Hace unos días, nosotros quedamos de decir qué tipo de cosa podríamos hacer teniendo en cuenta los planteos de la cooperativa [...] En función de la propuesta que hacen, vamos a armar un mecanismo para que ustedes puedan, si quieren, contar con más gente. Vamos a adelantar un recurso económico a la cooperativa.

Después de la intervención del gerente, Javi creyó pertinente realizar algunas aclaraciones: “no estamos pidiendo regalos. Queremos tener condiciones de hacer todos los trabajos de la cooperativa. Además, eso [el recurso financiero] permitiría dedicarnos mejor a cuestiones de diversificación para abaratar la olla”. El pedido de recursos fue justificado por el compromiso de los trabajadores con la productividad de su emprendimiento: “estamos tratando de hacer que el campo se fortalezca, tenemos 300 hectáreas y un sistema de riego con el cual tenemos que trabajar de forma eficiente. No se trata de favores, sino de la posibilidad de trabajar mejor”. Emilio, a su vez, argumentó que la cuestión era construir condiciones favorables para la “producción” y la “eficiencia”, tomando en cuenta todas las demandas de los cooperativistas para lograr soluciones “reales y efectivas”. Tablada, otro miembro de la directiva de UTAA, trató de reforzar las intervenciones de sus compañeros: “la cooperativa ha hecho un planteo más que respetable. ALUR piensa con cabeza de empresa, no quiere financiar otras cosas, [pero] ALUR es parte del Estado y debería humanizarse un poco más”. Después de oír a los trabajadores, uno de los funcionarios de la empresa afirmó que “la propuesta que se trajo a la reunión era sensible a las demandas de la cooperativa” y, al mismo tiempo, “respetaba las atribuciones de ALUR”, o sea, se inscribía en las formas de financiación actualmente disponibles para la actividad cañera. En seguida, se propuso leer las condiciones de entrega de recursos a la cooperativa para que los interesados pudieran evaluarlas y posicionarse al respecto. El “mecanismo” de financiación formulado por ALUR consistía básicamente en lo siguiente: se ofrecían tres “partidas” de 40.000 pesos que serían asignadas a la cooperativa en los meses de noviembre, diciembre y enero. Por ser concedidos a título de “adelanto de libre disponibilidad”, estos recursos serían debitados de los rendimientos de la cooperativa relativos a la zafra de 2015. La “libre disponibilidad”, vale la aclaración, es el monto de dinero resultante de la compra de materia prima por parte del ingenio, una vez efectuados todos los descuentos relativos a los préstamos – o “adelantos” – destinados a la

implantación, el mantenimiento y la cosecha de la caña de azúcar⁷¹. A partir del inicio de 2016, cuando la cooperativa ya dispusiera de los recursos financieros derivados de la zafra del año anterior (“libre disponibilidad”), podría contratar a nuevos trabajadores con sus propios fondos si lo considerara necesario.

La propuesta dejaba en claro que ALUR no estaba dispuesta a garantizar a otras 14 personas una financiación similar a la ya recibida por los miembros “activos” de la cooperativa⁷². Las 20 personas que trabajaban en Pay Paso en 2015 disponían, todos los meses, de un “sueldo” de 14.000 pesos relativo a las tareas de cuidado de la plantación de caña. Siendo así, para que 14 personas más pudieran usufructuar inmediatamente este mismo beneficio durante tres meses, serían necesarios por lo menos 580.000 pesos de “adelanto” – y no 120.000. Teniendo en cuenta este cálculo, queda evidente que el valor realmente ofrecido por ALUR garantizaría una remuneración de 2.850 pesos para los nuevos trabajadores de la cooperativa – si fueran 14 – hasta el mes de enero. A partir de esa fecha, las remuneraciones deberían ser debitadas de los fondos del propio emprendimiento, limitando potencialmente su capacidad de reinversión en la diversificación productiva⁷³. Todas estas condiciones generaban dudas y controversias entre los cooperativistas: ¿sería conveniente dividir el dinero ofrecido entre 14 personas? En este caso, los “sueldos” individuales se volverían muy bajos y, por lo tanto, insuficientes para garantizar la dedicación exclusiva de los trabajadores a las tareas agrícolas de Pay Paso. Por otro lado, si sólo algunos recibieran la financiación, ¿cuál debería ser el criterio para seleccionarlos? ¿Habilidades laborales? ¿Compromiso con la lucha colectiva? ¿En qué medida la aplicación de dichos criterios de selección podría incidir negativamente en la “salud de la cooperativa”? Otra cuestión pendiente: una vez finalizada la financiación provisoria asegurada por ALUR, ¿valdría la pena utilizar los

⁷¹ En el próximo capítulo analizaré detenidamente el sistema de financiamiento ofrecido por ALUR a las cooperativas administradas por ex asalariados rurales. Dicho sistema de financiamiento será estudiado como un mecanismo de enrolamiento de los nuevos productores al CSA con consecuencias importantes sobre la definición del sentido del acceso a la tierra y el futuro de las experiencias de colonización patrocinadas por neodesarrollismo uruguayo en Bella Unión.

⁷² En la cooperativa Helios Sarthou había miembros “activos” y miembros inactivos, o en fila de espera. Los primeros ya estaban siendo beneficiados por los “adelantos” de ALUR, mientras que los segundos aguardaban la ampliación de los cañaverales de Pay Paso para empezar a recibirlos. El área de caña plantada era directamente proporcional al monto de financiamiento asignado por ALUR a la cooperativa para el desarrollo de las actividades productivas. En el próximo capítulo explicitaré cómo esos valores eran calculados y qué condiciones mediaban su distribución entre los productores subordinados al CSA.

⁷³ La introducción de cultivos alternativos a la caña de azúcar en las unidades productivas subordinadas al CSA tenía el potencial de ampliar los ingresos de los productores – “abaratar la olla” – y ofrecer a las mujeres oportunidades de trabajo compatibles con sus habilidades laborales pretéritas, puesto que la mano de obra femenina ha sido ampliamente empleada en el sector hortícola de la economía bellaunionense.

fondos cooperativos para pagar salarios y, en consecuencia, abstenerse de nuevas inversiones productivas?

Después de una larga discusión en el balcón de la Junta Municipal, lejos de los funcionarios de ALUR, la reunión fue finalmente retomada. A pesar de estar insatisfecho, Hernán, presidente de la cooperativa, aceptó la oferta. Él sabía que la empresa no cambiaría de idea en aquel momento. Como la zafra aún estaba en curso, era difícil estipular los futuros rendimientos de la cooperativa y, sin estos datos, no había posibilidad de exigirle a ALUR más dinero de lo que la empresa ya había aceptado ofrecer. De allí en adelante, el desafío para los trabajadores de Pay Paso sería negociar, en el interior de su propio emprendimiento, los desacuerdos que la división del dinero terminaría suscitando entre ellos. De todos modos, por lo menos una victoria parcial estaba asegurada: un grupo reducido de nuevos cooperativistas no tendría que preocuparse, por lo menos hasta enero, con las privaciones e incertidumbres acarreadas por la “zafra seca”.

En Pay Paso, quienes aún no recibían los recursos financieros proporcionados mensualmente por ALUR tenían prioridad para ser contratados como cortadores de caña durante la cosecha. Sin embargo, al término de la zafra, les quedaban sólo dos opciones a estos cooperativistas sin remuneración fija, a saber: salir en búsqueda de alguna “changa” o aprovechar los canales de diálogo existentes entre ALUR y la cooperativa para tratar de fabricar algún “mecanismo” más generoso de distribución de recursos financieros. Como existía de hecho mucho trabajo pendiente en las plantaciones de Pay Paso, la propuesta de ampliar la mano de obra disponible al emprendimiento tenía todo el sentido desde el punto de vista productivo y, por esta razón, podía convertirse en una demanda potencialmente audible a los oídos de la gerencia de ALUR. Al enunciar esta demanda en términos mínimamente apetecibles para una agroindustria estatal comprometida con la eficiencia y la productividad, los cooperativistas lograron negociar el acceso a un monto de dinero que podría suavizar los efectos depresivos de la zafra seca sobre el salario de algunos de sus compañeros.

No es secreto para la mayoría de los actores involucrados con la producción cañera en Bella Unión que la reactivación de la agroindustria local constituyó, desde el inicio, un “proyecto social” especialmente sensible a las expectativas del movimiento sindical existente en la zona. “ALUR vino por un compromiso político con los sindicatos”, me explicaba uno de los dirigentes de la asociación local de plantadores de caña, para luego añadir: “y se dejó influenciar demasiado por la clase obrera”. Los militantes de UTAA, a su vez, no se cansaban de afirmar que la reactivación de la industria azucarera era fruto de

la “lucha” de los trabajadores y, por lo tanto, debía responder positivamente a sus expectativas. Cuando viajó a Bella Unión en 2006 para inaugurar la primera zafra azucarera financiada por ALUR, Raúl Sendic hijo, el entonces vicepresidente de ANCAP, parecía corroborar tal perspectiva: “si no hubiera estado *esa* lucha, no habiéramos podido desarrollar *esta* política”. Más adelante, en su discurso, él reivindicaba “un concepto de responsabilidad social” enraizado en la conciencia de “estar inmersos en una sociedad [...] que necesita de un aporte importante para mejorar el bienestar del conjunto de esta población tan sufrida en los últimos años” (Presidencia de la República, 2006a). A través de una declaración de “responsabilidad social”, los portavoces del emprendimiento desarrollista trataban de ubicar la lucha de otrora en correspondencia con la actual política del gobierno. Si observamos más atentamente, veremos que este procedimiento enunciativo – que luego se materializó en mecanismos administrativos específicos – establece una relación de funcionalidad entre *esa* lucha y *esta* política pública: la primera autorizaría – o mejor, exigiría – el desarrollo de la segunda. Sin embargo, como “esa lucha” y “esta política” supuestamente constituyen dos “etapas” del “mismo” proceso, el sentido de la lucha de ayer pasa a ser legítimamente definido por quienes hoy desarrollan “esta política”. En otras palabras, el CSA se vuelve el espacio donde la lucha se dirime en soluciones administrativas. Existía, claro, una disputa incesante sobre la determinación del contenido reivindicativo de la lucha inicial, pero independientemente de cuál fuera ese contenido, cabría a los gerentes de la política desarrollista la tarea de administrarlo en la medida de lo posible.

Los cooperativistas de Pay Paso querían recursos para financiar nuevos salarios y asegurar el empleo de 14 compañeros en la antesala de la “zafra seca” de 2015-2016. En el marco de la política estatal de desarrollo, su demanda se transformó en un alegato sobre la eficiencia y la productividad de la cooperativa Helios Sarthou. Como resultado, ALUR aceptó transferir recursos a los cooperativistas en una cantidad que, a pesar de ser muchísimo inferior a la necesaria para contemplar la demanda inicialmente planteada, aparecía, aun así, como razonable desde el punto de vista estrictamente productivo. En efecto, con 120.000 pesos era posible contratar a tres nuevos trabajadores durante tres meses, hasta que la cooperativa dispusiera de fondos para cubrir, por sí misma, el valor de los salarios adicionales. Soluciones de este tipo garantizaban el compromiso de los “beneficiarios” con la estrategia productiva del CSA y, al mismo tiempo, funcionaban como prácticas pedagógicas a través de las cuales las personas aprendían los límites de su propio deseo y las condiciones disponibles para expandirlos.

A lo largo de las negociaciones de octubre de 2015, la gerencia de ALUR intentó enseñar a sus interlocutores que el desempleo estacional no era un problema de la empresa, sino de los propios cooperativistas. Independientemente de eso, ALUR se mostró dispuesta a negociar los “planteos” de sus beneficiarios siempre y cuando ellos fueran capaces de articularlos bajo la forma de una declaración de compromiso con la eficiencia y la productividad del cultivo de la caña de azúcar. Cuando el problema del desempleo se tradujo en una preocupación por la eficiencia de las actividades productivas en Pay Paso, pudo ser asimilado, y simultáneamente excluido, de las instancias de negociación preconizadas por la gerencia de la compañía sucroalcoholera. Los funcionarios de ALUR atendieron un pedido de recursos para mitigar la incidencia del desempleo estacional *como si fuera* una solicitud de préstamo para incrementar la fuerza de trabajo movilizada en el cuidado de los cañaverales. En respuesta, ofrecieron su apoyo puntual para concluir exitosamente las tareas productivas anuales y, con suerte, aliviar la situación financiera de algunos trabajadores. Sin embargo, el problema de fondo nunca pudo ser presentado como tal, simplemente porque no correspondía al ámbito de la empresa, aun cuando el proyecto productivo nucleado por ella haya sido encarado – y respaldado – por muchos trabajadores como una vía efectiva y ágil para “salir de la zafralidad”.

Sin ser completamente negado, el problema de la “zafralidad” fue transferido a la jurisdicción de la propia cooperativa, que debió ser capaz de resolverlo en la medida de lo posible – es decir, en la medida de los recursos facilitados por ALUR a título de “adelantos” y de los dividendos proporcionados por la venta de caña al ingenio. En este caso, los trabajadores se hicieron responsables de la materialización de la “responsabilidad social” del CSA, asumiendo, por su cuenta y riesgo, problemáticas con las cuales la empresa no podía comprometerse formal y abiertamente. Esta dinámica quedó particularmente clara a inicios de 2015, cuando la ampliación del área cañera de Pay Paso viabilizó la entrada de diez cooperativistas al emprendimiento. En esa oportunidad, se eligió priorizar la integración de algunas mujeres que estaban en fila de espera para “entrar al campo”. No todas las nuevas “beneficiarias” tenían familiaridad con las tareas de mantenimiento de los cañaverales, pero de cualquier forma veían en la cooperativa la posibilidad de obtener una estabilidad laboral difícil de ser alcanzada por la mano de obra femenina en el mercado de trabajo belleunionense. Al tomar la decisión política de asegurar puestos de trabajo a esas compañeras, los cooperativistas tornaron el CSA compatible con la solución de problemas económicos que, oficialmente, no incumbían a la empresa ALUR y tampoco eran objeto de cualquier preocupación gubernamental

sistemática en la zona de Bella Unión. Tal decisión generó consecuencias indeseables en lo concerniente a la rentabilidad del emprendimiento productivo – la mano de obra escaseó en los cañaverales y la calidad de su mantenimiento fue inferior a la esperada. Cuando esto sucedió, los técnicos de ALUR no dudaron en señalar la “irresponsabilidad” de los cooperativistas, exigiendo su corrección a través de sistemas más estrictos de control del trabajo. El hecho, sin embargo, es que si la posibilidad de cometer “irresponsabilidades” quedara terminantemente excluida, el acceso a la tierra dejaría de tener sentido desde el punto de vista de las cooperativas estimuladas por la UTAA. Tanto el sindicato como las cooperativas debieron desresponsabilizarse del “proyecto productivo” de ALUR para mantenerse fieles a la promesa de un “proyecto social”, única razón justificable para seguir comprometidos con las experiencias de acceso a la tierra promovidas en el marco del CSA. En pocas palabras, lo atractivo del acceso a la tierra residía en su dimensión de “proyecto social” en construcción; un proyecto capaz de incluir a muchas personas y dar respuesta a deseos variados. Por otro lado, este horizonte no sólo se colisionaba con los imperativos del proyecto productivo, sino que también era subsumido y neutralizado por ellos en una especie de ciclo inexorable de estímulo y banalización del deseo⁷⁴.

La tentativa de los trabajadores de amoldar el acceso a la tierra de acuerdo con sus propias expectativas, necesidades, disposiciones y habilidades los ponía en constante tensión con ALUR y los demás organismos del Estado implicados en las políticas agrarias desarrolladas en Bella Unión. Esta tensión, continuamente negociada y parcialmente dirimida en diversas instancias de interlocución, fue definiendo una tecnología mutante de gobierno cuyo funcionamiento dependía, en buena medida, de la captura, educación, fijación y funcionalización de las voluntades colectivas cultivadas por el sindicato de los cortadores de caña y por las cooperativas formadas en su ámbito.

4.2 Equipar el deseo colectivo

Las intuiciones preliminares presentadas hasta aquí parecerían indicar que la intervención desarrollista impulsada por ALUR en el extremo norte del Uruguay podría ser encarada, en palabras de Jeremy Gould (2007), como un tipo de “agenciamiento socio-epistémico”. Gould fue probablemente el primer autor que defendió la productividad del

⁷⁴ En base a los resultados de una investigación realizada en la comunidad de Usibamba, en los Andes peruanos, Pieter de Vries (2015, 2013, 2007) define los procesos de desarrollo rural como “máquinas deseantes” que estimulan la proliferación de amplias expectativas de transformación social al tiempo que condicionan su realización dentro de límites demasiado estrechos. Los *insights* de Pieter de Vries inspiran algunas reflexiones presentadas en este capítulo y vuelven a informar explícitamente mi análisis en el capítulo final de la tesis.

concepto deleuzo-guattariano de “agenciamiento” para abordar las prácticas sociales asociadas al “desarrollo”.

Cuando me refiero al desarrollo como un agenciamiento socio-epistémico – explica Gould –, en primer lugar estoy haciendo una ruptura explícita con la convención de pensar el desarrollo como un epifenómeno histórico. “Desarrollo”, en este sentido, no es una propiedad cualitativa de la sociedad; sino que el “desarrollo” es el producto de prácticas sociales delimitadas (Gould, 2007:281).

En la propuesta de Gould la noción de agenciamiento indica que estas “prácticas sociales” estarían constituidas por dos elementos inseparables: el primero es epistémico – “desarrollo es un conjunto de ideas que se aglutina a través de actos discursivos y no-discursivos (‘enunciaciones’) que evocan la noción de desarrollo” (Ibid.) – y el segundo es “social”, básicamente porque la composición del agenciamiento implica la movilización de actores sociales concretos. En tanto “agenciamiento socio-epistémico”, el desarrollo consiste en una “configuración de ideas, prácticas y actores” que está balizada por dos ejes, uno “vertical” y otro “horizontal” (Ibid.:283). En el eje horizontal, habría elementos heterogéneos – personas, esquemas organizacionales, máquinas, etc. – que se juntan – o son juntados – para producir resultados específicos. En el eje vertical – es decir, ordenador – se multiplicarían prácticas poco problematizadas de saber que, una vez cristalizadas en conceptos y fórmulas muy peculiares, pasarían a informar políticas concretas. En otras palabras, ciertas representaciones de la realidad serían apropiadas selectivamente por determinadas instituciones como hechos pertinentes y, enseguida, transformadas en objetos de intervención a través de un aparato burocrático. Los vectores de ordenamiento que operan en el eje vertical entrarían en “constante tensión con inevitables tendencias desterritorializantes”, es decir, con “prácticas y artefactos a través de los cuales la heterogeneidad se reafirma: resistencia, contradicción, tensión, conflicto” (Ibid.).

A simple vista, las controversias y negociaciones entre ALUR y los cooperativistas de Pay Paso parecerían poner en movimiento los diversos elementos y las dos dimensiones que caracterizan, en los términos de Gould, un agenciamiento socio-epistémico: en el nivel “horizontal” un conjunto muy heterogéneo de personas se articula con objetos variados – dinero, tierra, caña de azúcar, etc. – y en el nivel “vertical” esta conjunción decanta en conceptos y fórmulas relativamente “territorializados”. Por ejemplo, la relación entre los “beneficiarios”, la “tierra” y la “caña” se regula por un sistema de “adelantos” que los mantienen recíprocamente ocupados y productivos. Asimismo, la convicción de que el proyecto sucroalcoholero es un “proyecto social” incita a los “beneficiarios” a forzar al máximo los límites de la política de desarrollo, distorsionando, así, el uso de los créditos y

probando varios acoplamientos posibles entre personas y tierras (aun cuando tales acoplamientos no sean exactamente “productivos”). En este caso, los “beneficiarios” llegan inclusive a imposibilitar la rentabilidad de los emprendimientos cañeros puestos bajo su responsabilidad, desafiando los propósitos productivos sostenidos en el eje vertical del agenciamiento desarrollista. Sin embargo, abordar el (des)encuentro entre los trabajadores y la compañía estatal sucro-alcoholera como un agenciamiento, en la acepción de Gould, me parece poco interesante por una razón fundamental: la definición propuesta por el autor no nos permite indagar sobre el tipo de “agenciamiento” con el cual estamos lidiando.

Para Gould, “agenciamiento” es un concepto meramente descriptivo – y no “explicativo”, como él se preocupa en esclarecer – que evoca una articulación potencialmente inestable de elementos heterogéneos con referencia a la categoría “desarrollo”. El agenciamiento de Gould es asimilable a las acepciones más corrientes del término *assemblage*, tal como se vienen popularizando en las ciencias sociales de la última década. *Assemblage*, que es la traducción más común en idioma inglés para el concepto deleuzo-guattarriano de *agencement*, se utiliza vagamente para evocar procedimientos de conjunción entre las llamadas “formas globales” – doctrinas de gobernanza y planeamiento, racionalidades capitalistas, regímenes de saber tecno-científicos – y las prácticas sociales locales que tienden a adaptarlas, contestarlas o impugnarlas en el nivel local⁷⁵. Gould evita el *détour* por los usos más populares y genéricos del concepto y prefiere retomarlo *in natura* directamente de *Mil Mesetas*, donde leemos lo siguiente:

Según un primer eje, horizontal, un agenciamiento comporta dos segmentos: uno de contenido y otro de expresión. Por un lado, él es agenciamiento maquínico de cuerpos, de acciones y pasiones, mezcla de cuerpos reaccionando unos sobre los otros; por otro lado, [es un] agenciamiento colectivo de enunciación, de actos y de enunciados, transformaciones incorpóreas siendo atribuidas a los cuerpos. Pero, según el eje vertical orientado, el agenciamiento tiene, por una parte, lados territoriales o reterritorializados que lo estabilizan, y por otra parte, picos de desterritorialización que lo arrebatan (Deleuze y Guattari, 1995:29).

El problema es que Gould se detiene en esta definición básica de agenciamiento, ofrecida en el segundo tomo de la obra en cuestión. Sin embargo, en los tres tomos siguientes, el concepto se pone a prueba en diversos tipos de configuraciones sociales y recibe decenas de adjetivaciones. Existen agenciamientos despóticos, autoritarios, feudales, binarios; existen agenciamientos de Estado, agenciamientos del tipo máquina de guerra, dirigidos contra el Estado, y así sucesivamente. Lo importante en *Mil Mesetas* no es decir que algo consiste en un agenciamiento. Después de todo, en la perspectiva deleuzo-

⁷⁵ Cf., por ejemplo, Aihwa Ong y Stephen Collier (2005). Para un balance crítico del uso del concepto en la investigación social estadounidense, cf. George Marcus y Erkan Saka (2006).

guattariana, no hay nada que no se sostenga por medio de agenciamientos. Tiene poca importancia, por lo tanto, constatar que el “desarrollo” es un agenciamiento donde existen orden y resistencia, fijaciones paralizantes por un lado y relaciones creadoras por otro. El desafío del análisis es evaluar con qué tipo de agenciamiento estamos enfrentados, y esto sólo es posible a través del estudio de las presuposiciones y redundancias entre sus segmentos de contenido (cuerpos, sistemas físicos) y de expresión (enunciados, actos).

Mientras preparaba *Mil Mesetas* en colaboración con Deleuze, Guattari se dedicó a otro escrito que sólo vio la luz en 2011, bajo el título *Líneas de fuga*. Allí, él propuso una distinción entre la “función de equipamiento colectivo” y la “función de agenciamiento colectivo”. Ambas, *grosso modo*, constituyen agenciamientos. Lo que cambia son las máquinas abstractas incluidas en cada una de ellas. Por máquinas abstractas debemos entender los procesos de ideación y creatividad que se proponen explorar nuevas posibilidades de expresión de las variables físicas y semióticas disponibles en cada lugar y momento. Retomando la discusión de los capítulos anteriores, los “lugares de la política”, por ejemplo, estimulan la puesta en marcha de las máquinas abstractas en la medida en que proporcionan la formulación de prescripciones inéditas (yo las denomino “posibles”) cuya efectucción debe ser negociada, necesariamente, en el ámbito de los agenciamientos colectivos.

Una máquina abstracta – escriben Deleuze y Guattari – no es una infra-estructura en última instancia, tampoco es una Idea trascendente en suprema instancia. Ella tiene, antes, un papel piloto. Esto ocurre porque una máquina abstracta o diagramática no funciona para representar, aunque sea algo de real, sino que construye una realidad por venir, un nuevo tipo de realidad (Deleuze; Guattari, 1995:29).

Como vimos en el capítulo anterior, las máquinas abstractas de la política en el “modo popular” se daban a conocer bajo la forma de algunas prescripciones, a saber: “los trabajadores pueden ser productores”; “los trabajadores deciden sobre el estado de necesidad”, “los trabajadores co-gobiernan el CSA”. La ocupación de tierras de 2006 se dio en función de esas prescripciones y fue una actualización de ciertas capacidades colectivas que podrían realizarlas. Guattari considera que cuando pasamos de los agenciamientos colectivos a los equipamientos, también transitamos de un régimen de máquinas abstractas para otro: “con los equipamientos, el conjunto de las máquinas abstractas depende de un mando único – el Capital” (Guattari, 2013[2011]:93), razón por la cual deberíamos considerarlos “condiciones de posibilidad de toda infraestructura económica capitalística” (ibid.:30). Así como ocurre en cualquier agenciamiento colectivo, la materia prima de la función de equipamiento es el deseo de las personas, concretamente

abordado a través de mecanismos de captura y organización solidarios con una programación general relativamente cerrada, que obtiene en los ámbitos de la producción y de la circulación de mercancías sus criterios de ordenamiento.

En Deleuze y Guattari, las subjetividades necesarias para la estructuración del *socius* son montadas sobre unidades básicas de producción – o “máquinas deseantes” – interpoladas, es decir, componentes materiales y semióticos que se recortan entre sí y multiplican procesos de consumo, producción y registro susceptibles de ser fijados y estimulados. Tierra, ocupantes de tierras, índices históricos y prescripciones políticas fueron algunas de las máquinas deseantes amalgamadas en un mismo agenciamiento colectivo que denominé “modo popular”. Este agenciamiento supo explorar en sus componentes maquínicos una serie de capacidades que no estaban actualizadas en ellos antes de su articulación. Así, por ejemplo, hubo asalariados rurales, pequeños productores y asalariados industriales que se volvieron ocupantes de tierras en sintonía con ciertas prescripciones políticas enraizadas en los índices de antiguas luchas sociales; también hubo tierras que se transformaron en una “ocupación” y fueron trabajadas de acuerdo con las potencialidades que se pretendía revelar en ellas y en sus respectivos ocupantes. Diversas máquinas deseantes se acoplaron unas a otras para realizar el campo de posibles preanunciado por las máquinas abstractas – o prescripciones – del modo popular. Esto fue así hasta que dichas máquinas se vieron sometidas a un nuevo investimento de poder. La tierra, ocupada en forma extralegal por los trabajadores en 2006, acabó siendo asimilada, ya al año siguiente – junto con sus ocupantes –, al nuevo complejo sucroalcoholero agenciado por la empresa ALUR. La producción de caña, iniciada por los propios trabajadores por su cuenta y riesgo en las parcelas ocupadas, se volvió objeto de estímulo y financiación para la industria azucarera reactivada. Simultáneamente, más tierras fueron puestas a disposición de los trabajadores, sólo que esta vez estaban equipadas con mecanismos de acceso muy precisos, definidos en la oficina del director general de ALUR: habría cobranza de arrendamiento, sus “beneficiarios” deberían tramitar personería jurídica para recibirlas, la caña de azúcar sería el cultivo prioritario y su introducción, mantenimiento y cosecha dependerían de una financiación sujeta a cobranza de intereses. La tierra continuó siendo máquina deseante en el complejo productivo diagramado por el PSA, pero junto a ella se perfilaron nuevas máquinas – crédito, monocultivo con mercado asegurado – que hicieron que el deseo colectivo fuese mediado en otro régimen de producción; un régimen compatible, por lo menos abstractamente, con la estabilidad de una isla agroindustrial sustitutiva de importaciones orientada esencialmente al mercado interno

y constreñida, en todo su perímetro, por las políticas macroeconómicas del ortodoxo Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF).

En 2015, ALUR abastecía una porción estable del 55% del mercado interno de azúcar, además de comercializar harinas proteicas para alimentación animal en una cantidad que contemplaba la totalidad del mercado nacional. Sin embargo, su principal fuente de ingresos provenía del suministro de bioetanol y biodiesel a ANCAP, que los mezclaba con el combustible fósil vendido dentro del país en una proporción de 5% de etanol para las naftas y 2% de biodiesel para el gasoil. En 2015, la empresa facturó un total de 250 millones de dólares, de los cuales 2,5 millones constituyeron su ganancia neta. Con excepción del biodiesel, la producción cañera de Bella Unión contribuye para la fabricación de todos los productos comercializados por ALUR, que también posee una pujante bio refinería en Paysandú (procesamiento de bioetanol a partir del sorgo) y dos en Montevideo (elaboración de biodiesel a partir de aceites vegetales descartados y gordura animal). El abastecimiento del mercado interno de azúcar, biocombustibles y alimento animal determina la finalidad, las formas y la extensión de las experiencias de acceso a la tierra experimentadas por los trabajadores rurales de Bella Unión. En consecuencia, en los últimos quince años, el complejo sucroalcoholero desempeñó una función de equipamiento colectivo – y no sólo de agenciamiento – en lo concerniente a la producción deseante catalizada por la UTAA a través de la lucha por la tierra. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares del país donde ALUR también mantiene infraestructuras productivas, en Bella Unión la existencia de un movimiento sindical activo, fuertemente inclinado a la acción directa y a las reivindicaciones agrarias, ha convocado a los funcionarios del Estado a operar, cotidianamente, una sutura parcial entre las demandas surgidas de la lucha colectiva y la estrategia oficial de desarrollo capitalista patrocinada por el gobierno.

Analizando retrospectivamente “lo que se hizo” en el extremo norte del Uruguay, uno de los ideólogos del PSA lamentaba la “falta de un relato político de todo el proceso”: “priorizamos la gestión al relato político [...] Yo creo que lo haría de la misma manera, ¿no? Pero creo que hubiera sido tal vez menos conflictivo el proceso si hubiéramos priorizado más lo político y el relato político que la gestión”. Pero la ausencia del relato político no fue obstáculo para la ampliación de los cañaverales y la modernización del ingenio Mones Quintela, aunque, en la visión de este ex director de ALUR, volvió el proceso de desarrollo intensamente conflictivo. A pesar de ser secundario en relación a la “gestión”, el “relato político” podría garantizar a los beneficiarios del CSA una racionalización sobre su participación en la acción desarrollista del Estado, evitando, tal

vez, que ellos adoptaran posturas y demandas completamente ajenas a los planes originales del gobierno. Sin embargo, cuando las expectativas de las personas proliferan de manera inoportuna, existe, de todos modos, la posibilidad de controlarlas sin el apoyo de un relato hegemónico potente y ampliamente diseminado. Los sectores de la izquierda uruguaya que fueron a Bella Unión a ensayar la “sustitución competitiva de importaciones”⁷⁶ no traían en su equipaje una narrativa para ser negociada, pero disponían de condiciones y criterios básicos para equipar las capacidades productivas localmente existentes. Su objetivo inicial, en las palabras del entonces ministro de ganadería José Mujica, era hacer el emprendimiento productivo “funcionar eficientemente y ser sustentable para que no pueda ser cuestionable [...]”. Mujica estaba convencido de que “la seguridad de que esto sea defendible en el futuro es la productividad” (Paralelo 30, 8-2-2006). En febrero de 2006, los nuevos dirigentes de la política agraria nacional, en su mayoría pertenecientes al mismo grupo político de Mujica, consideraban que la ampliación de la producción de caña debía ser incumbencia de quien “sabe hacerlo”, es decir, de los productores rurales ya consolidados en la zona de Bella Unión (Brecha, 3-2-2006). Como vimos en el capítulo anterior, este criterio fue forzosamente modificado gracias a la ocupación de tierras de 2006, pero aun así la asimilación de nuevos actores al proyecto productivo patrocinado por el gobierno continuó estrictamente condicionada por cierto estándar empresarial sin el cual se suponía que la nueva agroindustria estatal no podría convertirse en algo defendible a largo plazo. Ahora bien, ¿ante los ojos de quién el proyecto de ALUR debería ser “defendible”? Esta pregunta nos introduce en el debate sobre cómo el neodesarrollismo uruguayo diagramó su máquina productiva y cuáles fueron las condiciones ideológicas de su montaje.

4.3 El mercado, ese gran Otro

No es nada fácil justificar la necesidad de inversiones millonarias de dinero público en industrias estatales sustitutivas de importaciones en el seno de un gobierno cuya estrategia macroeconómica preconiza, fundamentalmente, la especialización productiva orientada al mercado internacional de *commodities* y la captación de inversiones extranjeras directas a través de zonas francas industriales disociadas de la demanda del mercado interno⁷⁷. La inclusión de Bella Unión en el mapa del Uruguay Productivo

⁷⁶ En las próximas páginas tendré la oportunidad de analizar este concepto muy caro a los neodesarrollistas uruguayos.

⁷⁷ Diego Castro y Carlos Santos utilizan el concepto de Estado Nacional de Competencia, acuñado por Joachim Hirsch (1996), para definir los rasgos generales de lo que denominan “la lógica estatal de la hegemonía progresista uruguaya”. Según los autores, las estructuras administrativas internas del Estado

prometido por el progresismo dependió, inicialmente, de que el CSA se volviera una alternativa “defendible” a los oídos de la tecnocracia. No bastaba, por consiguiente, con producir información detallada sobre los “impactos sociales” benéficos proporcionados por la industria de biocarburantes o justificarla económica y ecológicamente evocando la escasez de las reservas mundiales de combustibles fósiles. También era necesario jurar alguna lealtad a las lógicas del mercado y comprometerse a jugar su juego. La “sustitución competitiva de importaciones” apareció, entonces, como un concepto prometedor que yuxtaponía las sensibilidades batllistas de algunos sectores del Frente Amplio⁷⁸ con el énfasis agroexportador y aperturista de las fuerzas políticas que, desde 2005 hasta la actualidad, controlan el MEF.

Es interesante observar que el concepto de “sustitución competitiva de importaciones” fue formulado originalmente en el año 2003, durante el primer gobierno de Lula, por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. Dicho concepto hacía referencia a un programa de comercio internacional destinado a sustituir las importaciones de productos provenientes de los Estados Unidos, de Europa y de Asia por mercancías producidas en Sudamérica. En el caso brasileño, el aspecto “competitivo” de esa estrategia comercial residía en que los productos importados de países fronterizos podrían ser vendidos a un precio más bajo en el mercado interno, ya que, entre otros factores, sus costos de flete se verían reducidos. Sin embargo, en la acepción uruguaya el concepto se distanció de la definición original y pasó a denotar una nueva especie de sustitución de importaciones que intentaba dialogar con el imperativo de “competitividad” fijado en los Grandes Lineamientos Programáticos para el Gobierno 2005-2010. En este documento, se afirmaba que el “proyecto progresista” pretendía “generar producción competitiva”, “es decir, de cantidad, calidad, precio, oportunidad y máxima diferenciación posible, tal que haga factible su fluida exportación y presente ventajas para *enfrentar normalmente la competencia* de productos elaborados en el exterior” (Frente Amplio, 2003: s.p.).

Hay una discontinuidad discursiva entre el documento que acabo de citar y las proposiciones que el Frente Amplio sostenía oficialmente dos años antes. En estas últimas, la noción de competitividad sólo aparecía tímidamente y cuando era mencionada recibía,

uruguayo estarían “determinadas por la competencia internacional y sus ventajas comparativas. Es un Estado fuertemente intervencionista, económica y socialmente, aunque su preocupación principal no es la corrección de las desigualdades propias de las economías capitalistas. Ahora su finalidad prioritaria es la movilización selectiva de las fuerzas sociales para la competencia internacional” (Castro y Santos, 2018: 130).

⁷⁸ Fernández (2015) analiza más ampliamente los derroteros de la ideología batllista en el interior del Frente Amplio. Al final de este apartado me detendré únicamente en las consecuencias concretas del “batllismo” en tanto categoría reivindicada para definir el horizonte de las apuestas desarrollistas emprendidas en Bella Unión desde 2006.

en general, connotaciones negativas. El Compromiso por el Cambio para el Nuevo Siglo, aprobado por el IV Congreso Ordinario del Frente Amplio en el 2001, alude a la “competitividad” como algo de lo cual la “producción nacional” debería ser protegida. A su vez, el mundo actual, “cada vez más desigual y competitivo”, constituiría un escenario problemático donde el Uruguay debería “incidir” al resguardo del Mercosur (Frente Amplio, 2001: s.p.). Sin embargo, es justamente a partir de 2001, bajo el liderazgo de Tabaré Vázquez, que algunos sectores mayoritarios del Frente Amplio inician un proceso de discusión política con el objetivo de esclarecer la relación entre su proyecto de desarrollo y el “mercado”⁷⁹.

La “renovación ideológica” públicamente reivindicada por Vázquez desde setiembre de 2000 se materializó, un año más tarde, en una declaración formal, por parte del Frente Amplio, de su compromiso con la regulación estratégica de los mercados. Estos últimos pasaron a ser encarados por la izquierda partidaria como un espacio de intercambio carente de control cuyos “efectos desiguales” podrían ser corregidos con “regulaciones transparentes” y “formas de competencia” que las grandes empresas privadas suelen transgredir con sus “prácticas monopólicas” (Frente Amplio, 2001:s.p.). En 2003, la competitividad ya era reconocida como un criterio fundamental para la organización de la producción nacional, tanto pública como privada, de modo que un parámetro de eficiencia inherente al mercado se transformaba, desde el punto de vista de una futura administración frenteamplista, en el requisito básico para la promoción de todas las actividades productivas legítimas, o sea, aquellas susceptibles de ser estimuladas con recursos públicos o asistidas, de alguna manera, por el Estado. Sin embargo, es recién en el año 2006, después de la elección de Vázquez para la presidencia de la República, que la “competitividad” adquiere el estatuto de doctrina auxiliar del programa de desarrollo productivo de la izquierda, convirtiéndose en atributo deseable no sólo para los mercados, sino también para todos aquellos que pretenden “construir nación”.

⁷⁹ Daguerre (2004) analiza con detalle este proceso y Jaime Yaffé (2005) se propone trazar sus consecuencias electorales.



Ilustración 6: En la fachada de la Universidad Nacional del Trabajo (UTU), en Bella Unión, un mensaje del gobierno a los estudiantes: “tus manos y tu mente para el país productivo”.

El 31 de marzo del 2006, bajo el título de “Estrategia de Desarrollo Productivo”, la Presidencia de la República dio a conocer algunas coordenadas que “debieran pautar un proyecto de país en términos de mediano y largo plazo” (Presidencia de la República, 2006b:1). Ya en sus primeros párrafos, el texto afirmaba que “para construir nación hay que tener *sentido de la realidad y voluntad emprendedora*. Y hay que ser competitivo, esto es, saber producir, saber vender y saber generar ingreso nacional” (ibid.). El nuevo “Uruguay productivo” no pretendía sólo fomentar el dinamismo económico a través del control transparente de los mercados y la fijación de claras “reglas de juego” para los actores empresariales, sino también estimular “esa riqueza inmaterial y sustantiva que es la inteligencia de la gente, sus valores de vida, su cultura y su capacidad de trabajo” (ibid.: 2). “La inteligencia de la gente” era concebida como un “don de la naturaleza que hay que construir, afirmar y potenciar” (ibid.:3) a través del incentivo a la “innovación” generalizada en actividades vinculadas, por ejemplo, a la “creación de nuevas herramientas, procesos y productos; nuevos bienes; nuevos servicios; nuevas formas de organizar el trabajo” (ibid.). En la cuarta página de la Estrategia nos encontramos con algo desconcertante a primera vista. Se trata, presumiblemente, de un error de digitación, pero es imposible estar seguro al respecto, porque el desliz en cuestión no deja de armonizar con el tono general del documento y parece, inclusive, sintetizarlo en forma cruda y directa:

[Proponemos] un proyecto que suponga la revaloración y reestructura de los recursos, infraestructura y servicios ya existentes y de aquellos que necesariamente habrá que incorporar para mejorar la competitividad, vincular las zonas productivas con las de comercio y consumo, preservar el medioambiente y mejorar la calidad de la gente (ibid.: 3-4).

Sea intencional o no, la evocación de la voluntad de “mejorar la calidad de la gente” ofrece una clave de lectura pertinente para comprender qué está en juego cuando el frenteamplismo asume para sí la tarea de garantizar el progreso económico de la sociedad en sinergia con el estímulo a la competitividad de los mercados. Cuando los mercados se vuelven, idealmente, el mecanismo principal de multiplicación de las oportunidades de trabajo y de las fuentes de ingreso, se vuelve necesario preparar a las personas para responder positivamente a su dinamismo, potencializando, en ellas, todas aquellas capacidades que favorezcan su inserción social productiva.

En el año 2009, la oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República (OPP) publicó un autodenominado “ejercicio de imaginación” que tenía por título Estrategia Uruguay III Siglo - Aspectos productivos (EUIIIS). En este trabajo se “dibujan imágenes posibles que sirvan como herramientas para [...] pensar en cómo el país podría funcionar en el inicio de su tercer siglo de vida independiente” (OPP, 2009:7). Participaron en su elaboración funcionarios de diversos ministerios y también algunos consultores externos, que fueron encargados de aplicar entrevistas estructuradas a actores económicos vinculados a las ramas productivas con “potencial exportador o impacto sobre el empleo”. A partir de las entrevistas, se establecieron los escenarios más favorables o desfavorables para el desarrollo del conjunto de las actividades económicas analizadas hasta el año 2030. La realización de los escenarios prospectivos favorables, categorizados como “normativo estratégico” y “dinámico intermedio”, dependería del desempeño positivo de algunos “factores clave”⁸⁰ de cada sector productivo en dirección al mejor “estado” “posible y deseable”. Por otro lado, el escenario desfavorable, denominado “mínima”, “se configura según lo que los propios sectores se imaginan como verosímil como peor estado de los factores clave en su visión prospectiva” (OPP, 2009: 11). Los eventuales riesgos y catástrofes que podrían configurar la “mínima” deberían volverse objeto de administración estatal a través de políticas públicas orientadas a evitarlos o mitigarlos. Si los “factores clave” correspondientes a cada sector productivo se desempeñaran adecuadamente, siempre teniendo en cuenta el escenario “normativo estratégico”, entonces la OPP imaginaba que en el año 2030 el Uruguay sería un país agroexportador (las llamadas “Agro-industrias I” – lácteos, industria forestal, *commodities*

⁸⁰ Algunos "factores clave" mencionados en el estudio son los siguientes (es importante subrayar que su relevancia oscila de acuerdo con cada sector productivo): competitividad, variación de los precios internacionales, apertura de mercados internos y externos, incremento de la logística nacional, cultura de la innovación, disponibilidad de recursos humanos, leyes de propiedad intelectual, políticas públicas de incentivo, oferta de materia prima, inversión extranjera directa, etc.

y carne – corresponderían al 41% de las exportaciones⁸¹) cuyo crecimiento económico estaría capitaneado, sin embargo, por los “Innovadores TICS⁸²” (software, diseño, comunicaciones, audiovisual, electrónica), que representarían el 15% de las ventas al exterior⁸³. EL PBI per cápita triplicaría en relación a 2008 – año de relevamiento de los datos utilizados para el estudio –, alcanzando la cifra de 19.242 dólares. Para obtener las metas deseadas, los formuladores de la EUIIIS presentaron diez desafíos principales que deberían someterse a debate público y materializarse en políticas de Estado coherentes con sus finalidades. En resumen, estos desafíos versaban sobre el fomento del “capital humano” – incremento de la “calidad de la fuerza de trabajo” –, la promoción de la innovación, la atracción de la inversión extranjera directa, el estímulo a la exportación, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, la ampliación de la infraestructura nacional en consonancia con los propósitos de expansión de los sectores más dinámicos de la economía y la articulación de sociedades público-privadas.

Si los ejes fundamentales de la “estrategia de desarrollo productivo” fueran atendidos por el Estado y por el conjunto de la sociedad, “en 20 años – según vaticinó el director de la OPP – podríamos pasar a ser un país del primer mundo, una nación comparable a Portugal, Finlandia o Irlanda. Se liquidaría la pobreza y seríamos un país de clases medias muy potentes y desarrolladas” (Presidencia de la República, 2009: s.p.). La EUIIIS consistió en un ejercicio metódico de examen de la imaginación de algunos sectores dinámicos y promisorios de la burguesía con el objetivo de trazar coordinadas operacionales que pusieran a la acción estratégica del poder público – lo que incluye la capacidad de interpelar y movilizar a la población – en armonía con la concretización “posible y deseable” de los sueños del capital.

Parece haber una relación de continuidad entre los gobiernos del Frente Amplio y sus antecesores blancos y colorados en lo concerniente a la gestión macroeconómica: tanto unos como otros mantuvieron una política financiera caracterizada por las buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional y por el respeto a los compromisos contraídos con otros organismos financieros, de modo de favorecer un “clima de negocios” adecuado a la captación de Inversiones Extranjeras Directas (IED) (cf., por ejemplo, Panizza, 2008; Panizza, 2014; Red de Economistas de Izquierda, 2010; Falero, 2013). Los formuladores de la política macroeconómica del gobierno progresista tendieron a

⁸¹ En 2008, las “Agro-industrias I” correspondían al 47% de las exportaciones.

⁸² TICS es la sigla para tecnologías de la información y la comunicación. Se refiere a los medios técnicos utilizados para producir, tratar y vehicular procesos informacionales y comunicativos.

⁸³ En 2008, los “Innovadores TICS” correspondían al 8% de las exportaciones.

identificar en las IED una fuente preferencial de recursos para el fomento de la actividad productiva, circunscribiendo ampliamente el desarrollo de esta última a los criterios de rentabilidad, productividad y eficiencia exigidos por el capital transnacional.

En los últimos años, la atracción de capitales se concentró en el llamado complejo forestal, nucleado por plantas industriales procesadoras de celulosa cuya producción se destina, esencialmente, al mercado externo. Asimismo, hubo una fuerte inversión capitalista en tierras destinadas al cultivo de granos exportables, lo que determinó, junto con la expansión de la industria forestal, el desencadenamiento de un notable proceso de encarecimiento, concentración y extranjerización de la tierra con impacto restrictivo sobre la agricultura familiar. En 2011, la estructura agraria uruguaya era comparable a la de inicios del siglo XX: las grandes explotaciones controlaban el 60% de las tierras del país y el 40% de ellas eran propiedad de extranjeros (en el año 2000, esta última cifra correspondía a 10%) (Piñeiro; Cardeillac, 2016). En 2014, las exportaciones del sector primario alcanzaron sumas récord, cercanas a los US\$ 10.000 millones. La soja lideró las exportaciones de aquél año (14%), seguida por la carne (15%) y por los productos lácteos (7%). Las demás materias primas totalizaron alrededor del 20% de las ventas al exterior (Uruguay XXI, 2014). Si fuéramos a utilizar los criterios de la EUIIS, podríamos decir que, cinco años después de su lanzamiento, cerca del 60% de las exportaciones concernían a las “Agroindustrias I”, o sea, 10% más que la cifra registrada en el 2009, año de lanzamiento del estudio. No existían señales, por lo menos hasta el 2014, de que los “Innovadores TICS” se estuvieran convirtiendo en el sector más dinámico de la economía.

El progresismo uruguayo, a semejanza de sus congéneres sudamericanos, conjuga la acumulación por desposesión⁸⁴ con la reproducción ampliada del capital (Santos et al., 2013). Esto quiere decir que su modelo de desarrollo otorga un beneplácito fiscal y jurídico a la explotación privada de los recursos naturales y, simultáneamente, favorece la entrada de capitales transnacionales destinados a la modernización y la ampliación de la infraestructura productiva nacional. Desde el punto de vista de los gastos públicos, el gobierno asume un nuevo protagonismo en la compensación de los efectos más depresivos del patrón de acumulación, aumentando sus inversiones en planes sociales y servicios públicos. Eduardo Gudynas (2013) observa que el “neodesarrollismo” uruguayo está

⁸⁴ "Acumulación por desposesión" es un término acuñado por David Harvey (2004) para designar aquellos procesos en los cuales, al salir en búsqueda de nuevos espacios de valorización, el capital termina sometiendo despóticamente – y con eventual respaldo del Estado – otros modos de vida y territorios. La desposesión ocurre cuando una determinada operación del capital conduce a la sustracción de los medios de vida de las personas o a la privatización de bienes que antes no participaban en el proceso capitalista de producción.

íntimamente relacionado con el “neoextractivismo”, que consiste en un modelo de política económica orientado a favorecer el incremento del PBI a través de la explotación de recursos naturales en función de la demanda de los países centrales. Con el prefijo “neo”, el autor pretende subrayar que, a diferencia de lo ocurrido en períodos anteriores, el actual extractivismo progresista respalda un papel más activo del Estado en la distribución de algunos excedentes generados por la actividad económica, pero esto no implica renunciar a los marcos institucionales que garantizan la continuidad del proceso de acumulación basado en la reproducción ampliada del capital. En América Latina, el neoextractivismo habría configurado un espacio político de geometría variable definido por Maristella Svampa como “Consenso de los Commodities”. Este espacio sintetizaría continuidades y rupturas con relación al Consenso de Washington “sin que ello signifique la salida del neoliberalismo” (Svampa, 2013: 39), puesto que se continúa reproduciendo una inserción subordinada de las economías regionales en el mercado mundial al tiempo que se profundizan dinámicas de “acumulación por desposesión” a favor de una alta rentabilidad empresarial.

La firme inserción agroexportadora del Uruguay – favorecida, ciertamente, por el incremento de la venta de *commodities* para China, que se volvió el principal socio comercial del país a partir de 2013 – permitió un incremento constante del PBI entre 2004 y 2014, casi siempre por encima del promedio regional (Silva, 2015; Caetano, 2017). En la primera década de gobierno frenteamplista, el total del gasto público prácticamente se triplicó y su porcentaje sobre el PBI subió del 29% al 33%⁸⁵. Entre 2005 y 2012, el gasto público social aumentó un 83%, incidiendo de manera decisiva en la reducción de la pobreza del 30% al 7% (Olesker, 2014). Aun sin alteraciones sustanciales en su matriz productiva – y tal vez justamente por eso – el Uruguay parece acercarse, poco a poco, de alcanzar un PBI per capita semejante al previsto por la OPP⁸⁶. Por otro lado, al final de la primera década de gobiernos progresistas, la desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini, se estabilizó en torno de 40.0 puntos, siendo comparable a la de 1990 (41.9), aunque bastante inferior a la registrada durante los años subsiguientes a la crisis económica de 2001-2002 (De Rosa et al., 2016). En cuanto a la distribución del *stock* de riqueza (financiera, empresarial e inmobiliaria), el Uruguay presentaba, en 2012, una dramática desigualdad, muy superior a la detectada en la distribución de ingresos: en este aspecto, el índice de Gini está por encima de 82.0 en todas las variantes del cálculo (De

⁸⁵ Datos contruidos a partir de la información suministrada por Datosmacro.com

⁸⁶ Según los datos más recientes del Banco Mundial, el PBI per cápita uruguayo es de US\$15.200.

Rosa, 2016). Esto significa básicamente lo siguiente: el 60% de la riqueza se encuentra en manos del decil más rico y el 14% es controlado por el 0,01% de la población. A su vez, el 80% de la riqueza financiera y la totalidad de la riqueza empresarial son monopolizados por el 1% de la población y el 0,1% de los uruguayos (unas 2.500 personas) retienen la mitad de la riqueza financiera y el 90% de la riqueza empresarial. Vale señalar que, desde el siglo XVIII, los economistas consideran que estas dos formas de riqueza (financiera y empresarial) son cruciales para controlar los procesos económicos: quien las monopoliza, posee, de hecho, el poder de decisión sobre la economía.

La palabra “desigualdad” no aparece ni una sola vez a lo largo de las 136 páginas que componen la EUIIS, ese largo relato del esfuerzo imaginativo y prospectivo realizado por los planificadores del Poder Ejecutivo en cooperación con el sector más rico de los uruguayos. No podría ser de otro modo, ya que en la práctica, y sin afirmarlo directamente, la EUIIS cristaliza las necesidades político-económicas del capital en fórmulas para el gobierno de la totalidad de la población, entendida esencialmente como variable económica. Si fuera verdad que existe alguna relación entre el control del capital y la capacidad de prescribir el futuro de la producción social, entonces no tendría sentido esperar que quien hoy en día ejerce tal privilegio esté interesado en delinear un horizonte de desarrollo de la economía en el cual sus condiciones para continuar ejerciéndolo fuesen cuestionadas. De ahí que hablar de “competitividad” resulte pertinente y deseable: un país competitivo facilita la realización competitiva de la acumulación y abastece esta última con ciudadanos competitivos. Todas estas “necesidades” no suponen ninguna forma de “igualdad” sustantiva, simplemente porque demandan “estímulos” – exoneraciones fiscales; derecho a la propiedad de grandes extensiones de tierra sin impuestos especiales; moderado impuesto de renta y, como es lógico, abstención de cualquier impulso socializante que canalice la voluntad popular de una vida mejor por fuera de las “reglas de juego” existentes – que son tan necesarios para la reproducción del capital como para la preservación, a largo plazo, del poder político-económico de quien lo detenta. De esta forma, la voluntad gubernamental de organizar las capacidades y esfuerzos productivos de la población se vuelve una especie de prolongación redundante del “sentido de la realidad” – para utilizar la expresión empleada en la Estrategia de Desarrollo Productivo de 2006 – inherente al movimiento de reproducción ampliada del capital “uruguayo”, con todo lo que esto implica en términos no sólo de desigualdad económica, sino también política.

No es difícil identificar en la subsunción del Estado al sueño del capital aquella “superposición completa” entre “la política gubernamental y [...] los mecanismos de

mercado ajustados a la competencia” que caracterizaría, según Michel Foucault, la gubernamentalidad neoliberal formulada en la segunda pos-guerra y diseminada mundialmente a partir de mediados de los años sesenta (Foucault, 2009:133). Foucault explica que las doctrinas neoliberales rescataron la idea de “competencia”, ya presente en las teorías liberales clásicas, y a la vez que continuaron identificando en ella la esencia del buen funcionamiento del mercado, como ya lo hacían sus antecesoras, también trataron de desnaturalizarla, o sea, la convirtieron en un objetivo de la acción gubernamental. En consecuencia, el Estado pasó a ser encarado como el garante del estímulo a la competitividad – y no más como el compensador de las iniquidades resultantes de ella –, lo que supone la armonización de su política económica y social con los propósitos de competencia y eficiencia inherentes a la acción empresarial. Desde el punto de vista de la razón neoliberal, la economía de mercado ya “no le sustrae nada al gobierno”, deja de ser una jurisdicción aparte en relación de mutua limitación con el Estado, para “constituir el índice general bajo el cual es preciso poner la regla que va a definir todas las acciones gubernamentales” (ibid.). En síntesis, el mercado posee tendencias inmanentes – reducción de costos, reducción de la tasa de lucro (motor de la necesidad de innovación) y aumento transitorio de esa misma tasa – que el gobierno es convocado no sólo a preservar con una normativa adecuada, sino también a respaldar mediante políticas económicas y sociales lo menos “distorsivas” posible – es decir, competitivas.

Desde que el espacio político del Estado, tal como fuera heredado de la dictadura cívico-militar, se volvió la principal referencia para la izquierda a la hora de formular su estrategia de gobierno, comenzó a ganar preeminencia en el interior del Frente Amplio un discurso sobre la administración de la economía que era básicamente solidario con los *a priori* ideológicos del neoliberalismo (Bonilla, 2016). No es que la izquierda partidaria uruguaya haya simplemente transitado de una posición antagónica a otra de perfil adaptacionista respecto de la economía de mercado. Si reconocemos que la dictadura cívico-militar representó una ruptura extremadamente traumática con las subjetivaciones políticas que la antecedieron, entonces no podremos hablar de tránsitos continuos entre procesos sociales diferentes ocurridos antes y después del golpe de Estado de 1973. Lo que sucedió entre 1971, año de la fundación del Frente Amplio, y el período post-dictadura fue una transformación del propio “sentido de la realidad” político-económica nacional a través del desencadenamiento de un proceso de refacción del Estado que encontró sus parámetros en la forma empresa y cuya expresión paroxística se dio durante el régimen autoritario, cuando los comandantes elegían al equipo gestor de las funciones públicas

desconociendo cualquier proceso de consulta popular. El restablecimiento de la izquierda partidaria, durante lo que Álvaro Rico (2005) denomina “democracia pos-dictadura”, fue parte del agenciamiento de un nuevo sistema de partidos anexo al Estado funcional; un Estado que había operado la separación definitiva entre política y pensamiento de la política, condicionando este pensamiento a la interiorización de las exigencias de la “economía”.

Si antes de la dictadura el Estado era concebido por los partidos de izquierda como el lugar de ejecución de un “programa” que versaba, por ejemplo, sobre la “redistribución” equitativa del ingreso y la “aniquilación” del predominio político de la “oligarquía”, entonces en el régimen democrático construido alrededor del Estado funcional el sentido de la política se volvió obligatoriamente otro, puesto que el campo de los posibles soportado por la política estatal se encontraba completamente redefinido⁸⁷. Desde mediados de la década de los ochenta en adelante, ya no se estaba disputando el mismo Estado de los años sesenta o setenta. El Estado posdictatorial dejó de ser el lugar de ejecución de programas de gobierno pretendidamente representativos de uno o más sectores sociales para volverse el lugar donde cualquier política, sea cual fuere, asume la forma de una opinión sobre el gobierno funcional de las inquietudes sociales existentes. Álvaro Rico evoca este proceso con las siguientes palabras: “la consolidación del discurso dominante en el pasaje de la dictadura a la democracia [...] se realiza dentro de una formación discursiva que transita del ‘monólogo’ autoritario al ‘dialoguismo’ democrático” (Rico, 2005:66). “Si el totalitarismo – continúa Rico – es una absolutización de las lógicas estatales, la democratización liberal significó un proceso de expansión de los sentidos estatales transformados en sentido común de la democracia recuperada” (ibid.:73). Pasamos, por lo tanto, de una estatización hermética y vertical a otra más abarcadora, que se propone hacer síntesis con las esperanzas colectivas: lo decisivo, a partir de ahora, es compenetrar las pequeñas y grandes apuestas cotidianas de las personas con la reproducción ampliada de las condiciones de pensamiento ya establecidas.

Siguiendo una línea de análisis semejante a la que vine reseñando, José Bonilla evalúa que el compromiso de la izquierda pos-dictadura con la disputa de las instituciones forjadas por el autoritarismo impuso la sustitución de “ciertas verdades aprendidas en las luchas pasadas” – y, agregaría yo, también en las luchas presentes – por su representación

⁸⁷ Adolfo Garcé y Jaime Yaffé (2006) analizan con algún detalle – y, por cierto, en forma bastante apologista – los cambios ideológicos, estratégicos y programáticos que condujeron a una paulatina “moderación” de las apuestas políticas de Frente Amplio, en armonía con el consenso liberal imperante desde fines de los ‘80 y las frustraciones suscitadas por la caída del “socialismo real”.

verosímil en los cuadros institucionales existentes (Bonilla, 2016: 234). Todo y cualquier enunciado político pasó a ser mediado por la pregunta sobre cómo sería posible *gestionarlo* teniendo en vista la preservación de la distribución actual del poder económico-político, única garantía de un desarrollo nacional estable a mediano plazo. Así, por ejemplo, una demanda de “reforma agraria” pudo – y debió – ser complementada con el adjetivo “alquilada” para volverse una meta compatible con el estado funcional (capítulo 3). A su vez, la redistribución del ingreso se volvió sinónimo de reducción de la pobreza e incluso la sustitución de importaciones, que en principio no cuestiona buena parte de los poderes fácticos, debió ser adjetivada como “competitiva” para tener sentido en una realidad fracturada, donde los posibles enunciados en determinada esfera de la acción social – la “política”, circunscrita al Estado – son técnicamente equipados – y por lo tanto articulados – con los protocolos de efectuación deducidos del mercado. En el seno de este “complejo del Estado funcional”, un sector de la izquierda uruguaya se involucró decididamente con la tarea de reconocer las tendencias existentes de desarrollo económico y estimularlas con políticas públicas de toda índole. A su vez, otros sectores del Frente Amplio se propusieron instalar nuevas tendencias de desarrollo en aquellos lugares donde el capital ya no encontraba formas de reproducirse competitivamente. Bella Unión era uno de esos lugares.

Un senador de la República que estuvo estrechamente vinculado al planeamiento y la ejecución de la intervención desarrollista en el norte del país recordaba, con un dejo de melancolía, las ambiciones que lo motivaban a mediados de los años 2000: “quisimos hacer no lo de Bella Unión aislado. [Íbamos] a hacer un programa... el Frente Amplio quería desarrollar todo un plan de energía muy potente, de diversificación de la matriz energética y nosotros dijimos ‘bueno’”. Este interlocutor conocía Bella Unión de cerca e interactuaba con el movimiento social local desde mucho antes de volverse un importante referente político de la izquierda frenteamplista. En 1990, viajó por primera vez al norte uruguayo para asesorar con sus conocimientos de agronomía a algunos productores locales en dificultades económicas. Siendo cuadro técnico de una organización internacional de trabajadores de la alimentación, también decidió desarrollar contactos con el movimiento sindical de los trabajadores de la industria azucarera. No demoró mucho para que los sindicalistas lo presentaran a algunos líderes políticos de izquierda que, más tarde, serían llamados a ocupar puestos relevantes en el gobierno frenteamplista. Muy pronto, sus amigos en el gobierno le darían la oportunidad de dirigir ALUR durante algunos años. En el período previo al inicio de su trayectoria en la vida pública, mi interlocutor se dedicó a preparar, en diálogo con sus compañeros del Frente Amplio, “una propuesta desde lo local

que después tuviera el respaldo del gobierno y del Estado”. Él fue entendiendo, en seguida, gracias a la interacción con viejos militantes de la UTAA, que la producción de caña de azúcar generaba pobreza y explotación, ya que implicaba tareas mal remuneradas de corte manual. Pero también sabía, por su familiaridad con el debate sobre energías renovables, que el cultivo de la sacarígena podría ser rentable si el gobierno estuviera dispuesto a vincularlo con la fabricación de biocombustibles.

La ampliación del cultivo de la caña de azúcar podría generar impactos inmediatos sobre la oferta de empleo en el norte del país, comprobando a corto plazo la capacidad del gobierno progresista de mejorar la vida de los cortadores de caña de Bella Unión, quienes eran presentados por la prensa nacional de fines de los años 1990 como un dramático emblema de la pobreza rural uruguaya. Si la intervención política en la economía local reforzara la vocación cañera que otrora – con pesados subsidios públicos – el capital imprimió a la explotación del suelo en Bella Unión, entonces el desarrollo económico reduciría el empobrecimiento suscitado por la desocupación total. Sin embargo, dicha apuesta económica también generaría, inevitablemente, sus propias formas de explotación y empobrecimiento, las cuales son indisociables del monocultivo cañero: esta era una vicisitud que los nuevos planificadores uruguayos reconocían y estaban dispuestos a aceptar, aunque no dejaran de verla como algo “contradictorio”. Refiriéndose a los debates cultivados al interior de su grupo político, el senador revelaba lo siguiente: “Yo me considero profundamente batllista. Obviamente tengo un componente... o sea, a veces nos reímos porque nos declaramos profundamente batllistas y somos marxistas. Cuando te ponés a afinar, hay contradicción en algunos aspectos, pero el proceso de ALUR es desarrollista”.

Contradicciones aparte, el hecho era que la ampliación de los cañaverales garantizaría zafras más largas, mientras que la preservación de un sistema de cosecha mayoritariamente manual condicionaría el aumento constante de la demanda de fuerza de trabajo, configurando, en consecuencia, un mercado laboral con características semejantes a las del período inmediatamente anterior a la desestructuración de la industria azucarera. En un primer momento, la viabilidad del PSA en Bella Unión sería asegurada por leyes proteccionistas que tasaban la importación de azúcar refinado, canalizando la demanda nacional a los ingenios uruguayos. El ingenio de Bella Unión fabricaría azúcar refinado con materia prima nacional e importada de Brasil para lograr precios razonables en el mercado interno. En un segundo momento, la caña cultivada en el norte del país sería utilizada para el procesamiento de bioetanol, que ANCAP se comprometía a comprarle a

ALUR por un precio superior a los costos de producción. El modelo general era factible y pudo prosperar, no sólo en Bella Unión, sino también en otras partes del país.

No obstante, un rápido examen de este esquema de desarrollo económico permite advertir que no está en continuidad con el patrón de acumulación agroexportador del cual dependen los gastos públicos del progresismo uruguayo, y menos aún con la ambición del MEF de desparramar recursos productivos por el país gracias a la penetración constante del capital trasnacional. Tampoco podríamos decir que, en lo concerniente a la producción de biocombustibles – su principal fuente de recursos –, ALUR haya dado pruebas cabales de competitividad, puesto que la empresa prácticamente monopoliza el mercado nacional de biodiesel y bioetanol y logra preservar dicha situación gracias a los generosos contratos firmados con ANCAP. Por su carácter relativamente “excéntrico” desde el punto de vista de la política económica del gobierno, el proyecto de ALUR, y especialmente su materialización bellaunionense, son pensados por sus formuladores como una especie de “isla”. En efecto, este sería el título del libro que el senador y un amigo sociólogo pretendían escribir sobre la experiencia de desarrollo en el norte del Uruguay:

Es una isla. Por eso el título de *La Isla*. En el propio Frente Amplio, tenemos visiones diferentes. El Frente Amplio, no te olvides, es una coalición de partidos donde hay una diversidad muy grande de visiones hasta, por ejemplo, en lo referente al rol del Estado. Nosotros queríamos un Estado activo, metido hasta el fondo. No haciendo toda la actividad, pero sí, a partir de políticas públicas, un Estado con un rol muy fuerte en la actividad productiva, definiendo el modelo que se iba a desarrollar de inclusión y que tuviera como eje un enfoque de soberanía energética y alimentaria.

Pero no todo ocurrió exactamente como lo esperado. En 2015, el ministro de economía y finanzas informó que, como parte de las medidas de reducción de costos de ANCAP, esta última comenzaría a disminuir la mezcla de biocombustibles en las naftas vendidas dentro del país hasta llegar al mínimo establecido por ley. Tal medida no sólo obligó ALUR a vender parte de sus productos en el mercado internacional, sino que también impuso límites para la próspera expansión de la “isla” de desarrollo afianzada por la empresa. Esta medida evidenció algo que tal vez ya estuviese implícito desde el inicio del PSA: la sustitución de importaciones, la reducción de las emisiones atmosféricas y la soberanía energética estaban condicionadas, en última instancia, a la reducción de costos y a la competitividad. Fue de acuerdo con este marco que las convicciones desarrollistas de algunos sectores de la izquierda uruguaya necesitaron comprobar la defendibilidad de sus expresiones insulares y calibrar las pretensiones de su relato político.

El senador me explicaba que el PSA se inspiró, “sin dudas”, en “una visión desarrollista”, aunque su implementación no se haya justificado ni siquiera en estos

términos al gabinete del primer gobierno frenteamplista, en el año 2005: “no dijimos ‘vamos a hacerlo como tal’. Fue algo más vinculado a que el Estado tenía que jugar un rol importante”. Se sabía que la reintroducción de la agricultura bellaunionense en un proceso consistente de acumulación de capital exigía fuertes inversiones de dinero y el Estado uruguayo estaba en condiciones políticas de emprenderlas después del “desastre” de los años noventa y gracias a la masiva votación obtenida por el nuevo gobierno en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2004. No obstante, eso no significaba el inicio de un nuevo proyecto de desarrollo basado en la producción de alimentos para el mercado interno y en la redefinición radical de la matriz energética nacional. De ahí la dificultad de yuxtaponer a la reactivación de la industria cañera un relato político sistemático, creíble y demostrable ante los ojos de sus “beneficiarios” en el nivel local. En consecuencia, el PSA se realizó en Bella Unión como una política puntual y relativamente exitosa de mitigación del desempleo rural. Asimismo, luego de ser fugazmente “intervenido” por las organizaciones sindicales locales (capítulo 3), el proyecto de desarrollo debió incluir la democratización del acceso a la tierra entre sus prioridades. Sin embargo, la esperanza de superación generalizada de la “zafralidad”, que había estado asociada a la lucha agraria durante el “modo popular”, permaneció indefinidamente postergada.

Equipada compulsoriamente por las directrices del MEF, la sensibilidad batllista de quienes impulsaron el proyecto de ALUR terminó materializándose como un esfuerzo de administración homeostática de la pobreza en Bella Unión. Por el momento, el “relato político” de los neodesarrollistas uruguayos está por fabricarse y, como reconoce el senador, “si [la izquierda] no tiene un relato político, todo eso no tiene sentido”. Pero no por carecer de sentido, sería admisible que “eso” fuera completamente disfuncional: “no es lo mismo que eso se haga no produciendo buena caña que produciendo buena caña”. La isla necesita sobrevivir como un modelo de desarrollo inconcluso y funcional, a la espera, contra todas las evidencias, de transformarse en un archipiélago. Así como el MEF puede, en última instancia, disponer sobre los límites y la orientación de los proyectos de ALUR, esta empresa también se propone verticalizar su propio campo de posibles para circunscribir y controlar, en el perímetro de la isla, la irrupción inoportuna de las esperanzas colectivas. Se trata de una cadena de sujeción donde los criterios de eficiencia y rentabilidad de unos eslabones deben ser absorbidos por los demás a costa de la suspensión de las sensibilidades políticas que algún día los singularizaron.

Sin embargo, pese a los intentos de verticalización, el deseo de acceder a la tierra, “salir de la zafralidad”, ganar cada vez mejor, trabajar menos y, más abstractamente, el

deseo de hablar francamente sobre todo lo que se desea, siguió fluyendo sobre la superficie del CSA. Se trataba de un deseo que, de hecho, respondía positivamente a los mecanismos institucionales de canalización y captura existentes en Bella Unión, pero sin agotarse completamente en ellos. Aquello que carecía de sentido para la organización eficiente y rentable del cultivo de la caña iba decantando en intersticios recónditos, como una especie de inconsciente político de las formas de conciencia y subjetivación sustentadas por el equipamiento desarrollista. Pero no nos adelantemos. Me ocuparé de estas dinámicas en el capítulo 6. Antes, será necesario explorar la conformación de la superficie de contacto entre las máquinas deseantes equipadas por el gobierno progresista y las expectativas personales y colectivas que se combinaron con ellas en el seno de una política desarrollista. En el próximo capítulo, examinaré más de cerca cómo el complejo sucroalcoholero (ahora con iniciales minúsculas, como el complejo edípico) seleccionaba e investía unos deseos y capacidades muy específicos de las personas de modo de (re)ordenar sus expectativas de futuro, sus funciones productivas, su relación con los medios de producción, sus formas de recibir el dinero y lidiar con él. En pocas palabras, analizaré cómo el deseo colectivo era “acomplejado” en los mecanismos del CSA y discutiré las tensiones subjetivas inherentes a ese proceso.



Ilustración 7: Realizado por un militante del Partido Comunista en Bella Unión, este mural representa el periplo – de derecha a izquierda – que conduce a los trabajadores de la caña de azúcar al Uruguay productivo: bicicletas son sustituidas por ómnibus, casas humildes dan lugar a viviendas populares subsidiadas por el gobierno, el antiguo ingenio azucarero se vuelve parte del grupo ANCAP, máquinas – en vez de personas – cargan materia prima en los camiones de transporte de caña, y los niños cambian sus instrumentos de trabajo por computadoras del Plan Ceibal.

Capítulo 5

El deseo acomplejado

Vinieron varios muchachos como vos a hacer estudios acá en la zona. Estudios de antropología, sociología... vino hasta un psicólogo allí para Campo Placeres. Al psicólogo nosotros le dijimos: 'vos venís como psicólogo y cuando te vayas, vas a tener que ir a un psiquiatra'.

Pachu



5.1 Verticalizar el complejo

Algunos años antes de la ocupación de tierras del 2006, diversos jóvenes docentes y estudiantes de la Universidad de la República (UDELAR) ya seguían con interés el desarrollo de las luchas colectivas impulsadas por los trabajadores rurales de Bella Unión. Ellos intentaban respaldarlas desde sus redes políticas en otras regiones del país, y cuando era necesario, ofrecían conocimientos técnicos que pudieran subsidiarlas y fortalecerlas. El estrechamiento de los vínculos de cooperación entre universitarios y organizaciones de trabajadores rurales fue beneficiado, a partir de 2007, por la creación del Centro de Formación Popular de Bella Unión⁸⁸ – instalado en la “chacra escuela” 15 de Enero – y por la inauguración de una sede del Servicio de Extensión de la UDELAR próxima al centro de

⁸⁸ Bandera et al. (2011) relatan la trayectoria del Centro de Formación Popular desde el punto de vista de los docentes de Extensión Universitaria da UDELAR.

la ciudad. Esta casa amplia, abarrotada de libros y documentos, pasó a recibir, a lo largo de casi diez años, a diversos técnicos, investigadores, estudiantes y militantes que se trasladaban al norte uruguayo para conocer y asesorar al movimiento sindical local⁸⁹. En algunos de mis primeros viajes de investigación, fui recibido en la Casa de Extensión por los docentes que había conocido en el contexto de las actividades de formación organizadas en la Chacra 15 de Enero. La presencia constante de los extensionistas de la UDELAR en Bella Unión, sumada a su postura solícita en relación a los estudiantes uruguayos y extranjeros que aflúan a la región, han favorecido la realización de decenas de estudios académicos que dan cuenta de las recientes transformaciones de la economía local y de su entrelazamiento con el devenir de las formas de organización protagonizadas por los trabajadores de la caña de azúcar y de otros sectores productivos.

Además de promover su propia agenda de reflexiones y de apoyar el trabajo de otros investigadores, los extensionistas de la UDELAR desarrollaron relaciones de colaboración con el sindicalismo local – especialmente aquel practicado por la UTAA. Estas relaciones proporcionaron la formulación de varios proyectos productivos, el ofrecimiento de asesoría jurídica, la realización de cursos sobre cooperativismo y el estrechamiento de vínculos entre los sindicalistas de Bella Unión y los militantes de otros movimientos sociales de Uruguay y de los países vecinos, como el Movimiento Sin Tierra brasilero (MST). “Los gurises de extensión” – como solían ser evocados por los trabajadores rurales que los conocieron – supieron cultivar con sus amigos en el movimiento sindical algunas perspectivas comunes sobre las potencialidades inherentes a las experiencias de acceso a la tierra que venían sucediendo en Bella Unión desde mediados de los años 2000. Para los extensionistas de la UDELAR, esta relativa democratización del acceso a la tierra era susceptible de ser apropiada por apuestas políticas y expectativas de realización personal y colectiva que, aun sin gozar de reconocimiento explícito por parte de la empresa ALUR, debían incentivarse y ponerse a prueba con obstinación. Al encarar el CSA como un espacio de experimentación conflictivo y jerarquizado, cuyos sentidos y las potenciales consecuencias sociales no estaban decididas de antemano, los investigadores de Extensión Universitaria adoptaron

⁸⁹ El flujo de militantes sociales e intelectuales uruguayos y extranjeros a la ciudad de Bella Unión no es una tendencia reciente, sino que se remonta a los mismos orígenes de la UTAA. Desde mediados del siglo XX, cuadros políticos de izquierda, como Raúl Sendic Antonaccio (capítulo 2), se propusieron negociar sus propios imaginarios de transformación social con los del incipiente movimiento sindical de los cortadores de caña. Tales composiciones determinaron la emergencia de agenciamientos colectivos inéditos, los cuales han singularizado no sólo el discurso de importantes sectores de la izquierda uruguaya, sino también las perspectivas y apuestas del sindicalismo rural desarrollado en Bella Unión.

una perspectiva analítica que ponía el acento en las disputas y contradicciones inherentes a las políticas gubernamentales de desarrollo productivo⁹⁰. Una de las virtudes de ese enfoque fue haber revelado los procesos de subsunción del trabajo y del territorio que verticalizaban la estructura del CSA, concentrando en la industria el control casi total del proceso de producción.

La caracterización del complejo formulada por los docentes de la UDELAR será retomada en este capítulo y articulada con el análisis de cómo la integración subordinada a las rutinas productivas del CSA llegó a volverse una posibilidad atractiva para los trabajadores rurales organizados en la UTAA. A lo largo del capítulo, procuraré demostrar que la instalación de un complejo agroindustrial vertical, monopolizado por la industria, y al mismo tiempo compatible con la perspectiva de democratización del acceso a la tierra, es fruto de un equipamiento colectivo de deseo. Dicho equipamiento reconoce en las personas ciertas voliciones que, mediante remesas muy específicas de dinero, pueden llegar a convertirse en vectores del proceso de acumulación. La funcionalización económica de las voliciones ajenas posee una contracara política, marcada tanto por la frustración de los posibles cultivados en los agenciamientos colectivos pretéritos, como por la estabilización de nuevos principios de realización personal y colectiva. Estos aspectos serán abordados al final del capítulo. Ahora, la cuestión es saber cómo el núcleo vertical del CSA – es decir, la industria – concentra en sí un enorme potencial de mando y se propone ejercerlo en nombre de la productividad de la tierra y de las personas.

Desde el punto de vista de las investigaciones realizadas por Extensión, conceptualizar el esfuerzo desarrollista impulsado en Bella Unión como un “complejo” permite analizar el encadenamiento de recursos y actores sociales eventualmente antagónicos alrededor de un esfuerzo productivo común que sedimenta formas específicas – y frecuentemente contrastantes – de estructuración de la propiedad y de organización del trabajo (Etcheverriborda et al., 2014). Podríamos decir que, para este grupo de

⁹⁰ La colaboración entre los docentes de la UDELAR y el movimiento sindical de los cortadores de caña molestó a algunos cuadros políticos responsables de la gestión de ALUR. Durante una entrevista radial concedida en 2013, el entonces vicepresidente de ANCAP reprochó a los universitarios por "concentrar[se] fundamentalmente en alentar la conflictividad, en alentar el conflicto, la demanda y la exigencia" en lugar de colaborar con el éxito del proceso de desarrollo. Las relaciones entre los extensionistas y los gestores del CSA siguieron muy tensas hasta el año 2016, cuando la UDELAR decidió finalizar los programas que estaban a cargo del Servicio de Extensión en Bella Unión luego de desfinanciar paulatinamente sus actividades. Esta medida fue interpretada por el equipo de Extensión como una decisión orientada por "valoraciones políticas", deudoras de "una concepción de Universidad y educación conservadoras, negadoras de las asimetrías y conflictos sociales" que, a pesar de "pretende[r] ocultarse en la engañosa definición de amplitud, neutralidad y rigurosidad académica [...] en los hechos, está conducida por los intereses conciliadores con el capital" (La Diaria, 6-12-2016).

investigadores, el complejo agroindustrial de Bella Unión no es un hecho consumado, sino una configuración social tensa y mutable, que jerarquiza intereses heterogéneos, multiplica esperanzas y frustraciones, refuerza subalternidades y, al mismo tiempo, estimula experiencias colectivas de futuro incierto. La jerarquización de los actores involucrados en el complejo ocurre gracias a una articulación subordinante entre sus fases agrícola e industrial, que concentran la totalidad de las fuerzas productivas enroladas en la industria azucarera bellaunionense.

En la fase agrícola, de la cual depende la elaboración de la materia prima enviada al ingenio, la empresa ALUR financia todas las tareas de cultivo y, además de eso, provee a los productores de los insumos (herbicidas, fertilizantes, etc.) necesarios para el mantenimiento de sus plantaciones. Durante la zafra, la empresa también financia el pago de la mano de obra de los cortadores de caña a través de adelantos monetarios semanales o quincenales. Al final de la zafra, estos valores son descontados del precio de la materia prima comprada por el ingenio y, en el caso de los préstamos relativos a las tareas de cultivo, llevan un interés del 7,5% al año. ALUR también se apropia directamente de una parte del valor generado en la fase agrícola del complejo por medio de la venta de servicios de flete y carga de caña, alquiler de maquinaria e incluso arrendamiento de tierras. En la fase industrial, la empresa monopoliza la compra y el procesamiento de la materia prima, fijando su precio en medio de negociaciones muy tensas con los productores locales.

El panorama delineado en el párrafo anterior evidencia, a los ojos de los investigadores de Extensión, una estructura de subordinación de la fase agrícola a la fase industrial del complejo. Esta última constituiría el “momento productivo donde se concentra la propiedad y el poder de determinación”, definiendo, en consecuencia, la organización de la producción: “a partir del financiamiento, seguimiento técnico y retención de la producción, ALUR SA se asegura la provisión de materia prima y la fijación del precio del kilogramo de azúcar. Es así que el proceso de reproducción del núcleo, en este caso, la industria, pauta el proceso de reproducción del resto del complejo” (Etcheverriborda et al., 2014: 66).

La preponderancia de la fase industrial supone la integración vertical y de arriba abajo de los emprendimientos que realizan la fase agrícola del proceso productivo. Esto significa que la industria negocia de manera asimétrica con todos los actores que operan en la fase agrícola y controla ampliamente su actividad productiva, mucho más cuando se trata de pequeños establecimientos rurales poco capitalizados que dependen intensamente de las financiaciones, los insumos y el paquete de asesoramiento técnico proporcionado

por ALUR. Este es, precisamente, el caso de las colonias agrícolas que comenzaron a ser implantadas a partir de 2007 para promover la integración de algunos asalariados rurales a la cadena productiva del azúcar y el bioetanol.

Como vimos en el capítulo 3, la primera experiencia de acceso a la tierra protagonizada por integrantes de organizaciones de trabajadores y pequeños productores rurales quedó conocida como Campo Placeres. Allí, un conjunto de productores individuales procedentes de UTAA, APAARBU y Gremial Granjera se volvió subarrendatario de 39 parcelas de tierra con una dimensión promedio de 12 hectáreas cada una. Uno de los funcionarios de ALUR que formuló e impulsó la creación de Campo Placeres evaluaba retrospectivamente esta experiencia como “el primer error importante que cometimos en Bella Unión”. Según él, “la desesperación de ya empezar a hacer algo con respecto a dar participación, inclusión productiva y todo” habría llevado a los gestores del CSA a “arrendar un campo y garantizar la entrada de por lo menos 30 familias”. En aquella época, el INC aún no participaba sistemáticamente en la elaboración de las políticas agrarias realizadas en el marco del CSA, razón por la cual ALUR decidió asumir esa tarea por cuenta propia. Sin embargo, para este funcionario, “al no existir un área de desarrollo rural, de apoyos en todos los sentidos, estos procesos terminaron siendo todos sobre ALUR”, o sea, la empresa fue convocada a ofrecer soluciones para buena parte de las dificultades presentadas por los nuevos productores de caña.

Una de las primeras grandes dificultades enfrentadas por ALUR tenía que ver con la particular situación económica de los trabajadores que pretendían recibir tierras para producir caña. ¿Cómo garantizar su compromiso con la producción agrícola si ellos no poseían recursos para atender sus necesidades reproductivas durante el período de instalación y mantenimiento de los cultivos? “Nosotros – rememoraba el funcionario – dijimos ‘bueno, les damos tierra, vamos a ayudar a que tengan infraestructura, ¿y qué? ¿Van a estar 15 meses esperando hasta que entre la primera caña [al ingenio]?’ Es imposible”. Ante este dilema, y considerando que “no se podía transformar ALUR en una empresa de desarrollo rural”, se optó por poner en práctica un mecanismo especial de financiamiento de la producción que mi interlocutor explicaba de la siguiente manera:

Hay una parte del financiamiento que da ALUR que [corresponde a la] mano de obra, una parte para la cosecha y otra parte para todo lo que es mantenimiento. Entonces nosotros dijimos: ‘la parte de la cosecha, no la toquemos, pero el resto...’. No es que ALUR paga un salario, lo que hacemos es un financiamiento. Entonces, ¿qué hicimos? Es[e] [dinero] que se [suele] da[r] en cuatro meses, que son las actividades de mantenimiento, agarramos por hectárea [y estipulamos] cuánto es. ¿Cuántas hectáreas tenés? ¿Diez? Lo multiplicamos por

diez y lo dividimos en doce meses. [...] Hemos ido buscando flexibilizar algunas cosas con ese proceso [de acceso a la tierra por parte] de los trabajadores.

Es necesario desmenuzar esta explicación, ya que ella describe, según argumentaré más adelante, el mecanismo fundamental que establece el alineamiento entre los asalariados rurales vinculados a la UTAA y la apuesta desarrollista agenciada por ALUR. La cita anterior indica que, para convertirse en pequeños productores de caña, los nuevos beneficiarios del CSA se vuelven caudatarios de un “financiamiento” destinado a cubrir sus gastos familiares a lo largo del año mientras no puedan disponer de los dividendos generados por la venta de materia prima al ingenio. El cálculo del monto de este financiamiento se basa en un parámetro establecido por ALUR según el cual la producción de una hectárea de caña de azúcar cuesta alrededor de 97.000 pesos uruguayos. Este valor incluye los gastos de “siembra”, “mantenimiento”, “pre-cosecha” y “cosecha”. La “siembra” ocurre cada cinco años, respetando el tiempo de vida útil de una “cepa” de caña de azúcar. Su financiamiento es amortizable en tres cuotas anuales, la primera correspondiente a un 30% y las otras dos a un 35% del valor prestado. Los demás adelantos deben ser reembolsados anualmente por los beneficiarios y – con excepción del valor acreditado para el pago de la mano de obra durante la cosecha – están sujetos a una tasa de interés.

En el caso de las colonias agrícolas administradas por ex asalariados rurales, ALUR discrimina los gastos anuales de manutención y pre-cosecha correspondientes a una hectárea de caña, los multiplica por la extensión de los cañaverales abarcados por cada emprendimiento productivo y divide el valor obtenido por la cantidad de personas que administra el emprendimiento. Así, por ejemplo, si un asalariado rural fue contemplado por 12 hectáreas en Campo Placeres y los gastos de manutención y pre-cosecha corresponden a 11.808 pesos/há (conforme a los parámetros de 2014), entonces será beneficiado con un financiamiento mensual de 11.808 pesos. Otro ejemplo: si 10 personas están administrando colectivamente 164,2 hectáreas en la zona de Pay Paso – como de hecho ocurrió en la primera etapa de implantación de este emprendimiento –, entonces cada una de ellas recibirá, en teoría, 16.157 pesos mensualmente, y como contrapartida tendrá que encargarse, junto a sus compañeros, de todas las actividades de cultivo incluidas en la financiación – aplicación de fertilizantes, herbicidas, construcción de “regueras”, irrigación, etc. Sin embargo, en el caso de Pay Paso, el valor efectivamente recibido por cada integrante de la colonia rondaba los 14.000 pesos en 2015, porque un 15% del monto

total prestado al emprendimiento era retenido por ALUR a título de “ahorro forzado”⁹¹ para la formación de un fondo destinado a la compra de maquinaria. Pero volvamos al caso de Campo Placeres, cuyo modelo de capitalización fue propuesto, con algunas variaciones, a todas las demás colonias financiadas por la empresa ALUR.

En el contrato firmado entre ALUR y los “beneficiarios” de Campo Placeres, estos últimos se comprometían a mantener su vínculo asociativo con las entidades en las cuales militaban inicialmente. La cláusula contractual en cuestión era un síntoma del interés de las organizaciones sociales y sindicales en mantener cierta incidencia política sobre los rumbos del emprendimiento productivo, principalmente en lo concerniente a los usos de la tierra y a las formas de organización del trabajo que allí se desarrollaban. Por otro lado, los estudios de Extensión Universitaria revelan que los arrendatarios de Campo Placeres estaban sujetos a otros compromisos, que, de a poco, irían moldeando la estructura de su vínculo con el “núcleo” del CSA. Álvaro Moraes (2012) resalta que el “Contrato de subarrendamiento” de Placeres establecía, entre otros compromisos, las siguientes obligaciones cruciales: manejar cada lote de tierra de acuerdo a las instrucciones dadas por los ingenieros agrónomos designados por ALUR, pagar un arrendamiento correspondiente al 7% de la producción de caña obtenida (alrededor de 2.300 dólares por año) y asumir las deudas de implantación de los cultivos, que alcanzaban una cifra aproximada de 10.000 dólares por contrato. Aún cabe señalar que, si bien en la época de mi trabajo de campo los colonos de Placeres recibían financiamientos mensuales según el esquema descrito en el párrafo anterior, al inicio de esta experiencia de colonización la situación era un poco distinta: en lugar de contar con una ayuda financiera regular durante el año entero, accedían a este beneficio sólo en los ocho meses correspondientes al período de mantenimiento de los cañaverales y pre-cosecha (de noviembre a junio). Ya en los meses de zafra, su renta dependía del dinero adelantado por ALUR para las tareas de corte de caña. Considerando que un trabajador puede cortar unas seis hectáreas a lo largo de todo el período de cosecha, sería de esperar que quien tiene bajo su responsabilidad extensiones superiores a 10 hectáreas deba contratar mano de obra asalariada si pretende terminar sus actividades en el tiempo estipulado⁹². De hecho, fue eso lo que ocurrió en Campo Placeres:

⁹¹ Este término figuraba en el contrato de asistencia financiera firmado entre ALUR y los cooperativistas de Pay Paso en el año 2014.

⁹² Otra posibilidad consistiría en reclutar mano de obra familiar sin recurrir a la salarización del trabajo, pero esta alternativa se vio comprometida en muchos casos porque implicaría la depresión de los ingresos de otros miembros de la familia.

los subarrendatarios se vieron rápidamente ante la necesidad de contratar trabajadores para concluir la cosecha de caña dentro de los plazos establecidos para esa tarea.

Si tenemos en cuenta que, de los 18 integrantes de UTAA que recibieron tierras en el emprendimiento en cuestión, ocho pertenecían a la dirección del sindicato, entonces no nos parecerá extraño que hayan tenido conflictos con las bases de la organización. Su situación era paradójica: estaban comprometidos con reivindicar mejores salarios para los peludos y al mismo tiempo se encontraban involucrados en un negocio cuyo éxito dependía no sólo de su capacidad de controlar la mano de obra contratada, sino también de extraer la mayor cantidad posible de valor al trabajo asalariado. En efecto, esta especie de *double bind* fue señalado por algunos peludos, transformándose en un foco de tensión permanente entre los trabajadores y la dirección del sindicato. El conflicto se vio agravado porque Lito, subarrendatario en Placeres y entonces presidente de la organización, venía expresando un claro alineamiento político con las fuerzas partidarias que administraban el CSA. Desde el punto de vista de sus críticos, tal actitud lo volvía propenso a inhibir la acción del sindicato siempre y cuando esta pudiese generar contratiempos para las políticas del gobierno progresista en Bella Unión. Chicho, que también recibió tierras en Placeres a fines de los años 2000, me comentaba que en aquella época “algunos empezaron a acomodarse las piezas para ver qué podían sacar a su favor siendo sindicalistas pero haciéndole deberes para el Frente Amplio”. Convertido en el blanco preferencial de los militantes que compartían opiniones análogas a las de Chicho, el presidente del sindicato acabó renunciando a su cargo a inicios de 2009. Lito fue el único dirigente que, luego de recibir tierras en Placeres, se retiró en forma casi inmediata de sus funciones sindicales. Otros miembros de la dirección de la UTAA siguieron ocupando sus respectivos cargos por algunos años, aun cuando dicha situación los obligaba a lidiar con reiteradas acusaciones de conflicto de intereses por parte de otros militantes de la organización. Tales acusaciones solían ser gestionadas como si se tratara de rumores infundados (“fofocas”), siendo eventualmente atribuidas a desavenencias personales o a intereses políticos particulares.

Siete años después de dejar la presidencia de la UTAA – y ya en la condición de cuadro político frenteamplista con fuerte expresión local –, Lito me explicó que su decisión de “dar un paso al costado” habría respondido a dos razones fundamentales:

Yo entendía que como asalariado rural ya no tenía más nada que hacer en UTAA, porque ya era patrón. Mis principios me dijeron que no voy a seguir defendiendo el salario de los trabajadores cuando yo voy a tomar uno para que me saque mi cosecha. Y después, la otra

razón era que me gustaba la política con locura [...] yo me retiro para no hacer política dentro del sindicato.

En lo concerniente al imperativo de “no hacer política adentro del sindicato”, Lito parece haber aceptado criterios de conducta que él mismo intentó relativizar sin éxito, pero que le fueron reafirmados e impuestos por una corriente más poderosa de opinión. En los años posteriores a su renuncia, la UTAA pasó a ser dirigida por Rocha, un militante que se acercó al sindicato en la época de los Jornales Solidarios (capítulo 3) y participó en la ocupación de tierras de enero de 2006, convirtiéndose en “beneficiario” de Campo Placeres al año siguiente. La irreverencia de Rocha respecto del Frente Amplio (“si mezclás el sindicato con el Frente Amplio, desactivás a los trabajadores y los ponés bajo el mando de la burguesía del partido”) y su distanciamiento retórico frente al proyecto productivo de Campo Placeres (“Placeres quedó a merced de intereses que no son los de la organización, se fue por las ramas”) al principio lo colocaron en una situación más favorable que la de Lito para conjugar la lucha agraria de la UTAA con las tareas del “frente sindical”.

De 2009 en adelante, Rocha se propuso explorar algo así como una “síntesis disyuntiva” entre las reivindicaciones agrarias del sindicato y la expansión de los cañaverales bellaunionenses bajo el comando de ALUR. Al mismo tiempo que continuó exigiendo tierras del Estado para garantizar a sus bases sociales los beneficios económicos del CSA, este dirigente también osciló entre posiciones dubitativas o ferozmente críticas con relación a un modelo de acceso a la tierra que, pese a todo, volvería a replicarse en cada nueva experiencia de colonización. Con el paso de los años, la autoridad de Rocha también se debilitaría en medio de insinuaciones más o menos veladas sobre su complacencia con los intereses patronales. Esta situación de desgaste político alcanzaría su punto culminante en 2015, cuando un grupo de militantes lo desplazaría de sus funciones al frente del sindicato y replantearía radicalmente los términos del debate sobre la relación entre el acceso a la tierra y los objetivos de la lucha sindical. Tendremos la oportunidad de abordar esta transición en el capítulo 7. Por ahora, es importante señalar que a los ex asalariados que eligieron comprometerse con la experiencia de Placeres, les resultó inevitable acatar las relaciones de trabajo exigidas por el monocultivo cañero y someterse a las modalidades de financiamiento promovidas por ALUR.

Campo Placeres fue la experiencia prototípica de conversión de trabajadores rurales dependientes de un salario en pequeños productores dependientes técnica y financieramente de la industria azucarera. Después de Placeres, fueron implementados otros emprendimientos agrícolas con características comparables a las del modelo inicial.

Se destacan, entre ellos, la colonia Raúl Sendic Antonaccio (CRSA) y la colonia Eliseo Salvador Porta, también conocida como Pay Paso. En conjunto, esas tres experiencias han realizado un mismo movimiento de captura y funcionalización del deseo colectivo que consistió básicamente en enrolar “necesidades” variadas para luego jerarquizarlas de acuerdo con un conjunto pre-definido de objetivos operacionales y productivos. Dichos objetivos se convirtieron en el patrón respecto del cual se pretendió estimular y gobernar la capacidad de acción de los nuevos productores en las colonias del CSA.

5.2 Reorientar la acción de los “débiles”

Los extensionistas de la UDELAR diagnosticaron correctamente, y demostraron en forma exhaustiva en sus investigaciones, el carácter vertical y monopólico de las estrategias de investimento del territorio efectuadas por ALUR en Bella Unión. Matías Carámbula, por ejemplo, identificó en la conversión de ex asalariados rurales en productores de caña una transformación de la experiencia de clase que diluía algunas subordinaciones al tiempo que instauraba otras: “[los nuevos colonos] no sienten directamente el yugo del explotado, son soberanos en sus tiempos, en sus nuevos ritmos de gestión, pero son subordinados del ingenio, de la industria y de algún gerente” (Carámbula, 2014: 91). Para este autor, las relaciones de dependencia verificadas en las colonias del CSA guardaban semejanzas formales con la condición de los asalariados “en el surco” – es decir, en el corte de caña –, en la medida en que se desarrollaban en el seno de un proyecto productivo cuyos “intereses y escalas” trascendían la experiencia inmediata de quienes estaban subordinados a él en tanto pequeños productores (ibid.). Entre la subordinación del “surco” y la de la “colonia”, Gabriel Oyhantçabal vislumbró una “temporalidad” de corta duración abarcada por el período de “aspirantía”, cuando los trabajadores reivindican el acceso a la tierra mediante ocupaciones, asambleas permanentes y tensos diálogos con los agentes del Estado: “[la aspirantía] es un momento con una alta carga ideológica, que mayormente no se somete a las contradicciones de la práctica [y] posibilita el anuncio [...] del nuevo orden” (Oyhantçabal, 2014a:105). A su vez – y en discontinuidad con la “aspirantía” –, la creación de colonias agrícolas supondría la “concreción de la lucha por la tierra” e inauguraría un “pasaje de la ideología a la práctica”. Dicho “pasaje” también marcaría el inicio de una segunda temporalidad, orientada menos por la “lucha” y más por la “producción” (ibid.).

En el momento de la producción, los organismos gestores del CSA – y no más las organizaciones sindicales – pasarían a tener preeminencia en el control de las vocaciones y

las capacidades colectivas de quienes antes luchaban por la tierra. Según Martina Otero (2014), la colonización agraria implicó, en Bella Unión, el constante control sobre las rutinas de trabajo en las nuevas unidades productivas y la fiscalización del uso de los recursos financieros disponibles, de modo de hacerlo converger con los estándares de eficiencia y sustentabilidad preconizados por ALUR (Otero, 2014:118). Etcheverriborda identifica los orígenes de esta situación en el hecho de que “la implantación de la caña de azúcar precedió el acceso a la tierra de los colonos”. En el caso de la CRSA – y lo mismo podría decirse sobre Placeres y Pay Paso – “*la caña de azúcar colonizó la Colonia* y, en ese proceso, los colonos quedaron anexados, fundamentalmente como fuerza de trabajo” (Etcheverriborda, 2014:215).

Las características que he venido reseñando hasta aquí indican que, desde 2007, la relación entre “lucha” y “acceso a la tierra” ha sido ampliamente acomplejada por la industria azucarera: esta última se propuso fijar los sentidos de la lucha por la tierra y, por consiguiente, los objetivos últimos de la colonización agraria. Estamos ante una situación diferente a la de 2006, cuando las tierras ocupadas por las organizaciones sindicales todavía no formaban parte del CSA, y por eso mismo se volvían objeto de prescripciones sustraídas al devenir de la agroindustria sucro-alcoholera (capítulo 3). Siendo así, las colonias agrícolas organizadas según el modelo de Campo Placeres no son exactamente la “concreción de la lucha por la tierra”, o mejor, no son la realización de la *misma* lucha que irrumpió en 2006, pero sí la efectivización de otras reivindicaciones agrarias cuyos objetos – tierra, dinero, caña – ya estaban equipados en la estructura de un complejo. En otras palabras, mientras que la lucha del 2006 concretó *una política* – en los términos establecidos en la primera parte de esta tesis –, las reivindicaciones agrarias subsiguientes fueron anexas al campo de efectucción pre-dispuesto por el CSA.

El CSA no constituye, en consecuencia, el espacio obligatorio para la concreción de cualquier lucha agraria, sino solamente de las reivindicaciones agrarias que él mismo estimula. Es en este momento que debemos diferenciar el Proyecto Sucro-Alcoholero (PSA) del Complejo Sucro-Alcoholero (CSA). El primero expresó una promesa más abstracta de reactivación de la agroindustria bellaunionense; promesa que fue delirada e intervenida por la política popular en los dos años inmediatamente posteriores a la victoria electoral del Frente Amplio. El segundo consistió en la materialización de una política de Estado y, por consiguiente, en el acto y el efecto de selección, captura, organización y funcionalización del deseo colectivo. Los sentidos de un *proyecto de desarrollo* están siempre en disputa, pero no ocurre lo mismo con los sentidos de un *complejo productivo*.

Este último se caracteriza como una máquina de monopolización del sentido⁹³ y, por lo tanto, de evitación, frustración, precarización y represión del desvío. Su funcionamiento depende de que los sentidos de la acción colectiva sean canalizados en cursos de acción controlables para que no estén en disputa permanente. Esta condición de funcionamiento del complejo puede producir en sus beneficiarios la sensación de un desfase entre el sentido de lo que hacen hoy en día y el sentido de lo que querrían hacer o querrían haber hecho. Es como si a veces ellos siguieran un curso de *acción sin sentido*, mientras que en sus conciencias se va acumulando un excedente de *sentidos sin acción*, es decir, de potencialidades frustradas. Podemos adivinar ese desfase en los siguientes enunciados, proferidos, respectivamente, por una colona de la CRSA y dos colonos de Pay Paso: “siempre pregonamos la diversificación, *pero* fuimos para el monocultivo”; “el sistema del Estado lleva a que, más allá o más acá, vas a tener que explotar, *mientras que* lo que pedimos es que no haya explotados ni explotadores”; “yo quería salir de la changa, *pero* terminé en una relación patronal frente a ALUR y mis compañeros”. Cuando escuchaba de mis interlocutores este tipo de evaluación, solía preguntarles por qué decidieron aceptar tierras en condiciones aparentemente tan adversas. Sus respuestas variaban poco: “[fue] la *desesperación* por agarrar un pedazo de tierra”; “este tipo de acceso a la tierra se hizo más por una *necesidad*”; “necesidad, la palabra es *necesidad*. ¿Necesidad de qué? De garantizar tu trabajo, de no salir más a buscar trabajo por afuera, de tener el sustento tuyo cada día”.

Aparentemente, la inclusión de las personas en el complejo se basó en dos movimientos básicos: en primer lugar se trató de circunscribir su “necesidad” de dejar atrás la inestabilidad laboral y, en segundo lugar, de capturar dicha “necesidad” en conexión con la promesa de volverse productores agrícolas. Sin duda, el complejo pudo suplir las ganas de “no salir más a buscar trabajo por afuera” y de “agarrar un pedazo de tierra”, pero lo hizo con la condición de que los sujetos deseantes estuvieran dispuestos a asimilar – y hacer suyas – las necesidades de reproducción de la industria sucroalcoholera. Conjuguar las necesidades propias con las necesidades de la industria supuso una renuncia a la pretensión de realizar otras necesidades políticas o ambiciones personales, vueltas ahora secundarias, excedentes o, si se prefiere, sin valor operacional en el equipamiento desarrollista. Si en el ciclo de luchas sociales que antecedió a la instauración del CSA las necesidades surgían a

⁹³ Sin perjuicio de las capacidades descriptivas y explicativas de la noción de "máquina anti-política", acuñada por Ferguson (1990) para evocar la tendencia de las agencias de desarrollo de volver técnicas decisiones eminentemente políticas, aquí el uso de la metáfora maquinaica apunta en otra dirección. Una máquina de monopolización del sentido no se torna eficiente porque es capaz de ocultar la naturaleza de sus propias operaciones, sino porque está apta a seleccionar un conjunto de voliciones que, una vez estimuladas, organizadas y mediadas en ciertos mecanismos, se volverán productoras de una nueva realidad social.

borbotones, desordenadas, presuponiéndose y reforzándose mutuamente (necesidad de ingreso + necesidad de tierra + necesidad de producir alimentos + necesidad de suprimir la explotación + necesidad de auto gobernarse + necesidad de enunciar sus propias necesidades, sean cuales fueran), entonces en el marco del complejo la necesidad individual de dinero fue elevada al primer plano y, enseguida, atenuada con un tipo muy especial de recurso monetario cuya recepción colocó a sus beneficiarios ante un nuevo repertorio de necesidades. Este recurso monetario especial – que realiza necesidades inmediatas a costa de movilizar a sus receptores para la realización, a largo plazo, de las necesidades del complejo – se llama crédito. Volveré sobre este punto en el próximo apartado. Antes, debo hacer algunas precisiones adicionales sobre la noción de “captura de las necesidades”, fundamental para el argumento de este capítulo y del siguiente.

Cuando la palabra “necesidad” aparece en un texto antropológico, se prenden inmediatamente – y con razón – las señales de alerta que nos previenen contra aquella tentación miserabilista de asociar la acción colectiva de los pobres con el inmediatismo irreflexivo impuesto por la desesperación y el hambre. En primer lugar, es importante subrayar el carácter absolutamente problemático de asumir la existencia de necesidades “puras”, operando sin cualquier mediación como disparadores de la acción humana. En efecto, donde escribo “necesidad”, haciendo más las palabras de mis interlocutores, también habría que leer “deseo”. Las personas que conocí en las colonias del CSA no se pensaban como necesitadas, pero sí como gente que hacía apuestas más o menos exitosas en la vida. De ahí la importancia de inscribir su evocación de la necesidad en el registro del deseo. Ni siquiera la necesidad de obtener un salario para subsistir es una “pura” necesidad. No sólo porque la necesidad de salario es socialmente construida en el modo de producción capitalista, sino también porque querer un salario es, simultáneamente, desear un modo de vida, prefigurar un estándar de satisfacción, movilizar una ética del merecimiento, posicionarse respecto del trabajo, etc. El salario, indisociable de una relación salarial – y, por consiguiente, síntoma de una desposesión –, debe pensarse, de todos modos, como objeto de deseo. Esto queda muy evidente cuando un trabajador que recibe remuneración suficiente para solventar su reproducción material, e incluso mantener una vida considerada digna de acuerdo con los estándares vigentes en cierto lugar y momento, pasa a desear otro tipo de relación salarial respecto de la cual su condición laboral presente aparece como menos apetecible y posiblemente superable. Sin embargo, aún cuando el deseo salarial es cultivado sobre el trasfondo de una desposesión radical, sigue siendo deseo. Pero esta vez se trata, ante todo, del deseo de evitar un mal, y no

necesariamente de obtener un bien. Las palabras de Frédéric Lordon resultan aclaradoras al respecto:

Si en el sentido común se resiste a la idea de hacer entrar la mera reproducción material, vivida como coacción y no como impulso o arrebato, en la categoría del “deseo”, es porque hace la distinción, de manera pertinente, pero confusa, entre el deseo de evitar un mal y el deseo de perseguir un bien. Y la hace tanto mejor en la medida en que, devenido sentido común fordista, ve muy claramente los afectos distintos que producen en él la imposición cotidiana de ‘el dinero hay que ganarse’ y la perspectiva alegre del acceso a los bienes de consumo (Lordon, 2015: 78).

Las relaciones de trabajo fordistas serían un mal necesario que media el acceso al salario y, por ende, a unos bienes de consumo muy deseados por el trabajador. En la actual etapa posfordista, ciertos discursos empresariales se esfuerzan por representar el trabajo como una situación no transitiva de realización del deseo: el trabajo – y no sólo el salario – se presenta como un índice de satisfacción de los impulsos libidinales del trabajador. Es necesario trabajar satisfecho, conjugando, en una misma relación social, el cumplimiento del deber y el empuje deseante. Pese a las pretensiones ideológicas de las nuevas razones gerenciales, sólo una porción muy reducida de la fuerza de trabajo actualmente movilizada en las distintas ramas de la economía goza del privilegio de conciliar la labor al servicio de un patrón con el despliegue de potencialidades que no responden, directamente, a las obligaciones asociadas a la ocupación de un puesto de trabajo específico. En Bella Unión, el acceso a la tierra significó, para quienes se beneficiaron de él, la posibilidad de vivir ese raro privilegio.

Las necesidades capturadas por el aparato desarrollista no ocurrían en medio de una privación radical que enfrentaba a los sujetos con la fatal desnudez de sus vidas. Se trataba, más bien, de una necesidad de vivir mejor cuyos criterios de realización acabaron siendo transfigurados justamente entre el cierre del “modo popular” (año 2006) y el inicio del equipamiento colectivo de deseo (año 2007). “Transfigurar” me parece una palabra particularmente adecuada para describir esa inflexión gracias a la cual la realización del deseo pudo *cambiar de figura*, anidar en nuevos soportes y proliferar en ellos. La tierra y el crédito constituyeron las dos figuras clave del deseo movilizado en pro del CSA: en ellas los nuevos beneficiarios de la industria sucroalcoholera fueron invitados a explorar distintas facetas – transitivas y no transitivas – de la felicidad y la satisfacción. Gracias a la tierra y el crédito los ex asalariados rurales han logrado superar las incertidumbres asociadas a la falta de trabajo, mejorar su nivel de consumo, incrementar su autonomía deliberativa en el ambiente laboral y disfrutar del prestigio social inherente a la posesión de cañaverales en

una ciudad cuya élite económica está conformada, en buena medida, por exitosos productores de caña de azúcar.

La incorporación de las personas al proceso productivo comandado por ALUR estuvo anclada en el estímulo a la realización de deseos colectivos asociados, básicamente, a la posesión del dinero y a la tenencia de la tierra. En esta nueva complejidad deseante, la existencia de los asalariados rurales en tanto sujetos de una política – la política del modo popular – quedó marginada. Es decir, a la vez que ciertos deseos fueron reconocidos y dirimidos en el complejo, también se fijaron límites y condiciones para el proceso deseante, obstruyendo así el horizonte de posibles donde, anteriormente, este mismo proceso se había desencadenado. De 2007 en adelante, los trabajadores rurales devendrían productores agrícolas beneficiarios de una política estatal, comprometiéndose, en teoría, a manejar los recursos proporcionados por esta política de acuerdo con los dictámenes formulados por sus ideólogos. Tal sistema de enrolamiento de los militantes de la UTAA en la estructura del CSA estuvo en consonancia con la lectura que de ellos hacían los cuadros político-partidarios más comprometidos con la inclusión de Bella Unión en el mapa del nuevo Uruguay Productivo. Para estos últimos, los trabajadores de la caña de azúcar y sus familias padecían una enorme debilidad política y económica, razón por la cual sus necesidades – circunscritas al deseo de tierra y de dinero – sólo podrían ser subsanadas mediante una intervención estatal consistente y vertical. Para esclarecer este punto, conviene retornar a la oficina del senador frenteamplista presentado en el capítulo anterior.

En la perspectiva de este senador, el escenario encontrado por el gobierno progresista en el norte del país a mediados de los años 2000 era el resultado catastrófico de una profunda crisis social:

En fines de los noventa y primeros años 2000 aquello [Bella Unión] explota desde el punto de vista social. Hay una crisis productiva, políticas que desarticulan totalmente el aparato productivo [...] ¿Qué pasa? Esto [el ingenio de CALNU] no lo terminaron de cerrar a pesar de que actores locales se sumaron al plan de cierre de todo aquello [...] No lo pudieron cerrar por dos o tres razones. Primera: [el entonces presidente] Lacalle no lo pudo cerrar⁹⁴. [Además,] en el Partido Colorado, el batllismo, a pesar de que no era el mismo de la primera mitad del siglo XX, siempre ha estado dando vueltas⁹⁵ [...] [Finalmente,] gente

⁹⁴ Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional, o Blanco) fue presidente del Uruguay entre 1990 y 1995. Durante su mandato, la industria azucarera de Bella Unión empezó a dar las primeras señales de estancamiento. Lacalle empezó a impulsar una política de reconversión productiva en el norte del país, pero dicha iniciativa no fue suficiente para absorber la mano de obra dejada ociosa por el debilitamiento de la industria azucarera.

⁹⁵ Aquí, el senador hace referencia a las dos gestiones consecutivas del Partido Colorado, subsiguientes al mandato de Lacalle. Los presidentes Julio María Sanguinetti (1995-2000) y Jorge Batlle (2000-2005) estuvieron al frente del Poder Ejecutivo en plena crisis de la economía azucarera bellaunionense. Desde el

allegada a Sanguinetti hizo un acuerdo con la transnacional Man [...] que se quedó con el ingenio aquel [...] Hubo una combinación de varias cosas para que lo de Bella Unión por lo menos no se terminara de matar totalmente.

Esta reseña de las razones que habrían evitado el completo desmantelamiento de la industria bellaunionense incluye una hipótesis sobre la persistencia obstinada de principios batllistas en el seno del Partido Colorado y una teoría sobre el *lobby* corporativo de actores “allegados” al presidente Julio María Sanguinetti, cuyo segundo mandato transcurrió entre 1995 y 2000, en plena crisis de la economía cañera. A diferencia de los relatos que escuché de los dirigentes de la UTAA, en la narrativa del senador la intensa movilización social de finales de los años 1990 y de inicios de los años 2000 ocupa un lugar periférico en lo que tiene que ver con la preservación de la industria local: “hubo marchas – reconoce el senador –, hubo defensa de la industria, piquetes, movilizaciones”, pero estas luchas son introducidas retrospectivamente como la antesala reivindicativa de un proyecto que encontraría a sus formuladores primero en el interior del Frente Amplio y, a continuación, en la esfera estatal:

hicimos un proyecto y en el 2003 presentamos esa propuesta acá en el Parlamento [porque] Raúl Sendic [hijo, el futuro vicepresidente de ANCAP] era diputado. Después se lo entregamos a Tabaré Vázquez. En el año 2004, el Frente Amplio gana las elecciones y en diciembre hicimos un seminario en Bella Unión sobre alternativas para la cadena productiva de la caña de azúcar [...] hubo técnicos de la UDELAR, ingenieros, técnicos extranjeros que trajimos para decir ‘bueno, esto va por acá’.

En el mismo período en que ese seminario tenía lugar en Bella Unión, Tabaré Vázquez ya se había reunido con Raúl Sendic hijo para ofrecerle el cargo de vicepresidente de ANCAP y comprometerlo en la tarea de, en palabras de mi interlocutor, “llevar adelante el proyecto [sucroalcoholero] y liderar todo este desarrollo”. Al tomar esa decisión, Tabaré Vázquez estaba refrendando uno de los principales puntos de su plataforma electoral: dar inicio a la construcción del “Uruguay Productivo”. Los proyectos formulados y reformulados en lo que denominé “modo de reorganización” (capítulo 3), antes aun de que los futuros cuadros del gobierno frenteamplista comenzaran a trabajar junto a los sindicatos de Bella Unión, no son parte de la historia “oficial” del PSA. Aquellos viejos proyectos parecen constituir una especie de literatura menor cuya relevancia fue mínima – tal vez nula – en el momento en que los funcionarios nombrados por el presidente de la República comenzaron a rediseñar la actividad productiva de la sociedad bellaunionense.

punto de vista de los actores sociales que defendían la viabilidad de la producción cañera en Uruguay, estos mandatarios no han adoptado medidas consistentes para proteger la principal agroindustria de Bella Unión.

El ejercicio de la capacidad creativa y planificadora de los cuadros políticos del nuevo gobierno progresista se dio sobre el trasfondo de la presunta “debilidad” de las “organizaciones locales”:

Bella Unión – evaluaba el senador – *sufrió un proceso de crisis cultural, social y económica muy fuerte [...] Pegó muy duro la crisis allá desde el punto de vista de los valores. Las organizaciones locales son muy débiles. [...] La crisis cultural lleva hasta que a un compañero de UTAA, un trabajador rural, el modelo que tiene no es el del proceso colectivo [...] el modelo que tiene es el de los [menciona el apellido de una tradicional familia de productores cañeros], el modelo individual, el del dueño de área de caña que salió para adelante explotando al resto [...] Una frase mía en Bella Unión es ‘todos quieren ser [menciona el nombre de un prominente productor de caña]’. Es mentira lo otro. Pero no porque no crean en los procesos colectivos. Es muy fuerte el componente cultural [...].*

Después de escuchar estas consideraciones, quise saber porqué, si el modelo “individual” es cuestionable desde el punto de vista político y cultural, ALUR decidió aplicarlo en Campo Placeres, la primera experiencia de acceso a la tierra propuesta a los pequeños productores y asalariados rurales de Bella Unión:

Alex: Pero en [Campo] Placeres se propuso la creación de empresas unipersonales. ¿Por qué ese fue el modelo?

Senador: Ahí fuimos por un proceso individual porque pensamos que iban a estar las organizaciones, esto más allá de que iban a ser productores individuales. [Pensábamos que] la organización iba a estar metida ahí, entonces se resolvía lo colectivo. Pero desde el primer momento, la organización salió y quedó lo individual. Sin embargo, después todos los procesos [de acceso a la tierra] fueron colectivos y hemos tenido muchas dificultades.

Ya tuve oportunidad de analizar en qué circunstancias la UTAA terminó des-identificándose paulatinamente de la experiencia de Campo Placeres⁹⁶. Básicamente, para el sindicato era difícil respaldar un proyecto productivo donde estaban replicadas las mismas condiciones de trabajo que la organización se proponía criticar y fiscalizar. El acceso a la tierra, en las condiciones propuestas por ALUR, ciertamente pudo interpelar diversos deseos colectivos de bienestar y ascenso social, pero difícilmente podría dialogar con los valores sustentados por el movimiento sindical. Estos valores, por más que hayan sobrevivido en las conciencias de quienes se volvieron productores de caña, tendieron con todo a entrar en crisis cuando fueron confrontados con las ineludibles rutinas de la producción de valor en los cañaverales; rutinas en las que, volviendo a las palabras de una colona del CSA, “más allá o más acá, vas a tener que explotar”. Siendo así, tal vez la crisis de valores no sea un dato previo al CSA, sino un efecto de sus mecanismos básicos de realización; mecanismos enraizados – cuando se trata del enrolamiento de los asalariados rurales – en la circunscripción de un deseo de dinero y tierra cuya satisfacción opera como llave de captura para reinscribir a los sujetos en el proceso de acumulación en tanto

⁹⁶ Véase el apartado 5.1 de este capítulo.

productores. En el próximo tópico recorreré algunos escenarios y conceptos que son necesarios para comprender y profundizar esta lectura.

5.3 Desarrollar las fuerzas deseantes (luego, productivas)

Trasladémonos del Palacio Legislativo a la sede del INC, en la Ciudad Vieja, en Montevideo. Allí, en diálogo con Suárez, un técnico encargado de acompañar las experiencias colectivas de acceso a la tierra en Bella Unión, me reencontré con una noción muy útil para analizar las condiciones de posibilidad del CSA, sobre todo en lo concerniente a su interfaz con las reivindicaciones agrarias de los asalariados rurales. Para Suárez, lo que está en juego al inicio de cada experiencia de colonización es el “desarrollo de las fuerzas productivas” de los “arrendatarios” (es decir, los colonos). En esta acepción, las “fuerzas productivas” serían las máquinas que median el proceso de trabajo. La adquisición precoz de “fuerzas productivas” determinaría, en buena medida, el éxito de los incipientes emprendimientos cañeros. Para explicar su tesis, Suárez retomó el caso de la colonia Sendic, donde algunos grupos compuestos por ex asalariados rurales obtuvieron buen desempeño productivo en las zafras de 2010 y 2011. Según mi interlocutor, uno de los grupos de productores de la Colonia Raúl Sendic habría recaudado alrededor de 5.000.000 de pesos netos con la venta de sus cosechas al ingenio:

Casi 5.000.000 de pesos. Sabíamos que ese era el momento del desarrollo de las fuerzas productivas, cuando inició el emprendimiento [...] Hicimos un montón de reuniones [con los nuevos colonos] para estimular la reinversión porque no tenían maquinaria. Lo logramos con casi todos [los grupos], menos uno. No se compraron [ni siquiera] un tractor cero quilómetro. Compraron un fierro viejo. La gente del otro grupo [también formado por ex cortadores de caña] sí compró herramientas. Y eso llevó a que el proceso de cada grupo fuera totalmente distinto.

En la Colonia Sendic entraron 44 colonos provenientes de sindicatos y de organizaciones de pequeños productores rurales. Alrededor de 15 personas eran miembros de UTAA y las demás fueron indicadas por el sindicato de operarios del ingenio local y por el sindicato de trabajadores de una cooperativa de riego. Este emprendimiento marcó el inicio de una participación más constante del INC en la distribución de tierras destinadas a la expansión de los cañaverales de Bella Unión. Los titulares de la Colonia Sendic recibieron un promedio de 36 hectáreas por familia, muchas de ellas ya cultivadas con caña, razón por la cual contrajeron una deuda con ALUR en el mismo momento en que pusieron los pies en la tierra. Estas deudas iniciales fueron saldadas por los colonos procedentes de UTAA – y también de otras organizaciones – gracias a los buenos rendimientos obtenidos en las primeras zafras. Sin embargo, no tardaría mucho tiempo para que condiciones climáticas desfavorables y el propio desgaste de las “cepas” de caña

impusieran una disminución sustancial del rendimiento de los grupos. Esto generalizó el endeudamiento en la colonia y lo volvió particularmente agudo entre los titulares indicados por la UTAA – inclusive aquellos que se compraron un tractor cero kilómetro con el excedente proporcionado por la abundancia de las primeras zafras.

El desarrollo de las fuerzas productivas ocurre en forma muy peculiar cuando los encargados de emprenderlo son asalariados rurales que identifican en el cultivo de la caña una posibilidad de vivir mejor aquí y ahora. Mino, beneficiario de la Colonia Sendic, observaba lo siguiente al respecto: “una cosa es ser trabajador-trabajador, que sale sin tener nada, sólo la fuerza de trabajo. No vas a dejar de comer, pagar las cuentas y ayudar a tus hijos para pagar un arrendamiento o comprar un tractor”. Fue en nombre de una promesa pendiente de estabilidad económica y ampliación del consumo que estos “trabajadores-trabajadores” se adhirieron al CSA – incluso al precio de postergar, momentánea o definitivamente, otras apuestas colectivas que alguna vez les fueron caras. Y era en nombre del cumplimiento de esa promesa que el desarrollo de las fuerzas productivas podía quedar para después. El incremento del bienestar familiar ganaba prioridad sobre las inversiones productivas: casas eran reformadas o ampliadas, se adquirían automóviles, hijos y hermanos con dificultades económicas recibían préstamos generosos, se pagaban deudas acumuladas con los comerciantes del barrio, los usureros informales y las empresas de crédito rápido, se compraban heladeras, cocinas, freezers y, claro, televisores para entretenerse al final de la tarde entre mate y mate.

¿Vamos a comer solo tractores? – indagaba Carli, una de las titulares de la Colonia Sendic – ¿Vamos a vivir de tractores? Entramos para mejorar y estamos peor. No es así. ¿Qué mejor que a vos te sobre una buena libre⁹⁷? Así, el año que viene vos entrás con más fuerza, más contento, con más ganas de trabajar. Vamos a hacer mejor la cosecha para que nos sobre una mejor libre. Porque si terminás el año con nada, terminás desanimado y la gente se va.

Para Migue, otro beneficiario de la Colonia Sendic, el criterio de éxito del acceso a la tierra bajo las condiciones actuales era básicamente la estabilidad laboral: “con todas las dificultades que tenemos ahí en la colonia, por lo menos tenemos una estabilidad laboral. Este es un beneficio de la lucha. De una forma o de otra, estamos llevando el sustento para nuestras familias. Podemos decir que tenemos trabajo”. A la hora de justificar su presencia en las colonias y de ponderar sobre la administración de los montos de dinero que se encuentran a su disposición, era común que los ex asalariados antepusieran los imperativos de reproducción de la vida individual y familiar a los imperativos de la reproducción del capital. Esto parece evidenciar que la realización del proceso productivo al interior del

⁹⁷ La “libre disponibilidad”, o “libre”, es el lucro neto obtenido por las unidades productivas subordinadas al CSA mediante la venta de materia prima a la empresa ALUR.

complejo agroindustrial estaba condicionada al modo en que los trabajadores eran llamados a integrarlo. Si concentramos nuestra atención en los bordes del CSA, es decir, en el momento en que sus mecanismos enrolamiento interpelaban a los futuros productores cañeros con la finalidad de volverlos integrados y funcionales, podremos concebir con más claridad el origen de la tensión interna entre el imperativo productivista de la industria y las prioridades de quienes deberían estar dispuestos a cumplirlo en la fase agrícola.

La noción de “desarrollo de las fuerzas productivas”, empleada por Suárez, indica el punto neurálgico donde se juega el potencial éxito económico de los emprendimientos administrados por los ex asalariados rurales. Siguiendo la genealogía de esta noción hasta sus orígenes en el pensamiento de Marx, es posible encontrar nuevas coordenadas teóricas que redimensionan su poder explicativo. En Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas es un aspecto del proceso de producción que está determinado por unas formas especiales de combinación entre personas y medios de producción. Siendo así, la fuerza de trabajo (i.e. la capacidad de trabajo de un individuo humano) y los medios de producción (herramientas, máquinas, insumos) son, primeramente, fuerzas productivas potenciales. La realización efectiva de la producción depende de la combinación de ambos⁹⁸. De esa combinación derivan las fuerzas productivas propiamente dichas, que no se reducen a una suma de factores heterogéneos, sino que emergen de la cualidad de esa suma. El desarrollo de las fuerzas productivas se mide por la productividad del trabajo. Por ejemplo: la misma cantidad de trabajadores, produciendo el mismo tipo de producto con las mismas herramientas durante igual período de tiempo puede volverse más o menos productiva de acuerdo con el régimen vigente de vigilancia y estímulo del trabajo. Así, ciertas formas de control de los trabajadores, determinada disposición espacial del ambiente de trabajo, ciertas modalidades de pago – por hora, por cantidad de mercancía fabricada, etc. – tienen incidencia directa sobre la productividad laboral, en la medida en que determinan los ritmos de aplicación de la fuerza de trabajo, ya sea por medio de la coerción y/o a través del incremento de la competencia entre los empleados. Pero nada de esto podría suceder sin una interpelación primordial de los sujetos *en tanto* trabajadores. En el capitalismo, la

⁹⁸ Marx pone su argumento en estos términos: "Sean cuales fueren las formas sociales de la producción, sus factores son siempre los trabajadores y los medios de producción. *Pero unos y otros sólo lo son potencialmente si están se separados. Para que se produzca, en general, deben combinarse. La forma especial en la que se lleva a cabo esta combinación distingue las diferentes épocas económicas de la estructura social.* En el presente caso la separación del trabajador libre con respecto a sus medios de producción es el punto de partida – o sea, como modo de existencia productivo del capital. El verdadero proceso en el que ingresan los creadores personales y materiales de mercancías así reunidos, *el proceso de producción*, se transforma por eso, él mismo, en una función del capital [...]" (Marx, 1983 [1885]:32-33).

fuerza de trabajo puede combinarse con los medios de producción gracias a una coerción económica fundamental habilitada por la desposesión original del productor directo, cuya reproducción vital depende de un flujo monetario que el capitalista controla y se dispone a liberar mediante prestaciones periódicas de trabajo productivo, es decir, de trabajo que genera valor. En Bella Unión, los nuevos colonos fueron llamados a participar en el proceso productivo como trabajadores y *además* como capitalistas potenciales. Sin embargo, como veremos enseguida, la realización de su interpelación en la condición de trabajadores obstruyó, en cierta medida, su devenir capitalista.

Los integrantes de la UTAA que adhirieron a las rutinas productivas del CSA eran, en su mayoría, asalariados zafrales o trabajadores informales de tiempo completo. Siendo así, la “zafralidad” para ellos constituía una preocupación constante, una rutina cansadora cuya superación sonaba deseable. Sin embargo, no existía una relación directa entre esta complejidad deseante y la decisión de transformarse en un productor eficiente de caña de azúcar. De todos modos, *podría haber* una relación entre dicha complejidad y la decisión de aceptar una nueva rutina laboral a cambio de ingreso estable a lo largo de todo el año. En otras palabras, la oportunidad de producir caña, por sí sola, valdría muy poco si no estuviera mediada por la garantía de un salario fijo y por la promesa de una mejora relativa de las condiciones actuales de vida. Es Lagarto quien ayuda a introducir este punto:

Yo no conocía la movida sindical, me arrimé al sindicato para conseguir trabajo, como quien dice. Y lo logré. Mis ingresos en Pay Paso son menores de los que tenía antes y ahora este ingreso yo tengo que ir estirándolo. Antes ganaba más, ahora gano menos. De a poco uno se va ajustando al trabajo y a tener el dinero de uno mismo, para un día llegar a tener plata junta.

Lagarto comenzó a participar en las reivindicaciones agrarias de la UTAA cuando Rocha ya era secretario general del sindicato. Esto significa que su experiencia de lucha por la tierra estaba básicamente circunscrita al horizonte de posibilidades del CSA. Desde el inicio de la lucha por la instalación de una colonia agrícola en la región de Pay Paso, donde Lagarto trabajaba en 2015 junto a otros 19 compañeros, la propuesta del sindicato era, fundamentalmente, promocionar la integración de nuevos trabajadores a la producción de caña financiada por la empresa ALUR⁹⁹. El sindicato que Lagarto conoció y en el cual militó desde 2011 difundía la promesa del PSA como una promesa de estabilidad laboral y de suspensión de la dependencia patronal. Fue con los ojos puestos en esta promesa que, durante su mandato de casi ocho años, Rocha impulsó el frente de lucha agraria de la UTAA, denominado Comisión de Tierras. Esta decodificación sindical de la política

⁹⁹ También se llegaron a proyectar algunos experimentos de diversificación productiva para Pay Paso, pero su relevancia era económicamente muy periférica en relación al cultivo de la caña.

desarrollista del gobierno redundó en la definición de algunos criterios en relación a los cuales los participantes de la Comisión de Tierras pudieron evaluar la pertinencia de presentarse ante ALUR y el INC como productores de caña en potencia. En 2013, Rocha buscaba resumir dichos criterios de la siguiente forma:

La idea que tenemos de todo eso [el acceso a la tierra] no es que los compañeros se crean productores. Es sacarlos de la zafralidad para que puedan mantener a sus familias, comer todo el año, tener una entrada de dinero para mandar a estudiar a los hijos, vivir decentemente y no tener que rendir cuenta a ningún patrón.

De acuerdo con estos criterios, la producción cañera era una alternativa valorable siempre y cuando habilitara un acceso inmediato a la estabilidad de ingreso, atenuase los vínculos de dependencia patronal y condujera a la ampliación futura del consumo familiar. Retomando una expresión de Carli, la decisión de trabajar “contentos” para ALUR suponía la satisfacción de esas premisas generales y derivaba, en consecuencia, de una interpelación económica mediada por deseos inherentes a la condición de vivir la inconstancia laboral, valorarla negativamente y quererla superar. En este caso, podríamos hablar de una interpelación económico-libidinal, o aun, para recurrir a las metáforas informáticas, de una interpelación económica que encuentra su *plug-in* en un tipo específico de deseo salarial, puesto que no estamos delante de la necesidad de salario en general, sino de una voluntad particular de salario fijo producida por el descontento con la “zafralidad”. ¿Qué es este descontento? ¿Cómo produce deseo? El descontento en cuestión es el resultado de la comparación crítica entre una forma vigente de conseguir dinero y otra posible; comparación en la cual la primera aparece, por diversos motivos, como menos interesante respecto de la segunda, instalando esta última, por ende, en el horizonte del deseo.

Volverse productores de caña no era la única alternativa al alcance de quienes se acercaron a la “movida sindical” en busca de trabajo. Al contrario, estas personas ya venían desarrollando sus modos de vida y subsistencia desde mucho antes de la reactivación de la industria azucarera. Sin embargo, estos modos de vida generaban un excedente de insatisfacciones y expectativas que la promesa de acceso a la tierra, tal como fue enunciada en el ambiente sindical, parecía estar en condiciones de contemplar. Las inquietudes o insatisfacciones impuestas por la estructura del mercado de trabajo bellaunionense se volvieron, por así decirlo, el “lastre deseante” cuya movilización resultó clave para la combinación entre asalariados rurales y medios de producción en el territorio monopolizado por la empresa ALUR. La activación del “lastre deseante” dio inicio al desarrollo de las fuerzas productivas potenciales de los ex asalariados rurales, abriendo

camino a su conversión en fuerzas productivas propiamente dichas en la estructura del CSA.

No obstante, las condiciones de posibilidad para el enrolamiento de los miembros de la Comisión de Tierras en el proceso de trabajo fueron, también, condiciones de imposibilidad para su compromiso eficiente con el proceso productivo. Si en el contexto del sindicato los futuros productores de caña definieron algunos criterios básicos para la realización de su enrolamiento en el CSA, entonces ALUR, a su vez, se encargó de definir los mecanismos de efectuación de dichos criterios. En respuesta a la expectativa de obtener una fuente de ingreso estable, la empresa generó una figura salarial *sui generis* de naturaleza crediticia (salario como crédito, crédito como salario)¹⁰⁰. En cuanto a la dependencia patronal, de la cual los trabajadores pretendían distanciarse, su atenuación fue parcialmente concretada en la medida en que cupo a los beneficiarios de ALUR definir su propia rutina laboral – siempre atentos, claro, a la necesidad de asegurar niveles aceptables de productividad para la caña de azúcar. Finalmente, el incremento de la capacidad de consumo quedaría asegurado por la posibilidad formal de acceso, por parte de las familias de colonos, a los excedentes de capital resultantes de la producción agrícola. Sin embargo, esto último dependería de que el monto de dinero obtenido con la venta de materia prima al ingenio fuera superior al crédito contraído con ALUR y a los gastos de reinversión requeridos por cada unidad productiva. Puede decirse, entonces, que quienes al principio adhirieron al CSA en busca de un flujo constante – y de preferencia creciente – de dinero, se encontraron, en la práctica, con una remesa mensual de crédito (“salarios”) y con una remesa anual de excedentes, denominada “libre”. En los próximos párrafos veremos qué pasa cuando dos remesas muy específicas de capital capturan las fuerzas deseantes de sus receptores al tiempo que entran en una dramática tensión con ellas.

Por regla, en una economía capitalista sólo existen dos proveedores de dinero: el empleador y el financista. Con relación a los nuevos productores de caña salidos de las filas del movimiento sindical de Bella Unión, ALUR ocupaba esos dos roles a la vez, sometiendo el primero al segundo, razón por la cual podemos decir que la empresa era, esencialmente, un financista que otorga créditos semejantes a un salario y vigila su uso de forma semejante a un patrón. El sistema de créditos que rige la conversión de asalariados rurales en pequeños productores agrícolas es, como ya demostraron Moraes (2012) y

¹⁰⁰ Como vimos en el primer apartado, los “beneficiarios” de ALUR recibían mensualmente un valor establecido en base a los costos de manutención de las hectáreas de caña puestas bajo su responsabilidad, a condición de que realizaran los trabajos requeridos y devolvieran compulsivamente el dinero recibido en 12 meses a través de descuentos con intereses sobre el precio de la materia prima enviada al ingenio.

Oyhantçabal (2014b), un dispositivo que transfiere valor generado en la fase agrícola del complejo para la fase industrial. Sin embargo, antes que nada la oferta de créditos es un vehículo de combinación entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Dicha oferta opera capturando, en primera instancia, el deseo de salario nutrido por los trabajadores bellaunionenses. Gracias a este sistema de crédito, el núcleo del CSA – la industria – logra mediar el deseo de los asalariados en su propio proyecto de desarrollo económico. *Grosso modo*, ALUR explota un deseo específico de salario, inmanente a la “zafralidad”, y se propone “configurarlo” en nombre de la viabilidad de la industria sucroalcoholera. En términos de Lordon, la “configuración” del deseo consiste en la predeterminación de las estrategias disponibles para alcanzarlo. Estas estrategias predeterminadas se pretenden funcionales a la realización de un deseo mayor que jerarquiza todos los demás deseos reclutados para su concreción (Lordon, 2015:53). En consecuencia, estamos hablando de un mecanismo de entrelazamiento de potencias – es decir, de capacidades de acción – atraídas por una fuente estable de abastecimiento de dinero. Pero ¿qué es el dinero que emana de la fuente ALUR? Responder a esta pregunta implica comenzar a definir las estrategias de configuración del deseo mencionadas muy someramente hasta aquí.

En primer lugar, hace falta decir que el dinero emanante de ALUR a las colonias no es uno, sino dos. Los dineros asignados por ALUR a sus beneficiarios/proveedores de materia prima son *crédito* cuando se presentan bajo la forma de “adelantos” y son *lucro – o ganancia – empresarial* cuando se presentan bajo forma de “libre”¹⁰¹. El sistema de crédito garantiza la transferencia de capital portador de intereses a quienes experimentan una insuficiencia de dinero para realizar el proceso de producción¹⁰². A su vez, el lucro empresarial es el monto de plusvalor resultante de la explotación del trabajo productivo a lo largo de un ciclo de reproducción del capital. ALUR presta dinero a sus beneficiarios y se reserva el derecho de descontarlo con intereses al valor de su producción venidera para,

¹⁰¹ Recapitulando: los “adelantos” (también llamados “mensualidades” por sus receptores) son el dinero asignado mensualmente por ALUR para que los colonos cubran sus gastos de subsistencia y cumplan diversas tareas de mantenimiento en los cañaverales puestos bajo su responsabilidad. La “libre disponibilidad” (conocida simplemente como “la libre”) es el monto de dinero que queda a la disposición de los colonos una vez que ALUR haya descontado el valor de los “adelantos” (intereses incluidos) y demás préstamos realizados durante el año – o en años anteriores – al precio de la materia prima vendida al ingenio.

¹⁰² En realidad, para ser fieles a las categorías marxianas, habría que distinguir el crédito (o sistema de crédito) del capital portador de intereses, aunque uno y otro aparezcan representados por la misma palabra (“crédito”) en el habla corriente. Para Marx, el capital portador de intereses es una forma del modo de producción capitalista y “constituye la base de su sistema de crédito” (Marx, 1983 [1885]: 117). El sistema de crédito permite la transferencia de capital-dinero disponible para “llenar momentos de insuficiencia de capital monetario en los ciclos de reproducción de los capitales industriales individuales” (Germer, 1994: 191).

sólo después, entregarles la suma monetaria restante como lucro neto susceptible de invertirse en la reproducción ampliada del capital. Tanto el crédito como el lucro desempeñan un papel estratégico potencial en lo que tiene que ver con la valorización y la reproducción del capital. Revisemos, muy brevemente, sus dinámicas esenciales.

El crédito, del punto de vista del deudor, es dinero que él no tiene y que está a su disposición a cambio del pago de intereses. Del punto de vista del acreedor, es garantía de apropiación de un valor futuro. Si quien recibe el crédito está al frente del proceso de producción, como era el caso de los colonos del CSA, entonces su función consiste en usarlo para producir plusvalor y, al cabo de cierto período, retornarlo a su punto de partida (ALUR) como interés¹⁰³. Marx hace un comentario aclaratorio sobre cómo el crédito dinamiza, simultáneamente, la producción material y el forzamiento de una subjetivación capitalística: “aún cuando un hombre sin fortuna obtiene crédito como industrial o comerciante, eso se da por la *confianza de que él actuará como capitalista*, se apropiará del trabajo no pagado con el capital prestado. *El crédito le es dado como capitalista en potencial*” (Marx, 1983: 112). A su vez, el lucro garantiza la continuidad de la producción, no sólo porque puede reinvertirse, sino también porque es la suposición de su existencia futura la que justifica la activación de un sistema de crédito. El lucro empresarial impone a su poseedor, caso él esté interesado en seguir ampliándolo en el futuro, la necesidad de invertirlo capitalistamente. La ganancia empresarial extraída del plusvalor generado en el proceso de producción¹⁰⁴ debe invertirse en fuerzas productivas y medios de producción si el capitalista pretende reducir paulatinamente la participación del prestamista en el rateo del lucro bruto final.

Un corto circuito empieza a instalarse en el seno del CSA cuando, ya en la etapa de su conversión en capitalistas potenciales, los beneficiarios de ALUR tienden a afrontar la ganancia empresarial recibida al final de una zafra como *medio de intercambio*, es decir, como dinero común y corriente que no posee valor estratégico – léase: capacidad de comando – desde el punto de la reproducción ampliada del capital. Es que el dinero

¹⁰³ Sobre el ciclo del capital portador de intereses, Marx argumenta que se trata de un movimiento de conservación del valor que conecta al capitalista monetario (ALUR) con el capitalista funcionante (colonos) de cara al objetivo de producir plusvalor. El poseedor del capital no lo da como medio de pago ni lo vende, sino que lo presta “bajo la condición de que, primero, [el dinero] vuelva, luego de determinado plazo, a su punto de partida y, segundo, de que vuelva como capital realizado, habiendo realizado su valor de uso de producir plusvalor” (Marx, 1983 [1885]: 259).

¹⁰⁴ Hay que subrayar que la ganancia o lucro empresarial no es sinónimo de plusvalor, sino que constituye una categoría extraída de él, al igual que los intereses pagados al prestamista (ALUR, en este caso) que capitaliza el proceso de producción. En pocas palabras, lucro (neto) empresarial e intereses se descomponen del plusvalor, constituyendo, según Marx, “nombres diferentes de las diferentes partes del plusvalor de la mercancía, es decir, del trabajo no pagado que esta encierra” (Marx, 1980 [1865]: 42).

transferido por ALUR a los colonos en forma de lucro neto (“libre disponibilidad”) no sólo es deseado desde un principio como medio de intercambio – y, por razones que veremos en breve, se parece insidiosamente a él –, sino que también es instrumentalizado como tal por los ex asalariados de la UTAA, lo que redundará en su re-salarización en las mallas del CSA. Veamos por qué.

5.4 Estabilizar el complejo, hipotecar el futuro

La frecuencia de la distribución de las remesas de crédito y lucro por parte de ALUR a lo largo del año las vuelve muy semejantes a la transferencia de dinero entre el empleador y el empleado en una relación salarial convencional, en la cual el capital del primero es movilizado como medio de intercambio por el segundo en el mercado de bienes de consumo. Como ya tuve la oportunidad de relatar, los beneficiarios del CSA reciben créditos mensuales equiparables a uno o dos salarios mínimos y, al término de la zafra, se tornan caudatarios de un monto de dinero denominado “libre disponibilidad” o simplemente “libre”. Este último es interpretado como una especie de aguinaldo¹⁰⁵. A su vez, los créditos mensuales otorgados por ALUR – llamados “adelantos”, “mensualidades” o “sueldos” por sus receptores – se parecen a un salario, puesto que su recibo acarrea el desempeño de tareas específicas bajo la supervisión técnica de los funcionarios del ingenio.

El lucro neto obtenido gracias a la venta de materia prima, cuya producción resulta de la explotación de la fuerza de trabajo propia y ajena, sería la condición para que los colonos tuvieran la oportunidad de aumentar – reinversión mediante – sus excedentes futuros. Sin embargo, en 2015, los ex asalariados de la UTAA que producían caña en la Colonia Sendic y en Campo Placeres llevaban algunos años sin recibir la “libre” – y muchos difícilmente vuelvan a recibirla algún día. Diversos factores confluyen para determinar la inexistencia de excedentes en las unidades productivas controladas por ex asalariados rurales – pago de intereses, baja productividad de la caña debido a imprevistos climáticos, altos costos de irrigación, flete y arrendamiento, etc. –, pero todos estos factores, sean cuales sean, sólo tienen impacto decisivo sobre la inviabilidad de la acumulación porque los colonos no adhirieron, en la etapa de “desarrollo de las fuerzas productivas” (ahora según la acepción de Suárez), a un régimen de ahorro de fondos y de reinversión capaz de mitigarlos o contrarrestarlos. Estas circunstancias limitan fuertemente

¹⁰⁵ Esa yuxtaposición de registro se hace evidente al final de cada año, cuando, al no recibir el “libre” debido a problemas asociados a la baja productividad de la caña, o en razón de los voluminosos descuentos realizados por ALUR para saldar los créditos pendientes, los colonos se movilizan como si fueran asalariados de la compañía con la finalidad de reivindicar dinero para “pasar las fiestas”.

la autonomía de la fase agrícola, convirtiendo sus unidades productivas – especialmente cuando son conducidas por ex asalariados – en lugares de trabajo completamente orientados a atender las necesidades de la industria. Allí, tanto los cortadores de caña como los colonos comparten, en los hechos, la condición de asalariados, pero los primeros son zafrales y los segundos trabajan todo el año. La cuota de deuda cobrada por ALUR elimina los excedentes de los colonos, limitando sus fuentes de ingreso a los “adelantos” mensuales, o sea, a un monto de crédito que ya no genera lucro neto para sus receptores, aún cuando revierta en plusvalor íntegramente apropiado por la industria.

“En realidad – me explicaba Pachu, un beneficiario de la colonia Sendic –, el único *dinero-dinero*, que vos podés decir, ‘este dinero es el trabajo del mes’, en el caso mío y de mi hermano, son 27.000 pesos por mes. De ahí tenemos que pagar los créditos que tengamos [se refiere a créditos de consumo en el banco y en el comercio] y vivir”. Pachu no tiene acceso a otra fuente de ingresos más allá de los préstamos mensuales de ALUR. A esto se reduce su “dinero-dinero”, es decir, los recursos a los cuales él puede darle el uso que considere. El dinero “dinero-dinero” de Pachu es básicamente un medio de intercambio que le da acceso a una cantidad estable de servicios y mercancías todos los meses, pero que no lo pone en condiciones de transformar las circunstancias que fijan y estabilizan su modo de vida actual. El “dinero-dinero” sólo mantiene todo rigurosamente como está, lo que no es necesariamente una tragedia, pero tampoco genera entusiasmo. Apropiado como “salario”, el crédito otorgado por ALUR garantiza el enrolamiento de los nuevos colonos del CSA. Sin embargo, al generar deuda, este dinero conduce a la paulatina eliminación de las “libres” o, por lo menos, a su drástica reducción. Dado que las “libres” también suelen ser agenciadas como medio de intercambio por los colonos – es decir, consumidas “improductivamente” como “dinero-dinero” – su potencialidad capitalista termina neutralizada. En consecuencia, las unidades productivas administradas por ex asalariados rurales experimentan serias dificultades para diversificar la producción y terminan ampliamente acomplejadas por ALUR, o sea, monopolizadas por la industria en lo relativo a sus objetivos actuales y futuros.

El monopolio del futuro constituye, para Maurizio Lazzarato (2017), un efecto de poder crucial del crédito. La deuda, inherente a cualquier agenciamiento financiero de capital, es un dispositivo de cierre y anticipación del tiempo, justamente porque hipoteca su indeterminación y, de esta forma, lo normaliza, sustrayéndole toda la acción creadora (Lazzarato, 2017:82). Este efecto de poder es fundamental en una intervención desarrollista como la existente en Bella Unión, ya que en ella la movilización del deseo

ajeno es tan importante cuanto su alineamiento de acuerdo con lo que Lordon denomina, sugerentemente, “deseo amo”: un deseo que no puede existir aislado, persiguiendo sus objetos con medios propios, sino solamente “involucrado en relaciones a las que quiere dar la forma de la subordinación” (Lordon, 2015:64). Al subordinar las relaciones sociales en el flujo de su propio proceso, el deseo amo tiende a precarizar la producción de los posibles, entendida, esta última, como una ruptura de (des)equilibrios existentes a través de la inclusión de los sujetos en nuevas líneas de devenir. Al respecto, Migue reflexionaba lo siguiente:

Después que te endeudás una vez, no... pero lo bueno es que tenemos un pedazo de tierra [...] Veníamos peleando por otras cosas, no queríamos eso, ¿no? En la Colonia [Sendic] se creó mucha expectativa. En un principio todos pensaban que iba a ser el lugar de lucha, de darle al trabajador todas las condiciones necesarias, de demostrarle que se podía darle las condiciones. Pero resulta que después, con el tiempo, se fue dando todo al revés. La Colonia Sendic es vista como un lugar de explotación para mucha gente [...] Yo creo que todo eso se hace para que la gente pierda el entusiasmo de la pelea por la tierra.

Si bien es verdad que los colonos como Migue dispondrán de estabilidad económica por lo menos mientras dure el gobierno frenteamplista, también es cierto que otros sueños, otras apuestas colectivas que ellos aprendieron a enunciar en el ambiente sindical encontraron en la realización de la voluntad de salario una condición de imposibilidad: tener un pedazo de tierra no era sólo sinónimo de deuda inminente para el ex asalariado que produce caña en el CSA, también significaba aprender a convivir con la frustración de expectativas y la pérdida del entusiasmo político.

La integración de las personas en el territorio monopolizado por ALUR dependía, en primer lugar, de la circunscripción y la captura de su voluntad de salario y tierra, expresa en criterios muy específicos – rendimiento constante, aflojamiento de la jerarquía patronal, ampliación futura de la capacidad de consumo. En segundo lugar, el enrolamiento de los nuevos colonos asentaba en la configuración de esa voluntad de salario y tierra de acuerdo con un sistema de crédito capaz de realizarla en el exacto momento en que también endeudaba a quien la nutría: “nos daban todo – evaluaba Migue –, nos daban la mensualidad... nos estaban endeudando cada vez más”. De la primera etapa de la captura, realizada sobre quien aún no pertenecía al complejo, dependía la conversión de las fuerzas productivas potenciales en fuerzas productivas propiamente dichas, o sea, en capacidades de actuar conectadas con los medios de producción bajo la égida del “deseo amo”. La segunda etapa de la captura estaba parcialmente determinada por la primera: por un lado, las personas realizaban su relación con el crédito y el lucro principalmente en el registro de una relación con el medio de intercambio (dinero común y corriente, *dinero-dinero*); por

otro lado, la efectivización de esa relación redundaba en un empoderamiento del deseo: el deseo en nombre del cual todos los demás deseos son reconocidos, jerarquizados, organizados y, en última instancia, postergados.

En convergencia con la crítica marxiana de la economía política, hay que reconocer en el capital un elemento que no sólo disuelve lazos sociales, sino que también constituye una condición de su afianzamiento. Es en este sentido que el movimiento del capital distribuye funciones económicas, las vincula entre sí y las enraíza en formas apropiadas de subjetivación. Es importante distinguir el capital, en sus distintas formas, del dinero como medio de intercambio. Mientras este último es susceptible de múltiples usos y valoraciones de orden moral, el capital, para existir, exige la fijación de posiciones de sujeto que, de no sedimentarse, interrumpen el proceso de acumulación y lo diluyen. Si alguien recibe capital y lo usa como “dinero-dinero” – o deja de ejecutar las funciones productivas que asegurarían su restitución al prestamista con intereses – el proceso de acumulación queda comprometido en los dos polos del sistema de crédito: el donante de capital pierde la oportunidad de valorarlo mientras que el receptor hace colapsar su uso productivo potencial. Esto fue lo que pasó entre muchos ex asalariados rurales que administraban unidades productivas subordinadas a ALUR. Allí, el consumo improductivo de dinero y el relajamiento del trabajo productivo se superpusieron a la disciplina capitalista preconizada por la industria, evidenciando el choque entre dos regímenes de deseo contradictorios que confluyeron en el CSA y debieron coexistir tensamente en su ámbito.

La tensión entre dos regímenes antagónicos de movilización de los flujos de crédito asegurados por el núcleo industrial del complejo ha dado lugar a diversas evaluaciones morales sobre los sentidos del dinero. Como vimos, uno de los principales ideólogos del CSA solía atribuir la conducta financiera “inadecuada” de los ex asalariados de la UTAA a sus ganas inmediatistas de ser – o aparentar ser – como los grandes productores cañeros de la zona, que trabajan poco, ganan mucho y ostentan dichas ganancias en bienes de consumo suntuario. Por otro lado, los integrantes de las colonias agrícolas cuestionaban la disciplina productiva exigida por ALUR argumentando que “trabajar bien” y “contentos” implicaba, antes que nada, la satisfacción de algunas expectativas primordiales asociadas al consumo de ciertas mercancías y al bienestar de sus familias. Encontramos aquí una expresión de lo que, desde una sociología moral del dinero, Ariel Wilkis (2015) denominaría “litigios morales”. En estos litigios el dinero consiste en una “pieza” crucial que referencia la producción de “un espacio de jerarquías morales monetariamente fundado” (Wilkis, 2015: 574). Eventualmente, en estas jerarquías, los receptores de dinero

pueden ser incluidos en una “posición subalterna frente a las maneras dominantes de definir virtudes como el prestigio, el esfuerzo, el mérito o la justicia” (ibid.: 567). En efecto, la disputa sobre el manejo de los créditos otorgados por ALUR a sus proveedores de materia prima hizo multiplicar “puntos de vista” heterogéneos y conflictivos. Sin embargo, el énfasis de mi argumento no responde prioritariamente a una problemática de las moralidades, sino más bien a una analítica de las desviaciones funcionales que sufren determinados flujos de capital – crédito y lucro – cuando son agenciados en una complejidad deseante que se muestra parcialmente ajena a su realización capitalista.

En mi argumento, el análisis de la función y la disfunción de un vector capitalista posee primacía sobre el estudio de las evaluaciones morales conflictuantes y las posiciones de dominación y subalternidad que ellas reflejan, definen y reiteran. Esto significa que, en primer lugar, ha sido necesario identificar la especificidad de las complejidades deseantes en pugna en el interior del complejo y, luego, analizar su incidencia en la funcionalización del “dinero”. Como vimos, la complejidad deseante sostenida por ALUR (deseo amo) condicionaba estratégicamente el tipo de recurso financiero que podría contemplar la proyección del deseo de sus enrolados. El “dinero” proveído por la empresa operaba como capital en el interior de un sistema de financiamiento. Siendo así, su uso, sea cual fuere, originaría consecuencias que no podrían desprenderse de la imposición de un “punto de vista”, sino más bien de la realización de unos efectos de poder que ya estaban presupuestos en la lógica misma del sistema de crédito. De hecho, el uso del crédito de capital como dinero común y corriente redundó en una situación de endeudamiento crónico que, sin ser ambicionada ni por la gerencia de ALUR ni por los nuevos productores incorporados en el CSA, de todos modos constituía un resultado del sistema de crédito. Dicho resultado independía de valoraciones morales, aunque su causante hayan sido consideraciones específicas sobre a qué prioridades debería responder el uso del “dinero”.

Las consecuencias de *hacer dinero del capital* son automáticas e innegociables *a priori* – aunque no necesariamente *a posteriori* – porque derivan de procedimientos as-significantes, es decir, de una distribución procedimental de funciones que actúa directamente sobre lo real, produciendo lo que Lazzarato llama “sentidos sin significados, sentidos operacionales” (Lazzarato, 2014: 38). De este modo, siempre y cuando al fin de cada ciclo productivo los colonos del CSA no reenviaran a ALUR un monto de dinero correspondiente a las condiciones del crédito asignado por la empresa, pasarían a estar inmediatamente endeudados, de modo que sus rendimientos podrían computarse como una parte de aquello que, en los balances anuales de la compañía, se denomina “créditos

comerciales y otras cuentas a cobrar”. En dichas circunstancias, los pequeños productores endeudados terminaban expuestos a un efecto de poder que no estaba moralmente mediado o estratégicamente planeado – la gerencia de ALUR preferiría no tener que lidiar con el endeudamiento crónico, potencialmente impagable, de sus proveedores de materia prima. Cuando el crédito de capital no se usa como debería usarse¹⁰⁶, tiene lugar un endeudamiento automático que engendra impactos subjetivos específicos tendientes a determinar el propio campo de acción del sujeto endeudado, obligándolo a revalorarse a sí mismo, sus aptitudes y necesidades, ya sea en pos de adaptarse a las condiciones del crédito, ya sea con el objetivo de explicar – para sí mismo y para los demás – las razones de su fracaso objetivo en lo concerniente al manejo de un tipo muy específico de dinero. En otras palabras, la deuda acarrea un reexamen de las propias aspiraciones personales que, en el caso del CSA, asumió la forma de un acomplejamiento del deseo.

5.5 Acomplejar el deseo

Cuando Pachu, un beneficiario de la Colonia Sendic, me contó la breve anécdota que sirve de epígrafe a este capítulo, estaba haciendo referencia a un drama común entre quienes acceden a la tierra en Bella Unión; un drama que termina siendo compartido con todos aquellos que tratan de colaborar con los beneficiarios del CSA para transformar las colonias agrícolas en algo más que una mera extensión del deseo amo proyectado por el núcleo industrial del complejo. Estudiantes y profesionales de diversas áreas se propusieron trazar, en diálogo con sindicalistas y colonos, innumerables planes de colectivización del proceso laboral y diversificación de las apuestas productivas. En todas las grandes experiencias de colonización realizadas en el extremo norte uruguayo en los últimos ocho años, se intentó poner en práctica la diversificación agrícola, de manera que sus beneficiarios no dependieran únicamente de los recursos monetarios de la industria para subsistir y definir los sentidos de la tenencia y el uso de la tierra. A través de la anécdota del psicólogo, Pachu estaba recordando el extraño fracaso de prácticamente todas esas iniciativas de reorganización de la producción que ambicionaban trascender el monocultivo cañero o, por lo menos, compatibilizarlo con alternativas agrícolas no hegemónicas en la zona de Bella Unión. Según mi interlocutor, “venía gente para ayudar, algunos estudiantes y todo eso, y nosotros decíamos: ‘vamos a plantar tal cosa ahí’. Los

¹⁰⁶ La forma como el crédito *debería usarse* no es resultado del punto de vista normativo de los funcionarios de ALUR, sino que se deduce del mismo sistema que vuelve el capital disponible en tanto crédito. Siendo así, aún cuando la gerencia de ALUR no logre imponer a los colonos sus estándares de uso del dinero y realización del trabajo productivo, la norma immanente al sistema de crédito no dejará de producir efectos concretos sobre quienes participan en él.

tipos se iban de acá convencidos, decían: ‘tá, junté a toda la gente, llegamos a un acuerdo, vamos a hacer algo’. Venían a los diez días y aquello ya estaba borrado”.

La dificultad de sustraerse a las rutinas de reproducción de la economía azucarera – aun cuando la voluntad de hacerlo existía y se manifestaba explícitamente – bien podría terminar mandando a un psicólogo al consultorio del psiquiatra. Sea como sea, lo cierto es que arrancaba lágrimas de los ojos de más de uno de mis interlocutores. Entre ellos Pachu, para quien los “tremendos esfuerzos” emprendidos en el afán de “meter a la gente en la tierra” culminaron en un éxito paradójal, que a veces parecía un fracaso: “todos los proyectos que ha hecho UTAA han quedado en... han fracasado. Entre comillas fracaso [...] somos privilegiados los que estamos en las colonias, porque nosotros estuvimos del otro lado y se vive mejor estando en las colonias. Es indiscutible”. En ocasiones, estar en las colonias y vivir mejor era también entristecerse, porque en las unidades productivas subordinadas al CSA la satisfacción económica personal emergía indisociable de la renuncia parcial o total, provisional o definitiva, de otros proyectos colectivos. No se trataba de una renuncia en el nivel de la conciencia, sino de una pérdida objetiva de los medios y las condiciones para alcanzarlos, inclusive cuando estos medios y estas condiciones parecían estar disponibles y al alcance de la mano, como un espejismo.

En respuesta a la prédica sindical a favor de la diversificación productiva y de la soberanía alimentaria, la mismísima ALUR aceptó invertir algún dinero en la construcción de invernaderos y en la instalación de quintas a cielo abierto para el cultivo de hortalizas. Sin embargo, como la empresa jamás se propuso ser un organismo de desarrollo rural, tales inversiones fueron fugaces y bastante periféricas si las comparamos con el cultivo de la caña de azúcar. Un equipo de técnicos cubanos enviado a Uruguay con la misión de divulgar conocimientos y prácticas agroecológicas entre pequeños productores rurales del interior del país llegó a acompañar con ahínco ciertos experimentos de diversificación realizados en las nuevas colonias agrícolas de Bella Unión. Estos técnicos altamente especializados desarrollaron en Cuba la habilidad de elaborar e implementar proyectos agrícolas eficientes con financiación limitada, aprovechando al máximo los recursos naturales disponibles localmente y recurriendo, de vez en cuando, a fondos internacionales para adquirir medios básicos de producción – semillas, motores de irrigación, material de construcción. Tales habilidades, todas ellas esenciales para que el gobierno cubano pudiese enfrentar las privaciones del “período especial”, inmediatamente posterior a la caída de la Unión Soviética, convergieron de manera inusitada con el objetivo de ALUR de apoyar la diversificación productiva sin comprometer grandes fondos en su implementación. Los

técnicos cubanos dieron lo mejor de sí para introducir la producción de alimentos en las colonias del CSA: captaron algunos recursos en el exterior, trabajaron constantemente en la capacitación de los beneficiarios, contaron con el financiamiento de ALUR para construir invernaderos y preparar huertas. Sin embargo, los resultados de tanto esfuerzo fueron bastante parciales.

“Primero – me contaba uno de los cubanos – [obtuvimos fondos para] el establecimiento de huertas de pequeños colonos. Error, porque no eran colonos, eran pequeños productores de caña”. Vale la pena detenernos brevemente sobre esta afirmación. El técnico estaba refiriéndose a los integrantes de Campo Placeres, por eso observaba que “no eran colonos”. Formalmente, quien produce caña en esas tierras es subarrendatario de ALUR y no posee el estatuto de “colono” porque no es beneficiario del Instituto Nacional de Colonización. Sin embargo, cuando las tierras pertenecen al INC, como ocurre en la Colonia Sendic y en Pay Paso, la situación de los productores frente a la industria azucarera no difiere radicalmente de aquella experimentada por los titulares de Placeres, salvo por el hecho de que pagan arrendamientos más bajos y ejercen la tenencia colectiva de la tierra. “Colono” es una categoría que define la relación jurídica de los sujetos con la tierra, pero que dice muy poco sobre su relación económica con el complejo agroindustrial. Es esta última relación la que define ampliamente el tipo de uso del suelo y de organización del trabajo predominante en cada unidad productiva, independientemente del estatuto jurídico de quien la administra. Si en primer lugar la función de los productores – ya sean formalmente colonos o no – es proveer materia prima para ALUR, entonces todos los demás esfuerzos productivos en los cuales se involucren estarán determinados por esa condición primaria. La tierra monopolizada en el CSA está pre-destinada al cultivo de la caña, inclusive antes de volverse “colonia”. Recordemos la aseveración de Etcheverriborda, mencionada al inicio del capítulo: “*la caña de azúcar colonizó la Colonia*”. Los ritmos y formas de trabajo impuestos por la caña y los quehaceres administrativos del emprendimiento cañero colonizaron el acceso a la tierra, dificultando, en consecuencia, la tarea de convertirlo en mediador de otros proyectos productivos. Siendo así, podríamos aprovechar la observación del técnico cubano para hacer la siguiente complementación: los destinatarios de los proyectos hortícolas patrocinados por ALUR “no eran colonos” ni en Placeres ni en otros emprendimientos. Ellos eran – o estaban –, así como la tierra recibida tanto por intermedio de ALUR como del INC, *colonizados*. Es en este escenario que conviene leer una segunda colocación formulada por mi interlocutor

caribeño: “la gente pierde el entusiasmo, se les echa a perder la huerta¹⁰⁷. A veces uno llega y ‘¡ah! están trabajando en la huerta y ¡arriba Uruguay!’”. Entonces los apoyamos y eso... pero después tienen alguna discusión y no hacen más nada”.

La caña era lo primordial. Los desacuerdos suscitados por el intrincado y exhaustivo proceso de mantenimiento y administración de los cañaverales comprometían la cohesión grupal necesaria para el éxito de otros cultivos. Sólo la sobrevivencia de la caña estaba garantizada en el CSA, porque el flujo de financiamiento que la sostenía como alternativa laboral viable era constante y movilizador. Bajo la sombra de la opulenta soberanía de la caña de azúcar, el intento de abrir espacio a otros objetos de deseo implicaba no sólo esfuerzos físicos redoblados, sino también una cohesión colectiva que la propia caña desgastaba como consecuencia de las tensiones, preocupaciones y desavenencias inherentes a las tareas de cuidarla colectivamente y de tornarla rentable para la industria¹⁰⁸. Redoblar esfuerzos en condiciones tan desfavorables sólo podía sonar poco interesante para quien identificó en el acceso a la tierra el inicio de una vida mejor y, tal vez, un poco más tranquila.

El reconocimiento del propio desinterés en otras modalidades de trabajo y líneas productivas revestía un tono de lamento auto-recriminatorio entre los ex asalariados devenidos productores cañeros en los territorios del CSA: “somos unos egoístas, por eso fracasamos”; “las relaciones humanas son muy jodidas, no logramos entendernos entre nosotros”; “los que fallamos somos nosotros”; “nosotros acá somos una sociedad individualista por el tema del trabajo que tenemos. Es zafral. Cada uno hace lo suyo”; “la gente prefiere la plata a la solidaridad”. El deseo estaba acomplejado. Cualquier voluntad de volverse algo distinto a lo que se “era” terminaba acechada por el diagnóstico fatal de una condición individual o colectiva incontrolable; condición que se daba a conocer en forma aparentemente incontestable en las rutinas diarias del CSA: de estas rutinas emergía una verdad trascendente sobre los individuos y la sociedad. Las personas sentían que se habían vuelto definitivamente aquello que necesitaban ser para funcionar de acuerdo con el complejo. El complejo ofrecía la medida de sus posibilidades e imposibilidades: “no estamos preparados para trabajar juntos, para ser cooperativistas”; “no nos sale la diversificación, es un tema de cabeza”. El complejo había prescindido de ciertas potencialidades individuales y colectivas para seguir existiendo. Él se organizó alrededor

¹⁰⁷ Se refiere a las huertas destinadas a la diversificación productiva, o sea, a la práctica de otros cultivos además de la caña de azúcar.

¹⁰⁸ En el capítulo siguiente tendré la oportunidad de profundizar en los conflictos intra-grupo inherentes a la producción cañera en el CSA.

de la captura y el estímulo de algunas voluntades y, simultáneamente, precarizó otras, a punto de hacerlas aparecer, en la práctica y en la conciencia, como irrealizables. El CSA devino un espacio en el cual no sólo se reiteraban las vocaciones que históricamente corroboraron el desarrollo de la industria azucarera bellaunionense, sino que también se elevaban estas mismas vocaciones a la condición de imagen definitiva del poder ser de una sociedad y de sus miembros. Si hubo durante el “modo popular”, aunque sea en un breve ínterin, múltiples posibilidades, diversas hipótesis sobre devenir colectivo, esbozos de cambios de conducta realizados por los cuerpos y retenidos en la conciencia bajo la forma de posibles, entonces después del complejo esas intensidades tendieron a ser dirimidas en los mecanismos apropiados: no se podía ser mucho más de lo que se era en determinado diagrama institucional y productivo.

Las condiciones de realización del complejo se convirtieron en las condiciones de realización de los sujetos. Problemas inmanentes al complejo se volvieron problemas psicológicos, sociológicos o antropológicos, es decir, atributos inherentes a cierto tipo de sociedad o de ser humano: algo que dice respecto a la trascendencia de los valores de la socialización y la cultura – y no a la inmanencia circunstancial de un equipamiento colectivo de deseo. Aquí, no estamos ante falsas conciencias. En sintonía con el marxismo, sería más correcto hablar de la conciencia verdadera de una realidad parcial, determinada, acomplexada. Cuando aparecen psicologías, sociologías y antropologías – ya sean “espontáneas” o no – tenemos la posibilidad de tomar contacto con un discurso sobre el orden y su estabilización. Plebeyas o académicas, las sociologías, antropologías y psicologías son, por lo general, ciencias del complejo: epistemes de una *epithume*, para jugar con un término que Lordon (2015) convierte en sinónimo de “régimen de deseo”. Se trata de formas de conciencia de la dimensión ordenada de la existencia social humana. Gracias a ellas, es posible enunciar los presupuestos necesarios al direccionamiento actual de la vida colectiva. Pero de vez en cuando, dichas formas de conciencia tambalean en el influjo de una realidad que se pierde de sí misma, distorsionada por algún índice visible de su inevitable inconsistencia. Había quienes aprovechaban esos momentos para lanzarse en nuevos esfuerzos de lo posible, poniendo entre paréntesis la inexorabilidad de su acomplexamiento.

Entre la captura del deseo de salario y la tentativa de traducirlo en deseo de capital, transcurría el devenir de las colonias agrícolas y se definían los éxitos y fracasos de quienes las integraban. Era también a lo largo de este proceso que los beneficiarios del CSA problematizaban sus experiencias de acceso a la tierra y tensionaban el régimen de

deseo sustentado por el complejo. En el próximo capítulo veremos bajo qué condiciones los ex asalariados que impulsaban el proceso productivo en la fase agrícola del CSA podían llegar a extrañarse de sus lógicas de funcionamiento, alejándose conceptualmente de ellas justamente cuando intentaban instrumentalizarlas como un marco regulador de sus vidas cotidianas.

Edipo-CSA

Podemos leer la próxima cita sustituyendo “Edipo” por “CSA”, o mejor, yuxtaponiendo ambas palabras: “el campo social en que cada uno actúa y padece como agente colectivo de enunciación, agente de producción y de anti-producción, se asienta sobre Edipo, en el cual cada uno se encuentra ahora preso en su rincón, cortado por la línea que lo divide en sujeto de enunciado y sujeto de enunciación. El sujeto de enunciado es la persona social, y el sujeto de enunciación es la persona privada” (Deleuze y Guattari, 2010 [1972]: 352). Edipo-CSA retiene en su triángulo a personas doblemente atomizadas: primero por el deseo de salario y tierra que el INC y ALUR – “el policía bueno y el policía malo”, en las palabras espirituosas de un interlocutor; “mamá-tierra” y “papá-capital”, si quisiéramos seguir fieles a la imagen del complejo – colonizan con crédito y caña. Pero eso no sería posible si el sujeto-individual-a-colonizar no hubiera sido asumido como persona social impotente, reducida a la expresión particular de un problema colectivo que sólo el Estado puede reconocer, enunciar y resolver. Persona social convertida en expresión metonímica de las carencias de su clase; identificada esencialmente a partir del déficit, de la “lumpenización”, de todos aquellos predicados que justifican y explican su perversidad y, por ende, su imposibilidad de desear por cuenta propia y actuar sin complejo, movida por ese mismo deseo. Sentencia de un cuadro técnico del CSA: “es muy fácil hablar de historicidad, de tomar las riendas de la historia, pero cuando vos tenés lumpenizado a todo ese sector, es muy difícil”. En Bella Unión, el desarrollo tomó la forma de un complejo. El éxito económico del CSA, es decir, su éxito en tanto política progresista de combate a la pobreza y promoción del trabajo, presupone y realiza la debilidad política de sus beneficiarios: toma por ellos las riendas de la historia ya que ellos supuestamente no podrían hacerlo por sí mismos.

Capítulo 6

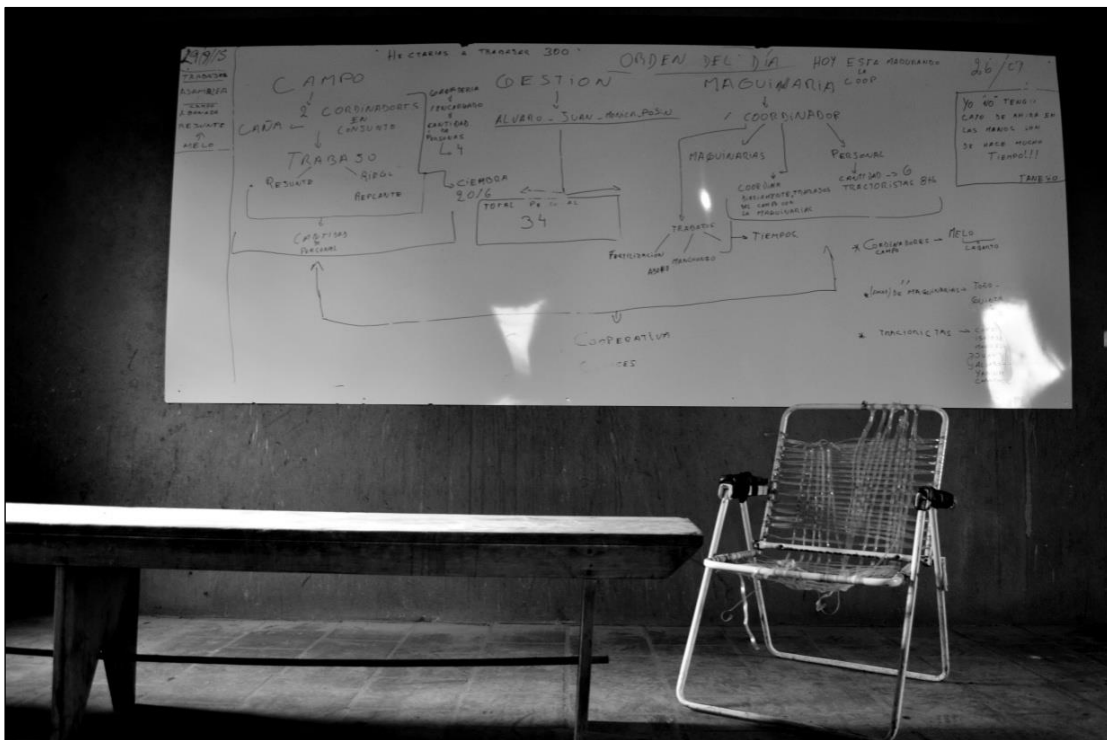
Vivir el complejo. Delirarlo.

¿Ahora bien, qué es la riqueza despojada de su estrecha forma burguesa, sino la universalidad, impulsada por el intercambio universal de las necesidades, las capacidades, los goces, las fuerzas productivas, etc., de los individuos? ¿Qué es sino [...] el desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, sin medirlo por una pauta preestablecida, y en que el hombre no se reproducirá como algo unilateral, sino como una totalidad; en que no tratará de seguir siendo lo que ya es o ha sido, sino que se incorporará al movimiento absoluto del devenir?

Karl Marx, Grundrisse

Si el control de los caminos / te pregunta adónde vas/le dirás que a tu destino. / Y al decirte -¿pero cuál?, /no sé, pero lo persigo / sé que queda más allá.

Raúl Sendic, poema inédito



6.1 El peligroso deseo del otro

En el año 2013, los territorios del CSA se extendieron hasta la localidad de Pay Paso, situada en los márgenes del río Cuareim, distante unos 35 kilómetros de Bella Unión. En 2015, había cerca de 300 hectáreas de caña plantadas en Pay Paso, más precisamente en la colonia Eliseo Salvador Porta, bajo responsabilidad de la Cooperativa Helios Sarthou¹⁰⁹.

¹⁰⁹ La Cooperativa Helios Sarthou es un emprendimiento integrado por 35 trabajadores procedentes de la Comisión de Tierras de la UTAA. Mis interlocutores se referían a su emprendimiento como "la cooperativa"

Todos los días de la semana, alrededor de las cinco y media de la mañana, pasaba cerca de la casa donde vivía, a pocas cuadras de la Ruta Nacional Número 3, el ómnibus que transportaba a los cooperativistas de “la Helios Sarthou” a su lugar de trabajo. Algunas semanas después de haberme mudado a Bella Unión, en junio de 2015, conocí a algunos de estos cooperativistas en las reuniones del sindicato. Cuando ellos se enteraron de mi interés en investigar las rutinas de la producción cañera, me invitaron a acompañarlos hasta Pay Paso en el ómnibus matinal siempre que deseara. Dijeron que bastaba esperar al costado de la ruta en el horario indicado y hacer una señal con las manos cuando avistara el ómnibus de la cooperativa. No sería difícil identificarlo: un problema en la suspensión dejaba su carrocería ligeramente inclinada hacia la izquierda, diferenciándolo de los demás vehículos que transitaban por la carretera. Siempre atento a estas instrucciones, hice varias veces el viaje de casi una hora entre mi lugar de residencia y la sede – o “casco” – de Pay Paso, instalada en los alojamientos de lo que algún día fue una estancia ganadera.

Gran parte de la zafra cañera transcurre durante los meses de invierno, razón por la cual la espera del ómnibus inclinado, con la luna aún en el cielo, solía ser incómoda. Un frío húmedo congelaba el paisaje. A las cinco de la mañana, nada podía mitigarlo. Ni el mate, que se enfriaba vertiginosamente a partir del primer sorbo. En estas circunstancias, la visión del ómnibus de la cooperativa era un alivio. Yo subía los tres escalones metálicos, saludaba a Dylan, el chofer, y enseguida daba un buen día colectivo a los demás pasajeros. Rápidamente, alguien me ofrecía asiento a su lado – generalmente Camila – y el viaje continuaba lento, primero por la Ruta 3, después por caminos de tierra, entre plantaciones de caña y campos abandonados. La reminiscencia del sueño en los cuerpos imponía un ritmo lento y entrecortado a los diálogos. Breves comentarios sobre las tareas previstas para el día de trabajo se intercalaban con largos minutos de un apacible silencio, inmerso en el aire tibio del colectivo. Más allá de las ventanas empañadas por la humedad, sólo la oscuridad persistente de las mañanas de invierno.

Dylan solía estacionar el ómnibus a unos cincuenta metros del alojamiento: distancia suficiente para que el frío volviera a los pies y las manos hasta ser nuevamente contenido por el calor de la estufa a leña, ubicada al fondo de una sala amplia donde el amargo y las galletitas antecedían el inicio de los trabajos. Los cooperativistas que vivían en el “casco” de Pay Paso solían esperar a los compañeros que venían de Bella Unión con

y denominaban "Pay Paso" su lugar de trabajo, es decir, la Colonia Eliseo Salvador Porta. A veces, "Pay Paso" también aparecía como sinónimo de "Cooperativa Helios Sarthou". En este capítulo, el nombre "Pay Paso" es usado para hacer referencia tanto a la cooperativa, en su dimensión institucional, como al espacio físico donde se desarrollan las actividades productivas del emprendimiento.

el fuego prendido y el agua caliente. Pero no todos los recién llegados del viaje se sentaban junto a la estufa para conversar. Había quienes se dirigían taciturnos a otras dependencias del alojamiento. En 2015, los cooperativistas de “la Helios Sarthou” estaban molestos entre sí. Muchos desacuerdos polarizaban el grupo y no era difícil saber sus razones. Bastaba recorrer las plantaciones, a veces en compañía de quienes se reunían en la sala de la estufa, a veces junto a los que preferían confraternizar en otros espacios, para oír los relatos de su insatisfacción recíproca. Tuve la suerte de conocer a algunos integrantes de la cooperativa antes que los conflictos del 2015 se exacerbaran y los dividieran en por lo menos tres grupos antagónicos. Esta situación me permitió moverme entre ellos con cierta desenvoltura y oír sus opiniones contrapuestas. También fui autorizado a participar en las asambleas periódicas de “la Helios Sarthou”, donde se volvían dramáticamente visibles los puntos candentes de la conflictividad interna al emprendimiento.

Mis incursiones a Pay Paso comenzaban tranquilas, al calor del ómnibus y del fuego, y terminaban casi invariablemente en vértigo y perplejidad. En algunos de los viajes de vuelta a casa, elegía sentarme solo. Con la cabeza recostada contra el vidrio trepidante de la ventana, observando un paisaje claro – ñandúes, pájaros muy veloces, polvareda subiendo de las ruedas, arroyos al fondo –, dejaba que el sobresalto causado por los raudales de sospechas, lamentos e impases se fuese diluyendo poco a poco. De vuelta en casa, ya apaciguado, intentaba escribir sobre lo que había escuchado durante la mañana. Mientras invertía mi tiempo en sistematizar los puntos de vista de los cooperativistas de Pay Paso, esperando extraer de ellos alguna regularidad reveladora, mis interlocutores también hacían sus propios esquemas en las horas libres. Tal vez no estuviesen buscando regularidades – yo también abandonaré esa búsqueda rápidamente –, pero seguramente intentaban reconocer las divergencias internas de su emprendimiento con la intención de por lo menos mitigarlas a través de la proposición de nuevas formas – siempre inestables – de convivencia y organización colectiva.

Cierta tarde, los cooperativistas de Pay Paso recibieron una visita de los técnicos de ALUR y del INC. Estos últimos habían sido contactados por algunos integrantes del emprendimiento para mediar conflictos asociados a la distribución y el cumplimiento de las actividades laborales. Cuando llegaron los técnicos, el enorme pizarrón que dominaba la sala de la estufa ostentaba un intrincado esquema de organización del trabajo. Según los cooperativistas, tal esquema intentaba reconocer las diversas habilidades laborales existentes entre ellos y contemplarlas con tareas que pudieran “aprovechar mejor” la mano de obra disponible. El “organigrama” estaba dividido en tres grandes grupos de actividades

– “campo”, “gestión” y “maquinaria” – que se subdividían en diversas atribuciones específicas, algunas de orden gerencial y otras más asociadas al trabajo braçal. La totalidad de los miembros de “la Helios Sarthou” debería distribuirse entre los distintos cuadrantes del diagrama, según sus habilidades e intereses personales. El reparto de las tareas podría rotar periódicamente, con excepción de los cargos de “gestión”, que sólo se renovaban mediante elecciones bianuales. En la esquina derecha del pizarrón, alguien escribió una reiteración de las propias capacidades individuales que estaba claramente destinada a los visitantes de aquella tarde: “Yo no tengo callos de ahora en las manos. ¡¡¡Son de hace mucho tiempo!!!”. Era necesario dejar en claro que el negocio se encontraba en buenas manos y podía caminar con las propias piernas, aunque en los hechos nadie estaba totalmente seguro al respecto.

Antes de la llegada de los funcionarios de ALUR y del INC, los miembros de la cooperativa realizaron una larga reunión gracias a la cual fue posible formular, a pesar de todos los conflictos existentes, un plan consensuado de trabajo y una estructura de distribución de las tareas productivas que, más tarde, sería deshecha y rehecha sucesivas veces. De ese día en adelante, pasé a preguntar menos por lo que mis interlocutores opinaban unos de otros que por el propósito mismo de esta constante proliferación de opiniones reguladoras sobre la conducta ajena. Problemas y desacuerdos surgían todo el tiempo en “la Helios Sarthou”: las posiciones fluctuaban y se cristalizaban de forma pasajera en arreglos contradictorios; pesos y medidas variables – y hasta contrapuestos – eran adoptados para juzgar diferenciadamente a los afectos y a los desafectos; a los cooperativistas y a los “peludos”. La cooperativa estaba en efervescencia: voces disonantes se contraponían y se superponían en busca de los criterios más adecuados para alcanzar un mínimo de autocontrol y estabilidad que garantizara a la unidad productiva cierta perspectiva de futuro. Los cooperativistas de Pay Paso estaban interesados en controlar unos a otros, o mejor, en controlar *en los* otros determinados tipos de conducta cuyas consecuencias eran leídas como potencialmente disgregadoras.

En los meses en que estuve acompañando la rutina de Pay Paso tenía la sensación de haber entrado a una especie de burbuja autorreferencial. En la mitad de su segundo año de funcionamiento, la cooperativa Helios Sarthou se encontraba inmersa en serias discusiones sobre su estructura organizativa y su viabilidad futura en el entramado productivo del CSA. Había un estado de discusión permanente que ponía los dramas de Pay Paso en el centro de las preocupaciones cotidianas de todos los cooperativistas. A veces, para esquivar las absorbentes problemáticas de la cooperativa y ampliar el proceso

de interlocución, me proponía visitar a los socios del emprendimiento en sus casas. Sin embargo, incluso cuando estaban lejos del lugar de trabajo, les resultaba difícil eludir los dilemas de Pay Paso. Todo el tiempo llegaban llamadas telefónicas y mensajes SMS de otros cooperativistas en busca de informaciones sobre alguna reunión que habían perdido o, simplemente, con ganas de externalizar su desaprobación moral hacia las actitudes de ciertos compañeros de trabajo. La cooperativa era el aire que se respiraba en aquel momento. En tales circunstancias, cualquier relato formulado por mis interlocutores redundaba, inevitablemente, en la evaluación de su experiencia colectiva en Pay Paso. Una historia de vida, por ejemplo, servía de excusa para distinguirse de otros cooperativistas, clasificados como menos experimentados o poco dispuestos al trabajo. Un *racconto* de la propia trayectoria escolar acababa convirtiéndose en fuente de parámetros para diagnosticar la ignorancia ajena. La evocación de algún problema de salud era inmediatamente asociada al “stress” de las rutinas de Pay Paso. Comentarios sobre la familia desembocaban en reflexiones acerca de la dificultad de conjugar la vida doméstica con la intensa rutina laboral en la cooperativa.

Un día, en casa de Camila, luego de oír largas y quejumbrosas divagaciones sobre Pay Paso, decidí aventurar un cambio arbitrario de tema: le pregunté a mi interlocutora sobre el origen de unas piedras extrañas que decoraban la mesa del living. Para mi desesperación, las piedras habían sido recogidas precisamente en... Pay Paso. Estos minerales, con los que yo había pretendido pavimentar una ruta de salida hacia otro diálogo, sirvieron de soporte para que Camila denunciara la ociosidad de sus compañeros de trabajo: según ella, como “ya nadie trabaja”, el tiempo libre de quienes sí eran “buenos laburantes” había menguado sensiblemente. En consecuencia, ya no le quedaba tiempo para recorrer tranquila los campos de la cooperativa en busca de esas piedritas – en realidad boleadoras y morteros prehistóricos – que tanto le llamaban la atención.

En la cooperativa Helios Sarthou confluía gente con habilidades diversas, necesidades financieras variadas y expectativas diferentes sobre el futuro del negocio: había ex-trabajadores de la caña de azúcar, de la construcción civil, de la horticultura, de los servicios domésticos y de las fuerzas armadas. Algunos eran solteros o tenían familias poco numerosas, lo que les permitía subsistir con comodidad gracias a los “adelantos” ofrecidos por la ALUR; otros tenían muchos hijos, padecían mayores penurias económicas y eran constantemente demandados para las tareas de cuidado en sus respectivos hogares. Se trataba de una muestra fiel de la clase trabajadora bellaunionense; una muestra cuya heterogeneidad pudo ser movilizaba en el CSA gracias a la única promesa que quizás fuera

deseable para todos sus componentes, a saber: la posibilidad de acceder a un trabajo estable, relativamente autónomo y bien remunerado. Nadie estaba dispuesto a renunciar a esa posibilidad, pero preservarla dependía, fundamentalmente, del adecuado mantenimiento de las plantaciones de caña de azúcar. Era necesario, en consecuencia, definir y redefinir la mejor forma de sostener las actividades productivas con la mayor tranquilidad posible – y, por qué no, con alguna cuota de alegría.

La adhesión de las bases de UTAA a las políticas de colonización patrocinadas por ALUR y el INC fue fruto, como vimos en el capítulo anterior, de la captura de un deseo de vivir mejor cultivado en medio de las determinaciones de la zafralidad y la informalidad. Esto significaba que, en relación a la actividad productiva en las nuevas colonias cañeras, los trabajadores movilizados por la UTAA ya no esperaban vivir un “mal necesario”, como aquel eventualmente padecido en otras relaciones laborales. Si el trabajo en las colonias no era o no podía ser feliz hasta cierto punto, entonces no existirían razones para comprometerse con él. Siendo así, cada nuevo integrante “de la Helios Sarthou” traía consigo para el emprendimiento colectivo una serie de criterios de felicidad o realización personal que eventualmente trascendía la mera expectativa de tener un trabajo y recibir a cambio ciertas contrapartidas monetarias.

A Damián, por ejemplo, le gustaba la pesca. Seguidamente, él se dirigía a una represa localizada en los dominios de la cooperativa para pescar dorados y bogas a bordo de un viejo bote que sus esfuerzos habían vuelto nuevamente utilizable. Navegar tranquilo por la represa, una o dos veces a la semana, era una rutina que Damián apreciaba. César, a su vez, decidió poblar el patio de los alojamientos de Pay Paso con gallinas: la presencia de las aves corriendo por el pasto y escarbando el suelo en busca de comida le traía recuerdos agradables de su infancia en una pequeña propiedad rural en compañía de los padres y hermanos. Javi organizaba confraternizaciones de fin de semana en la colonia para aprovechar, junto con los amigos, los amplios espacios verdes, la tranquilidad y la privacidad que no siempre encontraba en el barrio de casas populares donde vivía en Bella Unión. Hernán, el entonces presidente de la Cooperativa, encaraba sus atribuciones administrativas como una gran oportunidad para poner a prueba y perfeccionar no sólo las habilidades organizativas que aprendiera en los años de servicio militar, sino también los conocimientos de gestión acumulados a lo largo de sucesivos cursos sobre emprendedurismo. Diego ya había ejercido muchas actividades laborales a lo largo de la vida, pero ninguna de ellas lo cautivaba tanto como las tareas de estancia. En el año 2015 él cuidaba de un pequeño rodeo de vacas bajo responsabilidad de la cooperativa y se

complacía cabalgando por los campos de Pay Paso con la escopeta cruzada a la espalda, en busca de carpinchos incautos.

Pequeñas felicidades latían todo el tiempo en los intersticios de la jornada laboral, llegando incluso a rivalizar con ella. También había alegrías que desafiaban abiertamente el trabajo productivo: yo podía suponerlas en cada ausencia al trabajo que algún cooperativista decidía permitirse para atender asuntos personales sin correr el riesgo de perder el empleo. Entre todas las felicidades que presencié en Pay Paso, las que más me atraían, por razones no siempre fáciles de estimar, eran la pesca y las cabalgatas. Los recuerdos más amenos que guardo de las visitas a “la Helios Sarthou” incluyen un largo paseo a caballo con Damián hasta los márgenes del Cuareim y una navegación serena, también en su compañía, por las aguas de la represa. Me acuerdo que el bote avanzaba lentamente mientras Damián iba recogiendo una red enorme que el cuerpo gordo de los peces distendía en algunos puntos. Torpemente, yo me encargaba de contener con los pies y las manos a los animales alborotados que se acumulaban en el piso de la embarcación.

En cierta medida, la experiencia de Pay Paso sonaba como una invitación para ser feliz, jugar, permitirse nuevos lujos y explorar deseos antes precarizados. Pero estas intensidades se chocaban inevitablemente con los propósitos oficiales de la cooperativa, de modo que el desafío, para sus miembros, era no sólo hacerlas coexistir, sino también volverlas compatibles con el deseo amo de ALUR.

La expansión de los cañaverales a lo largo del Río Cuareim era indisociable de la distribución de cuotas de alegría y satisfacción entre los nuevos productores agrícolas. A diferencia de las relaciones salariales más convencionales, a las cuales mis interlocutores estaban acostumbrados antes de volverse cooperativistas, la movilización laboral en los campos de la colonia Eliseo Salvador Porta se transformó en una ocasión propicia para la multiplicación de lo que Lordon (2015) denominaría “satisfacciones intransitivas”. “Intransitivas” porque son inherentes a la propia rutina laboral. Mientras que el trabajo bajo el mando del patrón no tiene que ser necesariamente placentero – ya que el placer se obtiene después del trabajo, gracias a los rendimientos proporcionados por éste –, la actividad productiva en las colonias era pensada como más realizadora en diversos sentidos. Habría una alegría potencial inmanente a ella. La cría de gallinas, peces y vacas, así como el trabajo estratégico y creativo en las oficinas de la cooperativa, podrían, sin duda, llegar a ser redituables, pero su realización como actividad productiva era consecuencia de un criterio de felicidad. Por otro lado, el corte de caña y las tareas de cuidado de los cañaverales no eran percibidos, en la mayor parte del tiempo, como una

fuelle de felicidad *a priori*. Por el contrario, implicaban riesgos y sinsabores que las personas quisieran sufrir con la menor intensidad posible. Siendo así, los cooperativistas que se dedicaban con más frecuencia al trabajo de campo, aplicando herbicidas tóxicos, abonando la tierra, regando la caña, etc., solían presionar a los otros compañeros – cuyo disfrute era visto como eventualmente exagerado – a asumir más “tareas pesadas”, de modo de reducir las cargas individuales de trabajo indeseable demandadas por el cotidiano de la producción cañera. En Pay Paso, la satisfacción del otro corría siempre el riesgo de ser encarada como un goce disgregador porque su realización incrementaba, potencialmente, los sinsabores propios.

El rosario de los reproches mutuos era interminable: “me estoy rompiendo el lomo acá en el campo mientras él está en la oficina”; “Fulana estaba en el bar anoche, debe ser por eso que no vino a trabajar”; “Mengano se fue de viaje a Salto el fin de semana, y lo peor es que tenía que haber traído a la gente para cortar caña el sábado”; “Sultano se la pasa andando a caballo. Tenía que estar alambrando”. Este tipo de inquietud venía a colación constantemente en las reuniones de la cooperativa. Era precisamente en tales situaciones donde se hacía más evidente el esfuerzo de mis interlocutores para fijar criterios tendientes a limitar la dispersión del deseo colectivo por canales que podrían poner en jaque la fidelidad de “la Helios Sarthou” al deseo amo de la industria sucroalcoholera.

6.2 ¿Castigar el “ausentismo” o liberarlo?

En setiembre del año 2015, los cooperativistas de Pay Paso dedicaron una de sus reuniones semanales a la discusión de los siguientes puntos: el reiterado “ausentismo” de algunos miembros del emprendimiento y la baja productividad de los cortadores de caña contratados para la zafra. Después de presentar el temario de la reunión a sus compañeros reunidos en la sala de la estufa, Hernán los invitó manifestarse y, en su estilo militar, agregó lo siguiente: “traten de presentar los problemas junto con las soluciones”. Aquel día Javi fue el primero en intervenir. Reconoció que las “faltas” eran un problema recurrente entre los cooperativistas, pero resaltó la importancia de mantener cuestiones de este orden restrictas al ámbito del emprendimiento, evitando llevarlas a conocimiento de los funcionarios de ALUR y del INC. En su opinión, ambas instituciones “no tienen el derecho de intervenir en los temas de la cooperativa como si fueran patrones”. “ALUR y el Instituto intervienen para desunirnos – argumentaba –, les interesa lo de ellos, no les importa que las cosas estén bien entre nosotros”. Sobre este punto, parecía haber consenso entre los presentes: la cooperativa necesitaba crear sus propios medios para organizarse

internamente. Hernán, sin embargo, quería alternativas concretas: “si la solución no viene de ALUR, viene de nosotros, pero ustedes tienen que dar alternativas”. En respuesta a Hernán, Flor sugirió, no sin titubear, que las faltas de los cooperativistas deberían ser controladas en una planilla. De esta forma, según ella, sería posible estimar su intensidad. Hernán tomó nuevamente la palabra: “para que tengan una idea, yo hice un control interno mío de los días trabajados de cada persona y había un personal femenino que tenía 16 días faltados en el mes”. Otro cooperativista intervino: “se podría fijar un límite de tres faltas seguidas”. “Y si faltás tres veces, ¿qué pasa?” – indagó Hernán. “Y... yo qué sé – reflexionó el otro – ¿le descontamos la mensualidad?” En este momento, Valdez levantó la voz para manifestar su oposición: “lo de las planillas es complicado porque las personas van quedando marcadas como las que no trabajan. Y ¿cómo le vas a bajar el sueldo a la gente? No. Eso no”. Flor sintió la necesidad de defenderse: “era sólo una opinión, porque el Hernán pedía alternativas. Fue lo que se me ocurrió”. “Bueno – concluyó Hernán –, entonces hay que comprometerse más, porque si no esto no anda. Siempre quisimos una cooperativa para no tener que trabajar salteadito, así que a dividir bien las tareas y que la gente se comprometa”.

Excluida la posibilidad de aplicar sanciones económicas contra el “ausentismo” de los cooperativistas, aún era necesario decidir qué hacer respecto de los cortadores de caña con baja productividad. Javi introdujo la cuestión: “hay poca gente trabajando en el corte, puede que no terminemos la zafra en el plazo. Capaz que tenemos que tomar más gente”. Para Hernán esa no era una alternativa: “hay trabajadores debiendo horas para la cooperativa. Les dimos adelantos pero no están viniendo a cortar caña”. Dylan tenía una solución: “y bueno, a los que no vienen los ponemos en una lista y no los volvemos a contratar”. Javi no estaba de acuerdo: “si lo hacemos, nos estamos portando como un gringo¹¹⁰. Un trabajador no puede poner a otro trabajador en la lista negra”. Esta última intervención recibió el apoyo de la mayoría de los presentes. “El tema es así – retrucó Hernán –: hay que tomar alguna medida para evitar que esto vuelva a pasar. No podemos adelantar plata para la gente que no viene a trabajar”.

Mientras el presidente de la cooperativa intervenía, argumentando sobre la necesidad de tejer relaciones “más profesionales” con los cortadores, mis ojos recorrían el

¹¹⁰ “Gringo” es como los cortadores de caña se refieren, en general, a sus patrones. Probablemente el uso del vocablo encuentra sus orígenes en las década de los ‘60, cuando capitalistas estadounidenses se hicieron cargo de la azucarera CAINSA, uno de los principales emprendimientos agroindustriales de Bella Unión. Actualmente, la palabra “gringo” también se utiliza en Bella Unión para hacer referencia a las personas blancas, especialmente las rubias.

ambiente: algunos cooperativistas miraban al piso en actitud pensativa, otros asentían lentamente con la cabeza, en señal de escucha, pero no necesariamente de aprobación. Noté una expresión extraña en el rostro de Javi: recostado contra la ventana, al lado de la puerta, su mirada parecía perdida. Atento a su semblante, demoré en darme cuenta de que César, de pie al lado de Javi, había puesto una de las manos sobre el pecho del compañero para evitar una caída inminente. Cuando tomé conciencia de la situación, otras personas ya estaban levantándose para socorrer al colega a punto de desmayarse. Con los brazos apoyados sobre los hombros de dos compañeros, Javi fue llevado para afuera de la sala. Le pregunté a Camila, sentada a mi lado, si le pasaba eso con frecuencia. “¿Vos sabés que no? – me contestó – Lo que pasa es que acá estamos todos medio enfermos”.

En pocos minutos, Javi ya estaba de vuelta en la sala. Se sentó en un banco, de espaldas a la pared. Con sus manos temblorosas sostenía un vaso de agua. Camila volvió a hablar, esta vez dirigiéndose a la asamblea: “yo quería aprovechar lo que pasó acá para contar que hay otro compañero enfermo, el Sosa. Desde que lo sancionaron por lo de la discusión con el coordinador de tareas, el viejo se enfermó”. Camila se refería a la sanción aplicada contra uno de los cooperativistas después de haber discutido duramente con otro colega, encargado de coordinar ciertas actividades de mantenimiento en las plantaciones de Pay Paso. “No le pueden cortar las patas así – aseveró Camila”. Otro compañero retrucó: “es que no se pueden andar peleando así, cumpa. La gente usa herramientas, facón, machete. En una de esas pasa algo grave”. “Entonces – concluyó Camila –, hay que ver por qué la gente anda en ese estado”. Diego, que permaneció callado durante toda la asamblea, se levantó de su asiento, dio algunos pasos al frente y se dirigió a los presentes con la voz embargada. Palabras más, palabras menos, su relato fue el siguiente:

¿Saben lo que me calienta? Me calienta que a ustedes no les importe lo que le pasa a uno en su vida. Mi hijo anduvo enfermo, lo tuvimos que llevar a Salto, al hospital, y no recibí ninguna ayuda de la cooperativa. Ustedes saben que yo no gano la mensualidad, me las arreglo con la plata de las vacas, pero está todo bien. Me calienta que la cooperativa no te ayude en una necesidad siendo que hay plata. Y después te vienen a cobrar por lo que hiciste o dejaste de hacer.

Oficialmente, la cooperativa Helios Sarthou tenía 34 integrantes, pero en 2015 sólo 20 personas recibían las “mensualidades” de ALUR, puesto que la extensión de los cañaverales de Pay Paso todavía no era suficiente para garantizar una remuneración adecuada a todos los socios del emprendimiento¹¹¹. Quienes no recibían la “mensualidad” debían trabajar por cuenta propia, ya sea cortando caña durante la zafra en las plantaciones

¹¹¹ En el primer apartado del capítulo anterior explico con detalle cómo funciona el financiamiento de las unidades productivas del CSA y en base a qué criterios se calcula el valor de las “mensualidades”.

de la misma cooperativa o encargándose de incipientes tareas de diversificación productiva. Este era el caso de Diego, a quien Hernán se dirigió del siguiente modo: “lo que pasa es que hay plata en la mano de cortadores que no trabajan. Con ese dinero sería más fácil ayudar a los compañeros”. “Es verdad – agregó Flor –, no hay fondos, Diego. Lo que sí podemos hacer es pedirle algún adelanto a ALUR”. “No es sólo eso – objetó Camila –, acá entre nosotros también hay gente que recibe plata y no trabaja”.

Nuevamente de pie, con una de las manos apoyadas en el marco de la ventana, Javi pidió a sus compañeros que primara la unidad y subrayó que si bien la asamblea servía para “aclarar las diferencias”, no se la podía convertir en un espacio para “señalar a la gente”. En el intento de amortiguar una discusión que ya se estaba poniendo bastante dura, Javi ponderó que “cada uno tiene sus ritmos y los tenemos que ir manejando”. Para él las dificultades relacionadas con la organización y la productividad del trabajo no eran sencillas y sería imposible solucionarlas en aquella reunión. Eran las dos de la tarde. Por lo menos la mitad de los cooperativistas ya se había retirado de la sala después del desmayo de Javi. En el patio, esperaban impacientes y cansados el momento de volver a Bella Unión. En la práctica, la asamblea había terminado.

Aquel día no viajé solo de regreso a Bella Unión. Valdez, uno de los cooperativistas de edad más avanzada, orgulloso portador de cuatro décadas de experiencia en los cañaverales del norte del país, se sentó a mi lado decidido a ofrecerme su propia e inusitada lectura sobre los dilemas de Pay Paso. Este hombre delgado y simpático, de largos cabellos blancos, estaba convencido que continuaría habiendo serios conflictos en la cooperativa mientras ésta se limitara al cultivo de la caña de azúcar y al subarrendamiento de tierras para el engorde de unas pocas vacas. “Necesitamos más recursos”, afirmaba. Pero según él esta ambición estaba gravemente obstruida por la “subordinación” de Pay Paso a ALUR y al INC. Aunque tanto una institución como la otra sabrían hacer “lindas promesas”, mi compañero de viaje observaba que las “promesas son palabras” y ponderaba que “detrás de las palabras siempre hay números”: “las palabras también son números. Esto se aplica cuando alguien nos dice bellas palabras y nos promete lindas cosas”. Para Valdez, “los números” darían la dimensión de lo que se puede esperar de las palabras. Y estas últimas, cuando provenían de ALUR y del INC, estaban impregnadas de dígitos desfavorables, “muy escasos”. En la opinión de Valdez, ese sería el origen de la “frustración de algunos compañeros”.

La mejora de los números escasos que subyacían a las palabras del Estado dependería de una cualidad que, lamentaba Valdez, parecía no estar muy diseminada entre

quienes recibieron tierras en Pay Paso, a saber: “la ambición”. “Quieren muy poco, hablan de cosas pequeñas: una quinta para abaratar la olla, un rodeo para carnear y dividir entre ellos”. Con perspectivas tan poco ambiciosas, la cooperativa no lograría generar dinero suficiente para garantizar una “vida mejor” a sus miembros. “Pero ¿qué números hay detrás de una vida mejor?” – provoqué. Valdez respondió sin pestañear: “30.000 pesos uruguayos por mes. Mínimo”. El aparente emprendedurismo de mi interlocutor se conjugaba con una perspectiva intensamente libertaria sobre la organización del trabajo. Valdez rechazaba cualquier sistema de control de faltas, clasificándolos como “una relación dictatorial entre los compañeros”: “queda a criterio de cada uno convencerse de la importancia del proyecto”. Durante nuestro diálogo, mi compañero de viaje se animó a formular un listado de las condiciones necesarias para concretizar una buena experiencia de trabajo colectivo. Usó cuatro dedos de una mano para enumerar los puntos esenciales de la lista, que, a propósito, se parecía más bien a un conjunto de postulados. Hice un esfuerzo tremendo para memorizarlos y creo haber logrado retener buena parte de su contenido en mis cuadernos. La cita que traigo a continuación no es literal, pero reconstruye las principales ideas de mi interlocutor:

- 1) No debemos decidir sobre cuestiones que involucren la vida de los demás sin consultarlos. Cada uno tiene una visión diferente, de acuerdo con el cargo que ocupa. No considerar la visión de los demás es dictadura.
- 2) Lo ideal es que no haya gerentes imponiendo ritmos de trabajo. Los ritmos de las personas deben respetarse.
- 3) No se debe intervenir en el salario de las personas. Tampoco se les debe preguntar por qué dejaron de ir a trabajar algún día. Debe asumirse que las personas están comprometidas a su modo con la cooperativa. Sin embargo, no está prohibido cuestionar al otro cuando se juzgue necesario. Lo que no puede ocurrir es que alguien convierta su desacuerdo con el otro en una sanción sobre el salario.
- 4) Todo lo anterior es lo que alguien, como gobernado, cree que es posible proponer. Por lo visto, a los gobernantes no les importa conocer la visión de un gobernado porque es insensata. Esta diferencia de visión entre gobernantes y gobernados tiende a seguir como está, razón por la cual, tarde o temprano, tendremos que tomar las armas nuevamente. Soy tupamaro.

Es interesante observar el movimiento de las reflexiones de Valdez. Ellas comienzan con el reconocimiento de una situación en la cual las expectativas colectivas se multiplican en medio de la escasez de dinero. Se trata de expectativas tan amplias que solamente una producción pujante de riqueza podría contemplarlas. Enseguida, los cooperativistas son presentados como un grupo de personas que, por lo general, no parece estar interesado en ambicionar más y elevar sus apuestas empresariales. Valdez trataba de diferenciarse de ellos: él sí poseía ambiciones. Sin embargo, si algún día le fuera dada la posibilidad de realizarlas como le gustaría, este viejo cortador de caña las sometería a una

serie de condiciones políticas que parecen directamente incompatibles con la obtención de eficiencia y productividad en los cuadros del capitalismo tal y como lo conocemos. En las reflexiones de Valdez, todo sucede como si la mayor riqueza material pudiera ser conjugada con la mayor riqueza en términos de relaciones interpersonales y autorrealización individual.

En el modelo de enriquecimiento fabulado por Valdez durante el viaje entre Pay Paso y Bella Unión, no parecía existir un deseo amo en condiciones de sojuzgar el trazado de los devenires personales. El compromiso de estos últimos con la producción colectiva era simplemente “asumido” (ver el tercer punto de la lista), quedando, por tanto, exento de control sistemático. Y aún cuando pudiera haber duda con respecto a dicho compromiso, permanecía excluida la posibilidad de hacerlo cumplir a través de sanciones económicas. Valdez imaginaba la producción de riqueza más allá de ALUR: la proyectaba en un horizonte vastísimo, contrario a la escasez, y por eso mismo incompatible con la coerción. Este posible era vislumbrado a partir de su posición de “gobernado”. Se trataba de un posible cuya sensatez parecía ser negada por la visión de los gobernantes. Y era entonces que surgía, en los postulados de Valdez, la hipótesis revolucionaria, pensada como la solución razonable de un desequilibrio no sólo económico-político, sino también “óptico”: un desequilibrio entre dos campos de posibles en el cual la viabilidad de la perspectiva gobernante dependía, aparentemente, de la inclusión de la perspectiva gobernada en el claustro de la insensatez. Una última observación: Valdez nunca actuó en el Movimiento Tupamaro, no se sentía identificado con los cuadros de esta guerrilla que hicieron carrera política en el Frente Amplio y tampoco era un asiduo militante de la UTAA. En su caso, “soy tupamaro” consistía menos en un diacrítico de identidad que en el heterónimo de un Valdez-posible, alojado clandestinamente en la sensatez singular del pensamiento propio.

6.3 El complejo delirado. Experiencia de lo indecible.

Las narrativas de las páginas anteriores procuran evidenciar que en una colonia como la de Pay Paso el deseo de los otros debería estar bajo permanente control, ya que su realización sin trabas podría propender al goce disolvente. La peligrosidad del goce estaba marcada por su distanciamiento en relación al deseo amo: la actitud de quienes gozaban exageradamente era dañina en la medida en que terminaba imponiendo a los demás cooperativistas una exacerbación de las consecuencias más desagradables inherentes al imperativo productivista profesado por ALUR. Si alguien elegía trabajar menos a lo largo del mes, o expender un tiempo exagerado en actividades que consideraba más interesantes

y apacibles, era posible que otros compañeros sintieran sobre sí, con mayor intensidad, el cansancio físico y la insatisfacción personal resultantes del compromiso intensivo con el mantenimiento de los cañaverales. Más allá de eso, cuando una persona se exoneraba del trabajo productivo en la plantación de caña en nombre de otros compromisos e inclinaciones subjetivas, su conducta podía evaluarse como indigna a los ojos de quienes se consideraban en mejores condiciones de corresponder a las expectativas de la industria. La legitimidad de las diversas formas de pertenencia a la cooperativa estaba siempre puesta en cuestión: los cooperativistas integraban una especie de jurado permanente encargado de estimar la (in)dignidad de la conducta propia y ajena teniendo en cuenta el irrevocable contrato de provisión de materia prima firmado con ALUR.

Ya en lo que se refería a la mano de obra reclutada para la zafra, también ella debía ser juzgada y controlada. Muchos trabajadores contratados en Pay Paso durante la cosecha de caña eran amigos o parientes de los cooperativistas. La consecuencia de esta situación fue la creación de un ambiente más permisivo en lo concerniente a la vigilancia del trabajo en las plantaciones del emprendimiento. Sin embargo, debido a esa permisividad, algunos peludos terminaban recibiendo adelantos por tareas que no realizaban, lo que afectaba negativamente los recursos a disposición de la cooperativa para contemplar ciertas demandas urgentes de sus propios miembros.

El deseo de los cooperativistas y los trabajadores zafrales estaba sitiado por la amenaza inminente de la escasez. Los números no jugaban a favor de las promesas de felicidad que Pay Paso hacía multiplicar. De ahí que fuera necesario construir, de modo siempre provisional, una especie de sub-régimen de deseo propio a la colonia. La vigencia de ese sub-régimen se hacía evidente en las asambleas de “la Helios Sarthou”, frecuentemente dominadas por la evaluación general de la conducta ajena y por tentativas de formular mecanismos eficientes para controlar comportamientos perniciosos desde el punto de vista de la estabilización y la preservación de la relación de financiamiento establecida entre Pay Paso y ALUR. El goce ajeno era, entonces, una satisfacción doblemente siniestra: por un lado incrementaba las vicisitudes de la subordinación al deseo amo y, por otro lado, hería la concretización de los objetos de ese mismo deseo – “buena caña”, “productores eficientes” –, amenazando virtualmente a la propia cooperativa. Debemos leer en este marco la preocupación permanente de los cooperativistas por discernir entre placeres lícitos e ilícitos – o gozosos. Los primeros eran entendidos como inofensivos para la estabilidad de la producción cañera y la preservación del bienestar

laboral de los miembros de la cooperativa, mientras que los segundos eran identificados a partir de su aparente desconexión respecto de ambos propósitos.

En una primera instancia, con el objetivo capturar los deseos que la Comisión de Tierras del sindicato había sistematizado, el núcleo del complejo – la industria – activó mecanismos que garantizaban “salario”, autonomía relativa para la organización del trabajo y la promesa de una mejoría paulatina de la capacidad de consumo. Ya en una segunda instancia, fueron los mismos cooperativistas quienes quedaron encargados de la tarea de mesurar los límites de realización de sus propias voluntades. En síntesis, un régimen de deseo se acopló a otro. Una vez que la lucha sindical ya había garantizado el acceso a la tierra con arreglo a determinados fines, correspondió a los cooperativistas negociar sus respectivas voliciones sin descuidar de los parámetros fijados por el deseo amo. El (auto)gobierno de las conductas al interior de la unidad productiva no era para nada fácil pero, por lo menos hasta 2015, pudo asegurar la relativa normalización de Pay Paso en las tramas del CSA. Con todo, los mismos esfuerzos realizados para estabilizar a la cooperativa en el seno del complejo agroindustrial también produjeron un exceso deseante cuya funcionalidad, en lo que tiene que ver con la preservación de las políticas desarrollistas en el norte del Uruguay, era potencialmente *indecidible*. En breve me ocuparé de esta cuestión crucial. Antes, quiero trazar un paralelo entre el régimen de deseo que regía el cotidiano de las actividades productivas en Pay Paso y un abordaje antropológico específico, que se propone modelizar la construcción del llamado “deseo social”. Veremos que el abordaje en cuestión no sólo sistematiza con claridad los presupuestos inherentes al equipamiento colectivo de deseo experimentado en Pay Paso, sino que también es homólogo a dicho equipamiento, dado que no reconoce el devenir del deseo por fuera de sus relaciones con la regla, la norma y la función.

Ciertas antropologías son capaces de ofrecer un relato sistemático del orden y de sus presupuestos, razón por la cual se vuelven buenas cajas de herramientas conceptuales a la hora de retener una imagen de la dimensión ordenada de la vida colectiva. En pocas palabras, los esquematismos de esas disciplinas son útiles para describir justamente el aspecto acomplejado del cotidiano de las personas. Sin embargo, otras coordenadas teóricas deberán adoptarse cuando se haga necesario enunciar, en sinergia con algunos de mis interlocutores, la deriva posible del pensamiento y la acción colectiva más allá de los equipamientos de deseo. Podríamos pensar el movimiento analítico emprendido en las próximas páginas en dos dimensiones: una explícita y otra implícita. La primera consiste en evaluar cómo el deseo coagula en ciertas estructuras, al tiempo que también opera su

disipación inmanente. La segunda consiste en convertir la enunciación de esa disipación en una oportunidad para activar dispositivos conceptuales desreglados, susceptibles de exponer no sólo el nexo social y sus condiciones de posibilidad, sino también el desgarramiento de dicho nexo y su radical inconsistencia objetiva.

Edith Calderón (2012) realizó un esfuerzo reciente para compatibilizar el dispositivo teórico freudiano con la agenda de una antropología de la afectividad. Esta antropología pretende ofrecer un modelo básico de cómo la pulsión de los seres humanos es estructurada para generar el lazo social, y de esta forma, volverse un vector de la (re)producción cultural. Calderón acepta la premisa freudiana según la cual coexisten, en la psique individual – o en el nivel intrasubjetivo – dos fuerzas pulsionales contrarias: una de vida y otra de muerte. Estas pulsiones se chocan contra la barrera de la represión, responsable de proporcionar a la fuerza libidinal de los individuos los signos de satisfacción instaurados por la socialización primaria. A partir de este primer clivaje represivo, comienza a definirse el objeto de interés de la antropología de Calderón: “para nuestros fines antropológicos, el deseo debe ser entendido, desde ahora [...] *como busca de satisfacción socialmente normada*” (Calderón, 2012: 219), es decir, como un ímpetu de satisfacción pulsional que se actualiza sobre un campo de realización pautado por el discernimiento del otro.

En la más tierna infancia, el sujeto vivencia el nacimiento de su espacio psíquico interior de forma simultánea a la aparición de la exterioridad, definida por la psique materna. El investimento afectivo materno conforma los sentidos posibles de la realización libidinal del niño: “la madre – o cualquier otro sujeto o institución social que cumpla las funciones de crianza – transmite las conminaciones, las prohibiciones y los límites de lo posible, de lo lícito” (ibid.: 220)¹¹². A partir de este momento, el sujeto estaría preparado

¹¹² Calderón identifica en la madre el inicio del devenir del deseo en tanto búsqueda de satisfacción normada. Como veremos más adelante, mi perspectiva es otra. Considero que la existencia social del deseo no se limita a su redundancia sobre objetos o formas de satisfacción reconocidos y regulados por un sistema normativo específico. *Grosso modo*, para mí el deseo es una experimentación del pensamiento en lo real; una experimentación que se da en perjuicio potencial de la consistencia de las normas de (re)conocimiento vigentes. Sostener esta concepción del deseo no exige, necesariamente, una explicación sobre por qué el deseo es lo que es. Para fines analíticos, alcanzaría con identificar los efectos del proceso deseante. Sin embargo, si tuviera que explicar el deseo, seguramente identificaría su origen en el contacto con el ente materno, pero por razones distintas a las de Calderón. Más cercano a León Rozitchner (2013, 2011), diría que en los primerísimos momentos de su existencia, la experiencia del niño con la madre – antes de que ésta se convierta en porta voz de la cultura, cuando la madre porta una voz sin palabra – es la experiencia indeleble de un despliegue intenso entre lo humano y aquello que se aparta de él – el cuerpo de la madre – para luego ofrecerse a una construcción de sentidos sin concepto. La voz de la madre, sus gestos, señalan “cosas”, pero esas cosas no están cualificadas como objetos discretos, portadores de atributos circunscriptos: aparecen entremezcladas con el mismo proceso de enunciación. Se dan intensamente al sentido y hacen sentido en esa intensidad. La capacidad arcaica de acoger intensidades independientemente de la mostración operada por los

para participar funcionalmente de su cultura, viviendo el deseo propio en el registro del placer y del displacer proporcionado por ciertas modalidades socialmente avaladas de canalización de las tensiones libidinales. Subyacente a esta funcionalización social del deseo, existiría una unidad emocional básica, similar al átomo de parentesco levistraussiano, que se representa en la forma de un triángulo. El vértice superior de la figura corresponde al deseo (o simplemente “energía”), mientras que los vértices inferiores corresponden, uno de ellos a la valencia positiva (o placer) y el otro a la valencia negativa (o displacer). Estructuralmente, el afecto transcurre en ese triángulo en tanto energía que se “descarga” en emociones, pasiones y sentimientos dispuestos en polos negativos y positivos de acuerdo con la funcionalidad atribuida a ellos en cada dominio de la acción social.

Calderón infiere esa “estructura emocional” básica de diversas etnografías clásicas y de algunos tratados de sociología bastante célebres. Por ejemplo, tomando por referencia a los mundugumor, estudiados por Margaret Mead (2015 [1939]), Calderón ubica la “personalidad” del niño en el vértice superior del triángulo, de modo que su canalización podía ocurrir o bien como “ternura”, o bien como “hostilidad” en relación a otros niños. Esta última forma de realización de la “personalidad” era la más deseable entre los varones mundugumor, puesto que su existencia transcurría en un mundo agonístico y hostil donde los otros niños de la etnia aparecían como enemigos potenciales. La autora extrae un modelo análogo de las reflexiones de Norbert Elias (2016 [1977]) sobre el proceso civilizador, en las cuales el miedo es presentado como afecto funcional que se opone a la realización de investimentos pasionales dictados por impulsos individuales. En este caso, los impulsos constituirían una energía individual que, mediada por el miedo, recibiría valencia positiva y, careciendo de esa mediación, sería definida como “instinto” (valencia negativa).

A pesar de toda la polisemia que caracteriza a las expresiones sociológicas de la “dimensión afectiva”, su estructura aparece siempre igual: energía, valencia positiva y valencia negativa. Según Calderón, la universalidad de la dimensión afectiva habla de la lucha de “la sociedad” contra la entropía, entendida como dispersión de la energía afectiva en detrimento de un sistema de relaciones sociales que garantiza la estabilidad de cierto modo de vida colectiva, sea cual fuere. Cada sistema de relaciones sociales estaría asentado, por lo menos en alguna de sus dimensiones, sobre una fuente de energía en torno

conceptos subsiste en el deseo social humano; un deseo intrínsecamente agonístico, disruptivo, transformador.

a la cual se organiza un dominio funcional. Siendo así, la vida colectiva siempre comportaría uno o más triángulos en cuyo marco los vectores pulsionales del individuo serían canalizados hacia afectos socialmente reglados – por ejemplo: angustia, envidia, deseo de venganza, miedo, amor, ternura, etc. Tales afectos, a su vez, afirmarían las coordenadas existenciales vigentes en un lugar y momento específicos. Siendo así, tanto la fuente de energía – deseo – como las afectividades en las cuales ella desemboca – lícitas o no – estarían socialmente circunscritas, o sea, regladas.

Pensemos ahora en el CSA. Allí, el deseo de ingreso estable, definido en el seno del complejo como “necesidad”, pudo canalizarse alternativamente como voluntad de consumo improductivo (consumo de dinero en tanto medio de intercambio) o como voluntad de consumo productivo (reconocimiento del dinero en tanto capital). La primera voluntad de consumo tuvo como consecuencia, siempre en el ámbito del complejo, el endeudamiento crónico; la segunda, a su vez, debería conducir al deseable desarrollo de las fuerzas productivas de los nuevos colonos (capítulo 5). Desde el punto de vista del núcleo del complejo, la voluntad de consumo productivo tenía valencia positiva, mientras que la voluntad de consumo improductivo tenía valencia negativa. La primera debería ser estimulada y la segunda cohibida. Ocurre, sin embargo, que el triángulo del CSA es segundo respecto del triángulo inmanente a la Comisión de Tierras de la UTAA, en el cual el consumo productivo y el consumo improductivo recibían valencias opuestas a las que se les atribuían en el complejo. Un tercer triángulo vino a suturar el desencuentro entre los regímenes de deseo sustentados por ALUR y por el sindicato. En él, la fuente de energía movilizadora, que podría denominarse “ganas de vivir mejor”, se distribuía entre placeres lícitos o ilícitos, es decir, placeres inofensivos o placeres ofensivos en lo que tiene que ver con la expectativa de preservación de la cooperativa como parte funcional del CSA. Los tres triángulos pueden ser representados de la siguiente forma:

Figura 1



El equipamiento colectivo de deseo se ha desplegado, entonces, en tres triángulos. Sinteticemos sus funciones y sus efectos. El primer triángulo emergió de la Comisión de Tierras del Sindicato, en las etapas previas al efectivo inicio de la colonización agraria. No estaba, por lo tanto, completamente subsumido a los criterios del CSA, aunque organizaba la producción deseante teniendo en cuenta los objetos de satisfacción prometidos por el consorcio desarrollista. Su función era sistematizar “necesidades” y proyectarlas sobre los recursos facilitados por el CSA. En este triángulo, las ganas de cambiar de vida nutridas por los asalariados rurales se dirimían en los objetos “tierra” y “dinero”. Ambos objetos estaban asociados, respectivamente, a la estabilidad y autonomía laboral y al acceso inmediato a bienes de consumo, confort familiar, etc.

El segundo triángulo respondía a las formas de realización personal y colectiva preconizadas por la industria. Su función era realizar las “necesidades” de los asalariados prioritariamente a través del consumo productivo de dinero-capital. En los hechos, este triángulo debía reencauzar las necesidades sistematizadas por la Comisión de Tierras, condicionando tanto la tenencia de la tierra como el recibo de dinero a los propósitos económicos e ideológicos del emprendimiento desarrollista.

Finalmente, el tercer triángulo derivaba del esfuerzo cotidiano de los cooperativistas de Pay Paso por conciliar los vectores deseantes cultivados otrora en la Comisión de Tierras con el ordenamiento del deseo planteado por el núcleo del CSA. La función del tercer triángulo, completamente subsumido al CSA, consistía en definir, en la práctica, qué placeres eran disfrutables – y en qué intensidad – cuando se trataba de desarrollar una vida mejor, en armonía con las rutinas productivas del complejo. Concretamente, el mantenimiento del tercer triángulo exigía un examen constante – y exhaustivo – de cómo se expresaban, en el lugar de trabajo, las formas de “vivir mejor” planteadas por cada miembro de la cooperativa. En tal examen estaban en juego dos ambiciones: la de juzgar la licitud de los nuevos placeres proporcionados por la colonización agraria y la de distribuir la acción colectiva según las valoraciones derivadas de dicho juicio.

Si, por un lado, la clasificación de la conducta ajena según valencias positivas o negativas era un esfuerzo que generaba controversias y consensos en Pay Paso, por otro lado, la formulación de mecanismos de control tendientes a cohibir la realización de placeres potencialmente dañinos al éxito de la colonia era prácticamente inviable. El triángulo de Pay Paso era difícil de trazar. De hecho, cada nueva asamblea de la cooperativa constituía un esfuerzo tan obstinado como ineficaz en ese sentido. Sin

embargo, más difícil que trazar el triángulo era sostenerlo colectivamente y anclarlo en un régimen efectivo de sanciones. Los placeres del otro eran tercamente rebeldes a la normalización. La presunta verdad de su ilicitud no impedía a los cooperativistas seguir preguntándose sobre una posible razón intrínseca a los goces disolventes. Una razón ante la cual las reglas de la colonia tal vez fuesen incompatibles.

Volvamos ahora a la cuestión del “ausentismo”, discutida intensamente por los cooperativistas en setiembre de 2015. Había sólo un consenso sobre el ausentismo en la asamblea de Pay Paso: él existía. Pero ¿era posible castigarlo? No. Siendo así, a fin de cuentas, ¿el ausentismo era lícito o ilícito? Imposible decidir. *Indecidible*. Como vimos, el pensamiento de Valdez retuvo esta indecidibilidad que había sido expuesta ante los ojos de todos sus compañeros en el ágora de la asamblea. Instantes más tarde, ya en el ómnibus que lo alejaba de la colonia, Valdez incluiría ese ausentismo desreglado e indecidible en una especie de delirio personal. Fabularía una experiencia de trabajo cooperativo donde el devenir productivo de las personas, así como su devenir improductivo, podrían desdoblarse sin trabas *a priori*. En la experiencia de trabajo fabulada por Valdez, trabajar y no trabajar se excluían de la marcación social y, por ende, se volvían inútiles a cualquier funcionalización. El vislumbre de ese “realmente posible” – en términos de Ernst Bloch (1980)¹¹³ – comenzó, es necesario reconocer, con la “des-triangulación” del ausentismo, ocurrida fugazmente en una ocasión de asamblea y retenida en el espíritu inventivo de uno de sus participantes.

Una vez des-triangulado, el ausentismo, ya carente de valoración positiva o negativa, apareció al pensamiento de Valdez como excluido de la norma. Su existencia se sustrajo a la necesidad de un escrutinio destinado a evaluarlo como aceptable o no teniendo en cuenta el concepto de una vida mejor subordinada al CSA. Hablando crudamente, el ausentismo de Valdez estaba des-erotizado: no existía ni como expresión legítima de un *placer* – pequeño lujo concedido al vivir bien –, ni se presentaba como *goce* solitario,

¹¹³ Como discutí en la introducción, Ernst Bloch diferencia el “posible objetivo” de lo “realmente posible”. El primero es predecible gracias al conocimiento parcial de las determinaciones actuales. Los posibles científicos, por ejemplo, son objetivos, así como también lo son los posibles circunscriptos a cualquier sistema de reglas en el cual ciertos medios lícitos conducen a los fines esperados. A su vez, lo “realmente posible” dice respecto a “todo aquello cuyas condiciones no están todavía reunidas todas en la esfera del objeto mismo: bien sea que tienen todavía que madurar, bien sea, sobre todo, que surjan nuevas condiciones – aunque en mediación con las existentes – con la entrada de un nuevo algo real” (Bloch, 1980: 147). Lo realmente posible no se encuentra en lo que puede intuirse mediante lo que ya está dado, pero sí “en el frente del proceso universal, es decir, en el sector óptico, tan poco reflexionado, de la materia móvil y utópicamente abierta” (ibid.: 150). Como veremos a continuación, es a través del deseo que las personas pueden acceder a una imagen del devenir realmente posible – y, por consiguiente, de la mutabilidad – de su propio contexto social.

pernicioso a la colectividad. Era simplemente un posible existencial distanciado de la sombra de la culpa: expresión de deseo, y no de placer legible; deseo que Valdez volvía suyo sin preguntarse, mientras deliraba, por lo que dirían al respecto sus celosos compañeros de cooperativa. Deseo que, algunos minutos antes de entrar al ómnibus, había aparecido al calor de la asamblea como posible para todos – y no como placer (ex)culpable de algunos. En el contexto de la asamblea, era objetivamente imposible entregar el ausentismo a regla, estimar su legalidad, calcularla en días, demostrarla con planillas y finalmente castigarla con la reducción de los flujos de dinero. Consciente de eso, Valdez tejió de improviso un mundo en el cual ausentarse no era ni fuente de placer, ni fuente de culpa; no poseía, en suma, valor funcional. Este mundo se asentaba en números generosos: los únicos capaces de sostener la realización personal y la realización colectiva hasta el punto de hacerlas coincidir totalmente, sin recurso a la castración. Se trataba de una fabulación peligrosa, justamente porque tenía muy poco que ver con la satisfacción de necesidades socialmente regladas. Se parecía, más bien, a un desorden socializante del deseo que implicaba su exclusión del triángulo de la satisfacción vigilada.

El deseo, proyectado sobre lo indecible, desborda los límites de una antropología como la de Calderón, que se ocupa de la movilización de la potencia subjetiva en el cuadro de la satisfacción socialmente sancionada. Sería igualmente difícil pensarlo a la luz de concepciones influyentes de agencia y resistencia como las planteadas por Sherry Ortner y James Scott. Abstractamente, Ortner (2007, 2016) concibe la agencia como la capacidad de los sujetos empoderados de afectar una multiplicidad de entes (cosas, personas, palabras, etc.). En el nivel sociológico, la agencia aparece como el resguardo y la realización de la posibilidad de realizar planes colectiva o individualmente – a veces, pero no siempre, en tensión con otros planes. A semejanza del deseo de Calderón, “agencia” en Ortner describe la capacidad de “perseguir objetivos y fines culturalmente significativos” en el seno de relaciones jerárquicas (Ortner, 2007:76).

Para Scott, la resistencia – inevitable en cualquier situación donde la capacidad de acción de alguien se encuentra restringida – señala la existencia de tensiones y posibilidades inmanentes a las relaciones de subordinación (Scott, 1990: 21). La resistencia de Scott, visible en los enunciados que las personas producen por fuera de la vigilancia directa de sus dominadores, constituye una especie de contra cara de la hegemonía, entendida, esta última, como expresión pública de un pacto de poder nunca realmente consensuado. Resistir es tensionar la regla con palabras y acciones; es menoscabarla por medio de chistes, rumores y canciones. Las realidades del poder se definen mediante

relaciones de fuerza y coerción. La resistencia, a su vez, explora en actos la subversión posible de esa realidad y plasma en relatos su negación utópica. En la resistencia se formula la verdad de los dominados sobre la relación social que los posiciona como tales. Se trata de la verdad de un “deseo humano” que reacciona y se opone a la regla. Sin necesariamente apuntar a proyectos políticos sistemáticos, este deseo es capaz de imponer reveses a los propósitos de quien recurre a la dominación ajena para garantizar la realización de ciertos servicios y el pago de prestaciones de todo tipo. En la resistencia de Scott existen elementos de la agencia de Ortner: tanto en un caso como en otro está en juego la consecución de planes propios, derivados de una experiencia particular con el poder y la cultura. Scott tiende a enfatizar el carácter reactivo de esos planes. Ortner, por otro lado, subraya su enraizamiento en lógicas locales que versan sobre el bien y lo deseable. Para ella, la resistencia es sólo una de las expresiones posibles de la agencia¹¹⁴.

Mi interés teórico por el proceso deseante no remite, en primer lugar, al análisis de la capacidad humana de reaccionar a un orden coercitivo o problematizarlo. Tampoco conduce directamente al estudio de cómo las personas se afectan unas a otras mientras persiguen planes culturalmente definidos. Todas estas dinámicas, a pesar de ser muy ricas e interesantes (me ocupé de ellas en el capítulo 5), no justifican completamente mi énfasis en el deseo. Antes de cualquier cosa, el deseo evoca una capacidad potencialmente disruptiva de ser afectado, y no sólo de afectar, atribuir sentido, etc. ¿Ser afectado por qué cosa? Por lo que no es “culturalmente significativo”, aunque pueda llegar a serlo a costa de una laboriosa redefinición del orden vigente en cualquier nivel de la acción social (en la familia, en la fábrica, en la escuela, entre los compañeros de lucha y resistencia, en una colonia agrícola, en una relación interpersonal). Aquello cuyo reconocimiento no ofrece, en principio, acceso a una vida culturalmente significativa suele pasar casi desapercibido en el mundo ordenado de lo cotidiano, siempre cargado de sentidos pre-establecidos. De cualquier modo, el deseo puede captarlo como un posible, o sea, un poder ser que no se

¹¹⁴ Agencia, quizás más que resistencia, es un concepto bien acogido por los antropólogos del desarrollo europeos y estadounidenses. Por lo general, ellos emplean este término para referirse a la capacidad de los sujetos de reaccionar en forma intencionada a los regímenes normativos que los interpelan, desencadenando, así, una eventual transformación de las relaciones sociales en las que están insertos. Para citar dos ejemplos, Tania Murray Li y David Mosse sostienen, respectivamente, que dichas reacciones intencionadas se expresan bajo la forma de demandas que ciertos “agentes” son capaces de hacer frente a las demandas de otros agentes (Li, 1999: 316) y constituyen una especie de uso subversivo de los “guiones autorizados” por los proyectos de desarrollo (Mosse, 2004: 642). Mosse suscribe el modelo de agencia elaborado por Michel de Certeau (2008), para quien las estrategias de poder son inevitablemente vampirizadas por procedimientos tácticos dentro del campo de acción del enemigo. Tales procedimientos permitirían a los dominados tomar en sus manos, en forma parcial y transitoria, las reglas del juego social. Elaboré algunas observaciones preliminares sobre las potencialidades y límites de esta concepción de agencia en Moraes (2015).

piensa como tal a partir de lo que es, sino que exige la redefinición de lo que está dado para volverse alcanzable. El deseo rebota en la “insignificancia” – en aquello que no vale nada para la reproducción de un modo de vida – y vuelve a su punto de partida como intención transformadora, es decir, como formulación de un nuevo plan. Este movimiento intermedia la incidencia de la “insignificancia” en el campo de acción y pensamiento definido por la regla. Naturalmente, cuando “retorna” al *status quo*, el deseo es vivido en el registro de algo parecido a la resistencia, pero su razón de ser no habita la estructura, salvo como algo que ésta no soporta.

Ortner está convencida de que “la resistencia es una de las partes más nebulosas, y obviamente no siempre percibida, de la estructura, pero es, de todas maneras, parte de ella” (Ortner, 2007: 71). Pocas líneas más abajo, en el mismo texto, su certeza parece vacilar: la resistencia, reconoce la autora, es también “ocasionada por una externalidad que no puede ser digerida”. Las externalidades “empoderan a algunos de los sujetos normalmente subordinados y abre la posibilidad de rebeliones, grandes y pequeñas” (ibid.). Me parece que la noción de deseo, tal como viene siendo elaborada en este capítulo, podría explicar el proceso evocado en esa breve vacilación teórica de Ortner. Tal proceso define en sentido fuerte, verdaderamente dialéctico, la subjetivación disidente. Ni agentiva ni resistente, la disidencia remite a la capacidad humana de no renunciar al deseo a pesar de todo – incluso de la “cultura” –, y de empoderarse en el deseo, justamente porque su contenido utópico implica la reorganización de todo un mundo, colocando al sujeto deseante/disidente ante la posibilidad desafiadora de comenzar esta tarea.

6.4 Devenires del deseo: entre el olvido y la política

Valdez fabricaba posibles al margen de las reglas que él mismo y sus compañeros intentaban formular con el fin de proteger lo poco – o lo mucho – conquistado hasta entonces bajo el signo de la búsqueda de una vida mejor. Enunciados como el de este hombre – y fugaces experiencias colectivas de lo indecible, como la ocurrida en la asamblea de Pay Paso, en setiembre de 2015 – no afectaron, en aquel momento, la imperiosa organización del proceso productivo en la más reciente de las colonias del CSA. Su aparición fortuita terminaría relegada al “olvido”, definido por Alain Badiou como el encadenamiento de las “consecuencias átonas”: “el trabajo puramente mundano de los devenires ordinarios” – aunque yo preferiría sustituir “ordinarios” por “ordenados” (Badiou, 2008: 411). En el “olvido”, las consecuencias son átonas porque forman una línea de devenir en la que la comunicación entre la potencia de los cuerpos y los mecanismos del lenguaje tiende a no detenerse: evita confrontarse con un punto de suspensión inescrutable

e invaluable cuyo simple reconocimiento podría reorganizar todo un campo de coordenadas existenciales.

El olvido es la regla, pero su absolutismo sólo es tal en la esfera de la ideología o en la retina de quien observa de lejos. La observación atenta percibe tensiones reveladoras, borramientos de la norma, retracciones momentáneas de la capacidad reguladora de los sujetos. Aquí y allá, potencias indecibles se recusan a ser materia de gestión para las economías morales y libidinales: se sustraen a la distribución racional de los limitados goces de los cuales cada uno sería capaz. Ante estas potencias, un improbable “sí”, una recepción afirmativa de lo que *se presenta* como irreverente – sin antes haber sido *representado* – puede, para volver a las palabras siempre elocuentes de Badiou, “autoriz[ar] que devengamos el héroe anónimo de por lo menos un punto” (ibid.:465). Valdez fue uno de esos héroes anónimos. Sin embargo, su heroísmo no detuvo el devenir-normal que convierte Pay Paso en semejante a otras colonias del CSA.

La cooperativa Helios Sarthou, así como otros establecimientos productivos administrados por ex asalariados rurales, no abdicó de la pretensión de moralizar y normalizar el ausentismo. En el año 2015 y en los años siguientes, los funcionarios del INC y de ALUR fueron llamados reiteradas veces por los dirigentes del emprendimiento para ayudarlos a definir planes de trabajo “justos”, a modo de cristalizar las cuotas de placer y sacrificio autorizadas y exigidas de cada cooperativista en beneficio de la buena salud del negocio colectivo. Escalas de sanciones serían fijadas y planillas de control del ausentismo pasarían a ser utilizadas por la dirección de la cooperativa¹¹⁵. Hasta el final del año 2015, la vigilancia del trabajo y la limitación de los deleites personales aún no se encontraban asociadas a coerciones financieras concretas, pero la posibilidad de aplicarlas estaba al acecho, como una amenaza cada vez más legitimada por el grupo. La última vez que conversé con el presidente de “la Helios Sarthou”, él pronosticó el futuro del emprendimiento con las siguientes palabras: “muchacha gente se va a quedar por el camino, va a ser un grupo más reducido. Dentro de unos años, esto va a estar funcionando como un relojito”.

La fugacidad de lo indecible lo torna prácticamente asimilable a un breve malentendido inherente al normal funcionamiento de la vida colectiva. No estamos, sin embargo, obligados a replicar en la teoría y en el análisis social las consecuencias átonas

¹¹⁵ La aplicación de tales mecanismos de control, que ya habían sido puestos a prueba en otras colonias agrícolas, era estimulada en Pay Paso por los gerentes del CSA. En la Colonia Raúl Sendic Antonaccio algunos grupos de ex asalariados rurales llegaron a establecer descuentos a la remuneración mensual de sus miembros de acuerdo con la cantidad de faltas registradas a lo largo del mes.

del olvido. Nada nos impide reconocer la verdad de la cual lo indecible y su consecuente delirio ofrecen precarios indicios, a saber: que de vez en cuando una dimensión de la existencia aparece irrefrenable y otro mundo puede fabularse en torno a tal revelación. El hecho de que, en el devenir ordenado del cotidiano – y en nombre del bien propio o ajeno – , sea necesario olvidar esa proyección repentina del deseo no excluye, con todo, lo acontecido del dominio de lo realmente posible, sólo lo vuelve *in-existente* al orden: intuición débil de un poder-ser objetivo más allá de las condiciones de realización impuestas por la regla vigente. Volvamos, por última vez, a lo indecible del ausentismo. Retengamos al máximo su fugacidad.

Cuando la pretensión de reglar el ausentismo se volvió transitoriamente imposible, de modo que no se sabía hasta qué punto ausentarse al trabajo era un placer lícito o ilícito, por lo menos una conciencia – pero pueden haber sido varias – se afectó por ese poder-ser desreglado, a-funcional, sustraído al lugar evaluable de condensación de placer o goce. Me refiero a la conciencia delirante de Valdez. En este punto, alguien podría objetar que allí donde yo veo lo indecible y el delirio desreglado, sólo había el choque de dos morales: una sindical, complaciente y permisiva, y otra empresarial, inflexible ante el gasto improductivo de energía y el menosprecio al trabajo eficiente. Como la primera moral ya no era hegemónica – al final, Pay Paso consistía en un emprendimiento agrícola, no en un sindicato rural – y la segunda aún no convencía a todos, se dio un *impasse*, más tarde dirimido por la prevalencia de los criterios empresariales sobre los sindicales en lo concerniente a la organización del trabajo cooperativo. En efecto, estas serían constataciones empíricamente probables en los cuadros teóricos de una antropología moral, pero ellas no cambian en nada el hecho de que haya existido una *situación de indecidibilidad*, objeto privilegiado de la antropología desarrollada en esta tesis. Tal situación se identifica, simplemente, por la sustracción del no trabajo – es decir, del ausentismo – al imperio de inflexibilidad y, consecuentemente, por su entrega incondicional al dominio de la complacencia. Este movimiento absurdo excede, inclusive, una moral sindical, puesto que ésta se expresa a través de la definición de intensidades más o menos aceptables de complacencia en un campo de acción necesariamente expuesto a la incidencia de la inflexibilidad patronal. Sin inflexibilidad, la moral sindical no pudo hacer su economía, de forma que, por un instante enervante, ningún criterio válido tuvo condiciones de limitar el ausentismo. Valdez captó ese instante decisivo y, bajo su regla, deliró otro mundo de posibles. Es sintomático que Valdez haya concluido su trance ya no como empresario o sindicalista, sino como “tupamaro”.

El deseo no se adapta bien al enunciado que lo define como una búsqueda de satisfacciones sancionadas. Su movimiento es el del viajante poetizado por Raúl Sendic en el epígrafe de este capítulo: va “más allá”, sin saber exactamente dónde. Experimenta. Al fin y al cabo, la satisfacción no es la culminación del deseo, sino sólo un punto de sutura que lo bascula en la norma, lo detiene temporalmente en pleno camino sin agotarlo. En su movimiento exploratorio, es el deseo el que excede y agota a la norma porque, a diferencia de ella, es capaz de reconocer objetividades no regladas, expandir los horizontes de la realidad y las condiciones posibles del vivir juntos. Antes que nada, el deseo es una potencia que forcejea el lazo social: lo excede porque lo real es excesivo. Se trata de una capacidad de los sujetos de afectarse por la objetividad de su mundo aun cuando ésta se sustrae a las reglas que moldean la realidad social. En esta condición, el deseo no renuncia a nada: nada le falta, ni siquiera lo que la norma no captura. El deseo, diría Deleuze, “es pensamiento”: “pensar y desear son la misma cosa. La mejor manera de no ver o de rechazar que el deseo es pensamiento, *posición de deseo en el pensamiento*, verdaderamente proceso, es ligar el deseo a la falta” (Deleuze, 2005: 183). El deseo no necesita ninguna “descarga”, “palabra horrible, horrorosa”, diría Deleuze (ibid.). Tampoco su proceso se rige por la expectativa de un goce imposible, realizado en placeres proteicos y circunstanciales. Nada de eso. El deseo es proceso de involucramiento con las multiplicidades rebeldes del mundo y es, también, la enunciación de este proceso en el pensamiento delirante¹¹⁶.

El encuentro con Valdez me permitió narrar el movimiento propio del delirio. Ahora, tal vez corresponda definirlo. Franco Berardi ofrece especificaciones pertinentes al respecto: el delirio es transferencia de la lectura de un plano semiótico a otro; construcción

¹¹⁶ En Marx ya están presentes los rudimentos de esa concepción de un pensamiento que está en la realidad y que, por esta razón, desestabiliza constantemente las coordenadas simbólicas que lo funcionalizan en el marco de la ideología. En *La ideología alemana*, Marx y Engels argumentan que la "masa de los hombres, es decir, el proletariado" no vive de "representaciones": "si esa masa alguna vez tuvo alguna representación teórica, como, por ejemplo la religión, tales representaciones ya se encuentran, hace mucho tiempo, disueltas por las circunstancias" (Marx; Engels, 2007 [1932]: 45). No es que la religión haya sido disuelta por una experiencia práctica que demostró la vacuidad de sus predicados, sino que, desde el punto de vista de quienes viven las "circunstancias", no hay representación, salvo bajo la forma de su continua disolución. Las "representaciones" son agotadas por los procesos colectivos que ellas tendían a agotar, razón por la cual, si adoptamos la perspectiva de las "circunstancias" – y de quienes las viven –, ya no podemos hablar de representaciones, pero sí de la "consciencia" de "individuos prácticos, actuantes" que viven el mundo y están sometidos a los poderes y relaciones que lo configuran (ibid.: 94). Tales relaciones consisten, entonces, en verdaderas experimentaciones de la consciencia que hacen multiplicar formas diversas, y eventualmente antagónicas, de involucramiento con el mundo. León Rozitchner resume muy bien esta perspectiva cuando observa, en un comentario a la *Ideología alemana*, que "una relación en la consciencia es una conexión concreta, [...] pero para el individuo aislado, para el individuo que sólo piensa, una relación, dice Marx, es una idea" (Rozitchner, 2015b: 125). La postura marxiana es la opuesta: una idea es una relación.

de un universo alternativo de asociaciones que reconocen en un existente propiedades negadas a él en la normalidad cotidiana (Berardi, 2013: 131)¹¹⁷. En la jerga deleuzeana, el deseo, identidad de proceso y pensamiento, “constituye su propio campo de inmanencia” (Deleuze, 2005: 187). En otras palabras, tal vez un poco distorsivas, el deseo se coloca bajo la regla de una multiplicidad desreglada y extrae de esa articulación delirante todo tipo de consecuencias, inclusive – pero no necesariamente – un nuevo proceso de subjetivación. Prolongar el delirio en un proceso de subjetivación es algo que depende de las circunstancias. Y las de Valdez no eran muy favorables. En 2015, Pay Paso estaba bajo presión. En la mitad de su segundo año de funcionamiento, la cooperativa Helios Sarthou tenía que hacer lo posible para garantizar buenos índices de productividad si quería continuar recibiendo la financiación de ALUR. El desafío para los cooperativistas era no sólo preservar las plantaciones existentes, sino también ampliarlas, garantizando a la totalidad de sus compañeros un puesto de trabajo remunerado todo el año¹¹⁸. Estas condiciones restringían en la práctica el experimentalismo político, siempre arriesgado y potencialmente improductivo.

El sindicato tal vez pudiera haber sido un lugar más obsequioso para la comunión del delirio a distancia de la vorágine productivista de la colonia. Sin embargo, ésta última venía atravesando una relación conflictiva con los nuevos dirigentes de la UTAA. Desde que el presidente del sindicato censurara duramente a la dirección de la cooperativa por no ofrecer a los peludos contratados durante la zafra todos los implementos de trabajo y seguridad exigidos por el convenio laboral, las relaciones entre UTAA y Pay Paso se volvieron frías y distantes. Esto significaba, básicamente, que la dirección de “la Helios Sarthou”, encabezada por Hernán, había dejado de alentar a los socios del emprendimiento a participar en las instancias de debate político promovidas por el sindicato.

En este escenario desfavorable, los delirios de Valdez terminaron siendo excluidos de la comunión sindical. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con otros colonos que, así como él, también venían tejiendo, de forma más o menos solitaria, sus propias coordenadas

¹¹⁷ La etimología ofrece informaciones sugerentes sobre el delirio. El vocablo "delirio" es un sustantivo derivado del verbo latino delirare, término formado a partir del prefijo de- (que indica alejamiento, privación) y del vocablo lira, cuyo significado es "surco" o "camino". En Bella Unión, una línea de caña plantada se denomina "surco". En el delirio de Valdez, las personas fueron abstraídas de la economía del surco para ser pensadas como agentes para los cuales el trabajo y el no trabajo serían, ambos, posibilidades inestimables gracias a la infinita complacencia de una economía de la abundancia. Literalmente, Valdez "se salió del surco".

¹¹⁸ De los 34 miembros de la cooperativa, solo 20 recibían los "adelantos" mensuales de ALUR en el 2015. Para que todos los cooperativistas se tornaran beneficiarios de ALUR, los cañaverales de Pay Paso deberían expandirse. A su vez, tal expansión dependía, entre otros factores, de que la caña ya plantada recibiera el mantenimiento adecuado y alcanzara buenos índices de rendimiento industrial.

de pensamiento y deseo con respecto a la lucha agraria y los nuevos posibles que ella estaría en condiciones de comportar. Estas personas habían participado en las reivindicaciones agrarias organizadas por el sindicato en los meses previos a la implementación del CSA. En 2015, ellas producían caña de forma individual o cooperativa en Campo Placeres y en la colonia Raúl Sendic Antonaccio. Allí, eran responsables por emprendimientos cañeros relativamente eficientes y acumulaban deudas de miles de dólares con ALUR y el INC. Además de compartir una situación económica parecida, cada cual a su modo también experimentaba lo indecible y el delirio.

En 2015, Pachu decidió dejar de irrigar los cañaverales bajo su responsabilidad porque consideraba abusivo el valor cobrado en la zona por los servicios de irrigación. En pocos meses, este colono, considerado por el consorcio desarrollista como un prototipo de la irresponsabilidad económica y el descompromiso con el trabajo productivo, perdería definitivamente su derecho de acceso a la tierra en Campo Placeres. Sin embargo, en julio de 2015 esto aún no había sucedido y Pachu se encontraba en una situación extraña: estaba en la tierra y virtualmente no poseía caña, ya que sus plantaciones se secaban de modo irrefrenable. A pesar de ser desesperante, tal panorama revelaba una posibilidad antes impensada: permanecer en la tierra sin caña y dedicarse a otras actividades productivas. Sin embargo, Pachu sabía que esta alternativa no era practicable en la esfera del CSA y tampoco constituía el propósito principal de las reivindicaciones agrarias promovidas por el sindicato desde la creación de Campo Placeres. De cualquier forma, él estaba convencido de que las cosas podrían ser distintas: ni la tierra, ni su futuro como productor agrícola estaban atados a la caña.

Contra todas las evidencias, Migue también pensaba lo mismo. Él y Pachu habían comprado algunos cerdos con el dinero que un viejo militante tupamaro les cedió generosamente después de conocerlos y simpatizar con ellos en una actividad sindical promovida en Montevideo. Los animales servirían para formar un rebaño compartido y su carne sería vendida en el mercado local. El plan sonó muy prometedor hasta la noche trágica en que los cerdos grandes fueron carneados y los pequeños robados por cuatrerros que huyeron sin dejar rastros. Con todo, incluso después de la tragedia los dos compañeros intuían que tal vez con recursos abundantes y acuerdos personales basados en proyectos comunes, el trabajo colectivo podría poner a la tierra al servicio de alternativas económicas más allá de la caña de azúcar.

Así como Pachu, Nira también practicaba sus propias contravenciones en el territorio del CSA: hacía años había dejado de pagar el arrendamiento de la tierra al INC.

Sabía que su conducta era irregular, pero también la concebía como necesaria. Al final, si pagaba el arrendamiento tendría que abandonar una cantidad de recursos considerada esencial para vivir con más comodidad de lo que vivía antes de volverse colona. Para Nira, el acceso a la tierra bien podría existir sin la mediación del arrendamiento, como resultado de la simple decisión de “estar en un campo y hacerlo producir”. Evidentemente, una decisión de esta naturaleza no era practicable en el contexto del CSA – ni aun en el territorio uruguayo, teniendo en cuenta la legislación vigente. Siendo así, no pagar la renta de la tierra constituía una elección susceptible de valoración negativa cuya adopción resultaba en una fragilidad jurídica potencial. De hecho, Nira era presionada constantemente por los funcionarios del INC para pagar sus deudas. En estas situaciones, la amenaza preferida consistía en esgrimir la humillante posibilidad de que un futuro gobierno de derecha resolviera “hacer cumplir la ley” en perjuicio de todos los deudores, devolviéndolos a la penuria de tiempos pasados.

La presión del INC dejaba a Nira aprehensiva. Su supuesta fragilidad jurídica actual contrastaba dramáticamente con la fuerza experimentada por ella años atrás, cuando protagonizó, al lado de sus compañeros de la UTAA, la célebre ocupación de tierras de Colonia España (capítulo 3). En aquella época, recordaba Nira, “se decía que la tierra es un bien social que no podés correr el riesgo de perder”. “Cuando ocupamos la tierra – continuaba –, decidimos que aquello era nuestro y ya está”. Desgraciadamente, en el territorio del CSA las condiciones básicas de permanencia en la tierra – a saber: producir caña y pagar el arrendamiento – reintroducían el riesgo de la desposesión agraria, convirtiendo la experiencia de colonización en una especie de estabilidad revocable entre el despojo pasado y el potencial despojo futuro. La incertidumbre de mi interlocutora era evidente: “ALUR no sé hasta cuándo va. Cuando cambie el gobierno, no sé qué va a ser de los productores chicos, como nosotros, que somos arrendatarios del INC”.

Nira estaba convencida de que la superación de las incertidumbres del presente exigía un recomienzo de la lucha agraria en busca de “algo distinto”. Según ella, ese “algo distinto” “sería, ante todo, plantar alimentos, pero con condiciones, con mucho financiamiento y sin pagar por la tierra”. La ambición de reconstruir la experiencia de colonización agraria por fuera de los marcos institucionales del CSA encontraba respaldo en una fidelidad personal a la irreverencia política experimentada por ella a partir del 2006, “en la época de la ocupación”. En el período en que duró la ocupación de tierras, Nira, entonces dirigente de la UTAA, tuvo la oportunidad de viajar a Brasil y participar de

diversas actividades de formación del Movimiento Sin Tierra (MST)¹¹⁹. Cuando volvió a Uruguay, ya estaba “casada con la revolución”. En 2015 ella todavía guardaba en la memoria el vívido recuerdo de una noche de despedida y confraternización en la escuela de formación Sepé Tiaraju, mantenida por el MST en la ciudad de Viamão: “esa noche, hicimos el casamiento con los compañeros que estaban ahí. Pero no es que te casabas con ellos. Te entregaban una alianza de madera y hacías un juramento con el compañero que estaba a tu lado”. Frente a frente, los participantes de la ceremonia “declaraban el compromiso de casarse con la revolución, con la lucha”. Vale aclarar que la militancia del MST utiliza el término “mística” para denominar este tipo de ceremonia en que se torna decible la presencia en el sujeto de una capacidad permanente – a veces latente, a veces manifiesta – de “hacer algo distinto”. Mientras integró la dirección del sindicato, mi interlocutora decidió replicar las místicas junto a sus compañeros de lucha: “cosa de que la gente supiera que aunque el sistema ya está instalado, nosotros siempre podemos luchar para hacer algo distinto”¹²⁰. Tal fue el mensaje que Nira se propuso llevar nuevamente al sindicato en 2015. Además de ese mensaje esperanzador, ella también traía su propio delirio, que versaba sobre un acceso a la tierra sin arrendamiento y por lo tanto sin riesgos ni culpas.

En sinergia con el CSA, las personas construían sub-regímenes de deseo para compatibilizar sus múltiples voluntades de vivir mejor con las rutinas productivas impuestas por la industria azucarera. En este mismo proceso, y por diversas razones, se iban haciendo evidentes algunos puntos de vaciamiento de las formas de existencia y de realización personal o colectiva que serían, al principio, las más ajustadas al complejo. En los hechos, las personas se ausentaban “exageradamente” del trabajo productivo, permanecían en la tierra sin pagar el arrendamiento e, inclusive, dejaban de plantar caña. Cuando esto sucedía, se abrían dos vías para ellas. La primera pasaba por colocarse bajo el imperio de la regla, lo que implicaba vivir la transgresión en el registro de la culpa

¹¹⁹ Estos viajes fueron posibles gracias al apoyo ofrecido a la UTAA por otros movimientos sociales uruguayos, los cuales enviaron recursos financieros a Bella Unión y pusieron a los sindicalistas de la ciudad en contacto con confederaciones internacionales de movimientos populares del campo, como Vía Campesina. Nira llegó a participar en algunas actividades de la Vía Campesina organizadas en Paraguay y Sudáfrica. Sus viajes al exterior le permitieron “hacerme un lugar en el sindicato. Los compañeros me respetan mucho. Siempre que hay una nueva directiva, me llaman y hacen consultas. Yo trato de contribuir al máximo y participar en todo lo que hacen”.

¹²⁰ Nascimento y Martins (2008) se proponen reconstruir los orígenes de la “mística” del MST, que estaría arraigada en un cristianismo popular devoto del “Dios de la Vida”. De acuerdo con los autores, la mística podría pensarse como un encuentro con el Dios de la Vida que “inserta a los sujetos históricos del movimiento [sin tierra] en la vocación permanente de ‘Ser Más’, ser gente que quiere brillar y soñar con una nueva sociedad” (Nascimento y Martins, 2008: 111). El exhaustivo trabajo de Jauve Vallverdú (2012) también es esclarecedor al respecto.

individual y, eventualmente, buscar formas de volver a la normalidad. Esta vía hacía inexistir el vaciamiento posible de las formas de vida, trabajo y producción avaladas por el complejo. Todo sucedía como si nada hubiera pasado o, en todo caso, como si nada pudiera pasar, salvo bajo la forma de irregularidades puntuales, individualizadas y jurídicamente vulnerables. El otro camino era aquel introducido por el deseo: consistía en la acogida en pensamiento de un posible que ya había demostrado ser tal y en su subsecuente afirmación política, independientemente de las legalidades existentes. En este caso, la (nueva) regla estaba por venir, de modo que todo se volvía ampliamente discutible. Otro mundo precisaba ser delirado para reconocer la emergencia y la generalización de un posible intempestivo.

Cada proceso delirante operaba una “crítica inmanente” del CSA. Originado en el ámago del complejo, este tipo de crítica tendía a negar el equipamiento de deseo bajo el signo de posibles desreglados, es decir, de actitudes que no se prestaban a valoración en los cuadros normativos vigentes y, en esta condición, expresaban un llamado a la redefinición de la realidad. El delirio, sin embargo, sólo puede hacerse sujeto – proceso de subjetivación – una vez que fue compartido. En caso contrario, él in-existirá bajo la forma del deslumbramiento individual sostenido por un héroe anónimo (lo que, por sí sólo, ya no sería poca cosa). En 2015 la UTAA, y específicamente su Comisión de Tierras, estaban volviéndose lugares propicios para la comunión del delirio y la prescripción de los posibles. Ese año, en diversos frentes de lucha, una nueva dirección sindical se propuso hacer de lo posible, política. Las consecuencias inherentes a esta decisión, así como las confluencias y los pensamientos necesarios para respaldarla, serán abordados en los capítulos siguientes. Estamos a punto de salir de los territorios del CSA a remolque de nuevas prescripciones políticas, razón por la cual la intervención desarrollista, con sus respectivos efectos de poder y desbordes deseantes, dejará de ser el foco central de mi argumento.

Secuencia fotográfica 2













Capítulo 7

Política de “lucha”

La política de ellos nos llama al trámite. Esta política que les proponemos llama a la lucha.

Sandro



7.1 Separación

Transcurrían las últimas semanas del invierno de 2015. Muy pronto la zafra cañera llegaría a su término. Eran las cinco y media de la mañana y yo esperaba el ómnibus de Pay Paso en la esquina donde la calle Montevideo se encuentra con la Ruta Nacional Número 3. Posicionados en la banquina, algunos cortadores de caña aguardaban el transporte que los llevaría a las plantaciones aledañas. Comían bizcochos y tomaban mate. Dos hombres estaban más adelantados que los demás. Su actitud llamaba la atención: cada vez que un ómnibus se acercaba, abarrotado de trabajadores, ellos hacían señas con las manos, pidiendo que se detuviese. Enseguida, uno de ellos se aproximaba a la puerta del vehículo e informaba sobre la situación: “¡Asamblea de trabajadores por el tema de las elecciones del sindicato!” Se producía entonces un breve murmullo en el interior del colectivo. En algunos casos, los pasajeros resolvían descender, pero la mayoría de las veces los ómnibus seguían adelante, rumbo a los cañaverales. Me arrimé a la pequeña multitud que iba formando una media luna alrededor quienes convocaban la asamblea. Bajo la mirada expectante de una audiencia de cerca de cincuenta personas, los rostros de

Rocha, ex secretario general de la UTAA¹²¹ y acérrimo opositor de la actual directiva, y Acanda, uno de sus correligionarios, estaban iluminados por el foco de una cámara de televisión. El ancla-camarógrafo-reportero del único noticiero televisivo de la ciudad había identificado en la agitación política de aquella mañana una buena pauta periodística para el programa de la tarde: la UTAA estaba dividida.

A las seis de la mañana, Rocha se dirigió a la asamblea. Denunció que las últimas elecciones sindicales, ocurridas en el mes de junio, habían incluido sólo una lista y por esta razón no podrían considerarse democráticas. Afirmó que el plazo para la presentación de candidaturas fue insuficiente y argumentó a favor de una nueva elección. Mientras hablaba, la moto de Tablada, un integrante de la nueva comisión directiva de la UTAA, se aproximó lentamente a la asamblea. Tablada estacionó a algunos metros de la aglomeración, descendió de la moto y permaneció allí de brazos cruzados. Rocha percibió su presencia y solicitó, enérgicamente, que se manifestase al respecto de la propuesta de convocar a nuevas elecciones. Acorralado, Tablada informó que no había ido a la asamblea en representación de la directiva del sindicato, sino sólo en condición de un trabajador más, interesado en conocer el propósito de la reunión antes de partir para el corte de caña. También aclaró que personalmente se había posicionado a favor de la concesión de plazos más largos para la realización de las elecciones de junio, pero recordó que las asambleas sindicales convocadas en aquella época decidieron no prorrogar la fecha de la votación. Concluyó su intervención reiterando que las asambleas de la UTAA son soberanas e invitando a los críticos de la actual Comisión Directiva a que se presentaran a elecciones dentro de dos años. Sus últimas palabras fueron soterradas por los abucheos de un público mayoritariamente comprometido con las posiciones de Rocha. Acanda levantó la voz en medio del alboroto: “¡Vamos a nuevas elecciones! ¡Ya está!” “¡Votemos, entonces!”, gritó alguien. Rocha se dirigió a los presentes: “que alcen las manos los que quieren elecciones”. El resultado era más que previsible: participar en aquella asamblea significaba, desde un principio, declarar un voto de confianza a las posiciones de quien la había convocado.

Hacia meses Rocha venía haciendo abierta oposición a los nuevos dirigentes del sindicato. Denunciaba su inexperiencia, su incapacidad de negociar conflictos en las plantaciones y su prejuicio con relación a los pequeños productores de caña provenientes de las bases de la UTAA. Rocha también levantaba sospechas sobre los intereses políticos de los dirigentes electos en junio de 2015: especulaba sobre la fidelidad de Sandro –

¹²¹ En el capítulo 5 relaté en qué circunstancias Rocha se convirtió en secretario general de la UTAA (apartado 5.1) y cuál fue su línea de acción en lo relativo a las políticas agrarias del CSA (apartado 5.3).

entonces secretario general de la organización – al Partido Comunista y sobre su supuesta intención de alinear el sindicato con el gobierno frenteamplista. Asimismo, denunciaba la pertenencia de Emilio al derechista Partido Colorado y acusaba a Tablada de estar al servicio de los intereses del Partido Socialista. Sus desconfianzas y posiciones críticas frente a la nueva comisión directiva recibieron la adhesión de diversos delegados sindicales en las plantaciones, apartándolos de las reuniones semanales de la organización. Esta situación había redoblado las tareas de los dirigentes de la UTAA, obligándolos a recorrer personalmente las chacras cañeras para fiscalizar el cumplimiento del convenio laboral y escuchar las demandas de los trabajadores.

El mismo día de la asamblea organizada por Rocha, los integrantes de la Comisión Directiva de la UTAA se reunieron para adoptar una posición definitiva en relación a las exigencias planteadas por su opositor. La rutina sindical se había vuelto extenuante a tal punto que Emilio estaba dispuesto a convocar una asamblea general para pautar la posibilidad de nuevas elecciones. Tablada sostenía una posición semejante: “tal vez deberíamos ofrecer una nueva elección al grupo que la reivindica...” Sandro estaba titubeante. Marco era el más intransigente: para él la asamblea realizada por la mañana era “irregular” porque había sido convocada a espaldas del sindicato. Siendo así, la única actitud pertinente sería ignorarla. En caso contrario, Marco estaba dispuesto a retirarse de la Comisión Directiva, pues entendía que abrir las puertas del sindicato a las posiciones de Rocha era renunciar a los cambios que los actuales dirigentes se habían propuesto realizar. Beti estaba de acuerdo con Marco: durante la tarde, en diálogo con los “peludos” de su “grupo”¹²², había constatado que los trabajadores seguían confiando en la Comisión Directiva. Si esto era verdad, entonces no habría razones para preocuparse: la dirección sindical estaba legitimada. El relato de Beti apaciguó a los demás dirigentes. Tal vez fuese justamente eso lo que ellos deseaban oír en aquel momento de incertidumbre. Sandro finalmente tomó posición a favor de “darle para adelante” y no hacerle concesiones a Rocha. Emilio argumentó que la postura negociadora podría ser la más recomendable para evitar la división de los trabajadores, “pero si la mayoría quiere mantenerse firme, probemos así entonces”. Para Tablada, aceptar discutir públicamente sobre la posibilidad de una nueva elección legitimaría todavía más la actual Comisión Directiva y facilitaría la actividad sindical. Él seguía siendo partidario de la idea de conversar con Rocha y evaluar la posibilidad de convocar, todos juntos, a una nueva asamblea general. Conciliador,

¹²² Durante la zafra, Beti trabajaba fiscalizando el cumplimiento del convenio laboral en un grupo de cortadores de caña contratados por una empresa tercerizada que realizaba servicios de cosecha para ALUR.

Sandro le hizo caso y se comprometió a invitar a Rocha a una negociación en la sede del sindicato. Mientras esto no sucediera, las cosas continuarían como estaban y ninguna elección sería organizada.

Rocha no aceptó negociar con la directiva de la UTAA. Según declaró a la prensa local, las deliberaciones ya habían sido realizadas en asamblea y el sindicato tenía que cumplirlas. Había muchas sospechas y rencores entre los nuevos y los viejos dirigentes de la organización como para que, en aquel momento, lograran negociar sus controversias. Un creciente abismo se abría entre Rocha y sus críticos desde que, algunas semanas antes de la elección de junio, él abandonara furioso la sede del sindicato luego de escuchar de otros militantes – entre ellos Sandro – la acusación de ser excesivamente flexible con la patronal y usar los fondos sindicales de manera indebida. Los detractores de Rocha aprovecharon su alejamiento temporal de las rutinas de la organización para construir una lista que triunfó sin oponentes en las elecciones de junio. Después de ocho años como el principal referente del sindicato, Rocha se vio repentinamente en el papel de opositor.

Sandro y los demás dirigentes de la UTAA consideraban a Rocha “un caudillo” inclinado a utilizar la estructura del sindicato con el objetivo de mantenerse en el comando por tiempo indefinido. En la perspectiva de Tablada, se trataba de un “mandamás” que movilizaba los recursos financieros y las conquistas políticas de la UTAA para fortalecer lealtades personales. El hecho de Rocha haber sido beneficiado por la política agraria del CSA, volviéndose titular de una pequeña fracción de tierras en Campo Placeres, era interpretado por los nuevos dirigentes como algo problemático. Según ellos, Rocha estaba en potencial conflicto de intereses con “los peludos”, dada su condición de “pequeño productor”. Esta sospecha era reforzada por la firma, durante sus últimos años al frente de la organización, de un convenio laboral considerado tímido por algunos trabajadores. Finalmente, pesaba sobre el principal oponente de la nueva Comisión Directiva una acusación con la cual la misma también tendría que lidiar varios meses más tarde: la de utilizar recursos financieros del sindicato para gastos personales. Independientemente de ser fundamentadas o no, las recriminaciones dirigidas al antiguo secretario general de la UTAA evidenciaban algunos de los énfasis y preocupaciones que orientarían el trabajo de los nuevos cuadros políticos de la organización en el inicio de su mandato. A partir de entonces, la nueva Comisión Directiva propondría la descentralización del liderazgo y la multiplicación de los frentes de lucha; promovería un clasismo intransigente entre los cortadores de caña e identificaría una fuerte contradicción entre las experiencias de acceso

a la tierra aseguradas por el CSA y la prerrogativa sindical de combatir las formas de explotación del trabajo inherentes a la producción cañera.

Un domingo de mañana, pocos días después de la polémica asamblea convocada por Rocha, salió al aire una edición más de “La voz de UTAA”, el programa radial transmitido semanalmente por el sindicato. En esta transmisión, la Comisión Directiva rompió abiertamente el diálogo con su oponente y reiteró algunas apuestas programáticas fundamentales. Cabe citar largos pasajes del programa en cuestión para introducir el pensamiento de la política que comenzaba a ponerse a prueba en aquel inicio de primavera:

Tablada: No pensábamos hablar de la movida que se está haciendo en las chacras por el tema de las elecciones. Elecciones que ya se dieron. Para nosotros, esto ya está definido, pero, lamentablemente, nos enteramos que están saliendo en los medios de prensa y las chacras para plantear otra vez lo de las elecciones. Es una división lamentable. Pero debemos reafirmar que las elecciones [de junio] fueron transparentes. No se pueden imponer nuevas elecciones de pesado. Hay mucho que hacer y no es el momento de perderse en conflictos internos interminables.

Marco: [...] que quede bien claro, compañeros: esto es un sindicato de trabajadores. De cortadores de caña. Esto no es un sindicato de patrones. Se terminó esto, compañeros.

Sandro: Compañeros, hay desmovilización. Hay gente que dice que no deberíamos hablar eso, pero ¿cómo no? El norte se desmovilizó. Hay que empezar a pelearla, a lucharla, pero no solamente por salario, sino también por trabajo. Ahora se habla de crisis en todo el país, pero en el norte, ¿hace cuántos años que se viene hablando de crisis? [...] La tierra hay que seguirla peleando, pero con condiciones. Hay compañeros que han accedido a la tierra y hoy están en el horno [...] claro que a estos compañeros los invitamos a tratar de todos los temas legales y a elevarlos ante el Instituto [Nacional de Colonización], ante ALUR, ante lo que sea. Pero sin lucha, compañeros, tenemos que convencernos de que no hacemos nada. La política de ellos nos llama al trámite. Esta política que les proponemos, llama a la lucha. Estamos hablando de una nueva movilización. Que no solamente se movilice al pueblo, sino que tranquemos hasta que haya una respuesta. Si hay que cortar alambre, vamos a cortar alambre, compañeros [...] [En este momento] venimos bien, hay zafra y todas las semanas tenemos un pesito. Pero en octubre, noviembre, ya se termina y lo que hicimos en ese repecho, con sudor, en enero ya lo perdimos porque estamos vendiendo lo poco que hacemos. ¿Hasta cuándo la clase trabajadora tiene que seguir soportando el látigo? Se llenan de razón los políticos diciendo que inyectaron no sé cuántos millones en el norte. No lo vimos, compañeros. Cuando finalmente sale un proyecto social, ya no lo quieren [encarar] como social. Para ellos, es un proyecto productivo [...] Lo que pedimos, la clase trabajadora, no es solamente salario, no son solamente condiciones en las chacras. Hay compañeros que no lo entienden. Pedimos que se reabran las agroindustrias, vamos a tener que estar juntos para seguir peleando por tierra [...] El pueblo tiene que estar unido. El almacenero, el comerciante, el peluquero, el del quiosquito, el del almacén popular del barrio. Es por ahí que se pelea. Otros sindicatos del sur ya nos están dando una mano, al igual que los compañeros de la universidad. También los compañeros extranjeros que vienen para el norte. ¿Para qué vienen? ¿Para pasear? No. Vienen a ver cómo seguimos para adelante con eso [...] Quiero también saludar a los compañeros de las colonias que se están acercando. Solos no vamos a ninguna parte.

Así como ya había sucedido en el modo popular (capítulo 3), en 2015 la nueva Comisión Directiva volvía a presentar a la UTAA como un sindicato de trabajadores. Sin

embargo, ahora el clasismo no chocaba con los “gurises de la universidad”, pero sí con los dirigentes sindicales beneficiados por la política agraria del CSA. A su vez, los trabajadores eran identificados no sólo como personas que reivindicaban buenas condiciones de trabajo, sino también como artífices de la creación de nuevas fuentes laborales, inclusive más allá de la agroindustria azucarera. La “zafra seca”¹²³ era descrita como una situación potencialmente superable que exigía el desarrollo de nuevos énfasis productivos en la economía local. Este tipo de transformación económica podría ser proporcionado por la promoción del acceso a la tierra, “pero con condiciones”. La reivindicación agraria propuesta por los nuevos dirigentes de la UTAA debería ocurrir en el horizonte de la “lucha”, y no en el del “trámite”, constituyendo el corolario de la política propuesta por el sindicato tanto a los pequeños productores y trabajadores golpeados por la zafra seca, como a los comerciantes de los barrios populares, cuya estabilidad financiera dependía de la capacidad de consumo obrera.

Las líneas generales de la política sindical reivindicada en 2015 venían actualizándose en diferentes procesos de interlocución que absorbieron intensamente los esfuerzos y las atenciones de la Comisión Directiva de la UTAA durante sus primeros meses de mandato. La “batalla de Green Frozen” (capítulo 1) fue una de las primeras circunstancias concretas en las cuales la nueva dirección sindical puso a prueba su énfasis en la “lucha” en detrimento de la “gestión” o el “trámite”. En aquella ocasión, luchar implicó posicionarse de manera intransigente contra el cierre de la fábrica y reunir fuerzas para ocuparla, preparándose estratégicamente para un eventual enfrentamiento con la policía. Durante algunos días, los mismos operarios que, antes de reunirse con la UTAA en la “casa de Sendic”, disputaban un programa mínimo, basado en la reivindicación de salarios atrasados e indemnizaciones laborales, elevaron al máximo sus apuestas: protagonizaron una huelga de hambre y llegaron a trabajar abiertamente con la posibilidad de asumir el control de la industria. Durante la “batalla de Green Frozen”, Sandro estaba regocijante. Este ex militante del combativo SUNCA renunció a sus horas de descanso junto a la familia, e incluso a sus atribuciones de dirigente de la UTAA, para acompañar de cerca la “movida en Green” y profesar la “lucha” en las asambleas y reuniones con los trabajadores de la horticultura. A pesar de estar visiblemente cansado, Sandro logró mantener su entusiasmo impertérrito durante todo el período de ocupación de la fábrica. Desde temprano era posible encontrarlo mateando con los trabajadores de Green Frozen y

¹²³ Como vimos en el capítulo 4, la “zafra seca” abarca un período que va desde noviembre hasta junio y que está marcado por una dramática reducción de la demanda de fuerza de trabajo en Bella Unión.

respaldando sus inclinaciones más combativas, mientras garabateaba distraídamente la hoz y el martillo en los márgenes de sus cuadernos de anotaciones.

La batalla de Green Frozen no surtió los resultados esperados por Sandro y sus compañeros de organización. En plena vorágine de la zafra cañera, la UTAA no tenía condiciones de mantener una agitación política constante en el patio de la fábrica ocupada, de modo que, con el paso de los días, las consignas sustentadas por Sandro en alianza con los trabajadores de la horticultura terminaron cediendo lugar al “trámite”. El ambicioso horizonte de la autogestión obrera perdió definitivamente su territorio de realización cuando las estructuras fabriles fueron nuevamente devueltas al propietario de la empresa a cambio de un compromiso negociador que no llegó a buen término. A pesar de haber perdido repercusión entre los trabajadores de Green Frozen, las categorías de la política ensayadas por la nueva directiva siguieron repercutiendo y complejizándose en otros espacios de movilización. Como veremos a continuación, esto sucedió especialmente en dos lugares de la política: la agitación comunitaria impulsada por Emilio en los asentamientos populares de Bella Unión y la nueva Comisión de Tierras de la UTAA.

7.2 Lucha y gestión. Estado y gobierno.

Emilio situaba el origen de su compromiso con la causa de los asentamientos urbanos de Bella Unión en una tarde del año 2014, cuando recibió la visita de un pariente que traía una propuesta tentadora: quería comprarle la vivienda por cerca de 12.000 dólares. Eran épocas de zafra seca y Emilio necesitaba plata, de modo que estudió la propuesta durante algunos días, antes de rechazarla definitivamente. Su casa estaba ubicada en la última calle que integra la retícula urbana formal del barrio Tres Fronteras en dirección al este. Del otro lado de la calle de tierra, yacían los restos de las vías del tren que otrora unía Bella Unión y Salto. Más allá de los rieles, se extendían algunas propiedades rurales utilizadas intermitentemente para la agricultura. Mientras evaluaba la posibilidad de vender su casa, Emilio llegó a comentar con el potencial comprador que, si el negocio prosperaba, él construiría una nueva residencia en los terrenos de enfrente, donde pasaban los rieles del tren. Algunos vecinos que acompañaban la charla le preguntaron si no sería ilegal construir una casa en aquellos terrenos. Emilio argumentó que se trataba de tierras públicas, pertenecientes a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), y agregó que la Constitución Nacional garantizaba a todos los uruguayos “el derecho a una vivienda digna y decorosa”. Siendo así, no podría haber ningún problema en

poner los recursos del Estado al servicio del cumplimiento inmediato de un derecho fundamental previsto en la carta magna.

Emilio decidió no vender la casa en la cual residía desde chico. De todos modos, la idea de utilizar los terrenos de enfrente para la construcción de viviendas ya estaba lanzada y llamó la atención de los vecinos de la zona. No demoraría mucho para que volvieran a reunirse con Emilio: querían confirmar la promisoriosa posibilidad que él había anunciado distraídamente algunos meses antes. “¿Pero entonces quiere decir que somos unos giles? – le habría comentado un vecino – ¿Qué estoy haciendo hacinado en la casa de mis viejos?” Otro visitante fue directo al punto: “che, Emilio, si nosotros ocupamos, ¿vos nos ayudás a defender la ocupación?” En 2014, Emilio era delegado sindical en un grupo de corte de caña, posición que lo convertía en un referente político para los habitantes del barrio cuando se trataba de organizar reivindicaciones colectivas. En estas circunstancias, él aceptó el pedido de colaboración de sus vecinos y se propuso planear la toma de los terrenos de AFE.

La ocupación de las antiguas vías del tren comenzó durante un feriado. Cuatro casas de madera fueron construidas delante de la residencia de Emilio, del otro lado de la calle. La noticia se diseminó como el fuego en el cañaveral. Nuevos interesados en ejercer su derecho a la “vivienda digna” llegaron en gran número al nuevo asentamiento. Cierta día, Emilio recibió la visita de un señor “que andaba peleado con la esposa y quería mudarse”. Este señor pretendía saber si el entonces delegado sindical estaba distribuyendo lotes de tierra en aquella parte de la ciudad. En caso afirmativo, quería consultar sobre el costo de los terrenos. “Los terrenos están ahí nomás – le habría dicho Emilio –, es sólo tomarlos. El precio es el precio de la necesidad”. En pocos meses, centenas de personas se fueron instalando a lo largo de las antiguas líneas férreas. El asentamiento organizado por Emilio fue el punto de partida para la concreción de otras ocupaciones de tierras, estas últimas impulsadas por grupos de vecinos que no necesariamente tenían relaciones con el primer núcleo de ocupantes. Cuando Juliana y yo nos mudamos a Bella Unión, la ocupación se extendía por varios kilómetros, llegando prácticamente hasta los márgenes del río Cuareim, en la frontera con Brasil.

Durante el año 2014, Emilio y sus compañeros en el asentamiento hicieron una intensa campaña por el derecho a la vivienda en Bella Unión y no dudaron en denunciar lo que consideraban una falta de compromiso de los cuadros políticos locales del Frente Amplio respecto de la lucha por la regularización de las ocupaciones de tierra. A principios del 2015, Uruguay realizó elecciones municipales. En este contexto, algunos candidatos

del Frente Amplio que tenían ambiciones de volverse concejales¹²⁴ del municipio decidieron apartarse de compromisos políticos controvertidos, llegando a solicitar que Emilio guardara su radicalismo para el período poselectoral. Esto lo puso furioso. Él no admitía que la problemática de los asentamientos fuera tratada por la dirigencia frenteamplista como algo a ser escondido:

Vos no te olvides – me contaba Emilio – que nosotros, en esta zona, somos todos tupamaros. Tupamaros hasta las manijas. Todos frenteamplistas. Y aun así [los liderazgos del Frente Amplio] me decían que yo era un atropellador político porque estaba al frente de una ocupación en plena campaña electoral y porque decía que había necesidad, siendo que ellos estaban planteando una maravilla que no era.

Frustrado con las críticas recibidas de algunos referentes del Frente Amplio, Emilio tomó una polémica decisión que más tarde sería evocada por Rocha para deslegitimar su presencia en la dirección del sindicato: “Yo les dije: ‘¿quieren ver lo que es atropello? Me meto adentro del Partido Colorado’”. Ávidos por tener influencia sobre el electorado pobre de Bella Unión, los dirigentes del Partido Colorado no sólo aceptaron la afiliación de Emilio, sino que también permitieron que se candidateara a alcalde en las elecciones de mayo de 2015. Fue a través de un partido tradicional que la enunciación intransigente del problema de la falta de vivienda se volvió audible en las elecciones municipales de Bella Unión.

Durante todo el año 2015, quien visitara la ciudad con ojos atentos encontraría en muchos postes las placas que Emilio preparó en el patio de casa para difundir su candidatura. La pieza publicitaria tenía estampada, con spray rojo y stencil, el nombre y el número del candidato: “Vote el peludo Emilio alcalde 130000”¹²⁵. “¿Viste que mi número empezaba con 13?”, me preguntó Emilio una tarde mientras tomábamos mate en su casa. “Si – le respondí –, me preguntaba si lo habías elegido vos”. “¡Pero claro! Vos que sos brasilero tendrías que saberlo. ¿El 13 no es el número del pueblo, de los revolucionarios, de Lula allá en Brasil? Por eso lo elegí”. Desde las elecciones presidenciales de 1989, el Partido de los Trabajadores brasilero (PT) utiliza el número 13 para identificar a sus candidaturas en todos los niveles de gobierno. Para Emilio, este número funcionaba como un código, tal vez destinado más a sí mismo que al electorado bellaunionense: 13 era el número de un indeclinable compromiso “tupamaro” que la afiliación al Partido Colorado no podía atenuar. Mi interlocutor explicaba esta situación paradójica con una metáfora futbolística: “por ejemplo, si vos sos de Nacional y tenés que cumplir una función en

¹²⁴ Desde el año 2009, los municipios uruguayos están gobernados por órganos de cinco miembros. El presidente del órgano recibe el título de "alcalde" y los demás miembros el de "concejales".

¹²⁵ Los cuatro últimos dígitos de este número son ficticios.

Peñarol, vos lo hacés, aunque seas de Nacional”. En las elecciones de 2015, era importante no sólo sostener el valor político de la ocupación de los terrenos de AFE, sino también presentarla como una pauta digna de ser discutida socialmente. Si, dadas las circunstancias, esta función sólo podía desempeñarse en el Partido Colorado, pues entonces habría que hacerlo, pero sin dejar de vestir la camiseta número 13.

Faltaron pocos votos para que Emilio se volviera miembro de la junta municipal de Bella Unión. Sin embargo, en junio de 2015 él finalmente ganó las elecciones que lo pusieron “en el lugar donde tenía que estar”: la Comisión Directiva de la UTAA.

Ahora – reflexionaba Emilio –, creo que ya estoy en el lugar que me corresponde, no por un sueldo, sino por el mismo ego de uno. El ser humano, en sí, se mueve por intereses. Creo que el ser humano no se mueve si no tiene un interés personal. Por ejemplo: mi interés no es económico; mi interés es perseguir algunas ideas que tengo. Siento que estoy en el lugar que corresponde para poder hacerlo. En UTAA, uno mismo puede hacer mucho más que en cualquier otro sector político. Hasta adentro del mismo Frente Amplio no voy a lograr hacer la mitad de lo que yo quiero hacer aquí. Quiero luchar por la tierra y buscar la mejor calidad de vida para la gente. ¿Qué gestión? Si acá nosotros hablamos de lucha.

Desde el mes de setiembre de 2015, la UTAA comenzó a seguir de cerca la lucha por la vivienda en los asentamientos bellaunionenses, pasando a reivindicarla como una de sus principales preocupaciones políticas. “Tierra para el que la trabaja y tierra para el que la habita” fue la consigna propalada en los programas de radio dominicales y promovida intensamente junto a los ocupantes de los terrenos de AFE. Para entonces, la movilización del asentamiento era compacta y ágil. Ante cualquier amenaza jurídica o policial, se formaban voluminosas asambleas frente a la casa de Emilio para discutir las soluciones posibles. En estas reuniones, oradores eufóricos reiteraban la legitimidad de la ocupación y grupos *ad hoc* eran nombrados para resolver las tareas más urgentes en cada ocasión. Había comisiones para contactar abogados, elaborar registros actualizados de los vecinos, escribir cartas a AFE y solicitar a la municipalidad la instalación de servicios básicos en el barrio.

A partir del compromiso con la lucha por la vivienda, Emilio fue construyendo un pensamiento político que encontraría adhesión y repercusión no sólo entre los miembros de la nueva directiva de la UTAA, sino también entre aquellos que se sumarían a las apuestas colectivas de la organización durante la segunda mitad de 2015, incluido yo. En sus discursos en las asambleas de vecinos, y también en nuestros diálogos personales, Emilio se esforzaba por definir la lucha de los asentamientos mediante una exposición de la naturaleza de la relación entre “gobierno” y “pueblo”. Sus teorías fueron modificándose con el paso de los meses. A mediados de 2015, Emilio solía referirse a los “políticos”

como “representantes” cuya función sería la de hacer cumplir los “derechos” de los ciudadanos a través de la movilización rápida y eficiente de los recursos públicos. En estas cavilaciones los “representantes” eran quienes estaban básicamente encargados de mejorar la vida del “pueblo”. Para el mes de setiembre, dicha perspectiva empezaba a redefinirse. La complementariedad entre “representantes” y “pueblo” – o “ciudadanos” – daba lugar al énfasis en una oposición entre nociones bastante singulares de “Estado” y “gobierno”. “El Estado – me explicaba Emilio – son los mismos ciudadanos uruguayos y el gobierno está formado por los políticos al servicio del Estado”. Cuando se organizan, los ciudadanos se convierten en “Estado” y adquieren la capacidad de incidir sobre la actividad de los “políticos”. La acción del “Estado” – es decir, del pueblo y de los ciudadanos – sería “autónoma”, aunque debiese buscar respaldo en la Constitución. Según Emilio, “la Constitución es lo importante. Todas las otras leyes pueden contestarse”.

“Nosotros somos el Estado – declaraba Emilio en una asamblea del asentamiento –, somos ciudadanos uruguayos y tenemos que mostrarle a los políticos que somos gente, no animales, y tenemos derechos”. Amparado en la Constitución, el Estado en lucha decide la soberanía de lo político sobre lo legal. Por ejemplo: si la constitución garantiza el derecho a “una vivienda digna y decorosa”, entonces este derecho puede ser asegurado por la “lucha” y puesto en práctica inmediatamente a través de la ocupación de tierras urbanas. De este modo, las medidas represivas avaladas por la ley que tipifica el “delito de usurpación” pierden toda legitimidad teniendo en cuenta la decisión del Estado – siempre en los términos de Emilio – de hacer cumplir sus derechos constitucionales con fuerza propia.



Ilustración 8: En 2015, las cámaras fotográficas de Google recorrieron Bella Unión. Sus lentes capturaron los rastros de la lucha en el asentamiento del barrio Tres Fronteras. Delante de una casa de madera, el cartel de UTAA cita el artículo 45 de la Constitución: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.

De acuerdo con Emilio, “gestión” no se confunde con “lucha”, aun cuando ambas puedan existir en forma concomitante. Mientras “lucha” dice respecto a la aplicación inmediata de las garantías constitucionales, “gestión”, a su vez, se relaciona con la negociación y la defensa, en los términos de la “burocracia”, de lo que ya fue conquistado y asegurado mediante “lucha”. Sin embargo, ninguna negociación puede poner en jaque lo que en la lucha se dispuso como posible, pues esto significaría negar al Estado (i.e. el pueblo) su autonomía de reconocer, afirmar y realizar los propios derechos. Volvamos a las palabras de Emilio:

Nosotros sabemos ver cuál es la necesidad y plantearla. Lo hacemos a través del movimiento. Movimiento popular. Sí, está bien, tenemos que hacer la gestión, porque si no después nos dicen: “rompieron alambre, pero no fueron capaces de avisar”. Por eso hacemos la gestión. Pero enseguida viene la lucha. La burocracia es la gestión. La burocracia frena el desarrollo de las condiciones de vida y de los intereses de la población. La burocracia va a favor de la parte que no es a favor de la parte del trabajador. La gestión te lleva a la burocracia y la medida de lucha te lleva a la acción inmediata.

Las categorías de la política que Emilio fue formulando en medio del compromiso con la lucha de los asentamientos – y más tarde en diálogo con sus compañeros en la dirección de la UTAA – entraban en tensión con una tendencia identificada por él en la relación de la izquierda partidaria con sus supuestas bases sociales. Durante la adolescencia, mi interlocutor fue invitado por los dirigentes locales del Movimiento de Participación Popular (MPP)¹²⁶ a participar en cursos de “capacitación” en Montevideo. En la capital del país, Emilio aprendió que la tierra pertenecía a los más pobres, que los recursos naturales del país deberían ser nacionalizados y protegidos, que las multinacionales ofendían la soberanía uruguaya y que el imperialismo yanqui negaba la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en los últimos diez años de gobierno progresista, la tierra pasó por un proceso significativo de concentración, la expansión de los montes de eucalipto agredió el suelo, las multinacionales recibieron innumerables ventajas para operar en el país y algunas fuerzas políticas importantes al interior del Frente Amplio llegaron a coquetear con la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. “La desilusión es inevitable”, constataba Emilio: “con el paso de los años – proseguía –, me fui dando cuenta de que lo que ellos [los políticos del Frente Amplio] necesitaban era esta generación que después iba a votar. Era esta generación que ellos querían... y bueno, lo lograron”.

¹²⁶ El MPP es un sector político mayoritario del Frente Amplio. En sus primeros momentos de existencia, fue impulsado por ex militantes de MLN-T, entre ellos José Mujica.

A pesar de haber dejado en segundo plano las “políticas revolucionarias”, Emilio evaluaba que los gobiernos del Frente Amplio ofrecieron buenas respuestas a su generación que, “en medio del rancherío, pensaba si un día iba a tener derecho a una casa, a una televisión, porque ni eso teníamos”. Mientras tanto, el reverso de esta mejora sustancial de las condiciones de vida de los más pobres fue el “conformismo”:

Nosotros venimos acostumbrándonos al sistema [...], nos venimos parando de a poquito. Y también viene el conformismo. Vos te empezás a parar y después te quedás quieto [...] pero después empieza de nuevo el tema de la falta de trabajo y no estamos preparados para luchar. Esperamos que el sistema político nos alimente, vamos perdiendo la dignidad de seguir reclamando por nosotros mismos.

Para Emilio, la UTAA era el lugar en el que retomar la “lucha por la dignidad”, que encontraba una de sus expresiones más promisorias en la histórica “lucha por la tierra”:

La lucha por la tierra significaba eso: estamos hablando de que vos puedas sustentarte, de que vos puedas ser dueño de tu nariz con un pedacito de tierra. Pero hay que luchar por la tierra con condiciones, garantizándole máquinas a la gente, dándole años de gracia [sin pagar arrendamiento] y diversificando [la producción]. Acá en Bella Unión no se plantaba sólo caña, también se plantaba comida [...] esto sería una inversión para sacar a la gente adelante. Pero, ¿qué pasa? Esto [el Proyecto Sucroalcoholero] dejó de ser un proyecto social para ser un proyecto productivo.¹²⁷

Emilio creía que los “desvíos” del proyecto de desarrollo del progresismo en el norte del país se debían a la incorporación de militantes de diversas organizaciones sociales a “cargos gerenciales” sometidos a los intereses políticos del gobierno: “el Estado, como Estado, hizo lo que tenía que hacer. Metió a todos los Che Guevara que había en distintas organizaciones por ahí, desparramados por el Uruguay, en cargos gerenciales. Entonces [esto responde a] intereses políticos del gobierno”. Como dirigente de la UTAA, mi interlocutor esperaba ofrecer a los “Che Guevara” de la zona otro espacio para discutir sus ideas: el espacio creativo de la “lucha”, que desafiaba obstinadamente “el poder burocrático de encajonar, de guardar las cosas en el cajón”, para hacer que “viejas consignas empiecen a vivir”.

Fabián era uno de esos “Che Guevara” que agitaba los barrios populares de Bella Unión. No llegué a conocerlo tan bien como a Emilio, pero supe que él había participado en varias ocupaciones de tierra, tanto en la ciudad como en el campo, y que frecuentaba intermitentemente el ambiente sindical. En 2015, Fabián vivía en un asentamiento próximo de aquel que Emilio había ayudado a organizar un año antes. Ambos militantes sumaban

¹²⁷ En el capítulo 4 (especialmente en el apartado 4.1) argumento que el Proyecto Sucroalcoholero fue respaldado por el movimiento sindical de la UTAA en la medida en que pudiera demostrar una clara faceta “social”. Esto significaba que las inversiones proporcionadas por ALUR deberían ponerse al servicio de la solución de demandas importantes para el sindicato, como el combate contundente al desempleo mediante la distribución de tierras.

sus esfuerzos para visibilizar la lucha de los asentamientos y colaborar con la defensa de las conquistas obtenidas hasta entonces. Las inclinaciones políticas de Fabián convergían con las de Emilio. Él enfatizaba constantemente la necesidad de que los “movimientos sociales” constituyeran “plataformas propias”, sin asesoramiento de los funcionarios del Estado. Todos los medios requeridos para la formulación y la tramitación de demandas colectivas deberían obtenerse por los grupos interesados, de modo de evitar la recepción de “favores políticos”. La palabra “revolución” aparecía con frecuencia en las intervenciones de Fabián. Para él, “revolución” se refería a la acción política de las “organizaciones populares” y no describía, necesariamente, un evento específico, pero sí un “campo” de acción en el cual la “lucha” podría o no transcurrir. Hacer “revolución” era estar en el “campo de la revolución”, lo que implicaba preservar la mayor autonomía posible frente al Estado y los partidos políticos a la hora de construir exigencias colectivas. Como las demandas de las organizaciones populares podrían llegar a ser muy radicales y sus métodos de lucha incompatibles con la ley vigente, Fabián consideraba necesario actuar en la “ilegalidad”, que desde su perspectiva era la informalidad jurídica. En términos prácticos, la “ilegalidad” implicaba que las “organizaciones populares” instaladas en el “campo de la revolución” no deberían poseer “personería jurídica”, evitando, de este modo, eventuales procesos judiciales derivados de su participación en medidas combativas como la ocupación de tierras.

La discusión sobre tramitar o no la personería jurídica ha tenido una larga trayectoria en la UTAA. Han sido muchos los argumentos a favor y en contra de la formalización del sindicato, de acuerdo con las necesidades impuestas por cada coyuntura. Eventualmente, la personería jurídica fue defendida como una necesidad para poder gestionar recursos financieros junto al Estado y las organizaciones no gubernamentales, mientras que sus críticos subrayaban que esto podría poner al sindicato en una situación de vulnerabilidad en contextos de inminente judicialización de los conflictos internos y externos a la organización¹²⁸. Para ciertos militantes – este parecía ser el caso de Fabián – el no tener personería jurídica también operaba como un mensaje permanente sobre la disposición combativa y radical de la UTAA, es decir, sobre su inscripción indeclinable en el “campo de la revolución”, donde los posibles pueden – y deben – prescribirse en tensión con la ley. Aunque la proliferación de opiniones contrapuestas sobre la adopción de una personería jurídica no sea algo temáticamente nuevo y pueda asociarse a debates similares

¹²⁸ Debo estas ponderaciones al diálogo con Silvina Merenson y Esteban.

en el pasado reciente del sindicato, es importante considerar en sí mismo el surgimiento eventual de estos puntos de vista discordantes, tomándolos por lo que son en cada coyuntura. Se trata, entonces, de preguntarse dónde estos enunciados comienzan y dónde se detienen, qué pretenden señalar en un momento histórico dado y qué queda afuera de su registro. En pocas palabras: cuál sería su campo circunstancial de problematización. En las reflexiones de Fabián, la evocación de la personería jurídica como una condición legal indeseable reforzaba su apuesta por la “revolución”, y esta se vinculaba directamente con el énfasis de Emilio en la “lucha”. “Revolución” y “lucha” definían un espacio de ejercicio de la autonomía práctica y enunciativa del “movimiento social” respecto de la heteronomía de la ley.



Ilustración 9: Un “Che Guevera” se dirige a los vecinos de los asentamientos, reunidos en asamblea.

Esta voluntad de autonomía que Emilio denominaba “lucha” y Fabián prefería llamar “revolución” los predisponía a buscar apoyo junto a interlocutores externos al sistema partidario y las instituciones del Estado uruguayo. Con el paso de los meses yo me convertiría en uno de esos interlocutores. A medida que nos conocíamos mejor, ellos me invitarían a integrar algunas actividades de movilización política tanto en los asentamientos populares como en la nueva Comisión de Tierras del sindicato. Naturalmente, esto no sucedió de la noche a la mañana. Por el contrario. Cuando comencé a frecuentar el sindicato y los asentamientos, mis actividades de investigación suscitaron

algunas sospechas entre aquellos que, más tarde, me recibirían en sus espacios de organización. Fue el proceso de dilución de esas sospechas – determinado por casualidades inusitadas, por la convivencia y el diálogo con mis futuros compañeros de lucha y, fundamentalmente, por el reconocimiento de los esfuerzos que ellos estaban emprendiendo – que generó condiciones apropiadas para una combinación sinérgica entre mi práctica investigativa y la política de “lucha”.

7.3 Después de la sospecha: investigación y “lucha”

Pocas semanas después de conocernos, Sandro fue el primer dirigente sindical en mostrarse claramente simpático respecto de mi presencia en la UTAA. Puedo conjeturar que esa afinidad inicial tenía que ver con mi nacionalidad – la misma de su madre – y con mis tímidos conocimientos sobre cultos afro-brasileños. Sandro era un Pai de Santo relativamente conocido y mantenía su propia casa de religión en Barra do Quaraí, ciudad donde residía con su esposa e hijos. Recuerdo que cierta tarde lo escuché comentar con otro compañero del sindicato sobre el aumento del número de terreiros en Bella Unión. Aproveché la oportunidad para demostrar mi interés por el asunto. Le conté a Sandro sobre los pais de santo que conocía en Porto Alegre, mi ciudad natal, y mencioné lo poco que sabía respecto de la diseminación de las religiones afro en Uruguay: básicamente los nombres de algunos líderes religiosos locales – todos ellos conocidos de Sandro – y sus relaciones con las mães y pais de santo brasileiros.

Sandro quedó positivamente sorprendido con la familiaridad que yo demostraba frente a los cultos afro y rápidamente otros dirigentes de la organización, que también frecuentaban los terreiros de Barra do Quaraí, fueron informados sobre su descubrimiento. Desde ese momento, ellos se sintieron más cómodos para intercambiar ideas conmigo e incluirme en sus rutinas. Después que nos hicimos más íntimos, Marco, uno de los integrantes de la nueva comisión directiva, me reveló que Exú Capa Preta había dado su voto de confianza a mi persona y hecho previsiones positivas sobre proyectos futuros en los cuales yo estaba incluido. En el caso de Sandro, el beneplácito de los orixás se sumó a otros factores que intensificaron nuestra mutua identificación. Así como yo, él también había militado en un partido comunista varios años atrás. Esta coincidencia biográfica e ideológica, sumada a mis relatos entusiasmados sobre la radicalización política vivida en Brasil en junio de 2013¹²⁹, convergían de algún modo con el estilo y el proyecto de

¹²⁹Entre los años de 2012 y 2013, diversas ciudades brasileñas atravesaron un intenso proceso de movilización y convulsión política. Para muchos jóvenes, estos acontecimientos fueron extremadamente conmovedores, llevándonos a romper con diversos compromisos institucionales y partidarios en pro de

movilización preconizados por el nuevo secretario general de la UTAA. “Estoy seguro de que nos vas a dar una mano en las movidas que estamos armando”, me dijo un día.

Cierta noche, en su casa, Emilio fue aún más enfático al respecto. Me comentó que cuando recibía mis visitas, generalmente después de un día cansador de trabajo, tenía que hacer grandes esfuerzos para recordar los detalles de su rutina y relatármelos con alguna precisión. Según él, nuestras charlas eran una oportunidad para pensar sobre su propia vida y reflexionar sobre la acción sindical. Emilio me confidenció que hablar de sí mismo con otras personas no sólo no era algo fácil, sino que también acarreaba ciertos riesgos, principalmente cuando había disputas políticas de por medio: “cuando otras personas me hacen las preguntas que vos me hacés, mi tendencia es esquivarme, pero decidí contemplar tu curiosidad porque me ayuda a pensar, y puede que haga alguna diferencia para tu trabajo”. Más allá de la complementariedad existente entre sus intereses personales y mi método de trabajo, Emilio pensaba que la investigación junto a los militantes de la UTAA también podría ser una oportunidad para experimentar algo más: “queremos saber la opinión de ustedes. No es sólo escuchar lo que nosotros decimos. Queremos que participen. De aquí a unos años, cuando les pregunten cómo estuvo en Uruguay, van a poder decir que hicieron algo, que participaron, que aquello también es de ustedes. ¿No es mucho más lindo así?”

Yo estaba de acuerdo con Emilio: así era más lindo. Le dije que la práctica de la investigación no me parecía incompatible con la participación activa y directa en las movilizaciones y esfuerzos colectivos de las personas con las cuales convivía. Le expliqué mi situación con algún detalle. Relaté que una institución del Estado argentino me había concedido cinco años de beca de estudios para hacer una larga investigación sobre algún tema que yo y las personas de la universidad considerásemos relevante. Este tema eran, precisamente, las relaciones entre un sindicato combativo como la UTAA y los proyectos de cambio social propuestos por el gobierno del Frente Amplio. Observé que tarde o temprano tendría que reservar un tiempo para escribir una especie de libro sobre todas esas cuestiones y que dicho libro sería considerado el resultado final de la investigación en Bella Unión. También le conté que desde 2013, Juliana, algunos amigos de Porto Alegre y yo veníamos trabajando con la idea de que la investigación no era sólo una forma de conocer lo que otros pensaban y hacían, sino también de pensar junto con ellos y poner a

nuevas experimentaciones colectivas. Aquella secuencia política estuvo marcada por huelgas salvajes y por la ocupación de parlamentos regionales, escuelas y universidades. Escribí algo al respecto en Moraes, 2014a y Moraes 2014b.

prueba este pensamiento a través de compromisos políticos. Para nosotros, la investigación no se resumía a buscar datos en un lugar para estudiarlos en otro. Al contrario, sus resultados podrían surgir y ser comunicados aquí y ahora: serían ideas compartidas sobre lo que las personas pueden hacer para realizar sus propias capacidades. Investigar significaba, entonces, preguntarse por lo que somos capaces de hacer juntos y elegir algunas respuestas para testear en la práctica.

Después de escuchar mis palabras, Emilio comentó que, para él, “lo de pensar juntos” era como un “robo, pero en el buen sentido”: “yo te saco algo y vos me sacás algo. Te escucho y voy sacando cosas que me interesan”. “Y empezamos a compartir algunas visiones – agregué –, podemos proponer cosas uno para el otro”. Emilio tuvo una idea: “¿Y por qué no hacemos esa terapia en la Comisión de Tierras?”

7.3 Comisión de Tierras

A partir de julio de 2015, los nuevos dirigentes de la UTAA comenzaron a reorganizar la Comisión de Tierras del sindicato. Su intención no era proponer una nueva experiencia de colonización en los territorios del CSA. Antes que nada, ellos pretendían escuchar los relatos de quienes ya habían recibido tierras por intermedio de la organización y ahora producían caña con financiación de ALUR. Algunos productores de la colonia Raúl Sendic y de Campo Placeres respondieron positivamente a las intenciones del sindicato y aceptaron reunirse con la nueva directiva en la “casa de UTAA”. Sandro abrió esta primera reunión resumiendo los propósitos de la nueva directiva con relación a la Comisión de Tierras:

La Comisión de Tierras servía para formar nuevos grupos de aspirantes a colonos, pero nosotros pretendemos cambiar un poco las cosas. No queremos salir a lo loco para armar ese tipo de comisión. Antes hay que conocer las necesidades de los compañeros que están en la tierra para ver si podemos mejorar su situación y no permitir que se repita en el futuro.

Un colono de Placeres fue el primero en manifestarse. Según él, en los últimos años la posibilidad de recibir tierras para plantar caña se había convertido en una herramienta política para fortalecer a algunos dirigentes de la organización. Este colono consideraba que “infelizmente” el sentido y las condiciones de acceso a la tierra habían dejado de estar en cuestión. Hace años, el objetivo principal del sindicato se venía resumiendo en “seguir metiendo gente en la tierra mientras sea posible, en las condiciones que ya conocemos”. Adhemar, uno de los únicos presentes que no producía caña para ALUR, pero sí alimentos

en un pequeño lote de tierra¹³⁰, estaba parcialmente de acuerdo con las posiciones de su compañero de Placeres: “aunque hay problemas, no podemos dejar caer la lucha por la tierra, que es nuestro caballito de batalla hace 50 años. Esto es lo único que podemos ofrecer a los trabajadores”. Sin embargo, Adhemar reconocía que las condiciones existentes de acceso a la tierra no eran adecuadas para ningún trabajador, principalmente debido al cobro de arrendamientos: “si el Instituto [Nacional de Colonización] necesita plata para comprar más tierras, que cobre arrendamiento a los grandes productores, no al chico”. Sobre el predominio del cultivo de la caña de azúcar en Bella Unión, este pequeño productor consideraba que “era necesario”, pues generaba abundantes puestos de trabajo. Con todo, él reconocía que “habría que diversificar la producción para que la gente también tenga la opción de trabajar distinto”. Otro participante de la reunión tenía más reservas con respecto a los beneficios de la industria azucarera. En su opinión, ALUR era

una vaca que no da más leche, ALUR es sólo caña. Esa máquina nos va a matar. Andan explotando a la gente a cambio de un pedazo de tierra. Hay que saber decir “hasta acá llegamos”. Estamos siendo manipulados por un proyecto productivo que no está ni ahí para todo lo que se planteó desde siempre en esta organización.

“Acá – observó Migue –, tenemos que cambiar nosotros, volver a mirar la historia del sindicato, lo que se quería, lo que se pedía”. Nira intervino en seguida: “nosotros llevamos a esos bandidos al gobierno y ahora vamos a exigirles lo que siempre pedimos y no nos dieron: tierra para el pueblo”. Pachu convergía con ella: “nosotros no tenemos que pelear sólo por lo que ya tenemos, sino por lo que siempre quisimos. Por la historia del sindicato, tenemos que decir que no vamos a pagar por la tierra y chau”. Migue levantó la voz: “compañeros, ¿ustedes se dan cuenta de que esto [el sindicato] tiene un poder que ninguno de nosotros tiene individualmente? Lo que de repente nos parece imposible estando solos en las colonias puede hacerse a través de UTAA”. Adhemar fue uno de los últimos en hablar aquel día: “los escucho a ustedes y veo que el enamoramiento con ALUR ya se fue. Entonces hay que seguir juntando a los compañeros de las colonias para ver qué quieren hacer y qué apoyo tenemos. Ahí podemos encontrar la punta del hilo para salir adelante”.

Al final de julio, en una nueva reunión de la Comisión de Tierras, Marco propuso una breve síntesis de lo que se venía discutiendo en aquel espacio hasta entonces. Para él, había dos problemáticas en juego: “la de los compañeros que ya accedieron a la tierra y la de los que van a acceder”. En cuanto a los primeros, sugería que formularan sus demandas siempre en el ámbito de la Comisión de Tierras y no negociaran individualmente con

¹³⁰Adhemar cultivaba alimentos en la misma fracción de tierras que, a inicios de los años 2000, había albergado la "chacra de UTAA". Él fue el único productor remanente de ese experimento productivo. Al respecto, ver capítulo 3.

ALUR, de manera de facilitar la construcción de soluciones generalizables para todos los colonos procedentes de la UTAA. En lo concerniente a los futuros productores, por lo menos una cuestión parecía clara: su entrada en la tierra debería ocurrir de tal forma que no tuvieran que enfrentar los mismos problemas identificados actualmente en las colonias cañeras, comenzando por la obligación de pagar arrendamientos. Sandro también ofreció un balance sucinto sobre los problemas discutidos en la Comisión. Desde su punto de vista, ciertas dificultades comunes a los colonos oriundos del sindicato, como el endeudamiento, podrían sin duda ser “gestionadas” con ALUR. Sin embargo, la construcción de otra propuesta de acceso a la tierra debería pasar por la “lucha” y ser elaborada “bien lejos de los especialistas del INC”:

Nosotros tenemos preocupaciones distintas a las de ellos. No queremos que haya explotados ni explotadores y pensamos que el acceso a la tierra sí puede darse en estas condiciones. El sistema que proponen ALUR y el Instituto [Nacional de Colonización] te acorrala, te endeuda y lleva a que explotes a los demás. Todos los que han accedido a la tierra me han dicho eso. Una cosa hay que tenerla bien clarita: los viejos [los dirigentes históricos] nos dieron la punta de la hilacha y hemos caminado. Pero también hemos fracasado. Por eso digo que hay que replantear para qué sirve la tierra. ¿Qué importa si ALUR no está de acuerdo?

Emilio traía una invitación a los presentes: proponía que ellos contaran a sus conocidos, amigos y parientes que la lucha por la tierra iba a recomenzar de una forma diferente: “no pagamos más por la tierra. No vamos a producir sólo caña. Salimos con una tarea de acá: vamos a convencer a algunos compañeros para que se animen a plantear algo distinto junto a la organización”. En lo relativo a las insatisfacciones presentadas por los colonos del CSA, Sandro se comprometió a recorrer las plantaciones junto con ellos para tener una idea aún más clara de las dificultades existentes y, de este modo, construir una plataforma de negociación con ALUR.

Tanto la recuperación de las reivindicaciones agrarias como la visita de los dirigentes del sindicato a las colonias del CSA debieron esperar cerca de dos meses para concretarse. En agosto, la zafra cañera estaba en plena marcha y los conflictos laborales abundaban en las plantaciones. Era prácticamente imposible dedicarse a otros problemas. En setiembre, los asentamientos populares entraron en un fuerte proceso de movilización contra las medidas de desalojo solicitadas por AFE. Este mismo mes, el sindicato de los trabajadores de Green Frozen pidió ayuda a los dirigentes de la UTAA para desencadenar su batalla contra el cierre de la industria. Todas esas actividades absorbieron buena parte de las energías de la nueva Comisión Directiva, obligándola a dejar la lucha agraria en un segundo plano.

A finales de setiembre, tanto Sandro como Emilio ya me habían invitado a integrar activamente las nuevas luchas que se avecinaban. Yo estaba dispuesto, pero esperaba señales concretas para sumarme a ellas. El 1° de octubre, durante una reunión de directiva, Sandro preguntó si podría acompañarlo a la colonia Raúl Sendic para entrevistar a algunos productores. Migue nos llevaría en su micro-ómnibus, yo me ocuparía de filmar los “testimonios” de los colonos y Sandro y Marco conducirían las entrevistas. En nuestro recorrido por la colonia, logramos recoger tres largos relatos, todos ellos ofrecidos por militantes de la UTAA. Los entrevistados reflexionaron sobre el acceso a la tierra teniendo en cuenta sus propias experiencias laborales. Ellos estaban convencidos de que, en el marco del CSA, la colonización agraria nunca ocurriría a gran escala y difícilmente soportaría cualquier tentativa sistemática de diversificación productiva. También observaban que la política agraria patrocinada por ALUR y el INC no se ajustaba a la realidad económica de los trabajadores y tenía el endeudamiento como consecuencia inevitable. Durante las filmaciones, los entrevistados reafirmaron su decisión de permanecer en la tierra bajo cualquier hipótesis, aun estando endeudados con el Estado. Uno de ellos ponderó que “las condiciones no están dadas para nosotros, pero de una forma u otra, mantenemos a nuestras familias con mil sacrificios”: estas eran razones suficientes para no abandonar lo conquistado hasta entonces. Al final del video, los dirigentes de la UTAA declaraban su total compromiso con los productores de la colonia Raúl Sendic y señalaban que, aunque el Estado había respondido positivamente a la voluntad de acceso a la tierra de los trabajadores, no había ofrecido las mejores condiciones para el desarrollo de las experiencias de colonización. Más allá de eso, constataban que las colonias del CSA no cumplían los objetivos de la lucha agraria realizada en el 2006, razón por la cual la organización debería adoptar un cambio de postura con respecto al monocultivo de la caña de azúcar.

Aquel mismo día realicé la edición del video en mi casa y lo compartí con Sandro por Facebook. En las semanas siguientes, el material sería enviado a quienes apoyan a la UTAA en el exterior y en Montevideo, pero los primeros destinatarios del mensaje fueron los funcionarios de ALUR y el INC. Para ellos, el sindicato pretendía dejar en claro dos resoluciones: en primer lugar, que estaba del lado de los colonos endeudados y no admitiría su expulsión de las colonias; en segundo lugar, que a partir de entonces la lucha agraria apuntaría a nuevos horizontes, externos al CSA. En suma, las reivindicaciones agrarias de la UTAA estaban dejando atrás el terreno de la “gestión” para inscribirse en el campo de la “lucha”. La ambición de superar los infortunios de la “zafralidad” y

generalizar la posibilidad de acceso a la tierra volvía a estar en el orden del día para el sindicato. Y el hecho de que esta propuesta fuera innegociable en los marcos institucionales del CSA no la volvía menos posible y deseable.

Como vimos a lo largo de este capítulo, los nuevos dirigentes de la UTAA se propusieron prescribir una separación contundente entre “lucha” y “gestión”. Con el segundo término, ellos connotaron la tramitación de ciertas urgencias colectivas en el marco de negociaciones con las instituciones del Estado, teniendo por referencia la normativa vigente. A su vez, la palabra “lucha” fue reservada para hacer referencia a la posibilidad de crear nuevos alineamientos políticos, destinados a la legitimación de demandas colectivas obstaculizadas o presentadas como inviables en el ámbito de la “gestión”. Al transferir la reivindicación agraria para el campo de la “lucha”, el sindicato anunciaba la posibilidad de una política que ya no se traducía en los términos del CSA, o sea, en los términos de la “gestión”. Se trataba de una política orientada a posibilitar lo que el CSA volviera imposible. La efectuación de dicha política ocurría a costas de negar aquellas formas de satisfacción personal y colectiva avaladas por la intervención desarrollista nucleada por ALUR. Los colonos provenientes de las bases del sindicato seguirían siendo defendidos por la organización, pero no sucedería lo mismo con las formas de acceso a la tierra que los ponían en posición de ser defendidos. Mis compañeros en la dirección de la UTAA estaban prescindiendo de dar seguimiento a la articulación entre la lucha agraria y el “proyecto productivo” de la industria sucroalcoholera para, en lugar de eso, redimir un “proyecto social” cuyo contenido y alcance deberían ser reinventados sin restricciones *a priori*. Sólo la “lucha” podría respaldar una decisión de esta naturaleza, puesto que la única condición a la que está sometida es la de postular sus propias condiciones de posibilidad.

Como indiqué al inicio de la tesis (capítulos 1 y 2), la invención de la “lucha” implicó para los nuevos dirigentes de la UTAA la afirmación de un “cambio de actitud” cuya posibilidad era cifrada en un clamor confuso procedente de otra época: proliferación de imágenes y palabras – Sendic, revolución, tierra para el que la trabaja – que el tiempo presente no incorporaba en sus rutinas; cabos sueltos de una “hilacha”: índices de un desorden pretérito que, para volverse nuevamente tangibles, exigían rupturas sustantivas con el devenir ordinario de la vida cotidiana. En 2015, “lucha” invocó los viejos “caballitos de batalla” del movimiento popular de los trabajadores rurales para hacerlos transportar prescripciones antagonistas sobre el acceso a la tierra, el combate a la pobreza y la supresión de la explotación. Los miembros de la nueva Comisión Directiva de la UTAA

encontraron en el sindicato un lugar propicio para profesar ideas difícilmente digeribles en el ámbito de la izquierda oficialista y de su aparato desarrollista; ideas deliradas en los propios territorios donde el desarrollo pretendió fijar las condiciones de posibilidad de una vida mejor en medio de la multiplicación de nuevas y viejas subordinaciones. Sin embargo, estas ideas sólo pudieron ser recogidas en el agenciamiento colectivo sindical porque este último se puso bajo condición de “lucha”. “Luchar” autorizaba la prescripción de nuevos posibles y suspendía el tiempo de la angustia, pautado por la negación represiva de aquello que, no obstante, los sujetos del desarrollo ya vislumbraban como algo viable.

En sí misma, “lucha” era el resultado de una prescripción que la separaba de la “gestión”. “Lucha” consistía, por tanto, en un cambio de actitud que reabría los horizontes de realización del deseo sin pasar por las disposiciones del orden vigente, es decir, del complejo agroindustrial. En relación al CSA, “lucha” operó sustrayendo un “proyecto social” posible a las restricciones de un “proyecto productivo”: puso a sus protagonistas en condiciones de desarrollar aquello que su deseo mostró ser posible, aun cuando apareciera como objetivamente imposible en la estructura productiva del complejo. De este modo, la voluntad de contar con una renta estable a lo largo del año, incrementar la capacidad de consumo y sustraerse al despotismo patronal – voluntad esta que el CSA contempló en forma limitada – pudo sumarse a la afirmación de la posesión gratuita de la tierra, a la negación de la deuda como condición de la producción y a la pretensión de practicar la agricultura más allá del monocultivo cañero. Bajo condición de “lucha”, todos esos posibles se volvieron integralmente reivindicables. En su conjunto, ellos recibieron un lindo nombre rescatado por Sandro de sus diálogos con “la gente del MST” en Barra do Quaraí, a saber: “reforma agraria”. Aquí estamos confrontados con una locución (“reforma agraria”) que ya había aparecido en otras secuencias políticas desencadenadas bajo la bandera de la UTAA. ¿Pero podríamos decir que se trata, en este caso, de la actualización de una consigna histórica de la organización?

“Reforma agraria” irrumpió como una enunciación potente en los años ‘60, durante las Marchas por la Tierra abordadas en el capítulo 2, y siguió siendo un concepto valioso para los protagonistas de otras secuencias políticas, aunque no siempre fue empleado como consigna o definido sistemáticamente. Sin embargo, la recuperación de “reforma agraria” en 2015 se dio por intermedio del contacto de Sandro con el discurso del MST brasileiro, sirviendo directamente para nombrar los posibles que empezaban a forjarse en la Comisión de Tierras aquel año. Allí, “reforma agraria” señalaba un objetivo inmediato que no se remitía a otra secuencia política. Para ser más preciso, a diferencia de las palabras

“Sendic”, “tierra”, “UTAA” etc., la “reforma agraria” no era para Sandro un índice histórico que invitaba a especular sobre el carácter disruptivo de las luchas pretéritas y ni siquiera sobre su contenido programático. No habría que leerla, entonces, como la insistencia de un leitmotiv, pero sí conceptualizarla como el nombre de un conjunto incipiente de posibles singulares que inauguraba su propio devenir histórico. Sandro no estaba retomando el debate sindical sobre “la reforma agraria”, ni reivindicando su actualización en el presente. Tampoco pretendía transponer a Bella Unión las prescripciones del MST. Él tan sólo denominaba “reforma agraria” a un acceso a la tierra más allá de las condiciones establecidas por el CSA. “Reforma agraria” le gustaba porque sonaba grande y desafiante, exacerbando al extremo la discontinuidad cualitativa entre el “proyecto productivo” realmente existente y un “proyecto social” posible, en vías de conformación. Su elección no era azarosa: hablar de lucha por la tierra en el registro de una “reforma agraria” era diferente de hacerlo en referencia a las políticas agrarias de ALUR y el INC. Sandro sabía muy bien que “reforma agraria” era una consigna que el movimiento popular rural más significativo de América Latina sostenía mediante luchas radicales que en su momento desafiaron abiertamente el derecho a la propiedad y opusieron soluciones concretas al monocultivo y el latifundio. Había correlatos entre esa pragmática, la estética política valorizada por Sandro, y las tareas que la Comisión de Tierras debería emprender si pretendía separarse del “proyecto productivo” de ALUR y trazar su propio “proyecto social”.

7.4 “Una especie de terapia”

A inicios de octubre, la Comisión de Tierras de la UTAA volvió a reunirse. Durante los dos meses de receso, impuestos por la intensa movilización de los dirigentes de la UTAA en otros frentes de lucha, algunos colonos cumplieron la tarea planteada por Emilio a fines de julio: ellos entraron en contacto con amigos, parientes y vecinos para informar que el sindicato retomaría sus reivindicaciones agrarias. Los miembros de la nueva directiva hicieron lo mismo. Tanto rumor produjo sus efectos: había mucha gente nueva en el amplio zaguán de la “casa de UTAA”. Ya en sus primeras palabras, Sandro aseguró que la idea de la organización era “garantizar que en las próximas experiencias de acceso a la tierra no haya ni explotados ni explotadores”. Explicó a los participantes recién integrados a la Comisión que, para un trabajador rural asalariado, recibir tierras del INC en las condiciones actuales era “recibir un problema”: “si acceden a la tierra mañana, ya tienen que empezar a pagar arrendamiento. Nosotros decimos que eso ya no va a ser así. El arrendamiento va a ser gratis, por lo menos en los primeros años”. Sandro también

argumentó sobre la necesidad de diversificar la producción agrícola para combatir tanto la “zafralidad” como la explotación. Según él, algunos compañeros, pequeños productores de un poblado próximo a Bella Unión, habían estudiado alternativas productivas compatibles con las condiciones del suelo y el clima de la zona. Tales estudios podrían ser de alguna utilidad a la hora de pensar otros usos posibles para la tierra.

Pero quiero aclararles una cosa – agregó Sandro –: estamos proponiendo algo distinto a lo que se hizo en la zona hasta ahora. No estamos hablando de caña. Antes juntaban a la gente en el sindicato para armar proyectos productivos y después todo eso se tiraba a la basura, porque la caña era lo más importante. No quedaba ni tiempo ni plata para lo otro. Ahora, lo que se plantee se va a hacer. No hay un guión hecho. Tenemos que evaluar el perfil de los compañeros y lo que quieren, para ver qué podemos hacer.

Una vez realizados los primeros informes, se siguió una larga charla sobre las alternativas agrícolas disponibles para la sustitución de la caña de azúcar. Algunos participantes de la Comisión especulaban sobre las extensiones de tierra y las inversiones financieras necesarias para plantar arroz y hortalizas en la intensidad necesaria para el sustento de varias familias. Otros reseñaban sus múltiples habilidades laborales tratando de convencerse a sí mismos, y a los demás, de que estaban en condiciones de encarar formas novedosas de uso de la tierra. Los más apresurados ya comenzaban a cotejar cuáles propiedades rurales de la zona podrían ocuparse en un futuro cercano. En medio del bullicio, yo deliraba con Sandro sobre la posibilidad de transformar una eventual experiencia de acceso a la tierra en una especie de proyecto piloto de reforma agraria. En este proyecto, los trabajadores serían llamados a definir todas las condiciones necesarias para garantizar su compromiso con la producción agrícola, siempre en diálogo con las consignas históricas de la UTAA, por supuesto. Sandro me escuchaba con atención y algo en su expresión me sobresaltaba.

Pasadas casi dos horas de charla, algunos participantes comenzaron a levantarse de sus asientos y revolver las llaves en los bolsillos de los pantalones. En este momento, Sandro informó a todos sobre la fecha y los propósitos del próximo encuentro. Asimismo, reiteró a los participantes que invitaran a más personas conocidas para las futuras reuniones e informó que el compañero Alex los estaría esperando la semana siguiente: “vamos a empezar a cranear juntos un proyecto piloto de reforma agraria”. Esta última información me tomó desprevenido: me estaban reclutando para cumplir una atribución inesperada. Ya podía suponer que tarde o temprano la invitación para asumir algunas tareas en el sindicato tomaría una forma más concreta. Sin embargo, no pensaba que las cosas se darían de modo tan abrupto. Pese a la sorpresa, creo haber reaccionado con tranquilidad a la deliberación de Sandro. Después de su intervención, asentí con la cabeza e improvisé

algunas palabras, dando a entender que todo había sido previamente planeado. Parafraseando a Emilio, aludí a la actividad de la semana siguiente como “una especie de terapia” y algunos se rieron. Propuse que fuéramos viendo cuáles eran las dificultades experimentadas en las actuales colonias cañeras y que tratáramos de solucionarlas a través de un proyecto diferente de acceso a la tierra.

Después de la reunión, mientras pedaleaba de vuelta a casa, me sentía al mismo tiempo entusiasmado y presionado. Sandro me había empujado a un terreno desconocido: el de la formulación de un proyecto piloto de reforma agraria. Sobre el asiento de la bicicleta, ya comenzaba a evaluar dónde conseguir ayuda para esa misión. Obviamente, el INC debería quedar afuera, de modo que no contaríamos con su soporte técnico. En cuanto a los docentes de Extensión, ellos habían comenzado a viajar más esporádicamente a Bella Unión debido a los recortes presupuestarios, pero tenía el contacto de varios de ellos: esto sin duda era una carta en la manga. Llegué a casa absorto en estas cuestiones. Juliana estaba en la mesita de la sala, estudiando para el examen de doctorado. Todavía en la puerta, le resumí la situación: “então... a princípio a ideia era *pesquisar* uma política de desenvolvimento, mas acabou de acontecer o seguinte: me comprometi a *fazer* uma política desenvolvimento. O que tu me diz disso?”¹³¹ Todavía recuerdo bien su respuesta, distraída y tranquilizadora a la vez: “legal... nem te preocupa. Vamos vendo o que dá pra fazer”¹³². El “vamos”, en plural, dejaba clara por lo menos una cosa: la política propuesta por Sandro y sus compañeros ya tenía una nueva entusiasta.

¹³¹ A ver... la idea era *investigar* una política de desarrollo, pero acabó de pasar lo siguiente: me comprometí a *hacer* una política de desarrollo. ¿Qué me decís?

¹³² Qué bien... no te hagas problema. Ya vamos a ver qué podemos hacer con eso.

Capítulo 8

Proyecto menor

La tierra es fuente de esperanza, fuente de trabajo. Y es una palabra que dignifica.

Isabel



8.1 Cambio de rumbo

En los dos últimos meses de trabajo de campo en Bella Unión, Juliana y yo estuvimos intensamente dedicados a impulsar, hombro con hombro con nuestros compañeros de la UTAA, la política agraria de la Comisión de Tierras del sindicato. Nuestra primera intervención más activa en esta instancia de organización ocurrió una semana después que Sandro me hubiera atribuido la misión de comenzar a preparar un “proyecto piloto de reforma agraria”. Los días que antecedieron el inicio de la “terapia” de la Comisión de Tierras fueron ocupados por estudios diversos e improvisados. En primer lugar, recopilamos informaciones derivadas del censo agropecuario uruguayo de 2011 para tener una idea más clara del estado de la distribución de tierras en el país. A continuación, revisamos algunos proyectos de colonización del MST, cuya lucha resultaba inspiradora a los ojos de Sandro y de otros dirigentes de la UTAA. También entramos en contacto con los docentes de Extensión Universitaria para solicitar copias de anteriores proyectos de diversificación productiva formulados en colaboración con el sindicato. Además de eso,

hicimos una sistematización preliminar de las tesis y enunciados que yo había registrado en entrevistas realizadas entre los colonos del CSA y la militancia sindical. Finalmente, dedicamos algún tiempo de estudio a la Ley N°. 11.029, que establece las funciones del INC y fija las modalidades de distribución de tierras susceptibles de ser practicadas por este organismo gubernamental. Paralelamente a la rutina de estudios, visité algunos colonos que ya conocía para invitarlos a compartir el relato de su experiencia de trabajo con los nuevos aspirantes a tierra que se reunían en la sede de la UTAA. Mientras tanto, los dirigentes del sindicato estaban averiguando cuál sería el lugar más indicado para instalar un experimento productivo diversificado que beneficiara a por lo menos 20 familias de trabajadores.

La “terapia” de la Comisión de Tierras se inscribe, de cierta manera, en una larga historia de encuentros políticos entre la militancia de la UTAA y aquellos que, muy genéricamente, podríamos llamar “los universitarios”. Estos encuentros se remontan a los mismos orígenes del sindicato – Raúl Sendic era un estudiante de derecho – y se han “repetido” en diferentes momentos históricos sin perder su singularidad. En años más recientes, la confluencia entre los trabajadores movilizados en la UTAA y sus colaboradores en el ámbito universitario ha resultado en cooperaciones estratégicas tanto en el frente de lucha sindical como en el frente de lucha agraria. La presencia en Bella Unión del equipo de extensión de la UDELAR (capítulo 5) representó un aporte significativo a las agendas sindicales. Los extensionistas universitarios han compartido con los sindicalistas de la UTAA diversos saberes técnicos que favorecieron el asesoramiento jurídico de los trabajadores rurales y potenciaron las demandas de diversificación productiva en las colonias cañeras subordinadas a ALUR. Buena parte de las experiencias de acceso a la tierra protagonizadas por los asalariados rurales provenientes de las bases de la UTAA han recibido una colaboración técnica directa de los extensionistas, principalmente en lo relativo a la planificación de iniciativas de diversificación agrícola. Asimismo, Extensión Universitaria participó orgánicamente en el Centro de Formación Popular ubicado en la Chacra 15 de Enero, donde se ofrecían talleres sobre agroecología, derechos laborales, movimiento sindical, salud en el trabajo, cooperativismo, etc.

Mi actuación en la Comisión de Tierras fue similar a otras relaciones de colaboración entre sindicalistas y estudiantes que se sucedieron a lo largo de la historia del sindicato. Pero su similitud formal respecto de situaciones pretéritas aparentemente análogas no le resta singularidad. Desde el punto de vista de la singularidad – que es el punto de vista buscado en esta tesis –, todas las confluencias colectivas son únicas e

irrepetibles, aun cuando se remitan unas a las otras. En distintos momentos históricos vamos a encontrar a estudiantes universitarios de izquierda que se involucraron con los trabajadores rurales de Bella Unión e impulsaron, junto a ellos, alguna agenda específica de lucha social o popular. Pero cuando pensamos desde el punto de vista de la singularidad, nos damos cuenta de que ni siquiera ha habido primordialmente *una* relación *entre* estudiantes y trabajadores, sino más bien el ingreso de ambos “grupos” bajo nuevas relaciones que los redefinen, una y otra vez, en tanto sujeto político. No estoy en condiciones de definir con creces la singularidad de los experimentos políticos pretéritos que involucraron a la militancia de la UTAA y sus aliados en el “campo universitario”, puesto que hacerlo exigiría conocer profundamente dichas confluencias. De lo que sí puedo dar cuenta es de la relación singular a la que ingresamos Juliana, yo, los dirigentes de la UTAA y los miembros de la Comisión de Tierras durante las luchas de 2015. Se trató, fundamentalmente, de una relación que produjo subjetivación política bajo la prescripción “lucha es diferente de gestión”.

En sí misma, la prescripción “lucha es diferente de gestión” postula una relación que condiciona una separación. Explico: para separar “lucha” de “gestión” hay que organizar a un colectivo que esté dispuesto a hacerlo. En suma, hay que *relacionar* a la gente para que “lucha” pueda *separarse* de “gestión”. Bajo esta prescripción se definieron las funciones organizativas que cada cual debió cumplir de cara a la formulación de los posibles que se sostendrían en la “lucha” venidera. En mi caso, por ejemplo, dejé de ser el que “sólo escuchaba” para empezar a plantear ideas, además de aceptar la tarea de redactar un proyecto de “reforma agraria” – algo que nunca había hecho ni pensado hacer en mi vida. Los dirigentes sindicales se convirtieron en investigadores que rastreaban las insuficiencias del modelo de colonización propuesto por ALUR y “craneaban” su superación posible. Los pequeños productores que cultivaban caña en las colonias del CSA se tornaron algo así como asesores políticos de la Comisión de Tierras, transmutando sus delirios personales en pautas para la reinención del acceso a la tierra. Finalmente, los aspirantes a tierras asumieron la responsabilidad de idear aquellos criterios que los conducirían a una “vida mejor”, construida colectivamente más allá de los dominios de la industria cañera. Pero para que todas esas redefiniciones subjetivas tuvieran lugar, fue necesario algo de “terapia”. La “terapia” constituyó uno de los lugares clave de la política que impulsamos en la etapa final de mi trabajo de campo en Bella Unión: en ella se delineó la estrategia de acceso a la tierra que determinaría la impronta de la “lucha” en el frente de reivindicaciones agrarias del sindicato.

8.1.2 Terapia: desandando el CSA. Qué no hacer.

A mediados de octubre, volvimos a reunir la Comisión de Tierras para hacer circular ideas y perspectivas sobre qué podría llegar a ser el acceso a la tierra, ahora que sus condiciones estaban por inventarse de cabo a rabo. Éramos cerca de 25 personas. Si bien el grupo estaba formado, básicamente, por nuevos aspirantes a tierras, también comparecieron a la reunión algunos de los productores de la colonia Raúl Sendic – entre ellos, Migue, Nira y Pachu. Iniciamos el encuentro de aquel día con la tradicional ronda de presentaciones. Puse el grabador sobre la mesa e invité a los participantes a relatar brevemente su trayectoria personal y a manifestar sus expectativas sobre el acceso a la tierra. Juliana y yo comenzamos la ronda. Tratamos de contemplar todos los puntos que esperábamos que los demás también contemplaran en su relato.

A medida que los 20 aspirantes a tierras fueron tomando la palabra, pudimos discernir algunas características generales del grupo: había equilibrio numérico entre hombres y mujeres – 12 y 8, respectivamente –, la mayoría – 13 personas – superaba los 25 años de edad y dos pasaban los 60 años. Entre los hombres, todos tenían experiencia de más de cuatro años con el corte de caña. La mayoría de ellos – 9 personas – ya había trabajado en diferentes ramas de la economía agrícola y ganadera, en el comercio y en la construcción civil. Siete hombres estaban casados y diez tenían hijos menores de edad. En cuanto a las mujeres, sólo una de ellas había trabajado en actividades relacionadas al cultivo de la caña de azúcar; cuatro estaban familiarizadas con la horticultura y todas poseían experiencia de trabajo en el comercio y el servicio doméstico. La totalidad de las mujeres tenía niños a cargo y dos estaban casadas. Ninguna tenía empleo formal (“en caja”) en aquel momento, pero todas recibían, mensualmente, algún apoyo económico del Estado a través del programa de “asignaciones familiares”. Los hombres estaban trabajando en el corte de caña y no tenían expectativas muy concretas de empleo para los meses venideros. En forma prácticamente unánime, los participantes de la reunión identificaban en el acceso a la tierra la posibilidad de garantizar un futuro mejor para sus hijos. La tierra era encarada como una fuente de trabajo potencialmente estable de la cual las nuevas generaciones también podrían beneficiarse.

En aquella primera “terapia”, tuvimos la oportunidad de escuchar propuestas concretas sobre las actividades productivas que podrían desarrollarse en una futura experiencia de colonización agraria. Los hombres estaban todos de acuerdo en que la caña no debería ser una prioridad en el nuevo proyecto de acceso a la tierra: “la caña mata a la gente” era un enunciado recurrente entre el público masculino. Había opiniones bastante

específicas sobre esta cuestión: “si dependiera de mí – evaluaba un participante –, sería la horticultura. La caña te mata. Te mata por dos razones: primero porque te da trabajo seis meses [al año] y después ya prácticamente no tenés trabajo. Lo otro es que el trabajo en la caña es muy duro”.

En contraposición con la propuesta de priorizar otros cultivos en detrimento de la caña de azúcar, Paola, una joven aspirante a tierras, objetaba lo siguiente: “se sabe que la caña mata, que es cansancio y todo, pero es de lo que vivimos acá en Bella Unión. La mayoría de mis familiares vive de eso”. Beti, una de las dirigentes del sindicato encargadas de acompañar la Comisión de Tierras, intervino en este momento señalando la importancia de pensar en “alternativas a la zafra”. Recordó, aun, su experiencia laboral en el sector hortícola para luego subrayar que “los ciclos cortos de cultivo [de las hortalizas] generan demanda constante de trabajo”, configurando, por esta razón, una alternativa económica más interesante que el monocultivo cañero. Pablo, otro miembro del grupo de aspirantes, corroboró el punto de vista manifestado por Beti con algunas informaciones que comprobarían la viabilidad económica de la horticultura:

Acá tenemos un gran problema, ¿no? Pienso que somos todos conscientes: aunque el gobierno ha invertido mucho en la caña de azúcar, no podemos ignorar que hay zafra, que trabajamos cinco meses y después no la vemos más. Una de las cosas que necesitamos innovar en Bella Unión es el tema de la huerta. Llegan cinco camiones por semana de Montevideo y Salto con fruta y verdura. Nosotros, acá en Bella Unión, no estamos haciendo nada de eso. Yo creo que llegó el tiempo de cambiar de rumbo.

En este momento, sugerí que escucháramos la opinión de quienes ya habían recibido tierras en el marco del CSA. Me dirigí a mis invitados de las colonias cañeras, solicitando que ellos compartieran con nosotros sus comentarios sobre la producción de la caña de azúcar y sus evaluaciones respecto de la posibilidad de apostar a la introducción de nuevos cultivos.

Migue intervino primero:

A veces dicen que se hace plata en la caña. Lo que se hace en la caña es deuda. Hoy, muchos compañeros a mí no me saludan porque tengo caña, pero no saben que estoy peor que ellos. Yo debía doscientos pesos en el almacén y ahora debo un millón doscientos mil para ALUR. Lo único que hay ahora es que tenés trabajo y no tenés que salir a buscar changa. Pero todo el tiempo tenés que andar pidiendo favores y condiciones a ALUR y al Instituto [Nacional de Colonización]. No puede ser que esta sea la única forma de entrar en la tierra.

A su vez, Nira decidió enfatizar las ventajas de la diversificación productiva:

No se cierran en la caña, gurises. Hay un cuentito que todos se hacen de que aquel tiene caña y ahora anda en auto. Mentira. Debemos hasta el auto. Hay que diversificar y buscar otras formas de financiamiento. [La diversificación] es importante porque no todos somos capacitados para las mismas tareas: algunos nos damos más para unas, otros más para otras.

Migue valoraba la idea de diversificar la producción, pero estaba preocupado con la viabilidad de los cultivos alternativos en lo concerniente al tiempo de espera necesario hasta que se volvieran comercializables: “alguien hablaba de plantar lechugas. Lo mínimo que va a llevar son dos meses para cosechar la lechuga. Y durante esos dos meses, ¿qué vas a comer?” Seba, un aspirante que estaba en su segunda reunión de la Comisión de Tierras, ponderó que el sentido de la lucha agraria era justamente alcanzar “avances reales”, es decir, “generar buenas condiciones para producir otras cosas”. Según él, si las condiciones existentes de acceso a la tierra eran inadecuadas desde el punto de vista de quien participaba en la Comisión, entonces la lucha serviría para transformarlas: “podemos pelear para que no empiecen los descuentos para endeudarnos, para que nos den todo lo que necesitamos. ¿Quién dijo que no?”

Las percepciones de Seba dieron inicio a una nueva etapa de la reunión. Sugerimos a los presentes que formaran grupos menores, con el objetivo de enlistar todo lo que juzgaran necesario para acceder a la tierra con tranquilidad y aprovechando las capacidades laborales de todos los miembros de la Comisión. Se formaron entonces tres “subcomisiones”: una se abocó a analizar la viabilidad de la cría de animales (ganado de corte, vacas lecheras, gallinas ponedoras y cerdos); otra se dedicó a reflexionar sobre la horticultura y la tercera comisión se propuso pensar en cómo mejorar las condiciones actuales para el cultivo de la caña. Migue, Nira y Pachu se sumaron a los grupos para enriquecer el debate con sus propios conocimientos productivos. Juliana y yo fuimos rotándonos entre las tres subcomisiones.

Después de casi una hora de charla, comenzaron a aparecer las primeras condiciones de posibilidad de la nueva experiencia de colonización. Podría resumirlas del siguiente modo: si hubiera producción de caña, la introducción de la primera cepa no debería ser cobrada por ALUR; en cuanto a la posesión de la tierra, esta no podría estar condicionada al pago de arrendamientos por un período mínimo de cinco años; las tierras deberían estar cerca de la ciudad de Bella Unión, para facilitar el desplazamiento de quien optara por no vivir en el campo; la financiación de la compra de las primeras vacas, cerdos y gallinas debería ser garantizada por el Estado con fondos no reembolsables; este mismo tipo de recurso financiero debería ser destinado a la construcción de invernaderos, a la compra de semillas y a la elaboración de plantines, en el caso de la horticultura. En todas las situaciones en las que fuera necesario construir infraestructuras productivas, los aspirantes a tierras estaban dispuestos a emplear su propio trabajo colectivo. Sin embargo, aún persistía entre ellos una duda crucial que ya había sido anticipada por Migue: ¿de dónde

retirar su sustento mientras estuvieran plantando y haciendo el mantenimiento de los cultivos? Juliana tenía una propuesta:

Ustedes saben que estoy estudiando para un examen en la universidad. Si apruebo, paso a otra etapa [de formación] y el gobierno me financia una beca para que pueda hacer mis cosas tranquila, para dedicarme totalmente a los estudios. ¿Y si ustedes pidieran lo mismo para este proyecto? Van a necesitar tiempo y dedicación para arrancar con la producción. Me parece justo que reciban una beca para cumplir con estas tareas hasta que les empiece a llegar la plata de lo que vendan.

La propuesta era ambiciosa, pero sonaba razonable teniendo en cuenta los objetivos del proyecto que comenzábamos a formular. Gloria definió la sugerencia de Juliana como “la pieza que faltaba para que esto funcione”. Paola se mostraba recelosa: “pero y después, ¿cómo vamos a pagar por eso?” Seba trató de definir un poco mejor la naturaleza de la beca: “tengo entendido que si es una beca, no la tenemos que devolver. Es como una señal de confianza que nos dan para hacer el proyecto”.

La introducción de una beca en el proyecto de diversificación que estábamos inventando no sólo podría autonomizarlo respecto de las formas de financiación practicadas por ALUR, sino que también garantizaría a los trabajadores una renta inmediata para dedicarse con más tiempo a las actividades productivas. Si los miembros de la Comisión de Tierras fueran beneficiados por remesas monetarias constantes, por lo menos en los primeros meses del proyecto productivo, ellos no tendrían que combinar su dedicación a este último con otros compromisos laborales, ampliando potencialmente las chances de éxito de la nueva experiencia de colonización. Estas fueron algunas de las razones por las cuales la propuesta de la beca fue recibida con entusiasmo en la Comisión de Tierras, aun cuando sus miembros ya pudieran prever las dificultades implicadas en negociar tal exigencia con las instituciones del Estado. Se trataba, al fin y al cabo, de una modalidad de financiación todavía inexistente en las políticas uruguayas de colonización agraria. Sin embargo, mi intuición era que podríamos justificarla en forma coherente si presentáramos el proyecto piloto de la UTAA como una oportunidad extendida al gobierno progresista para el perfeccionamiento de sus propias políticas de democratización del acceso a la tierra. En síntesis, mi argumento a la Comisión de Tierras fue el siguiente: dadas sus dimensiones, nuestro proyecto productivo sólo podría tener éxito si fuera tomado en serio por la contraparte gubernamental. Era importante dejar claro para el gobierno que una política consecuente de promoción del acceso a la tierra entre los trabajadores rurales debería reconocer y asegurar la capacidad de estos últimos de definir los criterios básicos para la transformación de sus propias vidas. Si el experimento productivo que estábamos planeando llegara realmente a concretarse, el progresismo tendría a su disposición una

especie de prueba realista de los requerimientos básicos para la generación de puestos de trabajo estables en una economía regional poco diversificada.

No había nada nuevo en mi propuesta. La Comisión de Tierras ya era, de hecho, un lugar donde la capacidad de elaboración estratégica de los trabajadores estaba siendo ejercida. No obstante, el desafío sería hacerla valer con el respaldo material de aquellas instituciones públicas que concentraban los recursos de los cuales la militancia de la UTAA pretendía disponer. En estos términos, la lucha agraria del sindicato comenzaba a experimentar una inflexión. Al asumir los posibles presentados en la Comisión de Tierras, el sindicato declinaba de reconocer en los mecanismos de satisfacción material instaurados por el CSA los únicos medios legítimos para contemplar los deseos de estabilidad económica y autonomía laboral manifestados por su base social. Alternativamente, los deseos en cuestión pasarían a ser canalizados mediante formas de efectuación deliberadas en primera instancia por los mismos trabajadores, sin hacer concesiones a los “males necesarios” – endeudamiento, monocultivo, explotación – que venían caracterizando la expansión de los cañaverales de Bella Unión desde 2007.

La primera “terapia” organizada con los aspirantes a tierras nos permitió tener una idea de las expectativas de cada integrante del grupo con relación al futuro proyecto de colonización que estábamos formulando. Sus aspiraciones no parecían diferir mucho de las que llevaron a otros tantos trabajadores a sumarse al frente de lucha agraria de la UTAA desde 2007 (capítulo 5). Así como los colonos de Placeres, Sendic y Pay Paso, los actuales miembros de la Comisión de Tierras deseaban conseguir trabajo estable, mejorar la vida de sus familias y garantizar a sus hijos una fuente segura de ingresos a largo plazo. También aparecía entre ellos la preocupación por buscar alternativas a la producción cañera, identificada como la principal causa del desempleo estacional y el excesivo desgaste físico de los trabajadores rurales. Asimismo, reunidos en pequeños grupos, los aspirantes a tierras tuvieron la oportunidad de especular sobre posibles alternativas al cultivo de la caña, cotejando actividades agrícolas y pecuarias compatibles con las múltiples habilidades desarrolladas a lo largo de sus respectivas trayectorias laborales. Es interesante observar que, después de reunirse en subcomisiones temáticas, los trabajadores resolvieron poner sobre la mesa una serie de alternativas productivas cuya financiación fue espontáneamente presentada en el registro de la generosidad: el Estado debería cubrir los gastos de implementación de un futuro emprendimiento agropecuario sin pedir contrapartidas financieras a cambio. Este énfasis en la generosidad fue retomado y prolongado por Juliana a través de la propuesta de una beca para garantizar a los trabajadores toda la tranquilidad

necesaria a la hora de poner en marcha un ambicioso plan de transformación de sus propias vidas.



Ilustración 10: En “terapia”.

8.1.2 *Terapia: desandando el CSA. Qué hacer (y cómo).*

La segunda reunión del grupo de aspirantes sirvió para hacer un balance de las sugerencias reunidas hasta entonces y para ratificar las alternativas de diversificación productiva indicadas en el primer encuentro. Tomando en cuenta la heterogeneidad de las trayectorias laborales que confluían en el grupo, decidimos que la nueva unidad productiva se dedicaría, inicialmente, a la horticultura de primor, al cultivo de verduras a campo abierto y a la cría de vacas y gallinas. Beti y otros miembros de la Comisión tenían experiencias consistentes en por lo menos una de las actividades agropecuarias mencionadas, de modo que fue posible aprovechar sus conocimientos para satisfacer diversos requisitos del proyecto. Gracias a ellos, logramos determinar las extensiones de tierra necesarias para el ejercicio rentable de la producción de alimentos, especificamos preliminarmente los costos de introducción de las líneas productivas planeadas y determinamos los ciclos de cultivo de las hortalizas y verduras. Los conocimientos disponibles en la comisión también permitirían estipular el tiempo mínimo de duración de las becas de trabajo y el valor de las inversiones iniciales solicitadas al Estado. En cuanto a Juliana y a mí, nos encargamos de investigar en los archivos digitales del MST algunos

critérios potencialmente útiles para planificar la organización del trabajo colectivo en el nuevo experimento popular de reforma agraria.

Cuando nos reunimos por tercera vez, Beti y tres miembros del grupo de aspirantes traían consigo varias hojas de cuaderno con informaciones muy detalladas sobre la plantación de hortalizas en invernaderos y a campo abierto, la cría de cerdos, vacas lecheras y gallinas. Para elaborar sus anotaciones ellos se valieron no sólo de conocimientos prácticos o de instrucciones aprendidas en cursos de capacitación técnica, sino también de informaciones ofrecidas por pequeños productores locales amigos suyos. A través del esfuerzo de esos militantes, la comisión ya estaba informada sobre las diferentes etapas del cultivo de cuatro variedades de verduras – brócoli, coliflor, zapallitos, pepino – y poseía, además, algunos datos relativos a los procedimientos y costos implicados en la cría de animales. Pachu, a su vez, descubrió algo importante mientras conversaba con una compañera del partido político al cual estaba afiliado: a fines del 2014, el parlamento uruguayo había aprobado la creación de un régimen especial de compras del Estado en beneficio de la producción agrícola familiar. De acuerdo con la ley N°. 19.292, según sus anotaciones, se establecían reservas mínimas de mercado para las adquisiciones estatales de alimentos ofrecidos por organizaciones de pequeños productores. Teníamos, aquí, un instrumento prometedor para asegurar una demanda estable a los frutos de la agricultura diversificada.

La lectura de los materiales producidos por el MST nos permitió proponer algunos métodos de autoformación destinados a favorecer la comunión de los conocimientos productivos aportados por los miembros más experimentados de la comisión. Sugerimos la constitución de grupos permanentes de autoformación para la horticultura y la ganadería. Inspirados por las prácticas del MST, también recomendamos que una eventual ocupación de tierras fuera transformada en un laboratorio donde pondríamos en práctica tanto los conocimientos socializados por la Comisión como las estrategias de organización del trabajo definidas en su ámbito. En este sentido, una futura ocupación de tierras conjugaría lucha y experimentación productiva, requiriendo, por lo tanto, la disponibilidad de insumos y semillas para el desempeño grupal de prácticas agrícolas experimentales. Pérez, uno de los integrantes de la Comisión, se comprometió a conseguir donaciones de semillas y abonos para facilitar la concreción de estas actividades cuando fuera necesario.

Era evidente que los aspirantes a tierras poseían plenas capacidades no sólo de reconocer las propias aptitudes y necesidades, sino también de investigar y definir los medios para realizarlas en las mejores condiciones posibles. Esto quedaba demostrado por

el hecho de que en tan sólo tres semanas ya poseíamos informaciones relevantes para definir la naturaleza del proyecto que pretendíamos formular: sabíamos qué sería producido, teníamos una idea de los costos aproximados para dar inicio al experimento y entendíamos por qué la caña de azúcar no sería nuestra prioridad. Lo único que nos faltaba era elegir un lugar apropiado para poner en práctica nuestra línea de acción, pero muy pronto los dirigentes de la UTAA se atribuirían tal prerrogativa. Su intención era demostrar que el sindicato podría protagonizar la totalidad de los procedimientos asociados a la colonización agraria, desde la formulación de un proyecto productivo hasta la selección de las superficies donde dicho proyecto sería implementado. En esta estrategia el Estado no aparecía como el rector exclusivo o privilegiado de la política agraria, sino como una especie de colaborador que es llamado a potenciar un curso de acción relativamente autónomo mediante la cesión generosa de sus propios recursos y territorios. Como discutiré en el próximo apartado, esta forma de actuar corresponde al esfuerzo de establecer “prescripciones sobre el Estado”, lo que significa relacionarse con este último desde una presuposición respecto de lo que él puede llegar a ser, y no desde los roles, jerarquías y protocolos administrativos que sedimentan lo que el Estado es en un momento y lugar determinados.

En los primeros días de noviembre, Sandro y Marco propusieron que la Comisión de Tierras ocupara 200 hectáreas pertenecientes al INC, situadas a la altura del kilómetro 613 de la Ruta Nacional Número 3. Ellos explicaron que esas tierras habían sido desocupadas recientemente por sus antiguos arrendatarios y que en breve serían ofrecidas por el INC a nuevos interesados. En tales circunstancias, sería necesario reivindicarlas lo antes posible, adelantándose a su eventual redistribución. Según los dirigentes del sindicato, las extensiones de la propiedad eran compatibles con el proyecto de la Comisión y su suelo parecía adecuado a diversas actividades agropecuarias, pues aquellas mismas tierras ya habían sido utilizadas para la cría de ganado y, en terrenos aledaños, se practicaba la agricultura. También señalaron que la escasa distancia entre la futura ocupación y la Chacra 15 de Enero, bajo responsabilidad de algunos militantes de la UTAA, facilitaría el abastecimiento de agua para los ocupantes de tierras, así como su acceso a herramientas de trabajo agrícola.

Los argumentos de Marco y Sandro no convencieron del todo a la Comisión de Tierras, que decidió nombrar un pequeño grupo de personas para inspeccionar personalmente las fracciones del kilómetro 613 y asegurarse de que fuesen adecuadas a las disposiciones del proyecto productivo en vías de elaboración. Felizmente, esta breve

inspección clandestina corroboró la propuesta presentada por la dirigencia del sindicato, de modo que ahora ya conocíamos la ubicación de nuestro experimento de reforma agraria y contábamos con las informaciones esenciales para redactar su proyecto base. Juliana y yo ya podíamos ponernos manos a la obra.

8.2 Proyectos menores

No era la primera vez que la UTAA promovía la elaboración de planes de colonización agraria orientados a la producción diversificada y el trabajo colectivo. Como vimos en el capítulo 3, a lo largo de toda la década de los '90 – y también en los años subsiguientes – el sindicato emprendió sucesivas veces esta tarea. No queríamos redactar el proyecto de la Comisión de Tierras sin antes revisar las anteriores apuestas políticas de la organización y, si fuera posible, colocarnos en sintonía con sus propósitos fundamentales. Un cuidadoso trabajo de archivo realizado por Lucero, la esposa de Esteban, garantizó que pudiéramos tener acceso a diversos documentos producidos por la dirección de la UTAA desde finales de los años '80 hasta mediados de los años 2000. Lucero logró obtener y almacenar toda esa documentación porque, desde la segunda mitad de los años ochenta, su esposo volvió a participar activamente en la vida sindical, como lo había hecho durante los años sesenta, antes de la persecución policial y la prisión. Los períodos en que Esteban ocupó funciones en la dirección de la UTAA, o colaboró directamente con sus integrantes, fueron muy bien documentados.

Esteban es un ex militante del MLN-T y un referente intelectual del movimiento sindical de los cortadores de caña. Además de dominar una amplia literatura sobre las luchas populares en el Uruguay y en otras partes de América Latina, incursiona de forma singular por el pensamiento libertario, posee un dominio fluido del lenguaje escrito y la oratoria, valoriza la producción textual y sabe utilizarla como instrumento de expresión y sistematización del debate político-sindical. Lucero, a su vez, fue profesora de colegio, militó en el movimiento tupamaro y durante sus años de exilio en Europa realizó estudios de doctorado en economía. Ella asesoró la formulación de las propuestas productivas de la UTAA en los '90 y ayudó a redactarlas en formatos adecuados para su presentación en diferentes organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Naturalmente, el compromiso de esta pareja con las luchas de la UTAA fue indisoluble de la elaboración de textos de los más diversos tipos: guiones para el programa dominical de radio “La Voz de UTAA”; mensajes de solidaridad remitidos a los encuentros de organizaciones amigas tanto en Uruguay como en el exterior; actas de reuniones; cartas solicitando apoyo económico y logístico para las actividades del

sindicato; pautas para el desarrollo de debates políticos sobre la coyuntura local y nacional; discursos de 1° de Mayo; breves balances sobre la situación económica de Bella Unión y, claro, proyectos productivos. Como algunos de estos textos fueron escritos en la propia residencia de la pareja – a máquina en los primeros años, y más tarde en la computadora –, Lucero logró preservar cierta cantidad de copias y borradores cuidadosamente organizados en orden cronológico y archivados en carpetas de cartón. Gracias a ella, tuvimos la oportunidad de consultar una pequeña colección de lo que denominaré “proyectos menores” de desarrollo. Tales proyectos incluían desde estrategias para el fortalecimiento de modestos emprendimientos auto gestionados por los trabajadores – bloqueras, quintas, grupo de pesca – hasta apuestas más osadas que versaban sobre una amplia reestructuración de la economía bellaunionense. Este era el caso de un ambicioso plan de “recolonización agraria” fechado de 1997.

Se trataba de “proyectos menores” no porque su escala fuera necesariamente reducida – de hecho, no lo era – sino porque, de la misma forma que las “lenguas menores”, conceptualizadas por Deleuze y Guattari, ellos describían “un tratamiento menor de la lengua patrón; un devenir menor de la lengua mayor” (Deleuze y Guattari, 1995: 51). Se trataba, como veremos a continuación, de investimentos subversivos del lenguaje del desarrollo; de una apropiación intensiva de sus aspectos elementales. Antes de profundizar en este argumento, es necesario hacer un breve rodeo por el debate sobre minoritarización de la lengua que Deleuze y Guattari (1983 [1975]) introducen en su conocido ensayo sobre Franz Kafka. Allí, los autores conceptualizan la “lengua menor” como un procedimiento enunciativo que implica importantes coeficientes de desterritorialización sobre las lenguas mayores, arrastrándolas a sus propios límites de sinsentido y extrayendo de ellas nuevas posibilidades de expresión.

Kafka, un checo de origen judío establecido en la ciudad de Praga bajo dominio alemán, inventó su máquina expresiva en medio de las condiciones de lenguaje vigentes en el contexto histórico que le tocó vivir. Él emprendió su devenir escritor asumiendo las características lexicales del alemán vehicular de Praga – lengua de la burocracia, de la universidad, del espacio público y los negocios. No escribió en checo, su lengua materna, tampoco en yiddish, su lengua comunitaria. Lo hizo en un alemán desterrado y deficitario que, a costa del trajín administrativo, las urgencias del intercambio económico y el pragmatismo de la comunicación cotidiana, se encontraba perdido de sí mismo en las calles de Praga: definitivamente desfasado respecto del canon de las bellas letras, cuya referencia era Goethe. Kafka encaró de frente las determinaciones que su tiempo impuso al

ordenamiento de las lenguas, la configuración de su repertorio expresivo y la jerarquización de sus hablantes. Es más: él vivió dichas determinaciones en la escritura, asumiendo las consecuencias de la pérdida de una identidad orgánica, supuestamente preservada en los archivos culturales de la lengua materna, siempre en vías de disolverse. En otras palabras, podría decirse que Kafka se dejó enunciar por su situación de lengua, incorporando la disindividualización que ella imponía y, simultáneamente, movilizándolo el material expresivo (im)puesto a su disposición para escribir lo que le estaba pasando: al “optar por la lengua alemana de Praga, tal y como es, en su pobreza misma” el autor pudo ir “siempre más lejos en la desterritorialización... a fuerza de sobriedad” (Deleuze y Guattari, 1983: 32), haciendo un uso intensivo de las palabras, imponiéndoles una vibración deseante. Kafka planteó, tanto en la forma como en el contenido de lo que escribía, el problema político minoritario que consistía en operar en una lengua que no era la suya y en habitar una condición social azarosa en la cual, no obstante, había que hacerse un lugar activo.

En principio el estado de una lengua no dirime las posibilidades de expresión de quienes la habitan. Pero esto sólo es así a costa de una minoritarización de la lengua: hay que escarbarle una jerga como “un perro que escarba su hoyo, una rata que hace su madriguera” (ibid.: 44). Hay que conectarle la punta de alguna “hilacha” que debe seguir deshilachándose, para volver a una expresión de Sandro, o hay que liberar en su sistema algún “caballito de batalla” irredento, para parafrasear las cavilaciones de Adhemar¹³³. “Menor” no es lo producido en la lengua de una minoría, sino una práctica que se exilia balbuceante en las prácticas discursivas mayoritarias, dejando emerger el acento de quien habla fuera de lugar y subvierte las formas mayores de representación que, en palabras de Karl Schollhammer (2001:69), “se ponen al servicio de un determinado poder institucional o de una ideología nacional”. Lo “menor” no se desprende, entonces, de la pluralidad jerárquica de las lenguas, pero sí de la entrada de un vector desterritorializante en cualquier lengua y de la (dis)torsión inmediatamente política que esto implica (cf. Maciel y Lessa, 2017: 158). La minoritarización no tiene exactamente que ver con la comunicación o el choque de identidades distintas y ya conformadas, sino con la creación de algo nuevo – otro devenir colectivo, un pueblo que está por venir – en medio de lo que cierta lengua permite decir una vez que se la deshereda de su estilo paradigmático (cf. Thoburn, 2003: 21). Minoritarizar una lengua, entonces, no es simplemente usarla en forma estratégica

¹³³ Me remito al apartado 7.4 del capítulo anterior para una contextualización de estas expresiones.

para defender las ambiciones de un sujeto ya existente. Lo menor es algo que se produce en plena lengua, descubriendo en ella una ganancia expresiva, operando un “robo en el buen sentido” – como una vez me dijo Emilio –, reteniendo algo que puede servir para ampliar posibilidades expresivas, para enunciar lo que ya no tiene palabras o nunca las tuvo. Minoritarizar(se) es, en síntesis, tomar la palabra sin reverenciar los patrones que ordenan y legitiman su uso, instilándole una expresividad tan necesaria como desreglada.

El proyecto de recolonización agraria formulado y defendido por la UTAA a mediados de los años 1990 era “menor” porque investía insólitamente el idioma desarrollista que había florecido en Bella Unión en las décadas precedentes. Allí, el agotamiento de la industria cañera, impuesto por la liberalización de la economía y la regionalización de los mercados del Cono Sur, no sólo era asumido abiertamente, sino que sus consecuencias desterritorializantes se convertían en el lugar de afirmación de una nueva matriz productiva local cuyos beneficiarios serían, también, los protagonistas políticos de una transformación económica decisiva. Como discutí en el capítulo 3, ante la crisis de la economía azucarera bellaunionense, los dirigentes de la UTAA decidieron participar simultáneamente en dos frentes de acción: uno se desplegó junto a los productores locales de caña de azúcar, pautado por la defensa de la histórica vocación productiva de la zona y, por ende, de las posicionalidades sociales inherentes a ella; el otro fue trazado junto a los sindicatos locales, de cara a la conformación de un “Movimiento de Recolonización Agraria” que encontró en la lengua del desarrollo su principal materia de expresión. Esta era una lengua que en aquel entonces se hallaba relativamente descentrada respecto del paradigma cañero en crisis. La producción de caña de azúcar ya no era pensada como el motor definitivo de la economía local: su defensa se había desplazado al horizonte de una salida casi humanitaria al hundimiento de Bella Unión en el desempleo y en la pobreza. En dichas circunstancias, lo que quedaba del desarrollo era una lógica discursiva desterritorializada, sin modelo de aplicación *a priori*.

Prescribir el desarrollo significaba, esencialmente, diagnosticar un presente indeseable, señalar un futuro alcanzable y establecer posiciones de poder que garantizarían la transmutación del primer estado en el segundo. Dicha estructura enunciativa era la que sostenía el proyecto de recolonización agraria de 1997, donde leemos lo siguiente:

La idea del proyecto [de recolonización agraria] surge de las organizaciones sindicales locales de las agroindustrias que recogen las necesidades de sus afiliados. [Estas organizaciones también] establecen relaciones con el Movimiento de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas de Bella Unión que sufren las consecuencias de la crisis azucarera.

Su propuesta fundamental consiste en hacerse responsables de un amplio proyecto de diversificación de la agricultura y reparto de la tierra que implique a “distintos organismos del Estado” de modo de avanzar

alternativas capaces de generar riquezas y atender necesidades mínimas y de calidad de vida de las familias de los 500 beneficiarios directos. Son alternativas que permiten la protección del medioambiente, con posibilidades de explotación a largo plazo. Tienen continuidad en el tiempo, pues la necesidad de alimentos presenta una demanda creciente, tanto en los mercados regionales como a nivel mundial.

Si la defensa de la industria azucarera remitía al pasado y a la preservación de una matriz económica inviabilizada por la apertura de los mercados, entonces la reivindicación del desarrollo, por otra parte, no sólo apuntaba al futuro, sino también a la redefinición de una estructura de tenencia de la tierra que la apología de la matriz productiva en crisis tendía a mantener intacta. Era necesario, según el proyecto de recolonización agraria de 1997, profundizar el “proceso de diversificación productiva” acentuado por “la instalación de CALAGUA (empresa cooperativa de riego y producción hortícola para la planta industrial de congelados) y CALVINOR que permitió el desarrollo de la vitivinicultura”, puesto que dicho proceso “no es suficiente para integrar a todos los productores desplazados del sector azucarero y generar puestos de trabajo que absorban el alto número de desocupados”. Responder de forma contundente al desaprovechamiento de la tierra y al desempleo generalizado implicaba incluir a por lo menos “100 productores sin tierra”, “300 trabajadores agroindustriales” y “100 jóvenes rurales” en un intenso esfuerzo de cooperativización destinado a la producción de cítricos, duraznos, ganado lechero, verduras, viñas y ganado de corte. Al final, no era posible que, “después de la historia reciente de Bella Unión como ‘polo de desarrollo’”, “3.730 há [...] estén cubiertas de ‘chircas’ y ‘yuyos’”. Tal situación debía remediarse de modo consistente, a través del ofrecimiento de generosas financiaciones (“que se amortizarán en 30 años”) a un segmento de la población históricamente excluido de la posibilidad de acceder a la tierra y disponer de abundantes recursos para su adquisición y cultivo. La implementación de este proyecto, estimado en 7.000.000 de dólares, sería controlada por todas las instituciones interesadas en su realización, en situación de paridad jerárquica y teniendo en cuenta “la acción dinámica de los actores involucrados”:

Las instituciones responsables de este proyecto [son]: Junta Autónoma y Electiva de Bella Unión, SOCA, UTAA, SUTRA y Movimiento de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas[.] [Tales instituciones] nombrarán un representante para la Comisión Coordinadora quien será responsable de la ejecución del proyecto.

Con estas propuestas, el sindicato introdujo en la lengua del desarrollo una torsión de estilo mediante la cual quienes postulaban la transformación de la economía local eran,

al mismo tiempo, quienes se beneficiarían directamente de esta transformación. El mismo “polo de desarrollo” que había generado una intensa oferta de puestos de trabajo en Bella Unión entre los años 1970 y 1990 también actualizó las subordinaciones de clase que, luego de la instauración del MERCOSUR, transformarían a los trabajadores de la caña de azúcar en los grandes perjudicados por la crisis económica local. Siendo así, el retomar la apuesta y el lenguaje desarrollista aparecía, en el proyecto de recolonización de la UTAA, como una estrategia de reversión de la debilidad material de los trabajadores mediante la democratización del acceso a la tierra y los financiamientos públicos. Fue la afirmación de las potencialidades transformadoras de una robusta intervención desarrollista bajo control de las organizaciones populares lo que permitió a la UTAA negar el destino de clase impuesto por la crisis a sus bases sociales. Al hacerlo, el sindicato atribuyó a los cortadores de caña desechados por la industria en bancarrota un rol central en la reconstrucción de una prosperidad sólida y abarcadora.

En el desarrollo postulado por la UTAA y sus aliados, los protagonistas y los sujetos de intervención tendían indiferenciarse. La lengua del desarrollo se doblaba sobre sí misma, hablando a quienes se proponían usarla, en vez de recortar en su exterioridad un público devenido en objeto pasivo del poder institucional. Por lo general, como sugiere Mosse, parafraseando a Derek Sayer, el éxito de los proyectos de desarrollo se produce a través de estrategias, negociaciones y acuerdos que llevan a los “actores” “a participar de determinado orden *como si* las representaciones que en él circulan fueran realidad” (Sayer, 1994: 374 *apud* Mosse, 2004: 646). La intervención desarrollista propuesta por la UTAA en los años 1990 se alejaba de ese estándar: era literalista, más que representacional; hablaba por la promoción concreta que realizaba, poseía un acento político distintivo porque “recog[ía] las necesidades” de los afiliados a los sindicatos agroindustriales¹³⁴ y las sintetizaba en una “idea” susceptible de ser discutida – como de hecho lo fue – en distintos espacios institucionales: el PIT-CNT, el Senado de la República, la Junta Departamental de Artigas, las asambleas sindicales. Antes que producir representaciones, el “proyecto de recolonización agraria” parecía afirmar un posible que sólo sería tal cuando muchos se animaran a ratificarlo, enunciarlo y respaldarlo. En suma, debería haber un “Movimiento de Recolonización Agraria” para que hubiese desarrollo. Con todo, este movimiento nunca emergió como una fuerza popular masiva por razones de las más diversas, asociadas, por

¹³⁴ La formulación del proyecto de recolonización agraria de 1997 fue precedida por una “Encuesta sobre la Situación Laboral y Socio-Familiar” de los trabajadores agroindustriales de Bella Unión. Presenté algunos de los resultados y propósitos de esta encuesta en el capítulo 3, específicamente en el apartado 3.2.

ejemplo, a la preponderancia político-económica del frente social de defensa de la industria cañera, que llegó a contar con el apoyo crítico de los sindicatos obreros bellaunionenses.

Como vimos en el capítulo 3, a partir del 2006 ALUR respondió positivamente al deseo de desarrollo cultivado por la UTAA en la década anterior, presentando a los trabajadores rurales un “proyecto mayor” tributario del compromiso electoral del Frente Amplio con la generación inmediata de nuevos puestos de trabajo en el norte del país. El “proyecto mayor” de los neodesarrollistas uruguayos reafirmó, en primer lugar, la paradigmática vocación cañera de Bella Unión. Fue sólo después de la lucha agraria del 2006 que la burocracia de ALUR reconoció en los asalariados rurales a los sujetos potenciales de una modalidad de acceso a la tierra que no era generalizable y estaba condicionada por el arrendamiento, el monocultivo y la deuda. El proyecto de ALUR fue “mayor” porque movilizó las variables lexicales típicas del lenguaje del desarrollo de acuerdo con su uso canónico y recurrente: un uso que reafirma las asimetrías de poder preexistentes para atribuir a algunos – en detrimento de otros – la prerrogativa de arbitrar sobre las condiciones de transición entre un presente indeseable y un futuro mejor para toda la sociedad. Aquí, los promotores y los beneficiarios del desarrollo están separados desde un principio. Lo que los conecta son ciertas representaciones cuya validez debe ser certificada, en última instancia, por quienes detentan posiciones legítimas de poder institucional. Así, los beneficiarios del desarrollo, cuya debilidad cultural y política fue asumida de antemano por el *staff* progresista (capítulo 5), han podido volverse clientes de un consorcio desarrollista intensamente preocupado por determinar los mecanismos más adecuados para contemplar, en forma limitada y tal vez transitoria, su conversión en sujetos productivos, eficientes y aptos para la acumulación de capital.

La expansión de los cañaverales aumentó muy considerablemente la demanda de fuerza de trabajo en Bella Unión. Esto fue así hasta el año 2015, cuando el área cultivada de caña alcanzó su límite máximo, en torno de 9.000 hectáreas¹³⁵. Entre 2006 y 2015, el deseo de desarrollo encontró, sin duda, algunos focos de realización: 112 familias de trabajadores organizados en la UTAA recibieron tierras del INC y cerca de 1.200 trabajadores rurales tuvieron sus fuentes de ingreso aseguradas durante al menos cinco meses del año. Esta nueva realidad favoreció la proliferación, tanto entre los colonos del

¹³⁵ En el cierre de la zafra de 2015, Ruben Barboza, presidente de ALUR y vicepresidente de ANCAP, comunicó a la prensa que el ingenio sucroalcoholero de Bella Unión había alcanzado su "tope productivo" (Brecha, 4-12-2015). El "tope" significaba la concretización de una meta formal trazada por la empresa, respondiendo a criterios políticos y económicos, y no necesariamente al agotamiento de la capacidad operativa del ingenio de Bella Unión.

CSA como entre los trabajadores en los cañaverales, de enunciados alternativos sobre la posesión y el uso de la tierra, sobre los sentidos de una vida mejor y sobre los horizontes realmente disponibles a la realización del trabajo humano (capítulo 7). La afirmación radical de estos enunciados, y su legitimación en el campo de la “lucha”, permitió que un “proyecto social” posible se sustrajera – por lo menos en pensamiento – a las determinaciones productivistas del CSA. Sin embargo, dado que el despliegue objetivo de ese “proyecto social” dependía de ciertos recursos materiales que estaban en posesión de algunas instituciones del Estado – específicamente el INC –, era necesario dirigirse a ellas en una lengua que les resultara mínimamente inteligible, asegurando así el avance de la política agraria formulada en la Comisión de Tierras del sindicato. El idioma de los proyectos productivos, con sus “objetivos generales y específicos”, sus “beneficiarios”, “instituciones responsables”, “cronogramas” y “presupuestos” era el terreno donde Juliana y yo deberíamos trazar una “minoritarización” que hiciera justicia a las apuestas políticas de nuestros compañeros de la UTAA. Para nosotros, el desafío consistía en convertir el proyecto de desarrollo que estábamos encargados de escribir en una continuación de la política de la Comisión de Tierras, y no en su traducción a otro protocolo de expresión que tendiera a neutralizar las fuerzas colectivas que tratábamos de conjurar en el registro de la “lucha”. Esto implicó sintonizar el “proyecto social” invocado por la UTAA con otros de su género: me refiero a los “proyectos menores” de las décadas precedentes, aquellos en los cuales el deseo de desarrollo conjugaba ciertas ambiciones personales y colectivas de una vida mejor con la actualización de las antiguas esperanzas y las actuales exigencias de la política popular¹³⁶.

Lo que hicimos, entonces, fue atribuir textualmente a los integrantes de la Comisión de Tierras algo que ellos ya se habían atribuido en la práctica, a saber: la capacidad no sólo de reconocer sus dilemas actuales, sino también de prescribir y efectivizar protocolos para solucionarlos. A juzgar por los antiguos “proyectos menores” de la UTAA, distintos militantes ya se habían atribuido prerrogativas semejantes en el pasado, de manera que no dudamos en evocar tales antecedentes para reforzar la legitimidad de los posibles anunciados en el presente de la lucha sindical. La necesidad de textualizar las prescripciones de la Comisión de Tierras era inherente al lenguaje en que ellas se

¹³⁶ Hay paralelos entre la lógica del “planeamiento indígena” – identificada por David Gow (2008) entre los nasa, de Colombia – y la de lo que yo denomino “proyectos menores”. De acuerdo con Gow, a diferencia de los planes nacionales de desarrollo, la construcción de proyectos en las comunidades indígenas es menos susceptible al disimulo, en la medida en que pone muchas cuestiones relevantes en juego. Dichas cuestiones pueden representar la materialización de antiguas esperanzas y viejas exigencias y, por esta razón, deben ser cuidadosamente presentadas y reivindicadas (cf. Gow, 2008: 97 y ss.).

manifestaban: se trataba de prescripciones sobre las instituciones del Estado, es decir, de disposiciones que incluían a ciertos organismos estatales en su campo de efectución, otorgándoles nuevas funciones y objetivos. La formulación de prescripciones sobre el Estado no debe confundirse con la subsunción de la “lucha” en la “gestión” en virtud de una simple razón: en tal formulación no se estaban proponiendo soluciones administrativas en el marco de lo que las composiciones institucionales vigentes sostenían como viable. En efecto, había una inviabilidad institucional *a priori* en el proyecto que se formuló desde la Comisión de Tierras de la UTAA; una inviabilidad intencional que sólo podría dejar de serlo bajo las condiciones de “lucha”. La diferencia entre “gestión” y “lucha” no se define por el hecho de que en la primera la burocracia estatal es incluida en un proceso estratégico de interlocución, mientras que en la segunda esto no sucede. Su diferencia reside en que, en el primer caso, el proceso de interlocución asume lo que es posible hacer de acuerdo con los dispositivos institucionales existentes para la solución de determinado tipo de problema, mientras que en el segundo caso la lucha prescribe simultáneamente problemas y soluciones, suponiendo una transformabilidad del aparato institucional existente. En pocas palabras: “lucha” incluye al Estado en sus prescripciones, al tiempo que “gestión” convierte a las prescripciones de las personas en demandas compatibles con el horizonte administrativo del Estado en su forma actual. Esto equivale a decir que la diferencia entre “lucha” y “gestión” no es un dato de la realidad, sino que consiste en el resultado mismo de una política: desde la política inaugurada por la nueva Directiva de la UTAA en el 2015, “gestión” se definía como aquello de lo que había que apartarse, por eso “lucha” era diferente de “gestión”. Tal separación sólo podría durar mientras existiera la política que la prescribía.

A mediados de noviembre de 2015, las disposiciones políticas enunciadas por la Comisión de Tierras llegarían a Montevideo, a la mesa de Jacqueline Gómez, presidenta del INC. En las primeras páginas del proyecto, anunciábamos lo siguiente:

Cada vez que un “proyecto mayor” empieza a ser implementado en la zona [de Bella Unión] es como si la historia volviera a empezar desde cero. No obstante, cada nuevo comienzo atestigua la repetición, con grados variables de intensidad, del mismo infortunio que había marcado las historias anteriores: gran parte de la población permanece condicionada por un sistema de trabajo zafral que la priva de ingresos estables durante largos meses del año [...] En el año 2006, la ampliación de la agroindustria azucarera bajo los auspicios de la empresa ALUR inauguró un nuevo capítulo en la historia de los “proyectos mayores” en Bella Unión. Sin embargo, las propuestas productivas construidas por las organizaciones obreras desde inicios de los años noventa fueron escasamente contempladas por el nuevo Proyecto Sucroalcoholero. El problema de la zafralidad y la histórica demanda de acceso a la tierra de los trabajadores rurales de Bella Unión constituyen cuestiones todavía pendientes que las actuales estrategias de desarrollo impulsadas por el gobierno se han mostrado incapaces de

resolver. Por esta razón, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas se propuso retomar el patrimonio intelectual cultivado por la organización en los últimos treinta años para elaborar las bases políticas y organizativas de una nueva propuesta de acceso a la tierra que procura contemplar las expectativas y las necesidades enunciadas por los trabajadores asalariados y pequeños productores rurales organizados en la Comisión de Tierras del Sindicato. El presente documento pretende definir las condiciones de posibilidad para un experimento auténtico de reforma agraria, basado en la creación de una unidad productiva diversificada que se destinará a la producción lechera, ganadería, granja animal y horticultura y que podrá beneficiar a 23 familias de asalariados rurales y pequeños productores sin tierra. Las “Bases para un experimento de acceso a la tierra con miras al desarrollo de una estrategia global de reforma agraria” sintetizan el modelo organizativo que, desde el punto de vista de la UTAA, debería orientar la promoción del acceso a la tierra entre los asalariados rurales. El propósito de este documento es delinear un conjunto de prácticas institucionales destinadas a generar las condiciones políticas y materiales, bien como la sinergia institucional necesaria, a la implementación de una unidad productiva piloto al servicio de la planificación de una política estatal reforma agraria (UTAA, 2015).

Las páginas subsiguientes hacían un balance crítico de las experiencias de acceso a la tierra promovidas en el marco del CSA y justificaban la necesidad de explorar nuevas formas de colonización agraria de acuerdo con los términos discutidos por la Comisión de Tierras. También presentábamos una lista completa de los “protagonistas” de la unidad productiva, indicando su edad, sus experiencias profesionales y la composición de los núcleos familiares. En las secciones correspondientes a los objetivos generales y específicos, discriminábamos los propósitos del “experimento” productivo y en seguida detallábamos todas las actividades que serían necesarias para concretarlos. Estas actividades suponían diversos tipos de compromisos – asignación de financiamientos, compra de insumos, construcción de infraestructuras, formación de una cooperativa, realización de ciclos de autoformación, distribución equitativa y rotativa de tareas, etc. – que involucraban tanto a las instituciones del Estado (MGAP, INC, MIDES, UDELAR) como al sindicato y los aspirantes a tierras. Finalmente, esbozábamos un presupuesto preliminar que cubriría todas las actividades previstas, inclusive el pago de “becas especiales” por el valor de al menos un salario mínimo a todos los “protagonistas” del emprendimiento. Las becas serían “susceptibles de ser incrementadas de acuerdo con la extensión de cada núcleo familiar”. En suma, estábamos solicitando al Estado un monto de 227.596 dólares.

8.3 Redimir una promesa.

La presidenta del INC tomó contacto con el documento de la Comisión de Tierras a fines de la segunda semana de noviembre de 2015, en forma concomitante con la ocupación de una fracción de 200 hectáreas situada a la altura del kilómetro 613 de la Ruta 3. En los diez días que precedieron la ocupación de tierras, un borrador del proyecto de colonización fue sometido a una intensa discusión en el ámbito del sindicato. Hicimos

lecturas colectivas del material e invitamos a los militantes más experimentados de la UTAA, entre ellos Esteban, a opinar sobre su contenido, sugerir modificaciones y especificaciones. Los miembros de la Comisión de Tierras fueron llamados formular los puntos fundamentales de una “Carta Política” de la ocupación. Esta carta sería una especie de resumen de los objetivos principales del proyecto y serviría tanto para sensibilizar a otros actores sociales sobre las propuestas del sindicato como para volverlas más accesibles a los medios de prensa.

Las sugerencias sobre el contenido de la Carta Política fueron escritas en grandes hojas de cartulina y colgadas en las paredes de la sede de la UTAA. Durante las últimas reuniones previas a la ocupación, alguien leía en voz alta las frases expuestas en la pared y volvíamos a discutir las con la totalidad del grupo, palabra por palabra. La idea era que los aspirantes a tierra pudieran evaluar la pertinencia y el sentido de un vocabulario que, a partir de entonces, ellos pasarían a movilizar cuando fuera necesario defender en público el horizonte de posibles subyacente a su acción colectiva.

En la medida en que las principales consignas de la ocupación fueron sedimentándose, un grupo de aspirantes se encargó de preparar la identidad visual de la medida de lucha. Dos pasacalles más vistosos, pintados a mano por nuestros compañeros, comunicaban los siguientes mensajes: “aquí se construye la primera unidad de reforma agraria. Juventud de Bella Unión en busca de nuevos horizontes”; “Por una reforma agraria real y generosa”. Aprovechamos la efervescencia creativa del momento para grabar un video de divulgación en el cual los miembros más desinhibidos de la Comisión de Tierras leían frases cortas que sintetizaban los propósitos de la lucha que estaba por empezar. El video fue publicado en el blog de la UTAA el mismo día de la ocupación de tierras (ver código QR1).

Código QR 1



La fecha establecida para el inicio de la medida de lucha fue el 14 de noviembre de 2015, un sábado. La mayor parte del grupo de ocupantes se reuniría en casa de Nira a las

cuatro de la mañana. Migue estaría esperándonos en el punto de encuentro con su micro-ómnibus. Quien tuviera medios propios de locomoción debería dirigirse directamente al lugar de concentración, en la chacra 15 de Enero. El viernes a la noche, mientras Juliana y yo estábamos armando las mochilas para dirigirnos al lugar de encuentro de la Comisión de Tierras, nos llegó por la radio una noticia preocupante: empezaban a circular las primeras informaciones sobre el atentado en París contra el teatro Bataclán. Sabíamos que una tragedia de estas dimensiones absorbería la atención de la prensa uruguaya por varios días, invisibilizando las pautas periodísticas locales. Si en circunstancias normales ya sería difícil dar repercusión nacional a las demandas del movimiento popular del extremo norte del país, después de la catástrofe francesa quedaba claro que la ocupación comenzaría en medio del anonimato. De cualquier forma, era demasiado tarde para suspenderla. Luego de intensas semanas de debate y agitación política, la desmovilización de la Comisión de Tierras sería un balde de agua fría sobre los ánimos del grupo. Preservar el grado de autoconfianza alcanzado por nuestros compañeros era más importante que garantizar la inmediata visibilidad pública de su proyecto productivo. Antes que llamar la atención, un posible debe llamar a la acción. Si ambos efectos no podían obtenerse simultáneamente, entonces había que optar por el segundo, apostando a que sus consecuencias benéficas contrarrestaran el desafío redoblado impuesto por la irrupción de una pauta periodística demasiado absorbente. Esta ponderación estratégica estuvo limitada a mi diálogo con Juliana, pero muy pronto los ocupantes de tierras también tendrían que elegir cuidadosamente los mejores caminos para llevar su política a buen término. En este punto, y considerando las coordenadas metodológicas que informan mi análisis, conviene tejer algunas reflexiones sobre la relación entre una política y sus dimensiones estratégicas.

El imperativo metodológico enunciado en la introducción a esta tesis, que consiste en negarse a desprender la especificidad de una política de su repertorio táctico-estratégico no implica, de ningún modo, afirmar que la prescripción de un posible puede prescindir de cualquier elaboración estratégica. Lazarus es muy claro al respecto cuando afirma que “lo prescriptivo es el trabajo de la separación, y lo posible es a la vez la decisión de cumplir este trabajo y su efectividad” (Lazarus, 1996: 42). En 2015 la prescripción política de la UTAA distinguía “lucha” de “gestión”: aquí residía su criterio fundamental de operación. La lucha por la tierra fue colocada bajo esta prescripción, de modo que su realización debió ocurrir lejos de los protocolos de colonización agraria ya existentes en Bella Unión, e incluso en el Uruguay. En otros términos, había que prescribir el acceso a la tierra independientemente de lo que, desde la “gestión”, se planteaba como lo objetivamente

posible o factible. Los lineamientos del proyecto de reforma agraria elaborado en la Comisión de Tierras eran posibles sólo bajo condición de “lucha”, de modo que nada aseguraría su viabilidad salvo las *estrategias* agenciadas para ponerlos en práctica. Estas consideraciones reflejan el devenir de la política sindical que los dirigentes de la UTAA inventaron en el 2015: primero hay prescripciones, luego hay posibles y, finalmente, se desarrolla una estrategia de intervención pública que sea fiel a ambos. Dicho esto, podemos ahora reiterar la matriz de lectura que guía esta tesis: una política es del orden de las prescripciones y los posibles, y no del orden de las estrategias que se movilizan para concretarla.

Si elegimos cualificar una política desde su dimensión estratégica, perdemos de vista sus prescripciones, algo que puede resultar muy simplificador cuando dichas prescripciones realmente existen. ¿Qué nos dice una ocupación de tierras sobre la singularidad prescriptiva de la política desplegada en 2015? En sí misma, nos dice muy poca cosa, básicamente porque otras políticas también han incluido estrategias equiparables como condición de su despliegue. Para no ir muy lejos, bastaría con recordar el “modo popular” identificado en el capítulo 3, donde también se ocuparon tierras fiscales. Si es cierto que la política del “modo popular” y la política que conocí en el 2015 abrieron campos de posibles diferenciados entre sí, entonces lógicamente su especificidad no puede desprenderse de las estrategias que movilizaron. Desde el punto de vista estratégico, las dos políticas resultan comparables puesto que reivindicaron tierras mediante su ocupación. Sin embargo, en el año 2006 los trabajadores estaban interviniendo en un proyecto de desarrollo del gobierno desde su propia agenda colectiva, es decir, desde lo que llamé un “estado de necesidad” autónomico y opuesto a las “necesidades del Estado”. En 2015, por otro lado, la Comisión de Tierras afirmaba la viabilidad de la lucha agraria por fuera de las condiciones de acceso a la tierra avaladas por ALUR y el INC. Tenemos, entonces, dos políticas diferentes e irreductibles entre sí que incluyeron un mismo procedimiento estratégico en su proceso de concreción. Esta constatación permite afirmar que las estrategias importan objetivamente porque aseguran – o no – el éxito de una política. Sin embargo eso no quiere decir que ellas iluminen, necesariamente, su contenido prescriptivo. Incluso podríamos sostener que, cuando las estrategias irrumpen en el campo social e informan un combate abierto, lo principal ya está hecho: prescripciones han sido formuladas, posibles han emergido, y un grupo de personas ha decidido actuar consecuentemente en su registro. Esto fue lo que empezó a ocurrir en la madrugada del 14 de noviembre de 2015.

Llegamos a la casa de Nira a la hora combinada. Allí estaban el ómnibus de Migue y buena parte de la Comisión de Tierras. Isabel, ex trabajadora de Green Frozen y gran entusiasta de la UTAA, tenía algo para mostrar a los demás. Ella había movilizado sus dotes de costurera para elaborar una vistosa bandera de lucha por la tierra. El estandarte era una réplica del que utilizaba el sindicato en la década de los '60, durante sus marchas a Montevideo: tres franjas paralelas, la superior y la inferior en color celeste y la del centro blanca. Sobre la franja roja que cruzaba la bandera en diagonal, se leía la palabra "TIERRA". Isabel también traía en la cartera una hoja de papel con un breve discurso "motivacional" que pretendía declamar mientras hacíamos la concentración en la Chacra 15 de Enero. Desafortunadamente, la timidez de Isabel – agravada por la inevitable tensión de los preparativos de última hora – terminó sobreponiéndose a su intención de discursar. Sin embargo, días más tarde, ella me regalaría el texto original: quería saber mi opinión al respecto y compartir conmigo un íntimo "recuerdo de aquella lucha". Recorramos sus palabras:

¡Compañeros! ¡Hoy es un gran día! Un día para grabar en nuestras memorias. Nos impulsa una gran causa: nada más y nada menos que el deseo y la frenética fuerza de la lucha por la tierra. La tierra es fuente de esperanza, fuente de trabajo. Y es una palabra que dignifica. Somos dignos de tomar la tierra, poseerla y explotarla. Somos gente de trabajo y no podemos permitir que se nos humille con migajas. No, compañeros. Unidos en esta lucha, triunfaremos. Nuestras manos son como cadenas que nos unen en fe y esperanza. Queremos demostrarle al país que a través de este plan piloto podemos trabajar la tierra en forma cooperativa y buscar las condiciones adecuadas al trabajo. Tenemos un proyecto renovador: la propuesta de una reforma agraria que garantiza trabajo para un mejor porvenir de nuestras familias y para dejar de depender de la zafralidad. ¡Nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos! ¡Viva Artigas! ¡Viva Sendic! ¡Viva UTAA! ¡Viva nuestra patria!

En este discurso, la lucha por la tierra dignifica a la "gente de trabajo" porque refuerza su "esperanza". "Dignidad" y "esperanza" serían condiciones negadas por la "zafralidad" y por la distribución circunstancial de "migajas" que trivializan una promesa histórica de justicia social sostenida en la constelación de las palabras "Artigas", "Sendic", "UTAA" y "patria". Parfraseando una frase célebre de José Artigas¹³⁷, Isabel atribuía la facultad de redimir esta promesa a un "nosotros mismos" en condiciones de afirmar, por cuenta propia, la posibilidad de una "nueva y verdadera reforma agraria".

A propósito de su estudio sobre la reivindicación de la "promesa" del desarrollo en la comunidad campesina de Usibamba, en los Andes peruanos, Pieter de Vries reflexiona sobre los poderes liberados por una política que se sustrae al "aparato de desarrollo" sin

¹³⁷ "Nada podemos esperar sino de nosotros mismos" escribió José Artigas en una carta a Martín Güemes fechada de 5 de febrero de 1816.

declinar, por decirlo así, de su promesa fundamental. Según el autor, el “aparato de desarrollo” sería una “máquina que genera toda clase de deseos (por mercancías, salud, educación, sentimientos de pertenencia)”, sin jamás poder cumplirlos cabalmente. En pocas palabras, su “*modus operandi* [...] es el de generar y banalizar los deseos por el desarrollo” (de Vries, 2013: 259-260). En tensión como este mecanismo frustrante, los usibambinos se aferraban al “deseo de desarrollo” y extraían de esta actitud la fuerza colectiva para “seguir insistiendo en las promesas de una vida mejor, de ciudadanía, de progreso, que les hicieron y que no fueron cumplidas”. Para de Vries, “es precisamente esa insistencia en el deseo de desarrollo la que insta a los usibambinos a seguir pensándose como una comunidad” (ibid.: 263).

En lo que se refiere a Bella Unión, la interrupción del ciclo inexorable de proliferación y aniquilación del deseo desencadenado por los “proyectos mayores” de desarrollo pasaba, en 2015, por mantener abierto un horizonte de lo posible, negando enfáticamente que él se hubiese dirimido en la banalidad del desarrollo realmente existente. En esto consistía el cometido básico de la política de “lucha” en el terreno de las reivindicaciones agrarias. Es la desbanalización del deseo de desarrollo la que revigoriza la adhesión de las personas a las “grandes causas” colectivas: las únicas causas hechas a la medida de lo que Marx había llegado a definir como una “licuefacción de los anhelos y de las ideas” (Marx y Engels, 2007 [1845-1846]: 250)¹³⁸, es decir, su sustracción a la “base material” sobre la cual ellos parecían estar triste y necesariamente fijados. La dialéctica entre proliferación y banalización del deseo, entre la actualización de las “grandes causas” en el campo de la “lucha” y la negación sistemática de sus prescripciones en el espacio institucional, quedaría dramáticamente clara en el transcurso de la ocupación de tierras. En ella se jugaría, golpe a golpe y estratégicamente, la separación entre “lucha” y “gestión”.

Pocas horas después de haber ingresado a los campos de la Ruta 3, cuando aún estábamos instalando la estructura del campamento en el interior y alrededor de una casa abandonada, recibimos la visita del responsable de la oficina local del INC. Un grupo de representantes de la Comisión dejó el trabajo para entregar al visitante una copia de la Carta Política y otra del proyecto productivo. En un breve diálogo, explicaron que el sindicato estaba luchando por una nueva política de tierras y exigía que el INC y otras instituciones estatales financiaran una unidad productiva diversificada para “inspirar la reforma agraria”. Muy serio, el funcionario público recibió los documentos y dijo que

¹³⁸ Por “licuefacción” debemos entender “fluidificación” y no “disolución” o “eliminación”.

entraría en contacto con “Montevideo” para informar sobre la situación. Aquella misma mañana, cinco horas después del inicio de la ocupación, un oficial de policía y dos soldados incursionaron en los campos reivindicados por la UTAA. “Montevideo” estaba entrando en acción. Los policías querían confirmar una denuncia por “usurpación de propiedad” y registrar los nombres de los “responsables” de la toma de tierras. Ante la interpelación policial, los dirigentes del sindicato aclararon que allí estaba en curso una “medida de lucha” y dieron a los agentes de seguridad sus nombres y números de cédula. La prensa bellaunionense fue la última en hacernos una visita matinal: sacaron fotos de la ocupación y entrevistaron a Sandro muy brevemente. Mientras tanto, en Montevideo sólo se hablaba de París.

Después del almuerzo, los niños jugaron al fútbol en un campito improvisado y algunos adultos recorrieron el terreno en busca de los locales más adecuados para preparar una pequeña huerta. Alrededor de las cinco de la tarde, Esteban llegó al campamento para solidarizarse con los ocupantes de tierras. Mientras estaba con nosotros, recibió una llamada de Jacqueline, la presidenta del INC. Desconociendo la autoridad de los dirigentes de la UTAA, la funcionaria prefirió hablar con un cuadro histórico del sindicato, probablemente porque identificaba en él una mediación adecuada para hacer llegar su mensaje a los manifestantes sin tener que interpelarlos directamente mientras estuvieran actuando en tensión con ley. Después del diálogo telefónico, Esteban nos contó las novedades: el INC estaba dispuesto a negociar, pero cuestionaba que se hubiera realizado una ocupación de tierras sin previo aviso a las contrapartes estatales. De acuerdo con Jacqueline, sólo habría diálogo cuando la UTAA se retirara de la propiedad ocupada. La presidenta del Instituto también invocó sus atribuciones institucionales para resaltar que serían tomadas todas las medidas judiciales pertinentes en una situación de toma de tierras.

Sandro y sus compañeros entendieron que había que convocar a una asamblea de la ocupación para decidir qué actitud debería adoptarse en estas circunstancias. La asamblea tuvo lugar bajo un viejo y frondoso árbol, en las inmediaciones de los alojamientos. Esteban volvió a relatar a los presentes el contenido de la conversación con Jacqueline y manifestó su posición al respecto. Para él, lo más estratégico sería trasladar el campamento para la banquina de la Ruta 3, señalando con ello una clara intención de diálogo. En la opinión de este dirigente histórico, existía la posibilidad real de que el INC pidiera el desalojo de la ocupación, inclusive mediante el uso de la fuerza policial. Siendo así, lo más pertinente sería evitar por todos los medios una confrontación violenta.

Las palabras de Esteban desembocaron en un silencio incómodo. Nira me miraba perpleja. Sandro observaba alrededor, esperando a que otros participantes de la asamblea manifestaran su posición. Yo me sentía angustiado. Comprendía y compartía las preocupaciones de Esteban por la integridad física de las familias allí presentes, pero por otro lado dudaba que el INC llegase a solicitar una medida de desalojo al poder judicial. Además, consideraba que un eventual operativo policial, como el organizado unos meses atrás para desocupar Green Frozen (capítulo 1), podría ser hasta beneficioso teniendo en cuenta la necesidad de visibilizar públicamente la ocupación y aglutinar apoyo social en torno a sus demandas. En última instancia, los trabajadores no tendrían que entrar en confrontación con la policía si no se juzgaban en condiciones de hacerlo. De todos modos, por sí solo, el desplazamiento de un aparato represivo para la zona de Bella Unión quizás ampliase la repercusión del hecho político producido por la toma de tierras. Todas estas conjeturas se agolpaban en mi mente mientras la asamblea seguía en silencio, taciturna.

Fue Sandro quien interrumpió el silencio para proponer que, con calma, empezáramos a trasladar el campamento para el costado de la ruta la mañana siguiente. Si el INC no demostraba intenciones claras de diálogo, la ocupación podría retomarse en cualquier momento. La asamblea acompañó sin entusiasmo esta moción conciliadora que, además de respetar los conocimientos y la autoridad de Esteban, también parecía apuntar a mantenerlo cercano a la medida de lucha, algo que podría favorecer futuras negociaciones con el INC¹³⁹. Personalmente, sentí tristeza. La nueva coyuntura inviabilizaría una parte significativa de los planes que habíamos trazado para la ocupación: nuestros alojamientos se volverían bastante precarios y perderíamos el control de una propiedad en la que la Comisión de Tierras podría empezar a poner a prueba sus capacidades de organización del trabajo mediante pequeños experimentos agrícolas. Asimismo, en términos estratégicos, no tendríamos la oportunidad de generar un nuevo debate público inherente a la ocupación “ilegal” de tierras del Estado, lo que ponía al INC en una situación relativamente cómoda y aflojaba el conflicto incluso antes de su agudización.

¹³⁹ Presidenta del Instituto desde 2013, Jacqueline reivindicaba el artiguismo, las experiencias colectivas de acceso a la tierra y una distribución de los recursos del INC que privilegiara a los pequeños productores y asalariados rurales. Ella pertenecía al Movimiento de Participación Popular, una fuerza política frenteamplista que, como ya mencioné en otras partes de la tesis, fue fundada por varios militantes y ex militantes tupamaros. Además, había militado en el Movimiento por la Tierra, una organización creada por Raúl Sendic después de la dictadura que mantenía relaciones relativamente cercanas con la UTAA. Estos compromisos la llevaban a valorar las posiciones y la trayectoria de personas como Esteban, que ella había conocido en anteriores visitas al norte uruguayo. Esteban, a su vez, identificaba en Jacqueline una “buena persona, comprometida”, aunque consideraba que sus atribuciones públicas la colocaban en un conflicto potencial con los intereses de los trabajadores.



Ilustración 11: Una asamblea difícil. Foto tomada por Anne, hija de Nira.

La suspensión de los efectos propagandísticos de la ocupación de tierras exigió de la militancia de la UTAA esfuerzos redoblados para hacer que sus demandas repercutieran en otras partes del país. Tales esfuerzos no estuvieron exentos de riesgos físicos. El 19 de noviembre, Sandro y tres integrantes de la Comisión de Tierras entraron en huelga de hambre con dos objetivos en mente: llamar la atención de la prensa nacional sobre la lucha de la organización e incidir con más vehemencia en el proceso de negociación con el Estado (ver código QR 2). La huelga de hambre duraría cinco días y determinaría la internación hospitalaria de uno de sus adherentes. Un día antes del inicio de la huelga, La Diaria fue el primer periódico montevideano en relatar lo que venía sucediendo en Bella Unión. En una nota relativamente detallada, el diario sintetizaba los “fines y formas” de la lucha de la UTAA, transcribía pasajes del proyecto productivo del sindicato y divulgaba un breve diálogo con la presidenta del INC, en el cual ésta se comprometía a ir personalmente al norte del país para ver “qué compartimos [con la UTAA] y en qué cosas de todo el planteo tiene injerencia el INC”. En el mismo reportaje, Jacqueline también reconocía que las reivindicaciones del sindicato eran “bastante más amplias que el acceso a la tierra” y señalaba la necesidad de que otras instituciones del Estado se sumaran a las negociaciones (La Diaria, 18-11-15). Después de declarada la huelga de hambre, los periódicos montevideanos El Observador y La República también notificaron la ocupación de tierras y

Sandro concedió una larga entrevista al programa Tierra Libre, transmitido desde Montevideo por Radio Centenario.

Código QR 2



El 23 de noviembre, en plena huelga de hambre, llegó a Bella Unión una comitiva de funcionarios del INC encabezada por la presidenta de la institución. Los acompañaban representantes de ALUR y del MGAP. El lugar definido para la primera ronda de negociaciones fue un galpón situado en la Chacra 15 de Enero. Todos los miembros de la Comisión de Tierras, así como los integrantes de la dirección de la UTAA y dos dirigentes históricos del sindicato – Esteban y Cacho – estaban presentes en la reunión. Esteban, que trabajaba en “la 15 de Enero” y era el principal entusiasta de los experimentos de diversificación realizados en este emprendimiento agrícola, fue el anfitrión del encuentro. Luego de darle la bienvenida a los participantes, él resumió el estado del conflicto: UTAA reivindicaba 200 hectáreas para realizar un experimento piloto de reforma agraria cuyas características generales estaban sistematizadas tanto en la Carta Política como en el proyecto productivo enviados al INC. Según Esteban, la negociación “no sería simple”, pues involucraba “nuevas propuestas” que hasta entonces no habían sido debatidas abiertamente con el Estado.

A su vez, la presidenta del INC afirmó su disposición de discutir el proyecto y las propuestas de la UTAA, reconociendo, en primer lugar “que falta mucho en lo que respecta a la reforma agraria”. Según ella, “hemos logrado hacer algo, pero otras cosas quedaron pendientes”. Para ejemplificar los “importantes avances” conquistados hasta entonces en materia de política agraria, Jacqueline distribuyó entre los presentes un documento especialmente elaborado para la ocasión y procedió a la lectura de sus aspectos más relevantes: “desde el año 2007 – decía el documento en la voz de Jacqueline –, el INC viene promoviendo el surgimiento de emprendimientos asociativos de producción agropecuaria en la zona de Bella Unión como herramienta de inclusión social y productiva de las familias de trabajadores y trabajadoras asalariados”.

El texto en cuestión reiteraba que los trabajadores provenientes de la UTAA ya habían sido beneficiados con cantidades importantes de tierras – más específicamente, 2.041 hectáreas –, fruto de la inversión de 9.184.500 dólares. De acuerdo con el INC, había en la zona de Bella Unión, bajo control de ex asalariados rurales, cerca de 1000 hectáreas con “potencial para diversificación”. Jacqueline también subrayó que el INC estaba incentivando la diversificación productiva en colonias como la de Pay Paso, donde las tierras utilizadas para el pastoreo se habían exentado del cobro del arrendamiento. Finalmente, la “alianza” entre el INC y ALUR fue definida como “muy importante” porque, gracias a ella, los trabajadores beneficiados por el acceso a la tierra podían disponer de fuentes de renta “desde un principio”, algo esencial para quien comienza a desarrollar una actividad productiva sin disponer de capital acumulado. En suma, el argumento de Jacqueline eludía el programa de la Comisión de Tierras o lo daba por realizado, reforzando los siguientes puntos de vista: la reforma agraria consistiría en un horizonte muy lejano, pero la “inclusión social y productiva” de los trabajadores de Bella Unión *ya configuraría* un hecho visible y demostrable; la UTAA, a su vez, *ya había* sido beneficiada por una política agraria consistente, de manera que la cuestión esencial en aquel momento no sería la distribución de la tierra, sino la diversificación de su uso; finalmente, la alianza entre el INC y ALUR *ya había* hecho posible el desarrollo de formas adecuadas de democratización del acceso a la tierra en el norte uruguayo: este era el horizonte estratégico en el cual habría que operar.

Después de escuchar las ponderaciones de Jacqueline, Marco, uno de los dirigentes de la UTAA, puntuó sus objeciones: “nosotros no estamos pidiendo que nos ayuden, que nos incluyan o lo que sea. Estamos ayudando a ustedes a encontrar soluciones”. Sandro tomó la palabra enseguida. Agradeció irónicamente a Jacqueline por la “linda historia” que había contado y luego subrayó algunos problemas en las modalidades de acceso a la tierra practicadas hasta aquel momento en Bella Unión:

Los compañeros entran a la tierra teniendo que pagar por todo lo que reciben y tienen que hacerse cargo de las chacras [cañeras]. No hay posibilidad de hacer otra cosa porque no tienen plata o no les da el tiempo. Por ahí crían alguna vaca, pero eso genera trabajo para dos o tres personas. Aquí estamos hablando de terminar con la zafra.

Jacqueline seguía convencida de que el problema central no era la asignación de más tierras, pero sí la diversificación eficiente de las parcelas ya concedidas, inclusive las de Pay Paso. Ante la obstinación de su interlocutora, Marco evocó el texto del proyecto productivo de la Comisión de Tierras para enfatizar que aún no estaban dadas las condiciones para poner a prueba la diversificación productiva en Bella Unión:

Acá no vamos a discutir cómo funcionan las cooperativas de la gente que ya está en la tierra. Queremos hacer una cosa nueva que se llama unidad productiva diversificada y queremos hacerla con todas las condiciones que están en el proyecto. Sólo después vamos a poder decir si la diversificación marcha o no en Bella Unión.

En este mismo sentido, Esteban observó que en aquel momento se encontraba en negociación un conjunto muy preciso de puntos y que serían necesarias nuevas reuniones para estudiar seriamente su contenido y su viabilidad. Él propuso que, mientras las negociaciones estuvieran en curso, las tierras solicitadas por la UTAA deberían quedar excluidas del cualquier “llamado abierto” destinado a ofrecerlas en arrendamiento a otros eventuales interesados. Esteban aun agregó que la visión de los trabajadores sobre el acceso a la tierra era “mucho más amplia” que los enfoques adoptados por ALUR y el INC e invitó a Jacqueline a leer con más atención los “planteos” presentados en aquella jornada. Sensibilizada por las palabras de Esteban – aunque visiblemente contrariada –, la presidenta del INC volvió a Montevideo comprometida a estudiar el proyecto de la Comisión de Tierras y presentarlo al directorio de la institución. También quedó acordado que una nueva ronda de negociaciones sería convocada en breve en la capital del país. Mientras esto no sucediera, las 200 hectáreas reivindicadas por la UTAA no serían ofrecidas en arrendamiento para otros productores rurales de la zona de Bella Unión y la Comisión de Tierras levantaría la huelga de hambre.

La semana siguiente al encuentro con Jacqueline, la ocupación recibió el apoyo público del Movimiento Nacional de Lucha por la Tierra y Contra la Pobreza – un aliado histórico de la UTAA – y diversas personas solidarias con la causa de la Comisión de Tierras visitaron el campamento. Comerciantes de los barrios pobres de Bella Unión hicieron donaciones de alimentos y muchos choferes que pasaban por la Ruta 3 colaboraron con los “peajes”¹⁴⁰ realizados diariamente por la militancia sindical. En la primera semana de diciembre, los vecinos de los asentamientos populares de la ciudad se sumaron al esfuerzo por dar visibilidad a la plataforma de lucha agraria de la UTAA: ellos marcharon en gran número hasta el centro de la ciudad en defensa de su derecho a la vivienda y en apoyo a la Comisión de Tierras. En esa misma época, el semanario Brecha realizó un largo reportaje especial sobre “Bella Unión diez años después de ALUR”. Florencia Cremonese y Salvador Neves, los periodistas responsables del artículo, sintetizaron así el panorama que se encontraron en la ciudad:

¹⁴⁰ Todos los días los ocupantes de tierra cortaban la Ruta Nacional Número 3 para distribuir panfletos a los conductores y solicitarles alguna contribución financiera. Estos cortes eran denominados “peajes” por los militantes de la UTAA y constituían una fuente importante de recursos para mantener vigente su medida de lucha.

Desde la OPP¹⁴¹ hasta la Alcaldía, pasando por la ALUR y Colonización, se repiensa el futuro de Bella Unión. Mientras la empresa estatal llega a su tope productivo y los ex trabajadores de Green Frozen buscan alternativas al cierre, los free shops se mantienen a resguardo de la crisis brasileña y una nueva generación se pone al frente de la UTAA, relanzando principios fundacionales. Conflictiva y compleja, la ciudad sin duda está viva (Brecha, 4-12-2015).

Juliana y yo estábamos en Montevideo cuando los periodistas de Brecha visitaron el campamento de la Ruta 3 y aún no habíamos regresado al norte del país cuando el reportaje sobre Bella Unión fue publicado en la capital. En un bar de la calle Fernández Crespo, exactamente en frente del quiosco donde compramos la edición más reciente del semanario, tuvimos el placer de constatar que los rostros de Marco y Emilio ilustraban, en una fotografía de buen tamaño, la primera de las cuatro páginas de reportaje dedicadas a las problemáticas de Bella Unión. Leímos con avidez el diálogo en el cual Marco definía al entrevistador el concepto de “una reforma agraria real y generosa”, no sin antes hacer un balance crítico de la participación de los trabajadores rurales en el CSA:

[Marco]: [...] Entonces formamos una nueva Comisión de Tierras con una visión completamente diferente de la que venía trabajando.

[Periodista]: ¿En qué es diferente?

[Marco]: En todo... nosotros estamos buscando que se hable a nivel nacional del concepto de reforma agraria. No sólo eso, sino que sea – como dice nuestra Carta Política – una reforma real y generosa.

[Periodista]: ¿Qué quiere decir generosa?

[Marco]: Por ejemplo, para la tierra que estamos demandando, presentamos además un proyecto para 200 hectáreas que apuesta fuerte a la diversificación. De caña se plantean sólo siete hectáreas porque ya están plantadas. Después horticultura – en invernadero y a cielo abierto –, lechería, chanchería y florería, que acá no se explota mucho. Y buscamos involucrar en él a los actores del gobierno que todavía no están presentes. Acá quien ha rentado los proyectos ha sido siempre ALUR y nosotros vemos que hay que comprometer otros actores pues, así como venimos, la cosa se da de tal modo que los proyectos fracasan en un promedio de tres años. Nosotros proponemos, por ejemplo, conversar con el MIDES para que los trabajadores que ingresan a la tierra tengan un salario mínimo durante el primer año mientras la producción se echa a andar. Queremos que estén Ganadería y la OPP para que nos ayuden a encaminar la producción de los distintos rubros (Brecha, 4-12-2015).

Retornamos a Bella Unión el 6 de diciembre. Pocos días después, un ómnibus partió de la ciudad rumbo al sur transportando a algunos dirigentes de la UTAA y buena parte de la Comisión de Tierras para una segunda ronda de negociaciones con el INC. Todos serían recibidos afectuosamente en Montevideo por estudiantes universitarios y militantes del movimiento sindical capitalino. Juliana prestó su cámara fotográfica a los viajeros para que pudieran registrar los detalles de esta nueva etapa de la lucha. Cuando

¹⁴¹ OPP es la sigla de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos de la Presidencia de la República, encargada, entre otras tareas, de formular las políticas de desarrollo impulsadas por el Poder Ejecutivo.

regresaron al campamento, el 15 de diciembre, el sol ya se había puesto. Su ómnibus llegó bocinando de lejos, prendiendo y apagando las luces. Tiramos cohetes para festejar el retorno de la Comisión de Tierras. Los esperábamos con bebidas y carne para el asado. La cámara fotográfica venía cargada de imágenes festivas, rostros de funcionarios sesudos sentados alrededor de mesas de madera barnizadas, protestas en las escaleras del parlamento. Nuestros compañeros ostentaban el cansancio de intensas jornadas de movilización en Montevideo, pero estaban alegres. Algunos lloraban de felicidad.

Después de las bienvenidas, formamos una ronda grande, cerca del fogón, bajo la lona del alojamiento, para escuchar el relato de Marco sobre los resultados del viaje. Sus primeras palabras celebraban eufóricamente que aquel día “veinte familias salieron de la zafralidad”. “¡Tenemos que festejar – exclamaba Marco – porque este proyecto va a salir!”. Después vinieron algunas especificaciones: el INC aceptaba conceder las 200 hectáreas reivindicadas por la organización; los nuevos colonos no pagarían arrendamiento en los primeros años y recibirían una financiación de 40.000 dólares para introducir las actividades productivas previstas en el proyecto; en las próximas semanas, los técnicos del INC harían estudios más detallados para confirmar la viabilidad del cultivo de hortalizas y estipular con precisión el precio de su introducción en las fracciones concedidas a la Comisión de Tierras. La “beca de trabajo”, parte esencial del proyecto propuesto por la UTAA, debería tramitarse junto a otras instituciones del Estado, como el MIDES, de modo que por el momento no había fuentes confirmadas para su financiación.

El INC no se comprometió a reconocer en el proyecto del sindicato una posible fuente de criterios para la transformación futura de las políticas públicas de colonización agraria. Tampoco hubo interés institucional explícito en generar otras instancias de debate en el interior del gobierno sobre la “reforma agraria real y generosa” reivindicada por la Comisión de Tierras. Finalmente, la ausencia de soluciones en lo concerniente a la beca de trabajo podría poner en jaque la propia posibilidad de comprometer efectivamente a los colonos con las actividades de la nueva unidad productiva. De todas formas, los resultados de las jornadas de lucha y negociaciones en Montevideo no dejaban de ser sorprendentes y bastante positivos. Como buena parte de los aspectos logísticos del proyecto ya estaba atendida, la Comisión de Tierras podría concentrar sus esfuerzos ulteriores en tramitar las demandas pendientes junto a otros actores políticos e institucionales.

Desafortunadamente, Juliana y yo no compartiríamos con la Comisión de Tierras los itinerarios que estaban por venir. Nuestra estadía en Bella Unión se acercaba a su fin. Preparamos nuestro regreso a Brasil con la esperanza de que un camino prometedor se

abría a nuestros compañeros de la UTAA: el camino de la redención de la promesa del acceso a la tierra en el horizonte de una “reforma agraria real y generosa”; una reforma agraria ofrecida como alternativa consistente a la “zafralidad” y como una invitación al gobierno progresista para reconectarse con las “grandes causas” del tiempo presente, es decir, con los proyectos menores que reaccionan al *impasse* del desarrollo mediante la redefinición y la generalización del concepto de una vida radicalmente mejor.

Antes de irnos de Bella Unión, pasamos por el campamento de la Ruta 3 para despedirnos de nuestros compañeros. Emilio los acompañaba aquella tarde. Mencioné la charla que habíamos tenido en su casa meses atrás, cuando fui invitado a sumarme más activamente a las luchas del sindicato. Recordé a Emilio sus palabras en dicha ocasión. Vuelvo a transcribirlas: “No es sólo escuchar lo que nosotros decimos. Queremos que participen. De aquí a unos años, cuando les pregunten cómo estuvo en Uruguay, van a poder decir que hicieron algo, que participaron, que aquello también es de ustedes”. Le comenté que ahora teníamos una buena historia para contar cuando alguien quisiera saber de nuestras andanzas por el Uruguay. Emilio sonrió, nos deseó suerte, y dijo que estaba orgulloso de habernos “invitado a la lucha”. Según él, nuestras “palabras” y “conocimientos” “expresaron lo mejor del ánimo que tenía esta directiva”. Emilio prosiguió: “si tuviera que decir lo mejor que hicimos desde que ganamos la elección del sindicato, diría que fue la lucha por la tierra”.

Y al final, ¿cómo estuvo en Uruguay? Si tuviera que decir lo mejor que hicimos desde nuestra llegada a Bella Unión, coincidiría plenamente con Emilio. Y si alguien me preguntara cual es la relevancia de todo eso para “la Antropología”, agregaría lo siguiente: reunido bajo la promesa de un “proyecto social” posible, y atento a las prescripciones de una política condicionada por la “lucha”, un grupo de personas con pasados heterogéneos estableció relaciones creadoras con su propio presente. Incluidos en este proceso, mi compañera y yo no teníamos que elegir entre la crítica del discurso y de las tecnologías del desarrollo por un lado y, por otro lado, su análisis como fenómeno empírico matizado por intereses múltiples y heterogéneos. En un registro alternativo, cartografiamos el devenir de una promesa de acceso a la tierra que tendía a desbordar la política de desarrollo en la cual había sido inicialmente cultivada. Al colaborar con la redención de la promesa del desarrollo – por lo menos tal como ella resonaba entre los militantes de la UTAA –, queremos pensar que también redimimos la promesa de cierta antropología; una promesa que señala la posibilidad de fundar en el encuentro etnográfico no sólo la descripción de lo

que existe, sino también la enunciación de otros mundos de sentido y de otros sentidos para el mundo.

Secuencia fotográfica 3











Foto tomada por Paola.





Palabras finales

Mi pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta: laten en su vida lenta los estrépitos del trueno.

Alfredo Zitarrosa, Diez Décimas de Saludo al Público Argentino

Se extinguió el último acorde. En el breve silencio que sigue, siento intensamente que ya está, que algo ha sucedido. Silencio.

Jean-Paul Sartre, La Nausea

En esta tesis me propuse analizar la dialéctica entre el devenir autonómico y el devenir funcional de los procesos deseantes, identificándolos como dos protocolos diferenciados de la política que poseen condiciones específicas de realización. Mi investigación partió de una inquietud relacionada con las formas de conflictividad que han marcado el llamado ciclo progresista sudamericano, precipitando en algunos casos su agotamiento. El (des)encuentro con el desarrollo en Bella Unión constituyó una ocasión prometedora para enriquecer y complejizar este campo de problematización. En Bella Unión, la promesa de estabilidad económica y bienestar social vinculada a la reactivación de la industria azucarera se ha prolongado en un conjunto desafiante de demandas colectivas. Estas circunstancias me llevaron a indagar en cómo un proyecto de desarrollo específico se relacionaba con – y movilizaba – las esperanzas que proliferaban en su entorno, al tiempo que también era desestabilizado por esas mismas esperanzas y, eventualmente, confrontado con un campo ingobernable de posibles. Abordé empíricamente esta problemática en sintonía con algunas expresiones del pensamiento social contemporáneo que ponen en el centro de sus preocupaciones teóricas la dialéctica entre política estatal y política popular, orden y exceso, equipamiento y agenciamiento de deseo. Cada una de las tres partes de la tesis enfatizó una de las sucesivas dinámicas implicadas en tal dialéctica, a saber: la presentación autonómica de la política, el investimento – o equipamiento – del deseo y, finalmente, la reorganización de la política en la senda de un delirio.

Los tres primeros capítulos estuvieron dedicados a la identificación de algunas políticas pasadas del movimiento popular bellaunionense y a su estudio desde ciertos índices históricos que iluminaron su dimensión autonómica, creadora y disruptiva. Dicho ejercicio me permitió reconstruir prescripciones bastante precisas que orientaron diferentes secuencias de la política popular antes y después de la dictadura militar instaurada en 1973.

El análisis modal de la política evidenció que entre 1961 y 1962 un grupo de cortadores de caña articulado con militantes revolucionarios procedentes de otras partes del Uruguay decidió que “los peludos tenían derechos”, y además de eso, “garantizaban sus derechos”. Ambas prescripciones debilitaron las lealtades jerárquicas vigentes en los cañaverales de Bella Unión, confrontando a los trabajadores de la caña de azúcar con su capacidad de acción directa, y en el límite, violenta. En el período que va desde 1964 hasta 1972, la dirigencia de UTAA y sus correligionarios prescribieron que la “tierra podría ser tomada” y puesta al servicio de una reforma agraria *sui generis*, destinada a mitigar la dependencia patronal y potencializar cierto devenir revolucionario de los “peludos”.

En la post-dictadura, la UTAA se reorganizó como un sindicato fiel a las históricas luchas populares que se habían conformado bajo su bandera en las décadas anteriores. En ese entonces, y ante la generalización del desempleo motivada por la liberalización de los mercados regionales, la UTAA pretendió aglutinar a “quienes se las arreglan como pueden”, circunscribiendo un sujeto político allí donde los cálculos del capital identificaban sólo externalidades lamentables de la nueva coyuntura económica. A inicios del año 2000, algunas familias de cortadores de caña desempleados y pequeños productores rurales actualizaron la prescripción política de la secuencia anterior y comenzaron a construir una trayectoria colectiva bastante específica. En 2006, estas personas ocuparon tierras del Estado en las cercanías del ingenio azucarero de Bella Unión y se presentaron ante el primer gobierno frenteamplista de la historia uruguaya como protagonistas potenciales de “una política agraria en serio”, basada en la distribución de “tierra para el que la trabaja” y orientada a la producción de alimentos.

Ante el encuentro tenso y conflictivo entre los cuadros políticos del gobierno progresista y un grupo de trabajadores que prescribía sentidos singulares a la transformación de la economía local, mi estudio de las secuencias políticas debió incorporar nuevas problemáticas. Si en el capítulo 2 había sido posible identificar algunas prescripciones que denotaban la autonomía política de los colectivos que se formaron para sostenerlas, entonces en el capítulo 3, específicamente a partir del análisis de lo que denominé “modo popular”, se hizo posible indagar sobre aquello que ocurre cuando los representantes de ciertas instituciones del Estado se proponen establecer relaciones funcionales y productivas con una política que no es la suya. En Bella Unión, el frente a frente entre los cuadros políticos del gobierno y los ocupantes de tierras resultó en la sedimentación de una relación de poder a través de la cual los primeros reivindicaron jurisdicción sobre los componentes otrora movilizados en pos de la autonomía de los

segundos. El reverso de este movimiento de captura fue la interrupción de las prescripciones autonómicas del año 2006.

Los términos de la relación de poder entre el gobierno y los trabajadores rurales demandantes de tierras fueron ampliamente determinados por la gerencia de ALUR, la empresa pública encargada de dinamizar la expansión de la industria azucarera en el norte del país. Una vez conformada, esta relación de poder permitió la definición de dos campos políticos en conflicto: uno subalterno y otro dominante. El primero, integrado por los nuevos beneficiarios de la política agraria desarrollista, pasó a relacionarse con el segundo, representado por la empresa ALUR y otras instituciones consorciadas a ella, de acuerdo a la lógica de la resistencia y la colaboración. Las intenciones manifiestas en el campo subalterno entraron en un diálogo constante – e inevitablemente tenso – con los protocolos de realización preconizados por el campo dominante. De este diálogo surgieron las condiciones de posibilidad para la integración de los asalariados y pequeños productores rurales al territorio del complejo agroindustrial planificado por el gobierno frenteamplista. Así, el acceso a la tierra quedó condicionado al pago de arrendamientos y al compromiso contractual de producir caña de azúcar con eficiencia bajo supervisión de la empresa ALUR.

Las controversias resultantes de esta aparente solución de continuidad entre las reivindicaciones agrarias de los trabajadores y la política desarrollista de ALUR transcurrieron dentro de los límites de lo posible establecidos, en última instancia, por la empresa encargada de capitanear la reactivación de la agroindustria bellaunionense. En ese contexto, analizado en el capítulo 4, las necesidades reconocidas y presentadas como solucionables en el influjo de una secuencia política auto-nómica (el “modo popular”) fueron sometidas a una re-evaluación sistemática teniendo en cuenta su compatibilidad o no con las condiciones y los objetivos del desarrollo económico proyectado por el gobierno progresista. Al instaurarse una relación de poder de esta naturaleza, los criterios de realización de la política subordinada pasaron a ser mediados por la racionalidad administrativa que informaba el núcleo industrial del CSA. Tal racionalidad, a su vez, buscaba mantenerse fiel a parámetros de productividad y sustentabilidad económica relativamente solidarios con la línea política del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las categorías de análisis introducidas por Lazarus me permitieron reconocer la singularidad de las políticas autonómicas a través de las prescripciones enunciadas por sus protagonistas. Sin embargo, fue necesario agenciar otras coordenadas teóricas para pensar adecuadamente en qué circunstancias la lucha colectiva se reconfigura bajo la forma de

una “resistencia” en el ámbito de determinada relación de poder. Dedicué los capítulos 5 y 6 a esta tarea con dos objetivos en mente. En primer lugar, para explicar bajo qué condiciones los protagonistas de una secuencia política específica – concretamente, el “modo popular” – aceptaron hacerse beneficiarios de una intervención desarrollista que implicaba la suspensión de las prescripciones elaboradas en los meses previos a la implantación del CSA. En segundo lugar, para analizar detenidamente las tensiones inherentes a una política de desarrollo como la introducida en Bella Unión, ya que mi trabajo de campo indicaba que de ellas emergían no sólo las condiciones de posibilidad y reproducción de la intervención desarrollista, sino también sus condiciones de imposibilidad. El análisis de la tensión entre dependencia y autonomía en el marco del complejo agroindustrial nucleado por ALUR fue beneficiado por la noción de deseo. En esta tesis, tal como hemos visto, el deseo se define como una experimentación del pensamiento en lo real que se da en perjuicio potencial de las normas de (re)conocimiento vigentes. La experimentación deseante asegura el devenir de lo real en el pensamiento, reconociendo posibilidades ajenas a la integridad de un modo de vida y vehiculizando la inscripción de dichas posibilidades en el horizonte de la acción humana.

El deseo abre a los individuos un campo de devenir en cuyo marco la objetividad de su mundo se pone en cuestión. Esto significa que la producción deseante a veces ocurre en detrimento de las conductas esperadas de una persona o un grupo de personas, lanzando a quien desea más allá del lugar donde su existencia es convencionalmente reconocida. En diálogo con Guattari, denominé “agenciamiento” esa expresión desreglada e irregular del deseo que se distingue del “acomplejamiento”. En este último, el devenir del deseo garantiza mejoras notables en las condiciones de vida de las personas, pero no ocasiona alteraciones sustanciales en el orden que distribuye, en cada lugar y momento, posiciones de poder y subordinación, dominación y dependencia. El acomplejamiento del deseo es consustancial a la activación de un “equipamiento colectivo”, o sea, de un conjunto de mecanismos institucionales capaces de reconocer, estimular y realizar la transformación de las existencias individuales de acuerdo a protocolos solidarios con la manutención de ciertas jerarquías y la fijación de objetivos establecidos de conformidad con un deseo amo.

Desde mi perspectiva, una secuencia de la política autonómica es asimilable a la composición de un agenciamiento colectivo. A su vez, intervenciones desarrollistas como la desencadenada en Bella Unión pueden definirse como equipamientos del deseo. Guattari (2013) observa que entre los agenciamientos y los equipamientos podrían existir mutuas relaciones de recuperación y reversibilidad. Sin embargo, el análisis del proceso de

instauración y reproducción del CSA reveló que, por lo menos en el caso de Bella Unión, los agenciamientos no parecen desembocar en los equipamientos, al tiempo que estos últimos pueden engendrar condiciones para la formación de aquellos. Esta lectura quedó implícita a lo largo que mi argumento. Ahora conviene exponerla con mayor claridad.

Los trabajadores que ocuparon tierras en el 2006 se veían como personas necesitadas que, no obstante, estaban en condiciones de prescribir los caminos de su autorrealización. Si la tierra aparecía a sus ojos como una fuente posible de subsistencia, entonces podría ocuparse; si las negociaciones con el Estado retardaban el acceso a la tierra y comprometían su urgente uso productivo, entonces tales negociaciones podrían eludirse; si la inversión de recursos públicos en la reactivación de la economía bellaunionense no incluía “una política agraria en serio”, entonces, independientemente de los planes iniciales del gobierno, cabría prescribirla a través de la consigna “tierra para el que la trabaja”; si la “zafralidad” era evaluada como la causa de diversos infortunios e incertidumbres, entonces su supresión podría ser ambicionada a través de la lucha por la tierra; si la industria azucarera era una fuente estratégica de recursos para la realización de los deseos manifiestos y potenciales de los trabajadores, entonces su administración debería democratizarse.

En el modo popular, un conjunto de “necesidades” era decidido en concomitancia con la prescripción de sus condiciones de realización. Que este proceso prescriptivo haya ocurrido en un período corto de tiempo – unos pocos meses – no lo hace menos concreto. Más bien indica una fragilidad de potencia que, de hecho, resultó funcional para el equipamiento de deseo impulsado por ALUR. Este último se posicionó de forma adyacente al agenciamiento colectivo de los trabajadores y reivindicó para sus propios fines la materialidad movilizada en él. En síntesis, el equipamiento re-condicionó el proceso deseante sobre el deseo amo, banalizando las prescripciones que antes lo condicionaban. En Bella Unión ese procedimiento dependió, primeramente, de que los protagonistas del modo popular fueran literalmente re-colocados en su lugar, es decir, interpelados como asalariados zafrales y trabajadores informales deseosos de una vida menos determinada por la carencia material; una vida que el CSA podría garantizarles caso estuvieran dispuestos a desear en conformidad con la agroindustria sucroalcoholera.

La mejora sustancial de las condiciones materiales de vida – algo que ningún asalariado rural podría negar hacia el año 2007 – apareció en el marco del equipamiento colectivo como una chance fugaz en nombre de la cual las personas fueron llamadas a ceder a la complejión deseante construida en el proceso de agenciamiento. En el

irresistible acto de ceder a la complejidad libidinal anterior, el individuo deseante se transformó en un necesitado que ya no disponía sobre su estado de necesidad. De ese momento en adelante, el consorcio desarrollista pasó a definir las condiciones de realización de las necesidades de sus enrolados. En tal escenario, si ellos quisieran una vida mejor, trabajarían en pro de la industria; si quisieran tierra, plantarían caña y pagarían arrendamiento; si quisieran dinero, recibirían créditos; si quisieran consumir más, aprenderían a acumular capital; si quisieran hacer otras cosas en la vida, deberían medir cuidadosamente sus intenciones para no cuestionar el deseo amo.

Pero los procesos de equipamiento del deseo son inestables y no siempre tienen un éxito cabal: sus efectos variables responden, necesariamente, a la variabilidad de las expectativas que pretenden movilizar en beneficio de su reproducción. Esto quedó claro cuando los trabajadores de la UTAA fueron incluidos en el CSA a través de la movilización de su deseo de salario fijo e incremento del ingreso. Al encarar los flujos de crédito y lucro asignados por ALUR como un fondo de consumo potencial, los trabajadores experimentaron inmediatamente los beneficios materiales en nombre de los cuales se dejaron enrolar. Sin embargo, al hacerlo, ellos también comprometieron el “desarrollo de las fuerzas productivas” esperado por el consorcio desarrollista, volviéndose completamente dependientes de este último para preservar el modo de vida alcanzado gracias al acceso a la tierra. En el transcurso del proceso de equipamiento del deseo, resultó evidente para mis interlocutores que las capacidades reivindicadas por ellos en la secuencia política previa al (des)encuentro con el desarrollo estaban ahora postergadas. Un equipamiento poderoso las había relegado en favor de la actualización de nuevas formas de dependencia económica y subordinación política desconocidas hasta entonces por los colonos provenientes de las bases sindicales de la UTAA.

El agenciamiento colectivo de mediados de los años 2000 no desembocó en el equipamiento desarrollista. Su proceso se interrumpió en circunstancias desfavorables a la experimentación política. Con todo, su pensamiento fue revisitado años más tarde por algunos colonos que pretendían cuestionar las condiciones de vida y acceso a la tierra definidas en el marco del CSA. Como vimos en el capítulo 6, ese cuestionamiento resultó de una proyección delirante del deseo sobre formas de realización imposibles bajo las leyes del complejo. Se trataba de posibilidades que surgían gracias a la radical experiencia de lo indecible, o en el rastro de pequeñas transgresiones e irreverencias en las cuales, a veces, mis interlocutores cifraban la regla posible de un mundo por venir. De acuerdo con mi argumento, los desajustes del deseo pueden relegarse al “olvido”, sobreviviendo

únicamente en tanto delirio individual, o bien pueden ser compartidos como condición de una “realidad posible” en cuyo nombre un nuevo colectivo refundará la esperanza.

En los capítulos 7 y 8, me aboqué al esfuerzo común organizado en nombre de una apertura a lo posible que mis interlocutores de la Comisión de Tierras llamaron “reforma agraria real y generosa”. La invención de un “proyecto menor” que sostuviera la viabilidad de la reforma agraria debió sustraerse al horizonte estratégico del complejo agroindustrial para conectarse con ciertas esperanzas colectivas que este último había banalizado o postergado indefinidamente. De cierto modo, puedo decir que tales esperanzas ya estaban cumplidas en el exacto momento en que se tornaron perceptibles para los militantes de la UTAA. Cuando una esperanza aparece a los miembros de determinado colectivo es porque sus posibles ya existen y forman parte del presente de manera inapelable. Sin embargo, el trabajo de realización de esos posibles puede llegar a ser muy arduo y las prescripciones de las que son fruto corren el riesgo de sucumbir, momentáneamente, a principios de realidad más poderosos y mejor equipados.

La prescripción que ponía a los integrantes de la Comisión de Tierras en condiciones de definir, controlar y realizar su proceso de conversión en pequeños productores asociados y comprometidos con la diversificación de la agricultura es hoy (octubre de 2018) otro posible en suspenso. El proyecto de la Comisión de Tierras ha sido sometido a un largo reposo en las salas de espera de los organismos públicos administrados por el progresismo uruguayo. La última vez que visité Bella Unión, en diciembre de 2017, las 200 hectáreas de la Ruta 3 todavía esperaban la instalación de la “unidad productiva diversificada” que habíamos proyectado 2 años antes. La propiedad estaba a oscuras y las bombas de riego instaladas hacía poco tiempo para abastecer la diversificación de la agricultura fueron robadas antes de entrar en funcionamiento. Pero también había buenas noticias que compartir. Los integrantes de la Comisión de Tierras me contaron sobre la realización de jornadas exitosas de trabajo colectivo para desmalezar sus campos y prepararlos para el cultivo de hortalizas. Además de eso, la caña que había en el interior de la propiedad – plantada por ALUR antes de la asignación de las tierras – había sido cortada por los miembros masculinos de la Comisión y el dinero recibido a cambio del trabajo se destinó al fondo común de una cooperativa social que ya estaba por formarse. Finalmente, uno de los miembros del grupo compró con dinero de su propio bolsillo una moto sierra para preparar la madera que sería empleada en la construcción de invernáculos. En tanto, junto a Juliana habíamos realizado, con la autorización de la Comisión de Tierras, una campaña de recaudación de fondos vía internet. La idea era incrementar los recursos

económicos a disposición de nuestros compañeros y, quién sabe, cubrir el valor de las becas de trabajo que el gobierno tardaba en tramitar. El monto recaudado no pudo atender todos nuestros objetivos, pero alcanzaba para solventar gastos de emergencia, comprar combustible y herramientas livianas de trabajo.

Desafortunadamente, todas estas noticias correspondían a un tiempo que estaba quedando atrás.

La escasez de recurso monetarios y la incertidumbre inherente a los tiempos de espera impuestos por la burocracia empezaron a reflejarse en una incipiente segmentación de la Comisión de Tierras: de un lado había quienes se consideraban más comprometidos que los demás en lo concerniente al seguimiento de los trámites administrativos que deberían culminar en la puesta en marcha de la producción de alimentos; de otro lado estaban aquellos que el primer grupo definía como “irresponsables”, porque no siempre participaban en las reuniones de la Comisión y en las jornadas de trabajo colectivo organizadas para dar mantenimiento a las tierras recibidas del INC. En este contexto, quienes se consideraban portadores de las virtudes necesarias al éxito de un futuro emprendimiento productivo comenzaron a evaluar la posibilidad de atribuirse la prioridad cuando las tierras asignadas en 2015 estuvieran finalmente en condiciones de volverse productivas. Esto significaría que, en caso de hacerse necesario un ingreso gradual de los nuevos cooperativistas a los campos de la Ruta 3, los llamados “irresponsables” pasarían al final de la fila. También empezaba a hablarse de un posible fraccionamiento de la unidad productiva en dos o más negocios independientes, separados siempre según el criterio de la “responsabilidad”.

La generosidad que había informado la lucha por la reforma agraria en 2015 iba cediendo lugar a estrategias jerárquicas para la distribución de unos recursos financieros tan escasos como inciertos. Parece que las esperanzas se debilitan y la desesperación acecha cuando la lentitud de los tiempos del Estado pospone indefinidamente el acceso a los bienes materiales que una política había reivindicado para seguir desplegándose. En el silencio angustioso de las salas de espera, las “grandes causas” pueden dejar de valer la pena para sus protagonistas, al punto de hacerlos descreer no sólo de las apuestas colectivas que alguna vez nutrieron, sino también de la misma posibilidad de construir juntos una vida que sea realmente mejor *para todos* los que deseen vivirla. La burocracia progresista impuso límites materiales a la imaginación política de quienes habían llegado a identificar en el gobierno un aliado potencial para la apertura de nuevos campos de posibles. Retomando la terminología de Valdez (capítulo 6), cuando detrás de las lindas

palabras vienen números escasos, las necesidades de unos pueden acabar confrontando el bienestar de otros, lo que origina rencores mutuos e impone, tarde o temprano, el imperativo de la vigilancia y la activación de criterios de inclusión, exclusión y merecimiento. Sin duda, la tardanza en el cumplimiento de ciertos acuerdos firmados entre el INC y la Comisión de Tierras, así como el lento goteo de recursos para la instalación de su proyecto productivo, debilitaron el ánimo de algunos de mis interlocutores. Sin embargo, también hubo variables endógenas que probablemente contribuyeron al repliegue de su militancia. Por ejemplo, el cambio de dirección en el sindicato – desde 2016 – y el consecuente decaimiento de la celosa asistencia política otrora brindada por dirigentes como Emilio, Sandro, Beti, Tablada y Marco, pueden haber incidido en la paulatina disgregación del grupo. De igual forma, la mudanza de algunos de sus miembros más activos a otras regiones del país, en búsqueda de trabajo, podría contarse entre los factores de desmovilización colectiva. Lo cierto es que, independientemente de las contingencias, la disposición militante – de por sí extremadamente absorbente – no dura por siempre: es frágil y secuencial. De ahí la importancia de valorarla al máximo cuando emerge y de asegurarle, a través de una estrategia adecuada, el sustrato material que podría mitigar su inevitable cansancio.

La prescripción que separaba “lucha” de “gestión”, atribuyendo a la movilización colectiva proporcionada por la primera la prerrogativa de establecer criterios para el devenir de la segunda, dejó de estar vigente por lo menos desde 2017. Cada vez más, mis interlocutores en la Comisión de Tierras necesitaron adaptar el horizonte de su “reforma agraria” a la lentitud de los tiempos gubernamentales y a la escasez de los “números” proveídos por el INC. De este modo, “lucha” dejó de existir como un espacio político paralelo y desafiante frente a “gestión”, restando apenas su plataforma reivindicativa – demanda de tierras y dinero –, que los organismos del Estado intentaron resolver en la medida de lo posible y de acuerdo con su propio discernimiento. Ante este panorama, surgen algunas interrogantes: ¿cuándo una decisión prescriptiva fracasa en sus términos, podemos decir que estaba equivocada? ¿“Lucha es diferente de gestión” demostró ser una prescripción inconsistente? Volviendo a un debate que introduje en el tercer capítulo, ¿las consecuencias de una prescripción autorizan la formulación de un juicio sobre sus propósitos y su validez?

Posiblemente, si las separaciones sostenidas por una prescripción no llegan a verificarse en política, cabría señalar su naturaleza equívoca. Pero esto no sucedió en la lucha agraria de 2015, puesto que sus militantes lograron asegurar efectivamente un

diálogo público sobre el acceso a la tierra que estaba condicionado por los criterios de una prescripción. Por lo menos en un principio, los cuadros políticos a cargo del INC tuvieron que aceptar la puesta en marcha de una modalidad de acceso la tierra que era novedosa no sólo para Bella Unión, sino también para el Uruguay. Como vimos en el capítulo 8, dicha modalidad de colonización agraria incluía la exoneración del pago de arrendamientos, la transferencia de recursos públicos no reembolsables a los nuevos colonos y un decidido énfasis en la producción de alimentos. Es verdad que los funcionarios del INC no se mostraron dispuestos a convertir la unidad productiva organizada según estos criterios en un “experimento piloto de reforma agraria”, susceptible de ser replicado en otras partes del país. Sin embargo, esta decisión no sería necesariamente definitiva si, desde la “lucha”, se siguiera planteando alternativas en el sentido opuesto. Habría que estudiar más detenidamente en qué condiciones la política del 2015 se disolvió en su opuesto (la “gestión”). Ya señalé algunas variables que podrían orientar una reflexión en ese sentido, pero profundizarla tal vez exigiría un estudio similar al que emprendí en el capítulo 3, donde abordé el cierre del modo popular.

Aunque no se haya prolongado en el tiempo, la premisa “lucha es diferente de gestión” cumplió su cometido y evidenció su consistencia. El posterior fraccionamiento de la Comisión de Tierras, y su sumisión a los tiempos de la burocracia, fueron consecuencia de la caída de una prescripción, no de su despliegue. Una vez expirada la prescripción que los convertía en sujetos de una “reforma agraria real y generosa”, los ocupantes de tierras de 2015 empezaron a proyectar sus expectativas de futuro mediante faccionalismos similares a los que tensionaban otros emprendimientos productivos que conocí durante mi trabajo de campo. Estas formas de interacción, las disputas de intereses personales y los juicios morales que les son característicos constituían el aire que se respiraba en las colonias del CSA, en donde estaba en juego la administración de recursos limitados sobre el trasfondo de una producción deseante que los desbordaba. De ahí que, desde el espacio político de “lucha”, los dirigentes de la UTAA hayan pretendido prescribir la máxima generosidad y abundancia posibles a la hora de promocionar el acceso a la tierra. Sólo así otras formas de cooperación social y trabajo colectivo podrían ponerse realmente a prueba. Al respecto, conviene recuperar las palabras que Marco dirigió a la presidenta del INC en las negociaciones de noviembre de 2015:

Acá no vamos a discutir cómo funcionan las cooperativas de la gente que ya está en la tierra. Queremos hacer una cosa nueva que se llama unidad productiva diversificada y queremos hacerla con todas las condiciones que están en el proyecto. Sólo después vamos a poder decir si la diversificación marcha o no en Bella Unión.

Si la generosidad, la cooperación y cierta unidad programática pudieron preservarse durante la “lucha”, eso no se dio porque en su transcurso los militantes del sindicato estuvieran experimentando una especie de ficción comunitaria que luego sería desmentida por la realidad. Me parece más correcto asociar esa confluencia relativamente armoniosa de las heterogeneidades individuales al hecho de que, en “lucha”, las personas estaban actuando como si el futuro anticipado por la puesta en práctica de su prescripción ya condicionara la convivencia grupal en el presente. El cotidiano de la Comisión de Tierras, y posteriormente el de la ocupación, al igual que las primeras jornadas de trabajo colectivo emprendidas en las fracciones asignadas por el INC, estaban – para retomar una expresión que Peter Hallward (2005) emplea sin connotación peyorativa – bajo la “dictadura de la prescripción”. En su relativa indiferencia respecto del *modus operandi* que ha pautado tradicionalmente aquellas actividades sociales que ella pretende reconfigurar, la prescripción posee algo de autoritario e intransigente. Sus criterios no se desprenden de lo que siempre se hizo, porque lo que siempre se hizo es, justamente, la medida de lo innecesario. “Una política – escribe Hallward – no es reductible al arte de lo posible. La prescripción es indiferente tanto a los cálculos de lo posible y lo factible, como a la temporalidad asociada con hacer lo posible”¹⁴² (Hallward, 2005: 773). La prescripción postula que las cosas deben hacerse de otro modo, dando la bienvenida a quienes deseen probarlo (palabras de Sandro: “la política de ellos nos llama al trámite. Esta política que les proponemos llama a la lucha”). Quienes adhieren a la “lucha” son instados a comprobar capacidades que no suelen ejercer la mayor parte del tiempo, cuando impera la normalidad. Al respecto, las palabras de Hallward merecen ser citadas más extensamente:

Olvidar o diluir el momento de la “dictadura de la prescripción” es evadir la prescripción en sí misma. Por definición, una movilización prescriptiva enlaza a sus adherentes en una dedicación común: una dedicación que excede [el] rechazo a [sus] [eventuales] representantes autorizados y que es irreductible al ejercicio de la elección meramente individual o la reproducción de las normas socioculturales (ibid.: 784).

Si las condiciones de la prescripción dejan de actuar y, por razones ajenas a la prescripción misma, los resultados de su despliegue parcial pasan a ser reivindicados en beneficio de unos pocos, entonces probablemente estemos volviendo a la normalidad. Esto equivale a decir que regresamos a los intereses personales o sectoriales, criterios valorativos, estrategias de corporativización, formas de juicio y castigo que ya conocíamos de antemano y que sabíamos instrumentalizar eficazmente. De regreso a la normalidad, el tiempo vivido bajo el dictado prescriptivo corre el riesgo de tomarse como la proverbial

¹⁴² Evidentemente, Hallward está utilizando la palabra “posible” en su connotación más usual, que evoca lo que puede hacerse de acuerdo con las circunstancias dadas y las alternativas que se desprenden de ellas.

excepción que sólo confirma la regla. Recordemos que luego del cierre del “modo popular” (2004-2006) una enunciación recurrente entre sus ex militantes, entonces refuncionalizados en las mallas del CSA, consistía en afirmar su fatal individualismo, inmanente a las relaciones de trabajo en el cañaveral. Como argumenté oportunamente (capítulo 3), este punto de vista no era una reificación o un falseamiento de las posibilidades reales de quienes lo sostenían. Se trataba, más bien, de una descripción precisa de lo que se “es” en determinado emplazamiento social. “Ser-otro” es algo que depende de un trabajo prescriptivo laborioso para acontecer y subsistir. Finalizado el tiempo de la prescripción, volvemos a ser lo que – *salvo excepción* – siempre fuimos.

En la normalidad, los posibles representan un malentendido transitorio que se corrige retrospectivamente señalando como las cosas realmente son. Inversamente, en el campo introducido por la política prescriptiva, es la normalidad la que aparece descentrada respecto de un curso de acción que se desmarca de ella, y que recluta todo tipo de recursos para perseverar en esa desmarcación. Pero después del cierre de una secuencia política, ¿qué pasó al final? ¿La regla quedó confirmada por la excepción o la excepción comprobó el carácter no absoluto de la regla? Desde una antropología política, que supone la posibilidad de la excepción, mi respuesta sería que en efecto algo se sustrajo temporalmente a la regla, evidenciando su carácter no absoluto. Todo el esfuerzo de una antropología política tal vez se resuma a esto: sostener y demostrar que pasó algo, que ese algo fue singular, que pertenece a sí mismo y puede revisitarse indefinidamente en sus propios criterios. Preservar el punto de vista de la singularidad invita a pensar el pensamiento en concomitancia con su despliegue, y no sólo situarlo en el tiempo, en el espacio o en los cuerpos marcados, distribuidos y jerarquizados en la estructura social¹⁴³. Lo singular es intransitivo a todas estas localizaciones/emplazamientos y se aprehende por sus categorías específicas, que dan lugar a una situación con consistencia subjetiva e historicidad propias llamada posible. Lo que pasó en dicha situación fue algo real mientras pudo sostenerse. Tan real como lo que tenía lugar antes y lo que tuvo lugar después de su emergencia. Pero se trató de algo realmente *excepcional*.

¿Por qué emprender un programa investigativo que privilegia lo recurrente en detrimento de lo excepcional? ¿Qué tipo de esclarecimiento sobre las dinámicas sociales

¹⁴³De acuerdo con Hallward: “La autonomía prescriptiva [...] necesariamente presupone algún tipo de salto cualitativo en la constitución del sujeto, un salto adecuado para permitir su libertad relativa frente a la determinación causal o presubjetiva. Sin tal libertad no podemos decir que las personas hacen su propia historia; simplemente podemos contemplar las formas de su constreñimiento. Y por más radical o indignada que sea tal contemplación, por sí misma siempre quedará más acá de lo político como tal” (Hallward, 2005: 781).

puede proporcionar una elección de esta naturaleza? ¿Qué imagen del mundo nos retorna este protocolo de investigación? Buena parte de los principales proponentes de un análisis de la política en tanto práctica autonómica y prescriptiva – Alain Badiou, Sylvain Lazarus, Michael Neocosmos, Judith Balso, Alain Bertho, Natacha Michel, Jacques Rancière – son, o en algún momento fueron, militantes de una política. Y esta política sigue recorriendo sus escritos¹⁴⁴, es revisitada, repensada, ponderada en cuanto a la pertinencia de sus prescripciones y su posible agotamiento. En la condición de sujetos fieles a una política pasada o vigente, estos autores van cultivando lo que podría constituir, quien sabe, índices históricos susceptibles de ser apreciados por las generaciones venideras. No satisfechos con eso, ellos se proponen tomar en sus manos otros índices históricos y revisarlos en busca de su costado autonómico. Pretenden ser fieles a lo que les pasó algún día y entienden que esa fidelidad puede extenderse a otras situaciones que, por su aspecto y contenido, también se revelan extra-ordinarias. Es como si, una vez experimentado el no absolutismo de lo existente, sólo las excepciones importaran, quizás porque en ellas parece verificarse el carácter innecesario de todo aquello que, la mayor parte de tiempo, se vive como un prerequisite de la existencia misma: incluso cuando esta existencia nos infunde malestar. La excepción importa al pensamiento crítico porque verifica y registra la no necesidad *real*– y la posible superación positiva – del orden dado, lo que es distinto a inferir su carácter arbitrario e innecesario de algún procedimiento genealógico, (des)constructivista o de la constatación del evidente sufrimiento de las mayorías. Así, por ejemplo, es lícito afirmar que en 2015 el CSA fue superado subjetivamente en cuanto a sus formas de promoción del acceso a la tierra, organización del trabajo y financiamiento de la producción. Pero eso sólo es así para quienes son fieles al posible que aseguró tal superación.

Ahora bien, ¿la casi obsesión con lo excepcional no sería el síntoma de una predisposición escapista? ¿No es más fácil abrigarse en lo excepcional en vez de encarar el orden en su tremenda efectividad? Tal y como se lo aborda en una antropología política, lo excepcional no está en otro lado, sino en el corazón mismo del orden que lo atestigua. Es fruto, seguramente, de la percepción deseante de un posible irreductible a cualquier orden, pero su manifestación concreta se da a través de un cambio de actitud antagónico adentro y en contra del ordenamiento vigente. En consecuencia, lo excepcional no sería lo que escapa, sino lo que se sustrae al orden y lo mira desafiante, como el luchador que esquiva

¹⁴⁴ Ver, por ejemplo, Badiou (2012); Lazarus (2012, 1996); Neocosmos (2015); Balso (2010); Bertho (2003); Michel (2002); Rancière (2009).

un golpe y prepara el contragolpe. En estos términos, el estado anímico del investigador que busca la excepción se asemeja más al del alborotador que al del escapista: hay que estar presente allí donde el lazo social se desgarrar y otro devenir colectivo se prescribe en antagonismo con un devenir preexistente. En este punto, se imponen algunos problemas: ¿tantas ganas de hacerse presente donde haya lío – un lío excepcional, prescriptivo, claro está – no demandaría alguna especificación sobre los propósitos del investigador/alborotador en lo concerniente su “objeto”? ¿Qué relación podría haber entre una antropología política y la prescripción de una política? O, para decirlo más directamente: ¿una antropología política podría jugar algún rol en el trabajo prescriptivo de la política?

A fines de los ‘90, Judith Hayem y Sylvain Lazarus militaron junto a los trabajadores extranjeros indocumentados en el denominado *Rassemblement des ouvriers sans-papiers des foyers*. El propósito del *Rassemblement* era presionar al gobierno francés a reconocer que todos los trabajadores, ya sean franceses o no, pertenecían al lugar donde estaban – i.e. Francia – y que este lugar también les pertenecía, sin distinción de derechos. Las prescripciones que estaban en juego en el aquel momento eran: “todos los que están aquí son de aquí”, “obrero aquí, obrero de aquí”, “Francia para todos, los mismos derechos para todos”. Reflexionando sobre estos enunciados, Hayem prefiere mantener una clara separación entre la política que los postuló y el trabajo investigativo precedente, que habría inspirado su formulación. Retomemos sus palabras, ya introducidas en el capítulo 2, ahora en una cita más extensa:

Hay, por supuesto, vínculos muy fuertes entre una antropología de las singularidades subjetivas y una política “a distancia del Estado” tal como la que fue practicada, por ejemplo, por el ‘Rassemblement’ en Francia entre 1997 y 1998. Y el slogan “todos los que están aquí son de aquí” estuvo parcialmente inspirado por la prescripciones que escuchamos de viejos trabajadores migrantes del Magreb en una investigación que condujimos en albergues de inmigrantes en los ‘suburbios’ (banlieues) populares parisinos. Con todo, no puede haber ecuación entre un estudio antropológico y un proceso político: en el primero está en juego un entendimiento de las subjetividades políticas, mientras que en el segundo lo fundamental es contribuir para el nacimiento, la expansión e idealmente para el éxito [de estas mismas subjetividades]. Ambos asientan en la idea compartida de que la política es rara y secuencial y que el Estado no es el único lugar de la política (Hayem, 2012: 519).

Tal vez haya algo de paradójico en el hecho de que una antropología política sea, en sí misma, apolítica en lo que se refiere a las políticas. De cualquier modo, la separación propuesta por Hayem es comprensible porque nos previene contra la tentación de hacer circular conceptos necesarios al desarrollo de un programa de pensamiento específico –

una antropología – más allá de su ámbito, como si *a priori* fueran relevantes para perfeccionar otros procesos intelectivos. Volvamos a sus palabras:

La antropología afirma que [...] “la gente piensa” y el “pensamiento es relación de lo real”, mientras que las “políticas a distancia del Estado” afirman que “cada persona habla por sí misma y lo que comparten es política”, [...] pero estas prescripciones, principios, ideas políticas y [formas de] organización están todas ellas en juego, y no sólo las subjetividades [como ocurre en la antropología] (ibid.).

En este orden de ideas, habría que reconocer que en tanto programa de investigación orientado a la identificación de prescripciones políticas, una antropología política no tiene mucho que ofrecer a sus interlocutores, dado que ellos ya poseen sus propias prescripciones. Con todo, esto no impide, como pasó en Bella Unión, que el investigador ingrese al horizonte prescriptivo que encuentra durante el trabajo de campo, ponga sus habilidades a disposición del despliegue estratégico de la política e incluso la discuta desde adentro, como cualquier militante. De todos modos, creo identificar un momento muy especial en el cual una antropología política es indiscernible de una política. Hayem lo insinúa en la primera cita, cuando comenta *en passant* que “el slogan ‘todos los que están aquí son de aquí’ estuvo parcialmente inspirado por la prescripciones que escuchamos de viejos trabajadores migrantes del Magreb” (ibid.). Si el slogan en cuestión es posterior a la investigación junto a los migrantes magrebíes, entonces obviamente dicho trabajo investigativo ocurrió antes de las acciones políticas impulsadas en cooperación con trabajadores extranjeros indocumentados en París. El propósito de la investigación inicial no era engendrar una política, sino tan sólo “estudiar subjetividades”, pero en los hechos sus hallazgos vinieron a informar un trabajo militante de naturaleza prescriptiva. En este caso, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cuando hay “normalidad” – o sea, ausencia de una política – la pretensión de una antropología política no se vuelve homóloga a la de quienes ambicionan, por decirlo de algún modo, “alborotar la situación”? ¿No habría equiparación de propósitos entre el investigador y sus contemporáneos a partir del momento en que ambos están buscando o tratando de desarrollar alguna prescripción?

En plena “normalidad”, desgarrada de su “objeto” – que no siempre existe, es raro – una antropología política se encuentra literalmente en *stand-by*, de modo que quien un día la practicó, o pretende practicarla, ahora está obligado a replegarse sobre un esfuerzo prospectivo que es similar al de otras personas: el esfuerzo de hallar y enunciar salidas ante el eventual malestar ocasionado por el estado actual de un mundo dado. Dicho sea de paso, Hayem parece corroborar inadvertidamente esta constatación cuando observa que “ambos [estudio antropológico y proceso político] asientan en la idea compartida de que la política

es rara y secuencial y que el Estado no es el único lugar de la política” (ibid.). Si había *a priori* una “idea” compartida sobre algo tan específico como lo son el estatuto y la topología de la política, me parece entonces que se compartía un mismo espacio político. Retomemos el hilo de mi reflexión: ¿el trabajo de politizar cierto malestar e identificar palabras que le den alguna solución posible no sería, él mismo, desde un principio, el índice de una política que ya está empezando?

Cuando se propone salir a la búsqueda de los posibles en una coyuntura en que éstos no se encuentran muy visibles y al alcance de la mano, el investigador queda potencialmente vinculado al proceso de una política. Escribo “potencialmente” porque, de encontrar lo que está buscando, él también habrá encontrado lo que otras personas buscan y, más aún, habrá sido encontrado por quienes desean compartir su pensamiento, de modo que se le impondrá una elección: anunciar y prescribir colectivamente una política o no hacerlo. Los alborotadores suelen inclinarse por la primera opción. En este caso, los resultados “descriptivos” que eventualmente alcancen serán, en realidad, indiscernibles del protocolo del devenir inmanente de un pensamiento. En otras palabras, al sintonizarse con aquellas prescripciones que portan los posibles de una coyuntura, la investigación social pasará a enunciar una objetividad que ya está políticamente subjetivada, es decir, que emerge indisociable del pensamiento que apunta a transformarla.

Similar a la lechuza de Hegel, una antropología política sólo alza vuelo cuando ya no hay política y el investigador puede darse la tarea de revisar el contenido vasto, pero inmutable, de lo que a partir de entonces está finalizado y existe exclusivamente en pensamiento. Pero antes de ese vuelo nocturno, lo que existe es una actividad de rastreo, identificación y precisión de enunciados singulares que participa totalmente en el despliegue de alguna autonomía. De otro modo, ¿cómo sería posible pensar lo que se piensa en un pensamiento vigente? ¿Qué manera habría de discernir claramente dicho pensamiento si no es compartiéndolo, estimulando su enunciación, movilizándolo sus categorías, poniéndolas en movimiento en cada diálogo, contribuyendo inevitablemente a moldearlas, extrayéndoles consecuencias y sometiendo a la ponderación de los demás? Mientras estos intercambios están en curso, no hace falta una antropología para aprehender su contenido móvil. Una secuencia política en plena marcha prescinde de una antropología, aunque evidentemente no prescinda del esfuerzo por clarificar con alguna sistematicidad sus propios enunciados. En todo caso, una antropología política, entendida como el acto teórico, argumentativo y empíricamente referenciado de sostener la ocurrencia localizada de una singularidad subjetiva, es requerida *post festum*, en la normalidad. Allí hace falta

fijar una imagen de lo que pasó y ponerla a la disposición de quienes quieran o necesiten – a bien de la esperanza – creer que se trató de algo extra-ordinario.

Cuando las alternativas colocadas para la realización individual y colectiva de las personas parecen desafiar no sólo su bienestar, sino también su fuerza deseante, una política como la que conocí en Bella Unión es capaz de preannunciar el advenimiento posible de nuevas formas de existencia. Con todo, el aparecer fugaz, relampagueante, de este tipo de política no determina, en principio, una reconfiguración duradera de los modos de subjetivación y las relaciones de poder que él pretendía confrontar y trascender. Luego del agotamiento de su propia temporalidad, el devenir de una política prescriptiva se juega en la indeterminación del futuro. Los estrépitos del trueno sólo resuenan después de la aparición efímera del relámpago. Ahora, cuando en diversos países de Sudamérica el fin del llamado ciclo progresista parece significar el inicio de una época desesperanzadora, quizás valga la pena desplazarnos del silencio horrorizado ante el avance de la derecha hacia el silencio expectante que sucede al relámpago. Junto a mis compañeros de la UTAA aprendí que, cuando las alternativas disponibles ya no nos satisfacen, podemos siempre oponerles la irreverencia de los posibles. El encandilamiento persistente que nos heredan los viejos relámpagos promete la llegada del estrépito. Lo que está en juego entonces, como decía Emilio, es ensayar un “cambio de ángulo” que nos convierta en su caja de resonancia. A fin de cuentas, si la vida que nos tocó vivir es fuente de perplejidad y malestar, tenemos aún la valiosa chance de elegir de qué pasado queremos ser el presente.

Referencias bibliográficas

- AGAMBEN, Giorgio. (2014 [2003]). *Estado de excepción. Homo sacer II*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- ALONSO, Jimena y FIGUEREDO, Magdalena. (2014). El quiebre del MLN-T en Argentina: el nacimiento de Nuevo Tiempo. *Encuentros Uruguayos*, 7(1), pp. 111-135.
- ALONSO, Jimena. (2011). Tupamaros en Chile. Una experiencia bajo el gobierno de Salvador Allende. *Encuentros Uruguayos*, 4(4), s.p.
- ANDERSON, Benedict. (2008 [1983]). *Comunidades imaginadas. Reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- ARCE, Alberto y LONG, Norman. (2000). *Anthropology, development and modernities*. Londres: Routledge.
- ARIAS, Cecilia y RODRÍGUEZ, Sylvia. (2014). El concepto de justicia social en el discurso de Luis Batlle Berres. Justicia social y profundización de la democracia en la sociedad uruguaya de mediados del siglo XX. *Revista de la Facultad de Derecho*, (35), pp. 39-54.
- BADIOU, Alain. (2008). *Lógicas de los mundos*. Buenos Aires: Manantial.
- BADIOU, Alain. (2012 [1992]). *Condiciones*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- BADIOU, Alain. (2012). *A hipótese comunista*. São Paulo: Boitempo.
- BALSO, Judith. (2010). Estar presente en el presente. La hipótesis comunista: ¿hipótesis posible para la filosofía, nombre imposible para la política? En: Analía Hounie, comp., *Sobre la idea del comunismo*. Buenos Aires: Paidós. pp. 33-50.
- BANDERA, Gonzalo et al. (2011). Centro de Formación Popular Bella Unión: dificultades, posibilidades y desafíos de un proyecto gestionado por trabajadores organizados junto con la Universidad En: *Anales XI Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria*. [online] Santa Fé, s.p. Disponible en: <https://www.unl.edu.ar/iberoextension/dvd/archivos/ponencias/mesa3/centro-de-formacion-popular-.pdf> [Acceso 10 may 2017].
- BENJAMIN, Walter. (1989 [1972]). *Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia*. Buenos Aires: Taurus.
- BENJAMIN, Walter. (2001 [1940]). Tesis de filosofía de la historia. En: Suhrkamp Verlag, ed., *Ensayos escogidos*. México: Ediciones Coyoacán.
- BENJAMIN, Walter. (2013). Desenterrar y recordar. En: Adriana Mancini, ed., *Cuadros de un pensamiento*. Buenos Aires: Imago Mundi, p. 99.
- BERARDI, Franco. (2013) *Felix. Narración del encuentro con el pensamiento de Guattari, cartografía visionaria del tiempo que viene*. Buenos Aires: Cactus.
- BERLINER, David. (2005). The Abuses of Memory: Reflections on the Memory Boom in Anthropology. *Anthropological Quarterly*, 78(1), pp. 197-211.
- BERTHO, Alain. (2003). Marx aujourd'hui: banlieue, travail et politique. [online] *Anthropologie du présent*. Disponible en: <https://berthoalain.com/2003/05/06/marx-aujourd%E2%80%99hui-banlieue-travail-et-politique/> [Acceso 16 oct. 2017]

- BERTHO, Alain. (2006). Du ‘grondement de la bataille’ à l’anthropologie du contemporain, *Variations*, (8), pp. 1-10.
- BIERSCHENCK, Thomas. (2008). Anthropology and Development. An historicizing and localizing approach. *Institut für Ethnologie und Afrikastudien Working Papers*, (87), pp. 1-21.
- BLIXEN, Samuel. (2000). *Sendic. Acción y Legado*. Montevideo: Trilce.
- BLOCH, Ernst. (2004 [1938-1947]). *El principio esperanza* (3 vols.). Madrid: Trotta.
- BONILLA, José. (2016). Dictadura, izquierda y democracia en Uruguay. Transformación discursiva de la izquierda uruguaya posdictadura. *Encuentros Latinoamericanos*, 1(1), pp. 208-248.
- BORGES, Antonadia. (2004). A fórmula do tempo: notas etnográficas sobre o “tempo de Brasília”. En Carla Costa Teixeira, Christine de Alencar Chaves, comps., *Espaços e tempos da política*. Rio de Janeiro: Relume Dumará 2004, pp. 23-46.
- BOSTEELS, Bruno. (2016 [2012]). Del complot al potlatch. En: Bruno Bosteels, *Marx y Freud en América Latina. Política, psicoanálisis y religión en tiempos de terror*. Madrid: Akal, pp. 291-316.
- BOURDIEU, Pierre. (2002 [1972]). *Esboço de uma teoria da prática, precedido de três estudos de etnologia Cabila*. Oeiras: Celta.
- CAETANO, Gerardo. (2017). ¿Milagro en Uruguay? Apuntes sobre los gobiernos del Frente Amplio. *Nueva Sociedad*, (272), pp.13-28.
- CALDERÓN, Edith. (2012). *La afectividad en antropología: una estructura ausente*. México: CIESAS.
- CARÁMBULA, Matías. (2014). Territorio y conflicto. En: Marta Chiappe y Nancy Espasandín, comps., *El acceso a la tierra en cuestión: dependencia y autonomía en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio*. Montevideo: Letraeñe, pp. 84-94.
- CASTRO, Diego y SANTOS, Carlos. (2018). Rasgos de la lógica estatal en la hegemonía progresista uruguaya. En: Hernán Ouviaña y Mabel Cristina Thwaites Rey, comps., *Estados en disputa: auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*. Buenos Aires: El Colectivo. pp. 121-139.
- CATELA, Ludmila. (2008). Derechos humanos y memoria. Historia y dilemas de una relación particular en Argentina. *Teoría e Cultura*, 3(1-2), pp. 9-20.
- CHAKRABARTY, Dipesh. (2002). A small history of subaltern studies. En: Dipesh Chakrabarty, comp., *Habitations of Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 3-19.
- COLECTIVO SITUACIONES. (2002). *19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- COLECTIVO SITUACIONES y MEZZADRA, Sandro. (2009). Gubernamentalidad: frontera, código y retóricas del orden. En: Colectivo Situaciones, comp., *Conversaciones en el impasse. Dilemas políticos del presente*. Buenos Aires: Tinta Limón, pp. 135-165.
- COMAROFF, John y COMAROFF Jean. (1992). *Ethnography and the Historical Imagination*. Boulder: Westview.
- CONNERTON, Paulo. (2006 [1989]). *How societies remember*. Cambridge: Cambridge University Press.

- COWEN, Michael y SHENTON, Robert. (1996). *Doctrines of Development*. London: Routledge.
- DAGUERRE, Juan. (2004). *La renovación ideológica del Encuentro Progresista-Frente Amplio: el cambio de la matriz ideológica y la búsqueda de modelos teóricos alternativos*. Tesis de grado. Universidad de la República (Uruguay).
- DAONA, Victoria. (2016). Algunas consideraciones en torno a los estudios sobre memoria en Latinoamérica. *Espacio Abierto*, 25(4), pp. 129-142.
- DE CERTEAU, Michel. (1996). Una revolución simbólica. En: Luce Giard, comp., *La toma de la palabra y otros escritos políticos*. México: Universidad Iberoamericana, pp. 29-37.
- DE CERTEAU, Michel. (2008). *A invenção do cotidiano*. Petrópolis: Vozes.
- DELEUZE, Gilles. (1990). Le devenir révolutionnaire et les créations politiques. [online] *Multitudes*. Disponible en: <http://www.multitudes.net/Le-devenir-revolutionnaire-et-les/> [Acceso 8 Nov. 2017].
- DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. (1983 [1975]). *Kafka. Por una literatura menor*. México: Era.
- DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Félix. (1995 [1980]). *Mil Platôs. Capitalismo e esquizofrenia*. Vol. 2. Rio de Janeiro: Editora 34.
- DELEUZE, Gilles. (2005). *Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia*. Buenos Aires: Cactus.
- D'ELÍA, Germán. (1986). *El Uruguay neobatllista, 1946-1958*. Montevideo: EBO
- DE ROSA, Mauricio et al. (2016). *El estado del arte de los estudios distributivos en Uruguay*. Informe presentado al Instituto de Economía de la Universidad de la República. Universidad de la República.
- DE ROSA, Mauricio. (2016) *Distribución de la riqueza en Uruguay. Una aproximación por el método de capitalización*. Tesis de Maestría. Universidad de la República Oriental del Uruguay.
- DE SARDAN, Jean Pierre O. (1995). *Anthropologie et developpment: essai en socio-anthropologie du changement social*. Paris: APAD/Karthala.
- DE SARDAN, Jean Pierre O. (2001). Les trois approches en anthropologie du développement. *Tiers Monde*, 42(168), pp. 729-754.
- DE VRIES, Pieter. (2007). Don't compromise your desire for development! A Lacanian/Deleuzian rethinking of the anti-politics machine. *Third World Quarterly*, 29(1), pp.25-43.
- DE VRIES, Pieter. (2010). Redimir la promesa utópica del desarrollo: hacia un mundo, una mundialización, una modernidad. En: Victor Bretón (comp.), *Saturno Devora a sus Hijos. Miradas críticas sobre el desarrollo y sus promesas*. Barcelona: Icaria, pp. 87-126.
- DE VRIES, Pieter. (2013). Comunidad y desarrollo en los Andes Peruanos: una crítica etnográfica al programa de modernidad/colonialidad. *Sociologias*, (33), pp. 248-281.
- DE VRIES, Pieter. (2015). The Real of Community, the Desire for Development and the Performance of Egalitarianism in the Peruvian Andes: A Materialist–Utopian Account. *Journal of Agrarian Change*, 15(1), pp. 65-88.

- DE VRIES, Pieter. (2016). The Inconsistent City, Participatory Planning, and the Part of No Part in Recife, Brazil. *Atipode*, 3(48), pp. 790-808.
- DÍAZ, Pablo. (2009). *Sociología de las ocupaciones de tierras: Acción colectiva de los trabajadores rurales de Artigas, Uruguay, 2005-2007*. Buenos Aires: Nuestra América; Nordan.
- ELIAS, Norbert. (2016 [1977]). *El proceso de la civilización*. México: Fondo de Cultura Económica.
- ESCOBAR, Arturo. (2007 [1995]). *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas: El perro y la rana.
- ETCHEVERRIBORDA, Maria et al. (2014). El complejo sucroalcoholero. En: Marta Chiappe y Nancy Espasandín, comps., *El acceso a la tierra en cuestión: dependencia y autonomía en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio*. Montevideo: Letraeña, pp. 57-83.
- FALERO, Alfredo. (2013). El desarrollo de enclaves y la ilusión del desarrollo. *Contrapunto*, (2), pp. 33-46.
- FELD, Claudia. (2016). Trayectorias y desafíos de los estudios sobre memoria en Argentina. *Cuadernos del IDES*, (32), pp. 4-21.
- FÉLIZ, Mariano. (2011). Neoliberalismos, neodesarrollismos y proyectos contrahegemónicos: notas sobre las crisis en el capitalismo contemporáneo y sus superaciones dialécticas. *Dialéctica*, (43), pp. 55-74.
- FERGUSON, James. (1994 [1990]). *The Anti-Politics Machine: Development, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Cambridge: Cambridge University Press.
- FERNÁNDEZ, Mariana E. (2015). *La ideología batllista en el Frente Amplio*. Tesis de grado. Universidade Federal da Integração Latino-Americana.
- FISCHER, Michael. (1984). Da antropología interpretativa à antropología crítica. *Anuário Antropológico*, 8(1), 55-72.
- FISCHER, Michael. (1980). *Iran: From Religious Dispute to Revolution*. Madison: University of Wisconsin Press.
- FORTES, Meyer y EVANS-PRITCHARD, Edward E. (2010 [1940]). *Sistemas políticos africanos*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- FOUCAULT, Michel. (2009 [2004]). *Nacimiento de la biopolítica*. Madrid: Akal.
- GAGO, Verónica y MEZZADRA, Sandro. (2015). Para una crítica de las operaciones extractivas del capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. *Nueva Sociedad*, (255), pp. 38-52.
- GAGO, Verónica y ROIG, Alexandre. (2018). Las finanzas y las cosas. Una etnografía del endeudamiento popular. En: Pablo Chena y Pedro Biscay, coords., *El imperio de las finanzas. Deuda y desigualdad*. Buenos Aires: Miño y Dávila, pp. 221-237.
- GALJART, Benno.(1981). Counterdevelopment: a position paper. *Community Development Journal*, 16(2), pp. 88-96.
- GARCÉ, Adolfo y YAFFÉ, Jaime. (2006). La izquierda uruguaya (1971-2004): ideología, estrategia y programa. *América Latina Hoy*, (44), pp. 87-114.

- GERMER, Claus. (1994). O sistema de crédito e o capital fictício em Marx. *Ensaio FEE*, 15(1), pp. 179-201.
- GLUCKMAN, Max. (1978 [1965]). *Política, derecho y ritual en la sociedad tribal*. Madrid: Akal.
- GODELIER, Maurice. (1977). *Horizon, trajets marxistes en anthropologie*. Paris: Maspero.
- GOLDMAN, Marcio. (2006). *Como funciona a democracia: uma teoria etnográfica da política*. Rio de Janeiro: 7Letras.
- GOW, David. (2008). *Countering Development. Indigenous Modernity and the Moral Imagination*. Durham: Duke University Press.
- GUATTARI, Félix. (2013 [2011]). *Líneas de fuga. Por otro mundo de posibles*. Buenos Aires: Cactus.
- GUDYNAS, Eduardo. (2009). Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. En: CAAP y CLAES, eds., *Extractivismo, política y sociedad*. Quito: CAAP, CLAES, pp. 187-225.
- GUDYNAS, Eduardo. (2012). Estado compensador y nuevos extractivismos. Las ambivalencias del progresismo sudamericano. *Nueva Sociedad*, (237), pp. 128-146.
- GUDYNAS, Eduardo. (2013). La construcción de otros futuros y las alternativas al neoextractivismo. En: Raphael Hoetmer et al., eds., *Minería y movimientos sociales en Perú*. Lima: PDTG, CooperAcción, AcSur Las Segovias, Entre Pueblos, pp. 567-582.
- GUHA, Renajit. (1992). Domination without hegemony and its historiography. En: Renajit Guha, comp., *Subaltern Studies VI*. Delhi: Oxford University Press, pp. 210-309.
- HALBWACHS, Maurice. (1990 [1950]). *A memória coletiva*. São Paulo: Vértice.
- HALLWARD, Peter. (2005). The Politics of Prescription. *The South Atlantic Quarterly*, 104(4), pp. 769-789.
- HARVEY, David. (2004). The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession. *Socialist Register*, 40, pp. 63-87.
- HAYEM, Judith. (2012). The 'Voucher Strike': 'Workers' Political Subjectivities in Post-Apartheid South Africa. *Journal of Asian and African Studies*, 47(5), pp. 516-529.
- HIRSCH, Joachim. (1996). *Globalización, capital y Estado*. México: UAM.
- HOBBSBAWN, Eric. (1984 [1983]). Introdução. En: Eric Hobsbawm y Terence Ranger, comps., *A invenção das tradições*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, pp. 9-23.
- JELIN, Elizabeth. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid: Siglo XXI.
- JELIN, Elizabeth. (2005). Los Derechos Humanos y la Memoria de la Violencia Política y la Represión: la Construcción de un Campo Nuevo en las Ciencias Sociales. *Estudios Sociales*, 27(1), pp. 91-113.
- JUNCAL, Agustín. (2015). Memorias a la intemperie: la primera marcha por la tierra en Uruguay. *Clepsidra*, (3), pp. 92-109.
- KOHN, Eduardo. (2002). Infidels, Virgins and the Black-Robed Priest: A Back Woods History of Ecuador's Montaña Region. *Etnohistory*, 49(3), pp. 545-582.
- KUSCHNIR, Karina (2007). *Antropologia e política*. Revista brasileira de Ciências Sociais, 22(64), pp.163-167.

- LABROUSSE, Alain. (2009). *Les Tupamaros. Des armes aux urnes*. Paris: Éditions du Rocher.
- LAZARUS, Sylvain. (1996). *Anthropologie du nom*. Paris: Editions du Seuil.
- LAZARUS, Sylvain. (2001a). Anthropologie ouvrière et enquête d'usine: état des lieux et problématique. *Ethnologie française*, 31(3), pp. 389-400.
- LAZARUS, Sylvain. (2001b). Revolution, un mot singulier. *Lignes*, (4), pp. 97-107.
- LAZARUS, Sylvain. (2012). Contemporâneo e política. *Educação e Realidade*, 37(2), pp. 383-397.
- LAZARUS, Sylvain. (2016). Can Politics be Thought in Interiority? *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*, 12(1), pp. 107-130.
- LAZZARATO, Maurizio. (2010). *Signos, máquinas, subjetividades*. São Paulo: n-1.
- LAZZARATO, Maurizio. (2017). *O Governo do Homem Endividado*. São Paulo: n-1.
- LEACH, Edmund. (1996 [1954]). *Sistemas Políticos da Alta Birmania: um estudo da estrutura social Kachin*. São Paulo: EDUSP.
- LEWIS, David y MOSSE, David. (2006). Encountering Order and Disjuncture: Contemporary Anthropological Perspectives on the Organization of Development. *Oxford Development Studies*, 34(1), pp. 1-13.
- LIFSCHITZ, Javier A. y ARENAS, Sandra P. (2012). Memoria política y artefactos culturales. *Estudios Políticos*, (40), pp. 98-119.
- LONG, Norman. (1994). Du paradigme perdu au paradigme... retrouvé? Por une sociologie du développement orientée vers les acteurs. *Le Bulletin de l'APAD*, (7), pp. 11-34.
- LORDON, Frédéric. (2015). *Capitalismo deseo y servidumbre. Marx y Spinoza*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- MACHADO, Decio y ZIBECHI, Raúl. (2016). *Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo*. Bogotá: Desde Abajo.
- MACIEL, Auterives y LESSA, Machado. (2017). Literatura menor e filosofia nômade. Duas línguas revolucionárias. *Ecos*, 7(2), pp. 154-166.
- MARCUS, George y SAKA, Erkan. (2006). Assemblage. *Theory, Culture & Society*, 23(2-3), pp. 101-106.
- MARTÍ, Juan P. (2016). Políticas públicas y desarrollo local de Bella Unión a través del modelo cooperativo (1965-2005). *Revista del Idelcoop*, (220), pp. 124-144.
- MARTÍNEZ, Julio. (2015). *Tupamaros. Derrota militar, metamorfosis política y victoria electoral*. Madrid: Dykinson, S.L.
- MARX, Karl. (1980 [1865]). *Salário, preço e lucro*. São Paulo: Global.
- MARX, Karl. (1983 [1885]). *O Capital*. Libro II. São Paulo: Abril Cultural.
- MARX, Karl. (1983 [1885]). *O Capital*. Libro III, Tomo I. São Paulo: Abril Cultural.
- MARX, Karl. (1983 [1885]). *O Capital*. Libro III, Tomo II. São Paulo: Abril Cultural.
- MARX, Karl y ENGELS, Friedrich. (2007 [1932]). *A ideologia alemã*. São Paulo: Boitempo.

- MAZZEO, Mario. (2005). *MPP: orígenes, ideas y protagonistas*. Montevideo: Trilce.
- McCOLE, John. (1993). *Walter Benjamin and the Antinomies of Tradition*. London: Cornell University Press.
- MEAD, Margaret. (2015 [1939]). *Sexo e temperamento*. São Paulo: Perspectiva.
- MEILLASOUX, Claude. (1977). *Terrains et Théories*. Paris: Anthropos.
- MEJAT, Guillaume. (2012). Gilles Deleuze et Félix Guattari lecteurs de Marx: l'inspiration marxiste de la conception du désir développée dans l'Anti-Œdipe. *Philosophique*, (15), pp. 113-124.
- MERENSON, Silvina. (2007). El “rincón de la rinconada”: lecturas de la frontera, narrativas de la nación. *Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Papeles de Trabajo*, 1(2), pp. 1-19.
- MERENSON, Silvina. (2008). Teorías, prácticas y representaciones de la categoría “campesino” entre los peludos de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. *Prácticas de Oficio*, (3), s.p.
- MERENSON, Silvina. (2010). Cuando ser indio no rinde: sociedad política, particularismo y excepción en las narrativas nacionales del Uruguay. *Espaço Ameríndio*, 4(2), pp. 172-190.
- MERENSON, Silvina. (2016). *Los peludos: cultura, política y nación en los márgenes del Uruguay*. Buenos Aires: Gorla.
- MICHEL, Natacha. (2002). *Ô jeunesse! Ô vieillesse! Mai 68, le mai mao*. Paris: Le Perroquet.
- MIYAZAKI, Hirokazu. (2004). *The method of hope: anthropology, philosophy, and Fijian knowledge*. Stanford: Stanford University Press.
- MIYAZAKI, Hirokazu. (2006). Economy of Dreams: Hope in Global Capitalism and Its Critiques. *Cultural Anthropology*, 21(2), pp. 147-172.
- MIYAZAKI, Hirokazu. (2013). *Arbitrating Japan: Dreams of Capitalism at the End of Finance*. Berkeley: University of California Press.
- MIYAZAKI, Hirokazu. (2017). The Economy of Hope: An Introduction. En: Hirokazu Miyazaki and Richard Swedberg, eds., *The Economy of Hope*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, pp. 1-36.
- MORAES, Alex. (2014a). O fim de um consenso. Sublevação popular e democracia controlada no Brasil dos megaeventos. *Lugar Comum*, (43), pp. 183-201.
- MORAES, Alex. (2014b). Os vândalos ao poder: violência política e poder popular nos protestos de 2012/2013 em Porto Alegre. Reflexões estratégicas à luz de Benjamin e Lukács. *Sinal de Menos*, 11(10), pp. 239-265.
- MORAES, Alex. (2015). Antropología del desarrollo: entre la máquina anti-política y la máquina deseante. *Trama*, (6), pp. 23-32.
- MORAES, Alvaro. (2012). *¿Campo en disputa? El acceso a la tierra de los trabajadores de UTAA al “Campo Placeres” en Bella Unión*. Tesis de doctorado. Universidad de la República Oriental del Uruguay.
- MORAES, María I. (1990). *Bella Unión: de la estancia tradicional a la agricultura moderna (1853-1965)*. Montevideo: CINVE/Banda Oriental.

- MOSSE, David. (2004). Is Good Policy Unimplementable? Reflections on the Ethnography of Aid Policy and Practice. *Development and Change*, 35 (4), pp. 639-671.
- MOSSE, David. (2013). The Anthropology of International Development. *Annual Review of Anthropology*, (42), pp. 227-246.
- MURRAY, Tania. (1999). Compromising Power: Development, Culture, and Rule in Indonesia. *Cultural Anthropology*, 14(3), pp. 295-332.
- NAMER, Gérard. (1987). *Memoire et société*. Paris: Kincksieck.
- NASCIMENTO, Claudemiro y MARTINS, Leila. (2008). Pedagogia da mística: as experiências do MST. *Emancipação*, 8(2), pp. 109-120.
- NEOCOSMOS, Michael. (1998). From People's Politics to State Politics, aspects of national liberation in South Africa. En: Adebayo Olukoshi, comp., *The Politics of Opposition in Contemporary Africa*. Uppsala: NAI, pp. 195-241.
- NEOCOSMOS, Michael. (2007). *Civil Society, Citizenship and the Politics of the (Im)possible: Rethinking militancy in Africa Today*. Report for the CODERSIA MWG on Citizenship. [online] Abahali. Disponible en: <https://abahali.org/node/1429/> [Acceso 19 Feb. 2017].
- NEOCOSMOS, Michael (2012a). Are Those-Who-Do-Not-Count Capable of Reason? Thinking Political Subjectivity in the (Neo-)Colonial World and the Limits of History. *Journal of Asian and African Studies*, 47(5), pp. 530-547.
- NEOCOSMOS, Michael. (2012b). Political Subjectivity and the Subject of Politics: Thinking Beyond Identity from the South of Africa. *Journal of Asian and African Studies*, 47(5), pp. 465-481.
- NEOCOSMOS, Michael. (2015). The Sociology of Crisis and the Crisis of Sociology: Academic Marxism and the Absence of a Thought of Politics in South Africa. *Development and Change*, 0(0), pp. 1-15.
- NEOCOSMOS, Michael. (2016). Constructing the domain of freedom: thinking politics at a distance from the state. *Journal of Contemporary African Studies*, 34(3), pp. 332-347.
- OLESKER, Daniel. (2014). Inversión pública social aumentó 83% durante los gobiernos del Frente Amplio. [online] *Presidencia de la República*. Disponible en: <http://presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/presentacion-informe-sobre-gasto-publico-social> [Acceso 8 Nov. 2017].
- ONG, Aihwa y COLLIER, Stephen. (2005). Global Assemblages, anthropological problems. En: Aihwa Ong y Stephen Collier, eds., *Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems*. Malden: Blackwell, pp. 3-21.
- ORTNER, Sherry. (2007). Poder e projetos. Reflexões sobre a agência. En: Miriam Pillar Grossi, Conelia Ekert e Peter Henry Fry, orgs., *Conferências e diálogos: saberes e práticas antropológicas*. Blumenau: Nova Letra, pp. 45-80.
- ORTNER, Sherry. (2016). La resistencia y el problema del rechazo etnográfico. En: Sherry Ortner, *Antropología y teoría social*. San Martín: UNSAM, pp. 57-78.
- OTERO, Martina. (2014). "Evitando el conflicto": entre la construcción de una verdadera alternativa y la administración de la cuestión agraria con políticas "amortiguadoras". En: Marta Chiappe y Nancy Espasandín, comps., *El acceso a la tierra en cuestión: dependencia y autonomía en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio*. Montevideo: Letraeñe, pp. 108-123.

- OYARZÚN, Pablo. (2009 [1996]). Introducción: cuatro señas sobre experiencia, historia y facticidad. En: Walter Benjamin, *La Dialéctica en Suspense. Fragmentos sobre historia*. Santiago: LOM, pp.7-34.
- OYHANTÇABAL, Gabriel. (2014a). "Por la tierra y con Sendic": conflictos en torno a la construcción del proyecto. En: Marta Chiappe y Nancy Espasandín, comps., *El acceso a la tierra en cuestión: dependencia y autonomía en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio*. Montevideo: Letraeña, pp. 95-107.
- OYHANTÇABAL, Gabriel. (2014b). *¿Yo sé quién soy? Contradicciones en el pasaje de asalariado a colono, el caso de los trabajadores de la UTAA en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio*. Tesis de Maestría. Universidad de la República (Uruguay).
- PALMEIRA, Moacir. (2002). Política e tempo: nota exploratória. En: Mariza Peirano, comp., *O dito e o feito. Ensaios de antropologia dos rituais*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, pp. 171-177.
- PANIZZA, Francisco. (1990). *Uruguay: Batllismo y después. Pacheco, militares y tupamaros en la crisis del Uruguay batllista*. Montevideo: EBO
- PANIZZA, Francisco. (2008). Economic Constraints and Strategic Choices: The Case of the Frente Amplio of Uruguay's First Year in Office. *Bulletin of Latin American Research*, 27(2), pp. 176-196.
- PANIZZA, Francisco. (2014). "Que se vayan todos", "Somos fantásticos". La política de las crisis financieras en Argentina y Uruguay 2001-2003. *Identidades*, (4), pp. 1-22.
- PEIRANO, Mariza. (1998). Antropología política, ciência política e antropologia da política. En: Mariza Peirano, *Três Ensaios Breves*. Brasília: UnB, pp. 17-29.
- PEIRANO, Mariza. (2017). As surpresas etnográficas do NuAP. En: John Comerford et al., comps., *Questões e dimensões da política*. Rio de Janeiro: Papeis selvagens, pp. 15-24.
- PERALTA, Elsa. (2007). Abordagens teóricas ao estudo da memória social: uma resenha crítica. *Arquivos da Memória*, nova série (2), pp. 4-23.
- PIÑEIRO, Diego y CARDEILLAC, Joaquín. (2016). The Frente Amplio and agrarian policy in Uruguay. *Journal of Agrarian Change*, (17), pp. 365-380.
- POLLAK, Michael. (1989). Memória, Esquecimento, Silêncio. *Estudos Históricos*, 2(3), pp. 3-15.
- POPULAR MEMORY GROUP. (1982). Popular Memory: Theory, Politics, Method. En Richard Johnson et al., comps., *Making Histories. Studies in History Writing and Politics*. Mineápolis: University of Minnesota Press, pp. 205-252.
- RAMOS, Ana. (2008). El nawel y el pillañ. La relacionalidad, el conocimiento histórico y la política mapuche. *World Anthropologies Network E-Journal*, (4), pp. 57-79.
- RAMOS, Ana. (2011). Perspectivas antropológicas sobre la memoria en contextos de diversidad y desigualdad. *Alteridades*, 21(42), pp. 131-148.
- RAMOS, Ana. (2016). La memoria como objeto de reflexión: recortando una definición en movimiento. En: Ana Ramos, Carolina Crespo y María Tozzini, comps., *Memorias en lucha: recuerdos y silencios en contextos de subordinación y alteridad*. Viedma: Editorial UNRN, pp. 51-69.
- RANCIÈRE, Jacques. (1993). *Los nombres de la historia: una poética del saber*. Buenos Aires: Nueva Visión.

- RANCIÈRE, Jacques. (2006). *Política, policía, democracia*. Santiago: LOM.
- RANCIÈRE, Jacques. (2009). *Moments politiques. Interventions 1977-2009*. Paris: La Fabrique.
- RADOMSKY, Guilherme. (2011). Desenvolvimento, pós-estruturalismo, pós-desenvolvimentismo: a crítica da modernidade e a emergência de modernidades alternativas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 26(75), pp. 149-193.
- RED DE ECONOMISTAS DE IZQUIERDA. (2010). *La torta y las migajas. El gobierno progresista (2005-2010)*. Montevideo: Trilce.
- REY TRISTÁN, Eduardo. (2011). Democracia y revolución: una convivencia compleja. El caso uruguayo. *Naveg@mérica*, (6), s.p.
- RIBEIRO, Gustavo L. (2008). Poder, redes e ideologia no campo do desenvolvimento. *Revista Novos Estudos*, (80), pp.109-125.
- RICO, Alvaro. (2005). *Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay (1985-2005)*. Montevideo: Trilce.
- RIST, Gilbert. (1996). *Le développement. Histoire d'une croyance occidentale*. Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.
- ROBERTSON, Alexander. (1984). *People and the state. An anthropology of planned development*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ROZITCHNER, León. (2011). *Materialismo ensoñado*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- ROZITCHNER, León. (2013). *Freud y los límites del individualismo burgués*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
- ROZITCHNER, León. (2015a). *Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia: el punto ciego de la crítica política*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
- ROZITCHNER, León. (2015b). *Marx y la infancia*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
- SACHS, Wolfgang. (1996 [1992]). *Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder*. Lima: PRATEC.
- SANTOS, Carlos et al. (2013). Seis tesis urgentes sobre el neodesarrollismo en Uruguay. *Contrapunto*, 1 (2), pp. 13-32.
- SCHOLLHAMMER, Karl. (2001). As práticas de uma língua menor: reflexões sobre um tema de Deleuze e Guattari. *Ipotesi*, 5(2), pp. 59-70.
- SCOTT, James. (1990). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México: Era.
- SCOTT, James. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.
- SIBERTIN-BLANC, Guillaume. (2011). Coyuntura o acontecimiento: la subjetivación revolucionaria en Guattari, Althusser y Deleuze. *Actual Marx Intervenciones*, (11), pp. 181-210.
- SILVA, Mauricio. (2015). Frente Amplio e o crescimento recente: Ocorreram mudanças significativas na estrutura da economia uruguaia?[online] *Research Gate*. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/280946286_FRENTE_AMPLIO_E_O_CRESCI_MENTO_RECENTE_OCORRERAM_MUDANCAS_SIGNIFICATIVAS_NA_ESTRUTURA_DA_ECONOMIA_URUGUAIA [Acceso 5 Jun. 2017].

- SMITH, Gavin. (2016). Against social democratic angst about revolution: from failed citizens to critical praxis. *Dialectical Anthropology*, 40(3), pp. 221-239.
- STRATHERN, Marilyn. (1991). *Partial Connections*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- SVAMPA, Maristella. (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. *Nueva Sociedad*, (244), pp. 30-46.
- TAGLIAFERRO, Gerardo. (2004). *Fernández Huidobro. De las armas a las urnas*. Montevideo: Fin de Siglo.
- TAUSSIG, Michael. (1995). *Un gigante en convulsiones*. Barcelona: Gedisa.
- THOBURN, Nicholas. (2003). *Deleuze, Marx and Politics*. Londres: Routledge.
- TURNER, Victor. (1974 [1969]). *O processo ritual: estrutura e anti-estrutura*. Petrópolis: Vozes.
- VALLVERDÚ, Jauve. (2012). *Los sin tierra. Mística y resistencia en el MST de Brasil*. Tarragona: URV.
- WERTHEIM, Wim. (1965[1964]). *East-West Parallels: Sociological Approaches to Modern Asia*. Chicago: Quadrangle Books.
- WILKIS, Ariel. (2015). Sociología moral del dinero y el mundo popular. *Estudios Sociológicos*, 33(99), pp. 553-578.
- WOLIN, Richard. (1994). *Walter Benjamin: An Aesthetic of Redemption*. Berkeley: University California Press.
- YAFFÉ, Jaime. (2005). *Al centro y adentro. La renovación del Frente Amplio y el triunfo de la izquierda en Uruguay*. Montevideo: Linardi y Risso.
- ZIBECCHI, Raúl. (2010). Políticas sociales, gobiernos progresistas y movimientos antisistémicos. *Otra economía*, 4(6), pp. 32-42.

Fuentes consultadas

- ROSSI, Mario. (2006). 45° Aniversario de la Creación de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA). [online] *Movimiento Revolucionario Oriental*. Disponible en: <http://www.mro.nuevaradio.org/?p=252> [Acceso 6 Abr. 2016].
- SANTANA-PEREZ, Ruben. (2013). *Memorias de un peludo*. Montevideo: Nordan.

Fuentes estatales

- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (2009). *Estrategia Uruguay III Siglo. Aspectos productivos*. Montevideo.
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (2005). Bella Unión: el consejo de ministros respondió a planteos de la gente. [online] *Presidencia de la República*. Disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2005/06/2005060903.htm [Acceso: 14 Oct. 2016].
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (2006a). Artigas: piedra fundamental del Uruguay Productivo. [online] *Presidencia de la República*. Disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2006/06/2006062805.htm [Acceso: 14 Oct. 2016].
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (2006b). Estrategia de Desarrollo Productivo. [online] *Presidencia de la República*. Disponible en:

http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2006/04/productivo.pdf [Acceso: 14 Oct. 2016].

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. (2009). Con crecimiento de 5% acumulativo anual en 20 años tendríamos un país de primer mundo. [online] *Presidencia de la República*. Disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/08/2009080608.htm [Acceso: 14 Oct. 2016].

URUGUAY XXI INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y EXPORTACIONES. (2014). *Informe de comercio exterior. Importaciones y exportaciones*. Montevideo.

Fuentes partidarias

FRENTE AMPLIO. (2001). *Compromiso por el cambio para el nuevo siglo*. Montevideo.

FRENTE AMPLIO. (2003). *Grandes Lineamientos Programáticos para el Gobierno 2005-2010*. Montevideo.

Prensa escrita

BRECHA. (2006). La biomasa como zanahoria. p. 3. (3-2-2006)

BRECHA. (2015). La encrucijada. pp. 31-34. (4-12-2015)

BÚSQUEDA. (2013). Molesto con sindicalistas, Sendic evalúa tercerizar parte de ALUR. s.p. <https://www.búsqueda.com.uy/nota/molesto-con-sindicalistas-sendic-evalua-tercerizar-parte-de-alur> (13-19/06/2013)

CASTRO, Julio y QUIJANO, José. (1965). Miedo en el poder. *Marcha*, p.8. (23-4-1965)

CHIFFLET, Guillermo. (1971). UTAA: la larga marcha. *Marcha*, p.22. (30-4-1971)

CUESTIÓN (1971). UTAA culmina su quinta cruzada por tierra y libertad. pp. 9-11. (28-4-1971)

EL PAÍS (2006). Justicia intimó a cañeros a dejar el predio. p. 12. (17-1-2006)

GALEANO, Eduardo. (1964). De la rebeldía en adelante. *Marcha*, p. 11 (13-3-1964)

LA DIARIA. (2015). Fines y formas. s.p. (18-11-15)

LA DIARIA. (2016). La Udelar cierra el Centro de Formación Popular de Bella Unión. s.p. (6-12-2016)

LA JUVENTUD (2006). Trabajadores de Bella Unión reclaman participar en Complejo Sucro-alcoholero. p.9. (7-2-2006).

LA REPÚBLICA (2006). “La ocupación de tierras es un palo en la rueda contra los que estamos gobernando”, dijo Mujica. p. 7. (3-2-2006)

LA REPÚBLICA (2006). Cuestionaron en el MPP al abogado de los ocupantes de tierra en Bella Unión. p. 6. (30-1-2006)

LA REPÚBLICA (2006). Pasó a vista fiscal el expediente por la ocupación en Bella Unión. p. 8. (26-1-2006)

MARCHA (1971). La 'zurda' quiere trabar la marcha cañera. p.5. (9-4-1965)

MARCHA (1968). Sin tierra y con dignidad. p. 11. (18-4-1968)

MARCHA (1968). Cañeros hoy. p.9. (26-4-1968)

PARALELO 30 (2006). Mujica, el gran protagonista. p. 2. (8-2-2006)

PARALELO 30 (2006). 'No arrebatamos la tierra a nadie'. Los ocupantes indican que las tierras son estatales y estaban abandonadas desde hace varios años. p. 3. (1-2-2006)

Fuentes sindicales

UTAA. (1989). *Proyecto: Cooperativas de producción de los trabajadores agrícolas de Bella Unión*. Bella Unión.

UTAA (1992). *Carta enviada por el presidente de la UTAA al Sr. J. Almiratti*. Bella Unión.

SOCA; UTAA y SUTRA. (1997). *Proyecto: Recolonización Agraria en Bella Unión*. Bella Unión.

UTAA. (1990). *Bases para un proyecto de interés económico y social para Bella Unión*. Bella Unión.

UTAA. (2004). *Situación de la organización sindical rural*. Documento de debate interno do sindicato. Bella Unión.

UTAA. (2015). *Bases para la creación de una unidad productiva diversificada con miras al desarrollo de una estrategia global de reforma agraria*. Bella Unión.

UTAA; SOCA Y SUTRA. (1994). *A los trabajadores y al pueblo de Bella Unión*. Comunicado. Bella Unión.

UTAA; SOCA y SUTRA. (1995). *Trabajadores Agroindustriales de Bella Unión. Encuesta sobre Situación Laboral y Socio-Familiar*. Bella Unión.

UTAA, APAARBU, GREMIAL GRANJERA. (2006). *Comunicado ocupación de tierras*. Bella Unión.

UTAA, APAARBU y GREMIAL GRANJERA. (2008). *Carta abierta al Gobierno de Uruguay*. Bella Unión.